

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
AMBIENTALES**



TESIS DOCTORAL

**Marco penal y administrativo de la caza y
responsabilidad civil en derecho español**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR

María Juncal Mesa Gutiérrez

DIRECTOR

Fernando Santa Cecilia García

Madrid, 2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Instituto Universitario de Ciencias Ambientales



**MARCO PENAL Y ADMINISTRATIVO DE LA
CAZA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EN
DERECHO ESPAÑOL**

DOCTORANDA

M^a Juncal Mesa Gutiérrez

DIRECTOR

Fernando Santa Cecilia García

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Instituto Universitario de Ciencias Ambientales



**MARCO PENAL Y ADMINISTRATIVO DE LA
CAZA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EN
DERECHO ESPAÑOL**

DOCTORANDA

M^a Juncal Mesa Gutiérrez

DIRECTOR

Dr. Fernando Santa Cecilia García

Madrid, 2015

Tesis, que para obtener el título de Doctor en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas
y Socioeconómicas,
presenta M^a Juncal Mesa Gutiérrez, bajo la
dirección del Dr. Dn. Fernando Santa Cecilia García

Madrid, 2015

A mis padres por su gran apoyo y esfuerzo.
A mi pareja Aritz, quien ha sido un gran apoyo emocional durante todo este tiempo y a
todos los que me alentaron para escribir y concluir esta tesis.

ABREVIATURAS

- AA.VV:	Autores varios
- ACCA	<i>Association communale de chasse agréée</i>
- AEM	Autorización especial de uso de armas para menores
- ap:	Apartado
- AP:	Audiencia Provincial
- art. /arts.:	Artículo/s
- ATC/AATC:	Auto/s del Tribunal Constitucional
- ATS/AATS:	Auto/s del Tribunal Supremo
- BOE:	Boletín Oficial del Estado
- CA	Comunidad Autónoma
- Cap.:	Capítulo
- CBD	Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- CC:	Código Civil
- CCAA:	Comunidades Autónomas
- CE:	Constitución Española
- CEE	Comunidad Económica Europea
- Cfr.	Confrontar
- CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
- CIC	Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna
- CIF	Código de Identificación Fiscal
- CITES	Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y la flora silvestre o Convenio de Washington.
- cm	centímetro
- CMAF	Código de Medio Ambiente Francés
- Coord. /s	Coordinador/es
- CP	Código Penal
- D:	Decreto
- DA:	Documentación Administrativa
- Dir. /s	Director/es
- DNI	Documento Nacional de Identidad
- DOCE:	Diario Oficial de las Comunidades Europeas

- ed.	Edición
- Ed.	Editorial
- etc.	Etcétera
- FDC	<i>Fédération Départementale de la Chase</i>
- FJ:	Fundamento jurídico
- Ha	Hectárea
- ICBP	Consejo Internacional para la protección de las Aves
- L:	Ley
- LC:	Ley de Caza (Ley 1/1970, de 4/Abril)
- LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
- LO:	Ley Orgánica
- LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
- LPNB	Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
- LRBRL:	Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985
- LRJAP y PAC:	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (Ley 30/92, de 6/Noviembre)
- MAB	El Programa el Hombre y la Biosfera
- m	metros
- mm	milímetro.
- NIF	Número de Identificación fiscal
- núm.:	Número
- OM	Orden Ministerial
- ONU	Organización Naciones Unidas
- Op. Cit.	Obra citada
- pág.(s):	Página(s)
- PAM	Plan de Acción para la protección y el desarrollo de la cuenca del Mediterráneo
- PNUMA	Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- PTC	Plan Técnico de caza
- RA	Reglamento de Armas (RD 137/1993, de 29 de enero)
- RAE	Real Academia Española de la Lengua
- RC:	Reglamento de Caza (RD. 506/1971, de 25/Marzo)

- RD:	Real Decreto
- RDL:	Real Decreto Ley
- RDLeg.:	Real Decreto Legislativo
- RFEC	Real Federación Española de Caza
- RRDD:	Reales Decretos
- SEPRONA	Servicio de Protección de la Naturaleza
- ss.:	siguientes
- STC:	Sentencia del Tribunal Constitucional
- STS:	Sentencia del Tribunal Supremo
- STSJ:	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
- TC:	Tribunal Constitucional
- TCE:	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
- trad.	Traducción
- TS:	Tribunal Supremo
- TSJ y AP:	Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales
- TSJ:	Tribunal Superior de Justicia
- TUE:	Tratado de la Unión Europea
- UCM	Universidad Complutense de Madrid
- UCOMA	Unidad Central Operativa Medioambiental
- UE	Unión Europea
- UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
- UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Vid.	Visto
- Vol.	Volumen
- WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza
- ZEC	Zonas de Especial Conservación
- ZEPAS	Zonas de especial protección para las aves

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	1
ABSTRACT	7
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA.....	13
INTRODUCCIÓN.....	19

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LEGISLATIVA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SOCIOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA.	25
2. LEGISLACIÓN ANTERIOR EN MATERIA DE CAZA.....	30
2. 1. Derecho Romano	30
2.2. Derecho medieval	32
2.3. Derecho moderno	37
3. REGULACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE CAZA	41
3.1. Internacional	41
3.2. Comunitaria	45
3.3. Estatal	51
3.4. Autonómica.	56
4. REGULACIÓN CINEGÉTICA EN OTROS PAISES	61
4.1. Italia.....	61
4.2. Francia	62
4.3. Alemania.....	65
4.4. Inglaterra.....	67
4.5. Regulación cinegética en otros países.	69

CAPITULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAUNA Y DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAUNA SILVESTRE	75
1.1. Convenios Internacionales.....	75
1.2. Normativa comunitaria europea	87
1.3. Regulación estatal.....	100
1.4. Regulación autonómica	106
2. TUTELA JURÍDICA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS	125
3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA.....	130
3.1 Conceptos cinegéticos básicos.....	130
3.2. Normativa relativa a las armas de caza	149
3.2.1. Adquisición de armas	152
3.2.2. Reparación, préstamos o posibles enajenaciones de armas.....	153
3.2.3. Revista de las armas	155
3.3. Señalización de los terrenos	156
3.4. Periodos hábiles de caza.....	160
4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PIEZAS DE CAZA	162
4.1. Determinación de las piezas de caza.....	162
4.1.1. Diferente legislación autonómica	163
4.2. Clasificación de las piezas de caza	168
4.3. Configuración de las piezas de caza	170
4.3.1. Naturaleza <i>res nullius</i>	172
4.4. Adquisición de las piezas de caza.....	174

CAPÍTULO III

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

1. PRÁCTICA LEGAL DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA	180
1.1. Medidas para el ejercicio legal de la caza	180
1.2. Requisitos generales para el cazador	180
1.3. Requisitos generales para los titulares del terreno cinegético	184
1.4. Medidas de fomento del hábitat cinegético	188
1.5. Medidas extraordinarias	189
2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.....	191
2.1. Competencias del Estado.....	192

2.1.1. Licencia de armas: su exigencia y condiciones	193
2.1.1.1. Procedimiento para la obtención de la licencia de armas.....	194
2.1.1.2. Condiciones previas	197
2.1.1.3. Clases de licencia	201
2.1.2. Guía de pertenencia del arma.	205
2.1.3. Tarjeta de armas.....	206
2.2. Competencias autonómicas	206
2.2.1. Licencias de caza: su exigencia y condiciones	208
2.2.1.1. Pruebas de aptitud o examen del cazador.....	211
2.2.1.2. Clases de licencias.....	213
2.2.1.3. Convenios de reciprocidad	214
2.2.1.4. Otros documentos complementarios.	215
2.2.2. Determinación de las especies cazables.	218
2.2.3. Determinación de los procedimientos de caza.	220
2.2.4. Determinación de los períodos hábiles de caza.	221
2.2.5. Espacios en los que se puede cazar	222
2.3. Coordinación y cooperación en la distribución de competencias en materia cinegética.....	224
3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CINEGÉTICA.	226
3.1. Directrices cinegéticas	226
3.2. Planes Generales de Ordenación	227
3.3. Planes cinegéticos comarcales.....	230
3.4. Planes Técnicos de caza o Planes de Ordenación de caza.....	231
3.5. Plan de aprovechamiento anual	237
3.6. Memorias	238
3.7. Otros planes.	239
4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA.....	239
4.1. Registros	240
4.1.2. Registros estatales: catálogos, listados e inventarios.....	240
4.1.3. Registros autonómicos.....	244
4.2. Censos y estudios	245
4.3. Consejos regionales de caza	247
4.4. Homologación de trofeos de caza.....	248
4.5. Federación de caza.....	251

4.6. Control y vigilancia	253
4.6.1. Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA)	253
4.6.2. Guardas/agentes forestales o de medio ambiente.	255
4.6.3. Guardas de caza	256
5. COMERCIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA	258
5.1. Comercio y transporte de las piezas de caza	258
5.2. Explotación industrial de la caza	262
5.2.1 Granjas cinegéticas	262
5.2.2. Cotos industriales	265
5.2.3. Caza intensiva.....	265
5.2.4. Palomares	266

CAPITULO IV

MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINGÉTICA

I. MARCO ADMINISTRATIVO

1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA	269
1.1. Del cazador.	275
1.1.1. Infracciones	276
1.1.1.1. Derivadas de licencias y otros documentos.....	276
1.1.1.2. Derivadas de las armas y técnicas empleadas:	278
1.1.1.3. Derivadas de época de veda y días prohibidos.....	282
1.1.1.4. Derivadas de piezas de caza y fauna silvestre	283
1.1.1.5. Derivadas de los terrenos	285
1.1.1.6. Derivadas de las medidas de seguridad.....	286
1.1.1.7. Derivadas de los perros de caza	287
1.1.1.8. Otras:	289
1.2. Del titular del aprovechamiento cinegético	290
1.2.1. Infracciones	291
1.2.1.1. Derivadas de la autorización	291
1.2.1.2. Derivadas de la planificación	292
1.2.1.3. Derivadas de la matrícula y terreno.....	293
1.2.1.4. Derivadas de la señalización y cerramientos.....	294

1.2.1.5. Derivadas de las piezas de caza y fauna silvestre.....	294
1.2.1.6. Derivadas de la notificación de enfermedades	296
1.2.1.7. Derivadas de las Granjas y cotos industriales	296
1.2.1.8. Otros.....	297
1.3. Sanciones	298
1.3.1. Sanciones pecuniarias.....	299
1.3.2. Sanciones accesorias.....	301
1.4. Prescripción.	307
2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	309
2.1. Órganos competentes.....	311
2.2. Procedimiento.....	312
2.2.1. Forma de iniciación	312
2.2.2. Actuaciones previas.....	313
2.2.3. Iniciación del procedimiento	314
2.2.4. Instrucción	315
2.2.5. Resolución	318
2.3. Caducidad del procedimiento	320
2.4. Silencio administrativo.....	322
2.5. Procedimiento simplificado	323

II. MARCO PENAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES	326
1.1. Bien jurídico protegido.....	326
1.2. Normas penales en blanco.	330
1.3. Culpabilidad	332
2. DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA	333
2.1. Introducción o liberación de especies de fauna no autóctona (Art.333 del CP)....	335
2.1.1. Bien jurídico protegido	338
2.1.2. Sujetos de la actuación.....	339
2.1.3. Objeto material	339
2.1.4. Conducta típica	340
2.1.5. Delito de resultado	341
2.1.6. Tentativa	343

2.1.7.	Tipo subjetivo	343
2.1.8.	Antijuricidad	343
2.1.9.	Concurso de normas.....	344
2.2.	Maltrato de animales domésticos. (Art.337 del CP).....	345
2.2.1.	Bien jurídico protegido	347
2.2.2.	Sujetos de la actuación.....	348
2.2.3.	Objeto material	348
2.2.4.	Conducta típica	349
2.2.5.	Delito de resultado	353
2.2.6.	Tipo subjetivo	354
2.2.7.	Antijuricidad	354
2.2.8.	Concurso de normas.....	354
2.3.	Abandono de animales domésticos. (Art.337.bis del CP)	355
2.3.1.	Bien jurídico protegido	355
2.3.2.	Sujetos de la actuación.....	355
2.3.3.	Objeto material	356
2.3.4.	Conducta típica	356
2.3.5.	Delito de mera actividad y de peligro abstracto	357
2.3.6.	Tipo subjetivo	358
2.3.7.	Antijuricidad	358
2.3.8.	Concurso de normas.....	358
2.4.	Delito de contrabando de fauna silvestre.....	358
2.2.1.	Bien jurídico protegido.	362
2.2.2.	Sujetos de la acción.....	362
2.2.3.	Objeto material.	363
2.2.4.	Conducta típica.	363
2.2.5.	Delito de mera actividad.	365
2.2.6.	Tentativa.	366
2.2.7.	Tipo subjetivo.	366
2.2.8.	Antijuricidad.	367
2.2.9.	Concurso.	367
3.	DELITOS PROPIAMENTE CINEGÉTICOS	368
3.1.	Caza, adquisición, posesión, destrucción o tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. (Art.334 del CP)	369

3.1.1.	Bien jurídico protegido	370
3.1.2	Sujetos de la actuación.....	370
3.1.3.	Objeto material	371
3.1.4.	Conducta típica	371
3.1.5.	Delito de resultado	375
3.1.6.	Tentativa	376
3.1.7.	Tipo subjetivo	377
3.1.8.	Antijuricidad	377
3.1.9.	Concurso de normas.....	378
3.2.	Caza ilegal (Art. 335 del CP)	380
3.2.1.	Bien jurídico protegido	382
3.2.2.	Sujetos de la actuación.....	382
3.2.3.	Objeto material	383
3.2.4.	Conducta típica	385
3.2.5.	Delito de resultado	390
3.2.6.	Tipo subjetivo	391
3.2.7.	Antijuricidad	393
3.2.8.	Tentativa	393
3.2.9.	Concurso de normas.....	394
3.3.	Caza con medios no selectivos. (Art.336 del CP)	395
3.3.1.	Bien jurídico protegido	395
3.3.2.	Sujetos de la actuación.....	396
3.3.3.	Objeto material	396
3.3.4.	Conducta típica y métodos utilizados.	397
3.3.5.	Delito de mera actividad y de peligro abstracto	399
3.3.6.	Tentativa	400
3.3.7.	Tipo subjetivo	401
3.3.8.	Antijuricidad	401
3.3.9.	Concurso de normas.....	402
4.	DISPOSICIONES COMUNES	402
4.1.	Agravante por espacio natural protegido. (artículo 338 del CP)	402
4.2.	Restauración del equilibrio biológico perturbado (artículo 339 del CP).....	403
4.3.	Reparación voluntaria del daño (artículo 340 del CP)	405

5. CONSECUENCIAS ACCESORIAS	406
6. ANTECEDENTES PENALES	409
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CANCELACIÓN.....	413
8. IMPRUDENCIA POR EL USO DE ARMAS DE CAZA	414
9. ESTADO DE NECESIDAD.	418
10. PROBLEMÁTICA DEL ERROR.....	419
11. PROBLEMÁTICA SANCIONADORA DE LOS ILICITOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS. PRINCIPIO NE BIS IN IDEM.....	421

III. MARCO CIVIL

1. REGÍMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.....	425
1.1. Cazador.....	429
1.1.1. Obligación de indemnizar.....	429
1.1.2. Seguro obligatorio de responsabilidad civil	432
1.2. Titular del aprovechamiento cinegético	436
1.2.1. Terrenos de aprovechamiento cinegético especial (cotos de caza)	436
1.2.2. Otros terrenos cinegéticos especiales.	441
1.2.3. Terrenos de aprovechamiento cinegético común	443
1.3. Responsabilidad civil de la Administración en materia cinegética	445
1.3.1. Titularidad del aprovechamiento cinegético.....	447
1.3.2. Responsabilidad cinegética residual	448
1.3.3. Daños causados por especies no cinegéticas protegidas	449
1.4. Titular del derecho.....	450
1.4.1. Prevención del daño.....	451
1.4.2. Prueba y valoración del daño	453
1.5. Colisión de piezas de caza con vehículos	454
1.6. Responsabilidad civil <i>ex delicto</i>	460
CONCLUSIONES.....	463
VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA Y POLÍTICO CRIMINAL	477
BIBLIOGRAFÍA.....	481
PÁGINAS WEB UTILIZADAS	513

ANEXOS

I. LEGISLACIÓN UTILIZADA.....	515
II. JURISPRUDENCIA EN MATERIA CINEGÉTICA	527
III. BUENAS PRÁCTICAS Y ÉTICA DEL CAZADOR	535
IV. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES	547
V. TROFEOS DE CAZA MAYOR	553
VI. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS PRECINTOS PARA CAZA MAYOR..	557
VII. ARMAS	565
VIII. SEÑALIZACIÓN DE LOS TERRENOS	569

RESUMEN

MARCO PENAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CAZA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EN DERECHO ESPAÑOL

Propósito de la investigación

La relación de las actividades de caza con la diversidad biológica es enorme, por ello la gestión y planificación de las mismas, así como su desarrollo racional y ordenado, es indispensable para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del patrimonio cinegético. Los principales problemas que se encuentran en esta actividad y que afectan a la fauna silvestre, son el furtivismo; mal uso de cerramientos cinegéticos; incorrecta gestión del terreno cinegético; la introducción de especies exóticas y asilvestradas; y el uso de venenos, lazos, cepos y otros métodos no selectivos.

Asimismo, la caza es una actividad con repercusiones en la naturaleza, no solo sobre su fauna, sino también sobre muchos otros elementos que integran el medio ambiente: la flora, el territorio o la riqueza paisajista, todos ellos merecedores de una adecuada protección. De acuerdo con su naturaleza todos ellos integran el patrimonio natural que se debe conservar y mejorar para transmitirlo a las generaciones futuras, por lo que se debe buscar siempre el desarrollo sostenible en la regulación y gestión de esta actividad como recurso. La riqueza cinegética y el hábitat en el que se desarrolla la caza es patrimonio de todos, por ello esta actividad debe ser gestionada por la Administración de forma racional y ordenada, buscando asimismo las condiciones necesarias para el mantenimiento y conservación del patrimonio cinegético.

La caza constituye una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, resultado del ejercicio de su autonomía y que encuentra su legitimación en el marco de la Constitución Española de 1978, en su artículo 148.1.11º, pero se encuentra afectada transversalmente por las leyes estatales, como es el caso de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Ley 1/1970, de 4 de abril, de

caza, así como por la diferentes normas comunitarias e internacionales relativas a la protección de la fauna.

En el siglo XIX la regulación cinegética aportaba poca protección al patrimonio cinegético, solo prohibía ciertas técnicas y eran cazables muchas de las especies de aves y mamíferos en toda la Península Ibérica. Con el surgimiento de la conciencia medioambiental esta situación cambia, se comienza a regular todos los aspectos de esta actividad, como los territorios cinegéticos, los animales cazables, las modalidades o las temporadas de caza, buscando proteger a todos los componentes de la diversidad biológica. A su vez, como así lo recogen las legislaciones autonómicas, la caza como actividad de supervivencia o abastecimiento pasa a ser una actividad de ocio y deporte, pasando posteriormente a intentar ser parte de la política conservacionista que busca el compromiso por parte de todos los sujetos que intervienen en esta actividad para su adecuada gestión, protección y mejora, garantizando así, que el aprovechamiento cinegético no afecte a la conservación de las especies. Adquiere también una dimensión social y económica, por medio del comercio y la explotación industrial de las piezas de caza, a través de granjas cinegéticas o cotos industriales, que forman parte importante del desarrollo de la actividad y es fuente de creación de empleos rurales que contribuye a la disminución del éxodo de los habitantes en dichas zonas. Se pretende encontrar el equilibrio entre el propio ejercicio de la caza y la protección de la biodiversidad.

Hay que hacer referencia a la complejidad de su marco normativo, basado primordialmente en la regulación procedente de las Comunidades Autónomas, las normas emanadas a nivel europeo, así como la normativa estatal incluida en la ley de caza, siendo esta legislación básica allí donde no se haya elaborado legislación autonómica y de aplicación supletoria en los restantes territorios, produciéndose en muchas ocasiones un solapamiento que provoca una gran dificultad a la hora de determinar la norma que prevalece y que será de aplicación.

En este contexto de regulación y protección, se introduce con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y su reforma a través de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, delitos contra la fauna y delitos propiamente cinegético en el Capítulo IV del Título XVI, integrados por un conjunto normativo administrativo y teniendo en cuenta ciertos convenios internacionales, ratificados por España, sobre protección de

determinadas especies. Se limita la vía penal a casos graves o muy graves, siguiendo el principio de intervención mínima, pero destacando su poder coercitivo como norma protectora disuasoria, considerando al Derecho penal como instrumento de tutela ambiental.

Como reconoce el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD), la conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas. La biodiversidad está estrechamente ligada al desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas son igualmente relevantes en la lucha contra el cambio climático. Por último cabe destacar que la biodiversidad está íntimamente ligada a la cultura de todos los pueblos y forma parte de su identidad, por lo que es necesaria una evolución de los modelos de desarrollo hacia la sostenibilidad que busquen minimizar el impacto de las actividades humanas.

Objetivo- contenido

El objetivo de este proyecto de investigación es conocer y dar cuenta del marco civil, así como del marco penal y administrativo de particulares delitos contra la fauna; la protección de la misma, y la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la caza y la protección de las especies silvestres en las diferentes Comunidades Autónomas, para así intentar acabar con la caza furtiva y mejorar la protección de las diferentes especies de fauna silvestre. Se analizan, por un lado las distintas regulaciones autonómicas junto a la regulación estatal en esta materia; y por otro lado, los instrumentos con los que cuentan el Derecho administrativo y el Derecho penal para la tutela de la caza y de la fauna silvestre. Se tratan los problemas que plantea la regulación contradictoria y confusa de la caza, derivada de las diversas regulaciones autonómicas y de las diferentes ramas del derecho. Se estudian las dificultades derivadas de la delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo en este ámbito, valorando sus repercusiones sobre el principio *ne bis in idem* y la cuestión de las leyes penales en blanco.

Metodología

El modelo metodológico, en sus rasgos generales, así como las fases en que se desarrollara el plan de trabajo, se inscribe en lo que suele ser habitual en las investigaciones jurídicas. El diseño de la presente investigación apunta a recoger, estudiar, profundizar y analizar toda la legislación existente en relación a la materia cinegética en el ámbito internacional, comunitario y español tanto a nivel estatal como autonómico, así como un análisis del derecho comparado en esta materia. Se partirá del estudio de bibliografía general y especializada, artículos de revistas científicas, con especial atención a los estudios publicados tras las reformas operadas en 2015, así como de la revisión de medios electrónicos. Además de los materiales legislativos se analizará la posición de la jurisprudencia sobre esta materia.

El trabajo se enriquece con aportaciones extraídas de diversas manifestaciones de profesionales del Derecho y otras ramas relacionadas con la actividad cinegética, así como declaraciones de cazadores y titulares de aprovechamientos cinegéticos

Medios

Las fuentes de información o técnica documental utilizada para realizar la investigación son los manuales escritos sobre esta materia así como de diversos sectores (Derecho Penal, Civil o Administrativo) consultados en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, en otras universidades y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; legislación aplicable, tanto estatal como autonómica, analizada cronológicamente; la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como de otros órganos judiciales; información obtenida de páginas oficiales de Internet; de revistas especializadas; y por último las bases de datos jurídicas como: El Derecho, La Ley, Aranzadi, Tirant lo Blanch, etc. Realizando así una recopilación y análisis de la diversa normativa aplicable a la actividad cinegética.

Conclusiones

La actividad cinegética se encuentra altamente regulada pero de una forma confusa y contradictoria por lo que es necesario y fundamental asegurar unas normas mínimas y homogéneas para todo el territorio, optando por una política integral de protección de la fauna silvestre. Se produce una gran problemática debido a la

dispersión y fragmentación normativa en relación a la caza, a la diversa regulación del régimen de infracciones y la calificación de las sanciones, debido a que cada Comunidad Autónoma la regula con arreglo a sus propios criterios sin llegar a darse unos principios unificados en todas las comunidades que provoca una descoordinación entre ellas. Esta dispersión conlleva otro problema en esta materia, como es la dispersión jurisdiccional, ya que la interpretación y las decisiones judiciales emanadas varían en función de la calificación de las infracciones administrativas dada por cada Comunidad Autónoma, que provoca a su vez una imposibilidad de unificación de criterios. Asimismo se produce otra problemática en torno a la terminología utilizada en las legislaciones de caza autonómicas que crea una gran confusión e inseguridad jurídica al cazador. Se debe lograr, por parte de la Administración, que las disposiciones generales acerca de la protección y ordenación de la fauna estén adecuadamente integradas con las disposiciones sobre la caza.

El Derecho administrativo es clave para la protección de la biodiversidad y la regulación de los recursos naturales, a través de sus instrumentos jurídicos se orienta regula y limita la actividad cinegética. Cuando estos instrumentos fallan, es cuando entra en juego la responsabilidad por daños, considerándose una protección subsidiaria, con el objetivo de reforzar la protección ambiental. En virtud del principio de intervención mínima y teniendo presente su poder coercitivo como norma protectora disuasoria, debe considerarse también al Derecho penal como instrumento de tutela ambiental.

Solo con la adecuada protección y ordenada regulación administrativa, así como el uso de apropiados instrumentos de planificación cinegética, esta actividad se podrá desarrollar sin provocar graves daños en la biodiversidad, evitando así poner en peligro a la fauna silvestre y su hábitat.

Se debe optar por una adecuada formación y educación ambiental de los cazadores para la promoción de la caza sostenible. Es necesario que la regulación y la educación ambiental lleguen tanto a los cazadores, a los titulares cinegéticos así como a la gente que se beneficia de la caza. A su vez las administraciones deberán procurar que sus normativas sean unificadas, claras y que busquen una correcta protección de la

biodiversidad, así se llegara a un desarrollo cinegético responsable y respetuoso con el medio ambiente.

ABSTRACT

CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK OF HUNTING AND LIABILITY IN SPANISH LAW

Introduction

Relationship between hunting activities and biodiversity is huge, so the management, planning and rational development is essential to ensure the sustainability and balance of the hunting heritage. The main problems encountered in the hunting activity are poaching; incorrect use of hunting enclosures; incorrect management on hunting estates; the introduction of exotic and feral species; and the use of poisons, snare traps, clamps and other non-selective methods.

Hunting is an activity with nature implications and not only wildlife. It has effects on many other elements on the environment: the flora, landscape or territory wealth. All this elements deserve the adequate protection according to their nature, through a sustainable development, as part of the natural heritage that must be preserved and improved to transmit it to future generations. The hunting resources and its habitat belong to everybody, so this activity should be managed by the Administration in a rational and orderly way, seeking the necessary conditions for the maintenance and preservation of hunting heritage.

The hunt is an exclusive competence of the Autonomous Communities, the result of exercising their autonomy and which finds its legitimacy in the framework of the Spanish Constitution of 1978, Art. 148.1.11º, but is transversely affected by state laws, as the Law 1/1970, of 4 April, *de caza* and Law 42/2007 of 13 December of *Patrimonio Natural y la Biodiversidad*, and the different EU and international standards on the protection of wildlife.

In the XIX century the hunting regulations brought little protection to the heritage protection, prohibiting only certain techniques and allowing the hunt of many species of birds and mammals in the Iberian Peninsula. With the rise of environmental awareness this situation changes and begins the regulation of all aspects of this activity, such as hunting territories, game species, hunting methods and seasons, seeking to protect all components of biodiversity. In addition the regional laws transform hunting from a survival and supply activity to leisure and sport activity. Later the regional laws try to be part of the conservation policy that seeks the commitment from all subjects involved in this activity for their proper management, protection and improvement, ensuring that the hunting use does not affect the conservation of species. It gets a social and economic dimension, through trade and industrial exploitation of the hunting trophies through hunting farms or industrial reserves, which are an important part of the development of the activity. It is a source of rural employment also, decreasing the exodus of the inhabitants in these areas. It is a must to find a balance between the hunting practice and the protection of biodiversity.

Reference should be made to the complexity of its regulatory framework, based primarily on the regulation from the Autonomous Communities, the decisions adopted at European level and state regulations included in the hunting law. The state regulation is the basic law in the absence of regional regulation and extra implementation legislation in the remaining territories. This situation often results in an overlap that causes great difficulty in determining the prevailing law to be applied.

In this context of regulation and protection, it is introduced to the Organic Law 10/1995 of 23 November, of the Criminal Code, and reform through IT 1/2015, of 30 March, wildlife crimes and hunting crimes, in Chapter IV of Title XVI, made up an administrative set of rules and taking into account certain international conventions ratified by Spain on the protection of certain species. The law limits criminally to the serious or very serious cases, following the principle of minimal intervention, but highlighting its coercive power as a deterrent protection rule. For this reason criminal law should be consider as an instrument of environmental protection.

As is recognized by the Convention on Biological Diversity (CBD), biodiversity conservation is a common concern of humankind and is critical to satisfy their basic

needs. Biodiversity is closely linked to development, health and welfare of people and is one of the foundations of social and economic development. The conservation of biodiversity and the maintenance and restoration of ecosystems are also relevant in the fight against climate change. Finally it should be noted that biodiversity is closely linked to the culture of all peoples and is part of their identity. Thus is needed to change patterns of development to sustainability that allows minimize the impact of human activities is necessary.

Goal- content

The aim of this research project is to understand and collect the civil code, as well as criminal and administrative framework of particular crimes against fauna; protecting it, and finding a balance between the right to hunt and protection of wildlife in the different autonomous communities in order to try to finish the poaching and improve the protection of species. They are analyzed on the one hand the various regional regulations with state regulation in this area; and secondly, the instruments at their disposal administrative law and criminal law for the protection of hunting and wildlife. The problems of contradictory and confusing hunting regulations derived from the various regional regulations and the different branches of law are analyzed. The difficulties arising from the delimitation between criminal offense and administrative illegal in this area are studied, evaluating its impact on the *ne bis in idem* rule and the question of blank criminal laws.

Methodology

The methodological model follows the usual procedures in legal research. The design of this research aims to collect study and analyze all the existing legislation relating to the hunting activity at international, EU, Spanish and regional level. As well, this study tries to do an analysis of comparative law in this area. We will start the study of general and specialized literature and journal articles, with special attention to studies published after the reforms introduced in 2015 and the review of internet media. In addition to the legislative materials the status of case law on this matter will be discussed.

The work is enriched by contributions drawn from various manifestations of law practitioners, other branches related to hunting activities and interviews with hunters and beneficiaries of hunting.

Media

The sources of information are written manuals on the subject as well as various sectors (Criminal, Administrative and Civil law) consulted in the library of the Complutense University of Madrid, other universities and in the Bar Association of Madrid. Other sources are: The state law and applicable regional law, analyzed chronologically; the jurisprudence of the Supreme Court, the Constitutional Court and other courts; information obtained from official websites; specialized magazines; Legal databases such as: El Derecho, Wolters Kluwer, Aranzadi, Tirant lo Blanch, etc. Thus collecting and analyzing various of the hunting regulations.

Conclusions

Hunting activity is highly regulated but in a confused and contradictory way and it is necessary and essential to ensure a minimum standards for the whole territory, opting for a comprehensive policy for the protection of wildlife. A problem occurs due to scattering and regulatory fragmentation in relation to hunting activity, as well as the different regulatory regime of infringements and the qualification of the sanctions since each Autonomous Community regulates according to its own criteria. Actually there is no unified criterion or principles in all communities which causes a lack of coordination between them. This dispersion carry to another problem in this area, the jurisdictional dispersion, since the interpretation and court judgments vary depending on the classification of administrative infringements provided by each region, which causes an inability to unify criteria. Another problem was the terminology used in the autonomous hunting laws. Those problems create a lot of confusion and legal uncertainty to the hunter. The administration should achieve that the general provisions, regarding the protection and management of wildlife, are properly integrated with the provisions on hunting.

The administrative law is the key to the protection of biodiversity and regulation of natural resources, through its legal instruments is possible to aim, regulate and limit the hunting activity. When these instruments fail, it is time to consider the liability for damages, considering subsidiary protection, in order to strengthen environmental protection. Under the principle of minimum intervention, mindful of its coercive power and as a deterrent rule it should also be considered criminal law as an instrument of environmental protection.

Only with adequate protection, orderly administrative regulation and the use of appropriate planning instruments this activity can be developed without causing serious damage to biodiversity, thus avoiding endangering wildlife and their habitat.

Appropriate training and environmental education of hunters to promote sustainable hunting is a must. This regulation and environmental education must reach to the hunters, to the hunting owners and people who benefit from hunting. Meanwhile, administrations must ensure that their regulations are unified, clear and looking for a proper protection of biodiversity. The purpose is to achieve a responsible hunting activity development that respects the environment.

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340)”. Tomo X. “Vol. II. Libro II. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época”. Edit. CESEJ, Madrid, 2006.

BRANDARIZ GARCÍA, J.A. “La problemática de las normas penales en blanco”, en “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en Código penal y la legislación especial”. FARALDO CABANA, P (Dir.). Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental. Introducción. Régimen jurídico de la fauna silvestre en libertad”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2004.

CASTÁN TOBEÑAS, J. “Derecho civil español común y foral, Tomo 4”. Edit. Reus, Madrid, 1992.

CHIMNEY, J.; DUCAHRTRE, P.L.; EDMOND-BLANC, F.; LUART, L.; SARREAUT, O. “Historia mundial de la caza”. Edit. Blume, Barcelona 1971.

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y fauna y animales domésticos, y Disposiciones comunes”, en CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (Dir.), LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (Coord.), “Comentarios al Código penal”, Tomo IV, 4ª ed. Edit. Bosch, Barcelona, 2007.

CUENCA ANAYA, F. “La caza en las Comunidades Autónomas: derecho comparado”. Edit.: Al-Andalus, Sevilla 1998.

FARALDO CABANA, P. “Flora y fauna (arts. 333, 334, 336, 337, 339 y 631)”, en “Comentarios a la Reforma Penal de 2010”, ÁLVAREZ GARCÍA, F.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; VV.AA. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

- “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011,

GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Edit. Comares, Granada, 2006.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T.R. “Curso de derecho administrativo”, Vol. I. Edit. Thomson-Reuters, 15ª ed., Pamplona, 2011.

GARCÍA GARRIDO, M.J. “Derecho a la caza y ius prohibendi en Roma”. Edit. Instituto Nacional de estudios jurídicos, Madrid 1956,

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Edit. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid 2000.

GARCÍA ROMERO, C., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.P, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.I. y CUENA BOY, A.” Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2002.

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L; MATA LLÍN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Edit. Trotta Madrid 2000.

- “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en AA. VV., “Comentarios al Código Penal”. Edit. Iustel, Madrid 2007.
- La tutela penal de los animales”. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2009.
- “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en “Derecho penal español. Parte especial”, T. II, Dir. Álvarez García, J. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos” en “Derecho penal español, Parte especial” (II), ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), MANJÓN-CABEZA ALMEDA; VENTURA PÜSCHEL (Coord.). Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- ” La protección del bienestar animal a través del derecho penal”. Edit. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI (2011). ISSN 1137-7550: 259-304.

HIGUERA GUIMERÁ, J. F., “El tráfico ilegal de especies protegidas de fauna silvestre”, Edit. Cuadernos de Política Criminal, 53 (1994).

- “La protección penal de los animales en España”. Edit. Secretaria General Técnica, Madrid, 1994.
- “Los malos tratos crueles a los animales en el Código Penal de 1995”. Edit. Actualidad Penal, 17 (1998).

KRÄMER, L. “Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea”. Edit. Marcial Pons, Madrid 1999.

LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2007.

LAGUNA DE PAZ, J.C. Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997.

- “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2009.

LOZANO CUTANDA, B. “Planificación como técnica de protección ambiental”, en “Diccionario de Derecho de ambiental”. Edit. Iustel, Madrid, 2006.

- “Derecho Ambiental Administrativo”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009.

- MAFFEI, M.C. Artículo “Evolving Trends in the Internacional Protection os species” German Yearbook of Internacional Law. Edit. Duncker & Humblot, Berlin, Germany ,1993.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L. “La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo”. Edit. La Ley, Madrid, 2015.
- MARQUÉS I BANQUÉ, M. “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (art. 337) y Disposiciones comunes (arts. 338 a 340)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), “Comentarios al Código penal español, Tomo II (Artículos 234 a DF 7ª)”, 6ª ed. Edit. Aranzadi, Navarra, 2011,
- MATA DE FRANCISCO, J. “Ne bis in idem y seguridad jurídica”. Tesis doctoral inédita dirigida por DR. D. SANTA CECILIA GARCÍA, F., Madrid, 2009,
- MATALLÍN EVANGELIO, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L. “La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1y 2/2015, de 30 de marzo”. Edit. La Ley, Madrid, 2015.
- MUÑOZ CONDE, F.; LÓPEZ PEREGRÍN, C.; GARCÍA ÁLVAREZ, P. “Manual de Derecho penal medioambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- MUÑOZ LORENTE, J; BAUCCELLS LLADÓS, J; FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 327, 328, 329 y 339)”, en ÁLVAREZ GARCÍA F.J; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dir.), “Comentarios a la Reforma penal de 2010”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch 2007.
- QUINTERO OLIVARES, G.”Derecho penal ambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

REQUEJO CONDE, C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Edit. Comares, Sevilla, 2010.

SÁNCHEZ CALERO F. “El seguro de caza obligatorio”. Edit. Revista española de seguros, Madrid 1997.

SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988.

- “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Edit. Exlibris, Madrid, 1998.
- “Leyes históricas de caza. Tratado del Derecho de Caza en las Comunidades Autónomas (recopilación)”. Edit. Exlibris, Madrid, 2007.
- “Caza y veneno”. Edit. Exlibris, Madrid, 2010.

SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Medio ambiente y reparación del daño”, en “Textos jurídicos y contextos sociales en F.A. Hayek”. Edit. Dykinson, Madrid, 2011.

- “Delitos contra los recursos naturales y medioambiente”, en “Libro homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Edit. La Ley, Madrid, 2015.

SERRANO TÁRRAGA, M.D. “El maltrato de animales en el Código penal”. Edit. La Ley, 2005.

VAZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Edit. Andavira, Madrid, 2014.

- “Evolución histórico-legislativa de la caza furtiva”. Edit. Crealite, Madrid, 2014

INTRODUCCIÓN

A nivel internacional los años setenta fueron el inicio institucional de la defensa y protección de la fauna silvestre. Esta preocupación por la defensa medioambiental llevo a que se ratificaran diversos Convenios y Tratados internacionales cuyo objeto era la defensa y protección de ciertas especies animales por considerarlas Patrimonio Mundial. A su vez buscaban la regulación del uso de los recursos naturales, así como la protección del medioambiente.

La normativa ambiental protectora de la fauna silvestre tanto internacional, comunitaria, estatal y autonómico es complicada de interpretar y de aplicar. Los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno recogen instrumentos para la protección de la diversidad biológica o biodiversidad, que buscan evitar la pérdida de especies de fauna silvestre. El ordenamiento jurídico español no es ajeno a esta concienciación ambiental, así la Constitución española en su artículo 45 proclama el derecho a disfrutar del medio ambiente, así como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, así como defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva. Surge así la necesidad de proteger la fauna, la flora y sus hábitats, manifestándose como una acción cada vez más importante en nuestros días.

En la actualidad se ha incrementado la preocupación por la conservación de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad. Surge una gran concienciación social que busca mitigar los problemas ambientales, como el agotamiento de algunos recursos naturales; la desaparición de especies de la flora y la fauna silvestres; la degradación de los habitats; así como los efectos del cambio climático. Se reivindica un derecho a un medio ambiente de calidad. En este marco, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. A su vez, recoge las normas y recomendaciones internacionales.

En este contexto de concienciación medioambiental surgen los problemas relacionados con la actividad cinegética. La Ley de Caza de 1970, busca la conservación de la naturaleza y en especial la protección de los recursos cinegéticos, así lo recoge su artículo 1: “*la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética nacional y su ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses afectados*”. La regulación de la caza constituye una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, que encuentra su legitimación en el marco constitucional del artículo 148.1.11º. Esta actividad al afectar a la fauna silvestre, su ejercicio debe ser compatible con la protección de las especies y su hábitat. Las CCAA en sus ordenamientos jurídicos autonómicos buscan encontrar el equilibrio entre el propio ejercicio de la caza y la protección de la biodiversidad.

En el presente trabajo nos centraremos en la actividad cinegética, en su regulación a nivel autonómica y estatal; en conocer y dar cuenta del marco civil, así como del marco penal y administrativo de particulares delitos cinegéticos; la protección de la fauna, y la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la caza y la protección de las especies silvestres en las diferentes Comunidades Autónomas.

España posee la mayor riqueza biótica de Europa occidental con un total de entre 50.000 y 60.000 especies animales, más del 50% de las especies existentes en la Unión Europea. Goza de una gran variedad de hábitat teniendo 121 tipos diferentes, lo que supone el 54% del total de hábitats existentes en toda la Unión Europea, merecedora por tanto de una gran normativa ambiental de protección estatal, comunitaria así como internacional. A su vez, su ubicación, la convierte en paso para las aves migratorias al sur de Europa y al norte de África. La riqueza biológica, la orografía y la climatología, llevan al gran desarrollo de la práctica cinegética desde hace siglos, integrándose en la cultura y en las tradiciones españolas, incluso forma parte de la propia evolución histórica.

La razón principal de nuestro interés por el estudio de la actividad cinegética es acabar con la regulación contradictoria y confusa de la misma, derivada de las diversas regulaciones autonómicas y de las diferentes ramas del derecho que la regulan. Teniendo en cuenta siempre, que la caza produce efectos y consecuencias tanto en la fauna silvestre como en su hábitat, componentes de la diversidad biológica, digna de

una gran protección por ser patrimonio de la humanidad, que debe ser conservada para transmitirla a las generaciones venideras, por lo que se debe buscar siempre el desarrollo sostenible en la regulación y gestión de esta actividad como recurso. Su protección jurídica debe ser correctamente abordada, no solo por el Derecho administrativo, sino también por el Derecho penal. En el presente estudio, analizaremos, por un lado las distintas regulaciones autonómicas junto a la regulación estatal en esta materia; y por otro lado, los instrumentos con los que cuentan el Derecho administrativo y el Derecho penal para la tutela de la caza y de la fauna silvestre; ambas cuestiones resultan particularmente problemáticas en su aplicación.

En relación con lo anterior en el Capítulo I estudiaremos, la evolución histórica y sociológica de la actividad cinegética, así como su evolución legislativa a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico, con el fin de determinar su alcance en la problemática que nos ocupa.

Realizado este primer acercamiento a la regulación de la caza, pasamos en el Capítulo II al régimen jurídico de la fauna silvestre, aspecto importante que se debe enmarcar jurídicamente, debido a que esta normativa es vital a la hora de aplicar y entender la legislación en materia cinegética. A su vez analizaremos el régimen jurídico de las piezas de caza y de los animales domésticos, dos puntos clave relacionados con esta materia.

En el Capítulo III se abordará la problemática de la distribución competencial entre el Estado y las CCAA en materia cinegética. Se encuentra altamente regulada incluso en ocasiones de una forma contradictoria, debido a las diversas regulaciones sobre esta materia dadas por las CCAA y las diversas ramas del derecho que regulan la caza. Culminada esta investigación es indispensable centrarnos en la propia actividad, estudiando los requisitos generales del cazador y las propias medidas para el ejercicio de la caza, así como, sin olvidarnos de los requisitos generales que deben cumplir los titulares del terreno cinegético, siempre buscando medidas de fomento del hábitat y cumpliendo lo establecido en los instrumentos de planificación cinegética que regulan el ejercicio de dicha actividad, punto clave para el desarrollo sostenible de la caza. Concluye este capítulo con el estudio de la supervisión administrativa a través de registros estatales y autonómicos, como el recién aprobado Registro Español de

Infractores de Caza y Pesca, el control y vigilancia a través del SEPRONA y los Guardas forestales, el control a nivel particular de los titulares cinegéticos por medio de los guardas de caza y su regulación por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Por último se hace referencia al comercio y explotación industrial de la piezas de caza, a través de granjas cinegéticas o cotos industriales, como parte importante en el desarrollo de la actividad y fuente de creación de empleos rurales que disminuyen el éxodo de los habitantes en dichas zonas por escasez de oportunidades laborales, buscando siempre el desarrollo sostenible de la actividad cinegética.

Por último, analizaremos en esta investigación el marco jurídico de la actividad cinegética en el Capítulo VI, para valorar adecuadamente la tutela administrativa y penal, indispensable para valorar la problemática surgida en torno a los ilícitos penales y sanciones administrativas, centrándonos en las infracciones administrativas derivadas de la actividad cinegética y recogidas por las legislaciones autonómicas, tanto del cazador como del titular cinegético, desarrollando el procedimiento sancionador aplicable. Posteriormente nos centraremos en la tutela penal de la fauna, a través de los delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos, establecidos en los artículos 333 y ss. del CP, analizaremos y valoramos las nuevas modificaciones introducidas en la reforma del CP, así como los elementos de dichos delitos. Estudiaremos la delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo en dicho ámbito, principio *ne bis in idem* y sus consecuencias, se abordará otra cuestión fundamental derivada de la relación del Derecho penal con el Derecho administrativo, el principio de legalidad en materia penal, centrándonos especialmente en el problema de las leyes penales en blanco y su remisión a la normativa autonómica. Culmina la investigación con el estudio del marco civil, abordando el régimen de responsabilidad derivado de la actividad cinegética, tanto del cazador, del titular cinegético como de la Administración, haciendo una referencia indispensable al seguro obligatorio de responsabilidad civil. A su vez, dedicaremos un estudio a la nueva regulación aplicable a la colisión de piezas de caza con vehículos.

Se incluye diversa legislación y jurisprudencia en el Anexo I y Anexo II, respectivamente. A su vez termina este trabajo con una serie de Anexos relativos a la actividad cinegética, como es un manual de buenas prácticas del cazador, una clasificación de especies cinegéticas, una referencia a los trofeos de caza mayor, y el

sistema de precintado de las piezas de caza mayor, acabando con una clasificación de las armas y una referencia a la señalización de los terrenos.

Debe destacarse la jurisprudencia dictada en esta materia tanto de los ilícitos penales como de los ilícitos administrativos, así como de la responsabilidad civil derivada de la actividad cinegética debido a que los criterios aplicados por los tribunales constituyen una guía para valorar la correcta regulación legislativa y la gestión de la actividad, así como la efectiva protección de la fauna silvestre que se busca.

Asimismo, cabe destacar que existen diversos centros de investigación científica (públicos y privados) que trabajan en la defensa de la biodiversidad y que asesoran a las Administraciones públicas para ampliar y mejorar las medidas jurídicas de protección de la biodiversidad.

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LEGISLATIVA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

SUMARIO: 1. Evolución histórica y sociológica de la actividad; 2. Legislación anterior en materia de caza; 2.1. Derecho romano; 2.2. Derecho medieval; 2.3. Derecho moderno; 3. Regulación actual en materia de caza; 3.1. Internacional; 3.2. Comunitaria; 3.3. Estatal; 3.4. Autonómica; 4. Regulación cinegética en otros países; 4.1. Italia; 4.2. Francia; 4.3. Alemania; 4.4. Inglaterra; 4.5. Regulación cinegética en otros países.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SOCIOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA.

La alimentación de las primeras sociedades se podría considerar desequilibrada, al basar la misma en la recolección de frutos y plantas, convirtiéndolos en presas de los predadores. Con el dominio del fuego y la aparición de las primeras armas para defenderse hizo que la situación cambiara, pasando de ser presa a predador y de cazado a cazador.¹

En la época prehistórica el hombre cazador necesitaba grandes espacios deshabitados para su supervivencia. Para su defensa se armaron de palos y piedras, transmitiendo estos “inventos” a las generaciones siguientes para lograr su supervivencia, ya que sin ellos habrían sido devorados por las fieras por ser los primates mas desarmados, poseían una única arma: la inteligencia, que debían desarrollarla para poder sobrevivir en ese entorno, del mismo modo debían luchar contra su propio instinto. La gran cantidad de estudios y documentos de especialistas de diversas ramas,

¹ Vid. <http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>.

ponen de manifiesto la importancia capital de la caza como motor de lo que se llama hoy en día civilización.²

Las proteínas aportadas por la carne de caza fue uno de los factores que provocaron el crecimiento y el desarrollo intelectual, que surgió de resolver los problemas derivados de la caza, apareciendo así las diversas herramientas utilizadas para la misma, como la lanza, la flecha y el arco, elementos que caracterizaron la evolución de las primeras sociedades y el surgimiento de la metalurgia como evolución del paso del uso de piedra y madera como armas al uso de metales como el cobre, bronce o hierro.³

Para el hombre cazador los animales no eran considerados como algo inferior, era considerado como igual, y a veces incluso superior a él, en su conjunto o en sus aptitudes particulares, incluso clasificándolos como animales divinos o benéficos, como ocurrió en Egipto con el perro, el león o el halcón. Otra prueba de esa actitud de respeto del hombre hacia el animal de caza, la proporcionaba el hecho de que se les atribuyó símbolos a una gran cantidad de animales para magnificar su propia vida humana o para la ascensión de su alma a una supervivencia eterna, como ocurría con el ciervo.⁴

En las primeras sociedades eminentemente nómadas, debido a la escasez o abundancia de animales cazables, surgieron diversas técnicas de caza que se siguen utilizando en la actualidad como son el rececho, aguardo o batida, para la caza de lobos, jabalíes y ciervos, se valían de hachas de piedra, mazas de hueso y lanzas de madera, así como posteriormente de arcos y flechas.⁵

Con la domesticación de los animales y la aparición de la agricultura pasaron a ser sedentarios, esto provocó que la caza pasase de una actividad de subsistencia

² Cfr. CHIMNEY, J; DUCAHRTRE, P.L.; EDMOND-BLANC, F; LUART, L; SARREAUT, O. "Historia mundial de la caza". Edit. Blume, Barcelona, 1971. Pág.14.

³ Cfr. STILMANN, D. "Implicancia de la caza en el desarrollo humano". <<http://ciervos.idoneos.com/353864/>>

⁴ Cfr. CHIMNEY, J; DUCAHRTRE, P.L.; EDMOND-BLANC, F; LUART, L; SARREAUT, O, "Historia mundial de la caza". Op. Cit. Pág.24 y ss.

⁵ <<http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>>

principal a una actividad de subsistencia secundaria, de defensa contra carnívoros y deportiva que demostraba las habilidades como guerrero (preparación para la guerra).⁶

En el periodo conocido como protohistoria, esta actividad se convierte en un acto social, como una actividad deportiva. Con la aparición de los metales surgen nuevas armas de caza, como el hacha, la espada o el puñal, creándose a su vez en esta época nuevos métodos de caza, como las batidas, el rececho, redes y las trampas, así como el uso de perros, ojeadores, carros o caballos. Aparecen ya en esta época las primeras restricciones en materia de caza, de origen ético y ecológico que emanaban de un orden jurídico jerarquizado.⁷

La mejor forma de conocer el surgir de la caza a través de los siglos, consiste en hacer un paralelismo con los tipos de caza que se han observado a lo largo de la historia entre los pueblos o tribus de cualquier continente, cuyo estilo de vida, utensilios y armas de caza han permanecido, llegando incluso hasta la actualidad. Cada animal por su propia naturaleza, impone su gama particular de formas de caza.⁸

En el caso concreto de la Península Ibérica, debido a sus condiciones medioambientales, así como a su escasa población, hacían de ella un lugar idóneo para la actividad cinegética. Dadas estas condiciones, los métodos más utilizados para la caza eran el rececho y la batida. Para la caza mayor se utilizaban los perros de rastreo, persecución y los de agarre; en la caza menor se limitaban a levantar las piezas y dirigir las.⁹

En la economía de los pueblos prerromanos, hasta la época de Augusto, en relación a la caza, contrasta la carencia de datos sobre la misma en poblaciones del norte con referencia a otras regiones de la Península. En la zona del cantábrico y del noroeste,

⁶ Vid. Los animales y el hombre: origen de la caza, pesca y ganadería. Edit. Prácticas de tablero, seminario de introducción a la zoología aplicada.
<<http://www.unioviado.es/bos/Asignaturas/Zoología/Origen%20de%20la%20caza,%20pesca...pdf>>

⁷ <<http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>>

⁸ Cfr. CHIMNEY, J; DUCAHRTRE, P.L.; EDMOND-BLANC, F; LUART, L; SARREAUT, O, "Historia mundial de la caza". Op. Cit. Pág.16.

⁹ Vid. <http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>.

de carácter agrícola y matriarcal, la caza no tenía una importancia económica positiva, seguía siendo un ejercicio viril o como medio de protección del rebaño. En la zona celtibérica, de cultura pastoril, la caza era muy abundante y representaba un papel más importante que en el norte.¹⁰

La actividad cinegética surge como una actividad deportiva poco después de la caída del imperio romano, dejando de tener ese fin utilitarista. Debido al desarrollo de la agricultura y a la domesticación de animales, se produce una distribución de estas tareas entre los componentes de la sociedad, dejando a la caza como una actividad de ocio o deporte destinada a las clases altas.¹¹

En la economía de la Hispania romana republicana, la carne era la base de la alimentación, debido a la abundancia de ganado y de caza, se podía considerar que Hispania era un gigantesco coto de caza, con una gran cantidad de rebecos, caballos salvajes, cisnes, avutardas, ciervos, conejos, jabalíes, entre otros animales. Esta afición de los hispanos por la caza era anterior a la llegada de los romanos.¹²

Durante la Edad Media se utilizaba principalmente la montería como método de caza, aparece también, la ballesta como nueva arma, utilizada tanto para caza mayor como menor. Es reseñable en esta época la aparición de la cetrería en España, procedente de Oriente. Esta práctica fue utilizada de forma minoritaria, debido a su alto coste, por lo que en su mayoría era practicada por la nobleza, valiéndose para ello de halcones y azores.

A finales del siglo XV y durante el XVI se utilizaba tanto la ballesta como la pólvora con fines cinegéticos, es durante el tercer tercio del siglo XVI donde la pólvora pasó a ser el método más utilizado para la caza, para ello se valían de armas de encendido por rueda, de llave de chispa, llave de patilla o miquelet, permaneciendo este último hasta finales del siglo XIX, donde fue sustituida por las armas de pistón y éstas a su vez, por las de retrocarga. Las armas de fuego como la escopeta y la carabina,

¹⁰ Cfr. BLAZQUEZ, J.M. “Economía de la Hispania Romana”. Edit. Nájera, Vizcaya, 1978. Pág. 95.

¹¹ Cfr. STILMANN, D. “Implicancia de la caza en el desarrollo humano”.
<<http://ciervos.idoneos.com/353864/>>

¹² Cfr. BLAZQUEZ, J.M. “Economía de la Hispania Romana”. Op. Cit. Pág.207 y ss.

proporcionaron nuevas técnicas de caza, sobre todo para la caza de aves, como el tiro al vuelo, ya que la caza de las mismas resultaba imposible con arcos y ballestas, surgiendo con ello los perros de parada que cobraban las piezas.

Con el aumento de la población en las ciudades se produjo una deforestación de las masas forestales, afectando a varias especies cinegéticas, como el oso. A su vez, con el aumento de las tierras de labor se produjo un aumento de la población de jabalíes y lobos. El aumento del uso de las armas de fuego durante el siglo XVI produjo que Carlos I a través de la pragmática de 1527 y Felipe II con la Ley de 1611 intentaran reducir el uso de las mismas para evitar el retroceso cinegético en España. En la ley de 1617 se volvió a autorizar la actividad cinegética a todo el mundo, esto cambio dos siglos después con la Ley de 1804.

En los últimos siglos se producen mejoras en las armas de retrocarga (escopeta y rifle), así como en su munición. Asimismo, con la legislación específica de caza se establecen las vedas, las licencias de caza, permisos y la determinación de las especies de caza. Surgen también órganos de representación de los cazadores, como las Federaciones de caza. Este contexto en su conjunto hace que se consolide la caza como una actividad que se engloba en varios ámbitos de la sociedad, como es el deportivo, el social y sobre todo el económico, surgiendo a su vez la oposición de varios sectores de la sociedad.¹³

La evolución de las modalidades de caza, el listado de especies cazables, junto con la amplia normativa aprobada para su control, en ocasiones excesiva y contradictoria¹⁴, así como la progresiva recuperación de la caza menor y la expansión de la caza mayor, hace que se busque la adecuada gestión y el aprovechamiento responsable.¹⁵

La actividad cinegética, como se ha indicado, ha sido un elemento común en la evolución histórica de todas las sociedades humanas, a lo largo de su desarrollo ha

¹³ < <http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>.>

¹⁴ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. “El derecho de caza en España”. Edit. Comares, Granada, 2006. Pág.6.

¹⁵ <<http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/>>

tenido diferentes significados, desde la propia supervivencia del ser humano como base de su alimentación, cumpliendo unos fines utilitaristas, aprovechando lo que la naturaleza le ofrece, a convertirse posteriormente en una actividad deportiva y de ocio de una sociedad industrializada que pasa de vivir en un medio rural a un medio urbano. Esta actividad, aparte de estar constituida por una vertiente ambiental, ya que sus efectos se proyectan sobre los recursos naturales, está formada por una vertiente económica y otra social, cuyos fines van desde la propia conservación del medio natural y de las especies protegidas, al desarrollo rural, esto es debido a que la actividad cinegética genera empleo ayudando así al desarrollo de ciertas zonas.

Estos puntos han creado una gran controversia convirtiendo la caza en una actividad conflictiva con grandes posturas enfrentadas desde un punto de vista social, político y legislativo, siendo objeto de estudio por parte de estas disciplinas. Unido a ese cambio de visión de la caza aparece una nueva conciencia social por la conservación del medio ambiente, creando así un gran rechazo hacia la caza.¹⁶

2. LEGISLACIÓN ANTERIOR EN MATERIA DE CAZA

2. 1. Derecho Romano

El Derecho Romano trata la actividad cinegética a través de los modos de adquirir la propiedad. La *ocupatio* es la forma de acceder a la propiedad de las cosas sin dueño (*res nullius*). Un caso de ocupación es la caza de los animales salvajes “*ferae bestiae*”. En relación con la ocupación de los animales se distinguen, los animales salvajes de los amansados y domésticos, afirmando que los primeros pueden ser capturados por todos ya que gozan de libertad natural.¹⁷

En el Libro II de la *INSTITUTA (INSTITUTIONUM D. IUSTINIANI)*, en su Título I, artículo 12, se establece que los animales salvajes cazados son propiedad del cazador por el derecho de gentes, pues lo que antes no es de nadie, se concede por razón

¹⁶ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.7 y 8.

¹⁷ Cfr. GARCÍA GARRIDO, M. J. “Derecho a la caza y *ius prohibendi* en Roma”. Edit. Instituto Nacional de estudios jurídicos, Madrid 1956. Pág.332.

natural al que lo ocupa, sin importar si se cazan en fundo propio o ajeno. Rigió entre los romanos el principio de libertad de caza, entendiéndose tal como un Derecho natural y no como un derecho otorgado por el legislador.¹⁸

En relación a la adquisición del dominio de las cosas, según se establece en el Libro XLI del Digesto, en su Título I, se recoge que: “*Así, pues, todos los animales que son cogidos en la tierra, en el mar, ó en el aire, esto es, las bestias silvestres, y las aves, y los peces, se hacen de los que los coge.*”, por el cual el cazador hace suya la pieza cazada, siendo necesaria una efectiva captura o la muerte del animal, independientemente de la finca donde se cazase.¹⁹

Dicha libertad de caza se veía limitada por el “*ius prohibendi*”, donde el propietario de la finca podía prohibir el acceso a la misma;²⁰ pero no porque se le reconociese un derecho exclusivo de caza, ya que no existían cotos vedados, no es una prohibición de carácter general, sino concreta y personal del propietario del fundo para evitar la entrada de personas no autorizadas.²¹

Al cazador que entraba en una finca ajena se le podría exigir una indemnización por los daños eventualmente causados, pero en virtud de la ocupación la pieza cazada era suya ya que los animales salvajes no eran parte del fundo ni accesorio del mismo.²²

En las Instituciones de Justiniano se parte de la base de que la prohibición de entrar en el fundo debía ser comunicada antes de la efectiva entrada. La prohibición se hacía al que entraba y no al cazador que ejercitaba su originario y natural derecho, por

¹⁸ Cfr. PÉREZ VICENTE, I. “Legislación cinegética en España: Evolución y actualidad”. En Agricultura y Sociedad nº58 (enero-marzo 1991). Pág. 174. <http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays%2Fa058_06.pdf>

¹⁹ Cfr. GRAU FERNÁNDEZ, S. “El actual Derecho de Caza en España”. Conferencia pronunciada el día 10 de mayo de 1973, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, <http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reas%2Fr085_01> Pág.8.

²⁰ Vid. Libro XLI. Digesto. Título I. Gayo; *Diario, libro II*.

²¹ Cfr. IGLESIAS, J. “Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado”. Edit. Ariel, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1972. Pág. 264 y 265; GARCÍA GARRIDO, M.J. “Derecho a la caza y *ius prohibendi* en Roma”. Op. Cit. Pág.316.

²² Cfr. FERNÁNDEZ BARREIRO, A. y PARICIO, J. “Fundamentos de Derecho Privado Romano”. Edit. Paideia, Madrid, 2002. Pág.236.

lo que la prohibición preventiva y concreta no era más que una manifestación de la facultad dominical del dueño sobre su suelo, donde se debía ceder en el caso de que el cazador una vez que había entrado estuviese allí ejercitando su derecho y que nadie podía impedir.

En relación al usufructo de las tierras se deduce de los antiguos textos romanos, que el usufructuario además de su derecho a la caza como cualquier otra persona, tiene un derecho prevalente al ejercicio de la caza sobre el fundo con aprovechamiento venatorio exclusivo o permanente, a su vez, le pertenecen los productos de la caza.

En la época romana el ejercicio de la caza continúa siendo libre y así se consideró por los jurisconsultos, por lo que nadie podía impedir a otro el derecho a la caza y éste quedaba protegido por la *actio iniuriarum*. En esta época no se reconoce la reserva o coto de caza en el sentido actual de estos términos, eso sí, se consideraba al fundo destinado a la caza como una explotación económica especial. No es hasta períodos más avanzados, como recoge el Derecho feudal, donde se adopta la concepción del coto o reserva de caza y se considera el ejercicio de la caza como una regalía o privilegio.²³

2.2. Derecho medieval

En Europa la concepción romanista pasa a un segundo plano por la influencia germánica y la nueva realidad feudal, evolución que se encuentra marcada por tres etapas; la primera de ellas continua el principio de libertad de caza establecido por el Derecho Romano; en la segunda se vincula la caza a la propiedad, en la demarcación del pueblo todos podían cazar, en la marca comunal solo sus miembros y en la propiedad privada solo sus titulares; en la tercera etapa aparece la vinculación entre caza y monarquía, la *inforestatio*, por la que el rey se reservaba la caza en las *forestas*, de manera que nadie podía cazar sin autorización regia, incluido el propietario. Convirtiéndose así la caza en una regalía, donde los reyes compartirían este privilegio con los nobles. Este concepto cambia a lo largo del tiempo distinguiéndose entre las regalías mayores y menores, donde las primeras no podían ser decididas por el rey, en cambio las segundas, donde se encuentra la caza, al no ser esenciales del poder público

²³ Cfr. GARCÍA GARRIDO, M.J. “Derecho a la caza y *ius prohibendi* en Roma”. Op. Cit. Pág.317 y ss.

eran susceptibles de ser transferidos por concesión, “sin menoscabo de la real dignidad”. La regalía de caza se justificó en la idea de la usurpación y en la atribución al rey de los bienes vacantes o mostrencos.²⁴

En España, el régimen de la caza se caracteriza por la dispersión jurídica propia de la época, predominando las normas de carácter particular sobre las generales. En los distintos reinos, los derechos y libertades tenían un carácter local o particular, eran derechos que los príncipes o señores concedían singularmente a poblaciones o a concretos grupos sociales.²⁵

La aparición de los señoríos aparece con retraso en España debido a la reconquista, hasta el siglo XI no se generaliza en León y Castilla la concentración de la propiedad con la constitución de dominios realengos, eclesiásticos o nobiliarios. La consolidación del régimen señorial conllevó concesiones de inmunidad que concedían la potestad de ejercer la jurisdicción sobre el dominio, así como derechos y facultades regias en beneficio de los señores. Uno de estos derechos señoriales era la caza, que inicialmente tenía una vinculación a la tierra y con el paso del tiempo se convierte en un derecho personal y hereditario. El Fuero Real, elaborado por el Rey Alfonso X, (1252-1284), al observar el derecho de reipersecución, hace referencia a los caballeros y a los monteros como cazadores.

A pesar de que el acotamiento de terrenos a favor del señor fue habitual, estos permitieron con carácter general a los pobladores del señorío, el aprovechamiento de los bienes comunales, donde se incluía la caza, quedando por tanto excluidos de este derecho los forasteros, salvo licencia de caza, so pena de prisión, decomiso de aparejos de caza y multas. Este aprovechamiento por parte de los pobladores del señorío, no era absoluto, sino sujeto a límites. En este sentido, eran habituales las prohibiciones a la caza en sembrados y viñedos, de igual forma se procedía al acotamiento de la caza en las dehesas municipales, incluso en ocasiones se prohibía la caza en las proximidades de la ciudad.

²⁴ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997. Pág.22 y ss.

²⁵ Cfr. GARCÍA VALDEAVELLANO, L. “Curso de Historia de las Instituciones españolas”. Edit. Alianza Editorial, Madrid 1982. Pág.415 y ss.

En las Partidas, elaboradas por Alfonso X en 1256 y conocidas como las “*Siete Partidas*”, subyace el origen del principio de libertad de caza pero se describe como una actividad especialmente idónea para el rey. En el reinado de Alfonso XI, sobre 1347, aparece “El Libro de la Montería” que se dio a conocer por su hijo Pedro I de Castilla. Desde mediados del Siglo XIV especialmente en León y Castilla, influenciado por el Derecho Romano, se inicia una predisposición favorable al reconocimiento de prerrogativas absolutas al rey, éstas se vieron recortadas por el Derecho tradicional y estamental. Con ello se puede argumentar que los reyes compartieran el derecho de caza con los señores y vecinos de los municipios y concejos. Subsiste la duda de si este derecho de caza abarca a los vasallos del señorío, quienes carentes de toda capacidad política se encontraban sometidos al señor.²⁶

Surge una proliferación de ordenanzas a finales del Siglo XV debido a la necesidad de proporcionar nuevas respuestas a los problemas generados por un dinamismo económico. En el Valle del Duero, en el entorno segoviano destaca el gran número de ordenanzas que abordan el tema de la caza, como las de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, las de Aguilafuente, las de Pedraza de la Sierra o Cuéllar.²⁷

La legislación municipal trataba de forma casi exclusiva la caza menor, que era aquella a la que podían dedicarse la mayoría de los campesinos. Por otra parte la caza mayor estaba prácticamente reservada a la nobleza, debido a los requerimientos que implicaba su práctica. Solo se encuentra una mención de caza mayor entre las disposiciones de las ordenanzas, en concreto las Ordenanzas de Ávila de 1497²⁸, las cuales disponían que todo venado cazado en tierra abulense sería obligatoriamente llevado a la ciudad para su venta. A su vez, la fiscalidad que gravaba la venta de la caza desempeño un papel relevante a la hora de prohibir que ésta fuera vendida lejos de su lugar de origen.²⁹

²⁶ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.25 y ss.

²⁷ Cfr. FRADEJAS RUEDA, J.M. “La caza en la Edad Media”. Edit. Instituto de Estudios Iberoamérica y Portugal, Seminario de Filosofía Medieval, Tordesillas, Universidad de Valladolid 2002. Pág.151.

²⁸ Cfr. MONSALVO ANTÓN, J.M. “Ordenanzas de Ávila”. Edit. Diputación Provincial de Ávila 1991. Pág.187.

²⁹ Cfr. FRADEJAS RUEDA, J.M. “La caza en la Edad Media”. Op. Cit. Pág.152 y ss.

Todas las reglamentaciones que se conocen sobre la actividad cinegética, reservada ésta a los vecinos de la comunidad que las enunciaba, son limitaciones al Derecho de caza, refiriéndose a lugares, tiempos, especies, técnicas o agentes implicados, estas limitaciones aparecían recogidas en las Partidas y en diversas ordenanzas.³⁰

La caza con el paso del tiempo se articuló en dos corrientes divergentes, la primera trata la racionalidad económica implícita en la actividad cinegética realizada por los campesinos y por otra la que implica una actividad lúdica vinculada a la nobleza, esta confrontación entre ambos estamentos fue evidente en los lugares de señorío.³¹

A finales del siglo XV y comienzo del XVI empiezan a surgir limitaciones a la actividad cinegética tendentes a proteger y racionalizar la utilización de los recursos cinegéticos, esta tendencia limita al campesino la obtención de ingresos y alimentos complementarios. Se comienza a redactar cartas de vecindad garantizando así el respeto mutuo de los comunales sobre la caza y el territorio, como así se recoge en el Concejo de Castromocho o el Concejo Becerril. Del mismo modo, se redactan disposiciones con la intención de proteger el ciclo reproductivo de las especies animales, previstas en las Ordenanzas de Piedrahita 1485, Ordenanza de Cuellar o en la Ordenanza de El Barco de Ávila. A su vez, en las Ordenanzas de Piedrahita 1485 y Ordenanza de Becerril de Campos 1483, se limitaron las zonas de caza, prohibiéndose cazar en el monte y en la dehesa, lugares que estaban tradicionalmente asociados a la práctica cinegética. En el Fuero Viejo de Castilla se señala pena de cien sueldos por matar un azor o un sabueso, la misma por sacar un ojo a una persona.³²

En la pragmática Real de 1552 se estableció una veda para todo tipo de caza durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Cabe destacar que la Ordenanza de

³⁰ Vid. Ordenanza de Ávila de 1497, Ordenanza de Piedrahita, Ordenanza de Cuellar, Ordenanzas de Zamora y su tierra de 1495; Cfr. A. SÁNCHEZ GASCÓN, "Leyes históricas de caza. Tratado del Derecho de Caza en las Comunidades Autónomas". Edit. Exlibris, Madrid, 2007. Pág.17 y ss.

³¹ Las Ordenanzas de origen señorial como las de Pedraza de la Sierra o las de Haro, acotan importantes porciones de los términos respectivos para la caza señorial, monte, bosques y sotos.

³² Cfr. VÁZQUEZ CAÑIZARES, J.C. "Evolución histórico-legislativa de la caza furtiva". Edit. Crealite, Madrid, 2014. Pág.56

Cuellar de 1546 y la Ordenanza de Santo Domingo de Silos limitaban las técnicas de caza con redes, armadijos, lazos y galgos, entre otros.

Dos normativas regulatorias presentes en las ordenanzas de Segovia de 1514 establecen la caza como una continuidad del aprovechamiento particular, al contrario que lo recogido en las Partidas. El trasfondo de dichas normativas es el creciente fenómeno de privatización y usurpación de bienes comunales, originado por los segmentos privilegiados, amparados siempre por el control que ejercían en las instituciones locales. Otro ejemplo de la privatización se recoge en las Ordenanzas de Pedraza de la Sierra, ordenanzas de origen señorial que eran tendentes a restringir la caza a estamentos privilegiados de la sociedad, dando un impulso a su papel lúdico en detrimento del económico realizado por los estamentos más bajos, claro reflejo de ello aparece en las Cortes de 1435.³³

En la Edad Media surge la llamada caza defensiva o caza como obligación, era la forma que tenían los campesinos para defenderse de las agresiones de los animales salvajes y proteger la cabaña ganadera. En algunas ocasiones esta actividad estaba reglamentada como es el caso del fuero de Ribadesil, según el cual los vecinos estaban obligados a realizar batidas para poder eliminar a las alimañas que podían ser peligrosas para el ganado o la propia comunidad. Se utilizaban diversos medios para dar caza a estos animales entre ellos las trampas y los hoyos, este último fue el más extendido en el norte de España para la defensa del lobo, primero tenía lugar la batida para sacar a los lobos de sus madrigueras y conducirlos hasta los hoyos. Eran medidas de carácter consuetudinario, aparecen plasmadas siglos después en el ordenamiento general de muchos de los concejos de la Montaña Noroccidental leonesa durante el siglo XVIII.

Surge también la caza ofensiva, donde se enfocaba la actividad cinegética como forma de obtener ingresos o alimentos complementarios. Otro significado de la caza ofensiva era la creación de la figura del cazador profesional, con el que la caza adquiere un carácter social, esta actividad era realizada por campesinos y gente que no poseían tierras, para estos la caza se convirtió en un modo de vida con el que obtener recursos para su subsistencia, estos recursos se obtenían con el tráfico de pieles abasteciendo la

³³ Cfr. FRADEJAS RUEDA, J.M. “La caza en la Edad Media”. Op. Cit. Pág.154 y ss.

demanda de los mercados locales cercanos más importantes de la Montaña Noroccidental de León.

Posteriormente surge la denominada caza lúdica, donde la actividad cinegética se convierte en un objeto de diversión y deporte para ciertos estamentos de la sociedad, como era la nobleza, para ello establecían cotos de caza para evitar la caza furtiva que realizaban en ocasiones sus vasallos, surgiendo así controversias sociales.³⁴

2.3. Derecho moderno

En los distintos reinos que darán lugar a España, la caza se regulaba mediante disposición particular, esta dispersión normativa se mantiene hasta finales del siglo XVIII, donde se aprueba la Ordenanza General de Caza y Pesca, primera disposición de aplicación general a todo el Reino, a excepción de Navarra. Esta Ordenanza se establece a través de una Real Cédula de 16 de enero de 1772, bajo el reinado de Carlos III en España, que regulaba los días en que podían cazar los nobles, artesanos y jornaleros; los períodos de veda, prohibiéndose la caza en los días de nieve y de fortuna; prohíbe determinados medios de caza que destruyen la misma (reclamo, lazos, perchas, etc.); regula la caza de codornices, perdices, palomas, así como las monterías de lobos y animales dañinos. La referida Ordenanza de 1772, fue refundida y aumentada por la Ordenanza General de 1804. El Derecho común seguía rigiendo los aspectos civiles de la caza, con la excepción de antiguos privilegios y regímenes especiales.³⁵

Desde el siglo XIV hasta principios del XIX se dio una limitada libertad de caza, la caza continuaba siendo un privilegio del rey y la nobleza en la sociedad estamental del Antiguo Régimen. A lo largo de estos siglos surgieron una pluralidad de ordenanzas, cédulas y órdenes que regulaban los bosques y cotos reales que constituían las reservas regias de caza.³⁶ De igual forma se reservaban la caza de determinadas especies a los

³⁴ Cfr. FRADEJAS RUEDA, J.M. “La caza en la Edad Media”. Op. Cit. Pág.93 y ss.

³⁵ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.31 y 32.

³⁶ Vid. La Pragmática de Felipe III de 7 de noviembre de 1617, por la que se declaran abolidas las disposiciones anteriores que prohibían cazar con tiro de pólvora, salvo en los sitios vedados: bosques de Aranjuez y El Pardo, Balsain y San Lorenzo, y otros bosques, montes o sotos reales, a su vez se establece que los “montes vedados y guardados particulares que tuvieran derecho, ó estuvieren en posesión de los vedar y guardar” (Novísima Recopilación, VII, 30, quinto).

estamentos privilegiados de la sociedad, así lo recogía la Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de Navarra (v, 7,22ª). El Derecho Aragonés y el de Castilla, reconocían a sus habitantes la posibilidad de cazar, pero a su vez establecían privilegios a nobles y señores, de igual forma prohibían determinados tipos de caza.

Durante el siglo XIX en España, motivada por el influjo de la Revolución francesa, hace que la caza tome una dirección más privatista, superándose con ello las regalías y los privilegios señoriales, surgiendo así un nexo entre el derecho a cazar y la propiedad, todo ello sin olvidar el principio de libertad de caza heredado de siglos anteriores. El Decreto sobre incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación, de 6 de agosto de 1811, emanado de las Cortes de Cádiz, abolió los privilegios señoriales de pesca y caza, quedando a disposición del pueblo con arreglo al Derecho común y a las reglas municipales establecidas de cada pueblo. El Decreto de 8 de junio de 1813 declaró cerrados y acotados todas las dehesas, heredades y tierras pertenecientes a dominio particular, imponiéndose la propiedad privada a la libertad de caza. La Real Orden sobre licencias de caza de 5 de marzo de 1818, trató de fomentar la caza reduciendo el número de cazadores, exigiendo la licencia de caza con escopeta en todo el reino, que anteriormente solo se exigía para cazar en la proximidad de la corte y sitios reales. Con ello se conseguía una mayor seguridad pública en los caminos. En esta época también se aprobó el Real Decreto de 31 de agosto de 1819 que tenía por objeto la promoción de los cerramientos.³⁷

El Real Decreto de 3 de mayo de 1834, aprobó la Ordenanza de caza y pesca que asoció de nuevo, el derecho de caza con la propiedad privada. De esta regulación se deduce que las piezas de caza se consideran *fructus fundi*. Dicha ordenanza diferenciaba el ejercicio de la caza en función de que ésta se realizara por el dueño o terceras personas en terreno público o privado. Se establecía que el propietario podía cazar todos los días del año sin necesidad de licencia de caza, sin embargo en las tierras abiertas de propiedad particular así como en los bienes públicos, se establecían tiempos de veda, nieve y fortuna, así como la prohibición de cazar con determinados medios de caza (hurones, reclamos y redes).³⁸

³⁷ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.32 y ss.

La Ley de Caza de 10 de enero de 1879, muy criticada, afirmaba la libertad de caza para toda persona que acreditase poseer licencias de uso de escopeta y caza, esta actividad podía ser realizada en los terrenos del Estado o de los pueblos que no se hallasen vedados. En los terrenos privados solamente podía cazar el dueño y toda persona autorizada por él, por escrito. La excepción a esta regla, se recogía en el artículo 15 de la referida ley, donde se establecía que las tierras de propiedad particular que no estuviesen amojonadas, cerradas o acotadas, se podía cazar sin el citado permiso por escrito del dueño, siempre y cuando ya se hubiese llevado a cabo la cosecha de las tierras.³⁹

Dos aspectos son además destacables de la Ley de Caza de 10 de enero de 1879, por una parte la consideración de la caza como fruto del predio y por otra la limitación al propietario sobre los derechos de caza, al verse sometido él mismo a lo establecido en la ley.⁴⁰

³⁸ Vid. Art. 1 del Real Decreto de 3 de mayo de 1834: “los dueños particulares de las tierras lo son también de cazar en ellas libremente en cualquier tiempo del año, sin traba ni sujeción á regla alguna”; art. 2 “podrán cazar en las tierras de particulares los que no sean sus dueños, con licencias de estos por escrito”; art. 7 “la caza que cayere del aire en tierra de propiedad ó entrase en ella después de herida, pertenece al dueño ó arrendatario de la tierra y no al cazador...”; art. 8 “los que con objeto de cazar violasen y saltasen los cercados de tierra de propiedad particular, pagarán, además de los daños que causaren, incluso el valor de la caza que matasen ó cogiesen, que debe ser para el dueño, ó arrendatario en su caso...”; art. 4 “Se podrá cazar sin licencia de los dueños, pero con sujeción á las indicadas restricciones de ordenanza en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas ó que estén de rastrojo”; art.12: “Los ayuntamientos podrán arrendar, con aprobación del Subdelegado de la provincia; la caza en las tierras de propios de los pueblos; y los arrendatarios podrán dar licencia á los demás para que cazen: pero unos y otros lo harán con sujeción á las restricciones que se expresan en este título”; art.14: “En los montes y baldíos que no pertenezcan á propios podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujeción á las reglas y restricciones establecidas en este título. Las justicias podrán dar licencia para lo mismo á los forasteros”; art.15: “Se permite cazar con sujeción á las restricciones contenidas en este decreto, en los montes, baldíos y tierras de propios que no estén arrendadas, á los que obtengan licencia del subdelegado de la provincia”; Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág. 39 y 40.

³⁹ Vid. Art. 8 “El derecho de cazar corresponde á todo el que se halle provisto de las correspondientes licencias de uso de escopeta y de caza”; Art 28 “Únicamente podrá cazar el que haya obtenido del Gobernador civil de la provincia licencia de uso de escopeta y licencia de caza. Estas licencias solo servirán para un año desde su fecha, y se concederán con arreglo á las leyes”. Art. 9 párrafo segundo “En los terrenos del Estado ó de los pueblos que no se hallen vedados por quien corresponda será lícito cazar, según determina el artículo 8º”. Art. 9 párrafo tercero “En los de propiedad particular solo podrá cazar el dueño y los que este autorice por escrito”. Art. 15 “Considerándose cerradas y acotadas todas las dehesas, heredades y demás tierras de cualquiera clase pertenecientes a dominio particular, nadie puede cazar en las que no estén materialmente amojonadas, cerradas o acotadas sin permiso escrito de su dueño mientras no estén levantadas las cosechas; en los terrenos cercados y acotados materialmente o en los amojonados nadie puede cazar sin permiso del dueño”; Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.41 y 42.

⁴⁰ Cfr. ROYO VILLANOVA, A. “Principios de Derecho Administrativo, tomo II”. Edit. Imprenta Castellana, Valladolid 1901. Pág.25.

A finales del siglo XIX se recupera la idea de libertad combinada con la de propiedad, el Código Civil en su artículo 610 considera *res nullius* a los animales objeto de caza que carecen de dueño, cuya propiedad se adquiere como en el Derecho romano, mediante la ocupación.⁴¹

Los primeros textos legales en materia de fauna respondían a intereses sectoriales y no a la idea de protección de la naturaleza. Así destaca la Ley de 19 de septiembre de 1896 para la Protección de Pájaros Insectívoros, esta ley pretendía la protección de la agricultura frente a las posibles plagas.⁴²

La Ley de Caza de 16 de mayo de 1902 desarrollada por el Reglamento de 3 de julio de 1903, mantuvo dos premisas establecidas en la Ley de 10 de enero de 1879: la primera, recogida en el artículo 8 de esta última Ley, por la que se reconoce el derecho de caza a toda persona que tuviese licencia; y la segunda, la que se establecía en el artículo 15 de la ley de 1879, donde el ejercicio de la caza en terrenos de propiedad privada no estaba prohibida, a menos que las cosechas estuviesen sin levantar o fuesen lugares cerrados, vedados o acotados.⁴³

Destaca también esta ley de 1902 por conceder al propietario el derecho de vedar legalmente sus fincas y así asumir la responsabilidad por los daños causados en los predios colindantes por las piezas de caza que se hubiesen criado en su propiedad.⁴⁴ Por otra parte, en los terrenos acotados o cercados solo podían cazar los dueños, arrendatarios o las personas autorizadas por el dueño.⁴⁵

⁴¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza” Op. Cit. Pág.43.

⁴² Vid. CABALLERO KLINK, J. “Delitos relativos a la protección de la fauna y la flora”. Edit. Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, T.VIII, 1998, Boletín núm.1866, pág.5.

⁴³ Vid. Art. 9 párrafo primero del Reglamento de 3 de julio de 1903 “*Se entenderá por vedado de caza, para los efectos de la Ley y del presente Reglamento toda extensión de terreno bajo una linde y propiedad de un dueño, y en el cual la caza constituya la principal explotación para el dueño o para el arrendatario de la finca, siendo secundario cualquier otro aprovechamiento agrícola*”; STS de 14 de mayo de 1932.

⁴⁴ Vid. Art. 9 in fine “*Todo propietario podrá vedar legalmente sus fincas; pero será responsable directamente con sus bienes, con arreglo al Código civil, de los daños que la caza que se críe en su propiedad cause en los predios de los propietarios colindantes,*”.

⁴⁵ Vid. Art. 7 párrafo primero del Reglamento de 3 de julio de 1903 “*Se entenderá por terreno cercado o cerrado para los efectos de la caza, toda extensión de terreno que esté materialmente cerrada por seto vivo, tapia o espino artificial, y que no tenga más entrada que las puertas que el dueño haya puesto en la*

Esta Ley tuvo una prolongada vigencia seguida de múltiples disposiciones y la propuesta de dos anteproyectos que produjeron cierta inseguridad jurídica hasta que el 4 de abril de 1970, se aprobó la actual Ley de Caza, la cual fue desarrollada por el Decreto de 25 de marzo de 1971.⁴⁶

3. REGULACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE CAZA

3.1. Internacional

Durante los siglos XVIII y XIX, se firmaron varios tratados bilaterales con el propósito principal de regular la explotación de ciertas especies a través de la cooperación intergubernamental para la prevención y el castigo de delitos relacionados con la foresta, la caza y la pesca.⁴⁷ En el siglo XX, con clara perspectiva utilitarista, en los primeros textos internacionales se comienza a hablar de la conservación de algunas especies animales y la regulación de aspectos relacionados con ellos, como es el caso de la caza.⁴⁸

Como antecedente a la protección internacional de especies, cabe mencionar el Convenio de Londres de 19 de mayo de 1900 para la Preservación de Animales Silvestres, aves y peces en África que son útiles e inofensivos para el hombre.⁴⁹ El

finca"; art. 7 párrafo segundo del Reglamento de 3 de julio de 1903 "*Se entenderá por terreno acotado o amojonado para los efectos de la Ley del presente Reglamento, todo aquel que bajo una linde y propiedad de un dueño tenga colocados visiblemente hitos, cotos o mojones, para determinar sus linderos, y esté dedicado a cualquiera explotación agrícola o industrial, siendo secundaria la de la caza*"; art. 10 "*Todo propietario puede conceder licencia a un tercero que utilice el derecho que le concede el artículo anterior, estableciendo las condiciones que tenga por conveniente, pero sin contrariar las de la presente Ley.*"

⁴⁶ Cfr. ABELLA POBLET, M. "Manual del Derecho de Caza". Edit. Abella, Madrid 1973, pág. 14J.C. LAGUNA DE PAZ, J.C. "Libertad y propiedad en el Derecho de Caza" Op. Cit. Pág.43 y ss.

⁴⁷ Cfr. MAFFEI, M.C. artículo "Evolving Trends in the Internacional Protection os species" German Yearbook of Internacional Law. Edit. Duncker & Humblot, Berlin, Germany ,1993. Pág.133.

⁴⁸ Cfr. HAVA GARCÍA, E. "Protección jurídica de la fauna y la flora en España" Edit. Trotta Madrid 2000. Pág.62.

⁴⁹ El Convenio de Paris de 1900 de 19 de mayo fue sustituido en 1933 por el Convenio para la conservación de la flora y la fauna natural en África, que a su vez fue desplazado en 1968 por un nuevo Convenio tras alcanzar la independencia las colonias africanas.

objeto de dicho Convenio era la preservación de la vida salvaje y las colonias africanas de los Estados europeos.⁵⁰

Este Convenio fue realizado de forma multilateral y firmado por potencias europeas con territorios coloniales en África, fue firmado por todas las Colonias con la excepción del Congo. Contenía la protección de especies de fauna, entre sus medidas se establecía la prohibición de matar determinados animales, otras medidas eran tendentes a reducir el número de animales de las especies que se consideraban peligrosas para el hombre y sus actividades, quedando constancia que lo que se buscaba era adaptar la naturaleza a la necesidades humanas más que buscar la propia protección preservación de la vida salvaje.⁵¹

Un segundo tratado, que establecía actuaciones internacionales dirigidas a la protección de los recursos naturales, de nuevo y de acuerdo con LOZANO CUTANDA, con un claro enfoque utilitarista es la Convención para la protección de pájaros útiles para la agricultura, firmado en Bruselas el 19 de marzo de 1902, que trataba de proteger a las aves consideradas beneficiosas para los cultivos prohibiendo su muerte y la destrucción de sus nidos, pero permitía a las Partes exterminar a aquellas que fueran nocivas para la caza, la pesca y la agricultura local; es decir, para las actividades humanas.⁵²

El anexo 2 de la citada Convención, recogía las especies que se estimaban nocivas, muchas de las cuales, como era el caso de las águilas y otros pájaros depredadores, están hoy al borde de la extinción. De nuevo establecía medidas enfocadas a proteger las actividades humanas y no en busca de la protección de la vida salvaje.⁵³

Este Convenio fue sustituido por el Convenio Internacional para la Protección de las Aves, aprobado en la Conferencia celebrada en París el 17 y 18 de octubre de 1950.

⁵⁰ Cfr. LOZANO CUTANDA, B. “Derecho Ambiental Administrativo”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009. Pág.43.

⁵¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág.63.

⁵² Cfr. LOZANO CUTANDA, B. “Derecho Ambiental Administrativo”. Op. Cit. Pág.43.

⁵³ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág.63.

El objeto de este Convenio era la protección de todos los pájaros, por el peligro de exterminación que amenazaba a ciertas especies y la disminución numérica de otras especies, especialmente las migratorias.⁵⁴

En este Convenio se prohibía, en su artículo 5, los métodos susceptibles de causar la destrucción o la captura en masa de pájaros o de producirles sufrimientos inútiles, entre estos métodos se encontraban: los lazos, liga, trampas, redes, cebos envenenados, luces artificiales, fusiles de caza de repetición o automáticos susceptibles de contener más de dos cartuchos, en general las armas de fuego que no fuesen susceptibles de ser apoyadas en el hombro o la utilización de automóviles con el fin de tirar contra los pájaros, entre otros métodos. También se regulaba la caza con armas de fuego durante todo el año, suspendiendo la misma durante el período de reproducción.

A su vez este Convenio establecía, en su artículo 6, ciertas excepciones a las prohibiciones ya mencionadas, mediante autorizaciones individuales, cuando ciertas especies afectasen a producciones agrícolas, bosques, a la caza, pesca o provocasen la disminución o extinción de especies cuya conservación fuese deseable. Ninguna de estas medidas podía provocar según establecía el Convenio, la destrucción total de las especies indígenas o migratorias en un país determinado.

Las Autoridades competentes podían establecer otras excepciones a dicho Convenio, como así lo recogía su artículo 7, en interés de la ciencia, de la educación, de la repoblación, de la reproducción, de los pájaros de caza y de la cetrería, siempre y cuando se tomasen las precauciones necesarias para evitar abusos.

Promovido por las Naciones Unidas y abandonando el enfoque utilitarista, surge un instrumento internacional con gran eficacia, es el caso del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres (CITES), firmado en Washington el 3 de mayo de 1973.⁵⁵

⁵⁴ Aprobado y ratificado por España, BOE del 15 de septiembre de 1955,” por el que se publica el Convenio de París, de 9 de enero de 1954, relativo a la protección de pájaros útiles a la agricultura (Convenio de París)”, nº.256, pag.5.623; Cfr.”El nuevo convenio internacional para la protección de las aves”. Edit. Revista Ibérica de Ornitología, Ardeola, págs. 241 y 242, consultado en <<http://www.ardeola.org/files/608.pdf>>

Este Convenio crea un sistema de cooperación mundial para regular el tráfico de determinadas especies y sus productos, estableciendo rígidos controles a la exportación, importación y tránsito de los animales más amenazados y pretende regular su caza o aprehensión con fines comerciales.⁵⁶

En relación con los trofeos de caza debe tenerse en cuenta que el CITES regula la importación, exportación y reexportación de animales muertos, así como sus partes y derivados, mediante un sistema de permisos y certificados, la expedición de estos documentos está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y es obligatoria su presentación para autorizar tanto la entrada como la salida de un país de los trofeos de caza. Existen dos tipos de permiso de CITES, exportación e importación, ambos con el objeto de “Trofeo de Caza” y teniendo los mismos, la consideración de efectos personales por lo que los trofeos no pueden utilizarse con fines lucrativos.⁵⁷

El 19 de septiembre de 1979 se firma el Convenio de BERNA, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa.⁵⁸ El objeto del mismo viene recogido en el artículo 1 del Instrumento de ratificación de dicho Convenio, de 13 de mayo de 1986, cuyo fin es garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre y de sus hábitats naturales. Para ello establecía prohibiciones o limitaciones a determinadas actividades relacionadas con las especies amenazadas en el interior de los Estados miembros, entre estas prohibiciones se encuentra la posesión, captura o muerte intencionada de la especie amenaza. A su vez se prohibía la posesión y comercio interior de dichos animales, vivos o muertos, incluidos los disecados y de cualquier parte o producto. Asimismo, se prohibía la utilización de medios no selectivos, como el lazo, explosivos, gases, redes, dispositivo para iluminar los blancos o de mira con

⁵⁵ Vid. España aprobó y ratificó el Convenio de Washington de 1975, BOE 181/1986, de 30 de julio DE 1986, por el que se da el Instrumento de ratificación de 16 de mayo de 1986, del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, Enmendada en Bonn, el 22 de junio de 1979 (CITES).

⁵⁶ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág.79.

⁵⁷ Vid. HERNÁNDEZ TABERNERO, I. “¿Cómo importar un trofeo?” <<http://www.club-caza.com/articulos/205tabernero.asp>>

⁵⁸ Vid. Aprobado y ratificado por España. BOE 235/1986, de 1 de octubre de 1986, por el que se da el Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y Medio Natural en Europa, hecho en Berna (Convenio de Berna). (Ref. Boletín: 86/25961).

convertidor de imagen para tiro nocturno, veneno, automóviles, anzuelos, entre otros, de captura y muerte de animales protegidos.⁵⁹

Se prevén ciertas excepciones a dichas prohibiciones en relación a las especies protegidas contenidas en el Anejo IV del Convenio, siempre que no afecten a la supervivencia de la población interesada y no existiese otra solución satisfactoria para prevenir los daños en cultivos, ganado, bosques, pesquerías, aguas y otras formas de propiedad, o bien sea en interés de la flora y la fauna.⁶⁰

3.2. Comunitaria

Dentro del ámbito del Derecho de la Comunidad Europea, la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, recogió la prohibición de los medios o métodos de captura o muerte masiva o no selectiva que pudieran causar la desaparición total de una especie, en particular los que enumeraba en el Anexo IV. Esta Directiva fue sustituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Otras dos normas comunitarias destacables en materia de caza son la Directiva Hábitats 92/43/CEE, de 21 mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (artículo 15 y Anexo VI), y en segundo lugar, el Reglamento CEE número 3254/1991 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, que prohíbe la introducción de pieles y productos manufacturados de determinadas especies salvajes.⁶¹

- La Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Modificada por la Directiva 91/244/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de todas las especies de aves silvestres que habiten en territorio

⁵⁹ Vid. Art. 6 a); Art. 6 e); Art. 8 y Anejo IV del Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y Medio Natural en Europa.

⁶⁰ Vid. Art.9 del Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y Medio Natural en Europa.

⁶¹ Vid. SAP de Tarragona 1523/2012, de 11 de octubre de 2012, fundamento de Derecho segundo.

comunitario. Esta Directiva exige, en su artículo 7.4, que la actividad cinegética sobre las aves se realice de tal forma que se respete el principio de utilización razonable, a su vez requiere que a nivel nacional se establezca una regulación equilibrada que permita mantener los niveles óptimos de las poblaciones de las diferentes especies, tanto desde un punto de vista ecológico, como científico y cultural.⁶²

Las especies enumeradas en el Anexo II podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional, por lo que los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución.⁶³

Esta Directiva en su artículo 7.4, prohíbe la caza en época de reproducción, anidación o crianza, y respecto de las especies migratorias, durante su período de reproducción y de regreso hacia sus lugares de nidificación. Cabe destacar que esta Directiva establece la obligación a los Estados miembros de transmitir a la Comisión todas las informaciones oportunas relativas a la aplicación práctica de su legislación de caza.

En su artículo 8.1 se prohíben los métodos de caza de carácter masivo o no selectivo, o que puedan entrañar la desaparición local de una especie y, en particular, los contenidos en el anexo IV.a) de la Directiva. Por último, esta Directiva encontró dificultades de aplicación en Europa debido a la falta de medidas adecuadas para su protección y al deterioro de los hábitats de las aves causado por el turismo y la agricultura. A su vez, a nivel nacional o local se hizo una interpretación muy laxa de las estrictas excepciones que se recogían en la “Directiva aves”.⁶⁴

⁶² Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental” Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2004. Pág.290.

⁶³ Vid. Art. 7.1 de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril.

⁶⁴ Cfr. KRÄMER, L. Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea. Edit. Marcial Pons, Madrid 1999. Pág.45 y 46.

Este contexto llevó a que esta Directiva fuese sustituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.⁶⁵

- Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Cuyo objetivo es la protección, la administración, la regulación de la explotación de todas las especies de aves que viven en estado salvaje en el territorio europeo, así como la protección y la regulación de sus huevos, nidos y hábitats.⁶⁶

Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de las especies de aves salvajes en los niveles establecidos por exigencias ecológicas, científicas y culturales, teniendo cuenta además las posibles exigencias económicas y recreativas. Las especies mencionadas en el anexo I serán objeto de medidas de conservación especial en cuanto a su hábitat, para así asegurar su supervivencia y su reproducción, serán los propios Estados los que clasificarán las zonas de protección especial más adecuadas para la conservación de estas especies, teniendo en cuenta si están amenazadas, su vulnerabilidad por la modificación de sus hábitats, las especies raras y las que requieran una atención especial por su hábitat.⁶⁷

Serán también los propios Estados miembros, quienes tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección de las especies de aves recogidas en el artículo 1, incluyendo entre otras medidas, la prohibición de matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado, la prohibición de perturbarlas de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza; así como la prohibición de retener aves de especies cuya caza y captura no

⁶⁵ Vid. Art. 18 de la Directiva 2009/147/CE “*Queda derogada la Directiva 79/409/CEE, modificada por los actos indicados en la parte A del anexo VI, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las directivas que figuran en la parte B del anexo VI*”.

⁶⁶ Vid. Art.1 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁶⁷ Vid. Art. 2 y 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

estén permitidas. A su vez la Directiva prohíbe la venta, transporte para la venta y la retención para la misma, de todas las especies de aves, pero a su vez establece una excepción a dichas prohibiciones, siempre y cuando sean especies contempladas en el apartado a) del anexo III y que la muerte o la captura se hubiese realizado de una forma lícita.⁶⁸

En relación a la actividad cinegética esta Directiva establece que según el nivel de población, la distribución geográfica y el índice de reproductividad en el conjunto de la Comunidad Europea, de las especies del anexo II, podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. Los Estados miembros velarán por que la práctica de la caza, incluyendo la cetrería, respeten los principios de utilización razonable y regulación equilibrada, desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas, a su vez, esta práctica deberá ser compatible con el mantenimiento de los niveles de población exigidos para las especies, y en particular las migratorias. De igual forma, la Directiva establece que las especies a las que se aplica la legislación de caza no serán cazadas durante la época de anidación ni durante los distintos estados de reproducción y de crianza.⁶⁹

Serán los Estados miembros quienes prohibirán la instalación o métodos de captura o muerte masiva o no selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie, como así lo recoge el artículo 8 de la Directiva 2009/147/CE. En particular quedaran prohibidos, los lazos, fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos de visor nocturno, explosivos, redes, trampas cebo, venenos, armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos, así como, cualquier persecución con medios de transporte como aviones y vehículos automóviles.⁷⁰

⁶⁸ Vid. Art. 5 y 6 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁶⁹ Vid. Art. 7 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁷⁰ Vid. Letra a) y b) del anexo IV de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Los Estados miembros podrán introducir excepciones a la prohibición de matar y distribuir determinadas especies de aves, siempre que no hubiere otra solución satisfactoria, por motivos de la salud o seguridad pública, seguridad aérea, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas, para proteger la flora y la fauna; así como, para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación, de reintroducción, o permitir, bajo condiciones estrictamente controladas y de modo selectivo, la captura, la retención de aves en pequeñas cantidades.⁷¹

Las excepciones anteriores deberán contemplar, las especies que serán objeto de las excepciones; los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte autorizados; las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo y de lugar en las que podrán hacerse dichas excepciones; la autoridad facultada para declarar que se reúnen las condiciones requeridas y para decidir qué medios, instalaciones o métodos podrán aplicarse, dentro de qué límites y por parte de qué personas; así como, los controles que se ejercerán.⁷²

Cabe destacar que esta Directiva hace valedores a los Estados miembros para que eviten la eventual introducción de especies de aves que no habiten en estado salvaje en el territorio europeo, que pueda perjudicar a la flora y fauna local.⁷³

Por último cabe decir, que los Estados miembros transmitirán a la Comisión todas las informaciones oportunas relativas a la aplicación práctica de su legislación sobre la caza.⁷⁴

⁷¹ Vid. Art.9.1 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁷² Vid. Art. 9.2 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁷³ Vid. Art. 11 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁷⁴ Vid. Art. 7 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

- La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y la protección de la fauna y flora silvestres.

Complementa a la Directiva anterior, que solo se limitaba a regular la conservación de las aves, a su vez fue modificada por la Directiva 97/62/CE que la adapta al progreso científico y técnico.

El artículo 2 de dicha Directiva, recoge como objeto, contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio europeo. Para ello, la Directiva, mediante el artículo 3.1, crea una red ecológica europea de zonas especiales de conservación (Natura 2000), compuesta de hábitats naturales y de especies, para garantizar, restablecer y mantener dichos hábitats en un estado de conservación favorable. Asimismo, la Directiva establece que los Estados miembros tomarán medidas de protección de determinadas especies animales de interés comunitario, también deben adoptar un sistema de protección riguroso respecto de las especies que figuran en la letra a) del anexo IV, en relación con las cuales se prohíbe cualquier forma de captura, perturbación, destrucción, transporte y comercio.⁷⁵

El artículo 14.1 de la mencionada Directiva, establece que en relación con las especies recogidas en el anexo V, su explotación ha de ser compatible con su mantenimiento en un estado de conservación favorable. A estos efectos, la Directiva previó una serie de medidas de guarda, como el establecimiento de períodos y normas cinegéticas de captura que respeten la conservación de las poblaciones; régimen de comercialización; así como, un control sobre la cría en cautividad, entre otras medidas.⁷⁶

Al mismo tiempo, en el artículo 15 de la Directiva, se prohíben los medios de captura y sacrificio contenidos en la letra a) del anexo VI y, especialmente, los no selectivos que puedan provocar la desaparición a nivel local o perjudicar gravemente a

⁷⁵ Vid Art.12 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y la protección de la fauna y flora silvestres.

⁷⁶ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Edit. Tirant Lo Blanch Valencia 2009. Pág. 307.

las poblaciones de dichas especies, así como cualquier forma de captura y de sacrificio que utilice los medios de transporte recogidos en la letra b) del anexo VI.

- Reglamento CEE número 3254/1991 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, que prohíbe la introducción de pieles y productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel.

Por el que se prohíbe, dentro de la Comunidad Europea, la utilización de medios masivos o no selectivos para la captura o sacrificio de determinadas especies y que sean contrarios a las normas internacionales de captura no cruel. En el artículo 2 del Reglamento se prohíbe expresamente el uso en la Comunidad de los cepos. A su vez prohíbe la introducción de pieles y productos manufacturados de determinadas especies de animales salvajes originarias de países que para su captura utilicen cepos o cuando los métodos utilizados para la captura no cumplan con las normas internacionales de caza no cruel.

3.3. Estatal

La caza ha evolucionado, desde sus orígenes donde cumplía una función utilitaria hasta nuestros días, donde se ha convertido en una actividad lúdica, deportiva y económica. El régimen jurídico de la caza, se ha basado en la confrontación de dos principios el de libertad y el de propiedad, dichos principios se han visto superados en la actualidad, donde adquiere una gran relevancia la protección de la fauna silvestre, Por lo que, la práctica de la caza debe hacerse compatible con el fomento y conservación de las especies y de su hábitat.⁷⁷

La actividad cinegética a nivel estatal viene regulada en la Ley de 1970, de 4 de abril, de Caza, el Decreto 506/1971, 25 de marzo que desarrolla esta Ley, actualmente se encuentra derogado.⁷⁸ No obstante, el citado reglamento mantendrá su vigencia en

⁷⁷ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.305.

⁷⁸ Derogada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a

aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, ya que las competencias en materia de caza, según establece el artículo 148.1. 11º de la Constitución española, pueden ser asumidas por las CCAA, las cuales, en su gran mayoría, han hecho uso de esta posibilidad.

La Ley de caza estatal busca garantizar la protección de la riqueza cinegética nacional, asegurar su conservación y su fomento con el respeto debido a los derechos inherentes a la propiedad de la tierra, a la seguridad de las personas y a la adecuada protección de sus bienes y cultivos.⁷⁹

Para llevar a cabo esta actividad de una forma legal se requiere que el cazador sea mayor de 14 años, en el caso de ser menor de edad no emancipado necesitará autorización escrita de la persona que legalmente le represente, y a su vez se deberá contar con las condiciones de capacidad y aptitud, la tenencia de los permisos y licencias exigibles por la legislación, así como la delimitación y reconocimiento de los espacios donde es posible desarrollar la acción de cazar.⁸⁰

El legislador establece una serie de limitaciones y prohibiciones dictadas en beneficio de la caza, como son cazar en época de veda, cazar en días de nieve, de fortuna, servirse de vehículos como medios de ocultación, cazar sin la documentación preceptiva o no llevarla consigo, cazar especies protegidas, entre otras. El incumplimiento de estas limitaciones y prohibiciones podrán ser constitutivas de delito, falta o infracción administrativa cuando así estuviese calificada en la misma.⁸¹

De acuerdo con LAFUENTE BENACHES, el cazador deberá adquirir el compromiso de que su acción cinegética no afectara negativamente a la conservación y

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 255/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

⁷⁹ Vid. Preámbulo de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

⁸⁰ Vid. Art. 3.1 “El derecho a cazar corresponde a toda persona mayor de catorce años que esté en posesión de la licencia de caza y cumpla los demás requisitos establecidos en la presente Ley”; art. 3.2 “Para obtener la licencia de caza el menor de edad no emancipado necesitará autorización escrita de la persona que legalmente le represente”; art. 34.6 “El Ministerio de Agricultura podrá establecer las pruebas de aptitud que considere necesarias para la concesión de la licencia de caza” y el Título II. De los terrenos de la caza y su ejercicio, de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

⁸¹ Vid. Art. 31 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza y Título VIII. De las infracciones y de las sanciones, artículos 41 a 51, de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

a la protección de las especies y sus hábitats, ni supondrá un peligro para la seguridad de las personas o para una serie de bienes merecedores de protección jurídica. El legislador busca, a través del Título IV de dicha Ley de Caza, la protección, conservación y aprovechamiento de la caza. Para ello, el legislador prohíbe el ejercicio de la caza cuando concurren una serie de circunstancias fácticas que hagan desaconsejable la caza y a su vez, limita el uso al cazador de medios desproporcionados para lograr sus objetivos, así como, los medios nocivos que perjudiquen a las especies o a su entorno. La caza al no ser una actuación aislada puede tener efectos colaterales sobre terceros, sobre otras especies de fauna, en la vegetación, en el paisaje, o en la agricultura y la ganadería. De acuerdo con el artículo 15.6 de la LC de 1/1970 de caza, en los terrenos acotados la caza deberá estar protegida y fomentada, a su vez su aprovechamiento debe realizarse de forma ordenada. En general, se persigue una actitud de compromiso y fomento para la protección de la fauna por parte de los cazadores, titulares de terrenos cinegéticos, así como de la Administración Pública.⁸²

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recogió ciertas obligaciones adoptadas a nivel europeo sobre el ejercicio de la actividad cinegética. El Capítulo cuarto del Título III regula la protección de las especies en relación con la caza y con la pesca que, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, deben garantizarse, pero limitando su aplicación a los espacios, fechas, métodos de captura y especies que determinen las CCAA, que en ningún caso incluirán las especies del Listado de Especies de Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos por la Unión Europea.⁸³

Con esta Ley se crea el Inventario Español de Caza y Pesca que mantendrá la información de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza esté autorizada, con especial atención a las especies migradoras. Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los órganos competentes de las CCAA. Con este objeto, los titulares de los derechos cinegéticos y los cazadores, vendrán obligados a suministrar la correspondiente información a las CCAA.⁸⁴

⁸² Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.70.

⁸³ Vid. Preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

⁸⁴ Vid. Art.64 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Esta Ley establece determinadas prohibiciones respecto de determinadas prácticas cinegéticas, las cuales habían venido siendo autorizadas por algunas CCAA, en clara contradicción con lo que establecen las Directivas europeas sobre aves y hábitats.⁸⁵

Por otra parte, la referida Ley también establece la prohibición de la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos.

En el momento de la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el extenso contenido del artículo 62, en relación a las prohibiciones que en el mismo se recogen, fue objeto de polémica.⁸⁶

⁸⁵ La caza de palomas torcaes durante la primavera —contrapasa: es el desplazamiento de las aves hacia los países del norte, un viaje que se produce en la época comprendida entre los meses de febrero a mayo. Durante este tiempo, los cazadores, apostados en sus puestos fijos, tratan de abatir a estas aves migratorias.— en el País Vasco, o la caza de zorzales con liga —parany: es una agrupación de árboles o uno solo, donde se colocan las trampas. Estos árboles son podados en forma de candelabro, en donde tienen cabida las perchas, que son el lugar donde el zorzal debe posarse para caer en la trampa, después de impregnarse de una materia viscosa llamada visc.— en la Comunidad Valenciana.

⁸⁶ Dispone el art. 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “Especies objeto de caza y pesca.1. La caza y la pesca en aguas continentales solo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca continental se regulará de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades autónomas determinarán los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie.3. Con carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales: a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie. En particular quedan incluidas en el párrafo anterior la tenencia, utilización y comercialización de los procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte prohibidos por la Unión Europea, que se enumeran, respectivamente, en las letras a y b del anexo VII. Siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa esta prohibición podrá no ser de aplicación si se cumplen estos dos requisitos: 1. que concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 58.1, y que se trate de especies de animales de interés comunitario no consideradas de protección estricta en la normativa de la Unión Europea. b) Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias. c) Solo podrán ser objeto de comercialización, vivas o muertas, las especies que reglamentariamente se determinen, de acuerdo con los Convenios Internacionales y la normativa de la Unión Europea. d) Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen. En relación con las especies objeto de caza y pesca, cuando existan razones de orden biológico o sanitario que aconsejen el establecimiento de moratorias

La nueva Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su Disposición adicional cuarta recoge algunos aspectos relacionados con la caza que requieren, respetando la competencia exclusiva de las CCAA en su legislación, garantizar la unidad de mercado, cierta armonización y organización a escala nacional.⁸⁷

Así, se prevé la elaboración y adopción:

- Estrategia Nacional de Gestión Cinegética: elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las CCAA, y que constituirá el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético.⁸⁸

temporales o prohibiciones especiales, la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá elaborar informes que puedan ser utilizados por las Comunidades autónomas para la determinación de dichas moratorias o prohibiciones. e) En relación con la actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la introducción de especies alóctonas. En el caso de introducciones accidentales o ilegales, no se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cinegético o piscícola, promoviendo las medidas apropiadas de control de especies para su erradicación. f) Los cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autorización administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la totalidad de su perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Las Administraciones públicas competentes establecerán la superficie mínima que deben tener las unidades de gestión para permitir la instalación de estos cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna silvestre no cinegética y evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comunidades autónomas podrán excluir esta obligación por causas de sanidad animal. g) Los métodos de captura de predadores que sean autorizados por las Comunidades autónomas deberán haber sido homologados en base a los criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos solo podrá ser autorizada, mediante una acreditación individual otorgada por la Comunidad autónoma. No podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. h) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca afecte negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las Administraciones Públicas competentes podrán suspender total o parcialmente la vigencia de los derechos de caza. i) Las Administraciones Públicas competentes velarán por que las sueltas y repoblaciones con especies cinegéticas no supongan una amenaza para la conservación de estas u otras especies en términos genéticos o poblacionales. j) Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos”.

⁸⁷ Vid. Preámbulo de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

⁸⁸ En este sentido, la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y las comunidades autónomas podrán referirse a ella en su legislación específica, así lo recoge la Disposición adicional cuarta al final de su párrafo primero.

- Registro Español de Infractores de Caza y Pesca: las CCAA remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus correspondientes registros de infractores de caza y pesca, incluidos los relativos a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular los derivados de infracciones penales y del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.⁸⁹

Al igual que en la redacción anterior de La Ley de Montes, se incluye la caza dentro de la definición de aprovechamiento forestal, junto a los maderables, leñosos, la biomasa forestal, los de corcho, los de resina, pastos, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes.⁹⁰

3.4. Autonómica.

La Constitución en su Art. 148.1.11ª, establece que las CCAA podrán asumir competencias exclusivas en materias de pesca, marisqueo, acuicultura y en el tema que aquí nos ocupa, la caza.

La caza al estar regulada por cada CA con arreglo a sus propios criterios, sin llegar a darse unos criterios o principios unificados en todas las comunidades, provoca una descoordinación entre ellas. Existe una gran problemática debido a la dispersión y fragmentación normativa en esta materia. Las CCAA tienen reconocidas competencias plenas en materia de caza en sus respectivos Estatutos de Autonomía, por lo que las diferentes leyes autonómicas sobre caza son el resultado del ejercicio de su autonomía.⁹¹

⁸⁹ Vid. Disposición adicional cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

⁹⁰ Vid. Art. Único apartado siete de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

⁹¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza” Op. Cit. Pág.18.

En materia de caza, los preámbulos de las leyes de caza de algunas CCAA hacen un recorrido de la evolución y concepción de esta materia a lo largo del tiempo, como es el caso de Canarias y Castilla y León.

Así la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, en su texto legal alude que el derecho a cazar constituyó una facultad natural y consustancial al hombre desde tiempo inmemorial, convirtiéndose actualmente en una actividad tradicional con gran incidencia sobre las poblaciones de las especies de la fauna silvestre y, por tanto, de gran transcendencia para su conservación. Por último, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León, hace referencia a la caza como una actividad de supervivencia para el abastecimiento de alimentos, donde con el paso del tiempo se ha restado importancia a dicha finalidad, llegando en la actualidad a considerarse la caza como una actividad de ocio que debe desarrollarse de una manera racional y ordenada.

Esta visión de la caza como actividad de supervivencia o incluso de abastecimiento, fue perdiendo esa dimensión con el tiempo, pasando a ser una actividad de ocio y manifestación deportiva, como ha quedado indicado en el preámbulo de la ley de caza de Castilla y León. Estas dos perspectivas que consideran la actividad cinegética como ocio y deporte son recogidas por otras leyes autonómicas. Así, la Ley de Caza riojana, partiendo de la presión cinegética derivada de la concepción de la caza como una actividad de ocio, hace que se pretenda fomentar la práctica deportiva favoreciendo a sociedades de cazadores con gran número de socios para promover una caza con espíritu deportivo y solidario, bajo el principio de conservación y aprovechamiento racional de las especies cinegéticas, contribuyendo de esta forma a la conservación de la naturaleza.⁹²

A su vez, los preámbulos de las diferentes leyes de caza autonómicas tienen como objetivo principal que la actividad cinegética se desarrolle de manera racional y ordenada sin dañar el equilibrio natural de la riqueza cinegética, es el caso de Canarias.⁹³

⁹² Vid. Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja. BOE. Boletín Oficial del Estado nº 164, 10 de julio 1998.

⁹³ Vid. Preámbulo de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias “se garantiza la existencia permanente de los recursos cinegéticos y el cuidado y mejora de los hábitats..., armonizándose la

Esta última afirmación produce una transformación en la concepción de la caza como mera actividad de utilidad o disfrute para el hombre, como tradicionalmente ha sido y pasa a ser considerada, de acuerdo con LAFUENTE BENACHES, un “instrumento al servicio de la sostenibilidad de la riqueza cinegética”.⁹⁴

En el caso de la Ley de caza riojana, el principio inspirador de la misma es la conservación y aprovechamiento racional de las especies cinegéticas, contribuyendo de esta forma a la conservación de la naturaleza. A su vez, la Ley 2/1989, de 6 de Junio, de Caza de Asturias en su preámbulo, incluye la caza en la política de conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, abandonando la teoría del *res nullius*, la cual vinculaba las especies a la administración, y adoptando la concepción de considerar a las especies cinegéticas como patrimonio público. Aragón, en su Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza, tiene como objetivo regular el ejercicio de la caza en armonía con la gestión, protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de los recursos cinegéticos y del medio natural, procurando, a su vez, que la legislación ambiental sea más clara, precisa y eficaz, tratando de alcanzar una mayor seguridad jurídica.

La Ley 13/2004, de 17 de diciembre, de caza valenciana, tiene como objetivo regular la caza sobre la misma línea existente en materia de especies o espacios protegidos, marcando a la caza como un recurso natural mas, renovable y vivo, por ello esta Ley tiene un fuerte contenido ecológico, técnico y social, de tal forma que conservar la caza es sinónimo de conservación del medio natural. Murcia, por su parte, en su Ley 7/2003, de 12 noviembre, de caza y pesca fluvial, inserta una política conservacionista en la regulación de la caza, pretendiendo con ello un equilibrio ecológico entre las especies. La Ley 12/2006, de 17 de julio, de caza de Cantabria, se asienta principalmente sobre dos elementos básicos, el más importante es el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos y el segundo consiste en la seguridad de las personas y de los bienes comprometidos para el ejercicio de la caza. Por último, esta concepción mantenida por estas comunidades se ha plasmado en una de las legislaciones de caza más actuales, como es el caso de la Ley 2/2011, de 17 de

supervivencia de las especies cinegéticas frente al inmoderado acoso del hombre y utilizando la caza como instrumento que contribuye a la renovación y mejora de las poblaciones animales y al mantenimiento del equilibrio entre estos”.

⁹⁴ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op.cit. Pág.16.

marzo, de caza del País Vasco, donde en su preámbulo fija como objetivo garantizar la sostenibilidad de los recursos cinegéticos y la protección del resto de la fauna silvestre.

Esta misma línea de buscar la conservación de la naturaleza en la regulación de la materia cinegética, es la que sigue también Andalucía, en su Ley de protección de flora y la fauna silvestre.⁹⁵ Tiene una filosofía medioambiental y de gestión de los recursos, que trata de integrar y unificar en torno a los objetivos de conservación y aprovechamiento de recursos. En este sentido el cazador como gran conocedor del medio natural, se constituye como un elemento significativo en la correcta gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales contribuyendo por ello a la conservación y protección. La caza en Andalucía constituye un campo de actividad de dimensión social, deportiva, cultural, ecológica y económica, es un ejemplo de actividad deportiva desarrollado en un medio natural que permite un uso compatible de los recursos naturales y establece pautas de desarrollo sostenible.

Surge un nuevo enfoque de la actividad cinegética que pretende que la caza sea generador de economía y de empleo rural, como es el caso de la nueva Ley de caza de Castilla la Mancha.⁹⁶ Navarra, en su Ley 17/2005, de 22 de diciembre, de caza, va más allá y delega en los municipios, la posibilidad de incidir en el carácter social del aprovechamiento del recurso cinegético, o bien emplearlo como parte del desarrollo socioeconómico local. Perdiendo la caza, en opinión de LAFUENTE BENACHES, su dimensión individualista de goce y disfrute para el titular de un aprovechamiento cinegético y adquiere de nuevo una dimensión social al permitir, a través de ella, actividades que benefician a terceros.⁹⁷

Esta dimensión social, también es recogida por la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza Extremadura, donde fija en su preámbulo, como principio básico el

⁹⁵ Vid. Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre de Andalucía, de 28 de octubre. BOE. Boletín Oficial del Estado nº 288 de 2 de Diciembre de 2003.

⁹⁶ En este sentido dispone el Preámbulo de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha que: *“La caza como actividad comercial, deportiva, recreativa y lúdica, es practicada en esta región por un gran número de personas, por lo que debe ser regulada de forma conveniente, ordenada, sostenible, teniendo en cuenta su potencial como medio generador de economía y de empleo rural, diversificación de la renta agraria y desestacionalización de esta”*.

⁹⁷ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op.cit. Pág.16 y 17.

reconocimiento de la caza como una actividad social y económica. Por otra parte, la Ley 4/1997, de 25 de Junio, de caza de Galicia, señala que la actividad cinegética trasciende de su condición deportiva y lúdica y gana peso en su función social y ambiental. A su vez, la ley de caza de Castilla la Mancha, señala la caza como una actividad comercial, deportiva, recreativa y lúdica.

Por último, Baleares en su Ley de caza, presenta esta actividad como un aprovechamiento agrario y que constituye una fuente de rentas para los propietarios rurales que hay que potenciar, asegurando el carácter sostenible y la función social de la sociedad constitucionalmente reconocida. La Ley se inspira en la conveniencia de asegurar el mantenimiento de la vertiente económica de la caza y conseguir armonizarla con otros aprovechamientos agrarios del territorio, así también como con el resto de usos del medio rural.⁹⁸

En los casos de Madrid, Cataluña, Ceuta y Melilla, no han desarrollado legislación autonómica en materia de caza, por lo que se rigen por lo establecido en la Ley estatal de Caza de 1970.

Esa función predadora en la que el hombre pasó de ser sujeto pasivo de la caza, como alimento para otras especies predadoras, a sujeto activo de la misma como cazador es el origen de daños sobre la conservación de las especies y en el mantenimiento de sus hábitats, dando lugar así a la protección de especies y la regularización de esta actividad a través de normas estatales y autonómicas, evitando de esta forma la desaparición de especies, algunas al borde de la extinción. La riqueza cinegética y el hábitat en el que se desarrolla, son patrimonio de todos, es por ello que la caza en un recurso que debe ser gestionado por la Administración de forma racional y ordenada.⁹⁹

⁹⁸ Vid. Ley 6/2006 de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial. BOE. Boletín Oficial del Estado nº 122 de 23 de Mayo de 2006.

⁹⁹ En este sentido la Ley 2/1989, de 6 de Junio, de Caza de Asturias. BOE. Boletín Oficial del Estado nº 0157, 13 de julio 1989; téngase en cuenta a su vez la Ley 4/1997, de 25 de Junio, de Caza de Galicia. BOE. Boletín Oficial del Estado nº 0192, 12 de agosto 1997; Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op.Cit. Pág.15 y 16.

4. REGULACIÓN CINEGÉTICA EN OTROS PAISES

4.1. Italia

El influjo de la Revolución Francesa supuso la superación de los privilegios sobre la caza reservados al rey y a la nobleza. A partir de ese momento se entiende que el derecho de caza es parte del poder soberano del Estado, concediendo éste la facultad de cazar a los ciudadanos. Prevalecerá la libertad cinegética, con ciertas limitaciones para favorecer la protección de la fauna silvestre.¹⁰⁰

La jurisprudencia en los años cincuenta, sostuvo que el derecho de caza no era una derivación de la propiedad privada, sino una expresión de libertad individual. El propietario no tiene un derecho exclusivo de caza en sus tierras ni tampoco un derecho a constituir una reserva cinegética.¹⁰¹

La Ley núm. 157, de 11 de febrero de 1992, *per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*, contiene la normativa principal en esta materia, pero no califica la caza como un derecho público subjetivo. De la misma forma las piezas de caza pierden su tradicional configuración de *res nullius*, como así se refleja en el art. 923 del *Codice civile*, al regular la ocupación de las cosas muebles que no son propiedad de nadie.¹⁰²

La Ley núm. 157, de 11 de febrero de 1992, considera que la fauna silvestre deja de ser *res nullius* para convertirse en *res alicuius*, por lo que el derecho del cazador sobre la pieza se considera como ocupación de *res alicuius*. El derecho a cazar se puede ejercitar en todos los terrenos, comprendiendo también la facultad de entrar en propiedad ajena con ánimo de ejercer la actividad cinegética.¹⁰³

¹⁰⁰ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op.Cit. Pág.58.

¹⁰¹ Cfr. DE MARTINO, V. “Commentario al codice civile, libro III (Della proprietà)”. Edit. Pem, 1970, Italia. Pág.394 y 395.

¹⁰² Vid. Art. 923 “tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca”.

¹⁰³ Vid. Art. 842 del Codice civile “ *Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia, o via siano cultura in atto suscettibili di danno*”.

El ejercicio de la caza se configura en función de la fauna silvestre por lo que la Ley de 11 de febrero de 1992, en su art. 1.2, consiente el ejercicio de la caza siempre que no sea contrario a las exigencias de conservación de la fauna silvestre y no cause daños a la agricultura. Cabe destacar que esta Ley ordena la caza de acuerdo con la protección de la fauna silvestre por lo que somete el aprovechamiento cinegético a planificación. Son los poderes públicos los que definen las especies cazables, los tiempos de veda, los medios de caza y delimitan las zonas en las que está prohibido cazar, así como las zonas donde el aprovechamiento cinegético está reservado a particulares y las zonas sometidas a régimen de caza programada.¹⁰⁴

4.2. Francia

El derecho de caza en Francia viene reconocido al propietario desde la Revolución Francesa, momento en el que se abolieron los privilegios del antiguo Régimen, este reconocimiento del derecho de caza no era lo que pretendían los campesinos, sino que buscaban la protección de sus cultivos.¹⁰⁵

De la titularidad dominical que tiene el propietario sobre sus tierras deriva el derecho a cazar, que le permite usar y disfrutar a su conveniencia. Si las tierras pertenecen de manera indivisa a un conjunto de individuos, se les reconoce a todos ellos el derecho a cazar, independientemente de que sus derechos de propiedad sean desiguales. Este derecho de caza ligado a la propiedad se transmite con la venta de la tierra, pero la jurisprudencia admite que el vendedor se reserve este derecho durante un período de tiempo, ya que el derecho a cazar no constituye un derecho real independiente del derecho de propiedad, es un derecho absoluto del propietario sobre el bien fundado en la voluntad de acabar con los abusos derivados de los derechos señoriales del antiguo régimen. Ahora bien, el propietario puede renunciar a su derecho o cederlo a terceros por vía contractual, siempre y cuando sean personas determinadas y por tiempo determinado.

¹⁰⁴ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.59 y 60.

¹⁰⁵ Vid. Art. 4 del Decreto 4-5 de agosto de 1789; Cfr. J.C. LAGUNA DE PAZ “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.50.

La vinculación entre el derecho de propiedad y el derecho de caza se mantiene en el derecho francés, siendo la caza un atributo de la propiedad. El *Code rural* francés, recoge en su título segundo el régimen jurídico de la caza, la versión actual proviene del *Code* reformado de 1989. Dicho título se encuentra dividido en otros dos: el primero recoge la protección de la naturaleza y el segundo la caza. La Ley núm. 95-101, de 2 de febrero de 1995, relativa al reforzamiento de la protección del medio ambiente, es el primer texto que recoge esta materia, dedicando algunos preceptos a la caza, alterando así el *Code rural*.¹⁰⁶

La Oficina nacional de la caza (*Office national de la chasse*), es un establecimiento público nacional de carácter administrativo, que tiene como objetivo primordial contribuir al mantenimiento y mejora de los recursos cinegéticos y del desarrollo de la caza, entre sus funciones administrativas destaca la de policía de caza, la de gestión, investigación y coordinación.¹⁰⁷

Con *el décret* de 14 de marzo de 1986 se otorga a los prefectos, asistidos por el Consejo departamental de la caza y la fauna salvaje, amplias atribuciones en materia de caza que anteriormente no tenían reconocidas ni éstos ni las direcciones regionales de medio ambiente. Estas atribuciones consistían en la fijación de las fechas hábiles de caza, catálogo de animales dañinos, etc.¹⁰⁸

A nivel departamental se crea una *Fédération Départementale de la Chasse* (FDC), calificadas por la jurisprudencia como establecimientos privados que colaboran en el cumplimiento de funciones de servicio público y a las que se les otorga tareas de interés general, destacando, la represión del furtivismo, la protección y reproducción de la caza entre otras, a su vez, se les otorga otras de carácter privado, como es, la defensa de los intereses de los cazadores. La composición del FDC está integrada por cazadores que hayan pagado su cotización estatutaria así como, por los titulares de derechos de caza que voluntariamente se adscriban a la organización, ya sean cazadores o no. A

¹⁰⁶ Cfr. GUILBAUD, J. “La chasse et le droit”. Edit. Litec (preparada por François Colas-Belcour) Paris 1994. Pág.48 y ss.

¹⁰⁷ Vid. Arts. L.221-1 y R. 221-8 a 221-23 del *Code rural*; LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.49.

¹⁰⁸ Vid. Arts. R. 221-27 a R. 221-31 del *Code rural*.

escala nacional los cazadores están representados por *L'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs*, que a su vez está formada por las diferentes FDC.

A nivel municipal destaca que los departamentos se encuentran sujetos a la *Loi Verdeille* de 1964, fue completada por el Decreto de 6 de octubre de 1966. Ley incluida en el *Code rural*, con una estructura de base constituida por una *association communale de chasse agréée* (ACCA). Son asociaciones de Derecho privado formadas por cazadores y propietarios a los que la Ley les atribuye tareas de servicio público, como es la educación cinegética, conservación del equilibrio biológico y la ordenación del ejercicio de la caza. Las funciones otorgadas a la ACCA pueden ser delegadas a una *association intercommunale de chasse agréée*. En los departamentos no sujetos a esta Ley, la organización es menos corporativista y más respetuosa con los derechos de los propietarios. En estos departamentos los cazadores pueden libremente asociarse constituyendo *sociétés civiles de chasse*.¹⁰⁹

La referida *Loi Verdeille* solamente se preocupa de una mejor organización técnica de la caza desconociendo totalmente el valor de la fauna silvestre, afecta a la libertad de asociación y pone en tela de juicio el derecho de propiedad.¹¹⁰

El *Code rural* establece que el arrendamiento del terreno lleva consigo el derecho personal del arrendatario a cazar, como así lo establece el art. 858 del *Code rural*, a fin de proteger la riqueza cinegética el propietario o titular del derecho de aprovechamiento cinegético podrá establecer ciertas restricciones, como la caza de determinadas especies, conservando siempre el propietario, y los terceros por él autorizados salvo pacto en contrario, el derecho de aprovechamiento cinegético.¹¹¹

El Código de Medio Ambiente (CMAF) recoge los principios generales de protección medioambiental francesa. Castiga la caza en terreno de otros particulares sin su consentimiento cuando sea contiguo o rodee una casa habitada, o cuando este situado en el interior de un cercado continuo que impida la comunicación con las propiedades

¹⁰⁹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.49 y 50.

¹¹⁰ Cfr. LACHAUT, J. “La guerre des ACCA”. Edit. Revue de droit rural, núm. 219, 1994. Pág.24.

¹¹¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.51.

vecinas, será castigado con penas de tres meses de prisión y una multa de 3.750 euros. Si se realiza con nocturnidad se impondrá una pena de prisión de dos años.¹¹²

Cuando se realice la acción cinegética en reservas de caza establecidas por el Estado Francés, en temporada prohibida, de noche, con uso de venenos, redes o aparatos o instrumentos de caza prohibidos, así como se proceda a vender, adquirir, transportar o traficar la caza fuera de los períodos autorizados, se castigarán estas conductas con cuatro meses de prisión y multa de 3.750 euros; siendo la pena de dos años de prisión y multa de 30.000 euros cuando concurren agravantes (nocturnidad, terreno ajeno, parque nacional, reserva natural, uso de artes prohibidas e instrumentos no autorizados, entre otros).¹¹³

4.3. Alemania

El derecho de caza es un elemento inseparable de la propiedad privada, como así lo refleja las leyes de caza de este país, a su vez, a este derecho se le suma un aspecto inseparable como es la protección de la fauna silvestre. La caza durante mucho tiempo fue una competencia de los *Länder*. La Ley de caza del *Reich* de 1934 unificó el régimen jurídico de la actividad cinegética, dicha Ley fue completada un año más tarde con el Reglamento de 27 de marzo. Esta unificación se fragmentó tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. La Constitución promulgada el 23 de mayo de 1949 de Alemania Occidental (*Grundgesetz*) consolidó el reparto de competencias entre el *Bund* y los *Länder*, por la que la Federación se atribuye la competencia para dictar la normativa básica en materia cinegética.¹¹⁴

El derecho a cazar al estar vinculado a la propiedad del suelo, no puede transmitirse ni se puede renunciar a él y no constituye un derecho real independiente. La doctrina se encuentra dividida respecto a la naturaleza jurídica del derecho a cazar, la

¹¹² Cfr. L110-1 á L110-2; L422-27; L428-1, Code de l'environnement. Version consolidée au 23 août 2015.

¹¹³ Cfr. L422-27; L424-4; L424-8; L427-8; L428-1 y L428-4, Code de l'environnement. Version consolidée au 23 août 2015.

¹¹⁴ Vid. Arts. 72.2 y 75.3 LF; LORZ, A. "Bundesjagdgesetz (mit Landesrecht, Verordnung über die Jagdzeiten und Bundeswildschutzverordnung, Fischereischeinrecht, Seefischereirecht)", 2. Auflage, C. H. Beck, 1991.

primera línea (MITZSCHEKE, SCHÄFER) configura el derecho de caza como derivado del de propiedad, por lo que las piezas de caza son consideradas frutos de la propiedad; la segunda línea de opinión (WOLFF y REISER) considera el derecho a cazar como un derecho independiente que por su vinculación con la propiedad del fundo puede considerarse un elemento fundamental de este.¹¹⁵

El Derecho alemán distingue ya desde la Ley de Caza del *Reich* de 1934, entre el derecho a cazar, vinculado a la propiedad privada, y el derecho a practicar la caza. Esta ley intenta dar una protección a la fauna silvestre para lo cual condiciona la actividad cinegética a que los terrenos dedicados a la caza tengan una superficie mínima de 75 Ha. Los propietarios de terrenos que sean aptos para cazar y cuya superficie sea inferior a la mínima legalmente exigida pueden integrarse en una corporación jurídico-pública, como es una sociedad de caza y a la que la ley reconoce el ejercicio de la caza y que a su vez agrupa a todos los terrenos de un municipio que no constituyan espacios cinegéticos propios. Por lo que en los espacios cinegéticos colectivos el derecho a practicar la caza corresponde a la sociedad de caza, a diferencia de los espacios cinegéticos propios donde el derecho a practicar la caza corresponde al propietario. El arrendamiento de estos espacios de caza está permitido, se encuentra detalladamente regulado por la ley.¹¹⁶

La ley establece un supuesto de responsabilidad objetiva que afecta a las personas autorizadas para cazar en favor de los colindantes, el propietario o el arrendador. Este supuesto de responsabilidad deriva de los daños que puede producir el ejercicio de la caza así como la propia fauna silvestre en la propiedad y sus frutos.

Se mantiene el concepto romano de *res nullius*, donde la propiedad de las cosas sin dueño se adquieren por ocupación, sin embargo no se produce cuando la apropiación este legalmente prohibida o lesione el derecho de apropiación de un tercero, por lo que

¹¹⁵ Cfr. MITZSCHEKE, SCHÄFER. “Kommentar zum Bundesjagdgesetz”, 4.Auflage, Hamburgo-Berlín, Paul Parey, 1982. Pág.51, marginal 6; J.C. LAGUNA DE PAZ “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.54 y 55.

¹¹⁶ Vid. Parágrafo 7.4; 8.1; 9.1 y 10.1 de la Ley de Caza del Reich de 1934.

no puede adquirirse por ocupación la propiedad de las piezas de caza cuando la normativa reconozca ese derecho de apropiación a un tercero.¹¹⁷

La ley de caza alemana se basa en la ley de caza federal ("*Bundesjagdgesetz*") en su versión de 29 de septiembre de 1976. Se contempla como una ley marco, que se completa con las leyes de los *Länder* y de sus disposiciones de aplicación.¹¹⁸

Se requiere de un permiso de caza para poder desarrollar esta actividad en Alemania. Los derechos de caza siempre pertenecen al propietario, pero pueden ser arrendados a terceros. Las Áreas de caza pueden ser de propiedad privada o parte de una caza cooperativa (*Jagdgenossenschaft*) y difieren burocráticamente en función de su tamaño y ubicación. Hay dos tipos de caza:

- Sistema de Territorio: donde la caza solo se permite en ciertas zonas, (*Jagdbezirke*)
- Sistema de Gestión de Juegos, que tiene por objeto mantener variadas y saludables las poblaciones de animales en relación con el hábitat.¹¹⁹

En relación con las armas de caza, no están permitidas las automáticas o semiautomáticas con espacio para más de dos cartuchos en el cargador. No hay restricciones de calibre para disparar aunque el 12, 16 y 20 mm son las más utilizadas.¹²⁰

4.4. Inglaterra

¹¹⁷ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. "Libertad y propiedad en el Derecho de Caza". Op. Cit. Pág.57.

¹¹⁸ Vid. Bundeswildschutzverordnung (Ley Federal de Conservación de Juego) del 04/23/2001; Tierschutzgesetz (Ley de Protección de los Animales) en su versión de 05.25.1998 , modificada en 06/25/2001; Bundesnaturschutzneuregelungsgesetzgesetz (Ley de Conservación de la Naturaleza Federal) en su versión del 03/25/2002; Bundesartenschutz - Verordnung (Reglamento de Protección de Especies Animales Federal) en su versión de 09/18/1989; Fleischhygienegesetz (Ley de Higiene de la Carne) en su versión de 07.08.1993 , modificada el 23.10.2001.

¹¹⁹ En la mayoría de las regulaciones europeas o americanas de caza se denomina a las especies de caza como juego.

¹²⁰ <<http://berlin.angloinfo.com/information/lifestyle/sports-and-leisure/hunting/>>.

En la época de la Britania-romana se estableció el principio de *res nullius* para los animales salvajes, al igual que sucedía en la Península Ibérica. Se establecía el principio de libertad de caza para todas las personas, limitando los lugares de caza, por lo que se prohibía cazar en los bosques y vivares. La aristocracia se reservaba el derecho de caza de ciertas especies como era el ciervo rojo. En la Edad Media se permitía cazar a todas las personas, excepto en los bosques madrigueras.¹²¹

La Ley de Caza de 2004 (*Hunting Act 2004*), entró en vigor en febrero de 2005, controlaba la caza de mamíferos silvestres con perros. Se afirmó por parte del Tribunal Superior en la Sentencia de febrero de 2009, que el objetivo de la Ley de Caza "es prevenir o reducir el sufrimiento innecesario de los mamíferos salvajes", asimismo "causar sufrimiento a los animales para el deporte no es ético y se debe, en la medida de lo posible, abstenerse de ser realizado". Esta Ley no establece una prohibición absoluta de la caza de mamíferos silvestres con perros, ya que existe cierta permisibilidad al respecto. La referida Sentencia del Tribunal Superior "reconoció la necesidad de controlar... a los mamíferos salvajes que los agricultores y los demás puedan considerar como plagas".¹²²

La Ley prevé varias clases de caza permitidas o exentas, cada tipo de caza exenta tiene una serie de condiciones establecidas por la Ley que deben cumplirse para que la caza sea legal. Las infracciones previstas en esta Ley, vienen establecidas en la Parte 1, que como novedad establece que, se comete un delito si la caza de mamíferos salvajes se realiza con perros, a menos que su caza esté exenta.¹²³

Esta novedad legislativa, hace referencia a las tradicionales cacerías del zorro con perros, quedando ésta prohibida a raíz de la entrada en vigor de la *Hunting Act*, el 18 de febrero de 2005, en Inglaterra y Gales, por la que, y como se ha indicado anteriormente, será delito cazar con perros siempre y cuando la misma no esté exenta.

¹²¹ Vid. PHILLIP, S.; DANDY, N.; GILL, R.; MACMILLAN, D. C. "Is legislation a barrier to the sustainable management of game species? A case study of wild deer in Britain". Edit. *Journal of Environmental Planning and Management*. Vol.52, N°8, December 2009. Pág.995

¹²² Cfr. < <http://huntingact.org/?q=node/3>.>

¹²³ Cfr. *Hunting Act 2004*, Part 1, offences. Hunting wild mammals with dogs. A person commits an offence if he hunts a wild mammal with a dog, unless his hunting is exempt.

4.5. Regulación cinegética en otros países.

- Estados unidos

Cada estado gestiona y controla la caza dentro de sus fronteras, con la excepción de las aves acuáticas, cuya caza y conservación, por tratarse de aves migratorias que cruzan el país de norte al sur cada otoño y cuyas distintas rutas migratorias pueden extenderse a lo ancho de varios estados, es controlada por el gobierno federal y, en particular, por el Servicio de Pesca y Fauna Salvaje de los EE.UU. Los Departamentos de Caza y Pesca o de Recursos Naturales de cada estado fijan las fechas de la temporada para cada especie de caza y su cupo correspondiente basándose en los censos, estudios del hábitat y las observaciones que sus biólogos, peritos y guardas realizan cada año. Todos los días de la semana son hábiles. La tradición de la media veda sencillamente no existe en EE.UU, debido a que los ecosistemas pueden variar mucho dentro de un estado, o de un estado a otro, esto influye en las fechas y los cupos, e incluso en la caza de determinadas especies.

Será cada estado el que determine el precio de sus licencias de caza, por otra parte los permisos se dividen en dos categorías: caza menor y caza mayor. Asimismo, se distingue entre el residente del estado y el no-residente, siendo éste el cazador que tiene su domicilio principal en otro estado y en el que paga sus impuestos. Una parte de los impuestos del estado y los fondos que el mismo recauda de la venta de sus licencias de caza se dedica a la gestión y conservación de la caza; por tanto cada estado busca garantizar que sea un deporte asequible para todos sus ciudadanos.¹²⁴

En Oregón y otros estados, además de pagar la correspondiente licencia, hay que adquirir también lo que sería un precinto para cada especie de caza mayor que se desea cazar. A estos efectos, es frecuente que se permita solo la caza de machos o hembras en determinada zona o que se limite el número de licencias o precintos.¹²⁵

¹²⁴ En este sentido el Artículo XIII, sección 12 de la Constitución de Minnesota reza: *“La caza y pesca y la captura de caza y pesca constituyen una parte valorada de nuestro legado cultural y serán preservadas para siempre para el pueblo y se administrarán según la ley y las reglamentaciones para el bien del pueblo”*.

¹²⁵ Vid. Guy H. Wood “La caza en Estados Unidos”. En revista Trofeo de caza del 01/06/2009, <http://www.trofeocaza.com/noticia/2399/reportajes/la-caza-en-estados-unidos.html>.

- Canadá

La caza está permitida, pero se imponen regulaciones estrictas a nivel federal y provincial para proteger la vida silvestre. Considerada como pasatiempo popular y como actividad recreativa, llega a considerarse como una forma de vida. Dentro de las restricciones establecidas, se prohíbe cazar en parques provinciales o parques nacionales o cualquier otro hábitat protegido; o cazar pájaros especialmente protegidos y otros animales salvajes; cazar osos polares, a menos que la caza la lleve a cabo un indígena o se vaya acompañado de un guía indígena; entre otras. La actividad cinegética tiene lugar durante todo el año, pero la temporada de caza depende del tipo de animal cazable y donde se realice dicha actividad.¹²⁶

A nivel federal, las aves migratorias y especies en peligro de extinción se encuentran protegidos por los reglamentos que restringen la caza de estos animales. A su vez los hábitats de estas especies que se consideren de importancia nacional también están protegidos. Los Reglamentos incluyen, tanto los periodos hábiles para la caza, como los cupos. Estas normas son aplicables tanto a nivel nacional y provincial. Medio Ambiente de Canadá es el responsable de regular la caza en lo que respecta a la salvaguarda de animales protegidos. El Servicio de Vida Silvestre de Canadá forma parte de Medio Ambiente y regula asuntos de fauna silvestre a nivel federal, la protección de especies en peligro, hábitats y aves migratorias. Las provincias y territorios tienen sus propias normas para la caza.

La obtención de la licencia de caza depende de las regulaciones provinciales. El cazador que desee obtener debe completar un curso de seguridad de armas de fuego y un curso de educación para cazadores.¹²⁷

Las armas de fuego están prohibidas en muchos de los parques nacionales y provinciales de Canadá, así como en las reservas de caza y las zonas adyacentes. La Ley

¹²⁶ La caza se divide en Animales de caza mayor : todos los tipos de ciervos , antílopes (solo en Alberta y Saskatchewan), el bisonte (búfalo), el oso negro, el caribú, el alce, oso grizzly, alces, bueyes almizcleros, osos polares (aplican restricciones especiales), el jabalí; Pequeños animales de caza: bighorned ovejas, puma, coyote, zorros, cabras, conejos, lobos; Las aves de caza: patos, gansos, urogallo, perdiz, faisán, snipe, pavo, aves acuáticas, becada.

¹²⁷ Vid. Reglamento 665/98 de caza de Ontario.

de Armas de Fuego es la ley federal que regula y restringe la posesión de armas de fuego en Canadá. Sin embargo, las provincias o territorios individuales pueden tener restricciones adicionales respecto de armas de fuego destinadas a la caza. La Ley de Armas de Fuego considera a las escopetas y rifles como armas de caza cuyo uso no está restringido, a su vez, prohíbe todas las armas automáticas y pistolas. Los menores de 18 años no pueden poseer o llevar un arma de fuego en Canadá, pero pueden utilizarlas en circunstancias especiales, siempre que exista supervisión de un adulto. Los titulares de las armas deben tener una licencia válida que les permite poseer un arma de fuego, así como un certificado de registro canadiense. Ser propietario de un arma de fuego sin licencia es un delito penal y conlleva una pena de prisión de hasta cinco años.¹²⁸

- México

El Código penal mexicano, regula la caza en el Título XXV, Capítulo Único “Delitos Ambientales”, se considera un delito ambiental, cuya aplicación solo se realiza cuando se amenace la extinción de una especie o se usen medios prohibidos. Cuando se usen dichos medios para la captura de especies de fauna silvestre, o se amenace su extinción se impondrá una pena de 6 años de prisión y por el equivalente de mil a veinte mil días de multa. Siendo por tanto el bien jurídico protegido en la caza el medio ambiente o la biodiversidad de la fauna.¹²⁹

La Ley de caza mexicana, establece que la caza deportiva se autorizara en las épocas permitidas y los permisos de caza se expedirán previa solicitud a los miembros de las asociaciones o clubes de cazadores registrados y reconocidos por la Administración, son personales e intransferibles. Será la Administración la que fije los tipos y calibres de las armas, así como los medios de caza que podrán usarse. Se prohíbe la caza por medio de venenos y redes, los reclamos solo podrán usarse en casos excepcionales.¹³⁰

¹²⁸ < <http://canada.angloinfo.com/lifestyle/sports-and-leisure/hunting/> >.

¹²⁹ Vid. Art.420 III del Código Penal para el distrito y territorios federales en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, de 14 de agosto de 1931.

¹³⁰ Vid. Art.16; 18; 19 y 23 de la Ley de caza de 5 de enero de 1952 de México.

- Australia

Se requiere una licencia válida, cuando la caza se realice en terrenos públicos, o cuando se cacen determinados animales en terrenos privados, el titular de la licencia deberá cumplir con la regulación establecida para llevar a cabo la práctica de la caza. Se otorgan distintos tipos de licencia en función de los diferentes tipos de caza. Los cazadores deben llevar la licencia, en todo momento durante la caza y enseñarla cuando lo solicite un inspector autorizado, agente de la Policía o el propietario de la tierra.

Se prohíbe para la caza de determinados animales el uso de ciertos métodos o medios de caza, como son: focos, luces artificiales (incluidos los dispositivos de infrarrojos) o dispositivos electrónicos que mejoran la visión o la audición, señuelos o animales vivos; desde vehículos, aeronaves o embarcación. Dentro de las condiciones especiales para la caza, se prohíbe la caza nocturna y en época de cría. Estas prohibiciones buscan el bienestar animal.¹³¹

- Kenia

La legislación cinegética establece que la caza de cualquier animal protegido o de cualquier animal de caza sin licencia será culpable de un delito de decomiso. Si se caza aves sin licencia o incumpliendo lo establecido en las autorizaciones, salvo disposición en contrario, será culpable de delito. Las licencias autorizan la caza de ciertos animales, en determinadas zonas, en los períodos y con sujeción a las condiciones que se establezcan, debiéndose pagar las tasas establecidas.

A los efectos de calcular el número de animales que se pueden cazar bajo una licencia, se tendrán en cuenta tanto los animales a los que se les da muerte, los heridos o los capturados. Cada licencia es personal e intransferible y deberá llevarla consigo durante la cacería siendo culpable de delito en caso contrario.

La vigencia de la licencia se especificara en la misma, a su vez dejara de ser válida cuando se cubra el cupo de animales cuya caza está autorizada por la licencia.

¹³¹ Vid. The Game and Feral Animal Control Act 2002. <http://www.dpi.nsw.gov.au/hunting/regulations>

Asimismo, el cazador deberá llevar un registro de los animales muertos, heridos o capturados por él, que podrá ser requerido por un funcionario autorizado en cualquier momento.

Por razones científicas, o por razón de cualquier circunstancia inusual o de emergencia, se podrá, con la aprobación previa del Ministro, en cada caso, emitir una autorización especial para cazar cualquier animal en cualquier área especificada que no sea un parque nacional. La autorización emitida bajo esta sección estará sujeta a las condiciones que el Director estime necesario imponer sobre el mismo.

El Director podrá emitir una licencia de cazador profesional a cualquier persona que avale su competencia con armas de fuego, el conocimiento de los animales de caza y de la ley escrita relativa a la misma, y de cualesquier otro asunto que el Director considere relevante para considerar que es una persona apta y adecuada para ser cazador profesional, será válida durante el período de doce meses desde su emisión. Si el titular de una licencia de cazador profesional es condenado por cualquier delito previsto en la Ley, en el plazo de catorce días, tras la fecha de su emisión, deberá entregar su licencia al Director para su cancelación; en caso contrario será culpable de delito. Una licencia de cazador profesional no autorizará la caza de cualquier animal por el titular de los mismos, excepto, en defensa propia o de cualquier otra persona, o para evitar la fuga de un animal herido. Cuando se cometa un delito en contra de la Ley por parte de un cazador con licencia y vaya acompañado de un cazador profesional empleado por él, el cazador profesional deberá demostrar que llevo a cabo la diligencia debida para prevenir la comisión del delito y que no pudo prevenir la comisión de los mismos, en caso contrario será culpable de un delito similar.

No será constitutivo de delito matar o herir por cualquier medio a cualquier animal en defensa de la vida humana; pero la exención prevista en este apartado no se aplicará cuando previamente se estuviera cometiendo un delito previsto en la presente Ley o cuando deliberadamente se provocase o incitase al animal. Se deberá poner este hecho en conocimiento de un oficial del Servicio lo antes posible.

Cualquier propietario de los cultivos, si fuera necesario para la protección de sus tierras, podrá matar a cualquier animal de caza que esté causando daños materiales.

Se prohíbe producir sufrimiento innecesario a un animal protegido; estar en posesión de cualquier animal o partes del mismo; el uso de trampas; causar incendios para favorecer la caza; usar cualquier arma de fuego capaz de disparar más de un proyectil; usar cualquier explosivo, que no sea la carga propulsora de armas de fuego o cartuchos; cualquier red, valla o cerramiento; el uso de veneno o sustancia similar; la caza nocturna; acercarse en un vehículo de motor o aeronave a menos de quinientos metros de un animal con el propósito de darle caza; cazar desde aeronaves o vehículos a motor en movimiento; o utilizar perros para cazar cualquier animal sin el permiso escrito de un alcaide, entre otras prohibiciones.

El Ministro podrá, mediante notificación, prohibir la caza de cualquier animal o imponer restricciones respecto de la utilización de cualquier medio de caza.¹³²

¹³² Vid. Chapter 376 The Wildlife (conservation and management) ACT 2009 Kenya. Part IV—Control of Hunting, 21-39.

CAPITULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAUNA Y DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

SUMARIO: 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAUNA SILVESTRE; 1.1. Convenios Internacionales; 1.2. Normativa comunitaria europea; 1.3. Regulación estatal; 1.4.Regulación autonómica; 2. TUTELA JURÍDICA DE LOS ANIMALES DOMESTICOS; 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA; 3.1. Conceptos cinegéticos básicos; 3.2. Normativa relativa a las armas de caza; 3.2.1. Adquisición de armas; 3.2.2. Reparación, préstamos o posibles enajenaciones de armas; 3.2.3. Revista de las armas; 3.3. Señalización de los terrenos; 3.4. Periodos hábiles de caza; 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PIEZAS DE CAZA; 4.1. Determinación de las piezas de caza; 4.1.1. Diferente legislación autonómica; 4.2. Clasificación de las piezas de caza; 4.3. Configuración de las piezas de caza; 4.4. Adquisición de las piezas de caza.

1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAUNA SILVESTRE

1.1. Convenios Internacionales

Durante la segunda mitad del siglo XX se comienza a considerar al medio natural como una unidad a escala mundial. En materias como la medioambiental está justificada la adopción de medidas supranacionales, en especial, si nos referimos a especies silvestres que no entienden de límites fronterizos, es el caso de las aves migratorias o las especies marinas, para estas especies la creación de instrumentos

internacionales de protección medioambiental se hace imprescindible para su supervivencia.¹

Estos instrumentos se desarrollan sobre la base de uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional ambiental, establecido en la Conferencia de Estocolmo: *“los Estados ostentan el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos naturales, pero, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional”*. Buscando así un equilibrio entre el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos y la obligación de todo Estado de no dañar el medio ambiente de otros Estados, ostentando la Comunidad Internacional la posibilidad de intervención para promover y regular la protección del medio ambiente.²

Este equilibrio argumenta el hecho de que muchos de los instrumentos no sean de carácter obligatorio, siendo así declaraciones o principios de Soft Law que buscan unificar el Derecho interno de los Estados.

El desarrollo del Derecho Internacional del medio ambiente se clasifica en cuatro períodos:

A.- El primer período comienza a finales del siglo XIX, donde se desarrollan algunas reglas de protección internacional con la finalidad de proteger la vida salvaje, se habla de conservación de algunas especies animales desde una perspectiva utilitarista. La preocupación por el medio ambiente aparece con la creación de asociaciones conservacionistas, estos movimientos ecologistas surgen no solo para la protección de animales domésticos sino debido también a la eliminación de espacios naturales en regiones como Norteamérica. El primer motivo para la creación de estas asociaciones

¹ Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, Pág.285.

² Vid. LOZANO CUTANDA, B “Derecho Ambiental Administrativo”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009, Pág.39 y 40.

fue la protección de las aves, aunque su actividad se centraba en la observación y el anillamiento más que en la propia conservación³.

Posteriormente, se crea en 1909, entre otras, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Suecia o la Liga Suiza para la Protección de la Naturaleza, uniéndose varias de estas asociaciones en 1922 al Consejo Internacional para la protección de las Aves (ICBP).⁴ Este periodo concluye con la creación de organizaciones internacionales en 1945.

Cabe destacar en este periodo el **Convenio para asegurar la conservación de varias especies de animales salvajes de África útiles e inofensivos para el hombre**, realizado de forma multilateral, en Londres el 19 de mayo de 1900, firmado por potencias europeas con territorios coloniales en África, con la sola excepción del Congo, con una participación casi simbólica.⁵ El objetivo de este Convenio era la protección de especies de fauna, estableciendo así la prohibición de matar determinados animales. A su vez, fijaba medidas tendentes a reducir el número de las especies que se consideraban peligrosas para el hombre y sus actividades, buscando mas adaptar la naturaleza a las necesidades humanas que la propia protección.⁶

Un segundo tratado también con enfoque utilitarista es la **Convención para la protección de pájaros útiles para la agricultura** (Bruselas, 19 de marzo de 1902), que trataba de proteger a las aves consideradas beneficiosas para los cultivos prohibiendo su muerte y la destrucción de sus nidos, pero permitía a las Partes exterminar a aquellas que fueran nocivas para las actividades humanas, como es la caza, la pesca o la agricultura. Estas especies se recogían en el anexo 2 de la Convención, entre ellas

³ Cfr. CALVO CHARRO, M. "Escritos de Derecho Ambiental". Op. Cit, Pág.285.

⁴ Vid. España se adhirió en 1978 a través de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), posteriormente se unieron otras asociaciones españolas como la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA) Federación de Amigos de la Tierra (FAT) y La Sociedad Española de Ornitología (SEO).

⁵ Vid. Los Estados parte de Convención: Gran Bretaña, Alemania, España, Congo, Francia, Italia y Portugal.

⁶ Cfr. M.C. MAFFEI, article "Evolving Trends in the Internacional Protection os species" German Yearbook of Internacional Law. Edit. Duncker & Humblot, Berlin, Germany, 1993. Pág.135.

destacaban las águilas así como otros pájaros depredadores, esto provoco que actualmente muchas de estas especies se encuentren al borde de la extinción.⁷

La Convención de París de 19 de marzo de 1902, introduce en el Derecho Internacional reglas de protección de las aves, pero con un fin utilitarista ya que busca la protección de las especies útiles para la agricultura, especialmente las insectívoras, dejando fuera de toda protección a las aves consideradas como dañinas recogidas en su anexo II, entre las que se encuentran las rapaces, actualmente estando éstas protegidas. Esta Convención de París, fue sustituida por la Convención internacional para la protección de las aves, firmada en París el 18 de octubre de 1950.⁸

Por último cabe mencionar la **Convención para La preservación de la fauna y flora en su estado natural** (Londres, 8 de noviembre de 1933), su aplicación se centra de nuevo en los territorios africanos. Se busca el aislamiento de las especies consideradas dañinas, creando para ello zonas protegidas para evitar los daños causados por las mismas, al mismo tiempo se asegura la supervivencia de estas especies que se hallaban amenazadas. A su vez, las Partes se comprometían a no realizar determinadas actividades en las áreas protegidas, como matar, destruir y capturar especies, así como entrar o acampar. Un punto importante de esta Convención es que incluso fuera de dichas áreas protegidas se otorga protección a las especies establecidas en su anexo.

Finalizando esta etapa, va aumentando progresivamente la conciencia de la imposibilidad de ordenar separadamente las relaciones existentes entre los elementos de la naturaleza, pasando del enfoque utilitarista que primaba hasta entonces a la idea de que todas las especies son dignas de protección.⁹

B.- El segundo periodo comienza con la creación de la ONU y su vigencia dura hasta la Conferencia de Estocolmo de 1972. En este período se comienza a crear un

⁷ Cfr. HAVA GARCÍA, E. "Protección jurídica de la fauna y la flora en España" Edit. Trotta Madrid 2000. Pág.63.

⁸ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. "Libertad y propiedad en el Derecho de Caza". Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997. Pág.175 y ss.

⁹ Cfr. MAFFEI, M.C. article "Evolving Trends in the Internacional Protection os species". Op. Cit. Pág.138.

cuerpo de normas internacionales, pero tanto las normas como las instituciones no seguían una estrategia para desarrollar una política homogénea a escala internacional.

Cabe destacar en esta etapa que en 1948 con el fin de evitar nuevos desastres que afectasen a las condiciones ambientales y al estado de la vida salvaje, se creó la UICN, organización de carácter privado ligada a la UNESCO. Se caracterizó por su falta de recursos económicos. Esto llevó a sus organizadores a la creación de un fondo mundial a finales de los años 50, que recaudara dinero para la causa conservacionista; las marismas de Doñana, gravemente afectadas, se convirtieron en el elemento acelerador de este proceso, creándose el Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF) en 1961.¹⁰

La UICN favoreció en 1971 la firma en Ramsar de la **Convención relativa a los humedales de importancia internacional particularmente como hábitats de aves acuáticas.**¹¹ Se aleja del enfoque utilitarista, constituye el primer intento realizado a nivel internacional para dotar de cierta protección a las aves acuáticas, a través de la acción coordinada de los diversos Estados implicados. Siendo su objetivo la conservación y el uso racional de los humedales, a través de acciones a nivel nacional y la cooperación internacional, asegurando también la protección de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales.¹²

El interés, internacional y nacional, en la defensa y protección de las zonas húmedas se deriva de los múltiples valores que encierran estos espacios en cuanto que son núcleos generadores de vida, especialmente como hábitats de valiosas especies faunísticas y florísticas. Las zonas húmedas constituyen las rutas migratorias de variedad de aves silvestres que las utilizan como lugares de reposo, invernada, nidificación y reproducción. De ahí, de acuerdo con CALVO CHARRO, que sea

¹⁰ Vid. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una red medioambiental creada en 1948 que agrupa más de 80 estados, 111 agencias gubernamentales, 784 ONG nacionales, 34 agencias afiliadas, 89 ONG internacionales y a unos 1.000 científicos y expertos de 160 países. Es la mayor red mundial de estas características en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participa como miembro.

¹¹ [Http: //www.ramsar.org/indexsp.htm](http://www.ramsar.org/indexsp.htm). España se adhirió por Instrumento de 18 de marzo de 1982, B.O.E. nº 199, de 20 de agosto de 1982.

¹² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.65 y 66.

imprescindible la necesidad de una cooperación internacional para su efectiva preservación.¹³

En 1968 la UNESCO reunió a representantes de sesenta naciones en París en la **Conferencia internacional de la biosfera**, surgiendo la idea de que la ONU promoviera la creación de un programa sobre el hombre y la biosfera (MAB) en 1971, así como promover una Conferencia mundial para tratar los problemas ambientales desde una perspectiva global, realizada en Estocolmo en el año 1972.¹⁴

C.- El tercer período comienza con la Conferencia de Estocolmo de 1972 y finaliza con la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992. En este período destaca por la búsqueda de la protección de la fauna.

La Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, de junio de 1972, conocida como Declaración de Estocolmo, en su principio cuarto reconoce la responsabilidad especial que tiene el hombre de preservar y administrar el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran gravemente amenazadas.¹⁵

Esta conferencia propició que los países participantes de la misma promulgaran numerosas leyes de medio ambiente. Fruto también de la conferencia, surgió el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que busca con su actividad promulgar la conservación del medio ambiente y coordina la actividad de numerosas organizaciones ecologistas.

En esta etapa cabe mencionar la **Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural**, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, ratificada por España mediante Instrumento de adhesión de 8 de marzo de

¹³ Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.285.

¹⁴ Vid. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.66.

¹⁵ Vid. Principio cuarto “*El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres*”

1982. Con el objetivo de proteger y conservar ciertos elementos de la naturaleza, siempre y cuando, según establece en su artículo 2 “tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico”. Destaca el interés de la Convención por el carácter *ad exhibendum* de la fauna y la flora más que por su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico o económico, a pesar de utilizar el término “patrimonio”, se regula de la misma forma que obras arquitectónicas, esculturas o monumentos.¹⁶

La **Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre**¹⁷, (CITES), firmado en Washington el 3 de mayo de 1973, ratificado por España mediante Instrumento de 6 de mayo de 1986, que pretende regular el comercio internacional de especies amenazadas mediante un sistema que regula la concesión de permisos y certificados CITES, documentación a través de la cual, autoriza a llevar a cabo operaciones de comercio y transporte a nivel internacional de ejemplares recogidos en el Tratado dentro de unos márgenes legales, determinando si una especie ha sido adquirida de forma legal o no y controlando de esta manera su tráfico. Evitando que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.¹⁸

Las Partes dentro de sus ordenamientos jurídicos establecerán un estándar mínimo de tutela, que asegure el cumplimiento por parte de los ciudadanos lo establecido en el Convenio (art.VIII), pudiendo establecer medidas más estrictas respecto al comercio, captura, posesión o transporte de las especies incluidas en sus apéndices (art. XIV), e incluso pueden prohibirlas y restringirlas estableciendo medidas internas. A su vez, establece la creación de una agencia administrativa para verificar el cumplimiento de sus disposiciones, ésta deberá decidir el destino de los especímenes incautados objeto de tráfico ilegal, mantener un registro del comercio de especies incluidas en los apéndices y transmitir a la secretaria informes periódicos sobre la aplicación en el territorio del Convenio CITES (art.VIII). A pesar de esto, el CITES carece de una institución que obligue a los Estados a adoptar dichas medidas y exigir

¹⁶ Vid. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.67 y 68.

¹⁷ <[Http: //www.cites.org/esp/disc/what.shtml](http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml)>

¹⁸ Vid. LOZANO CUTANDA, B. “Derecho Ambiental Administrativo”. Op. Cit. Pág.49.

responsabilidades, pero dispone de mecanismos para controlar su cumplimiento, esto es, identificando a los países que lo incumplan y hacerlo público a través de informes periódicos que hace la Conferencia de las Partes.¹⁹

A parte de los Convenio citados, en 1978, bajo los pronósticos de la UNESCO se aprobó la **Declaración de los Derechos de los Animales** (París, 15 de octubre de 1978)²⁰. Los movimientos de defensa de los derechos de los animales se encuentran en España todavía en una fase muy incipiente, a diferencia de países como Estados Unidos donde están ya más que consolidados.²¹

Cabe destacar en esta etapa **el Convenio sobre la Conservación de las especies migratorias de animales silvestres**, firmado en Bonn, el 23 de junio de 1979, al que España se adhirió en 1985. Tiene por objeto la protección de las especies migratorias de la fauna silvestre. Buscando la protección de las especies amenazadas incluidas en su anexo I, obliga a los Estados a proteger sus hábitats, reducir las actividades que tengan efectos negativos sobre ellas y a prohibir sus aprovechamientos, como es el caso de sacar de su ambiente natural animales de una determinada especie. Intenta a su vez que los Estados implicados lleguen a acuerdos en relación con las especies del anexo II. Su eficacia es limitada al ser muy pocos los países que lo han ratificado. Establece ciertas excepciones en su artículo 3.5, que la captura se efectúe con el propósito de mejorar la propagación o supervivencia de la especie que se trate, por circunstancias excepcionales que haga indispensable su captura o se realice con fines científicos o para satisfacer las necesidades de quienes utilicen dicha especie para su subsistencia.²²

¹⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.84 y 85.

²⁰ Vid. Los derecho enumerados son los siguientes: todos los animales son iguales ante la vida y tienen el mismo derecho al a existencia; no se someterá a ningún animal a malos tratos ni actos crueles; todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el medio ambiente humano tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida y libertad propias de su especie; el abandono de un animal es un acto cruel y degradante; la experimentación animal que entraña un sufrimiento físico o psicológico, es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentación médica, científica o comercial o de cualquier otra forma de experimentación; los organismos de protección y salvaguarda de los animales han de estar representados a nivel gubernamental.

²¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2009. Pág.309.

²² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.175 y ss.

En su marco se aprobó, el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (1995) y el Acuerdo para la Conservación de Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y las Aguas Atlánticas Contiguas (1996), ratificado por España en 2 de febrero de 1992.²³

Otro tratado digno de mención es el Convenio relativo a la **Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa**, firmado en Berna el 19 de septiembre de 1979, al que España se adhirió en 1986, aunque es de aplicación europea pueden ser invitados a ratificarlo otros países. Cuyo objetivo es la conservación de la vida silvestre y del medio natural en este ámbito. Los Estados firmantes vienen obligados a proteger las especies de la fauna y sus hábitats, sobre todo de aquellas cuya conservación requiera la cooperación de más de un Estado. En particular, protege a las especies amenazadas de extinción y vulnerables, incluyendo las aves migratorias, buscando mantenerlas en niveles adecuados. Prohibiendo así toda forma de captura, posesión, muerte y comercio de los animales amenazados, incluidos en su anexo II. A su vez, establece la posibilidad de que los Estados fijen ciertas excepciones siempre que no vaya en detrimento de la supervivencia de la población interesada. Obliga a los Estados firmantes a adoptar medidas necesarias para que se mantenga fuera de peligro la existencia de las poblaciones de fauna silvestre en situación de riesgo, fomenta la introducción de especies autóctonas y exige un severo control de las no autóctonas.²⁴

Este Convenio introduce técnicas y conceptos nuevos dentro del Derecho Ambiental, como la aceptación de una lista única de especies protegidas para todo el continente europeo y de criterios uniformes para las políticas de conservación de la naturaleza de los países firmantes. Pero de nuevo no prevé mecanismos de cumplimiento. A su vez, tampoco establece controles para el comercio internacional de las especies ya que se entiende que dicha materia debe ser recogida en tratados especializados para evitar reiteraciones que se producirían si la misma cuestión fuera abordada en convenciones regionales.²⁵ Por lo que no se logra un régimen de protección global de las especies amenazadas combinando las disposiciones internacionales del

²³ Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.286.

²⁴ Vid. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.175 y ss.

²⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.85 y ss.

CITES y con otras de aplicación estatal, es más, muchas de las especies incluidas en los anexos del Convenio de Berna no están en el CITES, por lo que su comercio internacional no se halla regulado, provoca que ciertas especies que son protegidas en su país de origen siguen siendo objeto de importación y comercio legal en los países a los que han sido ilegalmente exportados.

En 1980 se adopta **la Estrategia Mundial para la Conservación**, bajo la influencia de UICN y del WWF, contando con el apoyo del PNUMA. Se establecen tres objetivos básicos: mantener los procesos ecológicos esenciales; preservar la diversidad genética y asegurar la utilización sostenible de especies y ecosistemas. Mediante tres criterios, importancia, urgencia e irrevocabilidad, se decide las actuaciones que son prioritarias para alcanzar los objetivos destacando el mantenimiento de hábitats y la prevención de la extinción de especies.²⁶

La Carta Mundial de la Naturaleza, fue solemnemente adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982, considerada *soft law*, cuya base es más política que jurídica, muy utilizado en materias ambientales. Destaca el valor de toda forma de vida y la necesidad de proteger todas las especies y sus hábitats, centrándose en la necesidad de conservar las especies amenazadas para mantener el equilibrio ecológico y la diversidad biológica.²⁷

Se firman otros convenios durante este periodo. Así en 1975, dieciséis países mediterráneos y la CEE adoptaron el Plan de Acción para la protección y el desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM), el primer acuerdo regional bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Como marco jurídico del PAM, se adopta en 1976, el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) y sus dos primeros protocolos, destinados a cumplir con el PAM, firmado por España en 1982 y ratificado en 1987 (revisado y actualizado en 1995). Los principales objetivos del Convenio consisten en:

²⁶ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.69 y 70.

²⁷ Vid. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.175 y ss.

evaluar y controlar la contaminación; garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales marinos y costeros; integrar el medio ambiente en el desarrollo económico y social; proteger el medio marino y las zonas costeras mediante acciones que pretenden prevenir y reducir la contaminación y, en la medida de lo posible, eliminarla, ya sea provocada por actividades desarrolladas en la tierra o en el mar; proteger el patrimonio natural y cultural; reforzar la solidaridad entre los países ribereños del Mediterráneo; y contribuir a la mejora de la calidad de vida.²⁸

D.- El cuarto período comprende desde la Primera Cumbre de la Tierra (la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992) hasta la actualidad. En este período, el Derecho Internacional del Medio Ambiente gira en torno y está dirigido al desarrollo sostenible.

La Declaración de Rio sobre medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, es la tercera manifestación de principios sobre medio ambiente realizada por Naciones Unidas, tras la de Estocolmo y la Carta Mundial de la Naturaleza. Establece determinados principios para orientar a los gobiernos en la gestión del desarrollo sostenible. Igualmente, fija obligaciones directas a los Estados como el deber de promulgar leyes sobre medio ambiente, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y la obligación de facilitar a los ciudadanos interesados la información medioambiental de la que disponen los gobiernos. Como punto importante, introduce el criterio de precaución en su principio 15. Pero el incumplimiento de los compromisos por parte de los Estados destaca en esta Cumbre, y se deja constancia de ello en las conclusiones de la II Cumbre de la Tierra celebrada en Nueva York en junio de 1997.²⁹

Pero de esta cumbre cabe destacar que se firmó, en relación con la protección de la fauna, el **Convenio sobre la Diversidad Biológica**, negociado paralelamente a la preparación de la Conferencia y vinculante para los Estados Partes, firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y ratificado por España el 16 de noviembre de 1993, tiene como objetivo, recogido en su artículo 1, “*la conservación de la diversidad biológica*,

²⁸ Vid. Art.3.2 del Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de 1976 (Convenio de Barcelona).

²⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.71 y ss.

*la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos”.*³⁰

Este Convenio extiende el alcance de las obligaciones de conservar las especies a nuevas situaciones que no estaban cubiertas por leyes internacionales. Aunque de nuevo se aleja de la perspectiva proteccionista y se acerca a la utilitarista. Pero cabe destacar que este convenio establece en su preámbulo la importancia de la diversidad biológica. Toma conciencia de la biodiversidad como un patrimonio común de la humanidad cuya conservación constituye una responsabilidad compartida que ha de llevarse a cabo en el marco de un uso sostenible. La Biodiversidad es el término que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforman.³¹

De acuerdo con HAVA GARCÍA, se pueden dividir las medidas previstas en dos apartados: las que pretenden asegurar el mantenimiento de la biodiversidad con una conservación in situ (Art. 8) y ex situ (Art. 9 y Art. 10) y las que ordenan el acceso a los recursos genéticos y la tecnología (Art. 15).³²

Por medio de este Convenio, la gran mayoría de los gobiernos mundiales se comprometieron a mantener los sustentos ecológicos a medida que se avanza en el desarrollo económico. Y para ello establece tres metas principales: la conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de sus componentes; y la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos derivados de la utilización de los recursos genéticos.

³⁰ España al ratificar el Convenio de Biodiversidad asumió las siguientes responsabilidades: 1) identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y uso sostenible; 2) llevar a cabo un seguimiento de dichos componentes; 3) identificar y hacer un seguimiento de los procesos y actividades con efectos perjudiciales. Para dar cumplimiento a tales objetivos España elaboró en 1995 la Estrategia Nacional para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, que pretende establecer un marco general para la política nacional de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad; Cfr. B. LOZANO CUTANDA “Derecho Ambiental Administrativo”. Op. Cit. Pág. 56 y ss.

³¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.309.

³² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”, Op. Cit. Pág.74 y ss.

La protección internacional de la fauna silvestre ha avanzado y ha sufrido un cambio extraordinario, así LAGUNA DE PAZ mantiene que: “el centro de gravedad se traslada a la idea del interés común de la humanidad, que exige el aprovechamiento ordenado de estos recursos y su preservación. El Estado sería un simple depositario del medio ambiente, cuya misión es salvaguardarlo en beneficio de las generaciones futuras”.³³

Queda claro y de acuerdo con MAFFEI: que la evolución de la protección internacional de las especies por parte de los Estados se basa en un enfoque utilitarista, las especies que en algunos aspectos son útiles para el hombre fueron protegidas; las especies inofensivas fueron en su mayor parte ignoradas; los especímenes pertenecientes a especies perjudiciales fueron reducidos en número.³⁴

Hasta el momento ninguno de los convenios internacionales mencionados ha tenido una aplicación práctica real o elevada con el fin de proteger la fauna, debido a que, como mantiene HAVA GARCÍA, no se le ha acompañado de mecanismos operativos que favoreciesen a su aplicación.³⁵

1.2. Normativa comunitaria europea

El vacío legal existente en la Unión europea en relación al medioambiente y en el caso que nos ocupa a la fauna, comienza a desvanecerse a partir de los años setenta, cuando a nivel mundial surge el interés por los problemas medioambientales. Es a partir de la Declaración de Estocolmo de 1972, el momento en que surge el conflicto en la Unión Europea, entre las medidas de protección del medio ambiente previstas por algunos países y la libertad de competencia o el mercado común, esto llevó a que los países miembros iniciaran una política ambiental común.

³³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.308 y 309.

³⁴ Cfr. MAFFEI, M.C, artículo “Evolving Trends in the International Protection of species”. Op. Cit. Pág.133.

³⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.78.

La regulación relativa a la protección de la fauna dentro de la Unión Europea sigue un desarrollo paralelo a la regulación recogida en los Tratados Internacionales, pasando de un enfoque sectorial en su regulación a un enfoque cada vez más global, buscando la protección de la biodiversidad en su totalidad por su valor ecológico y económico. Se fijan mecanismos sofisticados recogidos en la normativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos, siendo la política ambiental uno de los temas más regulados en la CE y en los propios estados.

La primera disposición en materia de fauna a nivel europeo fue la Recomendación CEE 75/65 relativa a la protección del patrimonio arquitectónico natural, de 20 de noviembre de 1974, donde se afirma en relación con el Convenio de la UNESCO de 1972 que aparte del interés por la conservación del patrimonio arquitectónico y natural inmobiliario, recoge el interés de salvaguardar numerosas especies de fauna y flora salvajes de los espacios protegidos.

La segunda disposición es la Recomendación de la CEE 75/66 relativa a la protección de las aves y de sus hábitats, de 20 de noviembre de 1974, se reconoce que la tutela de las especies es un problema ambiental internacional, el cual no puede ser resuelto de manera individual por los Estados. La protección de las aves y de la demás fauna silvestre será más eficaz, de acuerdo con HAVA GARCÍA, si todos los Estados se adhieren a la Convención Internacional para la protección de las aves firmada en París en octubre de 1950 y al Convenio Ramsar de febrero de 1974. Esta Recomendación propicio la elaboración de la Directiva CEE 79/409, de 2 de abril, para la protección de las aves silvestres y el Reglamento CEE 3626/1982 de 3 de diciembre, relativo a la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre especies amenazadas.³⁶

La Unión Europea en lo relativo a la regulación de los animales salvajes, de acuerdo con CALVO CHARRO, tiene dos objetivos, el primero es proteger los hábitats como medida prioritaria para la protección de las especies; y el segundo objetivo es acabar con el tráfico ilegal, tanto el comercio como la importación de especies amenazadas y de productos derivados de las mismas.³⁷

³⁶ Cfr. HAVA GARCÍA, E. "Protección jurídica de la fauna y la flora en España". Op. Cit. Pág.89 y ss.

³⁷ Vid. CALVO CHARRO, M. "Escritos de Derecho Ambiental". Op. Cit. Pág.289 y ss.

En relación al **primer objetivo**, sobre la protección de hábitats, hay que destacar dos Directivas concretas como hito de la política ambiental europea: la Directiva 74/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CE sobre Biodiversidad.

A) La Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres: conocida como Directiva Aves, sustituida por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, vino a cumplimentar a las previsiones incluidas en los dos primeros programas de acción de la CEE sobre protección de las aves y cuyo contenido en algunos aspectos es similar al Convenio de Berna³⁸.

La Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres: tiene como principal finalidad la conservación de todas las especies de aves que viven en estado salvaje en el territorio europeo. El objetivo de la Directiva es la protección, la administración y la regulación de las aves y su explotación, obligando con tal fin a éstos a crear «zonas de especial protección para las aves (ZEPAS)» en las que no se podrán desarrollar actividades incompatibles con su preservación, para las especies que precisan de una protección particular se fija un sistema más severo. Asigna un destacable papel a las zonas húmedas declaradas de «importancia internacional» de acuerdo con el Convenio de Ramsar.³⁹

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección de las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado, que incluye la prohibición de matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado; destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos; recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos;

³⁸ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.92.

³⁹ Vid. Caso Santoña sentencia de 2 de agosto de 1993 incoado por la Comisión a instancia de la SEO, debido al deteriorado estado que presentaban las Marismas de Santoña en Cantabria (asunto C-355/90 Rec, 1993 p. I-4272). La comisión estimaba que España incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 de dicha Directiva, al no adoptar las medidas necesarias para su mantenimiento y conservación o restauración de los biotopos destruidos en Santoña ni clasificarla como “zona de protección especial”. A su vez se acusaba a España de la realización de carreteras y polígonos industriales en la zona, de autorizar actividades incompatibles y de no evitar la contaminación derivada del vertido de aguas residuales sin depurar que se había permitido. Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág. 97

perturbarlos de forma intencionada, durante el período de reproducción y de crianza, por último, retener aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas. Asimismo, prohíbe la venta y el transporte, retención para su venta, así como poner a la venta aves vivas o muertas, o de sus partes o productos identificables. A su vez, se permite la posibilidad de que los Estados establezcan excepciones a dichas prohibiciones para las especies incluidas en el anexo II y parte a) del anexo III, sometidas al control de la Comisión.⁴⁰

Según establece el artículo 11 de la Directiva, serán los Estados miembros quienes velen por evitar la eventual introducción de especies de aves que no viven en estado salvaje en el territorio europeo y que perjudique a la flora y la fauna locales, consultarán al respecto a la Comisión.

Los Estados miembros remitirán a la Comisión cada tres años un informe sobre la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la Directiva, posteriormente será la Comisión la que preparará cada tres años un informe de síntesis basado en las informaciones. A su vez, los Estados podrán tomar medidas de protección más estrictas que las previstas por la presente Directiva.⁴¹

La Directiva se aplica no solo a las aves sino también a sus huevos, nidos y a sus hábitats, pues, como resulta de su Exposición de Motivos, la supervivencia y reproducción de determinadas especies de aves requieren medidas de conservación especiales con respecto a su hábitat y área de distribución. Su anexo I contempla la serie de aves que deberán beneficiarse de especiales medidas de protección en sus hábitats. El anexo II hace referencia a las aves que pueden ser objeto de caza. El anexo III, enumera las aves que pueden ser comercializadas. El anexo IV, hace mención de los métodos de caza, captura o muerte prohibidos. Y por último, el anexo V, menciona ciertos temas o

⁴⁰ Vid. Art.5; art.6.2 y art.7.1 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres.

⁴¹ Vid. Art.1; art.3; art.4; art.5; art.6; art.11; art.12 y art.14 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres.

ámbitos que deberán ser merecedores de una especial investigación, atención o estudio.⁴²

B) La Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992 sobre Biodiversidad: conocida como Directiva Hábitats modificada por la Directiva 97/62/CE que la adapta al progreso científico y técnico. El precedente inmediato de esta Directiva es la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuyo principio número 4 reconoce la necesidad de proteger y conservar el hábitat de las especies como presupuesto insoslayable en la labor de protección de la fauna salvaje. Esta norma fue incluida en nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre.⁴³

Esta Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre, supera a la Directiva Aves anteriormente aprobada, se menciona por primera en el ámbito europeo, la necesidad de favorecer el mantenimiento de la diversidad biológica para dar cumplimiento a los objetivos esenciales de la política ambiental comunitaria. Fijando como objeto en su art.2 *“contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado“*, teniendo en cuenta *“las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidad regionales y locales”*. Se encomienda, en el artículo 11 de la Directiva, a las autoridades nacionales la vigilancia del estado de conservación de las especies y hábitats mencionados, otros preceptos de la presente Directiva, refuerzan el régimen de protección de determinadas especies animales y vegetales, prohibiendo o limitando el ejercicio de algunas actividades. Incluye novedades relacionadas con el procedimiento de declaración y gestión de las zonas de especial protección, como la evaluación de impacto para planes y programas. Trata de garantizar la aplicación homogénea de sus disposiciones en los países de la comunidad y evitar así las posibles interpretaciones dispares definiendo en su artículo 1 diversos términos.⁴⁴

⁴² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.306.

⁴³ Vid. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.292.

⁴⁴ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.107 y 108.

Se adoptó dado que de los diversos Tratados Internacionales aprobados hasta ese momento y de los que forma parte la Unión Europea no se obtuvo, según KRÄMER, los resultados esperados y no evitaban la degradación y desaparición de los hábitats naturales europeos.⁴⁵

De acuerdo con CALVO CHARRO, esta Directiva pretende dar prioridad, no a la protección directa de las especies, sino a la preservación de los lugares o espacios en los que desarrollan su vida, pues protegiendo estos espacios o hábitats se está protegiendo a las especies en ellos ubicadas. Su objetivo básico es la constitución de una «red ecológica coherente» de hábitats, denominada «Natura 2000» (Art. 3), formada por espacios declarados «Zonas de Especial Conservación» (ZEC) y en la que habrán de estar incluidas las zonas que, de conformidad con la Directiva 79/409, sean designadas «zonas de especial protección para las aves». De la constitución de esta Red en España se encarga la Dirección General de Conservación de Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.⁴⁶

Para ordenar los distintos regímenes de tutela de la fauna y flora comunitaria la directiva clasifica las especies de interés comunitario en diferentes anexos dependiendo del tipo de medidas que requiere su conservación, los artículos 12 y 13 establecen un sistema de protección rigurosa muy similar al previsto en Convenio de Berna, el artículo 14 a su vez prevé la posibilidad de que los Estados miembros tomen medidas para que la explotación o recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de flora y fauna silvestre recogidas en el anexo V sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable. Dichas medidas podrán incluir en particular la aplicación para la recogida de especímenes, de normas cinegéticas que respeten la conservación de dichas poblaciones, la implementación de un sistema de autorización de recogida de especímenes o de cuotas, la regulación de la compra, venta, comercialización, posesión o transporte con fines de venta de especímenes o la cría en cautividad de especies animales en condiciones de control riguroso, con el fin de limitar la recogida de especímenes en la naturaleza, entre otras.

⁴⁵ KRÄMER, L. "Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea". Edit. Marcial Pons, Madrid 1999, pág.46.

⁴⁶ Cfr. CALVO CHARRO, M. "Escritos de Derecho Ambiental". Op. Cit. Pág.292.

Según establece el artículo 15, se prohíbe la utilización de métodos no selectivos de captura especialmente de los enumerados en el anexo VI, para la recogida, caza o sacrificio de las especies animales incluidas en los anexos IV y V. El artículo 22 incorpora, como medida complementaria, la posibilidad de que los Estados miembros estudien la conveniencia de reintroducir especies del anexo IV que sean autóctonas de su territorio siempre que, *“teniendo igualmente en cuenta la experiencia de otros estados miembros o de otras parte implicadas, se establezca mediante un estudio que tal reintroducción contribuye de modo eficaz a restablecer dichas especies en un estado de conservación favorable y que no se haga sino después de consultar a las personas afectadas”*.

Las autoridades nacionales garantizarán que la introducción intencionada en la naturaleza de una especie que no sea autóctona se regule de modo que no perjudique a la fauna y flora silvestre autóctonas ni a sus hábitats naturales en su zona de distribución natural y, si lo consideraren necesario, prohibirán dicha introducción. A su vez, esta Directiva pretende fomentar la educación e información general sobre la necesidad de proteger las especies de fauna y flora silvestres y de conservar sus hábitats, así como los hábitats naturales.

En concordancia con el **segundo objetivo** de la Unión Europea de acabar con el tráfico ilegal, tanto el comercio como la importación de especies amenazadas y de productos derivados de las mismas destaca:

- *El Reglamento CEE 3626/1982 del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativo a la aplicación en la comunidad del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres*: se aprobó de acuerdo con el cuarto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, de forma uniforme en los intercambios realizados entre los Estados miembros y terceros países, evitando que afectara a la libre circulación de productos dentro de la UE y se adoptaron medidas de conservación más estrictas dentro de la CEE por lo que se amplía el ámbito de aplicación del CITES (Washington, 3 de marzo de 1973), añadiendo nuevos anexos de especies a los ya existentes y restringió en algunos casos los requisitos exigidos para la importación o exportación entre los Estados miembros y terceros países, creando para ello un procedimiento comunitario de concesión y presentación de permisos. El

Reglamento regula el comercio en el interior de los países, cosa que el CITES no regula, fijando ciertas prohibiciones para determinadas actividades relacionadas con la venta de las especies amenazadas, con las correspondientes excepciones a tales obligaciones.⁴⁷

- El Reglamento 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio: derogo al anterior Reglamento CEE 3626/1982. Constituye una de las normas comunitarias esenciales en la protección de la fauna silvestre. Esta norma contiene las previsiones relativas a la protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y ha sido dictada en cumplimiento del Convenio CITES.⁴⁸

El Reglamento CE 338/97 crea medidas de control más rigurosas en las fronteras exteriores de la comunidad para el ejercicio de actividades de exportación o reexportación. Busca evitar la introducción de aquellas especímenes que puedan alterar la genética de la fauna autóctona de la Unión Europea, a su vez amplía el número de prohibiciones o limitaciones a la posesión y el comercio de determinados especímenes. El Reglamento amplía y modifica el sistema de apéndices original del CITES, incluye cuatro anexos de especies distintas.⁴⁹

Para HAVA GARCÍA, las principales novedades que aporta este Reglamento frente al anterior, son:

- Introducción, exportación y reexportación: la introducción en la comunidad de especies que figuren en los anexos además requerirá la expedición de permisos y certificados, quedará sujeta al cumplimiento de las verificaciones necesarias y solamente podrá realizarse con carácter general en las condiciones taxativamente enumeradas en el artículo 4 (prueba documental de que el solicitante ha obtenido el ejemplar legalmente). La comisión puede limitar la introducción de especies mencionadas en los anexos A y B en determinados supuestos (cuando considere que puede resultar perjudicial para el estado de conservación de la especie) o de

⁴⁷ Cfr. HAVA GARCÍA, E. "Protección jurídica de la fauna y la flora en España". Op. Cit. Pág.99 y ss.

⁴⁸ Cfr. CALVO CHARRO, M. "Escritos de Derecho Ambiental". Op. Cit. Pág.289.

⁴⁹ Véase el artículo 3 del Reglamento 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

cualquier espécimen vivo de aquellas que constituyan una amenaza ecológica para la fauna y flora autóctonas de la comunidad.

- Permisos y certificados: cuando se trate de un caso significativo para los objetivos del reglamento y con ello el estado miembro deniegue una solicitud de permiso o certificado de introducción, exportación o reexportación, se informará inmediatamente a la comisión de las razones para la denegación, a su vez la comisión informara a los Estados miembros con el fin de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento.
- Control de actividades comerciales en territorio comunitario: de acuerdo con el artículo 2 u) se prohíbe la compra, oferta de compra, adquisición y exposición al público con fines comerciales, así como la utilización con fines lucrativos y la venta, puesta en venta, transporte o la posesión para su venta de especímenes de las especies que figuran en el Anexo A. Los Estados miembros podrán, asimismo prohibir la tenencia de dichos especímenes, en particular de animales vivos. De nuevo existen ciertas excepciones de carácter particular o general, en todo caso, las excepciones deberán ser conforme con los requisitos establecidos en otros actos legislativos comunitarios en materia de conservación de la fauna silvestre. Para el traslado de especímenes vivos, pertenecientes a especies del Anexo A, la autorización para dicho traslado deberá ser confirmada mediante la expedición de un certificado y, cuando proceda se comunicara inmediatamente a un órgano de gestión del estado miembro al que deba expedirse el espécimen. No se requerirá autorización si un animal vivo debe trasladarse por tratamientos veterinarios urgentes y es devuelto directamente a su paradero autorizado.
- Supervisión del cumplimiento e investigación de las infracciones: se crea un Grupo Garante de la aplicación del Reglamento, que estará integrado por los representantes de las autoridades de cada estado miembro y presidido por el de la Comisión. Las autoridades nacionales competentes están obligadas, en virtud del artículo 14 del Reglamento, a supervisar el cumplimiento de sus disposiciones, adoptar medidas adecuadas si detectan infracciones significativas y realizar las investigaciones que, en relación con los datos anteriores, la comisión estime necesarias. Los Estados miembros informaran a la comisión y a la secretaria del CITES para todo lo relativo a las especies que figuran en sus apéndices, de los resultados de dichas investigaciones. La comisión deberá ser informada anualmente de todo lo relacionado con el comercio e introducción de

especímenes de las especies enumeradas en los apéndices del convenio y anexos del reglamento, cada dos años de las medidas legislativas reglamentarias y administrativas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones.

- Sanciones: artículo 16, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que se impongan sanciones, como mínimo, en los siguientes supuestos infracciones cometidas para obtener un permiso o certificado y falsificación de documentos; incumplimiento de las condiciones de la autorización permiso o certificado; operaciones realizadas sin permiso o certificado valido, infracciones a lo dispuesto sobre control de actividades comerciales en territorio comunitario y nacional.⁵⁰

El apartado 2 del artículo 16 indica que las medidas adoptadas deberán ser adecuadas a la naturaleza y gravedad de cada infracción, e incluirán disposiciones con vistas a la intervención y, en su caso, el comiso de los especímenes; el apartado 3 b) establece que, cuando la conducta sancionada haya consistido en la introducción de ejemplares vivos en la comunidad, la autoridad competente del estado miembro autor del comiso podrá, previa consulta al Estado exportador, devolver el espécimen a dicho Estado a expensas de la persona sancionada.

- Programas Ambientales:

Uno de los ejes esenciales de la Política Ambiental de la Unión son los Programas Ambientales. Inicialmente su naturaleza jurídica fue problemática al aprobarse mediante resoluciones de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, hasta que primero el Acta Única Europea y después el Tratado de Maastricht de 1992 los menciona, y establecen su aprobación por un acto del Consejo.

Así, el *Primer Programa Ambiental* de la Comunidad Europea (1973-1976), aprobado el 22 de noviembre de 1973, estableció los objetivos y los principios de esta Política, aún aplicables, y se caracterizó por incluir medidas muy detalladas para luchar contra la contaminación. Seguidamente, el *Segundo Programa Ambiental* (1977-1981) se aprobó el 17 de mayo de 1977, para continuar las acciones ambientales del anterior e

⁵⁰ Cfr. HAVA GARCÍA. E, “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.122 y ss.

iniciar otras nuevas, y, aunque el Programa dedica mayor atención a la lucha contra la contaminación, incluye ya algunas referencias preventivas (en particular, la previsión de las evaluaciones de impacto ambiental). Aprobados los anteriores, el *Tercer Programa Ambiental* (1982-1986) supuso un cambio en la Política Ambiental Comunitaria al hacerla más preventiva e incluir medidas en tal sentido, se centro de nuevo principalmente, en el impacto ambiental y en la contaminación.⁵¹

- Cuarto Programa de acción de la CEE 1987-1992: fue aprobado el 19 de octubre de 1987 para el medio ambiente, se incluyen sectores que no habían sido recogidos en otros programas como el suelo, la naturaleza o la biotecnología, a su vez se amplía el carácter global e integrador de la política ambiental en relación a lo sectorial (agricultura, energía, mercado interior, transporte).⁵²

- Quinto Programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente 1992-2000: presentaba la nueva estrategia comunitaria en materia de medio ambiente y de las acciones que deben emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, correspondientes al período 1992-2000. Derivado de la Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, del 1 de febrero de 1993. Destaca la pérdida de biodiversidad por la presión ejercida sobre la flora y fauna amenazas y sus hábitats en el territorio de la comunidad, como uno de los problemas a nivel mundial, debido a la perturbación de los ecosistemas y a la destrucción de los hábitats. La estrategia comunitaria en materia de protección de la biodiversidad se basa en la gestión sostenible de los hábitats valiosos, gestión que deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo previsto en la Directiva de Hábitats, pero también en el control del consumo y comercio de especies silvestres.

Fija tres medidas a alcanzar durante la vigencia del mismo:

- Conservación o restauración de los hábitats naturales y las especies de fauna y flora silvestre en un grado satisfactorio

⁵¹ Vid. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ D. “El séptimo programa ambiental de la Unión Europea”, Revista Aragonesa de Administración Pública ISSN 1133-4797, núm. 41-42, Zaragoza, 2013. Pág. 72.

⁵² Cfr. HAVA GARCÍA. E, “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.107.

- Creación de una red europea coherente de espacios protegidos, natura 2000.
- Control estricto del comercio con animales de especies silvestres así como de las condiciones de cautividad de los mismos

El Quinto Programa sistematiza de forma orientativa las medidas e instrumentos de intervención de la actual política ambiental comunitaria, propuso mejorar la legislación y garantizar tanto la incorporación de las medidas comunitarias a los ordenamientos jurídicos estatales en los plazos previstos, como el cumplimiento de la obligación de presentar los informes que establecen diversas directivas y reglamentos.⁵³

- Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente («Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos») 2001-2012: agotado el marco temporal del Quinto Programa Ambiental e inspirado en él, la Comisión Europea apruebo este Sexto Programa mediante Decisión nº 1600/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Julio de 2002. El Programa pretende superar el marco normativo y crear un enfoque estratégico, que deberá utilizar los diferentes instrumentos y medios para influir en la toma de decisiones de las empresas, de los ciudadanos y de las autoridades públicas. Cuyo objetivo era hacer frente a los retos que se planteaban en materia de medio ambiente, superando el enfoque legislativo y sustituyéndolo por el estratégico, integrando el medio ambiente en otras políticas y valorando éste en las decisiones relativas al ordenamiento y gestión del territorio.

En relación con la naturaleza y biodiversidad el Sexto Programa buscaba, como objetivo, proteger y restaurar la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales, poniendo fin al empobrecimiento de la biodiversidad en la Unión Europea. Para ello estableció ciertas acciones para lograrlo:

- Aplicar la legislación medioambiental, principalmente en los ámbitos del agua y del aire;
- Coordinar las acciones de los Estados miembros por parte de la Comunidad en caso de accidentes o catástrofes naturales;

⁵³ Cfr. HAVA GARCÍA. E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.118 y ss.

- Estudiar la protección de los animales y las plantas frente a las radiaciones ionizantes;
- Proteger, conservar y restaurar los paisajes;
- Proteger y fomentar el desarrollo sostenible de los bosques;
- Proteger y restaurar los hábitats marinos y el litoral, e incluirlos en la red Natura 2000;
- Integrar la protección de la naturaleza y de la biodiversidad en la política comercial y de cooperación al desarrollo;
- Establecer programas de recogida de información relativa a la protección de la naturaleza y a la biodiversidad;
- Apoyar los trabajos de investigación en el ámbito de la protección de la naturaleza.

El Sexto Programa se recogió en la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, recogiendo los objetivos, plazos y prioridades, los principales ejes del enfoque estratégico y los cuatro ámbitos de acción tal y como se describen en la Comunicación sobre Sexto Programa de Acción.⁵⁴

- Séptimo Programa Ambiental de la Unión Europea, 2013-2020 («Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»): de 20 de noviembre de 2013. Siguiendo el modelo de trabajo de la Unión Europea en materia ambiental, una vez que el Sexto Programa finalizó en el verano de 2012, la Comisión, el Consejo y otras Instituciones iniciaron el proceso de elaboración del Séptimo Programa Ambiental, que se ha plasmado en la Decisión nº1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Entre los objetivos prioritarios destaca el objetivo nº1: proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión. Derivado de la pérdida de biodiversidad que se sigue produciendo y de la degradación de los ecosistemas, así como de las especies foráneas invasoras, que plantean mayores riesgos para las plantas, los animales, los seres humanos, para el medio ambiente y para la economía. La Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020 establece una serie de metas y medidas para invertir esas tendencias negativas, detener la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los

⁵⁴ Vid. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. “El séptimo programa ambiental de la Unión Europea”. Op. Cit. Pág.76.

servicios ecosistémicos para 2020 y restablecerlos en la medida de lo posible. La Estrategia de este programa incluye medidas dirigidas a mejorar la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats, incluso en relación con la red Natura 2000. Para lograr ese objetivo principal propone que debe aplicarse plenamente toda la legislación relativa a la protección del capital natural.

Para proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión, el Séptimo Programa garantizará que para 2020 se hayan detenido la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos, incluida la polinización, los ecosistemas y los servicios que prestan se mantengan y se haya restaurado por lo menos el 15 % de los ecosistemas degradados; y a su vez, que la gestión de los bosques sea sostenible y se protejan los mismos, su biodiversidad y los servicios que prestan y, en la medida de lo posible, se refuercen y se mejore la resistencia de los bosques frente al cambio climático, los incendios, las tormentas, las plagas y las enfermedades.

A tal efecto, se establece en el programa que será necesario acelerar la puesta en práctica de la Estrategia sobre la Biodiversidad de la Unión y potenciar el suministro de información pública de la Unión, la concienciación de los ciudadanos y su educación en materia de medio ambiente.⁵⁵

1.3. Regulación estatal

Nuestra Constitución consagra en su artículo 45, el derecho a disfrutar del medio ambiente y a su vez, establece que serán los poderes públicos quienes velarán por la utilización racional de todos los recursos, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Como se pone de manifiesto el artículo 149.1.23ª, el Estado asumirá la competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre la protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, ello sin perjuicio de las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección. A su vez, el artículo 148.1.9ª establece que las CCAA podrán asumir competencias en la gestión en materia de protección del medio ambiente. Por lo que la legislación básica en materia de protección establecida por el Estado será

⁵⁵ Vid. ANEXO Decisión nº1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

desarrollada por las CCAA y otras Administraciones que hayan asumido dicha competencia.⁵⁶

España posee la mayor riqueza biótica de Europa, con la presencia de entre 50.000 a 60.000 especies animales diferentes. Siendo España el responsable de la conservación del mayor catálogo de diversidad del continente europeo.⁵⁷

Hay que destacar en relación a la protección de la fauna silvestre ciertas Leyes y Reales Decretos que regulan dicha protección:

- La Ley 4/1989 de 27 de marzo de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, fue la primera ley estatal con una pretensión de protección de las especies de fauna silvestre, esta ley únicamente tenía como objetivo la regulación de la fauna silvestre en libertad, quedando fuera de su ámbito regulador los animales domésticos, los animales salvajes que no se encuentran en libertad y la fauna marina, regulada por su normativa específica. Hasta 1989, la legislación estatal aplicable a la fauna salvaje tenía como finalidad la regulación de su muerte y captura, con fines deportivos o comerciales, no se hacía referencia a la protección sostenible y conservación de estas especies en general. Sin embargo, hay que destacar normas precedentes cuyo objeto es la protección de determinadas especies silvestres, como la Ley de 19 de septiembre de 1896 por la que se dictan normas para la protección de los pájaros.⁵⁸

La Ley 4/1989 de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre se centró en la protección de los hábitats y en el establecimiento de regímenes específicos de protección para las especies, comunidades y poblaciones cuya situación así lo requiriera, así lo recogía en su artículo 26.2. Los Poderes públicos debían

⁵⁶ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “El marco normativo y competencial”, en GARCÍA ROMERO, C.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.I. y CUENA BOY, A “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 2002. Pág. 133 y ss.

⁵⁷ Vid. Datos extraídos de la página web del Ministerio de Medio Ambiente.

⁵⁸ Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.292.

preservar, mantener y restablecer superficies de suficiente amplitud y diversidad como hábitats para las especies y plantas silvestres, establecido en su artículo 26.3.⁵⁹

Esta protección se amplía y se recoge en los principios de la Ley 42/2007, que viene a derogar y sustituir a la ley 4/1989.⁶⁰

- La actual Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo objeto recogido en su artículo 1 es el establecimiento del “régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución”. En relación con la fauna silvestre cabe destacar de esta Ley su Título III “Conservación de la biodiversidad silvestre”, establece la obligación de que las CCAA adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. Prohíbe a su vez, la introducción de especies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies autóctonas, así como dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, igualmente se prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos.

⁵⁹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.310.

⁶⁰ Vid. Art. 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad “a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. b) La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad. c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora. d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. e) La integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia. g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres. h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley. i) La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales”.

La Ley 42/2007, en sus artículos 53, y 55 crea, con carácter básico, el “*Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial*” y, en su seno, el “*Catálogo Español de Especies Amenazadas*”, desarrollados por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, se incluirá en el Listado los taxones o poblaciones amenazadas cuando por razones científicas o técnicas así se aconseje. Asimismo, se establecen una serie de efectos protectores para las especies que se incluyan en los citados instrumentos y se establecen dos categorías de clasificación, como son las «vulnerables» y «en peligro de extinción», distinción que permite establecer prioridades de acción e identificar aquellas especies que necesitan una mayor atención. Se mantiene la obligación recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de redactar un plan de recuperación para asegurar su conservación. En relación a los Catálogos y listas de ámbito estatal se elaboraran para centralizar la información con los datos proporcionados por las CCAA.⁶¹

- *El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas*: desarrolla el Listado establecido por la Ley 42/2007 de 13 de diciembre y adapta el anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, a lo establecido en la Ley 42/2007. A su vez este Real Decreto regula las características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de categoría y exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas; las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las especies incluidas en el Listado y en el Catálogo; las características y contenido de las estrategias de conservación de especies del Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad; las condiciones técnicas necesarias para la reintroducción de especies extinguidas y el reforzamiento de poblaciones; las condiciones naturales requeridas para la supervivencia o recuperación de especies silvestres amenazadas; por último, regula los aspectos relativos a la cooperación para la conservación de las especies amenazadas.

La inclusión de especies de fauna silvestre en el Listado conlleva la necesidad de llevar a cabo periódicamente una evaluación de su estado de conservación. Para ello se

⁶¹ Vid. Preámbulo Ley 42/2007 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

debe disponer de información sobre los aspectos más relevantes de su biología y ecología, como base para realizar un diagnóstico de su situación y evaluar si el estado de conservación es o no favorable. Esta evaluación es la que permitirá justificar cambios en el Listado y en el Catálogo

- El Real Decreto 1739/1997 de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/97, del consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Esta norma declara a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, como autoridad científica, encargada de las labores de investigación, estudio y difusión; la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda como autoridad administrativa principal, actuando a través de los Centros y Unidades de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior, encargados de los permisos de exportación e importación de ejemplares o especies incluidos por su nombre científico en el Anexo del Convenio; y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, actuará como autoridad administrativa adicional que controlará la entrada y salida de la fauna silvestre recogida en los Anexos A, B, C y D del Reglamento (CE) numero 338/97, del Consejo de 9 de diciembre de 1996, de acuerdo con la documentación requerida en cada caso.

De acuerdo con LAGUNA DE PAZ, no es posible proteger las especies sin proteger el medio en el que viven, las autoridades públicas deberán observar esta perspectiva en cualquiera de sus actuaciones.⁶² Para ello se aprobó:

- El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado entre otros por el RD 1421/2006

⁶² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.309.

de 1 Diciembre. Mediante este Decreto se transpone a nuestro ordenamiento jurídico interno la parte de la Directiva 92/43/CEE que no estaba incorporada al mismo.

El objeto del presente Real Decreto es contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio, mediante la adopción de medidas para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio español. Las medidas que se adopten tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario en el territorio español y tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.⁶³

El artículo 6 del Real Decreto encomienda a las CCAA fijar las medidas de conservación necesarias para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de las especies en las áreas declaradas como zonas especiales de conservación. Con dicha finalidad, establece a su vez que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a las zonas citadas se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones, que se realizará de acuerdo con las normas estatales de carácter básico y las disposiciones adicionales de protección dictadas por las CCAA que sean de aplicación.⁶⁴

El artículo 7 busca el fomento de la gestión de los elementos del paisaje que sean primordiales para la fauna y la flora silvestres. Con el fin de mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, las Administraciones públicas competentes se esforzarán por fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna silvestre y en particular las que, por su estructura lineal y continua, como son las vías pecuarias, los ríos, riberas, deslindes, estanques o los sotos, son esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres

⁶³ Vid. Art. 1 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

⁶⁴ Vid. Preámbulo del Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

En su artículo 11 se establece que serán las CCAA las que adopten las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna de interés comunitario, así como la gestión de su explotación, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.

- El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La Ley 42/2007, que asume los principios fundamentales de este Convenio, crea el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad como instrumento de planificación de la actividad de la Administración General del Estado en la materia. Su objeto es el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Su contenido incluye un diagnóstico; los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por el Estado. El Plan estratégico establece que tendrá que ser revisado como máximo cada seis años.

El presente Real Decreto aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, que desarrolla lo establecido en la ley. Además, se alinea con los compromisos asumidos por España en la materia en el ámbito internacional y comunitario, en especial los derivados del Plan estratégico del Convenio sobre la diversidad biológica para el período 2011-2020, adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio y de la estrategia europea sobre biodiversidad «Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: una estrategia de biodiversidad de la UE para 2020», adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2011.⁶⁵

1.4. Regulación autonómica

Algunas CCAA han aprobado una ley tendente a la protección de la fauna silvestre, por el contrario, otras CCAA han aprovechado los textos legales relativos a

⁶⁵ Vid. Preámbulo del Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

espacios naturales protegidos para dedicar parte de su articulado a la protección de estas especies. En muchas de ellas destaca la especial atención que prestan a la preservación de los hábitats, como primer paso para conseguir una eficaz y auténtica protección de las especies, de acuerdo con CALVO CHARRO, constituye ésta una medida adicional de protección no prevista por la normativa básica estatal y cuya importancia es indudable.⁶⁶

En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, entre sus principios inspiradores destaca, como se ha visto, la preservación de la diversidad biológica y genética de las poblaciones y de las especies. Sobre este principio una de las finalidades más importantes de dicha ley es evitar la pérdida de diversidad biológica, y de acuerdo con su artículo 52.1 para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, las CCAA y las ciudades con estatuto de autonomía deberán establecer regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera.⁶⁷

De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, las CCAA aprueban los “*Catálogos de Especies Amenazadas*”.⁶⁸ Es un Registro Público de carácter administrativo en el que se incluirán en diversas categorías y de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo, aquellas especies, subespecies o poblaciones de

⁶⁶ Cfr. CALVO CHARRO, M. “Escritos de Derecho Ambiental”. Op. Cit. Pág.312.

⁶⁷ Vid. Preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

⁶⁸ Vid. Decreto 49/1995, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón; Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de creación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada de Asturias; Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección, las áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears; La ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas; Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria; Decreto 33/1998, de 5 de mayo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas modificado por Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, que creaba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla la Mancha; El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas Protección de las especies silvestres; Decreto 37/2001, de 6 de marzo, Creación Catálogo Regional de Especies de Extremadura; Decreto 88/2007 de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas; Decreto 59/1998, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de La Rioja y el Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Especies de la Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja; Decreto 18/1992, de 6 de marzo, aprobación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y creación de la categoría de Árboles Singulares de Madrid; Decreto 167/1996, de 9 de julio, de Regulación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.

fauna silvestre que requieran medidas específicas de protección en cada CCAA. Para decidir la categoría en que se catalogada una especie, subespecie o población, se tendrán en cuenta los factores determinantes de la situación de amenaza en que se encuentre dentro de la CCAA y ello sin perjuicio del régimen propio que resulte aplicable a las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Una vez incluidas la especies dentro de las categorías se establece una protección basada en ciertas prohibiciones, las cuales serán establecidas por las propias CCAA, como es el caso de la Comunidad Valenciana y Galicia, otras remiten a las prohibiciones establecidas en otras leyes autonómicas como Cantabria, Extremadura, Madrid y País Vasco, otras comunidades como Asturias, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja, se remiten a la protección dada por la Ley 42/2007, donde se prohíbe en su artículo 54 dar muerte, perseguir, capturar o molestar a fauna silvestre, así como a sus crías o huevos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo, asimismo se prohíbe poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus restos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen.

De acuerdo con la necesidad de aplicar una política integral de protección de la fauna silvestre, algunas CCAA han aprobado diversa legislación al respecto:

- ANDALUCÍA

- La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres: tiene como objeto la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía. Busca preservar la biodiversidad garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán de manera coordinada por el mantenimiento de la biodiversidad y por la conservación de las especies silvestres y sus hábitats; darán preferencia a la conservación de las especies autóctonas en su hábitat natural, así como se regulará la introducción de las mismas; se evitará la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas que puedan competir con las autóctonas, o alterar su patrimonio genético o sus procesos

biológicos o ecológicos; se protegerá el hábitat propio de las especies silvestres frente a las actuaciones que supongan una amenaza para su conservación o recuperación y se fomentará y controlará los usos y aprovechamientos ordenados y responsables de las especies silvestres en el marco de un desarrollo sostenible orientado a la mejora del nivel y calidad de vida de la población andaluza.⁶⁹

- El Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats: desarrolla el Título I y el Capítulo I del Título II de la Ley 8/2003, en los aspectos reguladores de su conservación y utilización sostenible, estableciendo un régimen general de protección aplicable a todas las especies de fauna silvestres, y un régimen especial para las especies amenazadas. Contempla la protección de sus hábitats y la ordenación de los aprovechamientos sostenibles no cinegéticos. Regula las autorizaciones para las excepciones al régimen general de protección de la flora y la fauna silvestre, los centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres, la elaboración de los planes de protección de dichas especies y los catálogos y registros públicos.

La Consejería competente en materia de medio ambiente será la responsable de la vigilancia, la inspección y el control de la fauna silvestre y sus hábitats, así como de las actividades sometidas a autorización, como el anillamiento científico de aves, la fotografía, la filmación, la grabación y el seguimiento de especies silvestres o la captura tradicional de aves fringílicas. También se reglamenta la tenencia y cría en cautividad de fauna silvestre, ya se trate de especies autóctonas, amenazadas o no, o de especies alóctonas o exóticas, la naturalización de ejemplares y las colecciones científicas, respetando las previsiones al respecto de la legislación básica estatal. El conjunto de Las potestades de policía administrativa establecidas en el régimen general de protección de la flora y la fauna silvestres se realizan a través de la Red Andaluza de Conservación, Recuperación y Reintroducción de especies silvestres. De esta manera, el presente Decreto desarrolla todos aquellos preceptos que tienen que ver con la conservación de la fauna silvestre y de la biodiversidad.⁷⁰

⁶⁹ Vid. Art.3 y art. 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía.

⁷⁰ Vid. Preámbulo del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

- CANTABRIA.

- La Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales: tiene por objeto establecer las medidas necesarias que sirvan para garantizar la protección de los animales en su interrelación con el hombre. Por ello, se proponen acciones especiales para incrementar las poblaciones de las especies autóctonas, con la finalidad de procurar una protección integral de todas las especies de la fauna silvestre. Esta Ley prohíbe, la muerte o captura intencionadas; la retirada de sus nidos y sus huevos; su perturbación intencionada, especialmente en sus períodos de celo, reproducción y crianza; la retención de aquellas cuya caza o captura no estén permitidas; su comercialización y todas las actividades asociadas a su venta, ya estén vivas o muertas, exceptuando las que reglamentariamente se determinen. La práctica de la caza se efectuará sobre aquellas especies de la fauna silvestre que reglamentariamente se determinen, quedando prohibida la utilización de métodos masivos y no selectivos de captura, así como aquellos que pudieran ocasionar la desaparición local de una especie.⁷¹

- La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria: en su artículo 36 establece que será la Consejería competente la que adopte las medidas necesarias para garantizar la conservación de la fauna que vive en estado silvestre en Cantabria y de sus hábitats, con especial atención a las especies autóctonas, las amenazadas, las especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE; y las especies, en particular las prioritarias del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. En su artículo 37 fija una serie de prohibiciones como, dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período de reproducción, crianza, hibernación y migración; y deteriorar, alterar o destruir sus hábitats o sus lugares de reproducción y descanso; destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos. Así como, poseer, retener, vender, traficar, comerciar e intercambiar ejemplares vivos o muertos de especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la importación, la exportación, la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la

⁷¹ Vid Preámbulo de la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales.

exhibición pública. Prohíbe también liberar, introducir o hacer proliferar ejemplares de fauna silvestre alóctonas en el medio natural.

De igual forma, se prohíben los instrumentos o artes de captura o muerte de animales masiva o no selectiva, así como el uso de procedimientos que pudieran causar localmente la desaparición de una especie silvestre o alterar gravemente las condiciones de vida de sus poblaciones. Las prohibiciones podrán quedar sin efecto, previa autorización expresa de la Consejería competente, siempre que no exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la situación de la especie afectada, cuando las especies de fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o seguridad de las personas; cuando de su aplicación se deriven efectos perjudiciales para especies protegidas; para prevenir perjuicios importantes para la agricultura o la ganadería, investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad de animales con esos fines. Establece a su vez que el Gobierno de Cantabria podrá establecer convenios de colaboración con centros de recuperación de otras Administraciones, así como con Instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de los objetivos de conservación de especies silvestres.⁷²

- CASTILLA LA MANCHA

- La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: tiene por objeto el establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión y mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en Castilla-La Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje. Establece mecanismos de protección de las especies autóctonas, ya sea frente a las exóticas introducidas, o bajo supuestos de circunstancias excepcionalmente dañinas para las mismas, o mediante el establecimiento de normas técnicas aplicables a determinados tipos de obras o instalaciones especialmente impactantes. A su vez, establece los

⁷² Vid. Art.37 y art.38 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. El Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria se remite a Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo.

procedimientos para la catalogación de las especies amenazadas y la elaboración de los planes de conservación de estas especies.⁷³

Entre los Principios generales de esta Ley cabe destacar que, las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación, protección y recuperación de las especies de fauna que viven en estado silvestre en la Región, con especial atención a las autóctonas. Se adoptarán medidas para evitar la introducción y proliferación en el medio natural de especies distintas a las autóctonas, especialmente cuando puedan competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. Da prioridad a la conservación de las especies endémicas, así como a las migratorias y a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada o su población muy escasa.⁷⁴

La Ley como medidas de protección establece en su artículo 64, la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado; esta prohibición incluye la retención y la captura en vivo de los animales silvestres, y la destrucción, daño, recolección o retención de sus nidos, crías o huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como alterar o destruir la vegetación natural que constituya su hábitat. En relación con los mismos, quedan igualmente prohibidos la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior. Estas prohibiciones serán de especial aplicación a las especies silvestres incluidas en los Catálogos Regional o Nacional de Especies Amenazadas.⁷⁵

- CASTILLA Y LEÓN

- El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre: aunque el objetivo del presente Decreto es contemplar

⁷³ Vid. Preámbulo de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

⁷⁴ Vid. Art.63 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

⁷⁵ Vid. Decreto 33/1998, de 5 de mayo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas modificado por Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, que creaba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

un régimen específico que determina las especies que tienen la condición “de cinegéticas” y los parámetros en que la actividad de cazar podrá llevarse a cabo, contempla también el control de las poblaciones de fauna silvestre y su anillamiento. Por lo que se podrá realizar controles poblacionales sobre la fauna silvestre, conforme a lo previsto en el marco de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; de los artículos 58 y 62 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, por los daños a la salud y a la seguridad de las personas y de sus bienes, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado y a los bosques, para proteger a la fauna, por razones de control sanitario o epizootias, por desequilibrio poblacional que ponga en riesgo la viabilidad de la población, o de poblaciones de la misma o de diferentes especies de fauna o de flora con las que interactúen; para fines de investigación y de enseñanza, de repoblación, de reintroducción, así como para la crianza orientada a dichas acciones y finalmente para permitir, en condiciones controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades.

Para realizar dicho control de las especies no cinegéticas, siempre que no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, los Servicios Territoriales en materia de caza podrán autorizar acciones de control poblacional que afecten a especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, dichas medidas podrán autorizarse en cualquier época del año. A su vez, la Dirección General podrá autorizar acciones de control poblacional que afecten a especies incluidas en los Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por las causas anteriormente indicadas, en cualquier época del año y a la vista del informe evacuado por el correspondiente servicio territorial en materia de caza. En ambos casos, la autorización administrativa deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los Servicios Territoriales una vez finalizado el control poblacional deberán comunicar el resultado de los mismos a la Dirección General competente en materia de caza.

La realización del anillamiento y marcaje científico requerirá autorización de la Dirección General competente en materia de caza. Estas autorizaciones exclusivamente se expedirán a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha actividad.

En aquellos marcajes que permitan la ubicación del ejemplar mediante sistemas de localización geográfica dentro del territorio de Castilla y León, el titular de la autorización de marcaje estará obligado a suministrar esta información a la Dirección General, aunque el marcaje se realizase inicialmente fuera del territorio de esta CA. La Consejería podrá establecer las condiciones precisas para acreditar dicha capacitación estableciendo, si procediera, las pruebas a realizar en el caso de la determinación de una acreditación específica.

Cuando haya sospecha de muerte no natural de ejemplares de fauna silvestre queda prohibido su traslado fuera de la CA, incluidos los ejemplares heridos, sin autorización expresa de la administración competente.⁷⁶

- CATALUÑA

- Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales: en el capítulo II regula específicamente la fauna salvaje autóctona protegida, el artículo 33.1 indica: “*Respecto de las especies de fauna salvaje autóctona protegidas, se prohíbe la caza, la captura, la tenencia, el tráfico o el comercio, la importación y la exhibición pública, tanto de los ejemplares adultos como de los huevos o las crías, y también de las partes o restos, salvo los supuestos especificados por reglamento. Esta prohibición afecta tanto a las especies vivas como a las disecadas y tanto a la especie como a los taxones inferiores.*”

Esta Ley tiene por objeto establecer las normas generales para la protección y el bienestar de los animales que se hallan de forma permanente o temporal en Cataluña, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras. La

⁷⁶ Vid. Art.1; art.17; art.21; art.22 y art.25.3 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

finalidad de esta Ley es alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, y favorecer una responsabilidad más elevada y una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de los animales.

Establece una serie de prohibiciones como, provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de ansiedad o miedo, suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del comportamiento, matarlos por juego o perversidad o torturarlos, entre otras prohibiciones.⁷⁷

- COMUNIDAD VALENCIANA

- El Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres: regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de las especies catalogadas de fauna y flora silvestres de la *Comunitat Valenciana*, incluyendo cauces que faciliten la participación pública en dicho proceso, y que simplifiquen los trámites de autorización de afectaciones a especies silvestres de fauna y flora.⁷⁸

- EXTREMADURA

- La Ley 8/1998 de 26 de junio de Conservación del Naturaleza y Espacios Naturales: busca el establecimiento de normas adicionales de protección del patrimonio natural de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. La regulación abarca tanto la biodiversidad y los elementos singulares de fauna silvestre como los hábitats de las especies y los procesos ecológicos fundamentales. Asimismo busca la preservación del patrimonio genético de las poblaciones de fauna, especialmente las autóctonas y su diversidad, así como las condiciones en que la

⁷⁷ Vid. Art.1; art. 2 y art.5 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales.

⁷⁸ Vid. Art.1 del Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres.

selección natural actúa sobre ellas. Este objetivo se llevara a cabo mediante figuras tanto de protección de hábitats naturales como de conservación, mantenimiento y recuperación de especies animales.

Dentro de los criterios de protección esta Ley da preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias fuera del mismo; busca evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, en la medida en que puedan competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos; promover lo más eficazmente posible la restauración de los hábitats naturales más alterados, degradados o de mayor interés por su biodiversidad; conceder prioridad a las especies y subespecies endémicas, así como a aquellas otras cuya área de distribución global o cuyas poblaciones sean muy limitadas, así como a las aves migratorias; por ultimo adoptar medidas de actuación coherentes desde la perspectiva del ecosistema y sus relaciones ecológicas.

En relación con la introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa de la Dirección General de Medio Ambiente. No se concederá autorización cuando afecte a la diversidad genética de la zona de destino, o cuando no sea compatible con los planes relativos a especies catalogadas o se trate de especies alóctonas, si no se acredita la inexistencia de riesgos de competencia biológica con especies autóctonas que puedan peligrar su estado de conservación.

A diferencia de otras CCAA, Extremadura regula, a través de autorizaciones concedidas por el órgano competente, la instalación y reposición de vallas o cierres de terrenos rurales, para garantizar la conservación de las especies, la integridad de sus hábitats naturales y el libre tránsito de las mismas

Establece un serie de prohibiciones para las especies de fauna incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, como son, matar, capturar o perseguir, incluyendo sus larvas, crías o huevos, así como la destrucción de su hábitat y en particular de sus nidos, vivares, áreas de reproducción, invernada, reposo o alimentación, la posesión, naturalización, transporte, comercio, oferta con fines de venta

o intercambio, exposición y la importación o exportación de ejemplares vivos o muertos. Se establece la regulación de la indemnización de daños producidos por fauna silvestre.⁷⁹

- GALICIA

- La Ley 9/2001 de 21 de agosto de Conservación de la Naturaleza: tiene como objetivo la protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales y la adecuada gestión de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. En sus actuaciones, la *Xunta* de Galicia adoptará las medidas necesarias para garantizar la conservación, protección y recuperación de las especies de fauna que viven en estado silvestre en Galicia, con especial atención a las autóctonas, otorgando preferencia a las medidas de conservación de las especies en sus hábitats naturales, considerando, cuando fuera necesario, la adopción de medidas adicionales de conservación fuera de dichos hábitats.

Dentro del Régimen general de protección establece una serie de prohibiciones como, dar muerte, dañar, molestar, inquietar, capturar y recoger los huevos o crías de la fauna silvestre, con especial atención a las especies autóctonas. A su vez y de acuerdo con el convenio CITES, prohíbe poseer, traficar y comerciar con ejemplares vivos o muertos o con restos de animales silvestres, así como transportarlos sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente. Excepcionalmente, y siempre que ello no suponga perjudicar la conservación de las poblaciones de la especie de que se trate, podrán quedar sin efecto dichas prohibiciones, previa autorización expresa de la *Consellería* de Medio Ambiente, cuando se produzcan efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas o para otras especies protegidas o sus hábitats; así como para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bosques, las pesquerías y la calidad de las aguas, así como para otros usos de la propiedad; por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción de dichas especies, o cuando se precise para la cría en cautividad y para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea. Por último se permitirá la captura,

⁷⁹ Vid. Art.1; art.57 y art.59 de la Ley 8/1998 de 26 de junio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales.

retención o cualquier otra utilización discreta de determinadas especies en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales.

Esta Ley prohíbe, con el fin de garantizar la conservación de la diversidad genética o evitar la alteración de hábitats, la introducción no autorizada en el medio natural de animales de especies de fauna no autóctona en Galicia, excepto para aquellas especies objeto de aprovechamiento cinegético. A su vez, establece medidas precisas para regular la introducción y proliferación incontrolada en el medio natural de especies distintas a las autóctonas, en especial cuando puedan competir con éstas y alterar su pureza genética o los equilibrios y dinámica ecológicos.

Esta Ley da prioridad, en las actuaciones y planes de conservación, a las especies endémicas y a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada o su población muy escasa, así como a las migratorias.⁸⁰

- LA RIOJA

- Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales, modificada por la Ley 2/2000, 31 mayo: busca garantizar la conservación de especies de la fauna silvestre, con especial atención a las especies autóctonas, creando un catálogo regional de especies cuya protección exigirá medidas específicas. Por ello se prohíbe: maltratar o agredir físicamente a los animales; así como someterlos a cualquier otra práctica que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados; practicarles mutilaciones, suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos, daños o la muerte; así como alimentarlos con vísceras, cadáveres y despojos procedentes de otros animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios; donación de los mismos como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación; venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente; la filmación de escenas con animales para cine o televisión que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, salvo que se trate de un simulacro. En relación con especies protegidas de la fauna silvestre en todo el territorio

⁸⁰ Vid. Art.1; art.44; art.53 y art.56 de la Ley de Galicia 9/2001 de 21 de agosto de Conservación de la Naturaleza.

nacional podrá ser ampliada con aquellas otras cuya peculiar situación en La Rioja así lo aconseje, al objeto de garantizar su conservación.⁸¹

- MADRID

- La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de Madrid: recoge todos los principios de respeto, defensa y protección de los animales silvestres que ya figuran en los Tratados y Convenios Internacionales. Tiene como objeto el establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la conservación y protección de la fauna silvestre en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Establece una serie de prohibiciones en relación con la fauna silvestre como, el transporte de animales silvestres con vulneración de los requisitos establecidos por la legislación vigente; el mantenimiento en cautividad de las especies de fauna silvestres sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, conforme a sus necesidades etológicas; el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos, fiestas populares y otras actividades cuando en ellos pueda ocasionárseles algún sufrimiento; los malos tratos y las agresiones físicas a las especies de fauna silvestre, salvo las actividades científicas o cinegéticas; celebración de peleas entre animales de cualquier especie de fauna silvestre; la filmación de escenas con animales para cine o televisión que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento provocados expresamente para este fin cuando éstos no sean simulados y en el caso de que sean simulados se exigirá autorización de la Agencia de Medio Ambiente para la realización de la filmación.

En relación con la fauna autóctona la Ley establece una serie de prohibiciones como, matar, dañar, molestar o inquietar, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías; quedan igualmente prohibidos la posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos; la perturbación de los espacios de recuperación, crianza, muda, invernada, reposo y paso de las especies animales catalogadas, especialmente las migratorias; asimismo, queda prohibida, salvo expresa

⁸¹ Vid. Preámbulo; art.2 y art.23 de la Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales de la Rioja.

autorización de la Agencia de Medio Ambiente, la observación y la caza fotográfica de especies catalogadas como en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat y el establecimiento a tales fines de puestos fijos a menos de 250 metros de sus puntos de cría, lugares de concentración migratoria o invernada; se prohíbe la utilización como reclamo de aves cegadas o mutiladas, así como la de ejemplares de especies protegidas y prohíbe la utilización de hurón para la caza en cualquier tipo de terreno, salvo autorización expresa de la Agencia de Medio Ambiente; por último se prohíbe la introducción en el medio natural de animales de especies de fauna no autóctona en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Las prohibiciones anteriores podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Agencia de Medio Ambiente, cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud, seguridad de las personas, para otras especies protegidas, o puedan prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la pesca, la calidad de las aguas o para la seguridad de la navegación aérea, asimismo por razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción, y cuando se precise para la cría en cautividad.

La caza solo podrá realizarse sobre las especies que reglamentariamente se declaren como piezas de caza, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies catalogadas. Periódicamente se elaborará un listado de especies cinegéticas y se regulará la caza de las mismas. A su vez, la Agencia de Medio Ambiente, oído el Consejo de Caza, podrá declarar protegidas temporalmente a determinadas especies cinegéticas, atendiendo a la situación de la especie y circunstancias de su entorno.

Solo en caso de que sea preciso reducir la población animal de una especie protegida, en interés de la protección de otras especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, y para prevenir daños importantes a cultivos, rebaños, montes o seguridad de las personas podrá autorizarse la caza selectiva temporal de especies catalogadas. Dicha autorización tendrá carácter extraordinario y requerirá un informe que demuestre que la operación de caza selectiva que deba practicarse no pondrá en peligro la densidad adecuada de población, la distribución geográfica o la tasa de reproducción de la especie protegida en el territorio de la Comunidad. Durante el

tiempo que dure la caza, ésta deberá ser controlada por representantes de la Agencia de Medio Ambiente.⁸²

- MURCIA

- Ley 7/1995, de 21 de abril, de normas reguladoras de la Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial: modificada por la Ley 10/2002, de 12 de noviembre, busca armonizar el fomento racional de la caza y la protección de la fauna silvestre.

El título II de esta Ley trata sobre la protección de la fauna silvestre y sus hábitats, en él se abordan la protección general de la fauna silvestre y el régimen de autorizaciones administrativas. Se crea el Registro de la Fauna Silvestre y el Catálogo de Especies Amenazadas del que se aporta el primer listado (anexo I), elaborado con un criterio muy selectivo. La presencia en dicho catálogo de una especie genera compromisos públicos concretos para la redacción de los planes correspondientes a cada categoría de amenaza.

Regula a su vez, la responsabilidad ciudadana en el auxilio de ejemplares heridos de dichas especies amenazadas y establece que será el Consejo de Gobierno el que elabore un conjunto de medidas de protección que saque de su estado de indefensión generalizado a la fauna invertebrada regional. Se establece en el capítulo IV de este título la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, algunas de ellas reconocidas ya internacionalmente, otras protegidas regionalmente. Estas áreas se conectan con la normativa de ordenación y protección del territorio y el medio ambiente regional.

Como medidas específicas de protección de la fauna silvestre se abordan, entre otras cuestiones, los métodos prohibidos de captura o muerte y el catálogo de especies cazables o capturables en vivo, que se enumeran en los anexos III y IV. Se establecen, además, las indemnizaciones por daños causados por la fauna, así como las medidas de control en la transformación de los hábitats de los animales terrestres en relación con

⁸² Art. 1; art.13; art.14; art.15; art.18 y art. 22 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de Madrid.

instalaciones y obras de infraestructura, la actividad agrícola y la conservación del paisaje rural.

Los últimos títulos apuestan por la creación de guarderías específicas públicas y privadas y la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la vigilancia y el control disciplinario en este tema.⁸³

- NAVARRA

- La Ley 2/1993 de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre; modificada por la Ley Foral 18/2002, de 13 de junio. Cuyo objeto es la protección, conservación, mejora y gestión de la fauna silvestre, encomendando al Gobierno de Navarra y a las Entidades Locales la adopción de las medidas precisas para proteger la fauna silvestre y sus hábitats, en su natural concepción de patrimonio de toda la Comunidad, con especial atención hacia las especies autóctonas de Navarra.

El título II regula con mayor detenimiento la protección de la fauna silvestre y sus hábitats naturales, estableciendo para ello las correspondientes limitaciones y prohibiciones a ciertas actividades humanas y las lógicas excepciones sujetas a control del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, órgano garante en la aplicación de esta norma. Dentro de este título se prevén las medidas destinadas a la conservación de las especies más necesitadas de protección pública, creándose a tal efecto un Registro de la Fauna Silvestre, en el que se incluyen las especies y poblaciones de fauna silvestre que existen en Navarra, así como un Catálogo de Especies Amenazadas. Asimismo, crea una red de áreas de protección de la fauna silvestre y se faculta al Gobierno de Navarra para ampliarla con la finalidad de preservar sus hábitats naturales. En el título III se establece el régimen de ordenación de los aprovechamientos de la fauna, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de la caza, a través de la regulación de vedas, obtención de licencias, la creación de Planes de Ordenación Cinegética y el control anual sobre las especies susceptibles de captura.

⁸³ Vid. Preámbulo de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de normas reguladoras de la Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial.

La Ley establece que los animales silvestres son patrimonio común por lo que no son susceptibles de apropiación física o jurídica, excepto por autorización administrativa. A su vez, se declara protegida la fauna silvestre en Navarra, por lo que queda prohibido dar muerte, dañar, molestar, perseguir o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus larvas, huevos o crías y de todas las subespecies inferiores así como alterar y destruir sus hábitats naturales, nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo. Asimismo, quedan prohibidos la posesión, naturalización, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo la importación, exportación, exposición a la venta y exhibición pública. Estas obligaciones como pasa en otras leyes autonómicas podrán quedar sin efecto previa autorización expresa del Departamento de Medio Ambiente.

La Ley establece que el Gobierno de Navarra será el que fije un sistema adecuado de vigilancia del estado de la fauna silvestre, para preservar a la misma de enfermedades

En relación con las especies silvestres objeto de caza, la Ley establece una serie de prohibiciones en relación a los métodos y medios de captura, con la excepción de la autorización otorgada por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, entre otros se encuentra, la caza con los lazos o anzuelos, trampas, cepos, ballestas o parayns; los reclamos de especies protegidas vivas o naturalizadas y otros reclamos vivos cegados o mutilados así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos incluidas las grabaciones; los aparatos electrocutantes o paralizantes; los faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas artificiales o deslumbrantes; redes, mallas, cebos, humos, gases o sustancias que crean rastro; venenos y explosivos; las armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos, las de aire comprimido, los rifles de calibre 22 de percusión anular, con silenciador o visor nocturno, así como las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes; los hurones y las aves de cetrería; cazar desde vehículos y los balines; así como la utilización de postas o balas explosivas, entre otros.⁸⁴

⁸⁴ Vid. Preámbulo; art.1; art.5; art.7; art.8; art.9; art.15; art.26 y art. 27 de la Ley 2/1993 de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre de Navarra.

- PAÍS VASCO

- Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco: cuyo objeto es la protección y conservación de la naturaleza en el País Vasco, para ello establece unos principios básicos y los instrumentos necesarios a fin de asegurar la utilización ordenada de los recursos naturales por la población, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora. Asimismo busca preservar la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico; por último busca el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies de fauna que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética y el mantenimiento de la capacidad productiva.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, las Administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que la gestión de los recursos naturales existentes sea eficaz, con independencia de su titularidad y régimen jurídico. De la misma forma, la fauna silvestre ha de ser respetada como parte integrante del patrimonio natural, dedicando esfuerzos especialmente a la conservación y recuperación de las especies amenazadas.

Al igual que las leyes anteriores establece una serie de prohibiciones como son, el mantenimiento en cautividad de ejemplares de especies de fauna silvestre sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas conforme a sus necesidades etológicas; el uso de ejemplares de especies de fauna silvestre, viva o muerta, en espectáculos, fiestas populares y otras actividades cuando en ellos pueda ocasionárseles algún sufrimiento o menoscabo; la organización y celebración de peleas con animales de cualquier especie de fauna silvestre; matar o capturar de forma intencionada sea cual fuera el método empleado; destruir, dañar, recoger o retener de forma intencionada sus nidos y vivares, así como los huevos, larvas o crías; perturbar deliberadamente a las especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración; la posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos; así como el aprovechamiento de ejemplares inmaduros cuando sea factible su reconocimiento.

Dichas prohibiciones no serán aplicables cuando se trate de supuestos con regulación específica en la legislación de montes y caza.⁸⁵

2. TUTELA JURÍDICA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

En los países europeos se está produciendo un cambio de perspectiva en la tutela jurídica de los animales domésticos, abandonado la consideración del animal doméstico como cosa mueble en favor de un planteamiento proteccionista y respecto del animal, siendo su bienestar objeto de regulación.⁸⁶

El reconocimiento de intereses e incluso de derechos a los animales por su capacidad de sentimiento y sufrimiento se recoge en las legislaciones europeas. Se da paso a una protección penal que estaba ya presente en el siglo XIX en la legislación inglesa y que fue recogida en la Martin Act de 1822, esta regulación marca el camino hacia las leyes nacionales de protección penal de los animales que siguieron otros países europeos.⁸⁷

Con la Declaración Universal de los Derechos del Animal adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, celebrada en 1977 y proclamada el 15 de octubre de 1978, y finalmente aprobada por la UNESCO y por la Asamblea de la ONU, se reconoció el derecho al bienestar y un propio Estatuto jurídico al animal como seres titulares de derechos. En el ámbito europeo son las Resoluciones del Parlamento Europeo de 21 de enero de 1994 y de 6 de junio de 1996 sobre el Bienestar y el Estatuto

⁸⁵ Vid. Art.1; art.2; art.55 y art.56 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

⁸⁶ Cfr. MARQUÈS I BANQUÉ, M. “Comentario al artículo 337”, en QUINTERO OLIVARES, G (dir.) y MORALES PRATS, F (coord.), “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005, págs. 1264 y 1265.

⁸⁷ Vid. Alemania: primero en el código penal de Sachsen de 1838 y a continuación en los de Bayern, Württemberg, Preussen; Suiza: con diferencias según los cantones, pero hacia 1850 se contempla la pena de cárcel para el maltrato animal; Austria: un Decreto del Ministerio del Interior de 1855 castigó a quien públicamente maltratase a un animal; Francia: fue la “loi Grammont” de 1850 la que castigó con pena de prisión la acción pública y abusiva hacia un animal doméstico; Italia: el código penal italiano de 1889 castigó con pena de cárcel la acción que de manera evidente era constitutiva de un maltrato excesivo.

de los Animales, las que reconocieron que los animales tienen derechos y están dotados de dignidad.⁸⁸

El Convenio Europeo de 13 de noviembre de 1987 sobre Protección de Animales Domésticos, define a éstos como el *“animal que el hombre posee en su casa para su propio disfrute o como animal de compañía o determinado a estos fines”*, y lo delimita del concepto de animal de explotación ganadera, pudiendo a un animal serle aplicado un Convenio u otro dependiendo de la finalidad que le dé su poseedor. Este Convenio prohíbe causarles dolor, sufrimiento o miedo innecesario y su exposición a un peligro e impone la obligación a su poseedor de procurarles el mayor grado de bienestar posible en su alimentación, alojamiento, etc.

De acuerdo con REQUEJO CONDE, para el Derecho, los animales tienen un status jurídico superior al de los bienes inertes, pero sin llegar a ser sujetos de derechos al mismo nivel que los seres humanos, no les considera titulares de derechos subjetivos, ni considera que tengan capacidad jurídica. Busca su protección, siendo punible el comportamiento que les ocasione un sufrimiento innecesario.⁸⁹

El Código Civil regula como bienes muebles a los animales domésticos y al asilvestrado, los considera como susceptibles de adquisición ya sea por ocupación en tanto carezcan de dueño y no sean piezas de caza, o mediante régimen del hallazgo si es un animal doméstico perdido. La consideración del animal como cosa queda clara en la regulación sobre propiedad y posesión, donde el artículo 465 que *“los animales fieros solo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los domesticados o amansados se*

⁸⁸ Vid. Resolución sobre la política relativa al bienestar de los animales (Diario Oficial nº C 076, de 23 de marzo de 1987, Pág. 185) y Resolución sobre el bienestar y el estatuto de los animales en la Comunidad (Diario Oficial nº C 044, de 14 de febrero de 1994, Pág. 206); véase, las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre el bienestar de los animales que materializaron en el Protocolo nº 33 anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, introducido por el Tratado de Ámsterdam y que ahora ha pasado a formar parte del articulado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras las modificaciones operadas en él por el de Lisboa, como nuevo artículo 6 ter (en el futuro, artículo 13) con la siguiente redacción: *“Al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior e investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”*

⁸⁹ Vid. REQUEJO CONDE C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Edit. Comares, Sevilla, 2010. Pag.7 y ss.

asimilan a los mansos o domésticos, si conservan la costumbre de volver a casa del poseedor”, pero según el artículo 612 *“el propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término pertenecerán al que los haya cogido y conservado”*, a diferencia de los animales objeto de caza ya que estos se adquieren por ocupación, de acuerdo con el art. 610 del CC.⁹⁰

La reforma realizada por la LO 5/2010, de 22 de junio del Código Penal refuerza la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas.⁹¹

Se recoge en el artículo 337 del CP como delito el maltrato injustificado generador de lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal doméstico y por otro, la explotación sexual que será castigada al margen de que con ella se produzca sufrimiento al animal. A su vez, el artículo 337 bis recoge como delito el abandono de los animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad. Estos artículos se desarrollaran en capítulos posteriores.

En opinión de TOMÁS DE AQUINO “si alguien se acostumbrara a ser cruel con los animales fácilmente lo sería luego con sus semejantes”; KANT afirmó que “con el trato violento y cruel a los animales se embota en el hombre la compasión por su sufrimiento, debilitándose y destruyéndose paulatinamente una predisposición natural muy útil a la moralidad en la relación con los demás hombres”. IHERING, apunta que “en torturador juvenil de los animales tenemos y condenamos al futuro torturador de hombres”. Por último, LÜBBE opina que el Estado está obligado a proteger a los animales porque así cumple con su deber de proteger el derecho fundamental a la vida y

⁹⁰ Vid. Art.610 del Código Civil: *“Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.”*

⁹¹ Vid. Preámbulo de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

a la integridad física de los hombres, reconocido por el artículo 2.2 de la ley Fundamental de Bonn.⁹²

En muchos de los procedimientos penales iniciados, solo en algunos se ha impuesto pena de cárcel, imponiéndose la mayoría de las veces pena de multa, por falta de concienciación social porque “*la conciencia de atizarle al perro sigue estando arraigada y eso tiene que cambiar*”⁹³; o por la dificultad de realizar una instrucción completa de todas las pruebas de los hechos, según indica REQUEJO CONDE.⁹⁴

El objeto material del delito del maltrato, es el propio animal doméstico, como así lo establece la SAP de Cáceres de 27 de octubre de 2000, a su vez apunta la no necesidad de que tenga que ser propiedad del que lo maltrata.

La acción delictiva que establece el artículo 337 del Código Penal, consiste en maltratar, causando la muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal. Según REQUEJO CONDE, estos actos de violencia física pueden derivarse tanto de acciones como de omisiones, sin motivo razonable o legítimo que vayan contra la vida o la salud del animal, siendo un delito común, comisible por cualquiera siempre que en caso de omisión sea garante, poseedor o cuidador del animal. De acuerdo con HAVA GARCÍA, se trata de un delito de resultado material (muerte) o estructural (lesión grave del animal), independientemente de la actividad que se realice, siempre y cuando se produzca de una forma injustificada. De acuerdo con la SAP de Cádiz de 11 de junio de 2003, el buen trato es aquél que respeta la vida e integridad física del

⁹² Vid. DE AQUINO, T. “Suma contra los gentiles”. Trad. C.I. GÓNZALEZ, México, Porrúa, 2ªed.,1985,lib.III cap.112,n.13; KANT, I. “La Metafísica de las costumbres”. Edit. Tecnos, Madrid, 2005, pág.17; VON IHERING,R. “El fin en el Derecho”. Edit. Comares, Granada, 2000, pág.483; LÜBBE, A.” Hat der Tierschutz Verfassungsrang?”. Edit. Natur und Recht, 16, 1994, pág. 471 y 472; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 118 y 119.

⁹³ Así esta opinión fue vertida por el Fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio VERCHER, en El País el 1 de noviembre de 2006.

⁹⁴ Cfr. REQUEJO CONDE C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pag.44 y ss.

animal, y por derivación el maltrato cuando ponga en peligro la vida del animal o produzca detrimento de su integridad física.⁹⁵

A nivel autonómico las legislaciones imponen deberes y prohibiciones a sus dueños y recogen catálogos de infracciones y sanciones.⁹⁶ Todas las legislaciones autonómicas castigan el maltrato de animales con penas pecuniarias y con la incautación o comiso del animal, dependiendo de cada CCAA el importe de la sanción económica varia, así como la imposición de la pena de inhabilitación para la tenencia de mascotas.⁹⁷

En los preámbulos de las leyes autonómicas se recoge la preocupación por el bienestar de los animales y del consenso social existente en torno a la necesidad de dotarlos de protección frente a los malos tratos. Ciertas Comunidades Autónomas establecen como uno de sus fines el de asegurar *“una eficaz protección de los animales en sí mismos, evitándoseles los tratos degradantes, crueles o simplemente abusivos, por parte del hombre”, partiendo de la consideración de los animales “como seres vivos capaces de sufrir y la superación de toda visión del hombre como dueño y señor*

⁹⁵ Cfr.; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.132; REQUEJO CONDE, C. “La protección penal de la fauna. especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op.Cit.Pag.44 y ss.

⁹⁶ Vid. ANDALUCÍA: Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales; ARAGÓN, Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón; ASTURIAS: Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los animales; BALEARES Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano; CANARIAS Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales, CANTABRIA Ley 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales, Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria; CASTILLA LA MANCHA: Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los animales domésticos, Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza; CASTILLA Y LEÓN: Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía; GALICIA: Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad; PAÍS VASCO: Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección de los animales; MURCIA: Ley 10/1990, de 27 de agosto, de protección y defensa de los animales de compañía; EXTREMADURA: 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales de la comunidad autónoma de Extremadura; LA RIOJA: Ley 5/1995, de 22 de marzo, de protección de los animales; MADRID: Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos; CATALUÑA: Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales.

⁹⁷ Vid. REQUEJO CONDE C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág.15.

*absoluto de un ilimitado derecho a su disposición y al ejercicio de prácticas lesivas o destructivas sobre ellos”.*⁹⁸

Los precedentes anteriores dan lugar, de acuerdo con HAVA GARCÍA, a la existencia de un consenso social generalizado en torno al reconocimiento de cierto “estándar de protección” a los animales, consenso que se plasma en la legislación autonómica y en la estatal que ha venido incorporando la numerosa normativa europea sobre el “buen vivir y el bien morir” de los animales, como lo denomina MUÑOZ MACHADO.⁹⁹

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA.

3.1 Conceptos cinegéticos básicos

1. –Acción de cazar: la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar animales definidos por la Ley de caza como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero.¹⁰⁰

La caza se engloba en dos grandes grupos, la caza mayor (especies de caza mayor) y la caza menor (especies de caza menor), a partir de estos dos grandes grupos podemos encontrar diferentes modalidades de caza, según la especie a cazar y el lugar donde se practique.¹⁰¹

a) Caza mayor.

⁹⁸ Vid. Exposición de motivos de la Ley 5/1997 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía; véase la Ley Foral 7/1994 de Navarra, de 31 de mayo, de protección de los animales.

⁹⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 108, 110 y 111; MUÑOZ MACHADO, S. “Los animales y el Derecho”. Edit. Civitas, Madrid, 1999, pág. 84 y ss.

¹⁰⁰ Vid. Art.2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

¹⁰¹ Vid. http://www.fecaza.com/caza/modalidades.html#.VNCxniyN_vc.

- *Montería*: consiste en batir con ayuda de perros una mancha o extensión de monte cerrada por cazadores distribuidos en armadas y colocados en puestos fijos.
- *Gancho*: variante de la montería cuando el número de cazadores es igual o inferior a treinta y se emplean como máximo cinco rehalas. Esta modalidad también podrá practicarse sin la ayuda de perros.
- *Batida*: consiste en batir un terreno con o sin ayuda de perros, con el fin de controlar poblaciones, evitar daños a la agricultura, a la vegetación, a la ganadería o a la propia caza.
- *Rececho*: consiste en que el cazador busca la pieza sin ayuda de ojeadores.
- *Aguardo o espera*: consiste en que el cazador espera apostado en un lugar a que la pieza acuda espontáneamente a él.
- *Jabalí en mano*: consiste en que un grupo de cazadores con ayuda de perros, colocados en línea y separados entre sí por una distancia variable, avanzan cazando el terreno conjuntamente en una misma dirección.
- *Lanceo de jabalí a caballo*: consiste en cazar jabalíes a caballo con lanza.¹⁰²

b) Caza menor.

- *En mano*: consiste en que un grupo de cazadores, con o sin la ayuda de perros, colocados en línea y separados entre sí por una distancia variable avanzan cazando un terreno.
- *Ojeo*: consiste en batir un determinado terreno por ojeadores con o sin perros para que la caza pase por una línea de cazadores apostados en lugares fijos.
- *Al salto*: consiste en que el cazador en solitario o con perro recorre el terreno para disparar sobre las piezas de caza que encuentre.¹⁰³
- *Al paso o en puesto fijo*: consiste en que el cazador, desde un puesto fijo, espera a que las piezas pasen por el lugar o acudan a él espontáneamente o con ayuda de cimbeles.

¹⁰² Vid. Art.45 del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha.

¹⁰³ En este sentido, cuando el cazador va auxiliado por perros, se denomina caza *a rabo*.

- *Persecución con galgos*: modalidad exclusivamente para liebres, consistente en que el galgo, a la carrera, captura piezas de esta especie sin que los cazadores empleen armas.
- *Perdiz con reclamo*: consiste en que el cazador, apostado en un lugar fijo y con ayuda de un reclamo macho de perdiz, espera a que acudan atraídas por éste piezas de su misma especie.
- *Zapeo o gancho de conejos*: modalidad usada exclusivamente para el conejo, consistente en batir un determinado terreno por batidores con o sin ayuda de perros para que los conejos ahuyentados pasen por una línea de cazadores apostados en lugares fijos.
- *Zorro con perros de madriguera*: modalidad usada exclusivamente para la caza del zorro, consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas específicas adiestrados para conseguir la huida del zorro y su captura, por el mismo perro o por los cazadores.
- *Alanceo*: alancear un jabalí es una práctica tradicional de caza, que se realiza a caballo, con perros que cacen corto, y sobre jabalíes. Los medios utilizados son garrochas de unos tres metros de longitud terminadas en punta de lanza y cruceta. Esta modalidad tradicional es principalmente andaluza.
- *Caza de acuáticas*: Se pueden practicar en puesto fijo y al paso. Es esta una modalidad donde los puestos se colocan en barriles, barcas fijas y posturas entre juncos y malezas, sobre una superficie acuícola donde las aves tienen sus querencias naturales hacia comederos o lugares de refugio y sesteo. Se practica a primera hora de la mañana y en las últimas de la tarde. Es habitual el uso de cimbeles, para atraer las piezas a las proximidades de los puestos, tanto vicos como artificiales. En España se practican las tiradas de patos especialmente en las zonas cercanas a la Albufera valenciana, Doñana o Delta del Ebro. Una vez colocados los puestos de la tirada se espera la entrada de las aves que en ocasiones son movidas desde los cañaverales. Esta modalidad también se puede realizar al paso, pero en este caso los cazadores se ocultan en los lugares querenciosos de las aves cuando entran o salen de sus comederos y dormideros, sobre todo al amanecer y al anochecer.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Vid. http://www.fecaza.com/caza/modalidades.html#.VNCxniyN_vc.

- *Vaqueo*: Es una modalidad tradicional que se practica a caballo y con perros que cacen corto y se ejecuta sobre jabalíes. Se utilizan garrochas de unos tres metros de longitud acabadas en punta de lanza y con cruceta.

Existen otras modalidades de caza cuya práctica ha quedado prohibida, como son la *contrapasa*, los *Zorzales con Red en Colls*, la *caza en Barraca*, el *Parany* y el *Filats*.¹⁰⁷

2. Caza deportiva: es la que se practica sin ánimo de lucro, acentuándose la dimensión social de esta actividad, de ahí que su práctica se lleve a cabo en los denominados cotos deportivos, titularizados por sociedades deportivas de cazadores, creando en ellos zonas de prácticas cinegéticas deportivas.¹⁰⁸

En esta clase de caza la ausencia de lucro se traduce en las prohibiciones de comercializar con el aprovechamiento derivado de esta actividad y de estipular cualquier negocio jurídico de los que deriven beneficios económicos para su titular. Los ingresos derivados de la tramitación de las licencias no se consideraran propiamente beneficios y revertirán en la gestión del coto.¹⁰⁹

¹⁰⁷ <http://www.fecaiza.com/caza/modalidades.html#.VNCxniyN_vc>

¹⁰⁸ Vid. Así el Art. 20 de la Ley 4/1997, de 25 de Junio, de Caza de Galicia establece “1. *Tendrán la condición de terrenos cinegético deportivos aquellas áreas del territorio en que pueda practicarse la caza de conformidad con la legislación específica que regule las prácticas deportivas.*2. *Las sociedades, asociaciones o federaciones de cazadores constituidas al amparo de la legislación del deporte podrán solicitar la declaración de terreno cinegético-deportivo, para practicar en el mismo la caza con un exclusivo carácter deportivo, exento de cualquier ánimo de lucro. En ningún caso la actividad o sus resultados podrán ser objeto de venta o comercialización.*3. *Los solicitantes deberán acreditar la titularidad cinegética con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley y disponer de terrenos continuos cuya superficie mínima y máxima sea de 50 y 250 hectáreas respectivamente. La gestión de estos terrenos se realizará directamente por la entidad titular, que informará periódicamente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del calendario de pruebas, modalidades y cualesquiera otros requisitos que se determinen reglamentariamente.*”

¹⁰⁹ Vid. Art. 38 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza “1. *El Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales dispondrá, para el cumplimiento de sus fines, de las partidas que se consignen a estos efectos en los Presupuestos Generales del Estado, así como de los ingresos procedentes de indemnizaciones y donaciones.*2. *Las tasas y exacciones parafiscales configuradas en el título VI de la presente Ley serán en todo caso ingresadas en la subcuenta correspondiente del Tesoro Público. El importe total de las cantidades recaudadas por dichos conceptos será destinada a financiar los gastos del Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales, figurando a tal efecto entre los ingresos del Presupuesto de dicho Organismo, aprobado por el Ministerio de Hacienda y de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y disposiciones complementarias.*3. *Todos los ingresos comprendidos en el presente artículo serán administrados por el indicado Servicio, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de Administración y Contabilidad del Estado y de las Entidades estatales autónomas.*”

Para fomentar la práctica deportiva de la caza, se contempla la creación de escuelas de formación de caza, dentro de la finalidad de promocionar la educación deportiva, como establece la Ley de caza de Murcia.¹¹⁰

3. Caza técnica. Se justifica la admisión de esta clase por sus diversas finalidades, ya sean de carácter científico, de investigación, por razones de control, de gestión. Constituyen una excepción a la práctica común de la caza, por ello precisa ser autorizada por la autoridad competente. Su excepcionalidad se halla en la posibilidad de practicarla sobre especies, en lugares y con medios, por lo general, no permitidos.¹¹¹

4. Caza industrial y comercial. Es aquella que persigue su explotación industrial, por ejemplo, en granjas cinegéticas o cotos privados, o comercial, a través de la producción, venta o suelta de piezas de caza, vivas o muertas, según los casos.¹¹²

¹¹⁰ Vid. Art. 21 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia “En los cotos sociales, los deportivos, estén gestionados por la Consejería o por otras instituciones o entidades, los privados y los intensivos podrá autorizarse por el órgano competente la creación de escuelas de formación para la práctica de la caza. Los programas, contenidos formativos, calendarios y demás aspectos estarán sujetos a la aprobación de la Consejería que ostente la competencia en cada caso.”

¹¹¹ Vid. Art. 12 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana “1. La conselleria competente en materia de caza, previo informe técnico que lo justifique, podrá excluir mediante resolución expresa, en cualquier clase de terrenos. Las prohibiciones anteriores, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y no hubiera otra solución satisfactoria. a. Cuando puedan existir efectos perjudiciales a la salud y seguridad de las personas o para la seguridad del tráfico terrestre o aéreo. b. Cuando puedan existir efectos perjudiciales para especies protegidas. c. Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna, ya sea tanto cinegética como no, y pescable como no, o la calidad de las aguas. d. Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies silvestres. e. Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichas acciones. 2. La resolución administrativa a la que hace referencia el apartado anterior deberá ser motivada y especificar: a. Las especies que serán objeto de las excepciones. b. Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como el personal cualificado. c. Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar. d. Los controles que se ejercerán. e. El objetivo o razón de la acción. 3. Cuando la resolución administrativa anterior afecte a zonas de seguridad solo podrán emplearse armas de fuego ante la inexistencia de otra solución satisfactoria. En este caso, la resolución establecerá aquellas garantías necesarias para la protección de los bienes y personas. 4. El director Territorial de la Conselleria competente en materia de caza emitirá permisos nominativos, cuando sea procedente, a los responsables y colaboradores de estos tipos de caza. 5. Sin perjuicio de las competencias de los ayuntamientos en el control de animales domésticos abandonados o sin dueño, la conselleria competente en materia de caza podrá autorizar a los titulares de los espacios cinegéticos el control por medio de captura en vivo, con métodos selectivos que no provoquen daño, de aquellos animales domésticos asilvestrados que puedan causar daños o constituirse en un peligro para las personas, los bienes o las especies silvestres. En caso de captura, se podrán a disposición de la administración competente.”

¹¹² Vid. Art. 27 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza: “1. La explotación industrial de la caza, entendiéndose por tal la orientada a la producción y venta de piezas de caza, vivas o muertas, podrá llevarse a cabo en granjas cinegéticas o en cotos privados de caza; en ambos casos será necesario contar con la previa autorización del Ministerio de Agricultura y cumplir las condiciones fijadas en la

2. –Cazador: frente al furtivo, es aquél que cumple todos los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la caza, aunque no todo el que practica legalmente la caza se define como cazador, pues no se consideran como tales quienes colaboran mediante tareas de mero auxilio material en la acción de cazar.¹¹³ No se consideran cazadores y se exceptúan, por tanto, de la necesidad de licencia los Ojeadores, Batidores, Secretarios o Podenqueros que asistan en condición de tales a ojeos, batidas o monterías, sin portar armas de caza desenfundadas, pero, a requerimiento de la Autoridad o de sus agentes deberán acreditar debidamente esta condición.¹¹⁴

3. – Perros de caza:

- *Rehala*: toda agrupación compuesta por un mínimo de 20 y un máximo de 30 perros, conducidos por una sola persona (rehalero), auxiliado o no por otras personas, que baten en conjunto la mancha con toda la agrupación de perros. El rehalero o conductor de la rehala tendrá la consideración de cazador. El manejo de agrupaciones de menos de 20 perros, pertenecientes a uno o varios propietarios o poseedores, requerirá la presencia de al menos un perrero o batidor que tendrá la consideración de cazador.

- *Perros atraillados*: la agrupación de varios perros de rastro (sabuesos, griffones o razas similares) que son conducidos mediante una traílla por un montero, auxiliado o no por otras personas. El empleo de perros atraillados en cacerías supone el manejo simultáneo de varios grupos de perros atraillados independientes. El montero o conductor de cada traílla tendrá la consideración de cazador.

misma 2. Cuando se trate de empresas de carácter turístico-cinegético, inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Ministerio de Información y Turismo, deberán acreditar las condiciones exigidas por dicho Departamento para el ejercicio de las actividades de estas empresas.3. La comercialización de las piezas de caza se reglamentará adecuadamente con el fin de que se garantice tanto la procedencia de las piezas cuanto la época de su captura”

¹¹³ Vid. Art.34.3 de la Ley de caza de 4 de abril 1970; art.33.12; art.36.1 o art.48.3 del Reglamento de la Ley de caza de 25 de marzo de 1971.

¹¹⁴ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. Pág. 16.

- *Collera de galgos*: la constituida por un máximo de dos perros de la citada raza. Se podrá ampliar en un ejemplar cuando éste sea un cachorro de menos de seis meses de edad.¹¹⁵

4. – Fauna silvestre

- *Especies cinegéticas*: aquéllas aves o mamíferos que en su estado de normalidad poblacional son capaces de mantener un crecimiento poblacional significativo y que, siendo susceptibles de un aprovechamiento concreto, tienen atractivo para los cazadores deportivos gracias a sus capacidades de defensa así como aquéllas especies que se críen en granjas o explotaciones cinegéticas y sean susceptibles de naturalización en el medio. El resto de aves y mamíferos silvestres serán considerados no cinegéticos.¹¹⁶

- *Especie protegida*: especie sujeta a medidas legales que impiden su captura, venta, caza, tenencia o exterminio.

- *Especies alóctonas*: especies de animales originarios de un lugar distinto de aquel en que viven, y han sido por tanto introducidas.

- *Especies autóctonas*: especies de animales originarios del sitio en que viven.

- *Especies endémicas*: es aquella que solo existe en una zona geográfica determinada, de extensión variable, pero generalmente restringida respecto al tamaño de las áreas de las especies con las que se compara.¹¹⁷

- *Animal asilvestrado*: espécimen animal de procedencia doméstica, que está establecido y se mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni supervisión de las personas.¹¹⁸

¹¹⁵ Vid. Art.5.4 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

¹¹⁶ Vid. Art. 14.1 y art.14.3 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

¹¹⁷ Vid. Glosario de la web www.juntadeandalucia.es/medioambiente/pls/wwwcma/consulta_glosario.

5. -Las piezas de caza: cualquier ejemplar, vivo o muerto, de las especies cinegéticas, así como de los ejemplares de aves fringílicas no catalogadas y susceptibles de captura en vivo mediante modalidades de caza tradicional. También tendrán la consideración de piezas de caza los ejemplares de las especies de mamíferos o aves no catalogadas cuando su caza esté expresamente autorizada por necesidades de control ordinario, debido a razones de equilibrio poblacional.¹¹⁹

6. -Terrenos cinegéticos

La Ley de Caza omite toda referencia a los terrenos no cinegéticos, obviando así una previa clasificación entre terrenos cinegéticos y no cinegéticos, según que en ellos se pueda o no practicar la caza, que sí que está presente sin embargo en la legislación autonómica. Se pueden definir los terrenos no cinegéticos como aquellos en los que la actividad de la caza está prohibida con carácter general.¹²⁰

Tal prohibición puede obedecer a dos finalidades diferentes:

- a) proteger especies cinegéticas concretas; es el caso de los refugios de caza
- b) proteger la seguridad de personas y bienes; es el caso de las Zonas de Seguridad o de los Terrenos cercados.¹²¹

6.1. -Terrenos cinegéticos de aprovechamiento común

Hace referencia tanto a los terrenos de titularidad pública como privada donde el ejercicio de la caza podrá practicarse sin más limitaciones que las generales fijadas en la Ley y su Reglamento. Son aquellos terrenos que no están sujetos a ningún régimen especial, así como los terrenos rurales cercados en los que existiendo accesos practicables, no tengan junto a ellos carteles prohibiendo la entrada. Para la Ley de Caza

¹¹⁸ Vid. Art.2 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

¹¹⁹ Vid. Art. 15 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

¹²⁰ Vid. Art. 10.2 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art. 26.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art. 31.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹²¹ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.28 y ss.

de 1970 todo terreno es libre o de aprovechamiento común, salvo que exista una expresa resolución administrativa que lo declare sujeto a un régimen especial; en consecuencia, todos pueden cazar libremente en ellos con sujeción a las normas que regulan el ejercicio de la caza; se pretendía con ello facilitar el ejercicio de la caza, sin embargo en la práctica el acotamiento se ha convertido en la regla general y los terrenos libres en la excepción.¹²²

6.2. - Terrenos sometidos a régimen especial

Estos terrenos constituyen un peculiar grupo que integra junto a terrenos propiamente cinegéticos, otros que no lo son e incluso Espacios naturales protegidos. Tienen todos ellos en común tres notas:

1. Requieren una declaración formal por parte de la Administración, que les atribuya tal calificación jurídica.
2. El aprovechamiento de la caza en ellos exige un conjunto de condiciones especiales que varía en función del tipo de terrenos.
3. El ejercicio de la caza no es libre, sino que se reserva en cada caso a determinadas personas.

Terrenos sometidos a régimen especial son los Parques Nacionales, los Refugios de Caza, las Reservas Nacionales de Caza, las Zonas de Seguridad, los Cotos de caza, los Cercados y los adscritos al Régimen de Caza Controlada.¹²³

Seguidamente se hará referencia a aquellos terrenos que NO tienen naturaleza propiamente cinegética

a) **Parques:** son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores

¹²² Vid. Art. 9 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; y art. 9 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970; GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Edit. Comares, Granada, 2006, pág. 68.

¹²³ Vid. Art.9 Ley de caza de 4 de abril 1970; véase el Art.12 Ley de caza de 4 de abril 1970; véase también el Art. 10 Ley de caza de 4 de abril 1970 “*En los Parques Nacionales, establecidos al amparo de la legislación de Montes, el ejercicio de la caza se ajustará a lo prevenido en las disposiciones que reglamenten el uso y disfrute en cada parque*”.

ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación.¹²⁴

b) **Refugios de caza:** el Gobierno podrá establecer por Decreto refugios nacionales de caza cuando por razones biológicas, científicas o educativas sea preciso asegurar la conservación de determinadas especies de la fauna cinegética. El ejercicio de la caza estará prohibido con carácter permanente.¹²⁵

c) **Reservas nacionales de caza:** en aquellas comarcas cuyas especiales características de orden físico y biológico permitan la constitución de núcleos de excepcionales posibilidades cinegéticas, podrán establecerse reservas nacionales de caza, que en todo caso deberán constituirse por Ley. En dichas reservas nacionales, la protección, conservación y fomento de las especies corresponderá al Ministerio de Agricultura, debiendo ajustarse el ejercicio de la caza a lo establecido en la Ley de su constitución.¹²⁶

d) **Zonas de seguridad:** aquellas en las cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes. Se considerarán zonas de seguridad las vías y caminos de uso público, las vías pecuarias, las vías férreas, las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes, los canales navegables, los núcleos urbanos y rurales y las zonas habitadas y sus proximidades. Tendrán análoga consideración las villas, jardines, parques destinados al uso público, los recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado como tal. Reglamentariamente se prohibirá o condicionará, según los casos, el uso de armas de caza en las zonas de seguridad y en los lugares en que su ejercicio pueda perjudicar al ganado o a su normal pastoreo.¹²⁷

¹²⁴ Vid. Art.30 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹²⁵ Vid. Art.11 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

¹²⁶ Vid. Art.12 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

¹²⁷ Vid. Art.13 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

e) **Cercados:** aquellos que se encuentran rodeados por muros, cercas, vallas, setos o cualquier otra obra o dispositivo construido con el fin de impedir o prohibir el acceso de las personas o animales ajenos o el de evitar la salida de los propios. En los terrenos cercados no acogidos a otro régimen cinegético especial, la caza estará permanentemente prohibida, salvo en los terrenos rurales cercados en los que se pueda penetrar a través de accesos practicables, siendo considerados a efectos cinegéticos como terrenos abiertos, salvo que el propietario, haga patente mediante carteles o señales la prohibición de entrada a los mismos.¹²⁸

Seguidamente se hará referencia a aquellos terrenos que tienen naturaleza propiamente cinegética.¹²⁹

a. **Reservas de caza:** a nivel estatal se denominan «reservas nacionales de caza», y a nivel autonómico «reservas regionales de caza», pero se trata de una misma institución jurídica cuya finalidad es la protección, conservación y fomento de determinadas especies cinegéticas, cometidos éstos que son asumidos por la respectiva Administración Pública. La protección prevalece sobre el aprovechamiento cinegético, de manera que la práctica de la caza siempre se subordina a las exigencias de aquella.

b. **Zonas de caza controlada:** son superficies que se constituyen únicamente sobre terrenos cinegéticos comunes, en los que el aprovechamiento, protección y fomento de la riqueza cinegética se lleva a cabo de conformidad con los Planes elaborados por la Administración autonómica competente, a fin de evitar el abuso de la actividad cinegética; la legislación estatal, a diferencia de lo que sucede con los cotos, no exige una superficie mínima para su constitución. Corresponde a las CCAA señalar este tipo de zonas, gestionándolas por sí mismas o a través de una sociedad de cazadores colaboradora, lo que requerirá una adjudicación mediante concurso público. El plazo mínimo de adscripción a este régimen de caza es de 6 ó 9 años según se trate de caza menor o mayor. A nivel de legislación autonómica, determinadas CCAA prevén estas zonas de caza controlada, mientras que otras muchas prescinden de ellas, lo que lleva a algunos autores a reivindicar su supresión, quedando englobados dentro de los cotos

¹²⁸ Vid. Art.19 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

¹²⁹ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 36 y ss.

sociales de caza, ya que nada nuevo aportan al régimen de los terrenos de aprovechamiento especial.

c. **Cotos de Caza:** los cotos constituyen la estructura básica sobre la que se desarrolla la actividad venatoria, como afirma GÁLVEZ CANO.¹³⁰

Sus antecedentes inmediatos los constituyen los vedados de caza, así lo recogía la Ley de caza de 1879. A su vez, la Ley de caza de 4 de abril 1970 y las legislaciones autonómicas de caza, convierten a los cotos privados de caza, en opinión de ORTUÑO NAVALÓN y MANZANA LAGUARDA, en las unidades básicas de gestión y aprovechamiento de la caza. Son dos los elementos que definen un coto, tanto a nivel estatal como en el ámbito autonómico: el primero, se trata de una superficie continua susceptible de aprovechamiento cinegético. Dependiendo de la superficie serán de caza mayor (500ha) o menor (250ha), esta superficie la fijaran las CCAA y varia de una a otra, no se considerará interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse en acotados por la existencia de ríos, arroyos, vías o caminos de uso público, ferrocarriles, canales o cualquier otra construcción de características semejantes; el segundo, para su constitución se necesita autorización administrativa.¹³¹

El artículo 15.1 de la Ley de caza de 1970, establece que la declaración de coto de caza se efectuará a petición de los titulares o patrocinadores interesados, sea persona física o jurídica que ostente el derecho de aprovechamiento cinegético en los terrenos que se pretenden acotar; la Ley de caza de 4 de abril 1970 permite que los propietarios colindantes se asocien voluntariamente para constituir un coto de caza. La normativa autonómica establece procedimientos similares para su constitución.¹³²

En los terrenos acotados, de acuerdo con el artículo 15.6 y 15.9 de la Ley de 1970, la caza deberá estar protegida y fomentada, aprovechándose de forma ordenada. Cuando no se cumpla dicha finalidad, la Administración, previa incoación del oportuno

¹³⁰ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.79 y ss.

¹³¹ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 38.

¹³² Vid. Art.16.2 y 17.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza; art.17.1 y 18.2 de Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.23.5 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

expediente, en que será preceptiva la audiencia de los interesados, podrá anular la declaración que autorizaba la creación del acotado. A su vez, como recoge el artículo 15.8 de la misma ley, los cotos de caza deberán ostentar en sus límites a todos los aires las señales que reglamentariamente se determinen.

Quedan prohibidos y serán nulos los contratos de subarriendo del aprovechamiento cinegético de los cotos de caza. Asimismo será nula la cesión a título oneroso o gratuito de los contratos de arrendamiento celebrados al amparo de la Ley, o cualquier otra figura jurídica que pretenda alcanzar las finalidades establecidas en la misma.¹³³

Según ORTUÑO NAVALÓN y MANZANA LAGUARDA “el coto supone una derogación del régimen común de la caza; supone una reserva del aprovechamiento cinegético a favor de sus titulares y de aquellos a quienes estos autoricen, que serán los propietarios del terreno acotado y las personas autorizadas por éstos en los cotos privados, los adjudicatarios del aprovechamiento y autorizados por ellos en los cotos locales, y todos los cazadores que lo soliciten en el caso de los cotos sociales”.¹³⁴

Clasificación de los cotos:

c.1. Son Cotos privados de caza: los que pueden constituir los propietarios o titulares de derechos reales o personales que lleven consigo el aprovechamiento de los terrenos cinegéticos, para reservarse el disfrute en exclusiva de la caza; efectivamente, el ejercicio del derecho de caza solo corresponderá a sus titulares y a las personas a las que éstos autoricen. Están previstos con carácter general en las leyes de caza autonómicas, a excepción de Asturias, que no contempla los cotos privados. Se requiere una superficie mínima para su constitución, determinada por la ley estatal o en su caso por la CCAA, estas últimas centran su objetivo en la obtención de superficies suficientes para permitir la adecuada planificación cinegética.¹³⁵

¹³³ Vid. Art.15.10 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

¹³⁴ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 40.

¹³⁵ Vid. Art.16 Ley de caza de 4 de abril 1970.

c.2. Son Cotos locales de caza: los que patrocinan los Ayuntamientos y Entidades locales menores, dentro de sus respectivos términos, representando conjuntamente a los propietarios o titulares de derechos sobre los terrenos cinegéticos, que accedan a ello voluntariamente; a tal fin, no solo el Estado, sino asimismo las Entidades de Derecho público y privado y los particulares, podrán aportar sus terrenos para que formen parte de estos cotos; se requiere también que tengan una superficie mínima. En estos cotos el ejercicio del derecho de caza corresponde a los adjudicatarios de los aprovechamientos o a las personas que ellos autoricen, y a tal fin, la contratación y adjudicación del aprovechamiento cinegético de sus terrenos se efectuará por el Ayuntamiento o Entidad local interesados, siendo viable tanto la adjudicación directa, como la subasta, así como la cesión de los derechos de aprovechamiento a sociedades de cazadores o su gestión directa por el Ayuntamiento. Las condiciones técnicas aplicables al aprovechamiento serán fijadas por la Administración, y vendrán sujetas a una duración temporal¹³⁶. No suelen estar contemplados en las legislaciones autonómicas.¹³⁷

c.3. Son Cotos Sociales: son aquellos establecidos para facilitar el ejercicio de la caza, en régimen de igualdad de oportunidades; y a tal fin el ejercicio de la caza en ellos se reglamentará en forma tal que, previa adopción de las medidas precisas para asegurar la conservación y fomento de las especies, cuantos cazadores lo soliciten y cumplan las normas que en cada caso se establezcan, puedan tener la oportunidad de practicarla. Su establecimiento podrá llevarse a cabo sobre todo tipo de terrenos públicos o privados, sean del Estado o de sus Organismos autónomos, o de particulares que cedan gratuitamente sus derechos o mediante contrato suscrito con la Administración. La declaración, titularidad, gestión y administración de estos cotos corresponderá a la Administración de la Comunidad autónoma en que se encuentren, que la puede llevar a cabo directamente o a través de convenio con entidades colaboradoras, como sociedades de cazadores o federaciones de caza. Los beneficios obtenidos se destinarán a actividades de protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética del coto, así como a su inversión en obras de interés social en los municipios afectados. Las legislaciones autonómicas contemplan este tipo de cotos, si bien algunas de ellas los denominan cotos regionales.

¹³⁶ Vid. Art.17 Ley de caza de 4 de abril 1970.

¹³⁷ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 42.

c.4 *Otros*: las legislaciones de las Comunidades Autónomas han establecido otros tipos de cotos que no aparecen en la Ley estatal de caza, como es el caso de los siguientes:¹³⁸

- Cotos deportivos: aquellos en los que la gestión del aprovechamiento cinegético se realiza sin ánimo de lucro, se titularizan por sociedades de cazadores deportivos federadas o por la propia Federación de Caza y el aprovechamiento cinegético se realiza por cazadores afiliados a dicha federación. Se entenderá que no tienen la consideración de ánimo de lucro los ingresos derivados de la expedición de permisos para practicar el deporte cinegético, que deberán revertir directamente en la gestión del coto¹³⁹.
- Cotos federativos: serán considerados como tal los que, constituidos con idénticos requisitos a los establecidos para los cotos privados de caza, tengan titularidad federativa. Su régimen de funcionamiento será similar al de los cotos privados, si bien vendrán obligados a establecer una zona de reserva, de superficie continua y con una permanencia mínima de dos años, excluida del aprovechamiento cinegético, al menos sobre el 15 por 100 de la superficie del coto.¹⁴⁰
- Cotos intensivos: aquellos autorizados para un aprovechamiento cinegético comercial de carácter intensivo. Se entiende que un coto tiene carácter intensivo, cuando las piezas de caza cobradas en él proceden mayoritariamente de ejemplares liberados y no de reproducción natural en el lugar
- Cotos comerciales: aquellos autorizados a un uso más intensivo y comercial de la caza. Por su tipo de aprovechamiento podrán ser: cotos intensivos o cotos de piezas vivas de caza. Estos cercados no podrán construirse ni total ni parcialmente sobre parques naturales o montes de utilidad pública.¹⁴¹

¹³⁸ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 43 y ss.

¹³⁹ Vid. Art.25.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

¹⁴⁰ Vid. Art.23 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

¹⁴¹ Vid. Art. 30.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

7. - Reservas Naturales: son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. Estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación, conservación o educativas se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.

8. - Monumentos Naturales: son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. Estará prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.

9. Paisajes Protegidos: son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales.

10. - Planificación y ordenación de la actividad cinegética¹⁴²

10.1 - Planes técnicos de ordenación cinegética: la ordenación técnica de los espacios cinegéticos declarados se plasmará en un plan técnico de ordenación cinegética suscrito por técnico competente que ordenará las intervenciones de uso, gestión y fomento a realizar en cada espacio dando preferencia a las medidas de conservación y

¹⁴² Vid, Art.45 y 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

mejora de los hábitats propicios para cada especie cinegética. En ningún espacio, y con independencia de la titularidad pública o privada del mismo, podrá practicarse ninguna clase de aprovechamiento cinegético, mientras éste no se encuentre sujeto a una ordenación técnica adecuada. La vigencia máxima de cada plan no podrá superar los cinco años.

10.2. - Memoria y plan anual de gestión: el titular de cada espacio cinegético declarado presentará anualmente una memoria sobre la gestión efectuada en la anualidad anterior en la que se contemplará de manera detallada las actuaciones de mejora acometidas y un plan de gestión para la siguiente temporada conforme al plan técnico de ordenación aprobado. Dicha memoria contendrá, en los casos que sean preceptivos, los resultados del programa preventivo y de vigilancia sanitaria. La memoria y el plan de gestión detallarán y justificarán, respectivamente, las desviaciones y los adelantos o retrasos de ejecución habidos respecto al plan técnico de ordenación cinegética. No podrá practicarse aprovechamiento alguno mientras que la memoria y plan anual de gestión no estén aprobados por la Conselleria competente en materia de caza. Transcurrido el plazo de seis meses desde su presentación sin resolución expresa, se entenderán aprobados.

11. - Veda: cese en la actividad de caza durante un periodo determinado. Las vedas se decretan administrativamente para proteger los recursos de la sobreexplotación. Suelen tener un carácter periódico y pueden afectar a una o varias especies. La Orden General de Vedas se publica anualmente en Boletín Oficial de cada CCAA.

12.- Armas:¹⁴³

- *Arma de fuego:* Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor.

¹⁴³ Vid. Art. 2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

- *Arma automática:* Arma de fuego que recarga automáticamente después de cada disparo y con la que es posible efectuar varios disparos sucesivos mientras permanezca accionado el disparador.
- *Arma semiautomática:* Arma de fuego que después de cada disparo se recarga automáticamente y con la que solo es posible efectuar un disparo al accionar el disparador cada vez.
- *Arma de repetición:* Arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones.
- *Arma de un solo tiro:* Arma de fuego sin depósito de municiones, que se recarga antes de cada disparo mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara o en un alojamiento especial a la entrada del cañón.
- *Arma de fuego corta:* Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm.
- *Arma de fuego larga:* Cualquier arma de fuego que no sea un arma de fuego corta.
- *Arma blanca:* Arma constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante.
- *Munición:* Cartucho completo o sus componentes, incluidas las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o los proyectiles utilizados en un arma de fuego, siempre que estos componentes estén autorizados en territorio nacional.
- *Ballesta:* Arma que sirve para disparar flechas o bodoques, formada por un arco montado horizontalmente sobre un soporte provisto de un mecanismo que tensa la cuerda y otro que dispara.
- *Arco:* Arma hecha de una varilla de acero, madera u otra materia elástica, sujeta por los extremos con una cuerda o bordón, de modo que forme una curva, y la cual sirve para disparar flechas.

3.2. Normativa relativa a las armas de caza

Al realizarse la actividad cinegética principalmente con armas de fuego, es de suma importancia hacer referencia a la normativa de las mismas. Las autoridades españolas de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ejercen una tutela especial sobre la fabricación, reparación, tenencia, uso y conservación de las armas.¹⁴⁴

La administración mediante el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, establece los requisitos y condiciones que regulan lo relativo a las armas, dicha regulación es competencia exclusiva del Estado.¹⁴⁵

El Reglamento de Armas, en su artículo 3, clasifica las armas en siete categorías a efectos de la correspondiente autorización a particulares, de las cuales la 2ª, 3ª y la 7ª categoría hacen referencia a las armas utilizadas para la actividad cinegética:¹⁴⁶

- Dentro de la 2ª categoría, se encuentran

¹⁴⁴ Vid. Art.28 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “1. Corresponde al Gobierno: a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales. b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en relación con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. c) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos a) y b). 2. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización.”; art.29. “1. Corresponde al Gobierno: a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales. b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en relación con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. c) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos a) y b). 2. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización.”

¹⁴⁵ Última reforma realizada por el Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

¹⁴⁶ Vid. Anexo VII del presente trabajo.

- 1- Armas de fuego largas para vigilancia y guardería: como específicas para desempeñar dichas funciones.
 - 2- Armas de fuego largas rayadas (**rifles**): se comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor, también comprende los cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, no estén clasificadas como armas de guerra.
- Dentro de la 3ª categoría, se encuentran
- 1- Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 mm (22 americano) de percusión anular, ya sean de un disparo de repetición o semiautomática.
 - 2- **Escopetas** y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado como punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra.
- Dentro de la 7ª categoría, se encuentran:
- 2- **Las ballestas.**
 - 5- **Los arcos.**

Las armas de categoría 2ª.2, como es el caso de los rifles y las de la categoría 3ª.2, las escopetas, son las armas de fuego autorizadas y más utilizadas para la caza en los terrenos de caza españoles, las armas de la categoría 7ª.2 y 5 son igualmente válidas para la caza, pero su uso es menos frecuente. El Reglamento de Armas, en su artículo 4, establece la prohibición de fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de armas o de sus imitaciones, destacando como prohibidas para la caza, las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Vid. Art. 4 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas “1. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones: a) Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización de modelo o prototipo. b) Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, para alojar pistolas u otras armas. c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. d) Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos. e) Las

A su vez, el artículo 5 del referenciado cuerpo legal, establece una prohibición genérica para la publicidad, compraventa, tenencia y uso de determinadas armas, con la salvedad de los funcionarios especialmente habilitados y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias para ello. Este mismo artículo, en relación con las armas permitidas, establece ciertas limitaciones, destacando en lo referente a la caza, las armas semiautomáticas de las categorías 2ª. 2 y 3ª.2, cuya capacidad de carga sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea plegable o eliminable; los silenciadores aplicables a armas de fuego; la cartuchería con balas perforantes, explosivos o incendiarias y las armas de fuego largas de cañones recortados.¹⁴⁸

armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. g) Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas. h) Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas. 2. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él. “

¹⁴⁸ Vid. Art.5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas “1. Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de: a) Las armas semiautomáticas de las categorías 2ª.2 y 3ª.2, cuya capacidad de carga sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea plegable o eliminable. b) Los «sprays» de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas. De lo dispuesto en el presente apartado se exceptúan los «sprays» de defensa personal que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte, autorización o tarjeta de residencia. c) Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares. d) Los silenciadores aplicables a armas de fuego. e) La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los proyectiles correspondientes. f) Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles «dum-dum» o de punta hueca, así como los propios proyectiles. g) Las armas de fuego largas de cañones recortados. 2. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como objeto de adorno o de coleccionismo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 107 de este Reglamento, de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego. Se exceptúan de la prohibición aquellas cuyos modelos hayan sido aprobados previamente por la Dirección General de la Guardia Civil, con arreglo a la normativa dictada por el Ministerio del Interior. 3. Queda prohibido el uso por particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes. Su venta requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos. También se prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el reborde o tope del mango hasta el extremo. No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil, en la forma prevenida en los artículos 12.2 y 106 de este Reglamento, la compraventa y la tenencia exclusivamente en el propio domicilio, con fines de ornato y coleccionismo, de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros”.

La Sección Quinta del Reglamento de Armas en su único artículo 6, establece lo que se consideran armas de guerra, claramente prohibidas para la caza, siendo estas armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 mm, o las de inferior calibre, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa como de guerra, así como las armas de fuego automáticas y cualesquiera otras que así lo considere el Ministerio de Defensa.

3.2.1. Adquisición de armas

El Reglamento de Armas en su artículo 49, establece que para adquirir armas de fuego en España será necesario haber obtenido una autorización previa a tal efecto. No se podrá conceder dicha autorización a una persona residente en otro Estado Europeo cuando éste la exija en su territorio, salvo que conste fehacientemente el consentimiento de las autoridades competentes de dicho Estado, y si no fuese preciso dicho consentimiento, pero la posesión de las armas de que se trate requiriese de declaración en ese Estado, la adquisición será comunicada a sus autoridades. No será necesaria dicha autorización especial de adquisición para personas residentes en España que previamente hubieran obtenido la licencia necesaria para el uso de dicha arma.

Según establece el artículo 51 del Reglamento de Armas, el armero o particular que transmita la propiedad de un arma de fuego, informará a la Intervención de Armas de la Guardia Civil de toda cesión o entrega que tenga lugar en España, precisando:

- a) La identidad del comprador o cesionario; si se trata de una persona física, su nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección y número de pasaporte, de documento nacional de identidad o tarjeta o autorización de residencia, así como la fecha de expedición e indicación de la autoridad que los hubiere expedido; y si se trata de una persona jurídica, la denominación o razón social y la sede social, así como los datos reseñados, respecto de la persona física habilitada para representarla,
- b) el tipo, marca, modelo, calibre, número de fabricación y demás características del arma de fuego de que se trate, así como, en su caso, el número de identificación, y
- c) la fecha de la entrega.

Si el adquirente fuera residente de otro Estado miembro de la Unión Europea, la Intervención de Armas dará conocimiento inmediato de la entrega a la autoridad competente del Estado de residencia, con inclusión de los elementos de identificación del adquirente y del arma.

Cuando la entrega tenga lugar en otro Estado miembro de la Unión Europea y se realice a una persona con residencia en España, el adquirente deberá comunicar a la Dirección General de la Guardia Civil dentro de un plazo máximo de diez días desde la entrada en España, los elementos de identificación.

Las armas de fuego largas rayadas (utilizables para caza mayor), dentro de las cuales también se comprenden los cañones estriados adaptables a escopetas de caza con recámara para cartuchos metálicos, deberán ser guardadas en los propios domicilios de sus titulares, en cajas fuertes o armeros autorizados, con las medidas de seguridad necesarias, aprobadas por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, que podrá comprobarlas en todo momento. En el caso de que los titulares de dichas armas adquieran miras telescópicas para las mismas (rifles), previamente las armerías deberán comunicar su venta a la Intervención de Armas.¹⁴⁹

Por último, las armas deben transportarse siempre descargadas y dentro de sus fundas o estuches cerrados y en todo momento deben ir acompañadas de la guía de pertenencia, la cual será expedida por la Intervención de Armas de la Guardia Civil. A su vez nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio Español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos competentes, siendo así necesaria la licencia de armas.¹⁵⁰

3.2.2. Reparación, préstamos o posibles enajenaciones de armas.

El Real Decreto 137/1993 de armas, establece en su artículo 26, que la reparación de armas de fuego se hará solamente por las industrias que las hubiesen fabricado o por armeros autorizados por la Intervención de Armas de la Guardia Civil,

¹⁴⁹ Vid. Art.100 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

¹⁵⁰ Vid. Art.89 y art.96 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

con establecimientos abiertos y que estén inscritos en un registro que llevará la misma Intervención. A su vez llevarán un libro en el que se anoten las entradas y salidas de las mismas, con los datos del arma y del propietario, enviando mensualmente a la Intervención de Armas correspondiente, una copia de las anotaciones sentadas en el mismo. No se admitirá ningún arma a reparar si no va acompañada de su guía de pertenencia, la cual quedará en poder del armero mientras dure la reparación y será en su momento devuelta al interesado con el arma. Este documento deberá ser sustituido por una guía de circulación, expedida por la Intervención de Armas de origen, cuando el propietario del arma que desee repararla resida en localidad distinta a la del armero y no la lleve personalmente. Además, en ningún caso se permitirá que la reparación suponga modificación de las características, estructura o calibre del arma sin conocimiento de la Intervención de Armas de la Guardia Civil y aprobación en su caso del Ministerio de Defensa.

El artículo 27.2 del Reglamento de armas, hace referencia a la posibilidad de probar las armas por las personas interesadas en su adquisición, siempre que posean la correspondiente licencia de armas, para ello el fabricante, comerciante o sus representantes expedirán un documento de carácter personal e intransferible a la persona que vaya a realizar las pruebas, con arreglo al modelo oficial en el que se reseñen el arma o armas, la licencia y el lugar de las pruebas, con un plazo de validez de cinco días, si se han de efectuar en la misma localidad y de diez días, en otro caso. Dicho documento deberá ser previamente visado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, sin cuyo requisito no será válido.¹⁵¹

De acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de Reglamento de armas, *“las armas no pueden enajenarse, prestarse ni pasar por ningún concepto a poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia”*. A su vez, el referido cuerpo legal, establece en su artículo 91, una de las excepciones a la mencionada regla general, en virtud de la cual, los españoles y extranjeros residentes en España pueden prestar o ceder sus armas de caza a quienes tengan licencias de caza y licencias para armas largas rayadas para caza mayor o para escopeta de caza, según los casos. Dicha cesión será

¹⁵¹ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Normativa de armas”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.189 y ss.

exclusivamente para cazar y se documentará con una autorización escrita, fechada y firmada por el titular del arma, por un período máximo de quince días. A su vez, para la práctica de tiro deportivo, los titulares de las pistolas, revólveres y armas de concurso pueden prestar este tipo de armas con una autorización por escrito a quienes estén habilitados legalmente para su uso. Del mismo modo, con la oportuna autorización escrita y a los mismos efectos expuestos, se podrán prestar las armas documentadas con tarjeta de armas. Será imprescindible que las armas siempre sean prestadas con sus guías de pertenencia o sus tarjetas de armas.¹⁵²

En relación con la actividad cinegética, el cazador debe tener presente la peligrosidad de cualquier arma, por lo que deberá conocer de forma obligatoria el reglamento de armas. A su vez, las armas deberán estar convenientemente custodiadas y guardadas en lugar seguro, debiendo estar siempre controladas, en caso de pérdida, robo o sustracción, debe notificarlo a la autoridad competente y en todo caso a la Intervención de Armas correspondiente.¹⁵³

3.2.3. Revista de las armas

El artículo 90 del Reglamento de Armas, establece la obligación a los cazadores de pasar revista a los rifles y escopetas cada cinco años. Las revistas se pasarán en el momento de presentar las solicitudes de renovación de las correspondientes licencias de armas de los titulares de aquéllas. Dichas revistas las pasarán, en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil, dentro del mes correspondiente a la renovación de la licencia. La autoridad competente de la intervención de la Guardia Civil, realizará una inspección ocular de las armas que para su tenencia requieren de guía de pertenencia, que trata de verificar el estado de conservación del arma, que no haya sufrido modificación en sus características, así como que sigue en posesión de su titular legal.¹⁵⁴

¹⁵² <Vid. www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/tramitesarmasexplo/cesion_temporal/index.html>

¹⁵³ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Normativa de armas”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág. 189 y ss.

¹⁵⁴ Cfr. BERNAD DANZGERGER J. y TRUEBA P. “Examen de armas. Conocimiento y manejo. I Libro de teoría”. Edit. Fedenca, 2000, Madrid. Pág.59.

Para el pase de la revista, es inexcusable la presentación del arma personalmente o por medio de tercero debidamente autorizado por escrito y que el poseedor cuente con licencia correspondiente al arma de que se trate, de acuerdo con el artículo 97.1 del Reglamento de Armas. Esta autorización a un tercero, constituye otra excepción a la regla general recogida en el artículo 92 del Reglamento de Armas que impide que las armas puedan enajenarse, prestarse o estar en poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia.

El hecho de no pasar dos revistas consecutivas será causa de anulación y retirada de la guía de pertenencia, quedando el arma depositada en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, así lo refleja el artículo 90.5 del Reglamento de armas. Serán consideradas infracciones leves la omisión de la revista de las armas, con multa de hasta 300,51 euros y retirada de las armas, cuando se trate de armas de las categorías 1.^a y 2.^a y con multa de hasta 150,25 euros y retirada de las armas, cuando se trate de las restantes armas sometidas a revista.¹⁵⁵

3.3. Señalización de los terrenos

Los terrenos sometidos a régimen cinegético especial, según SÁNCHEZ GASCÓN, serán distinguidos a simple vista de aquellos otros en el que el aprovechamiento es común o libre, por medio de su señalización¹⁵⁶. A su vez la señalización es imprescindible para conocer el tipo de aprovechamiento cinegético o en su caso la prohibición que corresponda a ese terreno.¹⁵⁷

Las señalizaciones que informarán al cazador sobre el tipo de terreno cinegético en cuestión, se efectuara mediante de carteles (colocados en todas las vías de acceso y a lo largo de dicha vía cuando atraviere el terreno) y señales distintivas y rótulos en muros o tapias, (colocados a lo largo de todo su perímetro exterior). Así lo recoge la Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial de 1 de abril de

¹⁵⁵ Vid. Art.157. b) 1 y 157. b) 2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

¹⁵⁶ Cfr. A. SÁNCHEZ GASCÓN “El Derecho de Caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988. Pág.33.

¹⁵⁷ Vid. Art.17.6; art.18.15 y art.19.13 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

1971, por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales.

Los carteles deberán estar colocados de forma que una vez situado el observador enfrente de dichos carteles, tenga al alcance de su vista a los dos más inmediatos, sin que la separación sea de más de 100m (carteles de segundo orden). La legislación estatal establece que la distancia entre carteles podrá ser de 200m, por circunstancias topográficas u orográficas especiales, previa autorización administrativa. Deberán situarse en todo el perímetro exterior y en el interior en los casos de los terrenos enclavados. Quedan fuera de la obligación de señalización las zonas de seguridad.¹⁵⁸

Los carteles deben tener dos requisitos básicos, homogeneidad en la forma y claridad en el contenido, de tal forma que todos tengan más o menos las mismas dimensiones, tipo de letra o forma, y que a su vez, el contenido del mensaje sea claro para el cazador.¹⁵⁹

Existen dos tipos de señales establecidas en la legislación estatal, las de primer orden (descriptivas) y las de segundo orden (de referencia).¹⁶⁰ Estas señales son carteles que se colocan sobre postes, ya sean metálicos o de madera, como se ha dicho anteriormente, estos carteles deben colocarse a lo largo del perímetro exterior.¹⁶¹

1. Señales de primer orden o descriptivas

Se colocarán en todas las vías de acceso que penetren en el territorio en cuestión, así como en todos los puntos intermedios que sean necesarios para que la distancia entre dos carteles no exceda de 600 m. El material utilizado para los carteles debe garantizar su adecuada conservación y rigidez, y sus dimensiones serán de 33 por 50 cm, con un

¹⁵⁸ Vid. Art.10.4 a) y b) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

¹⁵⁹ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de Caza en España”. Op. Cit. Pág.34

¹⁶⁰ Vid. Art. Primero de la Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial de 1 de abril de 1971, por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales.

¹⁶¹ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Señalización de los terrenos”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.167 y ss.

margen de tolerancia de 10 por 100 en cada dimensión, colocados a una altura desde el suelo de entre 1,5 y 2,5 m. Los colores utilizados son letras negras sobre fondo blanco, las dimensiones de las letras son 8 cm de alto y 1 cm de ancho, con excepción de los casos de Reserva nacional de caza y Refugio nacional de caza, donde la palabra “nacional” podrá tener unas dimensiones menores para adaptarse al tamaño del cartel en cuestión. Las leyendas que llevan los carteles, corresponden a su régimen cinegético, estas pueden ser: “coto privado de caza”, “parque nacional”, “coto local de caza”, “refugio de caza”, “refugio nacional de caza”, “caza controlada”, “reserva nacional de caza” y “coto social de caza”. Estos cuatro últimos deberán reflejar en sus carteles el escudo de la Administración que sea titular, ya sea el de la CCAA o el del Estado.¹⁶²

2. Señales de segundo orden o de referencia

Son complementarias a las de primer orden y consisten en rótulos que suelen ir pintados en rocas, muros, etc. o bien en distintivos normalizados. Estas señales de segundo orden se situarán entre las señales de primer orden, con distancias máximas de una a otra de 100 m.¹⁶³

- Distintivos normalizados: estarán realizados en materiales que garanticen su conservación y rigidez, con unas dimensiones de 20 por 30 cm y se colocarán a una altura mínima desde el suelo de entre 1,5 y 2,5 m. Se caracterizan por la posición de sus colores (en diagonal), siendo la parte superior derecha blanca y su parte inferior izquierda, negra. En este tipo de señales no se rotula ninguna leyenda.

- Rótulos: estos pueden ir pintados en rocas, paredes, muros, etc., con letras mayúsculas y en un color que contraste con el fondo. Las dimensiones mínimas serán de 15 cm de altura y 3 cm de grueso. Para los cotos privados, locales o sociales, la leyenda del rótulo será “coto de caza”, para los demás casos figurará idéntica leyenda que en los carteles de primer orden.

- Chapa de matrícula: en los carteles de primer orden relativos a “cotos privados de caza” y “cotos locales de caza”, se colocará una chapa matrícula que estará realizada en

¹⁶² Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de Caza en España”. Op. Cit. Pág.34 y ss.

¹⁶³ Vid. ANEXO VIII del presente trabajo.

metal con unas dimensiones de 3 por 13 cm, del mismo color que el propio metal del que está compuesto, en ella se grabarán o moldearán ciertas letras y números de 1,5 cm, que corresponden a la provincia donde se halle el terreno y el número será el que facilite la Administración.

Los carteles tienen cierta uniformidad en todo el territorio español, con ciertas particularidades establecidas por algunas CCAA en relación a su legua oficial, distancia o dimensiones de los carteles ligeramente distintas.¹⁶⁴

Algunas CCAA, como la asturiana, establecen en su regulación la obligación de un Registro de Terrenos Cinegéticos, donde se recogerá la fecha de constitución y caducidad, denominación del terreno, Ayuntamientos que comprende, superficie en hectáreas, titular de la gestión y del aprovechamiento cinegético o la delimitación catastral. Ese Registro, según RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, resulta de gran ayuda a la hora de seleccionar el terreno de caza, pero aun así es necesaria la señalización complementaria una vez se encuentre el cazador en el terreno.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Vid. ANDALUCÍA: Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza; ASTURIAS: Art.39 Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza; Baleares: Art.27 del Reglamento 1/2012 del Consell Insular de Mallorca por el cual se regulan las vedas y los recursos cinegéticos, Reglamento de 30 de marzo de 2012 del Consell d'Eivissa, por el cual se aprueba la Orden general de vedas y de regulación de los recursos cinegéticos de la isla de Eivissa; CANARIAS: Orden de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la señalización de terrenos de uso cinegético en la Comunidad Autónoma de Canarias; CANTABRIA: Art.11 Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; CASTILLA LA MANCHA: Art. 56 del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha; CASTILLA Y LEON: Orden de 18 de junio de 1998, por la que se establecen normas para la señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos; CATALUÑA: Resolución de la Dirección General del Medio Rural, de 31 de enero de 1986, sobre normas para la señalización de los terrenos sometidos a régimen especial de caza, pesca continental, terrenos con trufas, caminos ganaderos y espacios natural, señales C-01 y C-31; EXTREMADURA: Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza; GALICIA: Orden de 23 de julio de 2002 por la que se regula la señalización en los terrenos cinegéticos; LA RIOJA: Decreto 17/2004, de 27 de febrero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Caza de La Rioja; MADRID: Resolución de 1 de abril de 1971 de la dirección general de montes, caza y pesca fluvial por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales; MURCIA: Resolución de 22 mayo 2006 de la Dirección General del Medio Natural por la que se dictan condiciones para la señalización de la red de Refugios de Fauna existentes en la Región de Murcia; NAVARRA: Decreto foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra; PAIS VASCO: Art.48 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza.; VALENCIA: Orden 5/2012, de 7 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas para la señalización de los espacios cinegéticos

En cuanto a la venta de chapas de matrícula, las casas comerciales que se dediquen a la venta o estampado de chapas de matrícula deberán exigir al comprador el documento acreditativo de la matrícula o número que debe figurar en las chapas.¹⁶⁶

3.4. Periodos hábiles de caza.

- Órdenes de veda

Las Órdenes de veda condicionan la caza, para favorecer la conservación de las especies cinegéticas, estableciendo limitaciones y épocas del año hábiles para practicar la actividad cinegética aplicable a las distintas especies en las diversas regiones españolas, según lo recoge el artículo 23 de la Ley de Caza de 1970. Armonizan los distintos aprovechamientos con las diferentes circunstancias o características que se pueden dar de forma anual en cada territorio. La veda es una medida de carácter general derivada del cierre del periodo hábil de caza. Constituye, de acuerdo con GÁLVEZ CANO, uno de los elementos clave en la ordenación de la actividad cinegética, junto con la determinación de las especies cazables y los métodos prohibidos.¹⁶⁷

Las propias órdenes, durante el periodo de vigencia de la misma, pueden contemplar la posibilidad de modificar lo establecido en ellas o adoptarse otras medidas, mediante resoluciones, por motivos justificados o excepcionales, con el fin de preservar o conservar las poblaciones cinegéticas, incluso puede llegarse a prohibir la caza.¹⁶⁸

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece que serán las CCAA las que determinen los terrenos donde puede desarrollarse la actividad cinegética, así como las fechas hábiles para cada especie, de modo que quede garantizado la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio. A su vez esta Ley prohíbe con carácter general el ejercicio de la caza

¹⁶⁵ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Señalización de los terrenos”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.167 y ss.

¹⁶⁶ Vid. Art.Primer de Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial de 1 de abril de 1971, por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales.

¹⁶⁷ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.193 y ss.

¹⁶⁸ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.92 y ss.

de aves durante la época de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias. Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales por razones de orden biológico o sanitario, asimismo, la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá elaborar informes que puedan ser utilizados por las Comunidades autónomas para la determinación de dichas moratorias o prohibiciones.¹⁶⁹

Cada CCAA publicará anualmente las Órdenes de Veda, mediante disposición reglamentaria publicada en el BOE, especificando las variaciones que se puedan dar en ciertas provincias. En ellas se determina a nivel provincial o autonómico, las fechas exactas de apertura y cierre de la temporada de caza, (la época, días y periodos hábiles de caza de cada especie); las especies cazables; los terrenos cinegéticos; las modalidades de captura permitidas y prohibidas; cuantía, cupos, así como las limitaciones generales o excepciones en beneficio de la fauna cinegética y las medidas preventivas para su control. A su vez, deben respetar lo establecido en la normativa básica estatal y ajustarse también a los Planes aprobados por la Administración para la ordenación de los recursos naturales o para la fauna protegida.¹⁷⁰

Las Órdenes de Veda son principalmente aplicables en los terrenos de aprovechamiento cinegético común. Los terrenos que tienen aprobado el Plan Técnico de caza se estará a lo dispuesto en las resoluciones aprobatorias de los planes, siempre que no sean contrarias a los límites establecidos por las propias Órdenes de Veda, ya que si fuere así se vulneraría el principio general de inderogabilidad singular de los reglamentos. Es más, en ocasiones la propia Orden de Veda se remite a lo que dispongan los Planes Técnicos de caza, como por ejemplo en la determinación de los días hábiles de caza.

¹⁶⁹ Vid. Art.62.2 y 62.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

¹⁷⁰ Al asumir las competencias de caza las CCAA, designaron de forma diferente a las Ordenes de Veda: plan general de caza, orden anual de caza, orden de vedas, orden regional de caza, disposición general de vedas etc. Es el caso de Navarra, donde se le denomina orden foral de vedas. Véase: art.45. de la Ley de Caza de Aragón; Art.20 de la Ley de Caza de Asturias; Art.23 de la Ley de Caza de Canarias; art.62 de la Ley de Caza de Castilla y la Mancha; art.46 de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Murcia; art.52.2 de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo de Navarra y el art.51 de la Ley de Caza de La Rioja.

De acuerdo con LAFUENTE BENACHES, las órdenes de veda son de dos clases: generales y anuales para toda la CCAA; o extraordinarias y temporales, para una zona determinada y por razones extraordinarias.¹⁷¹

- Media Veda

Es un periodo de caza de carácter excepcional y se abre solo para ciertas especies, como son, la tórtola, la codorniz, paloma torcaz, urraca, grajilla y corneja negra, en la medida que la cría o la entrada de aves migratorias haya sido buena. A su vez se tiene en cuenta, por parte de las autoridades de medio ambiente de cada CCAA, las condiciones climáticas, de la flora y la fauna. Si no se dan las condiciones propicias no se abre el periodo de caza.

La media veda suele abrirse aproximadamente a mediados de agosto hasta mediados de septiembre y es cada CCAA la que fija las limitaciones en cuanto a horarios, cupos y las fechas de apertura en función de las especies. La media veda no afecta por igual a todo el territorio de la CCAA por lo que las respectivas órdenes de media veda especifican las especies y los días hábiles de caza por cada región de la comunidad. Las órdenes se publican cada año en el Boletín Oficial de cada comunidad autónoma.¹⁷²

4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PIEZAS DE CAZA

4.1. Determinación de las piezas de caza.

La Ley de caza de 1970, en su artículo 4, determina que *“son piezas de caza los animales salvajes y los domésticos que pierdan esa condición que figuren en la relación que a estos efectos deberá incluirse en el Reglamento para la aplicación de esta Ley”*. Respecto del deber de inclusión reglamentario de los animales salvajes y los domésticos que pierdan dicha condición, cabe mencionar que el artículo 4 del Decreto 506/1971, de

¹⁷¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza” Op. Cit. Pág.92 y ss.

¹⁷² Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Periodos hábiles de caza”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.173.

25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, fue derogado por la Disposición Derogatoria del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. El Reglamento de Caza mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa, como es el caso de: Cataluña, Madrid, Ceuta y Melilla.

4.1.1. Diferente legislación autonómica

Para la legislación autonómica, serán piezas de caza y como tal podrán ser cazadas, las especies animales que se determinen expresamente.

- A. Galicia en su Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza, establece que serán objeto de caza los ejemplares pertenecientes a las especies que se declaren como cinegéticas, desde ese momento tendrán la condición de piezas de caza. A su vez, fija que las especies cinegéticas serán declaradas objeto de caza mediante orden de la consejería competente en materia de caza. Por último determina que las especies protegidas y los animales domésticos no podrán ser objeto de caza.¹⁷³
- B. Asturias en su Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza, establece que la caza solo podrá realizarse sobre las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre que reglamentariamente se definan como piezas de caza. El aprovechamiento cinegético, en todo caso, deberá acomodarse a los planes que anualmente apruebe el órgano competente en la materia. En ningún caso la declaración como piezas de caza podrá afectar a las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre catalogadas como especies amenazadas.¹⁷⁴
- C. Cantabria en su Ley de 12/2006, de 17 de julio, de Caza, considera pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas cuya caza esté habilitada por la Orden Anual de Caza. No podrán calificarse como especies cinegéticas las especies,

¹⁷³ Vid. Art. 3 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.

¹⁷⁴ Vid. Art. 4 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias.

subespecies o poblaciones de fauna silvestre incorporadas al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, las incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas o aquellas otras cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. A su vez, establece que anualmente se determinará mediante orden del Consejero competente la lista de las especies cinegéticas que podrán ser objeto de caza en cada temporada cinegética.¹⁷⁵

- D. País vasco en su Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, establece que serán piezas de caza los animales salvajes o domésticos asilvestrados que figuren en la relación de especies cinegéticas que apruebe el Gobierno Vasco. No se podrán declarar cinegéticas a las especies protegidas. A su vez, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno Vasco las especies, subespecies y poblaciones de fauna silvestre o asilvestrada que puedan ser declaradas cinegéticas. El listado de especies de las órdenes forales de vedas podrá reducir, pero no ampliar, las especies cazables en cada territorio.¹⁷⁶
- E. Navarra en su Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca, determina que serán piezas de caza las especies, subespecies y poblaciones de fauna silvestre, establecidas anualmente en la disposición general de vedas como cinegéticas. Se podrán considerar piezas de caza los animales domésticos asilvestrados. Quedan excluidas las especies catalogadas o sujetas a cualquier régimen de especial protección, los animales domésticos y los animales salvajes domesticados.¹⁷⁷
- F. Aragón, en su Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza, establece que son especies cinegéticas, y, por lo tanto, piezas de caza, las que se determinen en el Plan general de caza de Aragón publicado en su Boletín Oficial para cada temporada cinegética, quedando excluidas de tal categoría las especies catalogadas o sujetas a cualquier régimen de especial protección y los animales domésticos no asilvestrados. A efectos de la planificación y ordenación de los recursos cinegéticos, las especies

¹⁷⁵ Vid. Art. 9 y 10 de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.

¹⁷⁶ Vid. Art. 3 y 11 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País Vasco.

¹⁷⁷ Vid. Art.8 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

cinagéticas se clasificarán en el Plan general de caza de Aragón en dos grupos: especies de caza mayor y de caza menor.¹⁷⁸

G. Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana. Define a las especies cinagéticas como aquéllas aves o mamíferos que en su estado de normalidad poblacional son capaces de mantener un crecimiento poblacional significativo y que, siendo susceptibles de un aprovechamiento concreto, tienen atractivo para los cazadores deportivos gracias a sus capacidades de defensa, así como aquéllas especies que se críen en granjas o explotaciones cinagéticas y sean susceptibles de naturalización en el medio y que consten en el listado de especies cinagéticas en la Comunidad Valenciana. El resto de aves y mamíferos silvestres serán considerados no cinagéticos y se clasificarán en especies catalogadas, protegidas y no catalogadas.¹⁷⁹

H. Murcia en su Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial, entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies contenidas en el Anexo de la Ley y a su vez recogida en la Orden General Anual de Vedas. En ningún caso podrán tener tal consideración, las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre catalogadas como especies amenazadas, a las que será de aplicación la legislación reguladora de su régimen específico de protección. Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, o de daños, o de equilibrio ecológico, previa autorización concedida por la Consejería competente especificando, en su caso, los procedimientos y medios de caza a utilizar que habrán de ser selectivos y no actuar en perjuicio de otras especies o de sus hábitats. La tenencia de piezas de caza en cautividad requerirá la autorización de la Consejería competente cuando se trate de más de tres piezas de caza mayor o más de veinte piezas de caza menor. La Consejería competente podrá autorizar la caza y captura de especies cinagéticas, en lugares y épocas prohibidas, para su utilización con fines científicos o propiamente cinagéticos, así como la recolección de huevos, larvas o crías. Asimismo, se otorgarán a título personal e intransferible, y cuya petición deberá venir avalada por un informe previo favorable de una institución

¹⁷⁸ Vid. Art.6 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

¹⁷⁹ Vid. Art.14 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

directamente relacionada con la actividad científica del peticionario, la cual será responsable subsidiaria de cualquier infracción que aquél cometiera.¹⁸⁰

- I. Andalucía en su Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, determina en su artículo 30 que solo podrán ser objeto de aprovechamiento y comercialización las especies silvestres en las condiciones que se determinen reglamentariamente. A su vez el artículo 20.2 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, determina que los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de especies objeto de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados para evitar los daños o perjuicios producidos por las poblaciones de las especies objeto de caza. A tales efectos, se consideran animales domésticos asilvestrados los animales de compañía y los de renta, que pierdan la condición de domésticos, formando parte del medio natural, viviendo libre del dominio del hombre llegando a ser independientes de los cuidados humanos y que produzcan daños en el ecosistema que habitan.
- J. Extremadura en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza, determina que serán piezas de caza los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre definidas como tales por la Junta de Extremadura, de conformidad con la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente. La caza con carácter general solo podrá realizarse sobre las piezas de caza, no obstante, con carácter excepcional la Consejería competente en materia de caza, atendiendo a razones de índole técnico, científico, biológico, agropecuario o sanitario, y en coordinación con los órganos competentes en estas materias, podrá autorizar la captura de animales de especies silvestres distintas de las determinadas por la Junta de Extremadura.¹⁸¹
- K. Castilla la Mancha en su Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza, recoge que la relación de especies objeto de caza se establecerá reglamentariamente, serán clasificadas como mínimo, en especies autóctonas, naturalizadas, comercializables. Excepcionalmente y por razones justificadas, la Orden de vedas podrá excluir para

¹⁸⁰ Vid. Art.6 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca de la Región de Murcia.

¹⁸¹ Vid. Art.4 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

la temporada en la que establece los periodos hábiles de caza, alguna de las especies declaradas de caza.¹⁸²

- L. Para la Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, serán especies cinegéticas aquellas que se definan reglamentariamente como tales. Se consideran especies cazables aquellas que figuren en las correspondientes Ordenes Anuales de Caza que dicte la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.¹⁸³
- M. La Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja, entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas. Considera piezas de caza los animales silvestres y aquellos que, conforme se establezca reglamentariamente, adquieran la condición de asilvestrados. La condición de piezas de caza no será aplicable a los animales salvajes domesticados, en tanto se mantengan en tal estado.¹⁸⁴
- N. Baleares en su Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial, establece que serán especies objeto de caza, y por tanto, se considerarán piezas de caza, los animales salvajes, asilvestrados o liberados con esta finalidad, declarados como tales en la relación aprobada reglamentariamente por la consejería competente en materia de caza. La condición de piezas de caza no es aplicable a los animales salvajes domesticados mientras se mantengan en este estado.¹⁸⁵
- O. Canarias, en su Ley 7/1998, de 6 de julio, de caza, no define lo que considera especies cinegéticas, sino que da un listado en su artículo 4 de los animales que son piezas de caza, considera las piezas de caza mayor al muflón y el arruí, y piezas de caza menor el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja, la tortola común, la codorniz común, la paloma bravía y los animales asilvestrados. El Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza

¹⁸² Vid. Art.7.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla la Mancha.

¹⁸³ Vid. Art.7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

¹⁸⁴ Vid. Art.10 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹⁸⁵ Vid. Art. 8 de la Ley 6/2006 de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.

de Canarias define en su artículo 47 lo que considera animales asilvestrados, son aquellos de origen doméstico que no dependen del hombre para su subsistencia y los que no habitan en Canarias de manera natural, que se hallen, en uno u otro supuesto, en terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegético y carezcan de signo aparente de dominio o posesión por un tercero. El Gobierno de Canarias, oídos los Cabildos Insulares y mediante Decreto, y en el marco establecido por la normativa comunitaria y básica estatal, así como por la legislación autonómica canaria, podrá reducir motivadamente, en todo o en parte del Archipiélago, las especies enumeradas, así como determinar otras especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, sin más limitaciones que las previstas en la normativa básica estatal y de la Unión Europea. En ningún caso podrán ser objeto de caza las especies, subespecies o poblaciones catalogadas como especies amenazadas, salvo en los supuestos excepcionales que así se autoricen de forma expresa por el órgano competente según la normativa específica.

4.2. Clasificación de las piezas de caza

En la legislación estatal de caza, la clasificación de las especies cinegéticas se divide en, animales salvajes y los domésticos que pierdan esa condición, clasificación que utiliza también el derecho civil en los artículos 465, 612 in fine y 613 del Código Civil, que habla de animales fieros, domesticados o amansados y mansos o domésticos, desde una perspectiva de la propiedad y no de la caza.¹⁸⁶

La Ley de Caza de 1970, en su artículo 4.3, clasifica en dos grupos las piezas de caza: caza mayor y caza menor. Tendrán la consideración de piezas de caza mayor la cabra montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el lince, el lobo, el muflón, el oso, el rebeco y cuantas especies sean declaradas como tales por el Ministerio de Agricultura. Tendrán la consideración de piezas de caza menor las que figuren en la relación a que se refiere el número 1 del artículo 4 de la Ley de Caza estatal, estas son

¹⁸⁶ Disponen el art. 465 del Código Civil: “Los animales fieros solo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor; el art.612 in fine del Código Civil: “El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y conservado”; el art.613 del Código Civil: “Las palomas, conejos y peces, que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño, serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o fraude.”

animales salvajes y los domésticos que pierdan esa condición, excepto las definidas anteriormente como caza mayor. La caza menor se caracteriza por el tamaño de los animales a capturar y no estrictamente por la forma o la modalidad de la cacería, por lo que se ejercita sobre piezas de pequeño tamaño tales como la perdiz, la tórtola, el conejo, ciertas aves acuáticas, especies migratorias, etc.¹⁸⁷

El Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre por el que se protegen determinadas especies de la fauna silvestre y se dictan las normas precisas para asegurar la efectividad de esta protección, prohibió la caza del oso pardo, del bucardo y del lince ibérico, al catalogarlos como especies en peligro de extinción.¹⁸⁸

En relación al lobo, el Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, declaró especie protegida al lobo; España ratificó dicho Convenio en 1986, con la reserva del lobo entre otras especies. El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluye en su anexo al lobo, pero solamente Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura lo consideran especie no cinegética. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, catalogan al lobo (*Canis lupus*) como Especie de Interés Comunitario. Esta protección tendrá distinto alcance según las poblaciones de lobo estén situadas al norte o al sur del río Duero. Los lobos que vivan al sur del Duero, al ser poblaciones al borde de la extinción, son incluidos en los Anexos II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren protección estricta). Los lobos al norte del Duero se encuadran dentro del Anexo V y son considerados especies animales de interés comunitario que pueden ser objeto de medidas de gestión. Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y La Rioja, consideran al lobo especie cinegética, susceptible de ser cazado legalmente, siguiendo los requisitos administrativos, donde se fijarán cada año los cupos y los períodos hábiles de la caza del mismo.

¹⁸⁷ <<http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/modalidades/cazamenor/>>

¹⁸⁸ El Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, fue derogado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, y este a su vez ha sido derogado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La legislación autonómica ya sea en la Ley de Caza o en las Ordenes de Veda, hace la una clasificación similar a la que establece la ley de caza de 1970, distinguiendo entre caza menor y caza mayor.¹⁸⁹ Algunas CCAA hacen otra clasificación de las especies de caza menor distinguiendo las migratorias de las que no lo son y de manera diferenciada las aves acuáticas, es el caso de la Ley de caza del País Vasco; la Comunidad Valenciana distingue entre acuáticas y no acuáticas, migratorias o no migratorias, de pelo y de pluma; Castilla la Mancha, distingue entre las especies migratorias de las que no lo son, las aves acuáticas y las predadoras que puedan ejercer sensibles efectos negativos sobre las restantes objeto de caza; por último Andalucía distingue entre las aves acuáticas y las especies predadoras.¹⁹⁰

4.3. Configuración de las piezas de caza

La configuración jurídica de las piezas de caza viene dada por el ordenamiento jurídico calificando a estas como *res nullius*. Pero existen varias posiciones en relación a la configuración de la fauna silvestre.

En el ámbito jurídico italiano y en parte en el francés, configuran la fauna salvaje como dominio público estatal, pero en nuestro ordenamiento jurídico la configuración de la fauna silvestre como dominio público no tiene antecedentes. El dominio público ha otorgado históricamente eficaces técnicas de tutela a la Administración, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, queda admitido que no es necesaria la titularidad estatal para que los poderes públicos ejerzan una actuación de guarda o defensa de la fauna silvestre, incluida la potestad sancionadora recogida en la Ley 42/2007 y en la Ley de caza de 1970. Las técnicas de protección del dominio

¹⁸⁹ Vid. Art. 3.4 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.9.4 Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza; art.6.2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón; art.31 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.7.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; art.7.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.8.4 de la ley 6/2006 de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de caza de Canarias; art. 9 y art.38 de Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

¹⁹⁰ Vid. Art.12 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País Vasco; art.14.4 Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana; art.11.1 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla la Mancha y el art. 20 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía.

público, como son, inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, deslinde o reintegro posesorio por su naturaleza no son aplicables a la fauna silvestre.¹⁹¹

Otra vertiente considera a la fauna silvestre como patrimonio público, así la ley italiana núm. 968, de 27 de diciembre de 1977, en su artículo 1, así lo establece, y así lo sigue calificando la ley núm. 157, de 11 de febrero de 1992, en su artículo 1. En España la fauna silvestre no se configura como patrimonio público. De acuerdo con PANTALEÓN PRIETO, se considera a la pieza de caza como patrimonio público, sería la forma más adecuada de dar cumplimiento al artículo 45.2 de la CE. Pero de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, dicha calificación no añadiría nada a su protección.¹⁹²

A nivel autonómico algunas comunidades en la exposición de motivos de sus leyes de caza si consideran a las especies cinegéticas como patrimonio público.¹⁹³

Otra línea configura a las piezas de caza como cosas comunes. LOPERENA ROTA, considera que el derecho al uso y disfrute del medio ambiente adecuado, en relación a la fauna, corresponde a la totalidad de los seres humanos, de ahí se deriva su resistencia al régimen de la propiedad privada.¹⁹⁴ El Parlamento Europeo en su sesión de 21 de febrero de 1975, en relación con la petición 8/74, relativa a la protección de las aves migratorias, aprobó una Resolución en la que se establece que estas no deben ser consideradas *res nullius*, sino, *res communis*, configurando por tanto a las piezas de caza como *res communes ómnium*.¹⁹⁵

¹⁹¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág. 144 y ss.

¹⁹² Cfr. PANTALEÓN PRIETO, A.F. “Comentario al art. 611, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albadalejo”. Edit. Edersa, 1987, Madrid. Pág.278; LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág. 144 y ss.

¹⁹³ Vid. Entre las CCAA que se apartan de la configuración tradicional de las piezas de caza como *res nullius*, son, Asturias (considera a las especies cinegéticas como patrimonio público, lo que supone la vinculación de las especies a la administración); Galicia (habla de fauna silvestre como patrimonio del conjunto de la sociedad); Murcia (reconoce que la fauna silvestre constituye un patrimonio natural) y Navarra (la fauna silvestre es patrimonio de toda la comunidad).

¹⁹⁴ Cfr. LOPERENA ROTA, D. “El derecho al medio ambiente adecuado”. Edit. Cuadernos Cívitas, Madrid, 1996, págs. 58 y 72.

¹⁹⁵ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág. 144 y ss.

Algunos autores, como SÁNCHEZ GASCÓN, entienden que las piezas de caza corresponden al propietario, configurando a estas como *fructus fundi*, siempre y cuando la caza se produzca en terrenos acotados o cercados, sin embargo, cuando el aprovechamiento cinegético sea común sí se consideran las piezas de caza *res nullius*. Esta idea se fundamenta tanto en el artículo 33 de la Ley de Caza Estatal, que establece el régimen de responsabilidad por daños, como en los efectos de acotados. También se añaden razones económicas para considerar las piezas de caza como *fructus fundi*, relacionadas con la conservación de las especies ya que se deduce que la caza no se cría sola sino que el propietario ha de invertir en ella.¹⁹⁶

4.3.1. Naturaleza *res nullius*

La tradición romana de considerar las piezas de caza como *res nullius*, es seguida por el derecho francés y el alemán. En nuestro ordenamiento jurídico, Doctrina y Jurisprudencia califican también a las piezas de caza como *res nullius*, ello se deduce del artículo 610 del CC, donde al ser por ocupación el modo de adquirir la propiedad de las piezas de caza, se exige que dichas piezas carezcan de dueño. A su vez la Ley de Caza de 1970, en su artículo 22.1, establece que el cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación; este modo de adquisición por parte del cazador, tiene su origen en la Ley de Caza de 1902.¹⁹⁷

El artículo 50 de la Ley de Caza de 1970, indica que todo delito, falta o infracción administrativa de caza llevará consigo el comiso de la caza, viva o muerta, que fuere ocupada. A la caza viva se le dará el destino que se señale reglamentariamente, de acuerdo con las circunstancias que concurran en el hecho; tratándose de caza muerta, se entregará, mediante recibo, en un Centro benéfico local y, en su defecto, a la Alcaldía que corresponda. De este artículo y de acuerdo con GÁLVEZ CANO, se deduce que no se entregará la pieza decomisada al propietario del

¹⁹⁶ Vid. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de Caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988, pág.246 y 248; CUENCA ANAYA, F. “La caza en las Comunidades Autónomas: derecho comparado”. Edit.: Al-Andalus, Sevilla 1998, pág.61.

¹⁹⁷ Vid. Art.610 del Código Civil: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”: art.22.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza: “Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación. Se entenderán ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte o captura”

terreno o del aprovechamiento cinegético, por lo que no se considera a las piezas de caza *fructus fundi*, pudiéndose reclamar por parte de estos últimos, daños y perjuicios al responsable del delito, falta o infracción administrativa. A su vez, de acuerdo con el artículo 42.e) de la Ley de Caza, los que, sin el debido permiso, entraren en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, portando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente, serán castigados como reo de delitos de caza, pero no serán castigados por un delito o falta de robo o hurto, deduciéndose con ello, que las piezas de caza son *res nullius*.¹⁹⁸

En relación con la consideración de las piezas de caza como *res nullius*, según LAGUNA DE PAZ, se produce una disociación entre el derecho a cazar, que corresponde a las personas habilitadas para cazar en un terreno habilitado, y por otro lado, el derecho sobre las piezas de caza, que se adquiere por ocupación y no son propiedad del titular del aprovechamiento cinegético, salvo que el mismo las haya cobrado.¹⁹⁹

La jurisprudencia no cuestiona la consideración de las piezas de caza como *res nullius*, sigue la tesis doctrinal mayoritaria, aludiendo en sus sentencias a ese carácter *nullius*.²⁰⁰

A nivel autonómico, las normas de caza aprobadas mantienen el criterio de ocupación como modo de adquirir la propiedad de las piezas de caza, nacido de la Ley de Caza Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 609 y 610 del Código Civil.²⁰¹

¹⁹⁸ Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág. 170 y ss.

¹⁹⁹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.152 y ss.

²⁰⁰ Vid. STC 14/1998, de 22 de enero, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra algunos de los artículos de la Ley de Caza de Extremadura, de 21 de diciembre de 1990: “*precisamente, por que las piezas de caza son una res nullius cuya propiedad se adquiere mediante ocupación y no un bien accesorio a la propiedad de los terrenos por los que libremente transitan, el titular de predios susceptibles de aprovechamiento cinegético queda sometido por la Ley a una doble condición para el ejercicio de la caza sobre los mismos...*”

²⁰¹ Vid. Art.609 del Código Civil: “*La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.*”; Art.610 del Código Civil: “*Se adquieren por la ocupación los bienes*

4.4. Adquisición de las piezas de caza

Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de la Ley de caza de 1970, el cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza como se ha dicho anteriormente mediante la ocupación. Se entenderán ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte o captura, así se recoge en el artículo 22 de dicha Ley. En torno a la adquisición de la propiedad de las piezas de caza, según GÁLVEZ CANO, las relaciones jurídicas que surgen se encuentran dentro del ámbito del Derecho privado, siendo por ello que las discrepancias surgidas por la misma, se solucionarán conforme a las normas previstas en el Código Civil. Respecto de las piezas de caza se aplica los artículo 609 y 610 del CC, el artículo 22 de la ley de caza de 1970 y el artículo 24 del Reglamento de caza.²⁰²

Según el artículo 22 de la ley de caza, el cazador que hiera a una pieza en terreno donde le sea permitido cazar, tiene derecho a cobrarla, aunque entre en propiedad ajena. Cuando el predio ajeno estuviere cercado, o sometido a régimen cinegético especial, necesitará permiso del dueño de la finca, del titular del aprovechamiento o de la persona que los represente. El propietario o titular del aprovechamiento cinegético estará obligado a entregar la pieza, herida o muerta, siempre que fuere hallada y pudiera ser aprehendida. En los terrenos abiertos sometidos a régimen cinegético especial, y para piezas de caza menor, no será necesario dicho permiso cuando el cazador entre a cobrar la pieza solo, sin armas ni perro, y aquéllas se encuentren en lugar visible desde la linde. El derecho del cazador sobre la pieza de caza muerta o herida, presupone la ocupación como modo de adquirir la propiedad, faltando solo la apropiación material de la pieza para su perfección.

La Ley de Caza, reconoce al cazador también un derecho exclusivo de persecución de la pieza, así se recoge en el artículo 22.4 y 22.5 de la LC de 1970; cuando en terrenos de aprovechamiento cinegético común uno o varios cazadores levanten y persiguieren una pieza de caza cualquier otro cazador deberá abstenerse, en tanto dure la persecución, de abatir o intentar abatir dicha pieza. Se entenderá que una

apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.”

²⁰² Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.176 y ss.

pieza de caza es perseguida cuando el cazador que la levantó, con o sin ayuda de perro u otros medios, vaya en su seguimiento y tenga una razonable posibilidad de cobrarla. En estos casos, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, el ordenamiento tutela tanto las consecuencias obtenidas por el desarrollo de la caza, como la actividad misma. La LC de 1970 no regula la persecución de la pieza de caza en terrenos ajenos sobre los que el particular no tenga derecho a cazar, ya que, supone una restricción de la propiedad que no se prevé en la ley.²⁰³

El artículo 2 de la LC de 1970 establece como finalidades de la acción de cazar el dar muerte al animal, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero, por lo que, no toda acción cinegética comporta la adquisición de la propiedad de la pieza de caza. Por lo que, de acuerdo con GÁLVEZ CANO, se deduce que no existiría ocupación si la acción de cazar tiende a facilitar su captura por un tercero, quien será quien ocupe las piezas de caza. A su vez, no existe ocupación si solo se persigue la pieza de caza únicamente para darle muerte al animal, por el contrario, si habrá ocupación si se busca apropiarse de la pieza de caza. En conclusión, el cazador para apropiarse de la pieza de caza a de tener voluntad de hacerla suya.²⁰⁴

Como regla general, la adquisición de la pieza se produce en el momento en el que tiene lugar la muerte o captura del animal, en el caso de que el animal haya sido herido por varios cazadores o herido por uno y cobrado por otro, etc. la legislación aporta diversos criterios para resolver la controversia de la atribución de la propiedad de las piezas de caza. Estos criterios son subsidiarios y solo se aplicarán cuando resulte imposible determinar de acuerdo a lo establecido en el propio artículo 22 de la LC de 1970, a quién corresponde la propiedad del animal herido o muerto. Dichos criterios subsidiarios, se recogen en el artículo 22.6 de la LC de 1970, establece que, cuando haya duda respecto a la propiedad de las piezas de caza, se aplicarán los usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad corresponderá al cazador que le hubiere dado muerte cuando se trate de caza menor, y al autor de la primera sangre cuando se trate de caza mayor.

²⁰³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.154 y ss.

²⁰⁴ Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.176 y ss.

Las diferentes leyes autonómicas de caza, reproducen introduciendo, pequeñas modificaciones, lo establecido en el artículo 22 de la LC de 1970, en relación a la adquisición y propiedad de las piezas de caza. La nueva Ley de Caza de Aragón, en su artículo 7.4, así como, el artículo 11.5 de la Ley de caza de la Rioja y el artículo 10.3 de la ley de caza de Castilla y León, introducen que en los casos dudosos en relación con la atribución de la propiedad de las piezas de caza, se estará a lo establecido en los usos y costumbres del lugar, que se fijarán previamente en los planes comarcales de cada zona. Castilla y León establece que en su defecto, el derecho de propiedad sobre la pieza cobrada corresponderá al cazador que le hubiera dado muerte, si se trata de piezas de caza menor, y al autor de la primera sangre, cuando se trate de caza mayor. En el caso de especies voladoras el derecho de propiedad corresponderá a quien las abate.²⁰⁵

Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y La Rioja, recogen la posibilidad de que en las cacerías se establezcan acuerdos o convenios entre las partes interesadas, acerca de los derechos de propiedad de las piezas cazadas, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.²⁰⁶

En relación al derecho a perseguir la pieza de caza levantada, la Ley de Caza de Canarias en su artículo 20.2, la Ley de caza de castilla y León en su artículo 10.4, así como Castilla la Mancha en el artículo 25.2 de su Ley de caza, establecen que el cazador que hiera a una pieza dentro de un terreno donde le esté permitido cazar tiene derecho a cobrarla aunque la misma haya caído o entrado en terreno distinto. Cuando este último estuviese cercado o fuese terreno cinegético, necesitará permiso de su dueño, del titular del aprovechamiento o de la persona que los represente, a su vez si se negase a conceder el permiso de acceso estará obligado a entregar la pieza, herida o muerta, siempre que fuera hallada y pudiera ser aprehendida.

²⁰⁵ En este sentido también el art.25.4 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha: *“Cuando haya duda respecto a la propiedad de una pieza de caza, ésta corresponderá al cazador que le hubiese dado muerte o abatido cuando se trate de caza menor y al autor de la primera sangre cuando se trate de caza mayor.”*; art.11.5 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja: *“Cuando haya duda respecto de la propiedad de las piezas de caza, se aplicarán los usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad corresponderá al cazador que le hubiere dado muerte cuando se trate de caza menor, y al autor de la primera sangre siempre que se trate de caza mayor.”*

²⁰⁶ Así lo recoge el art. 51.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía; el art. 10.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León; el art. 25.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla La Mancha; el art. 11 de la Ley de Caza de la Rioja y el art. 62 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

Canarias y Castilla la Mancha en sus respectivas leyes e caza establecen que en los terrenos abiertos sometidos a régimen cinegético especial, y para piezas de caza menor, no será necesario el permiso a que se refiere el apartado anterior cuando el cazador entre a cobrar la pieza solo, sin armas ni perro, y aquélla se encuentre en lugar visible desde la linde.²⁰⁷

²⁰⁷ Vid. Art.20.3 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y art.25.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

SUMARIO: 1. Práctica legal de la actividad cinegética; 1.1. Medidas para el ejercicio legal de la caza; 1.2. Requisitos generales para el cazador; 1.3. Requisitos generales para los titulares del terreno cinegético; 1.4. Medidas de fomento del hábitat cinegético; 1.5. Medidas extraordinarias; 2. Distribución competencial; 2.1. Competencias del Estado; 2.1.1. Licencia de armas: su exigencia y condiciones; 2.1.1.1. Procedimiento para la obtención de la licencia de armas; 2.1.1.2. Condiciones previas; 2.1.1.3. Clases de licencia; 2.1.2. Guía de pertenencia del arma; 2.1.3. Tarjeta de armas; 2.2. Competencias autonómicas; 2.2.1. Licencias de caza: su exigencia y condiciones; 2.2.1.1. Pruebas de aptitud o examen del cazador; 2.2.1.2. Clases de licencias; 2.2.1.3. Convenios de reciprocidad; 2.2.1.4. Otros documentos complementarios; 2.2.2. Determinación de las especies que se pueden cazar; 2.2.3. Especificación de los procedimientos de caza; 2.2.4. Determinación de los períodos hábiles de caza; 2.2.5. Espacios en los que se puede cazar; 2.3. Coordinación y cooperación en la distribución de competencias en materia cinegética; 3. Instrumentos de planificación cinegética; 3.1. Directrices cinegéticas; 3.2. Planes Generales de Ordenación; 3.3. Planes cinegéticos comarcales; 3.4. Planes Técnicos de caza o Planes de Ordenación de caza; 3.5. Plan de aprovechamiento anual; 3.6. Memorias; 3.7. Otros planes; 4. Supervisión administrativa de la actividad cinegética; 4.1. Registros; 4.1.2. Registros estatales: catálogos, listados e inventarios; 4.1.3. Registros autonómicos; 4.2. Censos y estudios; 4.3. Consejos regionales de caza; 4.4. Homologación trofeos de caza; 4.5. Federación de caza; 4.6. Control y vigilancia; 4.6.1. Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA); 4.6.2. Guardas/agentes forestales o de medio ambiente; 4.6.3. Guardas de caza; 5. Comercio y explotación de las piezas de caza; 5.1. Comercio y transporte de las piezas de caza; 5.2. Explotación industrial de la caza; 5.2.1 Granjas cinegéticas; 5.2.2. Cotos industriales; 5.2.3. Caza intensiva; 5.3.4. Palomares.

1. PRÁCTICA LEGAL DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

1.1. Medidas para el ejercicio legal de la caza

La práctica legal de la actividad cinegética requiere las condiciones de capacidad y aptitud en el cazador, la tenencia de los permisos exigibles y la delimitación y reconocimiento de los espacios donde es posible cazar; así como compromiso con la conservación de los espacios, evitando que la acción de cazar ponga en peligro a personas, bienes y a otras especies merecedores de protección jurídica.

La normativa autonómica y estatal de caza exige al cazador una conducta ética estableciendo una serie de limitaciones, cuyo incumplimiento sería constitutivo de una infracción administrativa, reflejado así en las leyes autonómicas de caza. De acuerdo con LAFUENTE BENACHES, cabe agrupar en tres estas limitaciones establecidas por el legislador:

1º Protección de la fauna y de su hábitat, se prohibirá la caza cuando ciertas circunstancias fácticas así lo aconsejen.

2º No utilización por parte del cazador de medios desproporcionados para lograr sus objetivos o nocivos para las especies o su entorno. Así como, la limitación del empleo de medios que únicamente en casos excepcionales podrán ser autorizados para la práctica de la caza.

3º Protección de las personas o bienes, ello derivado de que la caza no es una actividad que se realiza de forma aislada, debido a que se practica de forma colectiva y puede tener efectos colaterales sobre terceros o sus actividades (pastoreo, ganadería, cultivos, etc.), a su vez, puede afectar a otras especies de fauna y a su hábitat.¹

1.2. Requisitos generales para el cazador

A. Edad y capacidad de obrar

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Caza Estatal, cualquier persona mayor de catorce años tiene derecho a cazar siempre que esté en posesión de la licencia de

¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. "El ejercicio legal de la caza" Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2007, pág.70 y 71.

caza. Si la obtención de la licencia es pretendida por un menor de edad no emancipado, éste necesitará autorización escrita de la persona que legalmente le represente (titulares de la patria potestad o tutores). A su vez, este artículo establece otro requisito cuando la caza se realice con armas de fuego o accionadas por aire u otros gases comprimidos, siendo necesario haber alcanzado la mayoría de edad (18 años) o ir acompañado por otro u otros cazadores mayores de edad.² Para utilizar armas o medios que precisen de autorización especial será necesario estar en posesión del correspondiente permiso. Según DE LOS MOZOS, se complementa la capacidad del mayor de catorce años, y menor de dieciocho, por la asistencia material de otro u otros cazadores mayores de edad.³

El Código Penal fija en su artículo 19 la edad penal en dieciocho años, debido a que los menores de dicha edad no son responsables criminalmente con arreglo a este Código. Por lo que, en opinión de GÁLVEZ CANO y de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal, en principio solo podrán cazar con armas de fuego o accionadas con aire u otros gases comprimidos, los mayores de dieciocho años.⁴

Los requisitos fijados por la Ley estatal relativos a la edad mínima para poder practicar la caza, son recogidos por la legislación autonómica, con ciertas salvedades.⁵

² Vid. Art.315 del Código Civil: “La mayoría de edad empieza a los 18 años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento”

³ Vid. DE LOS MOZOS, J.L. “Precedentes históricos y aspectos civiles del Derecho de caza”. Edit. Revista de derecho privado Vol. 56, Nº. 4 (ABR), 1972, pág.300 y ss.

⁴ Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Edit. Comares, Granada, 2006, pág.8 y ss.

⁵ Vid. PAIS VASCO: art.5 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza; ASTURIAS: art.3 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza; CANTABRIA: art.3 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza; MURCIA: art.3 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial; VALENCIA: art.3 y art.6 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza; ARAGÓN: art.3 y art.40.2 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza; CASTILLA LA MANCHA: art.31 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza; NAVARRA: art.6 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca; EXTREMADURA: art.3 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza; ISLAS BALEARES: art.6 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; **con ciertas salvedades**, así CASTILLA Y LEÓN en el art. 3 de su Ley de Caza establece que será necesario haber alcanzado la mayoría de edad cuando el ejercicio del derecho a cazar implique el uso de cualquier tipo de arma, pero no establece la edad mínima necesaria para cazar sin utilizar armas de fuego. En la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de GALICIA, en su art.58.1.a) exige que para poder practicar la caza es preciso tener 16 años cumplidos. Para practicar la caza con armas, las personas menores de edad habrán de tener la edad requerida por la normativa de armas e ir acompañadas y vigiladas por una persona mayor de edad a una distancia máxima de 50 metros. Por su parte, la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de CANARIAS, en su art.3 indica que el derecho a cazar sin armas corresponde a toda persona mayor de catorce años que esté en posesión de la licencia de caza, para obtener la licencia de caza, el menor de edad no emancipado necesitará autorización escrita de

CUENCA ANAYA, sostiene la conveniencia de establecer una edad mínima para cazar idéntica en todo el territorio, en base a que el establecimiento del requisito de la edad por parte de cada CCAA, no encuentra título legitimador en la competencia exclusiva en materia de caza que les atribuye la propia CE, sino que se trata de una cuestión vinculada a la capacidad de las personas, de competencia estatal y que requiere un tratamiento uniforme. GÁLVEZ CANO, entiende que la mejor solución sería establecer como criterio general los dieciocho años para cazar con armas de fuego para todo el territorio nacional, haciendo coincidir la edad necesaria para ejercitar la caza con armas y la mayoría de edad.⁶

La doctrina, ha estudiado a qué edad se reconoce al menor la capacidad de culpabilidad o responsabilidad en el Derecho sancionador administrativo. Sobre este tema ciertos autores aplican las causas de inimputabilidad que se aplican en el Derecho penal, siendo una causa legal de exclusión la edad inferior a los dieciocho años. Para GÁLVEZ CANO, se debería reconducir la capacidad para cometer ilícitos administrativos a la idea de capacidad administrativa, ya que desde que el Ordenamiento reconoce la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y operar ejercitando sus propios derechos, pudiendo ser así sujeto activo de una infracción administrativa, por lo que están sometidos a la potestad sancionadora. Se deberá analizar cada caso para ver si el ordenamiento Administrativo reconoce al menor capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones, por otro lado cuando la ley no determine nada en este sentido, se examinará si al realizar los hechos tipificados como infracción gozaba de capacidad de culpabilidad, si ostenta dicha capacidad se le podrá exigir responsabilidad, contando siempre con las circunstancias personales del menor, para equiparar el interés del menor con la finalidad preventiva de la sanción.⁷

la persona que legalmente lo represente. No obstante, para poder cazar con cualquier tipo de arma autorizada, las personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años deberán ir acompañadas por uno o más cazadores mayores de edad que estén en posesión de licencias de armas. En ANDALUCÍA, ni en su Reglamento de caza ni en su Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, hacen referencia a la edad mínima para poder cazar, por lo que le es de aplicación como derecho supletorio, la Ley de caza estatal, estableciendo así los catorce años como edad mínima para cazar.

⁶ Cfr. CUENCA ANAYA, F. "La caza en las Comunidades autónomas. Derecho comparado". Edit. Al-Andalus, Sevilla, 1998, pág.232; GÁLVEZ CANO, M.R. "El derecho de caza en España". Op. Cit. Pág.8 y ss.

⁷ Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. "El derecho de caza en España". Op. Cit. Pág.6 y ss.

Las leyes de caza autonómicas, tipifican como infracción administrativa cazar sin respetar la edad legamente prevista para ello o estando inhabilitado por haber sido sancionado por sentencia o resolución administrativa.⁸

B. Obligaciones del cazador

De acuerdo con ORTUÑO NAVALÓN y MANZANA LAGUARDA, pueden considerarse las obligaciones básicas de todo cazador, las siguientes:⁹

1ª.- Contar con la documentación preceptiva que habilite para el ejercicio de la caza:

- Identificación personal, DNI o pasaporte.
- Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud, para el caso de haber solicitado por primera vez de la licencia de caza.
- Licencia de caza.
- Licencia de armas (en caso de armas de fuego).
- Guía de pertenencia del arma que se utiliza.
- Seguro obligatorio de responsabilidad civil.
- Permiso por escrito del titular cinegético de poder practicar la caza en sus terrenos. En determinadas ocasiones, en atención a las especiales características del terreno cinegético, para practicar la caza, será necesario contar con un permiso especial expedido por el órgano competente en materia de caza.¹⁰
- Documentación acreditativa de los perros (si los hubiese).

2ª.- Cumplir las normas de seguridad en las cacerías; el artículo 53 LC “*por vía reglamentaria se señalarán las medidas que preceptivamente deberán ser aplicadas en aquellos casos y circunstancias en los que la seguridad de los cazadores y de sus colaboradores aconsejen la adopción de precauciones especiales*”.¹¹

⁸ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.58 y ss.

⁹ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch 2007, Pág.25.

¹⁰ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.59

¹¹ Vid. Anexo III del presente trabajo.

3ª.- Observar las limitaciones del régimen cinegético del terreno, tanto las genéricas como las específicas de cada terreno, especialmente en relación a la protección de los cultivos.

4ª.- Observar las medidas en relación con la protección, conservación y aprovechamiento de la caza

5ª.- Cumplimiento de la normativa sobre la tenencia y uso de armas de fuego.

6ª.- Cumplimiento de la normativa en materia de tenencia, tránsito, manutención y vacunación de perros de caza.

7ª.- Responder de los daños y perjuicios que cause su actividad.¹²

1.3. Requisitos generales para los titulares del terreno cinegético

Los titulares cinegéticos, en virtud del artículo 6 de la Ley Estatal de caza, son los propietarios del terreno cinegético a los que corresponde el aprovechamiento cinegético, en base a un derecho personal o real, como es el arrendamiento, el usufructo y la cesión.

LAFUENTE BENACHES entiende por aprovechamiento cinegético, “la apropiación de la pieza de caza y cualquier otro derivado de ser titular de un espacio cinegético, como es el caso de la posibilidad de arrendar el terreno para que terceros se apropien de la caza o lleven a cabo una actividad industrial o comercial con ella”. Tanto el titular del terreno como el titular de un derecho personal o real de naturaleza privada y a quienes estos se lo cedan, tendrán derecho a decidir dentro del terreno sobre el aprovechamiento cinegético del mismo, teniendo siempre en cuenta el Plan de

¹² Vid. Obligaciones del cazador: **1ª** Obligación que establecen el Art. 34 Ley de caza de 4 de abril 1970 y 36 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971, y que se recoge en la totalidad de las normas autonómicas sobre caza; **2ª** Tales medidas se contienen en el Art. 53 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971; **3ª** Materia regulada en los Art. 21 Ley de caza de 4 de abril 1970 y 23 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971; **4ª** Vid. Arts. 23 Ley de caza de 4 de abril 1970 y 25 y 33 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971; **5ª** Conforme al Art. 5 Ley de caza de 4 de abril 1970, respecto a la tenencia y uso de armas de caza, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes especiales, se estará a lo establecido en esta Ley. El vigente Reglamento de Armas (aprobado por el Real Decreto 137/1993), deroga el antiguo Reglamento (Real Decreto 2179/1981); **6º** Art. 28 1º LC y el art.30 RC; **7ª** Arts. 33 y 52 Ley de caza de 4 de abril 1970 y 35 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971.

aprovechamiento presentado (por el titular) a la administración y que la misma haya aprobado.¹³

En relación con el arrendamiento, el arrendatario es quién asumirá las obligaciones legales que le competen como titular cinegético. PANTALEÓN PRIETO destaca las siguientes situaciones de arrendamiento:

- a) Rústico de unos terrenos, cuando por pacto expreso se incluya el aprovechamiento de caza.
- b) De caza en terreno de aprovechamiento cinegético común.
- c) Del aprovechamiento de un coto de caza.¹⁴

Algunas CCAA regulan en su Ley de caza la duración del arrendamiento del aprovechamiento de los cotos de caza, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y Castilla La Mancha que establecen que el contrato de arrendamiento no será superior al tiempo de vigencia del plan técnico; Galicia y Castilla y León fijan una duración mínima y máxima sobre la cesión de los derechos cinegéticos; por otro lado, La Rioja, Cantabria y Aragón establecen que el arrendamiento no será inferior al tiempo mínimo de adscripción de los terrenos al régimen de coto. Todas las CCAA en sus respectivas leyes de caza, recogen como infracción el subarriendo del aprovechamiento cinegético.¹⁵

La limitación del arrendamiento en el tiempo, de acuerdo con LAFUENTE BENACHES, busca compatibilizar la sostenibilidad de las especies con una racional gestión de sus posibles aprovechamientos.¹⁶ Así el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 14/1998, de 22 de enero, establece, “que al disponerse un período mínimo de

¹³ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.65 y 66.

¹⁴ Cfr. PANTALEÓN PRIETO, A.F. “Comentario al art. 611, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albadalejo”. Edit. Edersa, 1987, Madrid pág.278 y ss.

¹⁵ Vid. art.29.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.37.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.12 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.23.5 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.16.4 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.19 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

¹⁶ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.66.

duración de dichos contratos, lo que se pretende es dotarlos de cierta estabilidad temporal con la finalidad de impedir que el cambio continuado de titulares o la variación en el destino o aprovechamiento de tales terrenos, perjudique a la fauna silvestre existente en los mismos, y aun mas, que dificulte la actividad de conservación, ordenación y planificación de ese recurso natural dentro de la competencia que corresponde a la Administración Pública Autonómica”.

En relación con los terrenos cinegéticos cuando el titular cinegético es una persona física o jurídica privada, la cesión del aprovechamiento cinegético a un tercero, tendrá lugar a través de negocios jurídicos de naturaleza privada. A su vez, cuando el terreno cinegético pertenezca a la Administración, al ser esta una persona jurídica, hay que distinguir entre si son terrenos patrimoniales, montes de utilidad pública catalogados y comunales.

En el caso de los terrenos patrimoniales, la jurisprudencia sostiene que el contrato de arrendamiento sobre estos terrenos no tiene naturaleza administrativa, y de acuerdo con LAFUENTE BENACHES, este aprovechamiento cinegético no constituye una actividad que se desarrolle para satisfacer el interés general ni se refiere al tráfico administrativo propio de la Administración contratante. Así la preparación y adjudicación de este tipo de contratos se rige por las normas de contratación administrativa. Para los montes de utilidad pública catalogados o no, y para los terrenos comunales, la jurisprudencia remite a la Legislación local, que posibilita tres sistemas de adjudicación, la subasta, el concurso y el procedimiento negociado. Cuando el contrato de arrendamiento de un coto privado sea arrendado por un Ayuntamiento o Entidad local menor, se aplica la legislación de régimen local.¹⁷

La titularidad cinegética conlleva una serie de obligaciones que las CCAA recogen en sus respectivas leyes de caza.¹⁸ La mayoría de ellas, recogen estas

¹⁷ Vid. STSJ de Castilla la Mancha de 14 de noviembre de 2003; LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.67 y ss.

¹⁸ Vid. Art.48, art.30 y art.83.4 g) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de GALICIA; art.13.2, art.22, art.45.5 de la Ley 2/1989, de 6 de junio de de caza de ASTURIAS; art.12.1, Art. 20.2, art.42, art.53.2 y art.54.2 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de CANTABRIA; art.46.3, art.49, art.60.3, art.61.2 y art.63.2 d) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de LA RIOJA; art.40, art.41, art. 60.3 Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de MURCIA; art.24.9 y art.37.7, art.55.2, art.56.1 y art.70. 3 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de ARAGÓN; art.16.6, art. 22.4,

obligaciones de una manera dispersa en su articulado, al contrario, Navarra, Valencia, País Vasco y Castilla la Mancha recogen estas obligaciones en una única sección. De manera sucinta estas obligaciones se pueden dividir en:

- a) Seguimiento y cumplimiento de la planificación.
- b) Fomento, conservación, protección y aprovechamiento ordenado y sostenible de la riqueza cinegética.
- c) Poner en conocimiento de la Administración competente la aparición de enfermedades y epizootias, así como, cumplir con las medidas acordadas por la misma para controlar y erradicar la epizootia
- d) Señalización y delimitación de los terrenos cinegéticos.
- e) Abonar las tasas correspondientes.
- f) Comunicar previamente a la Administración competente así como a los titulares de los cotos colindantes, que se pretende realizar monterías, ganchos o batidas de caza mayor.
- g) Facilitar a las autoridades administrativas cualquier información que ésta les requiera sobre la actividad cinegética que se desarrolla en los acotados (resultados de la temporada anterior, número de jornadas cinegéticas, el número de cazadores por jornada, el total de piezas cobradas por especies, la comparación de sus poblaciones con la temporada anterior, etc.).

Algunas CCAA establecen otra serie de obligaciones adicionales para los titulares de terrenos cinegéticos:

- a. Disponer de un Seguro de Responsabilidad civil, como es el caso del País Vasco en su artículo 22.6 de su Ley de caza.

art.35.3 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de CANARIAS; art.20.1 a), art.20.1.b), art.20.1c), art. 20.1 d), art.20.1 e) , art.20.2 a), art.20.2 b), art 20.2 c), art.20.2 f) 20.2 g) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de NAVARRA; art.9.1, art.33.2, art.43.2 y art.59 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de EXTREMADURA; art.26.2, art.46.1 y art.49 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, BALEAR de caza y pesca fluvial; art.40.1, art.40.2 y art.51.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CASTILLA Y LEÓN; art.6, art.14.1 y art.46.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CASTILLA-LA MANCHA; art.16.3, art.23.1 art.57, art.29, art.55.24 y art.83.8 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza de ANDALUCIA; art.22 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del PAIS VASCO; art.29 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad VALENCIANA.

- b. Dotar al acotado de un sistema de guardería, así lo recogen en sus leyes de caza el País Vasco en su artículo 22.6; La Rioja en su artículo 77; Aragón en su art.77.1; Navarra en su artículo 20.2 e) y Castilla y León en el artículo 70.
- c. Los titulares de terrenos cinegéticos en colaboración con los propietarios de terrenos afectados por las piezas de caza deberán adoptar medidas preventivas para evitar o minorar los daños a terceros, así lo recogen las leyes de caza de La Rioja en su artículo 13.2 y la de Navarra en sus artículos 20.1f) y 20.2.i).
- d. Realizar una encuesta cinegética de carácter anual, obligación establecida en la Ley de caza de Murcia en su artículo 78.2.
- e. Auditorias respecto de la gestión del coto, lo establece Navarra en su artículo 20.2 h) de la ley de caza.

1.4. Medidas de fomento del hábitat cinegético

La actuación del hombre en la naturaleza ha afectado a la vida de la fauna silvestre, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, los procesos de concentración parcelaria conllevaron a la desaparición de buena parte de las lindes naturales existentes, que incidieron de una forma negativa en la caza. Es por ello que el propio ordenamiento jurídico debe estimular todas aquellas medidas que tiendan a mejorar el hábitat cinegético.¹⁹

Se exige una actitud de compromiso y fomento para la protección de la fauna de todos los sujetos intervinientes en la actividad cinegética, como son los cazadores, titulares de terrenos cinegéticos y la Administración Pública. Las actuaciones de fomento tienen como objetivo común la mejora de la caza, de la fauna cinegética y de su hábitat.²⁰ Entre estas actuaciones destacan, la obligación de los titulares cinegéticos

¹⁹ Cfr. J.C. LAGUNA DE PAZ “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997. Pág.250 y ss.

²⁰ Actuaciones de fomento: instalar madrigueras artificiales, zonas de aclimatación, piezas de sal, el mimo en los cultivos que sirven de alimento a las especies que allí residen, plantación de cultivos especiales, tratamientos fitosanitarios de baja toxicidad para la fauna silvestre, pesticidas de baja toxicidad, el establecimiento de mecanismos ahuyentadores de caza en maquinaria agrícola, entre otros; téngase en cuenta en este sentido el art. 35 Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, de 17 de diciembre “1. Los titulares cinegéticos y adjudicatarios de zonas de caza controlada están obligados a realizar las inversiones que en beneficio de las poblaciones silvestres se determinen en su proyecto de ordenación o plan técnico de caza. 2. Las directrices de ordenación cinegética de la Comunidad

de incrementar las inversiones para la mejora de los cotos y de la fauna existente en ellos, la adopción de controles sobre el estado de las poblaciones, la actividad de planificación y gestión, la actividad de guardería, los estudios de impacto medioambiental o la obtención del certificado de calidad cinegética.²¹

Asimismo, las CCAA, establecen ayudas públicas en favor del fomento y del hábitat cinegético, como es la ejecución de actuaciones en el medio natural que vengan recogidas en el plan cinegético, o la creación de bebederos, comederos, refugios o plantaciones arbustivas.²²

1.5. Medidas extraordinarias

El artículo 52.3 de la LPNB, recoge que con carácter general se prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico, esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.

Valenciana determinarán el porcentaje mínimo de dichas inversiones respecto a la valoración en vivo de las rentas cinegéticas. En ningún caso dicho porcentaje será inferior al 35%. 3. Las inversiones en la suelta de animales para caza, vigilancia, señalización y en otras infraestructuras generales o para la práctica de la caza no se consideran inversiones en beneficio de las poblaciones silvestres. Sólo cuando así se justifique en el plan técnico de ordenación, parte de la inversión obligatoria podrá ser destinada a labores de vigilancia. 4. La compra, por sociedades de cazadores sin ánimo de lucro, de parcelas o franjas de terreno destinadas a mejoras de hábitat y a la fragmentación de grandes extensiones de cultivo tendrá la consideración de inversiones en beneficio de las poblaciones silvestres. 5. El incumplimiento del deber de fomento o insuficiente nivel real de mejoras dará lugar a la apertura de expediente de anulación del coto o de la adjudicación de zona de caza controlada.”; así como el Art. 37 “Conservación de la riqueza cinegética.1. Las directrices de ordenación cinegética de la Comunidad Valenciana establecerán las técnicas y cultivos que con preferencia deban fomentarse en beneficio de la riqueza cinegética y fijarán los criterios de aplicación de las técnicas y usos agrícolas, las de pastoreo y los tratamientos silvícolas del modo que resulte menos perjudicial para la fauna cinegética. 2. La Conselleria competente en materia de caza establecerá las disposiciones que garanticen la compatibilidad con la conservación de la riqueza cinegética de actividades como la captura de caracoles, recolección de setas, espárragos y otros productos naturales, que puedan causar daños o molestias significativas a las especies cinegéticas en época de cría o que puedan afectar a la seguridad en las cacerías.”

²¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.78 y 79.

²² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.250 y ss.

A su vez, se prevén medidas extraordinarias cuando se produzcan situaciones en las que puede ser aconsejable una intervención en defensa de las personas, bienes y otras especies.²³ Así el artículo 58.1 de la LPNB, recoge que las prohibiciones establecidas respecto de la conservación *in situ* de la biodiversidad autóctona silvestre podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
- b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas.
- c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines.
- d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
- e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación.
- f) Para proteger la flora y la fauna silvestre y los hábitats naturales.

Las CCAA recogen en sus leyes de caza dichas medidas extraordinarias y a su vez exigen la previa autorización administrativa para llevarlas a cabo.²⁴

²³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Tirant Lo Blanch Valencia 2009. Pág. 346 y 347

²⁴ En este sentido, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura recoge, en su artículo 15, que en los núcleos rurales y áreas industriales, las vías públicas y otros terrenos no cinegéticos declarados como tales, la Consejería competente en materia de caza podrá autorizar la captura de especies cinegéticas cuando supongan peligro para la seguridad vial o las personas o puedan causar daños al medio ambiente, la agricultura o la ganadería en terrenos colindantes; la nueva Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla la Mancha especifica en su artículo 12.3, que cuando en una comarca exista una determinada especie cinegética en circunstancias tales que resulte especialmente peligrosa para las

2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.

El artículo 45, consagra el derecho y obligación de toda persona al disfrute y cuidado del medio ambiente, siendo los poderes públicos quienes estarán obligados a velar por su utilización racional apoyándose en una solidaridad colectiva. Por lo tanto, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, la práctica de la caza debe hacerse compatible con el fomento y conservación de las especies y de su hábitat, se trata, de encontrar el adecuado equilibrio entre ambos.²⁵

Este equilibrio se refleja en la LPNB, en el Capítulo IV del Título III, donde se regula la protección de las especies en relación con la caza, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, deben garantizarse, pero limitando su aplicación a los espacios, fechas, métodos de captura y especies que determinen las CCAA, que en ningún caso incluirán las especies del Listado de Especies de Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos por la Unión Europea.²⁶ Pretensión que las normas autonómicas recogen, contemplando el aprovechamiento de la caza en el marco de la conservación de la fauna silvestre.²⁷

La Constitución Española de 1978, en su artículo 149.1.23, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente,

personas o perjudicial para la agricultura, la ganadería, los montes o la propia caza, la Administración competente podrá declarar dicha comarca de emergencia cinegética temporal, con el fin de determinar las épocas y medidas conducentes a eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión. En estos casos, la Administración podrá otorgar autorizaciones en terrenos no cinegéticos a sus titulares o en su caso, a sociedades, clubes o asociaciones deportivas de cazadores; la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León en el artículo 50 establece que para controlar las poblaciones de las especies cinegéticas predatoras, el Servicio Territorial, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente, podrá autorizar la caza de dichas especies en época de veda así como dejar sin efecto algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley. A su vez fija que el control poblacional sobre determinadas especies no cinegéticas, solo podrán ser autorizados a los Agentes Forestales, Celadores del Medio Ambiente, Guardas Particulares de Campo y Especialistas en Control de Predadores.

²⁵ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.305

²⁶ Vid. Preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. BOE núm.299.

²⁷ Vid. Art. 1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León. tiene por finalidad “proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos cinegéticos en armonía con los distintos intereses afectados”; Exposición de motivos “la norma confía en el potencial que, debidamente ordenada, tiene la caza “como actividad económica generadora de empleos y rentas en el medio rural”).

así como la legislación sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Por otra parte, el artículo 148.1.11ª CE establece que la caza es una de las actividades que forman parte de las competencias «exclusivas» de las CCAA, que regularan en sus respectivos territorios. Sin embargo el Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones, que si bien es cierto que las CCAA tienen competencia exclusiva en la materia, el Estado ostenta una serie de títulos competenciales que restringen y condicionan esta competencia autonómica, provocando así conflictos entre el Estado y las CCAA por el reparto competencial.²⁸

Como resultado de lo anterior, de acuerdo con el artículo 149.1.23 CE, el Estado establece reglas mínimas del ejercicio de la caza, comunes en todo el territorio nacional, que son desarrolladas y ampliadas por la mayoría de las CCAA ya que estas han promulgado un régimen específico para la caza dentro de su territorio.²⁹

2.1. Competencias del Estado

La CE no reserva al Estado toda la legislación de protección del medio ambiente, sino solo la legislación básica. El artículo 149.1.23ª CE permite al Estado emitir la legislación básica en materia de protección de la fauna silvestre, incurriendo así en la regulación de la caza.³⁰ Por otra parte, el TC entendía que había de ser el estado el que estableciese toda la normativa que considerase indispensable para la protección del medio ambiente sin perjuicio de que el mismo fuese mejorado por las CCAA.³¹

De acuerdo con el artículo 149.1.8 de la CE, el Estado tiene competencia exclusiva para regular los aspectos civiles derivados de las relaciones entre particulares en la actividad cinegética, como sería el caso, de la adquisición de las piezas o el

²⁸ Vid. STC 102/1995 de 26 de junio.

²⁹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.311.

³⁰ Vid. STC 141/1991, de 4.7, FJ 3º.

³¹ Vid. STC 149/1991 de 4 de julio, fundamento jurídico 1º letra D.

régimen de responsabilidad, que se regirá por normas jurídico-privadas.³² A su vez, en sede penal, de acuerdo con el artículo 149.1.6ª CE, será el Estado quien legislará en esta materia. Asimismo y en virtud de la relevancia penal del artículo 45.3 de la CE, conlleva que las infracciones más graves sean constitutivas de delito, tipificados en el Código penal.³³

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de armas, así se desprende del Art. 149.1.26ª CE, el cual otorga al mismo el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, es la legislación que regula a nivel estatal esta materia.³⁴

Respecto de las relaciones internacionales, comercio exterior y sanidad animal, el Estado también tiene competencias exclusivas, en virtud del artículos 149.1.3º; 10º y 16º.³⁵

2.1.1. Licencia de armas: su exigencia y condiciones

Al amparo del artículo 29.1.b) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la y del artículo 3.4 de la Ley de caza estatal y también regulado en los artículos 96 y ss. del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el

³² Vid. Art. 149.1.8ª CE “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.8ª *Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial*”.

³³ Vid. Art. 45.3 CE “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado;

³⁴ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.311, 312, 317 y 318.

³⁵ Vid. Art.149.1.3º: “relaciones internacionales2; 10º: “Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior” y 16º: “Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.”

Reglamento de armas, se establece que para la práctica de la caza con armas de fuego se requiere la previa obtención de una licencia para su tenencia y uso.

La licencia de armas únicamente se otorga a efectos cinegéticos. Por lo que la normativa exige la dedicación real del peticionario al ejercicio de la caza. Esta circunstancia ha de acreditarse bien mediante la tarjeta federativa en vigor correspondiente o bien mediante la licencia de caza. A su vez, se requiere que el futuro titular de la licencia de armas cuente con las aptitudes psicofísicas adecuadas y acredite los conocimientos necesarios en materia de conservación, mantenimiento y manejo de las armas.³⁶ Por último, el artículo 97.2 RA, establece que los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizaran un informe sobre la conducta y antecedentes del interesado, así como sobre su dedicación real al ejercicio de la caza³⁷.

2.1.1.1. Procedimiento para la obtención de la licencia de armas

La competencia para el otorgamiento de las licencias de armas para caza de tipo D y E corresponde a la Administración del Estado y la solicitud de expedición de las

³⁶ Vid. Art.100.3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. “La competencia para concederla corresponde al Director general de la Guardia Civil, que podrá delegarla.”; Art. 97.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. “Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación aportada. Cuando se solicite la concesión de las licencias D para armas de la categoría 2.2 y de las licencias E para armas de la categoría 3.2, dicha información se referirá también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes correspondientes, que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de las correspondientes licencias de caza y tarjetas federativas en vigor.”; Art. 98 Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. “1. En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno.2. Para solicitar las licencias y autorizaciones especiales de armas, además de la documentación requerida para cada supuesto en los correspondientes artículos de este Reglamento, los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, en la forma prevenida.3. La acreditación de las aptitudes psíquicas y físicas necesarias para poder obtener la concesión, así como la renovación de licencias y autorizaciones especiales para la tenencia y uso de armas, deberá llevarse a cabo mediante la presentación, ante las oficinas instructoras de los procedimientos, del correspondiente informe de aptitud.4. De lo dispuesto en el apartado anterior se exceptúa el personal que se encuentre en activo o en la situación que se estime reglamentariamente como tal, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Expedición de licencias B, D y E a particulares”.

³⁷ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.330.

licencias de armas habrá de presentarse en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, acompañada de la siguiente documentación, de acuerdo con el artículo 97 del Real Decreto 137/1993:

- Certificado de aptitudes psicofísicas (certificado médico)
- Certificado de antecedentes penales en vigor.
- Certificado de antecedentes sobre violencia de género.³⁸
- Fotocopia del DNI o tarjeta de autorización de residencia
- Acreditar la dedicación al deporte cinegético o fotocopia de la licencia de caza.
- Justificante de haber pagado la tasa correspondiente para la expedición de la licencia, modelo 790.

A su vez para la obtención de la licencia de armas de tipo D se requerirá, además de la documentación anterior, declaración jurada de la guarda de las armas en caja fuerte.

En relación con el certificado de antecedentes penales, el interesado podrá presentarlos directamente o, en su caso, conceder autorización para la consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Registro Central de Penados y Rebeldes). Este mismo criterio se aplica para el certificado de antecedentes sobre violencia de género, para el cual se puede conceder autorización para la consulta de sus datos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género.

En el caso de solicitar la licencia tipo D y E por primera vez, también se deberá aportar el certificado de haber superado las pruebas de capacitación para la obtención de la licencia de armas.³⁹

Una vez presentada la documentación, los órganos encargados de la instrucción del procedimiento, realizarán un informe sobre la conducta y antecedentes del

³⁸ Vid. Art.67 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “*El Juez podrá acordar, respecto de los inculcados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente.*”

³⁹ <http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmase.html>

interesado, que además, deberá indicar la dedicación real al ejercicio de la caza, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación aportada por el cazador.⁴⁰

El TC avala que la buena conducta del solicitante de la licencia de armas sea tomada en cuenta por parte de la Administración, a condición de que dicha valoración sea necesaria, por venir impuesta por el interés público.⁴¹ LAGUNA DE PAZ sostiene que, el riesgo ha de estar objetivado, la decisión administrativa ha de basarse en circunstancias y hechos ciertos, valorados a través de los informes técnicos pertinentes, deben ser hechos probados y no meras sospechas.⁴²

Respecto a la valoración de la peligrosidad por parte de la Administración correspondiente, ésta ha de ser específica, sin que quepa la posibilidad de que la resolución se ampare en una percepción abstracta de buena conducta, siendo imprescindible que los hechos y circunstancias que se toman en consideración tengan un alto grado de relevancia en relación con la peligrosidad que puede suponer la titularidad de una licencia de armas para la seguridad pública.⁴³ Serán los tribunales, en última instancia, quienes establezcan la ausencia de peligrosidad.⁴⁴

⁴⁰ Vid. Art.97 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁴¹ Vid. STC 114/1987, de 6 de julio de 1987, fundamento jurídico 4º.

⁴² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.330; en este sentido se debe tener en cuenta lo recogido en el Art. 24.2 CE “2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”

⁴³ Vid. Art.98.1, in fine del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. “1. En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno.”; art.97.5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas: “La vigencia de las autorizaciones concedidas y de los reconocimientos de coleccionistas efectuados estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento para su otorgamiento, pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario”; el art.102 del Real Decreto 137/1993, que aprueba el Reglamento de Armas. “Solo podrán obtener licencia para la tenencia y uso de armas rayadas para caza mayor o escopetas y armas asimiladas las personas que superen las pruebas de capacitación que determine el Ministerio del Interior sobre conocimiento de armas, su cuidado y conservación y sobre habilidad para su manejo y utilización.

Los datos que se consignarán en la licencia de armas, serán, el número del D.N.I. y los datos personales del titular. La revocación de la licencia de armas procederá, siempre y cuando no se cumplan los requisitos que se exigen para su otorgamiento. De acuerdo con GÁLVEZ CANO, esta revocación de la licencia de armas, no constituye una sanción por la comisión de una infracción, por lo que no precisa seguir las exigencias del procedimiento sancionador, se está, ante un acto de control administrativo sobre la existencia y subsistencia de las circunstancias, aptitudes y condiciones exigibles para la tenencia y utilización de las armas.⁴⁵ Así ha quedado reflejado, en diversas sentencias del Tribunal Supremo.⁴⁶

2.1.1.2. Condiciones previas

Para obtener la licencia de armas, los beneficiarios deberán acreditar, además de la documentación requerida para cada supuesto, la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, en la forma prevenida. Por lo que en ningún caso, podrán tener, ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno.⁴⁷

Los cazadores que deseen obtener o renovar cualquier tipo de licencia de armas, deberán acreditar aptitudes físicas y psíquicas, que serán practicadas por un centro de reconocimiento debidamente autorizado y radicado en la provincia del domicilio del

En todo caso, podrá exigirse la acreditación del conocimiento del presente Reglamento. El indicado Ministerio podrá habilitar a las federaciones deportivas o a otras entidades titulares de polígonos, galerías, campos de tiro o armerías debidamente autorizados y que acrediten contar con personal y medios materiales adecuados para dedicarse a la enseñanza y ejercitación en las indicadas materias.”

⁴⁴ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.330.

⁴⁵ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R., “El derecho de caza en España”, Op. Cit. Pág.38

⁴⁶ Vid. STS del 20 de enero de 1996, STS del 27 de enero de 1996, STS del 20 de enero de 1997 y STS del 22 de septiembre de 1997.

⁴⁷ Vid. Art. 98.1 y 98.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

solicitante, a través de un informe de aptitud emitido por el director del centro.⁴⁸ Asimismo deberán someterse a las pruebas establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, que tendrán por objeto comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad para tener o usar armas.⁴⁹ Los informes de aptitud psicofísica, tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de tres meses, a contar desde la fecha de su expedición.⁵⁰

⁴⁸ Vid. Orden de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas para prestar servicios de seguridad privada.

⁴⁹ Vid. Art. 3 del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada *“Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad para tener o usar armas, o para prestar servicios de seguridad privada, asociada con: a) La capacidad visual. b) La capacidad auditiva. c) El sistema locomotor. d) El sistema cardiovascular. e) Trastornos hematológicos. f) El sistema renal. g) Enfermedades ginecológicas. h) El sistema respiratorio. i) El sistema endocrino. j) El sistema neurológico. k) Infecciones. l) Problemas dermatológicos. m) Trastornos mentales y de conducta. n) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones y problemas de personalidad. ñ) Cualesquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad para tener o usar armas o para prestar servicios de seguridad privada.”*

⁵⁰ Vid. Art.4 del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada: *“Necesitarán someterse a las pruebas de aptitud psicofísica y a las exploraciones necesarias para determinar si reúnen las condiciones requeridas, todas las personas que pretendan obtener o renovar cualquier licencia o autorización de tenencia y uso de armas, y aquéllas que deseen obtener la habilitación necesaria para prestar servicios de seguridad privada o para continuar su prestación, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, transcurridos los plazos de cinco y, en su caso, de dos años, establecidos en el artículo 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada.”*; art.6: *“Las pruebas y exploraciones procedentes para determinar la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, serán practicadas por un centro de reconocimiento debidamente autorizado, radicado en la provincia de domicilio del solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1995, de 4 de diciembre, y disposiciones complementarias, aplicando el cuadro de enfermedades y deficiencias contenido en el anexo del presente Real Decreto.”* art.7: *“Los centros de reconocimiento realizarán las exploraciones y pruebas a que se refiere el anexo del presente Real Decreto, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro emitirá el informe de aptitud o de no aptitud, según proceda, que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones que procedan, si se hubieren detectado enfermedades o deficiencias que lo requieran...”*; art.8: *“Los informes de aptitud psicofísica, regulados en el presente Real Decreto, tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de tres meses, a contar desde la fecha de su expedición, durante los cuales podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien en el indicado plazo. En todo caso, los centros entregarán a los solicitantes de los reconocimientos, a petición de éstos, un duplicado del informe de aptitud, si lo necesitaran para tramitación ante diferentes órganos de Administración, sin que ello suponga costo adicional alguno.”*

En relación con la concesión, renovación o revocación de los permisos de armas el Tribunal Supremo, establece que se está en presencia de un acto administrativo (autorizaciones).⁵¹ Según LAFUENTE BENACHES, por un lado se presentan como actos que amplían la esfera de actuación de los particulares, y, por otro, en razón de su carácter presuponen una limitación al ejercicio de los derechos en general, “en que la valoración de las circunstancias, hechos o datos concurrentes, exigen, por razón del interés general, una atribución de facultad discrecional a favor de la autoridad concedente, que no puede ser desconocida en ningún caso, por más que esa facultad de apreciación discrecional se suponga una atribución de poder arbitrario proscrito por el artículo 9.3º de la Constitución”.⁵²

A su vez, para obtener por primera vez la licencia de armas de tipo D o E, o las autorizaciones especiales para menores, para extranjeros y españoles que residan fuera de España, será necesario superar dos pruebas de capacitación, una teórica y una práctica, en ellas, el interesado debe acreditar sus conocimientos sobre conservación, mantenimiento y manejo de armas. Estas pruebas las realizará la Dirección General de la Guardia Civil.

1. Prueba teórica

La prueba teórica versará sobre el conocimiento de las armas y el Reglamento de Armas. El programa de materias que recoge los conocimientos suficientes para superar la prueba teórica para la obtención de las licencias D y E, y la Autorización Especial de armas para menores (AEM), se encuentra publicado en el ANEXO I de la Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil.

2. Prueba práctica

La prueba práctica se realizará en campos, polígonos o galerías de tiro legalmente autorizados, y servirá para comprobar la habilidad para el manejo y utilización de las armas.

⁵¹ Vid. STS de 21 de junio de 1985, STS de 26 de febrero y STS de 9 de junio de 1988.

⁵² Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op.Cit. Pág.64

Para poder realizar la prueba práctica será necesario haber superado la prueba teórica. Una vez declarado apto en la prueba de conocimiento, se iniciará un plazo de seis meses para la superación de la prueba práctica, que consiste en cuatro fases: 1ª acción de cargar; 2ª acción de apuntar; 3ª acción de disparar y 4ª acción de descargar.⁵³

La fecha para la realización de las pruebas será fijada por la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil, previa petición del interesado.⁵⁴ Cada una de las pruebas dará lugar a la calificación de apto o no apto, a si mismo, cada solicitud de licencia da derecho a tres convocatorias para realizar las pruebas, teórica y práctica, dentro del plazo de tres meses.⁵⁵

La Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil habilitará para la enseñanza de las materias objeto de estas pruebas y ejercitación en las indicadas materias, a las federaciones deportivas o a otras entidades titulares de polígonos, galerías, campos de tiro o armerías que estén debidamente autorizados y que acrediten contar con personal y medios materiales adecuados. A su vez llevará un Registro Oficial de entidades habilitadas.⁵⁶

Quedarán exentos de la realización de dichas pruebas quienes posean o hayan poseído licencia de armas A, o, en su caso, licencia de armas D, E o F, para las armas correspondientes.⁵⁷

⁵³ <http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmasd.html>

⁵⁴ Vid. Disposición Adicional Primera de la O.M. 7 marzo 2000 por la que se precisa la determinación del ámbito de aplicación de la Orden de 18 de marzo de 1998, sobre pruebas de capacitación para obtener licencias de armas.

⁵⁵ Vid. Apartado Tercero y Cuarto de la Orden de 18 de marzo de 1998, por la que se establecen las pruebas de capacitación para obtener licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a las enseñanzas correspondientes.

⁵⁶ Vid. Art. 102.3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y Quinto de la Orden de 18 de marzo de 1998, por la que se establecen las pruebas de capacitación para obtener licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a las enseñanzas correspondientes.

⁵⁷ Vid. Primero de la Orden de 18 de marzo de 1998, por la que se establecen las pruebas de capacitación para obtener licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a las enseñanzas correspondientes.

2.1.1.3. Clases de licencia

- a. Licencia de armas tipo E: se solicitará para practicar la caza mayor o menor con armas de la categoría 3ª.2 (escopetas) y 7ª.2 (ballestas). Solamente podrán ser expedidas a los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de edad y superen las pruebas de capacitación, sobre el conocimiento de las armas, su cuidado y conservación, y sobre la habilidad para su manejo y utilización.⁵⁸

El número de armas no excederá de seis escopetas o de seis armas largas rayadas para tiro deportivo, es decir, el número total de armas amparadas con esta licencia no puede ser superior a 12 armas. A su vez, nadie podrá poseer más de una licencia E.⁵⁹

Concesión y vigencia: las licencias de armas tipo E serán concedidas por los Subdelegados del Gobierno y por los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla, teniendo una vigencia de 5 años. La vigencia de las licencias estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles para su otorgamiento. Los órganos competentes para su expedición podrán comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y, en caso contrario, procederán a revocarlas.⁶⁰

- b. Licencia de armas tipo D: se solicitará para practicar la caza mayor con armas de la categoría 2ª. 2 (rifles). Solamente podrán ser expedidas a los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de edad y que superen las pruebas de capacitación, sobre el conocimiento de las armas su cuidado y conservación, y sobre la habilidad para su manejo y utilización.⁶¹

Nadie podrá poseer más de una licencia D y autorizará para llevar y usar hasta cinco armas de la categoría 2ª. 2. Con dicha licencia se podrá adquirir un arma de la

⁵⁸ Vid. Arts. 97.2 y 102.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁵⁹ Vid. Art.101 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶⁰ Vid. Art. 97.5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶¹ Vid. Arts. 97.2 y 102.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

categoría 2ª.2. La adquisición de cada una de las restantes requerirá la obtención previa de una autorización especial.⁶²

Las armas de esta categoría deberán ser guardadas, bien en los propios domicilios de sus titulares, en cajas fuertes o armeros autorizados, con las medidas de seguridad necesarias, aprobadas por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, que podrá comprobarlas en todo momento, o en locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas.⁶³ Las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las primeras se determinan en la Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se determinan las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y armarios o armeros para guardar las armas en domicilios particulares. Los grados de seguridad especificados en la citada resolución deberán acreditarse mediante certificación expedida por entidad autorizada al efecto por el Ministerio de Industria y Energía.

Concesión y vigencia: las licencias de armas tipo D serán concedidas por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil y tienen una validez de cinco años. La vigencia de las licencias estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles para su otorgamiento. Los órganos competentes para su expedición pueden comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y, en caso contrario, procederán a revocarlas.⁶⁴

Los interesados cuya licencia de armas tipo D y E se encuentre próxima a caducar, pueden solicitar una nueva concesión. Las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil que reciban las solicitudes con las correspondientes documentaciones podrán expedir a los solicitantes autorizaciones temporales de uso de las armas, cuyo plazo de validez será de tres meses.⁶⁵

⁶² Vid. Arts. 100.2 y 100.4 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶³ Vid. Arts. 100.5 a) y b) del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶⁴ Vid. Art. 97.5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶⁵ <http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmase.html>

Para mantener la vigencia de las licencias tipo E y D, las personas mayores de 60 años necesitarán visarla (confirmar su validez tras su comprobación) cada dos años por la autoridad competente, previa aportación del interesado del informe favorable, expedido por un centro de reconocimiento autorizado, o, en su caso, previa superación de las correspondientes pruebas complementarias de aptitud. Respecto a las expedidas a mayores de setenta años, dicha formalidad deberá efectuarse con carácter anual.⁶⁶

Los arcos que pertenecen a la categoría 7ª.5, no se incluyen en las licencias de tipo D ni E, ya que en lugar de la referida licencia, requieren acreditación ante el establecimiento vendedor, así como, su consignación en los libros correspondientes de las respectivas tarjetas deportivas en vigor. No necesitan pasar revista de armas y no se limita el número máximo de arcos que se pueden poseer.⁶⁷

- c. Licencia de armas tipo F: documentará las armas de concurso de tiro deportivo de afiliados de federaciones deportivas que utilicen armas de fuego para la práctica de la correspondiente actividad deportiva.⁶⁸

El Reglamento de Armas establece autorizaciones especiales para el uso y tenencia de armas.

- a. Autorizaciones temporales de uso de armas: cuando los titulares de licencias de armas, próximas a caducar, soliciten su nueva concesión, las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil que reciban las solicitudes con las correspondientes documentaciones podrán expedir a los solicitantes autorizaciones temporales de uso de dichas armas, cuyo plazo de validez será de tres meses, recogiendo al propio tiempo las licencias próximas a caducar.⁶⁹ Como indica GALVEZ CANO, cuando se produzca la pérdida, sustracción, robo o destrucción de las licencias de armas, se

⁶⁶ Vid. Art. 100.2 y 104 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶⁷ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R., “El derecho de caza en España”, Op. Cit. Pág.35.

⁶⁸ Vid. Art. 95.5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁶⁹ Vid. Art.103 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

podrá conceder este tipo de autorizaciones temporales durante el período que dure la tramitación del expediente.⁷⁰

- b. Autorización especial de uso de armas para menores: los españoles y extranjeros con residencia en España, mayores de 16 años y menores de 18 años, que se encuentren en posesión legal de una autorización especial de uso de armas para menores (AEM) podrán utilizar exclusivamente para la caza o para competiciones deportivas (categoría de junior) las armas de fuego de las categorías 2ª.2 y 3ª.1. Estos menores no pueden poseer ni portar dichas armas dentro de las poblaciones. Para poder utilizar las armas, el menor deberá ir acompañado de una persona mayor de edad con licencia de armas D, E o F en vigor que previamente se hayan comprometido por escrito a acompañarlo y vigilarlo en la cacería o acto deportivo.

En el caso de los españoles y extranjeros con residencia en España, mayores de 14 años y menores de 18 años, con residencia en España, que se encuentren en posesión legal de una autorización especial de uso de armas para menores (AEM) podrán utilizar exclusivamente para la caza o para competiciones deportivas las armas de fuego de las categorías 3ª.2 y 3ª.3. El menor para utilizar el arma deberá ir acompañado de una persona mayor de edad con licencia de armas D, E o F en vigor que previamente se hayan comprometido por escrito a acompañarlo y vigilarlo en la cacería o acto deportivo.

Las autorizaciones especiales de uso de armas para menores (AEM) serán concedidas por el Director General de la Guardia Civil y tendrán validez hasta la mayoría de edad de sus titulares, sin necesidad de obtener renovaciones. La vigencia de las autorizaciones estará condicionada a que el menor mantenga los requisitos exigibles para su otorgamiento. Los órganos competentes para su expedición pueden comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y, en caso contrario, procederán a revocarlas. El procedimiento para obtener dicha autorización, seguirá el mismo procedimiento que se requiere para obtener las licencias de armas de tipo D y E, con la particularidad de que se debe presentar una autorización de la persona

⁷⁰ Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R., “El derecho de caza en España”, Op. Cit. Pág.35.

que ostenta la patria potestad o tutela del menor, si bien la solicitud irá suscrita por ambos y toda la documentación va referida a ambos solicitantes.⁷¹

- c. Autorización especial de uso de armas para extranjeros y españoles residentes en el extranjero: se concede a españoles y extranjeros que residen en un país no miembro de la UE y que cuenten con la oportuna licencia de caza. Será expedida por la Intervención de Armas del lugar de entrada o por la Dirección General de la Guardia Civil a través de la embajada o consulado. Terminada la vigencia de la autorización especial, si los titulares desearan prolongar su estancia en España teniendo y usando las armas, podrán concedérseles hasta dos prórrogas de aquél, de tres meses de duración cada una. Podrán traer consigo un máximo de tres armas, rifles o escopetas.⁷²
- d. Autorización de armas para viajes a través de Estados miembros de la UE: los extranjeros comunitarios para viajar por España portando un arma, deberán solicitar dicha autorización a la Dirección General de la Guardia Civil y a la autoridad competente del Estado de residencia. Cuando se trate de residentes españoles que viajan a otro país de la UE, deberán solicitar también dicha autorización. Se conceden por un plazo máximo de un año, renovable, y se concede para uno o para varios viajes, dicha autorización se hará constar en la Tarjeta Europea de Armas de Fuego.⁷³

2.1.2. Guía de pertenencia del arma.

La tenencia y uso de armas de caza, rifles, escopetas y ballestas, deben estar documentadas con su correspondiente guía de pertenencia, expedida por el servicio de la Intervención de armas de la Guardia Civil. Este documento acredita al titular del arma, podría denominarse como el DNI del arma, conteniéndose una reseña completa de la misma. Ésta debe poder ser exhibida por el cazador, ya que siempre debe acompañar

⁷¹ Vid. Art. 109 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁷² Vid. Art. 110 y 111 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

⁷³ Vid. Art. 112 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

al arma en los casos de uso, depósito y transporte. En ella consta el número de D.N.I, los datos personales, la licencia de armas y la reseña completa del arma.⁷⁴

2.1.3. Tarjeta de armas

Es un documento de carácter personal, en él constan las armas de fuego que lleve o vaya a utilizar su titular y permite el tránsito de este con aquéllas por países miembros de la UE. Será expedida, previa solicitud del interesado, por la Dirección General de la Guardia Civil, a los residentes en España que estén debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de dichas armas. Su vigencia es de cinco años y será renovable mientras subsista la titularidad de las armas que ampare.⁷⁵

La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será intransferible y se harán constar en ella el arma o armas que posea y utilice el titular de la Tarjeta. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la tarjeta. Se mencionarán en la Tarjeta los cambios en la tenencia o en las características de las armas, así como la pérdida o robo de las mismas. Previa la obtención de la tarjeta, será necesario la obtención por el interesado de la autorización de armas para viajes a través de Estados miembros, que autoriza a introducir, tener o utilizar las armas que ampara la tarjeta. Al expedir la Tarjeta Europea de Armas de Fuego se informará por escrito al titular sobre los Estados miembros de la Unión Europea que tengan prohibidas o sometidas a autorización la adquisición y tenencia de las armas de fuego a que se refiera la tarjeta.⁷⁶

2.2. Competencias autonómicas

Las CCAA, según lo establecido en el artículo 148.1.11º de la CE, asumen la competencia en materia de caza y así lo recogen en sus Estatutos de Autonomía.⁷⁷ Para

⁷⁴ Vid. Arts. 88 y 89 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Cfr. GÁLVEZ CANO, M. R., “El derecho de caza en España”, Op. Cit. Pág.33

⁷⁵ Cfr. BENACHES LAFUENTE, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.64 y 65

⁷⁶ Vid. Art. 113 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y Art. 1.4 de la Directiva del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, de 18 de junio de 1991(91/477/CEE); GÁLVEZ CANO, M.R., “El derecho de caza en España”, Op.Cit. Pág.36.

⁷⁷ Vid. Art. 148.1.11ª CE “1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial”; Art.

ello el TC ha precisado el alcance de las competencias autonómicas.⁷⁸ Asimismo, es el propio Estado el que otorga la responsabilidad principal a las CCAA en la ordenación jurídica de la caza.

Las propias CCAA regulan en su normativa los requisitos de obligado cumplimiento para la obtención, por parte de los cazadores de los permisos y autorizaciones necesarios para el ejercicio de la caza, así como los requisitos relativos al aprovechamiento en relación a la regulación de los arrendamientos, la cesión de terrenos cinegéticos y su visado por la Administración autonómica.⁷⁹ Al disponerse un período mínimo de duración de dichos contratos lo que se pretende es dotarlos de cierta estabilidad temporal con la finalidad de impedir que el cambio continuado de titulares o la variación en el destino y aprovechamiento de tales terrenos perjudique la fauna silvestre existente en los mismos, y aun mas, que dificulte la actividad de conservación, ordenación y planificación de ese recurso natural.⁸⁰

32.1.9ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; Art.31.17 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; Art.10.10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco; Art.27.15 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia; Art.24.12 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria; Art.10.13 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias; Art.50.1.b de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra; Art.71.23ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; Art.119.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña; Art.10.1.9. de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia; Art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia; Art.31.1.10º de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; Art.8.1.21 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja; Art.9.14 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Art.26.1.9 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; Art.10.19 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Illes Balears; Art.30.4 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias; Art.21.1.8º de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla; Art.21.1.8º de la Ley Orgánica 1/1995, 13 marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta.

⁷⁸ Vid. STC 102/1995, de 26 de junio de 1995, (fundamento jurídico 2º); STC 147/1991, de 4 de julio (fundamento jurídico 4º); STC 329/1993, de 12 de noviembre de 1993 (fundamento jurídico 4º).

⁷⁹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. cit. Pág.317.

⁸⁰ Así lo recoge el fundamento jurídico sexto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1998 de 22 de enero.

2.2.1. Licencias de caza: su exigencia y condiciones

Es requisito indispensable para poder practicar la actividad cinegética, recogido tanto en la legislación estatal como autonómica. De acuerdo con el artículo 3.1 de la LC de 1970, según el cual establece que *“El derecho a cazar corresponde a toda persona mayor de catorce años que esté en posesión de la licencia de caza y cumpla los demás requisitos establecidos en la presente Ley”*. A su vez, el artículo 34.1 del mismo cuerpo legal, indica que *“La licencia de caza es el documento nominal e intransferible cuya tenencia es necesaria para practicar la caza dentro del territorio nacional”*. No será necesaria la obtención de la licencia de caza para el caso de los ojeadores, batidores, secretarios o podenqueros que asistan en calidad de tales, sin portar armas de caza desenfundadas, a ojeos, batidas o monterías.⁸¹

La mayoría de los autores considera que la licencia de caza es una autorización administrativa que permite el ejercicio de la caza a quien la solicite y reúna las condiciones exigidas por la normativa, esta exigencia de cumplimiento normativo, pone de manifiesto el carácter reglado de la licencia.⁸² LAGUNA DE PAZ, considera que las licencias de caza, no son autorizaciones administrativas, sino certificaciones que expresan el reconocimiento por parte de la Administración, de que su titular reúne las condiciones de aptitud para poder desarrollar la actividad.⁸³

La doctrina ha venido debatiendo sobre la existencia o no de un derecho público subjetivo del ciudadano a llevar a cabo la actividad cinegética, derivando así un carácter declarativo o constitutivo de la licencia. De acuerdo con BOQUERA OLIVER, la licencia no es un mero requisito formal para ejercer la caza, sino una condición de la existencia del derecho a cazar.⁸⁴ LAGUNA DE PAZ, entiende que la licencia de caza tendría una naturaleza declarativa, se limitaría a remover los obstáculos para el ejercicio

⁸¹ Vid. Art. 34.3 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

⁸² Cfr. DE LOS MOZOS J.L. “Precedentes históricos y aspectos civiles del Derecho de caza”. Edit. RDpriv., num.4, 1972. Pág. 300; BENACHES LAFUENTE, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág. 60 y ss.;

⁸³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.329

⁸⁴ Cfr. BOQUERA OLIVER “Aspectos administrativos de la Ley de Caza”. Edit. REVL, núm. 177, 1973. Pág.36 y 37.

de una actividad a la que el particular tiene derecho, pero que por razones de interés público, la norma somete al previo control y habilitación administrativa.⁸⁵ Por el contrario, LÓPEZ RAMON, entiende que la licencia tiene carácter constitutivo, ya que crea el derecho a cazar por un tiempo. Sería una técnica próxima a la concesión de la que se distinguiría por la ausencia *de publicatio*.⁸⁶

De acuerdo con PANTALEÓN PRIETO y LAGUNA DE PAZ, las licencias de caza, son actos de carácter reglado, así resulta de su previsión normativa, que no reconoce a la Administración regional facultad alguna para valorar la oportunidad de su otorgamiento. La Administración únicamente debe constatar la aptitud del solicitante para el ejercicio de esta actividad, por lo que concederá la licencia cuando los particulares cumplan los requisitos exigidos por la legislación autonómica.⁸⁷

La potestad de conceder estas licencias pertenece a la CA correspondiente. Los requisitos para su obtención, vienen recogidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y de acuerdo con el modelo oficial correspondiente a cada CCAA.⁸⁸ A su vez, junto con la solicitud, el solicitante de la licencia de caza, deberá acreditar ser mayor de 14 años (cuando no esté emancipado necesitara la autorización escrita del

⁸⁵ Cfr. LAGUNA DE PAZ J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.104.

⁸⁶ Cfr. LOPEZ RAMON. F.”La protección de la fauna en el Derecho español”. Edit. Instituto García Oviedo, 1980. Sevilla. Pág. 48 y ss.

⁸⁷ Cfr. PANTALEÓN PRIETO, A.F. “Comentario al art. 611, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albadalejo” Op. Cit. Pág. 234; LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.329 y 330.

⁸⁸ Vid. Art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre Solicitudes de iniciación. ”1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: A) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. B) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. C) Lugar y fecha. D) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. E) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina. 4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan”.

representante legal para obtener la licencia de caza), contar con un seguro de responsabilidad civil, no estar inhabilitado para la obtención de la licencia de caza por sanción administrativa firme o por resolución judicial firme en aplicación de la legislación penal. La gran mayoría de las legislaciones autonómicas, incluida la estatal, establecen como requisito previo a la obtención de la licencia de caza, haber superado el examen o prueba de aptitud.⁸⁹

La licencia de caza, como recoge la LC de 1970 y las legislaciones autonómicas, es personal, nominal, intransferible y a término, “*sin perjuicio de la posibilidad de renovación*”, que depende de los requisitos subjetivos del solicitante. Su alcance se limita al territorio de la CCAA que expida la licencia de caza, aunque puedan darse posibles convenios de reciprocidad con otras CCAA.⁹⁰ La duración de las licencias de caza será determinada por las CCAA que la expida, la Ley de caza estatal, establece como norma general, que la renovación de las licencias será anual.⁹¹

La licencia podrá quedar sin efecto en los siguientes casos: a) tras la imposición de una resolución sancionadora que lleve aparejada esta consecuencia, b) por la práctica de la caza con determinadas armas sin la autorización especial que la normativa requiera en estos casos y c) por la realización de la caza sin estar en posesión del contrato del seguro obligatorio. Serán causas legales para denegar la licencia de caza, la inhabilitación que sea consecuencia de la imposición de una sanción penal o administrativa firme y la no acreditación del cumplimiento de otras sanciones firmes de índole diversa.⁹²

Las licencias de caza, así como la de armas, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, suponen el reconocimiento o declaración administrativa de la necesaria aptitud o

⁸⁹ Vid. Art.34.6 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art. 15 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.17 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.6 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

⁹⁰ Vid. Así por ejemplo La Comunidad Valenciana permite la homologación de la licencia de caza con armas de otras Comunidades Autónomas, para ello la Generalidad Valenciana expedirá un sello que adherido y matasellado por el órgano competente en las licencias de caza expedidas por otra Comunidad, las convalidara para cazar en la Comunidad Valenciana, previa presentación del resguardo acreditativo de haber ingresado el importe que corresponda en la entidad bancaria que se determine.

⁹¹ Vid. GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Op. Cit. pág.17 y ss.

⁹² Vid. BENACHES LAFUENTE, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.60 y ss.

capacidad para desarrollar la actividad. Así, la Administración consigue objetivos de seguridad y de protección de la fauna silvestre.⁹³

2.2.1.1. Pruebas de aptitud o examen del cazador

Serán las propias CCAA, al ser una competencia de las mismas, quienes establezcan la necesidad de realizar o no un examen de cazador u otro sistema de acceso equivalente para obtener por primera vez la licencia de caza. Es una exigencia habitual en países europeos, y además es un requisito recomendado por la UE.⁹⁴ En España ha sido recogida por la mayoría de las CCAA, a su vez reconocen como válidos para obtener la licencia de caza los certificados de aptitud expedidos por cualquier otra CA de acuerdo con el principio de reciprocidad, así como la documentación de caza equivalente a los cazadores extranjeros.⁹⁵

⁹³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.327.

⁹⁴ Vid. En este sentido, la Recomendación núm. R (85) 17, de 23.9, del Comité de Ministros del Consejo de Europa aconseja condicionar el otorgamiento de la licencia de caza a la previa realización de unas pruebas teóricas y prácticas. En esta misma dirección, la Resolución 882 (1987) —relativa a la importancia de la caza para las regiones rurales de Europa—, adoptada el 1.7 por la Comisión Permanente, actuando en nombre de la Asamblea del Consejo de Europa, sugiere a los Estados impulsar la mejora en la formación de los cazadores, consciente de que algunos daños causados a la fauna silvestre son debidos a su inexperiencia

⁹⁵ Vid. CASTILLA Y LEÓN desde el 19 de marzo de 2015 se encuentra en vigor el Decreto 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León, salvo quienes acrediten haber superado el examen del cazador en otras CCAA o fuera de España; PAÍS VASCO establece el Examen de Caza, cuya superación es obligatoria para todas aquellas personas que pretendan obtener por primera vez una Licencia de Caza. Art.11 y 12 Del Decreto 160/2014, de 29 de julio, de la licencia de caza y el examen de aptitud para cazar. El decreto reconoce como válidos para la obtención de licencias de caza en el País Vasco los certificados de aptitud expedidos por otras Comunidades Autónomas o Estados; GALICIA: lo recoge esta obligación en la Orden de 1 de junio de 2007 por la que se regula el examen del cazador en la Comunidad Autónoma de Galicia el art.1 establece que para poder presentarse al examen del cazador será preciso tener cumplidos los 16 años, el art. 7 1. Establece que serán válidos los certificados de aptitud o las licencias de caza expedidos por otras comunidades autónomas en los que se muestren pruebas semejantes, expedidos por los organismos competentes y debidamente diligenciados, los cazadores extranjeros no residentes en España quedan eximidos de la obtención del certificado para obtener la primera licencia de caza en Galicia, siempre que posean una licencia de caza que sea válida en España; ANDALUCÍA: todas aquellas personas que quieran obtener una licencia de caza deben estar previamente acreditados en el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental. Para ello deberán haber superado un examen destinado a tal fin o realizar un curso específico, así lo recoge el art.77 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, a su vez el art.75 recoge que las personas interesadas en practicar la caza en Andalucía, procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que no hayan implantado un sistema de habilitación homologable al de Andalucía, podrán obtener autorización excepcional y restringida para practicar la caza en esta Comunidad, mediante la certificación de acreditación de la aptitud y conocimiento para el ejercicio de la caza expedida en sus Comunidades Autónomas o Estados respectivos; ASTURIAS: para el ejercicio de la caza será requisito necesario la acreditación, mediante el

La prueba de aptitud o examen del cazador ha de superarse como requisito indispensable para la obtención por primera vez de la licencia de caza. A su vez, deberán superarlo los cazadores que no justifiquen haber tenido una licencia en los años

correspondiente examen, de la aptitud y conocimiento preciso de las materias relacionadas con la caza, art.28 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza; CANTABRIA: el art.29 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria establece que para obtener la licencia de caza es condición necesaria haber realizado un periodo de formación y la superación de las correspondientes pruebas de aptitud que acrediten estar en posesión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la caza, a su vez el art.28 recoge, que la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá suscribir convenios con otras Comunidades Autónomas para homologar los respectivos títulos administrativos de intervención exigidos para la actividad de caza, con base en los principios de reciprocidad y equivalencia de las condiciones requeridas o, en su defecto, arbitrar procedimientos que faciliten la expedición de las licencias de caza; RIOJA El Reglamento de Caza de La Rioja (Decreto 17/2004, de 27 de febrero) establece en su artículo 10 la obligación de superar una prueba de aptitud para obtener la licencia de caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja por primera vez. No será necesario realizar el examen si el cazador: dispone de una licencia de caza de otra Comunidad Autónoma en la que haya superado el 'Examen del Cazador', siempre que esté dentro de los últimos 10 años a contar desde la fecha de solicitud, y lo justifique mediante la presentación de un certificado expedido en la CCAA en la que ha obtenido la licencia, tras el examen; COMUNIDAD VALENCIANA: el art.6.2.b) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, exige tener superadas o convalidadas las correspondientes pruebas de aptitud; ARAGÓN: en el art.32.3 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza, para la obtención de la licencia interautonómica de caza, se establecerá un examen o prueba de aptitud sobre materias relacionadas con la caza que habilitará a aquellos cazadores que, deban superarlo, a obtener dicha licencia. Los contenidos y forma de desarrollo del examen o de las pruebas de aptitud se establecerán por orden del consejero competente en materia de caza, en la que se determinará: a) El contenido de las pruebas de aptitud convenidas y cuantas otras cuestiones sean precisas para la correcta realización de las mismas.b) Los criterios de exención de las pruebas de aptitud, que estarán basados en la superación de pruebas homólogas en otras comunidades autónomas o en países de la Unión Europea o en la posesión de licencia de caza durante ejercicios cinegéticos anteriores a la publicación de la nueva ley; CANARIAS: el art.30.2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, establece que las pruebas, que efectuarán los cabildos insulares o, por delegación de éstos, las sociedades colaboradoras, versarán sobre el conocimiento de la legislación cinegética, armas y artes, materiales empleados en la caza, distinción de las diversas especies de animales, ética y comportamiento del cazador y todas aquellas materias que se establezcan reglamentariamente. El art.30.4. reconoce como válidos para obtener la licencia de caza en Canarias, los certificados de aptitud expedidos por otras Comunidades Autónomas, o la documentación equivalente en el caso de los cazadores extranjeros; NAVARRA: el art.13 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca recoge que para obtener por primera vez la licencia de caza de la Comunidad Foral de Navarra, será requisito necesario haber superado las pruebas de aptitud y conocimientos precisos de las materias relacionadas con la caza. El art.13.2. establece que serán válidos para obtener la licencia de caza de la Comunidad Foral de Navarra, los certificados de aptitud expedidos por cualquier otra Comunidad Autónoma, siempre que para su obtención se deban superar pruebas de aptitud y conocimiento; EXTREMADURA: el art.50.2.b) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura establece que será necesario ostentar la aptitud y el conocimiento necesarios para la práctica de la caza.; MADRID ; establece en el art.8.1 del DECRETO 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid, que los nuevos cazadores habrán de superar una prueba de aptitud o sistema equivalente, relativa a la legislación cinegética, conocimiento de las especies que se puedan cazar, modalidades de caza y normas de seguridad en las cacerías; CASTILLA LA MANCHA: lo recoge art.17.2 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza, establece que será necesario para obtener la licencia de caza superar las pruebas de aptitud que determine la Consejería o haber estado en posesión de licencia, expedida en cualquier otra Comunidad Autónoma del territorio español en alguno de los últimos cinco años anteriores a la solicitud, salvo cuando la licencia obtenida de esta forma hubiere sido retirada en virtud de sentencia judicial o resolución administrativa, firmes. Se reconocerán como válidos para obtener la licencia los certificados de aptitud expedidos por cualquier otra Comunidad Autónoma. Los cazadores extranjeros no residentes en España quedarán eximidos del certificado de aptitud para optar a la licencia de caza de Castilla-La Mancha, siempre que reúnan los requisitos equivalentes de su país. CATALUÑA, MURCIA Y BALEARES aún no recogen la obligación de realizar el examen del cazador.

anteriores. Este lapso de tiempo se fijara por las normas correspondientes de cada CCAA. En el caso de los extranjeros, deberán aportar documento acreditativo de la habilitación para el ejercicio de la caza emitido por el país correspondiente.⁹⁶

El temario objeto de examen versará sobre el conocimiento de la legislación de caza, especies que se pueden cazar legalmente, especies protegidas más significativas y sobre los distintos medios y modalidades de caza. La licencia se concederá cuando se acredite, la superación de las pruebas, de la aptitud y el conocimiento preciso de las materias relacionadas con la caza. Anualmente mediante resolución, la Administración competente en cada CCAA, establecerá las fechas de las convocatorias para la realización de las pruebas, los epígrafes del temario sobre el que versará el examen y el procedimiento para la inscripción y trámites posteriores.⁹⁷

2.2.1.2. Clases de licencias

Las licencias de caza pueden clasificarse, de acuerdo con cada CCAA, según la clase de caza, ya sea mayor o menor; los medios, utilización o no de armas de fuego o empleo de otros procedimientos autorizados para cazar; y a la expedición, que dependerá de las clases de terrenos donde se practica la caza.⁹⁸

⁹⁶ Vid. Art.59.5 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.17.1 y 3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Disposición transitoria primera de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

⁹⁷ Vid. art.3 del Decreto 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León; art.12 y art.16 del Decreto 160/2014, de 29 de julio, de la licencia de caza y el examen de aptitud para cazar del País Vasco.

⁹⁸ Así ANDALUCÍA: establece tres tipos de licencia diferentes: A. Caza con arma de fuego y otros procedimientos. B. Caza sin arma de fuego C. Para obtener esta licencia es necesario poseer la A y la B. Aquí encontramos el tipo C1 (cetrería) y el tipo C2 (reclamo de perdiz) y el C4 (rehalas por un año); Solo dos tipos de licencia, clase A y clase B; ASTURIAS: solo existe un tipo de licencia, válido tanto para caza mayor; BALEARES: A. A1, para caza con armas de fuego y procedimientos autorizados, el A2 es el mismo pero para menores de edad, B. Caza sin arma de fuego. Se divide también en B1 y B2 para menores de 18 años, hay también licencias para procedimientos especiales, como son la cetrería, el reclamo de perdiz y caza con hurón; Canarias: hay tres tipos básicos: A1 (escopeta y perros mayores de 18 años) y A2 (menores de 18 años); B1 (sin arma de fuego mayores de 18 años) y B2; y C1 (hurón). Los demás tipos son combinaciones de estos tres: A1C1; B1C1; A2C1; y B2C1, además de estas clases, podemos encontrar las licencias A3 y A4, que son para extranjeros no residentes. Los tipos B3 y B4 van dirigidos a los anteriores pero sin armas de fuego. La C2 es una licencia para rehalas de perros, en número entre 16 y 40 animales; CANTABRIA, NAVARRA, PAÍS VASCO, LA RIOJA, CASTILLA LA MANCHA y MADRID: la licencia en esta Comunidad Autónoma es única; Castilla y León: las licencias se dividen en tres tipos: de caza con armas de fuego; de caza con galgos, y de rehalas de caza; CATALUÑA: existen dos tipos de licencias A. Con armas de fuego, B. Sin armas de fuego; COMUNIDAD VALENCIANA: contempla tres tipos de licencias: A: con armas, B: sin armas y C:

- Tipo A: autoriza para el ejercicio de la caza con armas de fuego.
- Tipo B: autoriza para el ejercicio de la caza con otros medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos a los anteriores.
- Tipo C: habilita, dependiendo de la CCAA, a un tipo de modalidad de caza o a la utilización de medios o procedimientos especiales.

La vigencia de las Licencias de caza dependerá de cada CCAA, varían desde las anuales hasta las quinquenales. La solicitud de las licencias de caza se podrá realizar de forma telemática o presencial en las oficinas de expedición correspondiente.⁹⁹

2.2.1.3. Convenios de reciprocidad

Algunas legislaciones de caza autonómicas, prevén la posibilidad de firmar convenios entre CCAA, en beneficio de la caza y buscando la agilidad en los trámites para obtener la licencia correspondiente.

Destaca la Resolución de 10 de julio de 2014, por la que se ordena la publicación del «Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia

rehala o jauría de perros; EXTREMADURA: las licencias se dividen en las siguientes clases: A (armas de fuego), B: en este tipo se agrupan el guía o perrero, la caza con galgo, las rehalas, la caza con ballesta, arco y cetrería, C. Para reclamo de perdiz; GALICIA: en esta comunidad existen tres tipos de licencias: A. Con armas de fuego. B. Cualquier procedimiento autorizado excepto armas de fuego. Perros, cetrería y arco; C. Para poseer una rehala con fines de caza; MURCIA: las licencias en esta comunidad se dividen en los siguientes tipos: G. Caza con armas de fuego y cualquier otro procedimiento autorizado (reclamo de perdiz, recargo de caza mayor, perdices a ojeo y tirada de patos), S. Caza sin armas de fuego, C1. Cetrería, C2. Caza con hurón, C3. Rehalas de perros en número entre 16 y 40, TH. Tenencia de hurón; Cfr. MOLINA. J. artículo “Si quiere cazar en toda España, ya sabe: haga acopio de permisos”. Edit. Club de caza, <http://www.club-caza.com/articulos/174molina.asp>.

⁹⁹ Así por ejemplo, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Navarra y País Vasco establecen una validez anual; Asturias y Extremadura establecen una validez de 1 a 5 años; Castilla la Mancha, Murcia y La Rioja establecen una validez anual o quinquenal, al igual que Madrid pero esta añade que en el caso de mayores de sesenta y cinco años la vigencia será indefinida.; Andalucía y Cataluña, una validez de 1,3 y 5 años; Cantabria una validez de 1, 2 o 3 años; Canarias anual y licencias temporales de caza, válidas hasta tres meses; Comunidad Valencia art. 5.1 del Decreto 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León. “La expedición del certificado de aptitud permitirá al interesado obtener la primera licencia de caza bien de forma telemática a través de la página web <http://www.jcyl.es/cazaypesca>, o de forma presencial en las oficinas de expedición indicadas en dicha página.”

única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial». Aunque actualmente no es posible la emisión de dicha licencia.¹⁰⁰

La resolución busca evitar con la emisión de licencias únicas de caza que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada CA en donde deseen realizar la actividad cinegética, a la vez que redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las Administraciones que suscriben el Protocolo. Para ello, los requisitos exigidos para la obtención de la licencia de caza y el período de validez de las mismas deberán ser equivalentes en las cuatro CCAA.¹⁰¹

2.2.1.4. Otros documentos complementarios.

A) Seguro obligatorio de responsabilidad civil:

El Real Decreto 63/1994, de 21 de enero que aprueba la regulación del seguro obligatorio del cazador establece, en su artículo 1.2., que todo cazador con armas deberá, durante la acción de cazar, estar asegurado por un contrato de Seguro de responsabilidad civil del cazador. A su vez, deberá llevarlo consigo durante el ejercicio de la caza. No se podrá obtener la licencia de caza sin haber acreditado la previa celebración de este contrato de seguro ni practicar el ejercicio de la misma sin la existencia y plenitud de efectos del mismo.

El seguro cubre en todo el territorio español la obligación de todo cazador con armas de indemnizar los daños corporales causados a las personas con ocasión de la acción de cazar, derivados de un disparo involuntario del arma, así como, los daños ocasionados en tiempo de descanso dentro de los límites del terreno de caza, en tanto se esté practicando el ejercicio de la misma. Quedan excluidos del ámbito de cobertura los

¹⁰⁰ Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid, se han adherido, Aragón, Galicia, faltan por formalizarlo oficialmente: Asturias y la Comunidad Valenciana

<<http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284351830460/>>

¹⁰¹ Vid. Art. Tercero y Cuarto de la Resolución de 10 de julio de 2014 por la que se ordena la publicación del «Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial».

supuestos en que el cazador no esté obligado a indemnizar porque el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. No se considerarán casos de fuerza mayor los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o de las municiones.¹⁰²

Tanto el referenciado Real Decreto, en su artículo 6, como la legislación autonómica, recogen la denominada responsabilidad concurrente, por la que, si los daños asegurados hubieran sido causados por los integrantes de una partida de caza y no consta el autor de los mismos, responderán solidariamente los aseguradores de los miembros de dicha partida. A estos efectos, se considerarán únicamente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la caza en la ocasión y lugar en que el daño haya sido producido y que hubieran utilizado armas de la clase que originó el daño.

La ausencia del Seguro de Responsabilidad Civil es determinante para la obtención de la licencia de caza y es considerado como infracción cuya calificación y cuantía varía de una Comunidad a otra.¹⁰³

B) Documentación del perro:

De forma general se establece que los dueños de los perros, tienen obligación de registrar, matricular y vacunarlos.¹⁰⁴

C) Permisos necesarios para cazar:

¹⁰² Vid. Art.2 del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria.

¹⁰³ Ejemplo de ello: Art.55 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco “*infracciones muy graves: cazar no teniendo contratado y vigente el seguro obligatorio correspondiente*”; art.77.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía: “*son infracciones graves: Cazar sin contrato de seguro obligatorio*”; art.76.12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León: “*Tendrán la consideración de infracciones leves: cazar no teniendo contratado y vigente el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador*”.

¹⁰⁴ Vid. El Art. 11 de la Ley de caza de la Comunidad Valenciana dispone “*que sus dueños y cuidadores tendrán la obligación de a) controlarlos eficazmente no pudiendo alejarse más de cinco metros de aquéllos ni ejercer acciones de búsqueda de piezas de caza, a excepción hecha de la acción misma de cazar, entrene o adiestramiento autorizado. b) a atraillarlos en los meses que reglamentariamente se determine. c) a cumplir, por parte de los dueños o poseedores, las prescripciones legales sobre tenencia, tratamientos sanitarios o vacunación, e identificación y censado.*”

Las distintas leyes, que regulan la actividad cinegética, de carácter autonómico en relación a los permisos necesarios condicionan la práctica de esta actividad a la obtención por el cazador de una serie de permisos.

Son obligatorios en todo caso, el permiso que debe proporcionar el titular cinegético del terreno al cazador para permitirle cazar en el aprovechamiento cinegético. A su vez, en los terrenos sometidos a Régimen Cinegético bajo Gestión Pública, deberán contar con el permiso, escrito y firmado en modelo oficial por el titular del aprovechamiento.¹⁰⁵ Estos permisos son personales e intransferibles, autorizan a su titular para el ejercicio de la actividad cinegética en las condiciones fijados en los mismos.¹⁰⁶ En los cotos deportivos será necesario un permiso para practicar la caza deportiva.¹⁰⁷

Serán obligatorios en determinados supuestos, el permiso de la autoridad autonómica competente en materia de caza para cazar en el territorio de la CA en cuestión.¹⁰⁸ En relación a la clasificación del terreno, algunas CCAA en su legislación recogen la distinción entre terrenos de aprovechamiento común y de régimen especial, donde se exige el permiso en algunos terrenos, como son cotos sociales o locales o en las reservas de caza, considerando que el permiso en los terrenos de aprovechamiento común, se entiende incluido en la licencia.¹⁰⁹

En relación a los permisos o autorizaciones adicionales, permiten determinadas modalidades de caza o empleo de medios para su práctica que normalmente no están

¹⁰⁵ Vid. Art. 14.e) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y Art. 53.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

¹⁰⁶ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Requisitos para el ejercicio de la caza”, en GARCÍA ROMERO, C.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.I. y CUENA BOY, A “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid 2002, pág.182.

¹⁰⁷ Vid. Art.57.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura: “*Se podrán realizar campeonatos, recorridos de caza y otras pruebas deportivas oficiales en terrenos Cinegéticos bajo Gestión Pública, Cotos Sociales, Cotos Privados de Caza y Zonas de Caza Limitada, debiendo para ello contar con la autorización previa de la Consejería con competencias en materia de caza. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y las condiciones de la autorización para el uso de los terrenos y las modalidades de caza.*”

¹⁰⁸ Vid. Art. 34. 1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias.

¹⁰⁹ Cfr. BENACHES LAFUENTE, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.62

permitidos, salvo por motivos excepcionales¹¹⁰. Se otorgará el permiso para cazar especies cinegéticas no permitidas, por razones de salud de estas o de las personas para evitar daños en los cultivos o ganado y para garantizar la conservación de especies. Cuando resulte conveniente un control de la fauna silvestre se otorgará, por parte de la autoridad competente, permiso especial que permita la caza con fines.¹¹¹

2.2.2. Determinación de las especies cazables.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 62.1 establece que la caza solo podrá realizarse sobre las especies que determinen las CCAA, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea. Por lo que, el órgano competente de las CCAA aprobará y publicará la Orden Anual de Caza donde se determinaran las especies cazables y comercializables.¹¹²

El Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se determinan los listados de las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección, solo considera especies cazaderas las relacionadas en sus anexos.¹¹³ De acuerdo con su disposición adicional primera, esta norma tendría carácter básico. En contraposición, el TC, en su Sentencia 102/1995, en el fundamento jurídico 30º, rechazó

¹¹⁰ En este sentido la Comunidad valenciana exige la solicitud de permisos especiales en los supuestos siguientes: para control de especies potencialmente perjudiciales para la agricultura, ganadería, caza, fauna silvestre (autorización para batidas al jabalí o de control de depredadores. Las solicitudes de control pueden estar recogidas en los Planes de aprovechamiento cinegético, por lo que en la aprobación del Plan está implícita la autorización), solicitud de autorización especial para captura en vivo y red de fringílidos para canto, solicitud para cazar en época de media veda. También es objeto de un procedimiento especial el permiso para cazar en la Reserva de caza de Muela de Cortes (Valencia); téngase en cuenta que Sucede así cuando se autoriza la caza de especies cinegéticas no permitidas por razones de salud de estas o de las personas, para garantizar la conservación de las especies, para evitar daños en los cultivos o en el ganado; también cuando se autoriza el empleo de armas, municiones o procedimientos en principio no autorizados; véase por ejemplo, en la caza con fines científicos, en la caza intensiva.

¹¹¹ Cfr. BENACHES LAFUENTE, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.62

¹¹² Vid. Anexo IV del presente trabajo.

¹¹³ Estos listados podían modificarse, a propuesta del MAPA y previo informe de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, cuando se constatará una variación significativa de las circunstancias de índole biológica o demográfica que las afectasen (Art. 1.2). Por su parte, se preveía la posibilidad de que las CCAA aplicaran medidas adicionales de protección sobre especies concretas, excluyéndolas del anexo I (Art. 1.3), así como que autorizaran la caza de las incluidas en su anexo II (lobo, tórtola turca y gaviota sombría) (Art. 1.4).

el carácter básico de este régimen. En consecuencia, corresponde a las CCAA la elaboración de las listas de especies susceptibles de caza, lo que se hace aprovechando la orden anual de veda.¹¹⁴ Por otra parte, con carácter general, las normas autonómicas prevén la posibilidad de prohibir la caza de especies susceptibles de ser aprehendidas, siempre que existan razones técnicas que así lo aconsejen, y con el fin de asegurar su conservación.¹¹⁵

Las CCAA establecerán un sistema de control de capturas o muertes accidentales y adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones negativas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y se minimicen en el futuro. En sus respectivos ámbitos territoriales, las CCAA podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación. A su vez, podrán incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza.¹¹⁶

Corresponde a las CCAA la elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación para las especies amenazadas. Como excepción, las prohibiciones establecidas por la LPNB, podrán quedar sin efecto, previa autorización de la CA, siempre que ello no suponga perjudicar la conservación de las poblaciones de que se trate.¹¹⁷

¹¹⁴ Vid. Art. 7.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, declara especies cinegéticas *“aquellas que se definan reglamentariamente como tales”*; en concreto, se consideran de acuerdo con el art.7.3 *“especies cazables aquellas, de entre las cinegéticas, que figuren en las correspondientes Órdenes Anuales de Caza que dicte la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”*; regula la Orden de veda el 41 de la misma Ley. Se entiende por pieza de caza de acuerdo con el art.9.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León *“cualquier ejemplar de las especies declaradas cazables en las Órdenes Anuales de Caza”*.

¹¹⁵ Dispone el Art.21 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias *“El órgano competente en la materia, oído el Consejo Regional de Caza, podrá prohibir la caza de especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, en atención a sus características peculiares y con el fin de su conservación, siempre que existan razones técnicas que lo aconsejen.”*

¹¹⁶ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.321 y ss.

¹¹⁷ Dispone el Art. 58.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: *“Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin*

2.2.3. Determinación de los procedimientos de caza.

La caza podrá practicarse empleando armas, animales o medios cuya utilización esté permitida por las legislaciones de caza autonómicas. El órgano competente de las CCAA aprobará y publicará la Orden Anual de Caza en la que se determinarán las distintas modalidades y capturas permitidas.¹¹⁸

Las CCAA en sus legislaciones de caza recogen la prohibición de la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos en el ejercicio de la caza.¹¹⁹ Con carácter general, el artículo 62.3.a) de la LPNB, recoge la referida prohibición y en particular las enumeradas en el Anexo VII, de igual forma prohíbe aquellos procedimientos que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie.¹²⁰

que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas. c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines. d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea. e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación. f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.” 2. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las circunstancias contempladas en el apartado e, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios para garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que el nivel máximo nacional de capturas, para cada especie, se ajusta al concepto de pequeñas cantidades. Igualmente, se establecerán los cupos máximos de captura que podrán concederse para cada especie, así como los sistemas de control del cumplimiento de dichas medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el período autorizado para efectuar la captura, retención o explotación prudente, sin perjuicio de los controles adicionales que deben también establecerse una vez transcurrido dicho período. 3. La autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores deberá ser pública, motivada y especificar: a) El objetivo y la justificación de la acción. b) Las especies a que se refiera. c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como las razones y el personal cualificado para su empleo. d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y lugar y si procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos científicos utilizados. e) Las medidas de control que se aplicarán. 4. Las Comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo previsto en este artículo, a efectos de su posterior notificación a la Comisión Europea y a los Organismos internacionales pertinentes, señalando, en cada caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de los mismos.

¹¹⁸ Vid. Art.51 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹¹⁹ Vid. Art.30 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.34. de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

¹²⁰ Dispone el Anexo VII “Procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte que quedan prohibidos de la Ley 42/2007”: a) *medios masivos o no selectivos.- animales ciegos o*

Previa autorización administrativa de las CCAA, siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa, estas prohibiciones podrán no ser de aplicación si se cumplen dos requisitos, el primero de ellos, que concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 58.1 LPNB, y el segundo, que se trate de especies de animales de interés comunitario no consideradas de protección estricta en la normativa de la Unión Europea.¹²¹

Asimismo, se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos.¹²²

2.2.4. Determinación de los períodos hábiles de caza.

Las CCAA determinarán las fechas hábiles en que se puede practicar la caza de cada especie, como medio para garantizar su conservación y fomento, como así lo recoge el artículo 62.2 LPNB. A su vez, dicha Ley en su artículo 62.3. b) prohíbe el ejercicio de la caza durante las épocas de celo, reproducción y crianza, así como en su

mutilados utilizados como reclamos.- grabadores y magnetófonos, aparatos electrocutores, dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o aturdir.- fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para iluminar los blancos, dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno.- armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos.- trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo.- redes, lazos (sólo para aves), cepos, trampas-cepo, venenos, cebos envenenados o tranquilizantes.- ligas.- explosivos.- asfixia con gas o humo.- ballestas.- anzuelos (salvo para el ejercicio de la pesca).b) medios de transporte.- aeronaves.- vehículos a motor.- barcos a motor (salvo para el ejercicio de la pesca).”

¹²¹ Dispone el Art. 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas. c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines. d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea. e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación. f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.”

¹²² Vid. Art.62.3.j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

trayecto de regreso hacia los lugares de cría, en el caso de las especies migratorias. El órgano competente de las CCAA aprobará y publicará la Orden Anual de Caza, en la que se determinarán las épocas hábiles de caza aplicables a las distintas especies en las diversas zonas.

2.2.5. Espacios en los que se puede cazar

De acuerdo con LAGUNA DE PAZ la delimitación de los terrenos es el medio que permite asegurar un ejercicio ordenado y racional de la actividad cinegética.¹²³ En consonancia, el artículo 62.2 LPNB establece que serán las CCAA las que determinarán los terrenos donde se puede cazar, se garantiza así la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio.¹²⁴

La legislación autonómica establece que la caza solo se podrá realizar en espacios expresamente declarados como cinegéticos y por los titulares de los derechos que habilitan para el aprovechamiento cinegético, o por las personas por ellos autorizadas.

Las CCAA en su legislación de caza, llevan a cabo una clasificación de los espacios en los que se puede cazar. En primer lugar distinguen entre terrenos cinegéticos y terrenos no cinegéticos. En los primeros se incluye las reservas regionales de caza, (se constituyen con el objeto de fomentar y conservar determinadas especies, lo que se hace compatible con su ordenado aprovechamiento cinegético) y los cotos de caza, (es el instrumento normal que permite el aprovechamiento cinegético de los terrenos).¹²⁵ Algunas CCAA incluyen dentro de esta categoría otros terrenos como son

¹²³ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.338 y ss.

¹²⁴ Vid. Art. 62.2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; véase también art. 19.2 Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León; art. 19.2 Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León.

¹²⁵ Vid. Art. 19.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León “1. Son terrenos cinegéticos: a) Las reservas regionales de caza. b) Los cotos de caza. c) Las zonas de caza controlada”; art. 20 de la Ley 4/1996: “Reservas regionales de caza.1. Se entiende por reserva regional de caza aquellos terrenos declarados como tales, mediante Ley de las Cortes de Castilla y León. 2. La titularidad cinegética de las reservas regionales de caza corresponderá a la Junta. 3. La administración de las reservas regionales de caza corresponde a la Consejería; los cotos de caza: superficies continuas susceptibles de aprovechamiento cinegético, declaradas como tales (Art. 21.1 de la Ley 4/1996) en virtud

las zonas de caza controlada, zona colectiva de caza o zona de caza limitada, entre otras.¹²⁶

Serán terrenos no cinegéticos, donde la caza estará prohibida, los refugios de fauna (tienen como finalidad la preservación y conservación de las especies amenazadas en las CCAA) y las zonas de seguridad (vías y caminos de uso público en las cuales se adoptaran medidas especiales que garanticen la protección de las personas y sus bienes).¹²⁷

de la correspondiente autorización administrativa (Art. 21.16 de la Ley 4/1996). La solicitud para constituir un coto de caza pueden cursarla quienes acrediten disponer de los derechos de disfrute cinegético en al menos el 75% de la superficie que se pretende acotar (Art. 21.4, párrafo primero, de la Ley 4/1996). Se incluyen en el coto los terrenos enclavados —parcelas cuyo perímetro linde en más de sus tres cuartas con éste—, siempre que sus propietarios no se manifiesten expresamente en contra (Art. 21.4, párrafo tercero, de la Ley 4/1996). Los titulares de los derechos sobre estos terrenos también podrán solicitar su segregación, pasando entonces a tener la consideración de vedados (Art. 21.4, párrafo cuarto, de la Ley 4/1996). La superficie mínima para constituir cotos de Caza será de 500 hectáreas, salvo que esté constituida por terrenos de un solo titular, en cuyo caso se reducirá a la mitad (Art. 21.9 de la Ley 4/1996). Una superficie continua susceptible de aprovechamiento cinegético perteneciente a varias personas que no alcance 500 hectáreas podrá ser declarada coto de caza si uno de éstos es titular de, al menos, 250 hectáreas. En caso de anulación o extinción de un coto, los terrenos que lo integran pasarán automáticamente a tener la condición de vedados (Art. 21.7 de la Ley 4/1996). La tasa de matriculación se establecerá de acuerdo con las posibilidades cinegéticas (Art. 21.13 de la Ley 4/1996); Art. 92.2 de la Ley 12/2001). Los cotos de caza se clasifican en tres tipos (Art. 21.17 de la Ley 4/1996). Los cotos privados de caza, cuya titularidad corresponde a particulares (Art. 22 de la Ley 4/1996). Otro tipo lo constituyen los cotos federativos de caza, que se singularizan —aparte de por su titularidad— por el deber que sobre ellos pesa de establecer una zona de reserva sobre, al menos, el 15% de la superficie del coto, que se excluye del aprovechamiento cinegético, (Art. 23 de la Ley 4/1996). Los cotos regionales de caza se constituyen sobre terrenos de propiedad de la Junta —o sobre los que ésta adquiera los derechos cinegéticos—, y se gestionan por la Administración regional con el fin de facilitar la caza a quienes estén en disposición de la licencia de caza (Art. 24 de la Ley 4/1996).

¹²⁶ Vid. Art. 25.1 Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León “Zonas de caza controlada. 1. Serán zonas de caza controlada aquellas constituidas mediante Orden de la Consejería sobre terrenos vedados o sobre las zonas de seguridad, en los que se considere conveniente establecer un plan de regulación y disfrute de su aprovechamiento cinegético, que será realizado y aprobado por la Dirección General”; art.16 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.34 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

¹²⁷ Dispone el art.27 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León: “1. La Junta, mediante Decreto, podrá constituir refugios regionales de fauna, para preservar y conservar las especies catalogadas singularmente amenazadas en la Comunidad. 2. La Consejería, mediante Orden, podrá constituir refugios de fauna temporales o estacionales para la protección y fomento de determinadas especies de fauna silvestre, por un plazo máximo de cinco años, prorrogables por resolución motivada. 3. Podrán promover el establecimiento de refugios de fauna, la Consejería de oficio, o las entidades públicas o privadas que en sus Estatutos contemplen objetivos acordes con la finalidad de aquéllos. 4. La administración y gestión de los refugios de fauna corresponde a la Consejería, que podrá firmar convenios de colaboración con las entidades promotoras. 5. Los titulares de derechos cinegéticos efectivamente existentes en los terrenos sobre los que se constituya un refugio de fauna, tendrán derecho a ser indemnizados por la privación de aquéllos, conforme a la legislación vigente. 6. Los refugios de fauna se señalarán conforme se determine reglamentariamente.”; **art.28:** “Son zonas de seguridad, a los efectos de esta Ley, aquellas en las cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes. Se prohíbe cazar dentro de estas zonas. A tales efectos cuando se transite por ellas, las armas deberán portarse descargadas. 2.

2.3. Coordinación y cooperación en la distribución de competencias en materia cinegética

La actividad cinegética es una materia descentralizada en lo relativo a la distribución de competencias, por lo que la coordinación e incluso la cooperación entre las distintas administraciones son imprescindibles para el buen funcionamiento de esta actividad.

A) *Coordinación*: de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, se produce por el concurso de competencias normativas estatales y autonómicas.¹²⁸ El TC resalta que se traduce en la fijación de medios y de sistemas de relación, que hagan posible la relación recíproca, homogeneidad técnica en determinados aspectos y acción conjunta en el ejercicio de las respectivas competencias.¹²⁹

La LPNB, para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige disponer de mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las CCAA, estableciendo la obligación de suministrarse

Se considerarán zonas de seguridad: a) Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. b) Las vías pecuarias. c) Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes. d) Los núcleos habitados. e) Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas de acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado como tal. 3. En los embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público que los rodean no podrá practicarse la caza, salvo que sea zona de caza controlada. 4. Queda prohibido el uso de armas de caza en el interior de los núcleos urbanos y rurales y otras zonas habitadas hasta el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones habitables, ampliado en una franja de 100 metros en todas las direcciones. 5. En el caso de núcleos habitados, edificios habitables aislados, recintos deportivos, jardines y parques destinados al uso público, áreas recreativas y zona de acampada, el límite de la prohibición será el de los propios terrenos donde se encuentren instalados, ampliado en una franja de 100 metros. 6. Se prohíbe el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales, comarcales o locales, en una franja de 50 metros de anchura a ambos lados de la zona de seguridad. Esta franja será de 25 metros en el caso de otros caminos de uso público de las vías férreas. 7. Los titulares cinegéticos interesados que pretendan realizar el ejercicio de la caza en las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, así como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos, deberán comunicarlo o solicitar la oportuna autorización administrativa al servicio territorial correspondiente con carácter previo, en los términos que mediante orden de la consejería competente en materia de caza se determinen. 8. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá solicitar, fundadamente, de la Dirección General, la declaración como zona de seguridad de un determinado lugar. Dichas zonas, en el caso de ser así declaradas, deberán ser señalizadas por el peticionario conforme se determine reglamentariamente.”

¹²⁸ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.324 y ss.

¹²⁹ Vid. STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2º

mutuamente la información precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. Con esta Ley se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano consultivo y de cooperación en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad entre el Estado y las CCAA, cuyos informes o propuestas serán sometidos para aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.¹³⁰

B) *Cooperación*: en materia cinegética, la cooperación adquiere importancia debido a la compartimentación de las competencias a nivel autonómico. Como afirmación de este principio se destaca el deber de auxilio recíproco entre autoridades estatales, autonómicas y locales, como es el «deber recíproco de información», importante tanto para el ejercicio de las competencias estatales, como autonómicas. La cooperación ha de manifestarse en relación con aspectos de la caza, por su dimensión supracomunitaria, demandan una actuación global. En este sentido, y como indica LAGUNA DE PAZ, debe avanzarse en el mutuo reconocimiento de efectos de los títulos administrativos autonómicos que habilitan para el desarrollo de esta actividad: licencias o certificados de aptitud extendidos en otras comunidades. Se simplifica así, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.¹³¹

Así la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en su artículo 7 que las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente información para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la propia Ley.¹³²

¹³⁰ Vid. Preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹³¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.326.

¹³² Para ello se crea, como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las CCAA, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que informará, sobre las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se integrarán, con voz pero sin voto, las CCAA y una representación de las entidades locales, a través de la asociación de ámbito estatal más representativa. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las CCAA garantizándose, en todo caso, la participación de las organizaciones profesionales, científicas, empresariales, sindicales y ecologistas más representativas, recogido en el art.8 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CINEGÉTICA.

La Ley de caza estatal, en su artículo 1, fija como finalidad de la misma, la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética, así como su ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses afectados. La planificación es el instrumento que pretende la articulación de dicha finalidad, pretendiendo con ello, un aprovechamiento ordenado y racional de la caza, garantizando la conservación de las poblaciones de la fauna silvestre. Son las leyes autonómicas de caza las que consideran como elemento clave, la planificación, para una eficaz gestión de los recursos cinegéticos.¹³³

Se puede concebir la planificación de dos formas, la primera, que abarca grandes superficies, ya que las especies cinegéticas, sobre todo las de caza mayor, precisan de grandes áreas vitales, por lo tanto la planificación fijara las pautas principales y las líneas generales de gestión de un determinado territorio, como puede ser una CA o una comarca. La segunda, concibe la planificación de una forma más concreta y precisa, que abarcará un territorio mucho más pequeño, como son los cotos de caza, y que marcará las directrices de gestión concretas, tanto sobre la fauna como sobre el hábitat, pero respetando las pautas generales que se fijen para la CA o comarca, ya que no se puede perder la visión global del territorio.¹³⁴

3.1. Directrices cinegéticas

Son instrumentos que recogen un diagnóstico de la actividad cinegética así como sus repercusiones en la economía regional y en la conservación de la naturaleza. Será

¹³³ Vid. Preámbulo de Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana “...la ley define en el Título I la caza como el aprovechamiento racional de los recursos cinegéticos dirigido a la conservación y restauración del estado de normalidad de las poblaciones silvestres utilizadas, entendiendo por éste, aquél que permite alcanzar el óptimo aprovechamiento estable y sostenido, en condiciones de plena compatibilidad con todo el resto de las especies y valores naturales y con todos los demás usos y usuarios legítimos presentes en el territorio” y para ello introduce “ como elemento clave en la regulación de la caza de la Comunidad valenciana, la planificación y ordenación de la actividad cinegética a través de diferentes instrumentos creados al efecto.”

¹³⁴ Vid. Artículo publicado por Junta de Castilla y León “ Gestión cinegética” <http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/920/434/V09._GESTION_CINEGETICA.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true> pág. 13

elaborado por el órgano competente de la CA en materia de caza, mediante Orden y fijará un modelo de ordenación cinegética para toda la CA, que garantice de forma permanente un aprovechamiento óptimo, compatible, estable y sostenido de sus recursos cinegéticos, con el objetivo de compatibilizar la sostenibilidad de las especies con otros aprovechamientos y usos cinegéticos o de otra naturaleza que sean necesarios. Esta figura la recogen las leyes de caza de la Comunidad Valenciana y Murcia.¹³⁵

En el caso de la Comunidad Valenciana, en su Ley de caza, fija en artículo 44 el contenido que deberán tener las Directrices siguientes:

- a) Zonificación de la Comunidad correspondiente a efectos cinegéticos.
- b) Áreas de caza que deberán someterse a un mismo modelo de ordenación cinegética.
- c) Lista de especies de susceptible aprovechamiento cinegético, así como las especies que deben ser objeto de control, como los predadores o especies enfermas.
- d) Vedas generales para las distintas especies y modalidades de caza por zonas cinegéticas.
- e) Directrices, criterios y coeficientes de cálculo precisos para el establecimiento correcto y homogéneo en cada zona cinegética de los planes técnicos de ordenación cinegética de cada unidad de gestión.

En el caso de Murcia, en el artículo 39 de su Ley de caza, junto al marco de referencia y a la comarcalización, añade como contenido de las Directrices, las posibles líneas de manejo de hábitats, de seguimiento de las poblaciones y de fomento de la propia actividad con las propuestas económico-financieras para su articulación.

3.2. Planes Generales de Ordenación

Con el fin de regular el ejercicio de la caza, el Consejo de Gobierno de la respectiva CA elaborará y aprobará anualmente el Plan General de Caza, que se aplicará con carácter general a todo el territorio de la CA. Deberá someterse el Plan a un trámite previo de información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial autonómico, a fin

¹³⁵ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.82 y ss.

de que cualquier persona o entidad interesada pueda examinar el contenido del proyecto y realizar las alegaciones oportunas. Esta figura la recogen las leyes de caza de Aragón, Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura y el reglamento de caza de Andalucía.

El objeto del Plan, es compaginar el ejercicio puntual de la caza y un ordenado aprovechamiento cinegético con la protección de la fauna silvestre, de modo y manera que se cumpla con el mandato constitucional, recogido en el artículo 45 de la CE, de una utilización racional de los recursos naturales y lograr una mayor eficacia en la gestión cinegética, tanto desde el punto de vista del cazador y de las especies de caza, como de la actividad en los terrenos cinegéticos y exclusivamente dentro del ámbito temporal establecido.¹³⁶

De acuerdo con lo que establece Andalucía y Extremadura, el Plan General de Ordenación es un instrumento de diagnóstico y gestión de la actividad de la caza, cuyo finalidad consiste en establecer las bases para la ordenación y fomento de los recursos cinegéticos, partiendo de la información completa y actualizada de las poblaciones, capturas y control genético de las especies cinegéticas, así como del análisis para su gestión, incluyendo la incidencia en la actividad económica de la zona y su repercusión en la conservación de la naturaleza.¹³⁷

El reglamento de caza de Andalucía recoge en su artículo 10 el contenido básico del Plan de caza andaluz, que deberá contener un análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas y sus hábitats y de los datos estadísticos de los ciudadanos habilitados para el ejercicio de la caza en Andalucía, un diagnóstico sobre la actividad cinegética, los objetivos del Plan, las medidas y actuaciones para cumplir los objetivos propuestos, el seguimiento del Plan y la identificación de áreas cinegéticas por hábitats homogéneos. La vigencia del Plan es de diez años, debiendo ser actualizado al menos cada cinco años.

Por su parte Aragón, determina en el art.45 de la ley de caza de Aragón, el contenido del Plan, donde al menos deberán recoger

¹³⁶ <<http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=739681643838>>

¹³⁷ Vid. Art.42.2 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura y Art.10 del Decreto 182/2005 de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía.

- Las especies cinegéticas que no podrán ser objeto de caza en una temporada determinada.
- Las modalidades de caza permitidas.
- Las regulaciones y los períodos hábiles de caza, según las distintas especies y modalidades.
- Las limitaciones generales en beneficio de las especies cinegéticas y medidas preventivas para su control.
- Las valoraciones de las especies cinegéticas a efectos de indemnizaciones por daños.

El Plan general de caza en Aragón se aprobará anualmente y tendrá carácter subsidiario en todos aquellos aspectos no regulados específicamente en los planes técnicos.¹³⁸

A su vez los Planes Generales de caza, pueden ser elaborados por territorios o por especies, teniendo en cuenta las particularidades de caza zona de la CA o de sus especies, analizando sus distintas posibilidades, establecerán los principios generales que deben regir la gestión y el disfrute del recurso cinegético.¹³⁹ Así lo recoge, la Ley de caza de Canarias, en su artículo 21, a través del Plan Insular de de caza, Cuya finalidad será la de definir un marco de actuación general y un modelo de organización cinegética basados en la estructura y clasificación de los terrenos de la isla, así como contemplar actuaciones especiales cuya ejecución se concrete en el tiempo a través de unos objetivos específicos. A su vez, Castilla la Mancha en su nueva ley de caza, establece que previamente a la declaración de una especie como de interés preferente, el Consejo de Gobierno aprobará un plan general, de ámbito regional, cuyo objeto es establecer las bases para la conservación y el aprovechamiento cinegético de la especie afectada, que tramitará, elaborará y aplicará la Consejería, su contenido contemplará los objetivos, los criterios para la determinación del hábitat potencial de la especie, los criterios para la zonificación y la clasificación de los terrenos en función de la calidad del hábitat, así como aquellos que sean necesarios para establecer los niveles de protección, las bases para el aprovechamiento cinegético de la especie y su vigencia. Extremadura también

¹³⁸ Vid. Art.39 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

¹³⁹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.84

recoge la posibilidad de elaborar Planes de Especies Cinegéticas, encaminados a la mejora y fomento de las principales especies cinegéticas.¹⁴⁰

3.3. Planes cinegéticos comarcales

La ley de caza estatal en su artículo 25, establece que en aquellas comarcas donde existan varios cotos de caza mayor que constituyan una unidad bioecológica, la Administración competente podrá exigir al propietario o a los titulares de otros derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza, que confeccionen conjuntamente un plan comarcal de aprovechamiento cinegético. Una vez que el plan este aprobado, sus prescripciones serán de obligado cumplimiento dentro de las áreas definidas por el Plan. De igual forma lo recogen las legislaciones de caza de algunas CCAA.¹⁴¹

Así, Baleares establece en su artículo 26 de su Ley de caza, que si transcurriera el plazo concedido para la presentación del Plan sin que se hubiera dado cumplimiento al requerimiento del órgano competente en materia de caza de la CA, ésta podrá establecerlo con carácter obligatorio, con la previa audiencia de los interesados. A su vez, los titulares cinegéticos de los vedados particulares contiguos podrán redactar planes comarcales de aprovechamiento cinegético con carácter general o para la especie o las especies cuya gestión cinegética pueda beneficiarse de esta figura.

En el caso de Andalucía, su reglamento de caza, establece el artículo 11, que la elaboración por la Consejería competente en materia de caza de los citados planes, podrá ser acordada de oficio o a instancia de las personas o entidades interesadas mediante solicitud justificada, que se dirigirá a la correspondiente Delegación Provincial competente. La solicitud de elaboración y aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas, deberá acompañarse de un informe elaborado por técnico competente en la materia que fundamente la necesidad de iniciar la elaboración de la planificación, ordenación y gestión cinegética, de acuerdo con las previsiones y

¹⁴⁰ Vid. Art.58.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y art.42.4 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

¹⁴¹ Vid. art.25 del Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.42.3 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

objetivos del Plan Andaluz de Caza. El contenido básico de los Planes de caza por áreas cinegéticas fijado por esta CA, es la siguiente:

- a) Análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas y sus hábitats, así como de la actividad cinegética.
- b) Evaluación y diagnóstico de los recursos cinegéticos existentes en el área cinegética.
- c) Objetivos del plan de caza por área cinegética.
- d) Medidas y actuaciones para cumplir los objetivos propuestos.
- e) Seguimiento del plan de caza por área cinegética.
- f) Criterios orientadores sobre la gestión cinegética, incluyendo las mejoras necesarias en los hábitats, el manejo de poblaciones y los lugares de suelta.

Los Planes comarcales, de acuerdo con LAFUENTE BENACHES no son más que una concreción de la determinación de la idea de zonificación contenida en las Directrices y en los Planes generales con un ámbito espacial, en principio más limitado. Con dicho plan se obtiene un conocimiento de las características medioambientales de las áreas, tanto las especies cinegéticas, las no cinegéticas y los factores que influyen sobre ellos, como puede ser la agricultura y la ganadería, a su vez, se establecerán los principios generales que deben regir la gestión y el aprovechamiento ordenado y racional de los recursos cinegéticos.¹⁴²

3.4. Planes Técnicos de caza o Planes de Ordenación de caza.

Los Planes Técnicos de Caza son instrumentos de gestión de los terrenos cinegéticos que garantizan el aprovechamiento sostenible de las especies que se consideran como cazables, compatibilizándolo con la conservación de los ecosistemas y de todas las demás especies silvestres. En los terrenos cinegéticos donde se ejercite la caza deberá existir un Plan Técnico de Caza en el que se establezcan los criterios de gestión cinegética, donde se incluirá, entre otros datos, el inventario de poblaciones silvestres existentes, la estimación de extracciones o capturas a realizar y la delimitación de una zona de reserva para permitir el refugio y desarrollo de las poblaciones en las

¹⁴² Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.85.

que no podrá practicarse la caza ni cualquier actividad que afecte negativamente a aquéllas.¹⁴³

El Plan técnico de caza es un acto administrativo singular, ya que su actuación recae sobre un área delimitada y concreta.¹⁴⁴ A su vez, es un acto a término, donde su vigencia viene establecida en el propio Plan, normalmente de 5 años.¹⁴⁵ Debe cumplir y ajustarse a lo establecido por las Órdenes de Veda, por lo que si esta prevé para un año un número de capturas inferior al previsto en el Plan Técnico, prevalecerá lo dispuesto en la Orden de vedas, por lo que las capturas máximas diarias no podrán ser superiores a las delimitadas en dicha orden. A su vez, también, deberá ajustarse a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y a cualquier otra medida que la Administración competente dicte al respecto. Una vez aprobado el Plan, la autoridad competente establecerá su vigencia así como el inicio del aprovechamiento cinegético por parte del titular.¹⁴⁶

También hay que destacar que la redacción del Plan Técnico de caza tiene que ser realizada por un técnico competente, ya que se necesitan conocimientos técnicos y científicos, así como una amplia formación en materia de gestión, debido a que cada técnico desarrollará una metodología propia para la realización del inventario.¹⁴⁷ En este punto surge la complejidad de determinar que facultativo es competente para realizar dicho Plan. Algunas CCAA en sus legislaciones de caza apuntan que el Plan deberá ser

¹⁴³ Vid. Art.38.1 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág. 85 y ss.

¹⁴⁴ Vid. STSJ 120/2003, de 14 de abril, de Castilla La Mancha, donde reconoce la naturaleza de acto administrativo del Plan Técnico de Caza.

¹⁴⁵ Vid. Art. 32.3 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco: “*El plan tendrá una vigencia de cinco años, tras los cuales deberá presentarse otro para poder optar a continuar con el aprovechamiento hasta el fin de la vigencia del terreno cinegético. En el caso de que se produzcan daños graves y repetidos en los cultivos agrícolas o forestales, ganadería, o fauna y flora silvestres, podrá modificarse el plan antes del fin de su vigencia.*”

¹⁴⁶ Vid. Art. 46.2 Ley 9/1998 de caza de la Rioja, de 2 de julio: “*La aprobación de estos planes técnicos de caza es requisito imprescindible para el ejercicio de la caza en los terrenos cinegéticos.*”; así como el art. 45.2 Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, de 17 de diciembre “*2. En ningún espacio, y con independencia de la titularidad pública o privada del mismo, podrá practicarse ninguna clase de aprovechamiento cinegético, mientras éste no se encuentre sujeto a una ordenación técnica adecuada, acorde con las directrices de ordenación cinegética de la Comunidad Valenciana y haya sido aprobado por la Conselleria competente en materia de caza.*”

¹⁴⁷ Cfr. VARGAS YAÑEZ, J.M. “Alerta cinegética. Reflexiones sobre el futuro de la caza en España”. Edit. Otero. 2002. Madrid, pág. 316

redactado por un técnico universitario competente en la materia, así lo recogen Galicia y Extremadura, Cantabria añade a esta exigencia que el Plan deberá estar visado por el colegio profesional correspondiente, Navarra establece que deberá realizarlo un técnico titulado en la materia. El TS en diversas sentencias entiende que en ausencia de norma que determine qué técnico es el competente para elaborar un determinado Plan será preciso el análisis de la formación académica y las enseñanzas recibidas para la obtención del título.¹⁴⁸ De acuerdo con GÁLVEZ CANO, lo recomendable sería un gestor técnico profesional con suficiente formación y conocimiento del manejo de las especies cazables y sus hábitats.¹⁴⁹ A su vez, VARGAS YAÑEZ, apunta que sería un gestor de caza que no solo se limite a suscribir el PTC sino que se encargue de planificar y asumir la coordinación técnica de dicha gestión.¹⁵⁰ La Administración, ha venido admitiendo planes suscritos por, biólogos, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas o veterinarios.

Serán las CCAA mediante sus respectivas legislaciones las que establezcan el contenido básico del Plan, éste incluirá: datos de los titulares, un inventario y la estimación de los parámetros poblacionales, información de carácter administrativo, las características naturales y socioeconómicas del terreno cinegético (estudio del medio físico, climatología, vegetación, agua, así como las posibilidades turísticas, carga ganadera, aprovechamientos agrícolas y forestales), censos de las poblaciones cinegéticas, los objetivos de la planificación, un Plan de caza para las próximas temporadas, zonas de reserva obligatoria (Zonas de seguridad y zonas no cinegéticas incluidas en el coto), la ejecución del plan de caza previsto, un plan de mejoras cinegéticas y prevención de daños, un programa financiero, un plan de seguimiento y la cartografía (indicando como mínimo la delimitación del terreno cinegético, los cercados cinegéticos de gestión y de protección y la zona de reserva, la localización y delimitación de los escenarios de caza en su caso y de las zonas de seguridad). A su vez, deberá incluir la relación de especialidades de caza permitidas en el terreno cinegético, el número máximo de cazadores permitidos por cada especialidad de caza y el número máximo de piezas a abatir, así como las cantidades o el porcentaje mínimo de ingresos

¹⁴⁸ Vid. SSTs de 22 de junio de 1983, 1 de abril de 1985, 20 de enero de 1997 y 26 de septiembre de 1992

¹⁴⁹ Cfr. GÁLVEZ CANO, M.R. "El derecho de caza en España". Op Cit. Pág.250 y ss.

¹⁵⁰ Cfr. VARGAS YAÑEZ, J.M. "Alerta cinegética. Reflexiones sobre el futuro de la caza en España". Op. Cit. Pág.320

que deberá destinar el titular del terreno cinegético al cumplimiento del plan de mejoras cinegéticas.¹⁵¹ También se recogerán las acciones complementarias tales como el adiestramiento de perros y aves de cetrería desarrolladas en espacio y tiempo, Condiciones, en su caso, de la repoblación y suelta de especies cinegéticas y de la caza intensiva.¹⁵²

Galicia añade al contenido básico del Plan otras exigencias, como la previsión de mecanismos correctores, las acciones de conservación y/o recuperación de las especies cinegéticas, así como, si procediese, de otras especies silvestres y la señalización del tector (terreno cinegético ordenado) sometido a régimen especial, en atención a sus características físicas, cinegéticas y sociales. Cantabria a su vez, incluye las características, en su caso, del servicio de vigilancia privada establecido por el titular. Aragón por su parte, añade al contenido del Plan, un Programa de control de predadores. Por último Canarias, incluye como contenido básico, la conservación y mejora de los hábitats cinegéticos y la evaluación básica de impacto ecológico.¹⁵³

La elaboración del inventario de las especies cinegéticas estará determinada por los criterios del técnico y las características del terreno. Se tendrá en cuenta a la fauna autóctona y la que se cría en el área, para distinguirla de la esporádica o nómada, la cinegética y la que no lo es, a su vez se deberá conocer con exactitud la población de predadores. Una vez realizado el inventario se obtendrá la densidad poblacional del coto, a su vez se podrá determinar las extracciones o capturas a ejecutar durante la

¹⁵¹ Vid. art.6 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.49 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.12 del Decreto 182/2005 de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía; art.15 del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza de Asturias; art.42 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.46 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.40 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.45 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.37 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.57 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.22 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.34 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.43 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.25 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.40 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹⁵² Vid. art.47 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.12 del Decreto 182/2005 de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía; art.43.3 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza, de Aragón; art.22.2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

¹⁵³ Vid. art.49.2 d), e) i) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.42.3 f) de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.37. 3 g) y k) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.22.2 h) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

próxima temporada dentro del terreno acotado.¹⁵⁴ Se persigue con ello la explotación racional de los recursos naturales renovables¹⁵⁵.

Es necesario un análisis de la población real por parte del técnico competente para que el PTC sea efectivo. Este análisis es el resultado de la suma de las capturas de la temporada, de la población al cerrar esa temporada y de la mortalidad habida en ella por causas naturales y no derivados de la caza. La evaluación por el técnico del PTC de estos datos y su comparación con los índices de normalidad, basado en el estado óptimo de la población cinegética, determina el número de capturas en la nueva temporada cinegética. A su vez, el técnico deberá manejar variables tales como el número de cazadores permitidos, el número de piezas cazables como máximo por cazador, los días o jornadas hábiles de caza, los horarios posibles, todo ello con la finalidad de encontrar de manera gradual el estado óptimo poblacional en un periodo determinado.

En la cartografía a través de los Planos indicativos, se delimitaran: la situación geográfica del coto: su superficie, la existencia de enclavados, de espacios protegidos, vías de comunicación, vías pecuarias, accesos, zonas de seguridad y no cinegéticas; los usos del suelo y clases de aprovechamiento, las masas de agua, la existencia de construcciones. Tercero, de la localización de medios auxiliares o de los sistemas de mejora y de protección (cercados, pasos).¹⁵⁶

El Plan de mejoras cinegéticas necesarias y de prevención de daños, incluido en el PTC, establecerá las cantidades o el porcentaje mínimo de ingresos que deberá destinar el titular del terreno cinegético para llevar a cabo dichas mejoras. Podrá rectificarse en atención a los resultados obtenidos en la última temporada cinegética cuando se hayan producido desviaciones.¹⁵⁷

¹⁵⁴Vid. <http://www.sierradebaza.org/index.php/mapa-web/79-reportajes/811-14-01-notic8>.

¹⁵⁵ Vid. Sobre esta cuestión a MONTROYA. JM “Ordenación de recursos naturales renovables: La ordenación cinegética en el contexto general de ordenación de los montes. Edit. Cuadernos de la SECF nº1, Pontevedra octubre 1995, pág.34.

¹⁵⁶ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.87 y 88.

¹⁵⁷ Estas mejoras pueden abarcar la mejora del medio y de las infraestructuras del espacio cinegético para el que se elabora el Plan (plantaciones de arbustos en linderos y campos abandonados, desbroces, bebederos, comederos, suplementos alimenticios, forrajeras, abonado de pastizales); así como, mejoras en beneficio de la fauna., como la constitución de reservas temporales dentro del coto para protección de las

El legislador autonómico, buscando una ordenación racional de los recursos cinegéticos, recoge la posibilidad de que los titulares de cotos colindantes puedan solicitar la integración de sus planes técnicos individuales en uno común, que establecerá la delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos cotos de caza, las densidades máximas y mínimas de especies de la fauna silvestre y las condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo a exigencias especiales de protección. La aprobación del plan técnico de caza integrado implicará la extinción de los planes técnicos de caza de los respectivos aprovechamientos cinegéticos.¹⁵⁸

De acuerdo con LAFUENTE BENACHES, para la eficacia del PTC es necesario el compromiso por parte de los cazadores acerca del cumplimiento de lo dispuesto en el Plan, asimismo los cazadores deberán facilitar la información puntual de las capturas realizadas y de sus incidencias, así como no desviarse de lo establecido en el propio Plan.¹⁵⁹

Se procederá a la revisión del Plan técnico, cuando se dé un cambio de titularidad del espacio cinegético, se produzca un cambio sustancial de la superficie del terreno del coto, se pretenda un cambio en el manejo de poblaciones, cuando se observen desviaciones que lo alejen de sus objetivos o finalizado el período de vigencia del mismo. La falta de alguna memoria o plan anual, o la existencia de modificaciones sustanciales en el espacio cinegético, motivará el establecimiento de un nuevo plan técnico de ordenación cinegética.¹⁶⁰

especies más necesitadas, tratamientos sanitarios, el control de predadores especificando el método elegido, el aumento de la presión cinegética sobre especies dañinas, la protección de la pieza de caza de otras especies mediante colocación de cercados u otros mecanismos disuasorios, la vigilancia y la correcta señalización en vías de comunicación de la presencia de caza con el fin de evitar daños innecesarios a la propia fauna y a terceros.

¹⁵⁸ Vid. Art. 38.3 Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre *“Con la finalidad de gestionar bajo criterios comunes hábitats homogéneos, los titulares de cotos de caza colindantes podrán solicitar la integración de los planes técnicos de caza individuales mediante la propuesta de un plan integrado que establecerá la delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos cotos de caza, las densidades máximas y mínimas de especies silvestres y las condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo a exigencias especiales de protección, sin perjuicio de su elaboración de oficio por la Administración cuando concurren circunstancias excepcionales de orden sanitario, biológico o ecológico que lo justifiquen”*.

¹⁵⁹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.87.

La importancia del PTC se manifiesta en las distintas regulaciones autonómicas, insistiendo en la delimitación como infracción del “incumplimiento del Plan técnico”.¹⁶¹ Se iniciará por parte de la Administración competente el procedimiento sancionador cuando se proceda al incumplimiento del Plan, así como cuando se hayan aportado datos falsos, que podrán dar lugar a la interrupción definitiva o temporal del aprovechamiento cinegético durante un período determinado.¹⁶²

El titular del espacio cinegético para el cual se ha elaborado el Plan técnico, deberá anualmente demostrar el seguimiento del mismo, con la presentación a la Administración competente del Plan Anual de Aprovechamiento y de la Memoria.¹⁶³

3.5. Plan de aprovechamiento anual

Las CCAA recogen la obligación de presentar anualmente un Plan de gestión por parte del titular del espacio cinegético. Es la norma que regirá toda la actividad cinegética durante una temporada concreta, es un instrumento de gestión justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar de acuerdo con el potencial biológico de las especies existentes, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética.¹⁶⁴

Los planes técnicos se concretarán para cada temporada cinegética en un plan anual de aprovechamiento cinegético, en el que, teniendo como referencia las conclusiones del seguimiento realizado en la temporada anterior, y conforme a las

¹⁶⁰ Vid. Art. 47 de la Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, de 17 de diciembre “1. Finalizado el periodo de vigencia del plan técnico de ordenación cinegética, y a la vista de las sucesivas memorias y planes anuales, se procederá a su revisión. 2. La falta de alguna memoria o plan anual, o la existencia de modificaciones sustanciales en el espacio cinegético, motivará el establecimiento de un nuevo plan técnico de ordenación cinegética. 3. Las revisiones seguirán el mismo procedimiento de elaboración y aprobación de los planes técnicos de ordenación a que se refiere el artículo 45.4. 4. La Conselleria competente en materia de caza, procederá de oficio a la ejecución de una revisión extraordinaria si se constata la existencia de desviaciones respecto a la ordenación aprobada, tras una inspección sobre el terreno o mediante examen de las memorias presentadas.”

¹⁶¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. cit. Pág.86 y ss.

¹⁶² Vid. Art. 82.14 y 82.15 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; Art. 82.10, Art. 82.11 y Art. 83.12 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Art. 75.7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Art. 58.5 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

¹⁶³ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.88 y ss.

¹⁶⁴ Vid. Art.50 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.38 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra

determinaciones de aquellos, se detallarán las circunstancias específicas de la temporada y se determinarán:

- a) Las especies susceptibles de ser cazadas y sus cupos.
- b) Los días hábiles para el ejercicio de la caza.
- c) Las modalidades de caza, en su caso.
- d) La presión cinegética.
- e) Cuantas actuaciones de índole cinegética se pretendan desarrollar en la temporada.

El plan anual de aprovechamiento cinegético incorporará también la declaración de resultados.¹⁶⁵

3.6. Memorias

Con el fin de asegurar el seguimiento adecuado de la ejecución de los planes técnicos de caza, las personas o entidades titulares de los cotos de caza deberán presentar al órgano competente de cada CA en materia de caza, antes de la finalización de la temporada de cada año, una memoria de los aprovechamientos y de actividades cinegéticas realizadas en la temporada.

En la citada memoria se incluirán:

- a) Los resultados de las capturas obtenidas, según especie y modalidad.
- b) Número de cacerías celebradas según modalidades.
- c) Repoblaciones y sueltas efectuadas.
- d) Incidencias destacables que hayan afectado a las poblaciones de fauna cinegética y del resto de especies de la fauna silvestre.
- e) Otros aspectos que se establezcan por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de caza.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Vid. Art.38 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

¹⁶⁶ Vid. art.43.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.

Este documento al igual que el Plan de gestión, es necesario para poder llevar a cabo el aprovechamiento cinegético.¹⁶⁷

3.7. Otros planes.

La nueva Ley 3/2015 de caza de Castilla la Mancha, recoge otra serie de planes, como son:

- Planes Zoosanitarios Cinegéticos: regulado en el artículo 61, establece que tendrán como finalidad la prevención, vigilancia y/o control de enfermedades en los terrenos cinegéticos, en unos índices que pudieran afectar a la fauna silvestre, al ganado doméstico o a las personas, por sobrecarga poblacional de especies de caza mayor o gestión inadecuada a la planificación del aprovechamiento cinegético. Mediante Orden de la Consejería competente en sanidad animal, se desarrollará el contenido de los Planes Zoosanitarios Cinegéticos, así como las condiciones que hagan necesaria su elaboración y cumplimiento en Cotos de Caza con cuarteles de caza comercial de especies de caza mayor, los que tengan cerramientos cinegéticos y aquellos terrenos donde se comparta el aprovechamiento cinegético de especies de caza mayor y la ganadería extensiva de bovino, caprino o porcino.
- Planes de Control Administrativo e inspecciones de campo: serán elaborados por la Consejería competente en la materia, sin perjuicio de los que pueda realizar en cualquier momento, a fin de comprobar el cumplimiento de las actividades reguladas en los instrumentos de planificación del aprovechamiento cinegético. Los titulares de los PTC, están obligados a colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando al personal que realice la inspección, el acceso al terreno cinegético y sus instalaciones.¹⁶⁸

4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA

¹⁶⁷ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.92.

¹⁶⁸ Vid. Art.62 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

4.1. Registros

4.1.2. Registros estatales: catálogos, listados e inventarios

Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de ámbito estatal regulados por Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cabe señalar que en su configuración se han seguido dos modelos: en primer lugar, aquellos que tienen un carácter esencialmente informativo y que se elaboran con los datos que suministren las CCAA, como es el caso del Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres, o el Inventario Español de Caza y Pesca; en segundo lugar, se encuentran aquellos que no se limitan a centralizar la información procedente de las CCAA sino que, además, se constituyen como instrumento necesario para garantizar complementariamente la consecución de los fines inherentes a la legislación básica; se reserva exclusivamente para aquellas categorías de espacios o especies cuyo estado de conservación presenta un mayor grado de amenaza o deterioro y, en consecuencia, para los que es necesario asegurar unas normas mínimas y homogéneas para todo el territorio, que aseguren la correcta protección y restauración o recuperación de los citados espacios y especies; tal es el caso del Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición o el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que incluye al Catálogo de Especies Amenazadas.¹⁶⁹

1. *Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético*: Tiene como objeto preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de integrar en los programas de conservación las operaciones *ex situ* e *in situ*, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad promoverá la existencia de una red de bancos de material biológico y genético. Dicha red dará prioridad, entre otras, a la preservación de material biológico y genético procedente de taxones autóctonos de flora y fauna silvestres amenazadas, y en especial de las especies amenazadas endémicas. Las CCAA deberán mantener un registro de los bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con información actualizada sobre las colecciones de material biológico y genético de fauna y flora silvestres que mantengan

¹⁶⁹ Vid. Preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

en sus instalaciones. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y de carácter informativo.¹⁷⁰

2. El Inventario Español de Caza y Pesca: mantendrá la información de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención a las especies migratorias. Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los órganos competentes de las CCAA. Con este objeto, los titulares de los derechos cinegéticos y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, vendrán obligados a suministrar la correspondiente información a las CCAA. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y de carácter informativo¹⁷¹

3. El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición: se incluirán los hábitats en peligro de desaparición, cuya conservación o, en su caso, restauración exija medidas específicas de protección y conservación, por hallarse, al menos, en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Tener su área de distribución muy reducida y en disminución.
2. Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural.
3. Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura o funciones ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
4. Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio plazo en una parte significativa de su área de distribución.

La inclusión de hábitats se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las CCAA o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y con carácter administrativo.¹⁷²

¹⁷⁰ Vid. Art.60 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹⁷¹ Vid. Art.64 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹⁷² Vid. Art.24 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

4. *El Registro Español de Infractores de Caza y Pesca*: recogido por la nueva Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Responde a la necesidad de disponer de forma centralizada de la información que los órganos competentes de las CCAA hayan inscrito en sus propios registros autonómicos de infractores, incluidos los relativos a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular los derivados de infracciones penales y del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La existencia de este registro facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre CCAA.¹⁷³

5. *Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial*: previa consulta a las CCAA, se incluirán especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población en este Listado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las CCAA, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea o en los instrumentos internacionales ratificados por España, la inclusión en el Listado se producirá de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente, notificando previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta. La inclusión de un taxón o población en el Listado conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y con carácter administrativo.

¹⁷³ Vid. Disposición adicional cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación.¹⁷⁴

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece, el Catálogo Español de Especies Amenazadas: que incluirá información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en las categorías de, en peligro de extinción o vulnerable. La catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población en el Catálogo se realizará por el Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las CCAA o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.

Las CCAA, en sus ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación. A su vez, podrán incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza.¹⁷⁵

Estos catálogos e inventarios se incluirán junto a otros en el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, instrumento que recoge la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización del patrimonio natural, con especial atención a los elementos que precisen medidas específicas de conservación, o hayan sido declarados de interés comunitario; a su vez incluirá un sistema de indicadores para conocer de forma sintética el estado y evolución del patrimonio natural español. Lo elaborará y mantendrá actualizado el Ministerio de Medio Ambiente, con la

¹⁷⁴ Vid. Art.53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹⁷⁵ Vid. Art.55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

colaboración de las CCAA y de las instituciones y organizaciones de carácter científico. Con base a este Inventario se elaborará anualmente un Informe que será presentado al Consejo y a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse público.¹⁷⁶

En relación con el comercio internacional de especies silvestres, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá un registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado, y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas.¹⁷⁷

4.1.3. Registros autonómicos

A nivel autonómico, la legislación de caza prevé la creación de órganos cuyo objetivo es recopilar información y datos sobre materia cinegética, entre ellos destacan:

A.- Registro de Infractores de caza: que depende de la Consejería competente por razón de la materia, en el que se inscribirá de oficio las personas físicas o jurídicas que han sido objeto, por resolución firme, de una sanción administrativa por infracción de la normativa cinegética. En el Registro figurará el motivo de la sanción, cuantía de las multas e indemnizaciones, si las hubiere, así como la inhabilitación para el ejercicio de la caza y su duración.

¹⁷⁶ Vid. Art.9.2 y 9.3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: *”El contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades autónomas, debiendo formar parte del mismo, al menos, la información relativa a: 1º El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición. 2º El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas. 3º El catálogo español de especies exóticas invasoras. 4º El Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales. 5º El Inventario y la Estadística Forestal Española. 6º El Inventario Español de Bancos de Material Genético referido a especies silvestres. 7º El Inventario Español de Caza y Pesca. 8º El Inventario Español de Parques Zoológicos. 9º El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio natural y la biodiversidad. 10º Un Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al menos, las unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII. 11º Un Inventario Español de Hábitats y Especies marinos. 3. Formará igualmente parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas.”*

¹⁷⁷ Vid. Art.69 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Las inscripciones que se produzcan en los asientos del Registro, serán comunicados al Registro Español de Infractores de Caza y Pesca. Será necesario para obtener la licencia de caza, el certificado expedido por dicho Registro. Para la cancelación de los antecedentes y la baja del Registro de infractores correspondientes, cuando se haya extinguido la responsabilidad por cumplimiento de la sanción impuesta, o por otras razones, tendrán derecho los infractores a solicitar dicha cancelación.¹⁷⁸

B.- Registro de Talleres de taxidermia, Registro de Cotos de caza y Registro de Granjas cinegéticas: en relación a este último, los titulares de granjas cinegéticas, con carácter previo a la puesta en marcha de su actividad, deberán presentar al Registro de granjas cinegéticas de la CCAA correspondiente una declaración responsable manifestando, bajo su responsabilidad, que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad y que disponen de la documentación que así lo acredita. Del mismo modo deberá procederse en el caso de traslado, ampliación, modificación sustancial y cese de las instalaciones o cambio de los objetivos de producción. La inscripción en el Registro se realizará de oficio por la Administración.¹⁷⁹

C.- Registro de Espacios cinegéticos: es de naturaleza pública y la anotación será realizada de oficio, se registrarán la enumeración, las características, delimitación literal y cartografía de los espacios cinegéticos que se encuentren dentro del territorio de cada CCAA. Dentro del registro, podrá incluirse la planificación, ordenación uso y gestión. A su vez, se incluirán las vías pecuarias, caminos públicos que lo atraviesen o sean colindantes.¹⁸⁰ Como afirma LAFUENTE BENACHES, es conveniente su actualización anual, ya que principalmente tiene carácter informativo, dada su finalidad.¹⁸¹

4.2. Censos y estudios

¹⁷⁸ Vid. Art.98.1 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.67 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

¹⁷⁹ Vid. Art.53.3 y 4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹⁸⁰ Vid. Art.20 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

¹⁸¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág. 97 y ss.

A través de la toma de datos y la elaboración de estadísticas, la Administración conocerá los resultados de la temporada de caza. En el caso de las estadísticas, harán referencia a un determinado territorio que resulte representativo, donde se valorarán los aspectos cinegéticos de interés, como son, las poblaciones de especies cinegéticas o las licencias concedidas.

La Ley de caza de Castilla y León, en su artículo 51, establece que la Dirección General realizará periódicamente censos o estudios para conocer el estado de las poblaciones de especies cinegéticas en el territorio de la Comunidad. Al término de la temporada, y antes del 30 de marzo, los titulares de cotos de caza comunicarán al Servicio Territorial el número de jornadas cinegéticas, el número de cazadores por jornada, el total de piezas cobradas por especies y la comparación de sus poblaciones con la temporada anterior. Por último, la Dirección General podrá convenir con otras CCAA a fin de conocer los comportamientos de las especies migratorias.

Para cuantificar la población de fauna silvestre, se utilizarán los censos. Según LAFUENTE BENACHES, el conocimiento del número de individuos que conforman una población es importante desde dos puntos de vista: 1º a efectos de ser conocedores de su sostenibilidad, ya que por debajo de ciertos índices, la población decae y puede llegar a extinguirse; el 2º a efectos prácticos, ya que el cálculo de cuantos individuos se pueden capturar, dependerá de cuantos existan en realidad.¹⁸²

En opinión de TELLERIA, la cuantificación de la abundancia de una especie, puede realizarse por diferentes motivos o circunstancias. Para la realización de los censos pueden utilizarse tres parámetros diferentes:

- Tamaño de la población, es el número de individuos que ocupa una determinada zona.
- Densidad de una población, es el número de individuos por unidad de superficie.
- Índice de abundancia, cantidad que refleja las variaciones temporales o espaciales del tamaño o densidad o de una población, es decir, los dos

¹⁸² Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.101.

parámetros anteriores, aplicando un mismo esfuerzo en la observación realizada a través de métodos que pueden ser distintos.¹⁸³

Los estudios dependerán de la especie de fauna que se quiera censar, debido a que los métodos utilizados para ello, han de acomodarse a las singularidades, debido a que habrá que tenerse en cuenta si las poblaciones permanecen agregadas o dispersas, si residen en un hábitat despejado o en pleno arbolado y el tamaño de la especie o la alimentación. De la elección de los métodos adecuados depende la fiabilidad de los resultados que se hayan obtenido.¹⁸⁴

4.3. Consejos regionales de caza

La legislación de caza de las CCAA, reconocen la posibilidad de crear Consejos regionales de caza adscritos a la Administración autonómica competente en materia cinegética, para que ejerzan funciones de asesoramiento a través de informes y formulación de propuestas, en materias de ordenes de veda, media veda, creación de refugios, cotos y reservas, propuestas sobre iniciativas de protección, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos, así como recomendaciones sobre las pruebas de aptitud de los cazadores.¹⁸⁵

Estos órganos estarán compuestos por los representantes de los principales colectivos cinegéticos, entre los que cabe destacar, los representantes de las asociaciones federadas de caza, los titulares de terrenos acotados, de las organizaciones agrarias, personas de reconocido prestigio por su conocimiento de las políticas cinegéticas y representantes de la Administración.¹⁸⁶

¹⁸³ Cfr. TELLERÍA JORGE J.L. “Manual para el censo de los vertebrados”. Edit. Raíces. 1986. Madrid. pág.23 y ss.

¹⁸⁴ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.100 y 101.

¹⁸⁵ Vid. Art. 66 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y Art. 7 Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.78 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.7 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.73 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.76 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; Disposición adicional sexta de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.73 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.36 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.70 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.53 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.69 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

¹⁸⁶ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.102.

4.4. Homologación de trofeos de caza

Al ser una materia transferida a las CCAA por virtud del artículo 148.1.11º de la CE, existe una Junta de Homologación de Trofeos de Caza por cada comunidad, que actúan como representantes de la Junta Nacional en el territorio de cada de ellas. La Junta de Homologación de Trofeos de Caza mantiene las funciones de medición, homologación y catalogación de trofeos de especies cinegéticas, en la medida en que se trate de competencias de coordinación que no pueden ser ejercidas por las CCAA.¹⁸⁷

A nivel estatal existe la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El tratamiento ordenado de la información procedente de los archivos en poder de Junta Nacional, desde el inicio de su actividad en 1962, hasta la actualidad, se ha convertido en una de las funciones más relevantes de la Junta. A través de los archivos de la Junta Nacional se observa la evolución de la caza mayor española durante el pasado siglo hasta la actualidad.¹⁸⁸

Según se establece en su normativa, la Junta viene desarrollando las siguientes funciones:

- Definir las fórmulas de valoración correspondientes a cada especie, ajustándose en lo posible a las adoptadas por el Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC), y establecer las puntuaciones mínimas exigidas para las distintas categorías.
- Cooperar para una correcta aplicación de dichas fórmulas promoviendo la unificación de criterios de interpretación entre las comisiones de homologación de las diferentes CCAA, atendiendo preferentemente a los criterios definidos por el CIC.
- Definir los procedimientos de homologación de los trofeos para acceder a los listados del Archivo Nacional de Trofeos de Caza, definiendo al tiempo los conceptos de Récord Nacional de cada especie, Récord

¹⁸⁷ Vid. Anexo V del presente trabajo.

¹⁸⁸ <http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/caza-pesca-continental/junta-nacional-de-homologacion-de-trofeos-de-caza/junta_nacional_homologacion_trofeos_caza.aspx>

absoluto histórico o cualquier otro que la Junta pudiera considerar oportuno para estimular la gestión de la riqueza cinegética en base a un aprovechamiento sostenible de los recursos de caza.

- Definir los sistemas de catalogación de los trofeos y promover e impulsar la coordinación de dichos sistemas entre las distintas comisiones de homologación de las CCAA al objeto de consolidar la catalogación en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza.
- Facilitar el intercambio de información y registros del Archivo Nacional de Trofeos de Caza con cada una de las comisiones de homologación de las CCAA cuando así lo requieran.
- Mantener una estrecha colaboración con los organismos internacionales encargados de cometidos similares a los de la Junta.
- Actuar como órgano consultivo en materia de caza, gestión cinegética y conservación de los ecosistemas para la Administración General del Estado y para las distintas CCAA.
- Informar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal respecto de asuntos relacionados con caza mayor que pudieran afectar a más de una Comunidad Autónoma, bien a petición de la misma o por propia iniciativa, y proponer las medidas que estime pertinentes.
- Proponer a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal la renovación, el aumento o disminución de sus miembros cuando las circunstancias lo requieran, así como el nombramiento de Asesores Colaboradores.
- Medir y homologar toda clase de trofeos de caza españoles, tanto en concursos y exposiciones oficiales como a requerimiento de los propietarios, y expedir los justificantes de las homologaciones realizadas, sin perjuicio de las competencias de las CCAA.
- Confeccionar los catálogos de trofeos de caza, en los que se recogerán los trofeos homologados y cuantos datos considere necesarios con el fin de resaltar la evolución y desarrollo de las distintas especies.
- Velar por la protección de la diversidad biológica de la fauna cinegética española y, en particular, por su pureza genética.

- Poner en valor los recursos cinegéticos existentes en España y hacer trascender estos valores a las organizaciones internacionales existentes en la materia.¹⁸⁹

Las especies o subespecies de fauna cinegética de caza mayor, deberán haber sido declaradas cazables en el momento de su captura de acuerdo con la legislación de caza del lugar de procedencia. Se considera trofeo de caza, los colmillos y amoladeras del jabalí, y las cuernas adheridas al cráneo del ciervo, del corzo y del gamo al igual que los cuernos adheridos al cráneo del rebeco, así como cualquier otro que así lo decida la Junta Nacional de Homologación. Podrá llevarse cualquier trofeo de caza para su homologación, bien a la Junta Nacional o a las Comisiones Regionales, con independencia del lugar del que proceda el trofeo a homologar.¹⁹⁰

Será el interesado quien comience el proceso de homologación del trofeo de caza, demostrando de forma fehaciente la legalidad de su captura y procedencia. Hecho que se llevará a cabo a través de la hoja de homologación. El proceso consiste en una serie de actos y mediciones que otorgarán al trofeo una determinada puntuación y concesión de la medalla honorífica. Todos los datos referentes a los trofeos de caza se recogen siguiendo un procedimiento para su homologación que conlleva ciertas fases.¹⁹¹

¹⁸⁹ Vid. Art. 3 de la Orden AAA/1231/2013, de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

¹⁹⁰ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Homologación de trofeos de caza mayor”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.200.

¹⁹¹ En este sentido el MAGRAMA recoge las siguientes fases en el procedimiento de homologación: Recepción del trofeo de Caza; Datos de la persona que entrega el trofeo para su homologación; Datos referidos al propietario del trofeo: Nombre, apellidos, domicilio, teléfono etc.; Datos referidos al trofeo en sí mismo: fecha en que fue abatido, lugar/coto, matrícula del coto, término municipal y provincia; Datos referidos al titular del coto: Nombre y apellidos, o empresa (en su caso), domicilio, teléfono etc. Así como si tiene la condición de abierto o cerrado para cada una de las especies que se cacen en él. Cada quinquenio la Junta edita el Catálogo Nacional de Trofeos de Caza; Medición del trofeo según las normas de medición para cada especie por parte de un homologador miembro de la Junta. El resultado de las mediciones, así como la valoración final del trofeo queda reflejado documentalmente en su correspondiente ficha de homologación.; Estos documentos son firmados, archivados y escaneados con el fin de asegurar la constancia de los mismos en todo momento. La información se recoge en una Base de Datos que centraliza tanto la información generada por la propia Junta Nacional como la de las Comisiones Autonómicas de Homologación de Trofeos de Caza. Para homologar un trofeo por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza se debe pedir cita previa a través del buzón de correo electrónico de la propia Junta jnhtc@magrama.es. Se contestará al correo fijando la fecha para la entrega del trofeo en las dependencias de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza; <http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/caza-pesca-continental/junta-nacional-de-homologacion-de-trofeos-de-caza/junta_nacional_homologacion_trofeos_caza.aspx>

La labor de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza a través de la medición del trofeo, es un indicador de la calidad de la caza y salud de la fauna en los territorios españoles. A su vez también, se mide la habilidad y destreza de los cazadores.¹⁹²

Las Comisiones Regionales de Homologación de Trofeos de Caza, se someterán a las mismas normas, fórmulas y varemos que establece la Junta Nacional, cuyas funciones consisten en la homologación oficial de trofeos de caza conseguidos en la propia CCAA, o en el resto del territorio español, que enviarán los resultados a la Junta Nacional para su archivo. A su vez, participarán en las estadísticas e informes relacionados con la actividad que llevan a cabo y con la evolución de la fauna silvestre.¹⁹³

4.5. Federación de caza

Para la consecución de fines cinegéticos, la Administración autonómica podrá nombrar colaboradores, a asociaciones de carácter abierto y sin ánimo de lucro, a colectivos o incluso a particulares, como así lo recogen determinadas legislaciones autonómicas de caza. Buscando con ello mejorar la riqueza cinegética, así como la conservación de las especies y los hábitats. Estas asociaciones deberán estar legalmente constituidas, estar federadas, invertir un porcentaje de sus ingresos en la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética.¹⁹⁴

La entidad colaboradora más importante es, la Real Federación Española de Caza, que ostentará la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional. Es la entidad del derecho privado que agrupa con carácter obligatorio a los deportistas profesionales o aficionados, jueces y árbitros, a las sociedades o asociaciones y clubes o agrupaciones dedicados a la práctica del deporte de la caza o de actividades que con ella se relacionan. Asume de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la dirección técnico deportiva de las actividades

¹⁹² Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. pág. 104.

¹⁹³ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.P. “Homologación de trofeos de caza mayor”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.200.

¹⁹⁴ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.104 y 105.

cinéticas en sus aspectos deportivos en general de caza mayor y menor, caza con arco, competitivas de caza menor con perro, caza San Huberto, perros de muestra, perros de caza, pichón a brazo, cetrería, pájaros de canto, recorridos de caza, recorridos de caza en cancha, caza con arco, tiro a caza lanzada, perdiz con reclamo, caza fotográfica y vídeo u otras modalidades de práctica cinética existentes o que se puedan crear.¹⁹⁵

La RFEC pretende la promoción, organización y desarrollo de la caza deportiva de ámbito estatal. Bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes ejercerá las siguientes funciones: a) calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal; b) actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional; c) diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de deportistas de alto nivel, así como elaborar las listas anuales de los mismos; d) colaborar con la Administración del Estado y de las CCAA en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; e) organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado; f) ejercer la potestad disciplinaria deportiva; g) ejercer el control de las subvenciones que asigne a las Asociaciones y entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes; y por último, h) ejecutar las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.¹⁹⁶

A su vez ejercerá otra serie de funciones o competencias propias, estas se entienden sin perjuicio de las competencias de las Federaciones de ámbito autonómico, derivadas de las disposiciones dictadas por las respectivas CCAA.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Vid. Art.1 de la Resolución de 2 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Caza.

¹⁹⁶ Vid. Art.6 de la Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Caza.

¹⁹⁷ Dispone el Art.7 de la Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Caza.: *“organizar y dirigir técnica y administrativamente, por sí o por sus órganos de gestión, cuantas modalidades de competición se relacionen con el deporte de la caza o con su simple práctica recreativa; redactar e implantar los Reglamentos Técnicos Deportivos, con sujeción a las normas legales vigentes, por los que*

4.6. Control y vigilancia

4.6.1. Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA)

El Estado ostenta competencias en el control y vigilancia de la actividad cinegética, a través de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se designa, en su artículo 12.1 B) e), a la Guardia Civil la función de “*velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza*”. Esta función se lleva a cabo a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, que busca garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la caza, pesca y conservación de los bosques.¹⁹⁸

El SEPRONA, fue creado, de acuerdo con la Orden General nº 72, de 21 de junio de 1988, como respuesta especializada de la Guardia Civil al mandato constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado así como el deber de conservarlo. Con anterioridad, a través de la Real Orden de 7 de junio de 1876, la Guardia Civil asumió el desempeño del servicio de

han de regirse las competiciones de caza que se celebren en España con la aprobación del Consejo Superior de Deportes; otorgar títulos de aptitud respecto de las pruebas deportivas de caza y expedir las oportunas certificaciones en materia de su competencia. Así como las establecidas para el examen del cazador o para obtener las licencias o permisos necesarios para la práctica del deporte de la caza; resolver cuantas cuestiones sean de su competencia y se sometan a su consideración, emitiendo dictámenes e informes a solicitud de otras entidades, centros u organismos; representar a sus miembros y afiliados ante Centros y Organismos Oficiales Nacionales e Internacionales relacionados con el Deporte de la Caza, así como proponer a dichos Organismos las medidas convenientes para la conservación de las especies silvestres y para la defensa de los legítimos intereses de los cazadores; fomentar la educación y formación de los cazadores, la difusión de la deportividad de la actividad cinegética y normas que la regulan, contribuyendo al incremento de la fauna y flora autóctona y a la prevención y represión de la caza furtiva; fomentar, ordenar, tutelar e inspeccionar las actividades deportivas cinegéticas en todo el territorio nacional, así como organizar y/o controlar el desenvolvimiento deportivo de sociedades de cazadores y afiliados; fomentar y colaborar en la creación de sociedades o asociaciones, clubes y agrupaciones deportivas de caza o que con ella se relacionen, como medio más eficaz para lograr el mejor desenvolvimiento de su actividad, dictando al efecto las normas a las que debe ajustarse; asesorar a toda clase de entidades públicas o privadas en cuanto signifique un perfeccionamiento en la práctica de la caza; promover cuantas acciones considere convenientes para la defensa tanto de la caza como de los legítimos intereses de los cazadores y de las sociedades federadas; realizar cuantas actividades estén encaminadas a la salvaguarda y mejoramiento del ambiente natural, incremento de la fauna y respeto por los cultivos agrícolas. Igualmente la RFEC podrá prestar su colaboración a cuantos fines considere convenientes por afinidad con su cometido y sin ánimo de lucro; desarrollar iniciativas en el campo de la ecología, en orden a la defensa del medio ambiente natural”

¹⁹⁸ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.351y ss.

seguridad y policía rural y forestal. Comprendía funciones de protección de montes públicos, prevención de incendios, así como frenar los aprovechamientos clandestinos de recursos.¹⁹⁹

La Orden de Ministerio de Presidencia PRE/422/2013, de 15 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil, recoge en su artículo 12 que se atenderán a las normas técnicas de la Jefatura de Policía Judicial, debido a su dependencia de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.²⁰⁰

La misión del SEPRONA es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. A su vez colaborará con las Autoridades y Organismos correspondientes para planificar y ejecutar una política eficaz en esta materia; fomentará conductas de respeto a la naturaleza; realizará las acciones tendentes a favorecer el normal desarrollo de la flora y la fauna, en concreto, de las especies protegidas; contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos cinegéticos; por último, facilitará el adecuado disfrute del espacio natural impidiendo actividades que puedan degradarlo.²⁰¹

De este modo se encarga de la protección de suelo, agua y atmósfera, de la sanidad animal y de la conservación de especies de flora y fauna. Además, el Servicio de protección de la naturaleza lucha contra vertidos; contaminación del medio ambiente; comercio ilegal de especies protegidas; actividades cinegéticas y de pesca irregulares; defensa de los espacios naturales; así como, la prevención, investigación y extinción de incendios.²⁰²

En relación con su organización, el Servicio de Protección de la Naturaleza cuenta con la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), que apoya a las unidades territoriales en operaciones de especial importancia. A nivel provincial el Servicio cuenta con, una Oficina Técnica que se encargara de coordinar y apoyar a las

¹⁹⁹ Vid. <http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/Medio_ambiente/>

²⁰⁰ Cfr. CORDOBA QUINTANA, P. “La Guardia Civil, defensa de la ley y servicio a España”. Tesis inédita, Madrid, 2014. Pág. 879 y 880.

²⁰¹ Cfr. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.109

²⁰² Vid. <http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/Medio_ambiente/>

demás unidades provinciales, con Equipos de Protección de la Naturaleza, que se encargaran de la detección, cuantificación e investigación de las agresiones al medio ambiente y con Patrullas de Protección de la Naturaleza, a las que les corresponde la prevención, vigilancia y denuncia de cualquier agresión al medio ambiente. Constituyen las Unidades básicas de protección medioambiental, desarrollando su función tanto en el ámbito rural como urbano, les corresponde la prevención, vigilancia y denuncia de cualquier agresión al medio ambiente. Se unen, a nivel territorial, los Destacamentos desplegados en los Parques Nacionales.²⁰³

4.6.2. Guardas/agentes forestales o de medio ambiente.

Las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de caza y medio ambiente corresponden a las CCAA. Así, las legislaciones de caza autonómicas recogen la figura del guarda forestal cuya función será la vigilancia, inspección y control de las especies silvestres y sus hábitats, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Policía Autonómica y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.²⁰⁴

Los Guardas Forestales son funcionarios públicos que tendrán la consideración de agente de la autoridad, y sus declaraciones gozarán de presunción de veracidad. Asimismo, podrán, en el ejercicio de sus funciones, acceder y entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso en todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a inspección y requerir que se les muestren los vehículos, remolques, medios de caza o equipamientos auxiliares e instalaciones relacionadas con la actividad cinegética. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona

²⁰³ En la actualidad los Destacamentos de los Parques Nacionales corresponden con los de: Doñana, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Ordesa y Monte Perdido, Sierra Nevada, Garajonay, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Monfragüe. http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/Medio_ambiente/

²⁰⁴ Vid. Art.75 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de GALICIA; art.37 de la Ley 2/1989, de 6 de junio de caza de ASTURIAS; art.65 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de CANTABRIA; art.75 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de LA RIOJA; art.79 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de MURCIA; art.75 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de ARAGÓN; art.16.6, art. 40 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de CANARIAS; art.74 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de EXTREMADURA; art.56 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, BALEAR de caza y pesca fluvial; art.68.1ª y art. 68.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CASTILLA Y LEÓN; art.6, art.70 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CASTILLA-LA MANCHA; art.16.3, art.23.1 art.57, art.29, Art. 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de ANDALUCIA; art.54 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del PAIS VASCO; art.55 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad VALENCIANA; art.42 de la Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de CATALUÑA.

inspeccionada o a su representante, a menos que considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

A su vez, los Guardas Forestales podrán practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. Asimismo, tomaran muestras de sustancias y materiales, realizaran mediciones, fotografías, vídeos, croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad. Además cualquier ciudadano podrá recabar la intervención de los agentes forestales cuando detecte actuaciones prohibidas o actuaciones peligrosas para las especies silvestres.

Las funciones de vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas serán incompatibles con la práctica de la caza en los mismos, salvo en las situaciones especiales que se determinen reglamentariamente.²⁰⁵

4.6.3. Guardas de caza

En relación a la vigilancia privada en los cotos de caza, surge la figura del guarda jurado de caza, cuyas funciones serán, la vigilancia, la protección y gestión de fincas rústicas y terrenos acotados en cualquier CCAA. Deberán estar acreditados como guardas por la Administración competente y deberán de estar en posesión, de la Tarjeta de Identidad Profesional, se considerarán auxiliares de la autoridad, por lo que no son agentes de la autoridad²⁰⁶. Son trabajadores por cuenta ajena, comprendidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aunque también se podrán adscribir al Régimen General de la Seguridad Social. Podrán trabajar en una o varias fincas, ya sea directamente contratado por el titular de la finca, o a través de una empresa de

²⁰⁵ Vid. Art. 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

²⁰⁶ Vid. STC 14/1998 de 22 de enero, “los guardas de caza no son ni funcionarios públicos ni agente de la autoridad...tan solo empleados privados de caza a los que se les exige una previa acreditación administrativa para el ejercicio de sus funciones y que como tales empleados, dependen del titular de la explotación cinegética, de acuerdo con las obligaciones que derivan de la relación laboral. Es manifiesto que carecen de toda función relacionada con el mantenimiento de la seguridad pública y que, además, al no ostentar la condición de agentes de la autoridad, solo podrán actuar en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia como meros denunciadores o colaboradores, impidiendo, en su caso, la práctica de la caza dentro del coto para el que trabajen a aquellas personas que no reúnan los requisitos establecidos por la Ley”.

seguridad. Los guardas, pueden prestar servicio con o sin arma reglamentaria, debiendo obtener la licencia de armas Clase C.

La legislación autonómica, recoge la figura privada del guarda de caza, considerándolo importante y en ocasiones obligatorio, como es el caso de la Ley de caza de La Rioja, para la vigilancia de los terrenos acotados.²⁰⁷

Los guardas de caza, en el desempeño de sus funciones deberán estar en posesión siempre de la documentación siguiente: D.N.I., Tarjeta de Identidad Profesional, cartilla profesional, diploma de formación previa y seguro de responsabilidad civil, y cuando preste servicio con armas, además, deberá estar en posesión de la licencia de armas de Clase C, la guía de pertenencia del arma reglamentaria y de la cartilla de tiro.²⁰⁸

La labor de vigilancia de los guardas de caza, consiste en evitar la comisión de delitos o infracciones dentro del terreno cinegético cuya vigilancia tiene encomendada, para ello deberá revisar la documentación de los cazadores, prevenir y denunciar conductas constitutivas de infracción administrativa, tanto de los cazadores con autorización para cazar en dichos terrenos cinegéticos como cualquier otra persona que con su actividad incumpla lo establecido en la legislación de caza autonómica correspondiente. Deberá comunicar al titular del coto, cualquier anomalía que hubiese detectado. No podrá desarrollar sus funciones en el interior de las vías públicas ni en terrenos cinegéticos en los que no estuviese contratado, no podrá desarrollar otras

²⁰⁷ Vid. Art.76 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de GALICIA; art.65 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de CANTABRIA; art.77 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de LA RIOJA; art.80 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de MURCIA; art.77 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de ARAGÓN; art.16.6, art. 40 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de CANARIAS; art.74.2 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de EXTREMADURA; art.57 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, BALEAR de caza y pesca fluvial; art.69 y art.70 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CASTILLA Y LEÓN; art.6, art.71 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CASTILLA-LA MANCHA; art.16.3, art.23.1 art.57, art.29, Art. 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de ANDALUCIA; art.54 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del PAIS VASCO; art.56 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad VALENCIANA; art.51 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de NAVARRA.

²⁰⁸ Vid. SÁNCHEZ GASCÓN A. “Guía práctica para guardas de caza”. Edit. Exlibris, 2004, Madrid pág.35.

funciones que no sean las de vigilancia, gestión y cuidado de los terrenos cinegéticos en los que desarrolle su actividad.²⁰⁹

En virtud de la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, los guardas de caza podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza, incluidas armas, cuando aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.²¹⁰

Los guardas de caza deberán ir uniformados debiendo portar el distintivo que les identifique como tales, solo podrán vestir el uniforme en los lugares y horas de trabajo, así como en los ejercicios de tiro. A su vez, podrán contar con perros, que deberán estar identificados y controlados en todo momento. Cuando el guarda de caza permanezca inactivo por un tiempo superior a dos años, perderá la Tarjeta de Identidad Profesional, debiendo realizar las pruebas que se determinen por parte del Ministerio del Interior, para su nueva obtención.²¹¹

Se considerarán infracciones administrativas graves, realizar funciones de guardería fuera del terreno cinegético donde hubiese sido contratado, cometer abusos, no atender las instrucciones de la guardia civil o policía, trabajar sin la Tarjeta de Identificación Profesional, la falta de comunicación de información importante a la guardia civil.

5. COMERCIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA

5.1. Comercio y transporte de las piezas de caza

En relación con las piezas de caza, es el Estado el que fija, como normativa básica, las especies que podrán ser objeto de comercio. El anexo I del Real Decreto

²⁰⁹ Vid. LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. pág. 110 y SÁNCHEZ GASCÓN A. “Guía práctica para guardas de caza”. Op. Cit. Pág.61 y 62.

²¹⁰ Vid. Art.34.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

²¹¹ Vid. SÁNCHEZ GASCÓN A. “Guía práctica para guardas de caza”. Op. Cit. Pág.69 y ss.

1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca en desarrollo de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 4/1989, declara la especies objeto de caza y a su vez establecen normas para su protección. Las CCAA pueden reducir en su Orden anual de veda y en función de sus situaciones específicas, la relación de especies que pueden ser objeto de caza en un territorio o espacio concreto.²¹² Solo podrán comercializarse aquellas especies declaradas como tales en la orden anual de caza. Siendo objeto de infracción el comercio de piezas de caza vivas o muertas y de huevos de aves cinegéticas que no estén autorizados o que se incumpla los requisitos establecidos por la legislación autonómica.

Son las CCAA en su legislación las que establecen una distinción entre el comercio de especies cazables vivas y las especies cazables muertas:

- Especies cazables vivas, el comercio podrá realizarse bien con el propio espécimen o bien con sus huevos. Para poder ser objeto de comercio, las especies vivas deben provenir de explotaciones industriales, ya sean granjas cinegéticas, cotos o palomares industriales. A su vez, será necesaria una autorización dada por la autoridad autonómica competente y un certificado que garantice la procedencia legal de las especies objeto de comercialización.²¹³ No podrán ser objeto de comercio las especies que estén en instalaciones de recuperación y fomento, así como las especies comercializables que padezcan cualquier enfermedad, epizootia o zoonosis, que puedan ser perjudiciales para el consumo humano o ponga en peligro a otras especies.
- Especies cazables muertas, se prohíbe la comercialización de piezas muertas durante el período de veda, por lo que solo serán objeto de comercio, las piezas de caza obtenidas durante los períodos hábiles fijados en la Orden de veda. Por el contrario, las especies obtenidas procedentes de explotaciones industriales

²¹² Vid. Art. 1.3 del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre: “*Las Comunidades Autónomas podrán excluir de la relación del anexo I, en el ámbito de sus respectivas competencias, aquellas especies sobre las que decidan aplicar medidas adicionales de protección*”.

²¹³ Vid. Art. 49 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

autorizadas, y que cumplan las medidas legales previstas para ello, no tendrán un período limitado para su comercialización.²¹⁴

En lo referente al transporte de piezas de caza, de nuevo son las CCAA en su legislación las que establecen otra distinción entre transporte:

- Interior: corresponde al transporte de piezas de caza dentro de una comunidad autónoma y entre las diversas CCAA.
- Exterior: corresponde al transporte de especies de caza vivas o muertas a nivel internacional (exportación e importación). Regulada a nivel estatal cumpliendo la normativa europea impuesta en esta materia.²¹⁵

Se establece otra distinción dentro del comercio y transporte, distinguiéndose entre:

- Transporte de piezas de caza vivas: requerirá una autorización previa emitida por la autoridad competente, que deberá ser solicitada por el destinatario del traslado. El expedidor solicitará una guía de circulación, emitida por un veterinario oficial responsable en la zona de origen, donde constará los datos del expedidor y destinatario, identificación de la explotación de procedencia, destino y objeto de envío, número de ejemplares y características (sus sexos y especies) y las fechas de salida y llegada. Constará también una declaración de inexistencia de enfermedades en la zona de origen. Todos los cajones, jaulas o embalajes de cualquier índole que se empleen en este proceso comercial deberán llevar, en lugar bien visible, etiquetas en que figuren la denominación de la explotación industrial de origen y su número de registro, así como el terreno cinegético o granja cinegética de destino. Los transportes se realizarán en las debidas condiciones de seguridad y calidad de vida para los animales. Por último el transporte deberá realizarse de conformidad con la legislación sectorial

²¹⁴ Cfr. LAFUENTE BENACHES M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.112 y ss.

²¹⁵ Vid. Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

vigente que sea aplicable, en particular las referentes a sanidad animal y comercio.²¹⁶

- Transporte de piezas de caza muertas: al igual que ocurre con la comercialización, las legislaciones autonómicas prohíben el transporte de piezas muertas durante el período de veda, salvo autorización expresa de la autoridad competente, excepto las procedentes de explotaciones industriales. El artículo 62.3 de la Ley de caza de Aragón, establece que los requisitos exigidos en la normativa vigente referentes al transporte o tenencia de piezas de caza muerta no se aplicarán a los trofeos ni a las piezas enteras de animales silvestres cazados que sean transportados por viajeros en sus vehículos particulares, siempre que se trate de pequeñas cantidades de caza menor o bien de una pieza única de caza mayor silvestre y que, en razón de las circunstancias, parezca excluida la posibilidad de que la carne de dichas piezas enteras se destine al comercio o a ser utilizada con fines comerciales. El transporte de piezas de caza muertas procedentes de explotaciones industriales deberá estar amparado por una guía sanitaria, como así lo recoge la ley de caza de Castilla y León. Para realizar el transporte de piezas de caza muertas, o sus despiececes, individualmente o por lotes, se exigirá que aquéllas vengan provistas de los precintos que garanticen su origen o pueda acreditarse su legítima procedencia mediante otros medios. Reglamentariamente se determinarán las especies cinegéticas a las que se exigirá una u otra obligación y las características y condiciones de uso de los

²¹⁶ Vid. Art. 2.2, 2.3 y 4 del Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre. Se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables, en desarrollo de lo establecido en el art. 34 c) de la L 4/1989 de 27 mar., con el fin de garantizar la conservación de las especies autóctonas y la preservación de la diversidad genética; ANDALUCIA: Art.40 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; ASTURIAS: Art.27 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza; CANTABRIA: Art.61.4 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza; LA RIOJA: Art.67.2, 67. 3 y 68.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza; MURCIA: Art.61.1 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial; VALENCIA: Art.52.2 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza; ARAGÓN: Art. 61 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza; NAVARRA: Art.43.1 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca; EXTREMADURA: Art.65.4 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza; BALEARES: Art.47.2 y 3 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; CASTILLA Y LEÓN: Art.60.1 y 2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza; PAIS VASCO: Art.44 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza; GALICIA: Art.85.22 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza; CANARIAS: Art. 11 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CASTILLA-LA MANCHA: Art. 68 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza; CATALUÑA: Art.8 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales.

precintos.²¹⁷ Sera objeto de infracción el transporte de caza muerta cuando no se cumplan las disposiciones establecidas por la legislación autonómica.²¹⁸

5.2. Explotación industrial de la caza

5.2.1 Granjas cinegéticas

Se considera granja cinegética toda explotación industrial cuya finalidad sea la producción de piezas de caza para su reintroducción en el medio natural o su comercialización, vivas o muertas, independientemente de que en el mismo se desarrolle completamente su ciclo biológico o solo alguna de sus fases.²¹⁹

Se exige una autorización previa por parte de la autoridad competente autonómica para el establecimiento de dichas granjas, dicha solicitud puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica.²²⁰ Deberá ir acompañada de un proyecto de ejecución suscrito por técnico competente, en el que se contemplen, memoria descriptiva de las instalaciones; descripción del programa de cría; programa sanitario elaborado por el facultativo responsable de su ejecución; presupuesto y plano de situación, generales y de detalle; a su vez deberán cumplir las condiciones técnicas, sanitarias y medioambientales. Cualquier cambio, traslado, ampliación o modificación que se produzca, hará necesaria una nueva autorización. Esta autorización posibilita el

²¹⁷ Vid. Anexo VI del presente trabajo.

²¹⁸ Vid. Art.59.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.40.2 y 40.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.27.3 Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.61.1 y 61.2 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.66 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.61.3 y 62.2 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.43.3 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.42.13 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.38.e y 67.3 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.48.1 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.59.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art. 53.2 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

²¹⁹ Vid. Art. 63.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

²²⁰ Vid. Art. 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: *“Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. c) Lugar y fecha. d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.”*

establecimiento como su funcionamiento, así como las condiciones a las que deben acogerse.²²¹

Las granjas cinegéticas en relación con la explotación industrial, tiene la consideración de explotaciones ganaderas. La Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal, en su artículo 38.1 establece que todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la CA en que radiquen, los datos básicos de estos registros serán incluidos en un registro nacional de carácter informativo. El titular facilitará a la autoridad competente autonómica donde se localice la explotación y los datos básicos que establece el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.²²² Posteriormente la autoridad autonómica competente procederá a asignar a cada explotación un código de identificación, que garantice su identificación de forma única.²²³

²²¹ Vid. Art.93.2, 3 y 4 del Decreto 17/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza de La Rioja.

²²² Vid. Art. 4.1 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas: *“El titular de explotación deberá facilitar a las autoridades competentes, antes del comienzo de su actividad, al menos los datos necesarios para el registro que figuran en el anexo IV”*. ANEXO IV: *“a) Datos mínimos que deberán facilitarse en el caso de las explotaciones clasificadas, según el anexo III, conforme a los tipos siguientes: 1. Explotaciones ganaderas de producción y reproducción”. “Para estos tipos de explotaciones, su titular deberá facilitar los datos indicados en el apartado A.2, 3 y 5 del anexo II y en el apartado B.1, 2 y 7 a 14 del anexo II.”* Anexo II .A. *Relativos al conjunto de la explotación. 2. Datos del titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social, número o código de identificación fiscal (NIF o CIF), dirección, código postal, municipio, provincia y teléfono. 3. Datos de otros titulares relacionados con la explotación: apellidos y nombre o razón social, NIF o CIF y relación con la explotación. 5. Tipo de explotación de que se trate según la clasificación establecida en el anexo III. Anexo II B.1 Especie.2. Datos de la ubicación principal donde se cría cada especie: dirección, código postal, municipio y provincia; 7. Indicación de si se trata de autoconsumo o no.8. Clasificación según el sistema productivo: intensivo, extensivo o mixto. 9. Clasificación según criterios de sostenibilidad o autocontrol: explotaciones ecológicas, integradas o convencionales.10. Clasificación según la capacidad productiva.11. Clasificación según la forma de cría. a) Explotaciones avícolas de producción de huevos: Ecológica. Campera. En suelo. En jaulas. b) Explotaciones avícolas de producción de carne: Sistema extensivo en gallinero. Gallinero con salida libre. Granja al aire libre. Granja de cría en libertad. 12. Censo y fecha de actualización.13. Cuando proceda, datos de la integradora comercial a la que pertenezca, indicando denominación o razón social, CIF, dirección, código postal, municipio, provincia, teléfono y fecha de baja.14. Cuando proceda, código identificativo, razón social, dirección, código postal, municipio y provincia de la agrupación de defensa sanitaria.*

²²³ Vid. Art.5 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas *“Las autoridades competentes de las comunidades autónomas procederán a asignar a cada explotación un código de identificación, que garantice su identificación de forma única. La estructura de dicho código será: a) «ES» que identifica a España. b) Dos dígitos que identifican la provincia, según la codificación del Instituto Nacional de Estadística. c) Tres dígitos que identifican el municipio, según la codificación del Instituto Nacional de Estadística. d) Siete dígitos que identifican la explotación dentro del municipio de forma única.”*

Las legislaciones autonómicas de caza imponen una serie de obligaciones a las granjas cinegéticas:

- Toda granja cinegética deberá desarrollar un programa de control zootécnico Sanitario.
- Sus titulares deberán comunicar de inmediato a la autoridad competente y a la Administración Pública competente en materia de sanidad animal cualquier síntoma de enfermedad detectado, suspendiendo en tal caso cautelarmente la entrada o salida de animales en la granja, sin perjuicio de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para evitar su propagación.
- Estas explotaciones estarán obligadas a llevar un Libro-Registro, en el que se harán constar: entradas y salidas de ejemplares o huevos y sus características, origen o destino; nacimiento y muertes; incidencias habidas en el proceso productivo, incluyendo visitas veterinarias y tratamientos preventivos realizados: resumen, por categorías de las existencias habidas al final de cada mes.
- Deberán someterse a cuantas inspecciones y controles de índole sanitaria y genética se establezcan, permitiendo el acceso y facilitando el trabajo del personal de los organismos competentes en la materia.²²⁴

De acuerdo con las legislaciones autonómicas no se podrá practicar la caza en los terrenos donde se sitúe la granja cinegética, ya que se consideran terrenos no cinegéticos.²²⁵

²²⁴ Vid. Art.7 del Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas; art.6 del Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre; art.63 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.54 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.43 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.29 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.56 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; art.57 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.67 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.50 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.58 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.42.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.63 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.43 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.63 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla la Mancha.

²²⁵ Vid. Ejemplo de ello son el Art.30 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana y el art.12 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

El incumplimiento de algunas de las medidas u obligaciones establecidas por las diferentes legislaciones autonómicas y aplicables a las granjas cinegéticas, serán objeto de infracción administrativa, entre las que se encuentran, la explotación industrial de la caza sin estar en posesión de la correspondiente autorización, criar especies cinegéticas distintas de las autorizadas o no estar inscrita en el correspondiente Registro autonómico.²²⁶

5.2.2. Cotos industriales

La legislación autonómica establece que son cotos industriales de caza los cotos privados en los que se realice la captura en vivo de especies cinegéticas para su comercialización. La captura en vivo, diferencia al coto industrial de los cotos intensivos, en la que la suelta de piezas tiene por finalidad abatirlas y darles muerte con independencia de su posible posterior comercialización.

Los cotos industriales se incluyen dentro de las explotaciones cinegéticas o agropecuarias, exigiéndose autorización para su constitución y funcionamiento. A su vez, se exige un Plan Técnico de actuación, donde se especifique el cupo máximo de capturas, época, métodos autorizados para la captura y las instalaciones necesarias. De igual modo que las granjas cinegéticas, los cotos industriales deberán inscribirse en el Registro autonómico correspondiente. Se considerará infracción administrativa capturar en vivo especies cinegéticas para su comercialización, cuando el coto de caza no esté autorizado como coto industrial.²²⁷

5.2.3. Caza intensiva.

Se entiende por caza intensiva la ejercitada sobre piezas de caza procedentes de explotaciones industriales, liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata. Esta actividad deberá estar recogida en el correspondiente plan cinegético. La ventaja, de acuerdo con LAGUNA DE PAZ, y respecto a las diferentes modalidades de caza, estriba en que la Dirección General puede autorizar su práctica en

²²⁶ Cfr. LAFUENTE BENACHES M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.120 y ss.

²²⁷ Vid. Art. 27 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; Arts. 55.1º y 75.24 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Cfr. LAFUENTE BENACHES M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.122 .

días inhábiles o en época de veda, que supone una ampliación de las posibilidades cinegéticas.²²⁸

Si bien su realización en días no señalados como hábiles en la orden anual de caza o en época de veda solo estará permitida a empresas cinegéticas que tengan como finalidad la comercialización de esta modalidad de caza, con las siguientes condiciones:

- Solo podrá realizarse sobre cuarteles de caza específicos, debidamente señalizados, situados sobre terrenos que no alberguen especies de fauna catalogada y con baja densidad de poblaciones cinegéticas naturales.
- Las superficies máximas y mínimas de los cuarteles dedicados a esta actividad se fijarán reglamentariamente.
- Se contará con personal de vigilancia específico.
- Cuando se utilicen perros, el cuartel deberá estar debidamente cercado.
- El titular del coto deberá llevar el correspondiente Libro de Registro.

Las piezas de caza deberán proceder de granjas cinegéticas debidamente registradas, cotos industriales autorizados o de instalaciones legalmente establecidas en el territorio nacional o en otro Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso, el titular cinegético deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de la instalación de procedencia.²²⁹

5.2.4. Palomares

Tienen como objeto la producción y venta de palomas comercializables. No todas las CCAA regulan en sus leyes de caza esta cuestión. Para la instalación de palomares industriales, se requiere la previa autorización de la autoridad administrativa competente. A su vez, estarán sometidos al mismo régimen de registro y funcionamiento de las granjas cinegéticas, y se ubicarán a más de 500 metros de cualquier terreno cinegético, salvo autorización expresa de sus titulares. No se podrán cazar las palomas zurita y bravía a menos de 500 metros de palomares industriales en

²²⁸ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Op. Cit. Pág.348.

²²⁹ Vid. Art.56 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

explotación.²³⁰ En el caso de otros palomares no industriales en funcionamiento, solo se podrá disparar a las referidas palomas a más de 100 metros de distancia de los mismos, y nunca en dirección a ellos, cuando esté a menos de 200 metros. No se podrán cazar a dichas palomas a menos de 200 metros de distancia del resto de los palomares. Los daños producidos por las palomas en los cultivos existentes en un radio de 500 metros alrededor de un palomar industrial serán responsabilidad del propietario del mismo.²³¹

En la caza de palomas, como medida de seguridad respecto a personas y bienes, la normativa autonómica establece ciertas prohibiciones, cuyo incumplimiento conlleva sanciones administrativas, como la caza de palomas diferentes a las torcaces o tórtolas a menos de una distancia mínima de un palomar industrial que esté debidamente señalizado, cazar o tirar a las palomas en sus bebederos, disparar a las palomas mensajeras y a las deportivas, con marcas reglamentarias, o en un radio de determinados metros de los palomares en explotación.²³²

²³⁰ Vid. *Paloma bravía*: es de color gris azulado, llama la atención dos franjas anchas de color negro en las alas, así como varias irisaciones de vivos colores en el cuello de color verde y rosa. Se trata de una especie difícil de encontrar en estado puro debido a la mezcla que ha sufrido con la paloma doméstica o de ciudad, lo que ha producido ciertas variaciones en el color del plumaje original de la especie. Su dorso es de color gris claro y la zona ventral es más oscura. Sus ojos son de color rojo y en el pico tiene una mancha de color blanco. Las patas son de color rojo anaranjado y su pico es corto. *Paloma zurita*: pequeña de color gris azulado sin ninguna tonalidad blanca en las alas ni el cuello.

²³¹ Vid. 57 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

²³² Cfr. LAFUENTE BENACHES M. “El ejercicio legal de la caza”. Op. Cit. Pág.123 y 124.

CAPITULO IV

MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD CINGÉTICA

III. MARCO ADMINISTRATIVO

SUMARIO: 1. Infracciones administrativas derivadas de la actividad cinegética; 1.1. Del cazador; 1.1.1. Infracciones; 1.1.1.1. Derivadas de licencias y otros documentos; 1.1.1.2. Derivadas de las armas y técnicas empleadas; 1.1.1.3. Derivadas de época de veda y días prohibidos; 1.1.1.4. Derivadas de piezas de caza y fauna silvestre; 1.1.1.5. Derivadas de los terrenos; 1.1.1.6. Derivadas de las medidas de seguridad; 1.1.1.7. Derivadas de los perros de caza; 1.1.1.8. Otras: 1.2. Del titular del aprovechamiento cinegético; 1.2.1. Infracciones; 1.2.1.1. Derivadas de la autorización; 1.2.1.2. Derivadas de la planificación; 1.2.1.3. Derivadas de la matrícula y terreno; 1.2.1.4. Derivadas de la señalización y cerramientos; 1.2.1.5. Derivadas de las piezas de caza y fauna silvestre; 1.2.1.6. Derivadas de la notificación de enfermedades; 1.2.1.7. Derivadas de las granjas y cotos industriales; 1.2.1.8. Otros 1.3. Sanciones; 1.3.1. Sanciones pecuniarias; 1.3.2. Sanciones accesorias; 1.4. Prescripción; 2. Procedimiento sancionador; 2.1 Órganos competentes; 2.2 Procedimiento; 2.2.1. Forma de iniciación; 2.2.2. Actuaciones previas; 2.2.3. Iniciación del procedimiento; 2.2.4. Instrucción; 2.2.5. Resolución; 2.3. Caducidad del procedimiento; 2.4 Silencio administrativo; 2.5. Procedimiento simplificado.

1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

Las CCAA al asumir en sus estatutos de autonomía la competencia en materia cinegética han promulgado, como se ha visto anteriormente, su propia normativa sancionadora en materia de caza, respetando los principios fijados por la normativa

básica, recogida en la Ley de Caza de 1970, que tendrá carácter supletorio en aquellas CCAA que hayan regulado sobre dicha materia.

Constituirá infracción administrativa en materia de caza toda acción u omisión que vulnere las prescripciones de las leyes de caza, tanto estatal como las autonómicas, así como de las disposiciones que las desarrollen y aparezca tipificada como tal en las mismas. A su vez, la ley de caza de Castilla la Mancha considera infracciones administrativas el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la legislación en materia de caza, así como el de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas.¹

Se clasifican las infracciones administrativas, por la mayoría de las legislaciones autonómicas en leves, graves y muy graves, atendiendo al presunto responsable y a la gravedad de las mismas.²

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, también califica las infracciones de muy graves, graves y leves. Para determinar la gravedad de las infracciones y la consiguiente sanción a imponer, recoge ciertos criterios, en su artículo 77.2, adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Se tienen en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta Ley; las circunstancias del responsable; el grado de intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la

¹ Vid. Art. 46 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; Art. 79 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Art. 72 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

² En este sentido el art.73 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León establece que: “*las infracciones administrativas en materia de caza se clasifican en leves, graves y muy graves*”; el art.72.2 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha recoge que “*las infracciones en materia de caza se impondrán atendiendo a la siguiente calificación: leves, graves y muy graves*”; como excepción la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias, en su art. 42 establece que: “*las infracciones administrativas en materia de caza se clasifican en leves, menos graves, graves y muy graves*”; a su vez la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza estatal; establece en su art.48: que “*Reglamentariamente se procederá a la clasificación de las infracciones administrativas de caza en graves, menos graves y leves, con expresión, cuando proceda, de las medidas de carácter complementario que sean aplicables, y en especial de las que se refieran a anulación, revocación o privación de autorizaciones, concesiones o declaraciones expedidas por las autoridades competentes*”

irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. A su vez, recoge una clasificación y tipificación de las infracciones, que es recogida por las legislaciones autonómicas de caza. La sanción de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponderá a los órganos competentes de las CCAA y a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.³

³ Vid. Art.77.3 y art.76 la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad “*Tipificación y clasificación de las infracciones.*1. A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, se considerarán infracciones administrativas: a) La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos. b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos. c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de en peligro de desaparición del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición. d) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación. e) La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario. f) La introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, sin autorización administrativa. g) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones. h) La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos. i) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario. j) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en catalogadas como vulnerables, así como la de propágulos o restos. k) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres. l) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa, de acuerdo con la regulación específica de la legislación de montes, caza y pesca continental, cuando no se haya obtenido dicha autorización. m) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial, que no estén catalogadas, así como la de propágulos o restos. n) La destrucción del hábitat de especies incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial que no estén catalogadas, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación. o) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias. p) La alteración de los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario o el deterioro de los componentes del resto de hábitats de interés comunitario. q) La tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos. r) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta Ley. 2. Tendrán en todo caso la consideración de infracciones muy graves las recogidas en los apartados a, b, c, d, e y f, cuando la valoración de los daños derivados supere los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si la valoración de daños supera los 200.000 euros; Art. 77. 4 “A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración General del Estado, y sin perjuicio de lo que puedan disponer al respecto leyes especiales, las infracciones tipificadas en el artículo 76 de esta Ley, se calificarán del siguiente modo: a) Como muy graves las recogidas en los apartados a, b, c, d, e y f, si los daños superan los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si los daños superan los 200.000 euros. b) Como graves las recogidas en los

La graduación de la gravedad de las infracciones recogidas en las leyes autonómicas de caza, se realizarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos para imponer la sanción:

- a) La intencionalidad.⁴
- b) La trascendencia social y/o el perjuicio causado a la fauna y a sus hábitat, así como la irreparabilidad o irreversibilidad de los daños causados al medio ambiente o el elevado coste de reparación.⁵
- c) La situación de riesgo creada para personas y bienes.⁶
- d) La concurrencia de infracciones o la acumulación de ilícitos en una misma conducta, así como el grado de culpa.⁷

apartados a, b, c, d, e y f, si los daños no superan los 100.000 euros, g, h, i, j, k, l, m y n. c) Como leves las recogidas en los apartados o, p, q y r.”

⁴ Vid. Art.63 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.89.2.a) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.46.2.g) del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña; art. 84.1.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.41.1.a) Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.86.1.a) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.a) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.a) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.85.1.a) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.55.1.a) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.103.1.a) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.88.2.a) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.67.1.e) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.a) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁵ Vid. Art.63 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.89.2.b) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.46.2.a) y d) del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña; art. 84.1.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.41.1.b) Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; ; art.86.1.b) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.b) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.b) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.55.1.b) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.103.1.b) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.88.2.c) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.67.1.d y m) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.b) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.85.1.b) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

⁶ Vid. Art.89.2.c) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art. 84.1.d) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; ; art.86.1.c) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.c) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.d) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.85.1.c) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón ; art.88.2.b) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.67.1.f) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.c) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

- e) La reincidencia, entendiendo por tal, la comisión en el término fijado por cada CCAA, cuando así haya sido declarado por resolución firme. Si se apreciase esta circunstancia, el importe de la multa que corresponda imponer se incrementará.⁸
- f) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.⁹
- g) El volumen de medios ilícitos empleados, así como el de piezas cobradas, introducidas o soltadas.¹⁰
- h) Ostentar cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta Ley.¹¹
- i) La agrupación u organización de personas para cometer la infracción.¹²

⁷ Vid. Art.90.1.i) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.103.1.f) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.67.1.c) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.d) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁸ Vid. Art.63 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.89.2.f) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; ; art.46.2.c) del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña; art. 84.1.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.41.1.c) Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; ; art.86.1.d) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.d) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.c) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.85.1.d) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.55.1.d) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.103.1.c) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.88.2.d) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.78.1.e) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁹ Vid. Art.89.2.d) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.46.2.b) del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña; art. 84.1.f) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; ; art.86.1.e) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.f) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.e) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.85.1.f) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.55.1.c) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.88.2.f) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.67.1.g) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.f) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

¹⁰ Vid. Art.89.2.e) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; ; art.86.1.f) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.j) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.f) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.67.1.l) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.g) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; ; art.77 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

¹¹ Vid. Art. 84.1.i) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; ; art.86.1.g) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.e) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.g) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.103.1.d) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.67.1.j) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.78.1.h) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

- j) La colaboración como no colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del bien protegido.¹³

Algunas CCAA tienen en cuenta otros factores a la hora de graduar las sanciones, como es la eventual resistencia a la autoridad administrativa, la comisión de la infracción dentro de un espacio natural protegido, nocturnidad o la negativa a la entrega del arma, artes o medios cuando el presunto infractor sea requerido para ello por el agente denunciante, se tendrán como circunstancia agravante en el procedimiento administrativo sancionador, salvo que tales hechos constituyan por sí mismos infracción. A su vez, se tendrá en cuenta en la graduación de las sanciones el arrepentimiento espontáneo o la reparación del daño causado antes de la apertura del expediente.¹⁴

La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto administrativo, será sancionable, como infracción continuada. Mientras que no haya recaído una primera resolución sancionadora de los hechos con carácter ejecutivo, no se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada. Se dispone que cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida, en defecto de regulación específica establecida en la norma correspondiente.¹⁵

¹² Vid. Art.89.2.g) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art. 84.1.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.90.1.g) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.85.1.e) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.88.2.e) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.67.1.h) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.

¹³ Vid. Art. 84.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.86.1.h) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.90.1.h) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.61.1.h) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.103.1.e) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.67.1.o) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial

¹⁴ Vid. Art. 84.1.h) y art. 84.1.j) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.67.1. a), i), k), n) y p) de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.75.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.85.1.g) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.88.2.g) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.90.1.k) de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia

En relación con la responsabilidad administrativa se puede hacer una doble distinción, por un lado, cuando el responsable de la infracción sea el cazador, y por otra, cuando lo sea el titular del aprovechamiento cinegético. Por lo que el sujeto responsable de la infracción será la persona física o jurídica, que por acción u omisión la cometa.

1.1. Del cazador.

En relación al cazador, la Ley de Caza estatal, en su artículo tercero, lo define “*como toda persona mayor de catorce años que esté en posesión de la licencia de caza y cumpla los demás requisitos establecidos en presente Ley*”. En la práctica de la caza, si no consta el autor del daño causado, responderán solidariamente todos los miembros de la partida, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes. No se considera cazador a los ojeadores, batidores, secretarios o podenqueros que asistan en calidad de tales, sin portar armas de caza desenfundadas, a ojeos, batidas o monterías. Cuando las infracciones hayan sido realizadas por un menor, las responsabilidades a que haya lugar serán exigibles a los padres o tutores, o a quienes estén encargados de su custodia, previa audiencia en el expediente.¹⁶

La caza requiere de capacidad y habilitación, se debe realizar en terrenos cinegéticos y sobre piezas de caza durante los períodos hábiles y únicamente utilizando técnicas autorizadas. El incumplimiento de estas condiciones conllevará una responsabilidad administrativa por parte del cazador.¹⁷

¹⁵ Vid. ORTUÑO NAVALÓN, C. MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch 2007. Pág.196.

¹⁶ En este sentido el art.17 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, dispone que “...en la práctica de la caza, si no consta el autor del daño causado, responderán solidariamente todos los miembros de la partida”; los art.34.3 Ley de caza de 4 de abril 1970 y 3 y 36.1 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971, les eximen de la necesidad de licencia de caza, siempre que asistan en calidad de tales a ojeos, batidas o monterías, sin portar armas de caza desenfundadas; el art.82. 15 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, establece que “cuando las infracciones a que se refiere esta Ley hayan sido realizadas por un menor, las responsabilidades a que haya lugar serán exigibles a los padres o tutores, o a quienes estén encargados de su custodia, previa audiencia en el expediente”; el art.72.4 Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre, que añade que “esta responsabilidad podrá ser moderada por el órgano competente para resolver el correspondiente procedimiento, cuando aquellos no hubieren favorecido la conducta del menor o incapacitado a su cargo o acrediten la imposibilidad de haberla evitado”

¹⁷ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C., MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.161.

1.1.1. Infracciones

Las CCAA en sus respectivas legislaciones de caza, recogen la tipificación y la clasificación de las infracciones cometidas por el cazador:

1.1.1.1. Derivadas de licencias y otros documentos

Se considerara infracción cazar:

- Sin haber obtenido la licencia de caza;¹⁸ teniéndola retirada, o estando inhabilitado para poseerla por sentencia judicial o resolución administrativa firme.¹⁹
- Sin tener contratado y vigente el seguro obligatorio correspondiente, en cuantía mínima que se determine reglamentariamente, que cubra los daños y perjuicios dimanantes del uso del arma o de cualquier otro medio y del ejercicio de la caza en general.²⁰

¹⁸ Se considera infracción **grave**: art.56.45 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art. 77.7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art. 85.13 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.67.5 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art. 82.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.100.1 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.49.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.82.9 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.88.6 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.86.24 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.74.4 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; art.74.7 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.58.2.12 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; Infracción **muy grave**: art.46.1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; Infracción **leve**: art.76.10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹⁹ Se clasifica como Infracción **grave**: art.86.2 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.75.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.74.9 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; Infracción **muy grave**: art.55.30 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art. 58.8 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art. 50.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; Infracción **menos grave**: art.44.2ª de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; Infracción **leve**: art. 99.16 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

²⁰ Se recoge como infracción **muy grave**: art.55.5 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art. 77.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; Infracción **leve**: art.76.12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.43.22 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; Infracción **grave**: art.85.31 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art 67.8 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.

- Cazar en un coto sin autorización de su titular, incluso cuando no se haya cobrado pieza alguna.²¹
- Siendo poseedor de la documentación preceptiva, pero no llevándola consigo.²²
- Siendo menor de edad, con o sin armas autorizadas, sin ir acompañados de otro cazador mayor de edad. Cazar con armas de fuego sin tener cumplidos los 18 años cuando se haga a cierta distancia del cazador o cazadora mayor de edad encargado de la vigilancia del menor o cuando no se cumplan sus indicaciones. Acompañar a un cazador menor de 18 años que utilice armas de fuego sin vigilar eficazmente sus acciones cinegéticas.²³
- El personal de vigilancia o guardería de los cotos de caza en dichos terrenos, salvo supuestos autorizados. Así como, practicar la caza con cualquier tipo de arma por parte de observadores, batidores o secretarios, que asistan en calidad de tales.²⁴

Así como falsear los datos de la solicitud de licencia de caza, incluidas las declaraciones que se acompañen, o suplantar la personalidad de la persona aspirante en el examen de caza.²⁵

²¹ Se considera como infracción **grave**: art.77.9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.67.9 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.82.19 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Infracción **muy grave**: art.55.4 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco.

²² Recogida como infracción **leve**: art.76.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.57.13 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art.76.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.84.3 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.49.1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.68.4.8 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.; art.83.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

²³ Se recoge como infracción **leve**: art.48.3 núm. 1,2,3 y 41 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970; art.76.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.57.3 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art.84.2 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.67.6 y 7 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.83.3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.73.10 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

²⁴ Se considera infracción **grave**: art.77.14 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.32 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.13 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

²⁵ Se clasifica como infracción **grave**: art.55.28 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del país vasco; art.77.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.100.2 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.86.26 de la Ley

Negarse a mostrar a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, la documentación correspondiente, el contenido del morral, el interior de los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se esté utilizando para la caza, cuando así sea requerido.²⁶

1.1.1.2. Derivadas de las armas y técnicas empleadas:

A nivel autonómico, las CCAA sancionan el empleo de armas, municiones, dispositivos auxiliares, artes o medios no autorizados o prohibidos por la Ley. Los medios, artes y procedimientos prohibidos y la valoración de su gravedad, dependerá de una Comunidad autónoma a otra. La Jurisprudencia afirma que la caza se consuma con la captura, con independencia de que se dé muerte o no a la pieza.²⁷

Se considera también infracción, con diferente gravedad dependiendo de cada CCAA, cazar con armas u otros medios de caza permitidos, sin poseer los permisos, guías o autorizaciones legalmente establecidos.²⁸

- Armas prohibidas

Sera infracción recogida por las legislaciones de caza autonómicas la tenencia o utilización, sin autorización de armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos o rifle anestésico sin autorización, armas que disparen en ráfagas, provistas de silenciador o visor para el disparo nocturno, así como las que disparen proyectiles que inyectan sustancias paralizantes o las armas

14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura ; infracción **leve**: art.68.3 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art. 76.13 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

²⁶ Recogida como infracción **grave**: art.75.28 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.85.16 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.82.28 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.45.3 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias.

²⁷ Clasificada como infracción **grave**: art.75.3 y 4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.100.15 Ley 7/2003 de Murcia de caza y pesca fluvial, de 12 de noviembre; art.82.7 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.74.10 y 19 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. TSJ de Castilla la Mancha, Sala Contencioso Administrativo, secc.2ª, sentencia 239/2005 de 5 de septiembre.

²⁸ Se recoge como infracción **leve**: art.76.11 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.43.1 de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril.

accionadas por aire y otros gases comprimidos, así como cazar con municiones no autorizadas.²⁹

- Medios masivos no selectivos

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, emplear con fines cinegéticos, sin autorización o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, venenos y cebos envenenados, gases paralizantes o sustancias asfixiantes, así como explosivos, cuando éstos no formen parte de municiones o artificios autorizados con carácter general. Así como, la preparación, manipulación y venta para su utilización de medios de caza, sin autorización administrativa.³⁰

Sera infracción recogida por las legislaciones de caza autonómicas, extender o colocar alambres o redes en arroyos, ríos, embases o lugares de entrada o salida de aves, con el fin de capturarlos. Así como, cazar, sin autorización o incumpliendo las condiciones de la misma, con redes o artefactos que requieran para su uso o funcionamiento de mallas, redes abatibles, redes-niebla o verticales, o redes-cañón.³¹

Se prohíbe asimismo, cualquier medio masivo o no selectivo para la captura de piezas de caza, como el uso de sustancias adhesivas, lazos, trampas o cepos, granos, comederos o cebos artificiales, reclamos, ligas y, en general, medios prohibidos.³²

²⁹ Se considera Infracción **muy grave**: art.50.9 y 10 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; Infracción **grave**: art.85.29 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.58.2.18 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.88.14 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.74.18 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.75.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.6 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja

³⁰ Se considera infracción **muy grave**: art.43.1.f) de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art.74.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.55.16 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.86.3 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.75.7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.46.3º de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; art.87.9º de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; Infracción **grave**: art.74.17 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.100.18 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

³¹ Se clasifica como infracción **grave**: art.45.8 de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; art.88.4 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra;

- Cazar desde vehículos

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, cazar desde aeronaves, vehículos terrestres, o embarcaciones, como lugar desde donde realizar los disparos, salvo que éstos constituyan puestos fijos. Así como, transportar armas y otros medios de caza listos para su uso, en cualquier tipo de vehículo, incluidos tractores o cualquier tipo de maquinaria agrícola durante la realización de las labores del campo, así como durante los desplazamientos hacia los lugares donde se realicen tales labores. La Rioja, en el artículo 82.17 de su ley de caza, añade a esta infracción, que serán responsables cuando las armas se encuentren al alcance de los ocupantes, tanto el propietario o usuario del arma como el conductor del vehículo, así como todos los que intervengan o colaboren en la manipulación de los medios o en la acción de caza.³³

- Cazar con luz artificial o de noche

Sera infracción recogida por las legislaciones de caza autonómicas, cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso de noche auxiliándose con los focos de un vehículo a motor o con cualquier otro dispositivo que emita luz artificial o facilite la visión nocturna.³⁴ La Rioja, de nuevo añade en el artículo 83.23 de su ley de caza la infracción de circular de noche con vehículo motorizado por cualquier clase de terrenos valiéndose de sus luces y acosando o molestando a la fauna silvestre cinegética, aun cuando no se lleven ni transporten medios de caza.

³² Recogida como infracción **grave**: art.74.17 y 26.a) de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.75.4 y art.31.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

³³ Se recoge como Infracción **grave**: art.81.17 y 39 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.67.11 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.74.20 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.75.15, 16 y 24 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art. 58.2.18 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; Infracción **Leve**: art.75.25 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.57.10 y 11 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.99.9 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.87.5 Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; Infracción **muy grave**: art.43.1.a) de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art.78.13 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.50.5 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio;

³⁴ Se considera Infracción **muy grave**: art.55.29 de la la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.81.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.50.4 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; Infracción **grave**: art.58.2.18 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.74.16 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.75.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

- Cazar en línea de retranca:

Las legislaciones autonómicas tipifican como infracción cazar en línea de retranca. Se consideran líneas y puestos de retranca los situados a menos de 250 metros de la línea más próxima de escopetas en la caza menor y a menos de 500 metros en la caza mayor, ya sea con armas largas rayadas o cualquier arma de fuego, tanto si se trata de caza mayor o menor.³⁵

- Uso de hurones, reclamos, rapaces y aves cetrería sin autorización:

Queda prohibido y por tanto será sancionable, el uso y la tenencia no autorizada de rapaces, aves de cetrería, hurones, reclamos de perdiz hembra y redes o artes sin precintar. Así como vulnerar las condiciones de autorización otorgada para la utilización de estos animales.³⁶

- Otros medios y artes prohibidas:

Las legislaciones autonómicas castigan, la caza mediante el ojeo o acción combinada de dos o más grupos de cazadores, o por medios que persigan el cansancio o agotamiento de la pieza. Así como, la práctica de la caza por las personas ojeadoras, batidoras, o demás auxiliares en ojeos o batidas con armas no autorizadas.³⁷

³⁵ Recogida como infracción **muy grave**: art. 43.1.g) Ley de caza de 4 de abril 1970; art.55.15 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; Infracción **grave**: art.75.41 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.77.13 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; Infracción **menos grave**: art.44.9 de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; Leve: art.99.18 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

³⁶ Se recoge como infracción **grave**: art.56.31 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.85.21 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.82.32 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.58.2.18 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; Infracción **leve**: art. 47.11 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.75.23 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; menos grave: art.48.2.31 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

³⁷ Se considera como infracción **grave**: art.56.18 y 30 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; leve: art.43.17 de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; art.88.15 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.74.14 y 45 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art. 58.2.18 Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, de 17 de diciembre; Infracción **leve**: art. 48.3.23 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971; art.57.12 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco

Se tipifica asimismo como infracción administrativa, chantear, atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos, sin autorización del órgano competente.³⁸

1.1.1.3. Derivadas de época de veda y días prohibidos.

Sera infracción recogida por la mayoría de las legislaciones de caza autonómicas, practicar la actividad cinegética en época de veda.³⁹

Se extiende tal infracción, a la caza o transporte de armas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda, fuera del período una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta o en días señalados como hábiles, sin la correspondiente autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna.⁴⁰

Se prohíbe asimismo, cazar en los días de fortuna, en aquellos en los que, como consecuencia de incendios, inundaciones, sequías, epizootias y otras causas, los animales se ven privados de sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. Así como, cazar en días de nieve cuando ésta cubra de forma continua el suelo, niebla, lluvia, humo u otras causas o con visibilidad mermada que reduzcan la defensa de las piezas de caza o resulten peligrosos para las personas o bienes.⁴¹

³⁸ Recogida como infracción **grave**: art.75.14 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.16 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.82.28 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

³⁹ Se recoge como infracción **grave**: art.48. 1º.18 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970; art.77.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.82.21 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.82.13 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.88.13 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.74.40 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; **muy grave**: art.55.12 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco

⁴⁰ Se considera como infracción **grave**: art.75.9, 35 y 36 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.77.25 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.82.13,34 y 35 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.56.44 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.82.22 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

⁴¹ Se recoge como infracción **grave**: art.43.1.d), art.82.23, 24 y 25 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.75.37 y 38 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.36 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.74.29 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; Infracción **muy grave**: art.55.3 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del

1.1.1.4. Derivadas de piezas de caza y fauna silvestre

Las legislaciones autonómicas castigan la caza de especies amenazadas y la destrucción de su hábitat, en particular del lugar de reproducción, hibernación, invernada, reposo, campeo o alimentación. A su vez se castiga la comercialización, bajo cualquier forma, de especies amenazadas⁴²

Se recoge también como infracción el transporte o la suelta de caza viva o huevos de aves cinegéticas sin contar con la autorización necesaria; así como la recogida, transporte y venta de huevos, pollos o crías de las especies de caza sin la correspondiente autorización.⁴³

Se considera también infracción la comercialización de piezas de caza vivas o sus huevos sin la debida autorización administrativa o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma.⁴⁴

Es también sancionable, destruir, alterar o deteriorar intencionadamente los vivares, nidos, madrigueras y otros lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma.⁴⁵

País Vasco; art.78.2, 3 y 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; Infracción **leve**: art.47.15 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

⁴² Se considera como infracción **muy grave**: art.55.1, 2 y 19 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.73.3. de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial.

⁴³ Se clasifica como infracción **muy grave**: art. 83.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.55.10 y 11 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; Infracción **grave**: art.77.20 y art.77.11 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.12 y 27 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.74.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁴⁴ Se recoge como infracción **grave**: art.82.26 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; **muy grave**: art.78.6 y 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art. 82.40 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

⁴⁵ Se considera infracción **grave**: art. 74.40 Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; art. 82.30 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.82.15 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.75.13 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **leve**: art.73.2 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; Infracción **muy grave**: art.78.12 de la Ley 77.11 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art. 46.10 de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; Art. 101.5 Ley 7/2003 de Murcia de caza y pesca fluvial, de 12 de noviembre

Se recoge como infracción, cazar especies no cinegéticas o la caza de animales domésticos, así como cazar en época hábil piezas de caza cuya edad o sexo, en el caso de que sean notorios, no concuerden con los legalmente permitidos.⁴⁶

Las normas autonómicas recogen como infracción, cazar, poseer o transportar piezas de caza, vivas o muertas, cuya edad o sexo, en el caso de que sean notorios, no concuerden con los legalmente permitidos. Así como el transporte, comercialización o naturalización de piezas de caza no comercializables, vivas o muertas, o sin cumplir los requisitos establecidos al efecto y el mantenimiento de piezas de caza en cautividad sin autorización expresa o incumpliendo los requisitos de la misma. A su vez, incluyen como infracción administrativa, transportar piezas de caza cobradas sin los precintos o alterar los mismos o sus marcas reglamentarias⁴⁷

A su vez, incluyen como infracción administrativa, el anillamiento o marcado de piezas de caza por personas no autorizadas o la utilización de anillas o marcas que no se ajusten a los modelos establecidos. Así como no hacer llegar a la diputación foral las anillas o marcas utilizadas para el marcado científico de animales, cuando, al cobrar una pieza de caza, ésta sea portadora de tales señales.⁴⁸

Se tipifica asimismo como infracción administrativa, el abandono o depósito de los despojos de las piezas abatidas sin seguir las normas o indicaciones dadas al respecto, o el incumplimiento del titular del aprovechamiento de impedir tal conducta.⁴⁹

⁴⁶ Se clasifica como Infracción **grave**: art.49.21 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.82.45 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja art.56.1 y 20 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.75.11 y 40 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.74.14 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.77.11 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; Infracción **leve**: art.73.8 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; Infracción **muy grave**: art.86.5 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.

⁴⁷ Se recoge como infracción **grave**: art.56.21,40 y 47 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.74.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.77.11 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.56.41 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.82.25 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Infracción **leve**: art.83.7 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja art.76.9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

⁴⁸ Se considera como infracción **grave**: art.56.42 y 43 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; Infracción **leve**: art.73.4 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁴⁹ Se clasifica como infracción **grave**: art.56.48 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

Las legislaciones autonómicas castigan cazar palomas en sus bebederos habituales o a menos de 1.000 metros de un palomar industrial cuya localización esté debidamente señalizada. Cazar palomas mensajeras y deportivas o buchonas que ostenten las marcas establecidas al efecto.⁵⁰

Se tipifica también, cobrar piezas de caza, heridas en terreno donde sea permitido cazar, en terreno de régimen cinegético diferente, sin pedir permiso a la persona dueña de la finca o a la titular del aprovechamiento, o sin atenerse a la técnica de cobro de la pieza prevista en la ley o entrar a cobrarla sin el arma abierta o descargada y con el perro desatado.⁵¹

Por último se incluye como infracción administrativa dentro de las piezas de caza, el excederse en los cupos autorizados en los Planes de Ordenación Cinegética para especies de caza mayor y caza menor.⁵²

1.1.1.5. Derivadas de los terrenos

Las legislaciones autonómicas castigan la destrucción, deterioro, supresión, alteración o cambio de los carteles o señales indicadores de la condición cinegética de un terreno, induciendo a error sobre ella.⁵³

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en reservas regionales de caza, en refugios de fauna, en terrenos no cinegéticos o en aquellas zonas de los espacios naturales

⁵⁰ Se considera como infracción **leve**: art.57.14 y 15 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.76.9 y 10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.83.14 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

⁵¹ Se considera como infracción **leve**: art.57.2 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.76.1 y 7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

⁵² Se recoge como infracción **grave**: art.74.23 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.77.6 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

⁵³ Se clasifica como infracción **grave** art.75.2 y 10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.4 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.49.9 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; art.77.19 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.82.3 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; Infracción **Muy grave**: art.42.1.b) de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art.73.2 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; Infracción **leve**: art.87.13 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

protegidos donde el ejercicio de la caza estuviere expresamente prohibido, sin estar en posesión de la correspondiente autorización especial, aun cuando no se hubiese cobrado ninguna pieza.⁵⁴

Las legislaciones autonómicas tipifican como infracción la destrucción de cercas o vallas de los terrenos cercados, así como cazar en terrenos en los que no estén recogidas las cosechas, o sobre caza en caminos, vías pecuarias, cauces de ríos, arroyos y canales que atraviesen o linden con terrenos sometidos a régimen cinegético especial.⁵⁵

Se incluye como infracción administrativa la relativa a la caza en lugares en que la Administración haya declarado la existencia de epizootias o enfermedades contagiosas.⁵⁶

Se tipifica también, cazar incumpliendo lo dispuesto en el plan cinegético aprobado, lo que podrá dar lugar a la suspensión del aprovechamiento cinegético durante el tiempo necesario para la recuperación de las poblaciones. Así como, cazar en terrenos cinegéticos sin tener Plan de Ordenación Cinegética en vigor⁵⁷

1.1.1.6. Derivadas de las medidas de seguridad

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, portar armas cargadas o con munición en su recámara en las zonas de seguridad, es el caso de núcleos urbanos, rurales, jardines, urbanizaciones, viviendas aisladas, parques públicos e instalaciones

⁵⁴ Se considera como infracción **grave**: art. 77.26 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.19 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.55.7 y 9 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.81.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.83.2 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.74.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **leve**: art.76.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

⁵⁵ Se considera infracción **muy grave**: art. 42.1.b) Ley de caza de 4 de abril 1970; Infracción **grave**: art. 49.24 Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; **leve**: art.48.3.15 de la Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970

⁵⁶ Se clasifica como Infracción **menos grave**: art.44.1º Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio, modificada por Ley 6/1999 de 14 de abril; Infracción **grave**: art.88.11 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

⁵⁷ Recogida como infracción **grave**: art.75.7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.75.19 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

recreativas, instalaciones deportivas, industrias, explotaciones ganaderas, vías férreas, o carreteras, o cazar en las proximidades de lugares concurridos o donde se estén celebrando actos públicos. Así como disparar en dirección a una zona de seguridad a la que puedan llegar los proyectiles.⁵⁸

Las legislaciones autonómicas castigan el incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las legislaciones autonómicas en materia de caza, así como poner en peligro la integridad física de las personas durante la caza. En el caso de monterías, ojeos, ganchos o batidas, podrá dar lugar a la prohibición de celebrar nuevas cacerías de este tipo en el mismo terreno cinegético, durante una temporada de caza.⁵⁹

En lo relativo a practicar la caza con arma de fuego cuando se tienen las facultades limitadas, se recoge como infracción, hallarse en estado de embriaguez, o bajo la influencia de bebidas tóxicas o estupefacientes.⁶⁰

1.1.1.7. Derivadas de los perros de caza

Sera infracción No controlar los perros y permitir que los perros vaguen sin control por terrenos sometidos a régimen cinegético especial en época hábil, o por terrenos de aprovechamiento cinegético común o especial en época de veda, así como

⁵⁸ Se considera Infracción **grave**: art.75.10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.58.2.17º de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.77.28 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.49.19 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; art.74.27 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; Infracción **leve**: art. 76.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.99.3 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; Infracción **muy grave**: art.42.1d) de la Ley de caza de 4 de abril 1970; art.58.1.11º de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.73.5 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art. 50.8 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio.

⁵⁹ Recogida como infracción **grave**: art.82.38 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.77.27 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.82.33 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; Infracción **leve**: art.76.18 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.55.8 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.101.3 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

⁶⁰ Se clasifica como infracción **grave**:, Art. 74.21 Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial: si se caza sin armas se considerará leve, art.75.14 Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; **muy grave**: art.55.18 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.86.18 de la la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

incumplir las normas especiales que pudieran establecerse para la especial vigilancia de los perros durante la época de reproducción y crianza de especies de fauna.⁶¹

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, transitar con perros por zonas de seguridad sin evitar que el animal moleste o persiga a las piezas, sus crías o sus huevos; así como utilizar perros con fines cinegéticos en terrenos en que, por razón de época, especie o lugar, esté prohibido hacerlo.⁶²

Sera infracción cazar con perros de caza que no estén debidamente identificados e incumplir las normas que regulan el adiestramiento o entrenamiento de perros de caza en las zonas que se establezcan al efecto.⁶³

Está sancionado el infringir las normas reglamentarias sobre tránsito de perros por terrenos cinegéticos cuando éstos acompañen a personas que no estén en posesión de licencia de caza.⁶⁴

Se recoge como infracción en las legislaciones de caza autonómicas, el empleo de más de tres perros por cazador, así como utilizar perros durante la caza a rececho, salvo para el cobro de piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance.⁶⁵

⁶¹ Se considera **infracción Leve**: art.76.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.81.4 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, de 4 de abril; art.75.11 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.47.9 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.99.11 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.73.13 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; **Infracción Grave**: art.75.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León

⁶² Se considera **infracción leve**: art.99.12 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.47.10 y 11 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio.

⁶³ Se clasifica como **infracción leve**: art.47.7.y 12 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; art.57.6 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

⁶⁴ Se considera **infracción leve**: Art. 48.3.28 Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971.

⁶⁵ Recogida como **infracción leve**: art.83.13 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.76.19 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.76.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía

Por último se recoge como infracciones, el abandono de perros de caza, el envenenamiento intencionado de los mismos, así como cazar animales domésticos.⁶⁶

1.1.1.8. Otras:

Las legislaciones autonómicas tipifican como infracción negarse a entregar a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, las piezas de caza, vivas o muertas, que se hayan obtenido durante la comisión de una infracción tipificada, así como las artes, medios o útiles de caza utilizados para ello. A su vez, negarse a la inspección de los agentes de la autoridad para examinar morrales, armas, interior de vehículos u otros útiles, al ser requerido en forma por tales agentes y obstaculizar el ejercicio de las funciones propias de los agentes de la autoridad en la inspección de caza.⁶⁷

Sera infracción recogida por la mayoría de las legislaciones de caza autonómicas, abandonar en el medio natural, vainas o casquillos de munición, así como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su ejercicio, salvo los que salen despedidos al realizar el disparo y son de muy difícil recuperación.⁶⁸

Falsear los datos de trofeos de caza o alterar estos de forma que puedan afectar a su puntuación, cuando sean sometidos a valoración por la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza.⁶⁹

⁶⁶ Se clasifica como infracción **grave**: art.49.21 y 23 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; Infracción **Muy grave**: art.86.5 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.50.11 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias.

⁶⁷ Se considera infracción **grave**: art.75.29 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.28 y 29 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.77.29 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.82.43 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.45.1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias; art.74.21 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.85.38 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.88.1 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; Infracción **menos grave**: art.48.7 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio.

⁶⁸ Se clasifica como infracción **leve**: art.84.19 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.68.5 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.73.5 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.47.16 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; art.75.10 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de caza y pesca fluvial; Infracción **grave**: art.56.49 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

⁶⁹ Se considera infracción **leve**: art.73.22 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

Sera infracción, incumplir lo dispuesto sobre notificación de enfermedades y epizootias de la fauna silvestre.⁷⁰

Queda prohibido y por lo tanto será sancionable, cazar durante las labores de pastoreo.⁷¹

1.2. Del titular del aprovechamiento cinegético

El titular del aprovechamiento cinegético, responderá de forma directa, sea persona física o jurídica, de las infracciones que cometan en el interior del coto, ya sea por conductas realizadas por él mismo o por sus vigilantes, guardas y o por las personas estén bajo su dependencia debido a una relación laboral o de servicio, a su vez responderá el titular subsidiariamente o solidariamente, según el caso, de la reparación del daño causado por dichas personas.⁷²

Cuando el titular sea una persona jurídica será responsable directa de las infracciones cometidas por sus órganos, representantes, mandatarios y agentes cuando éstos actúen en el desempeño de sus funciones, y asumirán el coste de la reparación del daño causado. En relación con las infracciones y daños causados por sus empleados en el desempeño de sus funciones, su responsabilidad será directa, subsidiaria o solidaria según lo que establezca la legislación autonómica.⁷³

⁷⁰ Recogida como infracción **grave**: art.82.21 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.75.20 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **Leve**: art.68.8 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.

⁷¹ Se clasifica como infracción **leve**: Art.83.16 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.76.25 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

⁷² Vid. Art.71.1.a) y b) de la Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre; art.89 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón: ” *Los titulares de los derechos cinegéticos serán responsables solidarios de las infracciones que cometan sus empleados en acciones de molestia intencionada, persecución, captura o muerte de ejemplares de especies de fauna amenazada contemplada en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, sin perjuicio del derecho a repetir contra los responsables últimos.*”

⁷³ Vid. Art.89 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.84.5 de la Ley 7/2003 de Murcia de caza y pesca fluvial, de 12 de noviembre; art. 93.2 Ley 2/1993 de Navarra de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, 5 de marzo; art.71.1.a) y 72.3 de la Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre, que excluyen tal responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético, cuando acredite la diligencia debida; art. 88 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, establece la responsabilidad directa de la persona jurídica de las sanciones y de los daños y perjuicios generados por infracciones cometidas por sus empleados en el ejercicio de sus funciones; art.71.1.b) y 72.3 de la Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía,

1.2.1. Infracciones

1.2.1.1. Derivadas de la autorización

Se recoge como infracción, por la mayoría de las CCAA, atribuirse indebidamente la titularidad cinegética o sus derechos, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico;⁷⁴ el falseamiento de los datos para la obtención de autorizaciones y concesiones o para la inscripción en los registros correspondientes, asimismo falsear u ocultar datos que hubiesen impedido la aprobación de la creación, ampliación o segregación de Cotos de Caza, Zonas Colectivas de Caza o en las solicitudes de oferta pública de caza de la Administración Regional. Incumplir en las Zonas Colectivas de Caza las limitaciones en cuanto al aprovechamiento cinegético.⁷⁵ Así como, incumplir lo establecido en las condiciones de declaración de los Cotos de Caza y Zonas Colectivas de Caza;⁷⁶ Incumplir lo dispuesto sobre la cesión, arrendamiento u otros negocios jurídicos relativos al aprovechamiento cinegético, y demás acuerdos entre las partes. Así como, incumplir con lo dispuesto sobre la

de 28 de octubre cabe concluir que tal responsabilidad será subsidiaria; Art.71.1.c) y d) Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre, contempla también otros supuestos de responsabilidad administrativa; en concreto “ *La del titular de la autorización o licencia, por cualquier incumplimiento de los términos de aquellas, así como los concesionarios del dominio público o servicio público y los contratistas o concesionarios de obras públicas, en los mismos términos vistos con relación a sus personas vinculadas por relación laboral o de servicio*”; art.71.1.e) Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre “*la de la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su cargo ordenase, favoreciese o consintiese los hechos determinantes de la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que pudiera incurrir*”; Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.162.

⁷⁴ Recogida como infracción **grave**: art.56.9 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.74.48 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.77.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.74.7 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.85.34 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; Infracción **muy grave**: art.46.5 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.87.8 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura

⁷⁵ Se considera como infracción **grave**: art.74.24 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.82.20 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.77.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.49.3 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias ; Infracción **muy grave**: art.81.4 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

⁷⁶ Recogida como infracción **grave**: art. 74.28 y 29 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

notificación de la cesión, arrendamiento u otros negocios jurídicos relativos al aprovechamiento cinegético, y demás acuerdos entre las partes.⁷⁷

Por último, se sanciona también, el subarriendo, la cesión o cualquier otro negocio jurídico de similares efectos, de los aprovechamientos cinegéticos por parte de los titulares de cotos de caza.⁷⁸

1.2.1.2. Derivadas de la planificación

- Ejercitar la caza en un terreno cinegético o permitirla por parte del titular del acotado, sin tener presentado y aprobado el correspondiente plan técnico del coto o Plan de Ordenación Cinegética, se considera infracción en las diversas legislaciones de caza autonómicas.⁷⁹
- Incumplir, por parte del titular el contenido del plan técnico del coto y el plan anual de aprovechamiento cinegético aprobados por la Administración. Así como Infringir las normas específicas contenidas en el plan general de caza. Sera responsable el titular si se comprueba que la gestión cinegética desarrollada en un terreno afecta negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos.⁸⁰

⁷⁷ Se considera como infracción **leve**: art.76.16 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.84.11 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; **muy grave**: art.46.7 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias.

⁷⁸ Se clasifica como infracción **grave**: art.77.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; **muy grave**: Infracción **leve**: art.55.23 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.82.41 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

⁷⁹ Recogida como infracción **grave**: art. 82.14 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.74.39 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.49.5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; Infracción **muy grave**: art.74.6 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.78.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.81.6 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.58.1.1º de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

⁸⁰ Se considera como infracción **grave**: art. 82.15 y 16 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.82.10 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.45.4 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.49.4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.75.7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.55.24 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.73.8 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.58.1.5º de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; Infracción **leve**: art.76.13 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.87.4 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

- Falsear los datos contenidos u ocultar datos en la elaboración del correspondiente plan cinegético, lo que podrá dar lugar a la suspensión del aprovechamiento cinegético durante un periodo determinado. Sera infracción a su vez su aplicación indebida o incumplir con su finalidad ⁸¹
- Presentar fuera del plazo reglamentariamente establecido por el órgano competente los planes de seguimiento cinegético, así como no presentar la memoria anual de gestión sobre la actividad realizada en un terreno cinegético. Así como el falseamiento de los datos de la memoria o resultados del aprovechamiento cinegético o de cualquier tipo de información objeto de comunicación preceptiva al órgano competente. ⁸²
- No comunicar, los titulares de cotos de caza, al Servicio Territorial, el término de la temporada, el número de jornadas cinegéticas, el número de cazadores por jornada, el total de piezas cobradas por especies y la comparación de sus poblaciones con la temporada anterior. ⁸³

1.2.1.3. Derivadas de la matrícula y terreno

Se recoge como infracción por las legislaciones autonómicas de caza, no pagar la tasa anual de matriculación de los cotos de caza, dicho impago dará lugar a la suspensión del aprovechamiento cinegético del acotado, pudiendo llegarse a su anulación, transcurrido el plazo que reglamentariamente se determine. ⁸⁴

⁸¹ Recogida como infracción **grave**: art.75.8 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.74.25 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.82.12 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.75.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; infracción **muy grave**: art.74.44 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.

⁸² Se considera como infracción **grave**: art.56.14 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.77.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; Infracción **muy grave** art.81.6 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; **leve**: art.73.20 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.76.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.83.20 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja

⁸³ Recogida como infracción **leve**: art.76.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **grave**: art.56.8 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco

⁸⁴ Recogida como infracción **grave**: art.74.26 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.74.9 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; Infracción **leve**: art.76.15 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.83.10 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja

Sera constitutivo de infracción el fraude, ocultación o engaño en las cesiones de terrenos para la constitución de cotos de caza, así como, falsear límites o superficie u ocultar datos que hubiesen impedido la aprobación de la creación, ampliación o segregación de Cotos de Caza.⁸⁵

1.2.1.4. Derivadas de la señalización y cerramientos

Será responsable el titular del aprovechamiento cinegético de no señalizar o señalizar incorrectamente los cotos de caza, las zonas de caza controlada, las zonas de reserva y los vedados, según lo establecido reglamentariamente, así como de no mantener la señalización en correcto estado de conservación, cuando ésta sea obligatoria o no retirar la señalización de un coto de caza cuando haya sido anulado o se haya extinguido.⁸⁶

Por otra parte, el titular del aprovechamiento cometerá una infracción por la instalación de cerramientos con fines cinegéticos sin la debida autorización así como el incumplimiento de la obligación de retirar el vallado o cercado cuando sea requerido para ello por la administración. A su vez, supondrá una infracción, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de instalación o modificación de cerramientos cinegéticos, como la reposición de los mismos sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma.⁸⁷

1.2.1.5. Derivadas de las piezas de caza y fauna silvestre

⁸⁵ Se considera como infracción **grave**: art.77.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.74.24 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; Infracción **leve**: art.87.14 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

⁸⁶ Se clasifica como infracción **grave**: art.74.31 y 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.82.1 y art.82.6 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.74.8 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, de Caza y pesca fluvial; art.82.15 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Infracción **leve**: art.75.33 y art.76.14 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.73.26 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.84.30 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

⁸⁷ Recogida como infracción **grave**: art.56.46 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.86.23 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; Infracción **muy grave**: art.78.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.81.3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.74.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.87.12 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; Infracción **leve**: art.73.18 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

Se recoge como infracción por las legislaciones autonómicas de caza:

- Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla, siempre que fuere hallada o pudiese ser aprehendida.⁸⁸
- El incumplimiento, por parte de las entidades titulares de los aprovechamientos de los terrenos cinegéticos, de las obligaciones de colaborar con las administraciones públicas en el cumplimiento de la normativa sobre protección de la fauna silvestre. Así como no comunicar a la Administración la captura de piezas de caza portadoras de anillas o marcas identificativas.⁸⁹
- El mantenimiento de piezas de caza en cautividad sin autorización expresa del órgano competente. Así como, la suelta y repoblación de ejemplares de especies cinegéticas sin autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente o incumplimiento de las normas aplicables.⁹⁰
- Aprovechamiento abusivo y desordenado las especies existentes en un coto privado de caza. Así como la falta de atención por las personas o entidades titulares de terrenos o aprovechamientos cinegéticos respecto a la adecuada protección y fomento de las especies cinegéticas.⁹¹

⁸⁸ Se considera como infracción **leve**: art.76.8 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.57.2 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.73.11 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁸⁹ Se clasifica como infracción **grave**: art.56.12 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.73.4 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

⁹⁰ Recogida como infracción **grave**: art.56.47 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.75.27 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.77.20 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.75.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha ; Infracción **leve**: 76.9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.78.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

⁹¹ Recogida como infracción **grave**: art.49.10 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.77.6 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.45.5 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.56.11 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; Infracción **muy grave**: art.75.5 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

1.2.1.6. Derivadas de la notificación de enfermedades

Sera responsable el titular del terreno cinegético cuando no declare las epizootias y zoonosis que afecten a la fauna cinegética, así como del incumplimiento de las medidas que se ordenen o el incumplimiento de las medidas que se dicten para su prevención o erradicación.⁹²

1.2.1.7. Derivadas de las Granjas y cotos industriales

Se recoge como infracción el establecer granjas cinegéticas sin autorización de la Consejería competente, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma. Así como criar, en las granjas cinegéticas o en los cotos industriales de caza, especies alóctonas o híbridos de éstas con especies autóctonas, así como criar especies distintas de las que estén amparadas por su declaración responsable o autorización de funcionamiento respectivamente. Será a su vez constitutivo de delito proceder a su liberación sin autorización, lo que podrá dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades durante un plazo determinado.⁹³

Asimismo será infracción, la puesta en marcha de granjas cinegéticas o su traslado, ampliación, modificación sustancial o cambio de los objetivos de producción sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la previa declaración responsable, lo que podrá dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades, por periodo determinado. Así como la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable previa al inicio de la puesta

⁹² Se considera como infracción **grave**: art.82.36 y 37 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.45.10 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias; art.74.22 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.49.7 y 8 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.75.20 y 21 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.75.10 y 11 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.101.8 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

⁹³ Recogida como infracción **grave**: art.75.23 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.83.23 y 24 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Infracción **muy grave**: art.74.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.55.27 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.78.11 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

en marcha de las granjas cinegéticas lo que podrá dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades, por un plazo máximo de tres años.⁹⁴

Será constitutivo de delito capturar en vivo especies cinegéticas para su comercialización, sin que el coto de caza esté autorizado como coto industrial de caza, o incumpliendo los requisitos establecidos en la autorización. Así como, comercializar piezas de caza portadoras de enfermedades epizooticas incumpliendo las medidas establecidas en la legislación vigente en materia de sanidad animal. Puede dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades durante un plazo determinado.⁹⁵

1.2.1.8. Otros

Se recoge como infracción el impedir a los Agentes de la Autoridad, o sus Agentes Auxiliares, el acceso a todo tipo de instalaciones cinegéticas o terrenos, en el ejercicio de sus funciones.⁹⁶

Algunas CCAA recogen como infracción carecer de servicio de vigilancia o guardería para los cotos de caza y las zonas de caza controladas.⁹⁷

Sera infracción transportar armas en tractores o cualquier otro tipo de maquinaria agrícola empleada durante la realización de las labores del campo, así como durante los desplazamientos hasta los lugares donde se realicen las mismas.⁹⁸

⁹⁴ Recogida como infracción **grave**: art.77.23 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía art.75.22 y 22 bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

⁹⁵ Se considera como infracción **grave**: art.75.24 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; Infracción **muy grave**: art.74.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.73.11 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.

⁹⁶ Se clasifica como infracción **grave**: art.75.30 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.77.24 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.74.12 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.49.16 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.100.6 Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.82.30 y 31 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

⁹⁷ Recogida como infracción **grave**: art.75.31 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.82.32 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.74.44 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

El incumplimiento por parte de las sociedades de cazadores que sean titulares de cotos deportivos de caza de lo dispuesto en sus Estatutos aprobados por la Consejería competente respecto a la admisión de socios, cuotas o cualquiera de las disposiciones incluidas en esta Ley. Así como el incumplimiento por la federación de caza o de las asociaciones locales de caza de la obligación de remitir copia de los estatutos y listado de personas asociadas a la administración competente.⁹⁹

Se considera infracción el causar una mortalidad innecesaria a las poblaciones de caza de un terreno, como consecuencia de prácticas, tratamientos u obras, manifiestamente inadecuados, o gravemente nocivos.¹⁰⁰

1.3. Sanciones

Las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por el cazador o por el titular del aprovechamiento, vendrán impuestas por el órgano competente de cada CCAA. A nivel estatal será la Administración Central la que impondrá las sanciones cuando la infracción recaiga sobre materias de su competencia.¹⁰¹

Se derogan los preceptos penales sustantivos de la Ley de caza estatal por la disposición derogatoria única.1.e) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que establece que los delitos y faltas previstos en dicha Ley, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, sancionándose con multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de caza, o de la facultad de obtenerla, por un plazo de dos a cinco años.¹⁰²

⁹⁸ Recogida como infracción **grave**: art.83.39 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; Infracción **leve**: art.57.11 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art.76.24 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

⁹⁹ Se considera como infracción **grave**: art.83.42 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.56.6 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

¹⁰⁰ Recogida como infracción **grave**: art.83.43 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹⁰¹ Vid. ORTUÑO NAVALÓN, C. MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.201.

¹⁰² Las cuantías expresadas en pesetas equivalen a 300,51 y 3005,06 euros, respectivamente, de conformidad con el artículo 2 de la L.O. 10/1998, de 17 diciembre, complementaria de la Ley sobre introducción del Euro (B.O.E.18 diciembre).

Se crea el Registro Regional de Infractores, en el que se inscribirán de oficio todas las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme en expediente incoado como consecuencia del ejercicio de la actividad cinegética con infracción a las disposiciones recogidas en las legislaciones autonómicas. En el Registro deberá figurar el tipo de infracción y su calificación, el motivo de la sanción, cuantía de las multas e indemnizaciones, si las hubiere, así como la privación de la licencia de caza y/o inhabilitación, en su caso, para el ejercicio de la actividad cinegética y su duración. Las inscripciones y variaciones que se produzcan en los asientos del Registro serán remitidas al Registro Español de Infractores de Caza y Pesca. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la cancelación de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el Registro Regional de Infractores o Registro Autonómico de Infractores de caza, una vez transcurrido el plazo.¹⁰³

1.3.1. Sanciones pecuniarias

A nivel estatal la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece que la sanción de las infracciones corresponderá al órgano de las CCAA que tengan atribuida la competencia en cada caso, o a la Administración Central la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en ámbito y sobre materias de su competencia. A nivel estatal, se diferencian las siguientes multas:

- a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros.
- b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 200.000 euros.
- c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las Comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por dicha Ley, las circunstancias del

¹⁰³ Vid. Art.85 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.87 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.97 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.102 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.83 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.

responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. La sanción de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponderá a los órganos competentes de las CCAA y a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.¹⁰⁴

En lo relativo a las sanciones pecuniarias, las legislaciones autonómicas en materia de caza recogen multas con una cuantía muy dispar de una comunidad a otra. En relación con las sanciones mínimas derivadas de infracciones leves, las multas suelen estar entre 30 y 60 euros hasta 600 euros, para las infracciones graves las multas irán desde los 300 euros hasta los 4000 euros, para las infracciones muy graves varían las multas entre los 2000 euros hasta los 87.446 euros para las sanciones máximas. Entre dichas cifras se mueven las distintas leyes autonómicas de caza.¹⁰⁵

En alguna legislación autonómica se contemplan sanciones bonificadas en caso de cumplimiento voluntario anticipado, (prestando la conformidad a la sanción y a la indemnización impuesta, no es aplicables a reincidentes) y prestaciones cívicas

¹⁰⁴ Vid. Art.77.1,2 y 3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹⁰⁵ Vid. **Andalucía**: art.82.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; “a) *Las infracciones leves con multa de 60 a 600 euros.* b) *Las infracciones graves, con multa de 601 a 4.000 euros.* c) *Las infracciones muy graves, con multa de 4.001 a 53.500 euros*”; **Castilla-La Mancha**: art.76 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza: “a) *Infracciones leves: 1.º Multa de 100 a 500 euros.* b) *Infracciones graves: 1.º Multa de 501 a 3.000 euros.* c) *Infracciones muy graves: 1.º Multa de 3.001 a 30.000 euros*”; **País Vasco**: art.58 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza: “a) *Las muy graves con multas de 2.001 a 6.000 euros y anulación de la licencia e inhabilitación para obtenerla por un periodo comprendido entre tres y cinco años.* b) *Las graves con multas de 501 a 2.000 euros y anulación de la licencia e inhabilitación para obtenerla por un periodo comprendido entre uno y tres años.* c) *Las leves con multas de 50 a 500 euros*”; **La Rioja**: art.85 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza: “a) *Por la comisión de infracciones leves: Multa de 30 euros a 300 euros.* b) *Por la comisión de infracciones graves: Multa de 301 a 3.000 euros.* c) *Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de 3.001 a 60.000 euros*”; **Aragón**: art. 84.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza: “a) *Las infracciones leves, con multa de 60 a 300 euros.* b) *Las infracciones graves, con multa de 300,01 a 3.000 euros.* c) *Las infracciones muy graves, con multa de 3.000,01 a 60.000 euros*”; **Comunidad Valenciana**: art.60 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza: “a) *Multa de 100 a 300 euros para las infracciones leves.* b) *Multa de 301 a 3.000 euros para las infracciones graves.* c) *Multa de 3.001 a 15.000 para las infracciones muy graves*”; **Extremadura**: art.84.2 a) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza: “a) *Multa desde 50 hasta 50.000 euros*”; **Castilla y León**: disposición adicional del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.: “*Por la comisión de infracciones leves: Multa de 43,71 a 437,24 euros. Por la comisión de infracciones graves: Multa de 437,25 a 4.372,33 euros. Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de 4.372,34 a 87.446,78 euros.*”.

ambientales en beneficio de la comunidad que, caso de aceptarse voluntariamente, serán sustitutivas de la multa.

1.3.2. Sanciones accesorias

Las sanciones pueden llevar aparejadas otras accesorias, como son, por una parte, el comiso de las piezas ilícitamente obtenidas y por otra, el comiso de los medios utilizados para llevar a cabo la infracción. En la resolución del expediente sancionador se fijará el destino de los comisos, procediendo a su destrucción, enajenación o devolución a sus dueños según las circunstancias de la infracción. Mediante acta se realizará descripción del bien decomisado, su estado y su destino.¹⁰⁶

Las legislaciones autonómicas, así como la estatal, prevén que la infracción administrativa lleve aparejada el comiso de las piezas de caza o de los instrumentos utilizados para cometer la infracción.

a) Comiso de las piezas de caza.

Procederá el comiso tanto si se hallasen vivas o muertas, e independientemente de que estén o no calificadas como pieza objeto de caza. El destino de las mismas dependerá de si las piezas de caza están vivas o muertas.¹⁰⁷

En el caso de ocupación de caza viva, el Agente denunciante procederá a ponerla en libertad, si estima que puede continuar con vida, o a depositarla provisionalmente en un lugar adecuado a resultas de lo que se acuerde por el instructor del expediente o, en su caso, determine la resolución del mismo.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Vid. ORTUÑO NAVALÓN, C. MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.203 y ss.

¹⁰⁷ Así lo dispone el art. 92.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, que añade que procederá igualmente el comiso “*de las especies catalogadas aprehendidas*”; art.64 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana “*Toda infracción a esta ley llevará consigo el comiso de los animales, vivos o muertos, que fueran ocupados, independientemente de su calificación o no como pieza objeto de caza así como en su caso el de cuantas artes, medios, útiles o animales hayan sido utilizados para cometer la infracción.*”

¹⁰⁸ Así por ejemplo el art. 83.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, establece que: “*en el caso de ocupación de caza viva, el Agente denunciante procederá a ponerla en libertad, si estima que puede continuar con vida, o a depositarla provisionalmente en un lugar adecuado a resultas*

En el caso de ocupación de caza muerta, el Agente denunciante la entregará a un centro benéfico o, en su defecto, al Ayuntamiento o Entidad local que corresponda, con idéntico fin, recabando, en todo caso, un recibo de entrega que se incorporará al expediente. Tratándose de especies de caza mayor con trofeo, se separará éste del cuerpo de la res y se pondrá a disposición del instructor.¹⁰⁹

b) Comiso de los medios empleados por el cazador

En el comiso de los medios empleados para cometer la infracción, se distinguirá entre medios que consistan en la utilización de animales vivos o en artes materiales:

Cuando en la comisión de la infracción se hubiesen utilizado aves de cetrería, hurones, reclamos vivos de especies cinegéticas, o vivos o naturalizados de especies no cinegéticas, y otros animales silvestres, cuya legal posesión quede acreditada, el comiso podrá ser sustituido por una fianza, que deberá depositar el infractor en tanto se resuelve el expediente, y cuya cuantía será igual al importe de la sanción correspondiente a la infracción presuntamente cometida, a juicio del instructor. Cuando la legal posesión de dichos medios no quede acreditada, serán decomisados por el Agente denunciante, quedando a disposición del instructor del expediente, fijándose su destino definitivo en la resolución que ponga fin al expediente sancionador. Si en la comisión de la infracción se hubiesen utilizado perros y otros animales domésticos, el comiso podrá ser sustituido por una fianza que deberá depositar el infractor, en tanto se resuelve el expediente, y cuya cuantía será igual al importe de la sanción correspondiente a la infracción presuntamente cometida a juicio del instructor.¹¹⁰

de lo que se acuerde por el instructor del expediente o, en su caso, determine la resolución del mismo.”; a su vez el art.90.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja, dispone que: “en el caso de ocupación de caza viva, el agente denunciante procederá a ponerla en libertad, si estima que puede continuar con vida, o a depositarla provisionalmente en un lugar adecuado a results de lo que se acuerde por el instructor del expediente o, en su caso, determine la resolución del mismo”.

¹⁰⁹ Vid.Art.50.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art.83.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.90.3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹¹⁰ Vid. Art.83.5, 6 y 7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Los lazos, redes y artificios empleados para cometer una infracción serán decomisados por el Agente denunciante, quedando a disposición del instructor del expediente.

Cuando dichos medios de caza sean de uso legal, en este caso la ley de caza de Castilla y León, establece que podrá ser sustituido el comiso por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la sanción presuntamente cometida a juicio del instructor. Los que sean de uso ilegal serán destruidos una vez dictada resolución firme. En cualquier caso, los gastos que se originen por depósitos y traslados se incluirán en la cuenta de daños y perjuicios derivados de la infracción.¹¹¹

Se procederá al comiso o retirada del arma, cuando la infracción haya sido cometida mediante el empleo de armas de fuego; recogida tanto en la normativa estatal como en las legislaciones autonómicas, en alguna de las cuales se prevé la sustitución de la retirada por el precintado.¹¹²

El agente denunciante competente solo procederá a la retirada de armas cuando hayan sido utilizados indebidamente para cometer la presunta infracción, dando al interesado recibo de su clase, marca, número y lugar donde se depositen. Se entiende por uso indebido del arma su disparo directo, posesión de algún ejemplar de especie no cazable abatido por el arma o su utilización para cazar en lugar y tiempo no autorizados.

Se procederá también a la retirada del arma cuando el infractor carezca total o parcialmente de la documentación necesaria para el ejercicio de la caza, o cuando el arma se encuentre desenfundada, cargada, montada y dispuesta para su uso en zonas prohibidas para el ejercicio de la caza, lo que supone una disposición de uso del arma en lugar o tiempo no autorizados. Reglamentariamente podrán determinarse las condiciones de depósito por parte del propio titular. La negativa a la entrega del arma obligará al agente denunciante a ponerlo en conocimiento del juzgado competente y se

¹¹¹ Vid. Art.50.25 de la Ley de caza de 4 de abril 1970; art. 83.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹¹² Vid, Art. 51 de la Ley de caza de 4 de abril 1970 y art.51 del Reglamento de la ley de caza de 25 de marzo de 1971; art.84.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.91.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

considerará como circunstancia agravante en el procedimiento administrativo sancionador.¹¹³

Las armas decomisadas que sean de uso legal se devolverán al supuesto infractor, previo abono de la sanción o tras la presentación del oportuno aval bancario que garantice el pago del importe total de la sanción y de las indemnizaciones propuestas, siempre que tengan, cuando sean necesarios, las marcas, números y punzones de bancos oficiales de pruebas y sus dueños tengan las licencias y guías de pertenencia en vigor. En Castilla y León, el comiso podrá ser sustituido por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la sanción correspondiente a la infracción presuntamente cometida, a juicio del instructor. Cuando se acuerde el sobreseimiento o archivo del expediente, las armas retiradas serán devueltas gratuitamente.¹¹⁴

En el supuesto de infracción administrativa leve, el instructor podrá acordar la devolución del arma en cualquier momento de la tramitación del expediente. Si la infracción se calificara de grave o muy grave la devolución del arma solo procederá cuando se haya hecho efectiva la sanción impuesta.¹¹⁵

Las armas decomisadas y las que no hayan sido recuperadas por sus dueños tendrán el destino previsto en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Los demás medios materiales de tenencia ilícita serán debidamente destruidos. Cuando las armas decomisadas carezcan, cuando sean

¹¹³ Vid. Art.85.1. y 2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.53.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.65.1 y 3 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.93.2 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.48.2 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias; art.71.2 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.53.2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.93.2 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.96.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.91.2 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

¹¹⁴ Vid. Art.85.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.84.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.49.1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias.

¹¹⁵ Vid. Art. 94.2 y 3 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.49.2 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias.

necesarios, de marcas, números o punzones de bancos oficiales de pruebas, o se trate de armas prohibidas, se destruirán en la forma prevista en dicho Real Decreto.¹¹⁶

El Código Penal recoge en su artículo 127, como consecuencia accesoria del delito, el comiso, por lo que toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.¹¹⁷

c) otras

La comisión de las infracciones tipificadas podrán llevar aparejada otras sanciones accesorias, como la retirada, suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspondiente licencia o autorización del aprovechamiento, así como la suspensión de la actividad cinegética, la Inhabilitación para comercializar piezas de caza, la clausura de instalaciones, suspensión de autorizaciones, derechos de aprovechamiento, titularidad y explotación o la anulación del Coto de Caza o Zona Colectiva de Caza. Así como la exclusión del infractor de los sorteos para obtener permisos para practicar la caza en los cotos sociales y reservas de caza existentes Estableciendo cada CCAA un periodo determinado para cada una de las sanciones accesorias dependiendo de su gravedad.¹¹⁸

¹¹⁶ Vid. Art. 85.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.84.3 y 4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.65.6 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

¹¹⁷ Vid. Art. 127 redactado por el número sesenta y uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹¹⁸ Vid. Art. 83 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.77 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.76 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.91 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

Los infractores sancionados con retirada de la licencia de caza deberán entregar tal documento al órgano competente en materia de caza en un plazo de quince días, contados desde la notificación de la resolución. El incumplimiento de esta obligación, podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas según lo preceptuado en esta Ley.¹¹⁹

Las sanciones serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición, en su caso, de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que deberá ser abonada al órgano competente en las cuantías que reglamentariamente se determinen para las especies cobradas ilegalmente. La indemnizaciones que perciba aquella por las especies de caza cobradas ilegalmente serán reintegradas por la Administración a los titulares de los cotos de caza en los que las citadas especies hubieran sido cobradas. La consejería competente, y con el fin de determinar el alcance de la obligación de indemnización, establecerá, para cada temporada de caza, los criterios de valoración y la valoración específica de las diversas especies cinegéticas y de la fauna silvestre.¹²⁰

Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, cuando la ejecución de determinados actos exigidos por la administración se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que su cuantía pueda exceder, en cada caso, de 3.000 euros, este importe se recoge en la mayoría de las legislaciones autonómicas de caza. Tales multas serán independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas.¹²¹

¹¹⁹ Vid. Art.85 g) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.60.2 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

¹²⁰ En este sentido se establece en el Art. 22 del Real Decreto 1398/93, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de 4 de agosto; art.100 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.69 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.69 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.80 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹²¹ En este sentido el art.79 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.84.6 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.101 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.106 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; otras cantidades se recogen; art. 63 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana: “*Su cuantía no excederá en cada caso del veinte por ciento de la multa principal*”

1.4. Prescripción.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción de acuerdo con la Ley 30/92, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.¹²²

Las legislaciones de caza recogen los plazos de prescripción para las infracciones y para las sanciones, si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses, de acuerdo con la Ley 30/92. En su caso, Castilla y León establece 4 años para las infracciones muy graves, 1 año para las calificadas como graves y 4 meses para las infracciones leves.¹²³

con el límite máximo de 1.000 euros por cada multa coercitiva”; art.72 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial: “...la cuantía de las cuales no debe superar el límite máximo de 300 euros diarios para cada una.”; art.84 de la de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla la Mancha: “...por cuantías que no excederán del 30% de la multa fijada por la infracción cometida, incrementada en un 10% en cada sucesiva multa coercitiva que se imponga.”

¹²² Vid.Art.132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

¹²³ Vid. Castilla y León: art. 82.7 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza; Castilla la Mancha: art. 81.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza “*Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.*”art. 82 .1”*Las sanciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.*”; Andalucía: art.70.1. de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres: “*Las infracciones muy graves contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.*”2.” *Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año*”; Rioja: art. 96.1 de la

Las infracciones recogidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, calificadas como muy graves prescribirán a los cinco años, las calificadas como graves, a los tres años, y las calificadas como leves, al año. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los tres años y al año, respectivamente.¹²⁴

El plazo de prescripción para las infracciones comenzará a contarse desde que se hubiera cometido o desde que se tuviera conocimiento de ella. Cuando la infracción se derive de una acción continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume. El plazo de prescripción se interrumpe por la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, o por cualquier otra actividad administrativa o judicial que deba realizarse relacionada con el expediente.¹²⁵

Para las sanciones, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en el que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.¹²⁶

Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza: “Las sanciones previstas en la presente Ley prescribirán: al año, las impuestas por infracciones leves; a los dos años, las impuestas por infracciones graves, y a los tres años, las que se impongan por infracciones muy graves.”; Aragón: art. 98.1. de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza: “Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: Las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año”. 3. “Las sanciones derivadas de las infracciones previstas en la presente ley prescribirán: las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.”; Valencia: art. 59. 1 Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza “Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los seis meses las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves.”

¹²⁴ Vid. Art.79 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹²⁵ Vid. Art.82.8 y art.82.9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

¹²⁶ Vid. Art. 82.2 y art.82.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.96.2 y 3 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.

2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su Título IX, Capítulo Primero, regula los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas. En él se establecen una serie de principios, como son, el principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones (*ne bis in idem*), que las CCAA deben respetar en sus respectivas regulaciones del procedimiento sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.¹²⁷

¹²⁷ Dispone el art. 127 de la Ley 30/1992: “1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.” Art. 128: “1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.” Art. 129: “1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.” Art. 130: “1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia. 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente. 3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores.” Art. 131: “1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración. b) La naturaleza de los perjuicios causados. c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.” Art. 132: “1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por

El Capítulo Segundo del mismo cuerpo legal, establece los principios del procedimiento sancionador, donde el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá de un procedimiento legal o reglamentariamente establecido y donde en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. A su vez, se establecen los derechos del presunto responsable, el cual, tendrá derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, pudiendo formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes. Continúa el capítulo con el establecimiento de las medidas de carácter provisional, siempre y cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, en cuyo caso, se podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. El último de los principios, estaría consagrado por la presunción de inocencia, cuya máxima establece que se respetará la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, establece en su artículo 1 que la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido reglamentariamente, en defecto total o parcial de procedimientos específicos previstos en las correspondientes normas autonómicas. Respetando el marco del proceso de adecuación, la distribución constitucional de competencias y la autonomía local.

En materia cinegética, la Ley de caza estatal, establece la definición de infracción administrativa en su artículo 46, por el cual, constituirá infracción

faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiriera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.” Art. 133: “No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.”

administrativa de caza toda acción u omisión voluntaria que vulnere las prescripciones legales o reglamentarias que se dicten para su aplicación. Esta ley y su reglamento tienen un carácter residual y supletorio respecto de la legislación cinegética aprobada por las CCAA.

2.1. Órganos competentes

De acuerdo con el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, serán órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores, los previstos en las normas sancionadoras, y en su defecto los que resulten de las normas sobre atribución y ejercicio de competencias fijados en la Ley 30/1992, sin que pueda atribuirse estas competencias al mismo órgano para las fases de instrucción y resolución del procedimiento.¹²⁸

Las CCAA en sus respectivas leyes de caza establecen el órgano competente para la imposición de las sanciones.¹²⁹

Deben respetarse dos premisas, el órgano que instruye no puede ser el órgano que resuelva, recayendo así en dos órganos independientes, la competencia para instruir el procedimiento y la competencia para resolver. A su vez, podrán desconcentrar la titularidad y el ejercicio de las competencias sancionadoras, en otros órganos que sean jerárquicamente dependientes de aquellos órganos que tengan atribuidas dichas competencias.¹³⁰

¹²⁸ Vid. Art. 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

¹²⁹ Así, por ejemplo el art.82.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León establece que la competencia para la imposición de las sanciones corresponderá: “a) Al Delegado territorial de la Junta en cada provincia, para las infracciones leves. b) Al Director general del Medio Natural, para las graves. c) Al Consejero de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, para las muy graves. El procedimiento sancionador se incoará por las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de medio ambiente”; art. 86 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres “Órganos competentes.1. Corresponde a los Delegados Provinciales de la Consejería competente en materia de medio ambiente la imposición de sanciones por infracciones cometidas en materia de caza y pesca continental, así como las calificadas como leves y graves en materia de conservación.”

¹³⁰ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C. MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.221 y 222.

2.2. Procedimiento

Algunas CCAA se remiten a la normativa general estatal en relación a la instrucción y ordenación de los procedimientos administrativos, aplicados a las infracciones en materia cinegética. Otras en cambio, se remiten a la suya propia, al haber legislado las mismas al respecto.¹³¹

La normativa autonómica en materia de caza siguiendo lo establecido por la legislación estatal configura el carácter público de la acción, permitiendo así que cualquier persona denuncie las infracciones recogidas en las leyes de caza, estableciendo una caducidad de dos meses desde la fecha en que fueron cometidas o desde que se tuviera conocimiento de ellas.¹³²

En relación con la presunción de veracidad de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad, incluyendo a los agentes forestales, establecen las leyes de caza que los hechos constatados por estos funcionarios, que se formalicen en documento público, tendrán valor probatorio. Los guardas particulares o el personal de vigilancia tendrán la consideración de agentes auxiliares de autoridad, reconociéndoles la ley a su vez, el valor probatorio de las denuncias que estos realicen, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los sujetos denunciados.¹³³

2.2.1. Forma de iniciación

¹³¹ En este sentido tienen su propia regulación del procedimiento sancionador: Navarra en su art.110 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca; de Castilla y León en su art. 82.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza; País Vasco en su art.62 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza; se remiten a la legislación estatal: Andalucía en su art.68 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; Asturias en su art.39.2 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza; Canarias en su art.44.2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza; Murcia en su art.86.2 Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial; La Rioja en su art.92 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza; Comunidad Valenciana en su art.68.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza; Castilla-La Mancha en su art.83 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza.

¹³² Vid. Art. 82.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art. 68.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres; art. 61.1 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial. Art. 97 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art. 98 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art. 47. 1 b) de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

¹³³ Vid. Art. 82.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

El carácter público de la infracción permite que el procedimiento se inicie de oficio y a través de un acuerdo adoptado por el órgano competente, ya sea por propia iniciativa o por orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico, por petición de otros órganos administrativos que no tienen competencia para iniciar el procedimiento y que han tenido conocimiento de las conductas que pueden constituir infracción, o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación, por último, el procedimiento puede iniciarse a través de una denuncia realizada por cualquier ciudadano, no pudiendo ser anónima, relatando los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y si fuera posible, la identificación de los presuntos responsables. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, se le comunica al denunciante la iniciación del mismo, siempre y cuando vaya acompañado de una solicitud de iniciación.¹³⁴

2.2.2. Actuaciones previas

- Actuaciones previas: se podrán realizar con anterioridad a la iniciación del procedimiento con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.¹³⁵
- Medidas provisionales: de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter

¹³⁴ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.223 y 224.

¹³⁵ Vid. Art. 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora; art. 109 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias. Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto. Las legislaciones autonómicas incluyen como medidas provisionales, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficiente para ello, adoptar la suspensión cautelar de cualquier licencia y/o actividad o decomiso de los instrumentos, artes o útiles ilegales empleados.¹³⁶

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.¹³⁷

2.2.3. Iniciación del procedimiento

El procedimiento se inicia cuando se dicta el acuerdo de incoación (pliego de cargos) adoptado por el órgano competente, que tendrá el siguiente contenido:

- a) La identificación del presunto infractor y domicilio a efecto de notificaciones.
- b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

¹³⁶ Vid. Art. 15 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora; art. 83. 2 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art. 68. 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.

¹³⁷ Vid. Art. 83.4 y 5 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

- c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en la Ley.
- e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.
- f) Indicación del derecho a formular alegaciones a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo previsto de quince días, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.¹³⁸

Los órganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones Públicas facilitarán al órgano instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.¹³⁹

2.2.4. Instrucción

¹³⁸ Vid. Art.13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora; art. 110. 2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

¹³⁹ Vid. Art.14 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la propuesta de resolución.¹⁴⁰

- **Alegaciones**

El pliego de cargos se notificará a los interesados por correo certificado o mediante agente notificador, concediéndoles un plazo de diez o quince días, dependiendo de la CCAA, para aportar cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.¹⁴¹

- **Pruebas**

Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de quince días, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días. En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquéllos, cuando sean improcedentes.¹⁴²

La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime pertinentes, entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación de procedimiento, se realizará de

¹⁴⁰ Vid. Art.16.1 y 3 del del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

¹⁴¹ Vid. Art.16.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora; art. 9 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; art. 110. 1 b) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

¹⁴² De conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determinante para la resolución del procedimiento. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.¹⁴³

- Propuesta de resolución

Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijará de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.¹⁴⁴

- Audiencia

¹⁴³ Vid. Art.17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

¹⁴⁴ Vid. Art. 18 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento. Salvo que el escrito de iniciación se haya convertido en propuesta de resolución, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.¹⁴⁵

2.2.5. Resolución

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. La resolución se formalizará por cualquier medio que acredite la voluntad del órgano competente y se adoptará en el plazo de diez días, desde la recepción de la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento,

¹⁴⁵ Vid. Art.19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

a menos que se practiquen actuaciones complementarias o se considere que la propia infracción reviste mayor gravedad que la prevista en la propuesta de resolución.

En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto para las actuaciones complementarias, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculcado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.

La resolución del procedimiento sancionador, contendrá la decisión, que será motivada, expresará, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Además, incluirá la valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.¹⁴⁶

La resolución se notificará a los interesados, mediante correo certificado o mediante agente notificador. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la resolución se comunicará al órgano administrativo autor de aquélla.

- Efectos de la resolución

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podrá interponerse recurso administrativo ordinario. Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa no serán ejecutivas en tanto

¹⁴⁶ Vid. Art. 89.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

no haya recaído resolución del recurso ordinario que, en su caso, se haya interpuesto o haya transcurrido el plazo para su interposición sin que esta se haya producido.

Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, las resoluciones del recurso ordinario y de los procedimientos de revisión de oficio que, en su caso, se interponga o substancien no podrán suponer la imposición de sanciones más graves para el sancionado. Las resoluciones podrán adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas.¹⁴⁷

- Resarcimiento e indemnización

Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración Pública, la resolución del procedimiento podrá declarar, la exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción o la indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedimiento. La indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa¹⁴⁸

2.3. Caducidad del procedimiento

En el caso de que no hubiese recaído resolución transcurridos 6 meses desde la iniciación, de acuerdo con el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento por concurrencia de sanciones o vinculaciones con el orden jurisdiccional penal, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Según dispone

¹⁴⁷ Vid. Art. 21 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

¹⁴⁸ Vid. Art. 22 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

dicho artículo en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.¹⁴⁹ En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Dispone el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.”

¹⁵⁰ Al respecto se debe tener en cuenta la STS de 12 de junio de 2003 (Sala 3.ª, Sección 4.ª), por la que se fija doctrina legal en relación con los artículos 44.2 y 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el sentido de que “la declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artículo 92.3 de la misma Ley”.

Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones.¹⁵¹

2.4. Silencio administrativo.

La obligación legal de la Administración de resolver los expedientes administrativos se extiende tanto a los procedimientos incoados a instancia del interesado como a los de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado.¹⁵²

En relación a los procedimientos iniciados a instancia del interesado, de acuerdo con el artículo 31 de la LRJPAC, pueden ser iniciados por los titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, por aquellos que incluso sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento, o bien por aquellas personas cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Una vez iniciado de oficio un procedimiento los ciudadanos afectados tendrán la consideración de interesados y por tanto la Administración tendrá la obligación de comunicarles la iniciación del procedimiento.¹⁵³

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 30/1992, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa por parte de la Administración, legitima al interesado que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en

¹⁵¹ Vid. Art.20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora

¹⁵² Dispone el art. 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento..

¹⁵³ Cfr. GUILLÉN PÉREZ, M. E. “El silencio Administrativo. El control judicial de la inactividad administrativa”. Edit. Colex, Madrid, 1997, pág.104.

los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando se interponga recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

El acto presunto estimatorio puede hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver, que deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.¹⁵⁴

2.5. Procedimiento simplificado

Para el ejercicio de la potestad sancionadora en el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, se tramitará mediante procedimiento simplificado.

¹⁵⁴ Vid. Art.43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La iniciación se producirá por acuerdo del órgano competente en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento y que se comunicará al órgano instructor del procedimiento y, simultáneamente, será notificado a los interesados. En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución o si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará que continúe tramitándose por el procedimiento general, notificándolo a los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.

El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, que en el plazo de tres días dictará resolución en la forma y con los efectos previstos para el procedimiento ordinario. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Vid. Art. 23 y art. 24 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

IV. MARCO PENAL

SUMARIO: 1. Consideraciones generales; 1.1 Bien jurídico protegido; 1.2. Normas penales en blanco; 1.3. Culpabilidad; 2. Delitos relativos a la protección de la fauna; 2.1. Introducción de especies de fauna no autóctona (Art.333 del CP); 2.1.1. Bien jurídico protegido; 2.1.2. Sujetos de la actuación; 2.1.3. Objeto material; 2.1.4. Conducta típica; 2.1.5. Delito de resultado; 2.1.6. Tentativa; 2.1.7. Tipo subjetivo; 2.1.8. Antijuricidad; 2.1.9. Concurso de normas; 2.2. 2.2. Maltrato de animales domésticos. (Art.337 del CP); 2.2.1. Bien jurídico protegido; 2.2.2. Sujetos de la actuación; 2.2.3. Objeto material; 2.2.4. Conducta típica; 2.2.5. Delito de resultado; 2.2.6. Tentativa; 2.2.7. Tipo subjetivo; 2.2.8. Antijuricidad; 2.2.9. Concurso de normas; 2.3. Abandono de animales domésticos. (Art.337.bis del CP); 2.3.1. Bien jurídico protegido; 2.3.2. Sujetos de la actuación; 2.3.3. Objeto material; 2.3.4. Conducta típica; 2.3.5. Delito de resultado; 2.3.6. Tentativa; 2.3.7. Tipo subjetivo; 2.3.8. Antijuricidad; 2.3.9. Concurso de normas; 2.4. Delito de contrabando de fauna silvestre. 3. Delitos propiamente cinegéticos; 3.1. Caza, adquisición, posesión, destrucción o tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. (Art.334 del CP); 3.1.1. Bien jurídico protegido; 3.1.2. Sujetos de la actuación; 3.1.3. Objeto material; 3.1.4. Conducta típica; 3.1.5. Delito de mera actividad; 3.1.6. Tentativa; 3.1.7. Tipo subjetivo; 3.1.8. Antijuricidad; 3.1.9. Concurso de normas; 3.2. Caza ilegal (Art. 335 del CP); 3.2.1. Bien jurídico protegido; 3.2.2. Sujetos de la actuación; 3.2.3. Objeto material; 3.2.4. Conducta típica; 3.2.5. Delito de resultado; 3.2.6. Tentativa; 3.2.7. Tipo subjetivo; 3.2.8. Antijuricidad; 3.2.9. Concurso de normas; 3.3. Caza con medios no selectivos (Art.336 del CP); 3.3.1. Bien jurídico protegido; 3.3.2. Sujetos de la actuación; 3.3.3. Objeto material; 3.3.4. Conducta típica; 3.3.5. Delito de mera actividad y de peligro abstracto; 3.3.6. Tentativa; 3.3.7. Tipo subjetivo; 3.3.8. Antijuricidad; 3.3.9. Concurso de normas; 4. Disposiciones comunes; 4.1. Agravante por espacio natural protegido. (artículo 338 del CP); 4.2. Restauración del equilibrio biológico perturbado (artículo 339 del CP); 4.3. Reparación voluntaria del daño (artículo 340 del CP); 5. Consecuencias accesorias; 6. Antecedentes penales; 7. Medidas de seguridad y cancelación 8. Imprudencia por el uso de armas de caza; 9. Estado de necesidad; 10. Problemática del error; 11. Problemática sancionadora de los ilícitos penales y administrativos. Principio *ne bis in idem*.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Bien jurídico protegido

1. Posiciones en relación al Bien jurídico protegido en relación a las especies de fauna

En relación con el bien jurídico protegido existen varias posturas doctrinales, para un primer sector se protege la diversidad biológica o biodiversidad; para otro sector el bien jurídico protegido es el medio ambiente; otra postura entiende que lo protegido es el equilibrio biológico; por último también se entiende que el bien jurídico protegido es la fauna en sí misma.

Se concibe por la mayoría de la doctrina, que el bien jurídico protegido en los delitos contra la fauna y recogidos en el Código Penal, es la diversidad biológica o biodiversidad. Como señala HAVA GARCÍA, “es un bien jurídico intermedio o instrumental respecto del medio ambiente y teleológicamente dirigido a su salvaguarda, pero dotado de su propia autonomía”.¹

A nivel internacional como estatal, se han tomado medidas para evitar la progresiva pérdida de especies de fauna, para ello los diferentes ordenamientos jurídicos han acogido instrumentos para dotar de tutela a la diversidad biológica. En España ,como se ha visto anteriormente, es la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la que otorga esta protección, pasando de valorar a las especies de forma individual a buscar la protección de las mismas como elemento integrante de la diversidad biológica o biodiversidad, definida como, “*variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas*”.²

¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Edit. Trotta Madrid 2000. Pág.18.

² Vid. Art. 3.3) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Esta postura entiende que en los delitos relacionados con la protección de las especies silvestres y de sus hábitats, se protege de forma autónoma la diversidad biológica.³ La defensa de la biodiversidad como bien jurídico protegido independiente, pero subordinado a la tutela del equilibrio de los ecosistemas, da coherencia al sistema de penas recogido en el Título XVI del Código Penal. Hace posible excluir del ámbito de aplicación de los tipos penales protectores de la fauna las infracciones formales y facilita a su vez la diferenciación entre el ilícito penal y el administrativo, debido a que se debe constatar que la conducta típica creó un peligro para la supervivencia de la especie y con ello el propio mantenimiento de la diversidad biológica.⁴

MUÑOZ CONDE, señala que “el desvalor de la conducta reside aquí no en la especie pescada o cazada, sino en el daño que se puede provocar a la biodiversidad por los medios empleados en la caza o la pesca”. Continúa el autor afirmando que la conducta, para ser típica, debe ocasionar un mínimo de “peligrosidad para el equilibrio biológico”.⁵

Otras posturas doctrinales entienden que en los tipos relativos a las especies protegidas y en los delitos relacionados con el medio ambiente o los recursos naturales, el bien jurídico es el equilibrio de los sistemas. Los delitos relativos a la fauna se consideran tipos de lesión del medio ambiente.⁶ Resulta difícil que un ataque a un animal implique por sí solo una lesión al equilibrio de los ecosistemas, por lo que si se consideran delitos de lesión deberían tener una respuesta penal más fuerte que los tipos de riesgo, para no castigar la mera puesta en peligro del bien de una forma más grave que su efectivo daño.⁷

³ Vid. VERCHER NOGUERA, A, “La reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en la materia penal ambiental o la exigencia o la exigencia de un reajuste inevitable”. En actualidad jurídica Aranzadi 665, 2005. Pág.8.

⁴ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.21 y 22.

⁵ Cfr. MUÑOZ CONDE, F. “Manual de derecho penal medioambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 331 y ss.

⁶ En este sentido, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A. “Observaciones críticas a la configuración de los delitos contra el medio ambiente en el Proyecto de Código Penal de 1992”. Edit. Jueces para la Democracia, 16-17, 1992, pág.112

⁷ Vid. DE LA CUESTA AGUADO, P.M. “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág.189 y ss.

Otra postura entiende, como se ha dicho anteriormente, que el medio ambiente es el bien jurídico protegido. En este sentido, SERRANO TÁRRAGA afirma que “hay que tener en cuenta que en el capítulo, los elementos de la flora y de la fauna no se protegen en sí mismos, sino como parte del medio ambiente y en la medida que el ataque a estos elementos, y a su hábitat, pueden alterar y perjudicar al medio ambiente”.⁸

Otra postura, interpreta que el bien jurídico protegido está constituido por la fauna en sí misma, por lo que recibe un tratamiento penal analógico al patrimonio artístico e histórico. El concepto de fauna, sería tutelado por sus valores específicos, estéticos o culturales, como componente del patrimonio natural y no por su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico. Se sostiene que los tipos penales son de lesión, por lo que se debe considerar el delito efectivamente consumado siempre que se constate la efectiva destrucción o daño al animal, en ese momento se produce un daño al patrimonio natural.⁹

2. Posiciones en relación al Bien jurídico en el maltrato de animales:

Existen varias posiciones en relación a la naturaleza del bien jurídico lesionado en el delito de maltrato de animales domésticos. Una primera vertiente minoritaria considera este delito como delito medioambiental o contra la naturaleza en la medida en que los animales forman parte de ella, se deduce y de acuerdo con REQUEJO CONDE, que el bien jurídico tendría una base antropocéntrica, con referencia a una concepción constitucional del Derecho Penal, como indica SALÁS DARROCHA, según la cual el respeto, la protección y el bienestar de los animales formarían parte de una inquietud humana dirigida a preservar la naturaleza y el medio ambiente.¹⁰

⁸ Cfr. SERRANO TÁRRAGA, M.D.; SERRANO MAÍLLO, A.; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. “Tutela penal ambiental”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009, pág. 195.

⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. Pág.20.

¹⁰ Vid. REQUEJO CONDE C. “La protección penal de la fauna. especial consideración del delito de maltrato de animales”. Edit. Comares, Sevilla, 2010. Pag.29 y ss; SALÁS DARROCHA J.T. “El maltrato de animales en el Código penal: L.O. 15/2003 de 25 de noviembre”. Sentencias de TSJ y AP y otros tribunales núm.9/2004. Edit. Aranzadi.2004, Pamplona. Pág.3.

Una segunda vertiente lo considera como un delito contra los intereses generales o como un delito contra la relación socio-afectiva que existe entre los hombres y los animales, donde el bien jurídico protegido son los sentimientos humanos de no ver sufrir a un animal.¹¹

Una tercera vertiente, entiende que el bien jurídico lesionado sería la vida, la integridad física del animal o incluso su dignidad, quedando fuera su integridad psíquica.¹² Para RÍOS CORBACHO no quedaría excluida la integridad psíquica del animal, el bien jurídico protegido estaría así constituido, tanto por la integridad física como psíquica del animal.¹³

Siguiendo con esta corriente doctrinal y de acuerdo con REQUEJO CONDE, el delito de maltrato animal no atenta contra el medio ambiente, puesto que dentro de éste solo comprenderían los animales silvestres que son objeto de la caza ilegal, pero no los animales domésticos, en tanto su muerte o lesiones graves no repercute en el equilibrio biológico de ningún ecosistema.¹⁴

Cabe destacar la posición mantenida por HAVA GARCÍA, quien reconoce que los sentimientos de amor y compasión por los animales son los que han otorgado un estatus al animal. Es la propia sociedad la que ha valorado a los animales como bienes jurídicos dignos de protección frente a las agresiones que le produzcan sufrimiento siendo estos mismos los que consideren protegidos en la norma, pero más concretamente su bienestar.¹⁵

¹¹ Vid. “*El titular del bien jurídico no es el animal, sino que es el hombre lesionado en sus sentimientos por presenciar los malos tratos*” en PÉREZ MONGUIÓ, RUIZ RODRÍGUEZ y SÁNCHEZ GONZÁLEZ “Los animales como agentes y víctimas de daños. Especial referencia a los animales que se encuentran bajo el dominio del hombre”. Edit. Bosch, Barcelona, 2008, pág. 185; RÍOS CORBACHO, J.M. “Los animales como posibles sujetos de derecho penal. Algunas referencias sobre los artículos 631 (suelta de animales feroces o dañinos) y 632 (malos tratos crueles) del Código Penal español”. Pág.20

¹² Vid. SAP de Madrid de 19 de abril de 2004.

¹³ Cfr. RÍOS CORBACHO, J.M. “Los malos tratos a los animales en el código penal español: una mejora insuficiente”, en <<http://www.asanda.org/index.php?module.>>

¹⁴ Cfr. REQUEJO CONDE C. “La protección penal de la fauna. especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág.34 y ss.

¹⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 118 y ss.

Por último, la doctrina mayoritaria no reconoce un bien jurídico de titularidad animal, pues consideran que éstos son “seres” incapaces de realizar acciones responsables al actuar solo instintivamente.

1.2. Normas penales en blanco.

MIR PUIG, indica que las leyes penales en blanco se refieren “a ciertos preceptos penales de carácter principal que excepcionalmente no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten a otro u otros preceptos o autoridades para que completen la determinación de aquellos elementos”.¹⁶

El principio de legalidad mantiene especial relación con las leyes penales en blanco, debido a la problemática que plantea la remisión a disposiciones de rango inferior al de la ley penal, lo que puede infringir la reserva de Ley Orgánica que afecta a las leyes penales.¹⁷ Por su parte, GARCÍA-PABLOS argumenta que se trata “de un genuino problema de jerarquía de fuentes, propio de los sistemas federales, que obliga a cuestionar la legalidad y alcance de ciertas autorizaciones a órganos de rango inferior”.¹⁸

No contienen una descripción cerrada del hecho prohibido, por lo que conforman como normas incompletas que necesitan aplicarse con otras, ya sea de naturaleza legal o reglamentaria.

Las normas penales en blanco se clasifican en propias, cuando el tipo se complementa con remisiones a normas de rango inferior a la ley, se cuestiona el principio de legalidad y la separación de poderes; el segundo tipo de normas, son las impropias, se producen cuando el complemento del supuesto de hecho se encuentra en

¹⁶ Cfr. MIR PUIG, S. “Derecho Penal Parte General”. Edit. Reppertor. Barcelona. 2002. Pág. 72.

¹⁷ Cfr. MUÑOZ CONDE, F., GARCÍA ARÁN, M. “Derecho penal. Parte general Derecho penal. Parte general”. Edit. Tirant lo blanch, 8ª ed., Valencia, 2010. Pág. 112; GÓMEZ PAVÓN, Pilar, “Cuestiones actuales del Derecho penal económico: El principio de legalidad y las remisiones normativas”, en Revista de Derecho penal y criminología, 2ª Época, Nº extraordinario 1º, 2000., pág. 461.

¹⁸ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción” edit. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid 2000. Pág.409

otra ley, siendo por tanto un reenvío externo o reenvío interno cuando el hecho se encuentre en la misma ley. A su vez, cabe distinguir entre leyes penales totalmente en blanco, en las cuales existe una total ausencia de concreción en el tipo penal, ya que se relega la determinación del ámbito punible a una instancia inferior; ello conlleva una vulneración del principio de legalidad; y leyes penales parcialmente en blanco, en las que el legislador remite a otras instancias algunos aspectos del tipo.¹⁹

Por su parte GARCÍA-PABLOS sostiene que es “evidente la razón de ser de esta técnica legislativa”, debido a la vinculación de determinadas materias jurídicas, particularmente dinámicas, pero además supeditadas a circunstancias histórico-sociales o a su tecnicismo, de manera que las normas extra-penales son las que pueden asegurar su debido y preciso tratamiento. Estos sectores que se mantienen en constante cambio, no deben incluirse en la ley penal, debido a que sufrirían un grave deterioro legislativo, por la inestabilidad de la misma. Bajo estos planteamientos, se encuentran dos posibilidades: una constante modificación de la normativa penal o petrificación de la misma, por lo que en este contexto, parece que la ley penal debe considerarse como el marco, delegando en autoridades o instancias inferiores la determinación del contenido. La materia de prohibición debe establecerse con suficiente precisión dentro de la ley penal, siendo la propia ley la que defina la materia de prohibición y no la norma de rango inferior.²⁰

La jurisprudencia ha restringido el uso de las normas penales en blanco dentro del ámbito medioambiental, requiriendo que el reenvío normativo sea expreso y justificado por el bien jurídico protegido. A su vez, la regulación penal debe contener la conducta prohibida y la pena de la misma y que a su vez la conducta delictiva quede suficientemente determinada.²¹

¹⁹ Cfr. BRANDARIZ GARCÍA, J.A. “La problemática de las normas penales en blanco”. En FARALDO CABANA, P; PUENTE ABA, L.M. “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente, en el Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2011. Pág. 106.

²⁰ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Op. Cit. Pág.412 y ss.

²¹ Vid. STS de 30 de septiembre de 1990, STS de 3 de abril de 1995, STS de 1 de febrero de 1997, STS de 8 de febrero de 2000, STS de 13 de marzo de 2000 y STS de 28 de marzo de 2006. STC 122/1987 de 14 de julio, STC 127/1990 de 5 de julio, STC 62/1994 de 2 de febrero, STC 120/1998 de 15 de junio, STC 34/2005 de 17 de febrero, STC 283/2006 de 9 de octubre.

Los delitos relativos a la protección de la flora y animales domésticos, recogidos en los artículos 333, 334 y 335 del Código Penal, se remiten directa o indirectamente a las normas administrativas para completar el tipo, son normas penales en blanco que dependen de la norma administrativa a la que se remiten. Así el artículo 333 se remite a las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna, cuando se introduzcan o liberen especies de fauna no autóctona contraviniendo dichas leyes; el artículo 334, se remite a las leyes u otras disposiciones de carácter general, que recojan las conductas tipificadas en dicho artículo, a su vez hace una segunda remisión al listado de especies protegidas; por último el artículo 335, hace una remisión a las leyes o reglamentos que recojan las artes o medios prohibidos para la caza.²²

En relación con la ley penal en blanco, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge las definiciones para interpretar los elementos clave de los tipos penales que hacen referencia a las especies protegidas, constituyendo así la principal norma estatal a la hora de integrar los tipos penales relacionados con la fauna que están incluidos en el propio CP. Junto a esta Ley hay que añadir las diferentes leyes autonómicas en materia de caza y especies protegidas.²³

1.3. Culpabilidad

²² Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Edit. Exlibris, Madrid, 1998. Pág.15

²³ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág; cabe destacar en relación a este punto el art.52.1 de la ley 42/2007: “Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en los artículos 53 y 55 de esta Ley. Igualmente deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable”; art.53.1 “Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en los artículos 53 y 55 de esta Ley. Igualmente deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable”4. “4. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación”.

Según MEZGER, “la culpabilidad es el conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan frente al sujeto, la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La acción aparece, por ello, como expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del agente”.²⁴

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.²⁵

El Código Penal recoge las causas que eximen de la responsabilidad criminal; en primer lugar, quedarán exentos los menores de edad; cualquier anomalía psíquica que haga que no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; el trastorno transitorio (no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión); se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. y la alteración de la percepción; sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad; el error de prohibición, como causa de desconocimiento de la antijuridicidad; en último lugar, miedo insuperable y estado de necesidad exculpante.²⁶

2. DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA

El Código Penal en su Título XVI los “delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”,

²⁴ Cfr. MEZGER, E. “Tratado de Derecho Penal”. Traducción de RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A. Edit. Revista el Derecho Privado, Madrid, 1955, pág.7.

²⁵ Vid. Art.19 del Código Penal.

²⁶ Vid. Art.20 del Código Penal.

incluye en su Capítulo IV tanto los delitos relativos a la protección de la flora, fauna como los relativos animales domésticos, artículos 332 a 337. Distingue tres partes dentro del capítulo; la primera contiene los delitos contra la flora (artículos 332 y 333); la segunda contiene los delitos contra la fauna (artículo 333 a 336) y la tercera que regula el delito de maltrato y abandono de animales domésticos (artículo 337 y 337 bis). Esta distribución resulta incompatible con la configuración que del bien jurídico mantiene la doctrina en general.²⁷

Únicamente guardan relación los delitos relativos a la protección de la fauna con los dedicados al maltrato de animales domésticos en el objeto sobre el que recae la acción típica, el propio animal, que a su vez tampoco presenta características homogéneas en todos los preceptos, en el caso del artículo 337 y 337 bis se protege a los animales domésticos, como víctimas de malos tratos innecesarios, y los artículos 334 y 335 protegen a las especies de fauna silvestre como parte de la diversidad biológica.²⁸

Protege el Código Penal a las especies animales como integrantes de un sistema natural cuyas condiciones esenciales, de acuerdo con REQUEJO CONDE, es preciso mantener para el completo equilibrio del ecosistema. Por lo que la flora y fauna silvestre conforman un bien jurídico al que se le denomina diversidad biológica o biodiversidad.²⁹

De la misma forma son los sentimientos humanos de compasión y amor hacia los animales los que propician un consenso generalizado favorable a su tutela penal, de acuerdo con HAVA GARCÍA, “el papel de esos sentimientos se agota en ese acto inicial que ha permitido su tipificación. A partir de ese momento la interpretación de los tipos protectores de los animales domésticos debe seguir su camino”, por lo que el bien

²⁷ Cfr. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Edit. La Ley, Madrid, 2015. Pág.2185

²⁸ Cfr. MUÑOZ LORENTE, J. “La protección penal de los animales domésticos frente al maltrato”. Edit. La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, 42 (2007). Pág.8.

²⁹ Cfr. REQUEJO CONDE.C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág. 97.

jurídico protegido en este tipo penal, es el propio animal, pero más concretamente su bienestar.³⁰

El delito tipificado en el artículo 337 en materia de protección de la flora, fauna y animales domésticos, ha sido modificados por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código, a su vez se incluye un nuevo artículo 337 bis relativo al abandono de animales, por lo que queda derogado el artículo 631 apartado 2 que recogía como falta el abandono de animales domésticos. El artículo 333 del CP continúa con su redacción anterior.

2.1. Introducción o liberación de especies de fauna no autóctona (Art.333 del CP)

Fue reformado por la LO 5/2010, de 22 de junio, no modifico su contenido, únicamente se añadió a la pena, la inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años. El art. 333 dispone lo siguiente:

“El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.”

Este precepto no se incluía en el proyecto del Código Penal de 1994, no fue tampoco debatido su contenido en el Pleno del Congreso, pero fue aprobado por el Senado. La introducción de dicho precepto en el Código Penal fue reclamada mediante enmienda por Coalición Canaria que proponía su inclusión.³¹

³⁰ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.124.

³¹ El texto propuesto por Coalición Canaria tenía la siguiente redacción ” *el que favoreciese la introducción o liberase clandestinamente individuos o propágulos de especies exóticas en los hábitats naturales con la intención de modificar los equilibrios biológicos o de determinadas especies será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses*”

La LO de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal, tipificó este delito con el fin de proteger a la flora o fauna autóctona frente a conductas que pudieran poner en peligro su existencia, buscando garantizar su conservación y mantenimiento.³²

Se configura como una norma penal en blanco, concretando el contenido de la prohibición penal a través del reenvío a la norma administrativa para delimitar el ámbito de la tipicidad. De esta forma hace que se deba de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 42/2007, donde se define especie autóctona como “la existente dentro de su área de distribución natural”, quedando excluidas todas aquellas que no sean propias del lugar, o que aparezcan fuera de su medio natural de nacimiento, crecimiento y reproducción.³³

Para que este delito tenga sentido previamente habrá que identificar qué especies de flora o fauna son propias del lugar y cuales son exóticas, foráneas o alóctonas, es decir, que aparecen fuera de su medio natural de nacimiento, crecimiento y reproducción. Por lo que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 42/2007, se castigará la introducción de especies no autóctonas, con ello se pretende garantizar la conservación y mantenimiento de las autóctonas.³⁴

De acuerdo con HAVA GARCÍA, la pérdida de diversidad biológica se produce con la introducción de especies exóticas que desplazan a las autóctonas de su propio hábitat e incluso les sirven de alimento.³⁵

³² Cfr. MARTÍN LORENZO, M. “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en Coordinador ORTIZ DE URBINA JIMENO, I/VVAA. Memento Experto. Francis Lefebvre. Reforma Penal Ley Orgánica 5/2010. Actualizado a julio de 2010. Edit. Francis Lefebvre. 2010. Pág.416.

³³ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op. Cit. Pág.2193.

³⁴ Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Artículo 15-11 (2013). Pág. 13.

³⁵ Ejemplo de ello fue la introducción por parte del ser humano del conejo en Australia en 1859, al no ser autóctona, no poseía depredadores naturales en el territorio, unido a su capacidad reproductiva, hizo que se multiplicaran de forma espectacular, arrasando la vegetación herbácea dejando sin alimento a especies endémicas de marsupiales con las mismas o parecidas exigencias ecológicas, viéndose amenazada la supervivencia de estos últimos; Vid. E. HAVA GARCÍA “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág. 318 y 319.

Un ejemplo de esta práctica es la importación y la liberación de algunos ejemplares de Cotorra argentina, que la convirtieron en especie exótica invasora en España. Las causas del crecimiento exponencial de la especie se debe a la gran adaptabilidad, ha conseguido cubrir sus requerimientos ecológicos, y adaptarse a las peculiaridades de la ciudad; a su éxito reproductor y número de puestas, así como a la falta de depredadores naturales. Esta invasión ha provocado problemas tanto sanitarios, de ruido, peligros relacionados con los nidos y daños a la agricultura y jardinería.³⁶

Otro ejemplo de esta práctica, previa autorización administrativa, fue la introducción del cangrejo rojo americano, se produjo a través de la suelta intencionada con apoyo institucional como experiencia para explotar comercialmente sus poblaciones. La elevada dispersión natural de la especie, acompañada de la introducción voluntaria por parte de los pescadores en otras masas de agua facilitó la dispersión de la especie por toda la Península Ibérica. Esta especie provoca efectos negativos sobre la flora y fauna autóctona, compite con especies autóctonas de otros cangrejos de río por su mayor tamaño, tasa reproductora y resistencia a plagas, excavan galerías que aumentan la erosión de las riberas, causando también problemas en acequias y arrozales; y a su vez transmiten enfermedades mortales para el cangrejo autóctono.³⁷

Para evitar y controlar esta invasión de especies se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluyen, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio

³⁶ Vid. MONTALVO, J. “Especies invasoras: La cotorra argentina (*Miyopsitta monachus*)”. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/formacion/PPT_TOM%C3%81S_MONTALVO-COTORRA_ARGENTINA_tcm7-311119.pdf

³⁷ <<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=83b9f9cd6168b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD>>

exterior. Esta prohibición puede quedar sin efecto, previa autorización administrativa, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas.³⁸

Por otra parte, el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto, establece que la importación de ejemplares vivos de especies cinegéticas en España requerirá la previa autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación expedida a través del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que incluirá el pertinente certificado zoosanitario. Cuando la finalidad de la importación sea la liberación en medio natural, el solicitante deberá acreditar que tal suelta no afectará a la diversidad genética de la zona donde se ubica la localidad de destino; no resulta contraria a las determinaciones o disposiciones de los planes de ordenación de los recursos naturales que afecten a dicha zona, si los hubiere; que sea compatible con los planes relativos a las especies catalogadas que, en su caso, existan en ese territorio y que se adecua a las previsiones del Plan Técnico de aprovechamientos cinegéticos o acuícolas del lugar de destino. Tratándose de subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, dicha autorización solo podrá concederse cuando existan las garantías suficientes de control para que no se extiendan por el medio natural o, en caso de que se pretendan liberar en éste, cuando se acredite adicionalmente que: no existen riesgos de competencia biológica con las subespecies o razas geográficas autóctonas que puedan comprometer su estado de conservación o la viabilidad de su aprovechamiento; y que no existen riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las subespecies o razas geográficas autóctonas.³⁹

4.1.1. Bien jurídico protegido

De acuerdo con la redacción del precepto legal el bien jurídico protegido es la diversidad biológica.

Se entiende por biodiversidad, la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas

³⁸ Vid. Art.61.1 y 3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

³⁹ Vid. Art.3 del Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Midiéndose dicha biodiversidad por el número de especies existentes.⁴⁰

4.1.2. Sujetos de la actuación

Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, por tanto, se está ante un tipo común que se desprende de la propia dicción del precepto.⁴¹

4.1.3. Objeto material

Lo conforman todas aquellas especies de fauna no autóctona, debiendo tener la condición de salvajes, excluyendo a aquellas que no lo sean por ser autóctonas, deberán tener dicha condición tanto la fauna introducida como la liberada, quedando excluidas las especies de fauna doméstica, debido a que la normativa administrativa que también se debe infringir como elemento del tipo, únicamente afecta a especies consideradas como silvestres.⁴²

Se busca su protección para mantener la pureza de las razas y especies autóctonas, debido a que la introducción y la liberación de especies no autóctonas es uno de los factores principales de la pérdida de la diversidad biológica, estas especies exóticas acaban desplazando a las autóctonas de su propio hábitat, incluso las utilizan como alimento.⁴³

⁴⁰ Vid. Art.3.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; BAUTISTA PAREJO, C. “Aspectos biológicos y zoológicos de los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. Edit. Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, T. VIII, pág. 450.

⁴¹ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op.cit. Pág.2193.

⁴² En este sentido SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna”. Op. Cit. Pág. 62; GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág. 13.

⁴³ Vid. MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C. “Lección XXXIII”, en MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.; VIVES ANTÓN, T.S.; ORTS BERENGUER, E. “Derecho Penal. Parte Especial. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2004. Pág. 760; MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PELEGRÍN, C./GARCÍA ÁLVAREZ, P., Manual de Derecho Penal Medioambiental”. Op. Cit., pág.310

4.1.4. Conducta típica

La acción típica consiste en introducir o liberar especies de fauna y flora no autóctona, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, por lo que se debe acudir a la normativa en la materia para determinar si se cuenta con autorización administrativa por parte del sujeto activo para introducir dicho espécimen.⁴⁴

Dentro de la conducta típica se entenderá por introducir como traer de fuera, o de cualquier lugar distinto de aquel en que son oriundas tal especies. Por otra parte se entenderá por liberar aquella especie no oriunda del lugar, habiéndose introducido en él ilegalmente. De acuerdo con lo anterior, la acción típica consistiría en poner en libertad especies de fauna o flora de manera ilegal. Cuando las conductas se realicen contando con autorización administrativa concedida al efecto ya sea por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, la conducta sería atípica.⁴⁵

De acuerdo con MUÑOZ CONDE, este delito no parece que constituya una simple modalidad de tráfico, en la medida en que la descripción típica no requiere finalidad lucrativa alguna.⁴⁶

Las Administraciones públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En casos excepcionales mediante autorización administrativa se podrán introducir o liberar especies no autóctonas, de acuerdo con la normativa general en la materia.⁴⁷

Se impone una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y en todo caso inhabilitación especial para la profesión u oficio de

⁴⁴ Vid. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág. 320

⁴⁵ Vid. MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PEREGRÍN, C./GARCÍA ÁLVAREZ, P., Manual de Derecho Penal Medioambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 311; MARTÍN LORENZO, M.^a, «Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos». Memento Experto. VV.AA., Op. Cit., págs. 416 y ss.

⁴⁶ Vid. MUÑOZ CONDE, F. “Derecho Penal. Parte Especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. Pág. 514

⁴⁷ Vid. Art. 52.2 y art. 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

uno a tres años. Se impone por parte del legislador como principal y obligatoria una pena de inhabilitación especial. De acuerdo con SANTA CECILIA GARCÍA, “solo se explicaría esta clase de pena como accesorio a la de prisión, de acuerdo con el artículo 56 del CP y siempre que la profesión u oficio tenga relación directa con el delito cometido (art. 56. 3ª)”. Debido a que no es coherente que se le prive a una persona de su profesión cuando el delito no guarda relación con su oficio, siendo incompatible con el principio resocializador y carente de todo efecto preventivo.⁴⁸

4.1.5. Delito de resultado

La mayoría de la doctrina entiende que se trata de un delito de resultado, al consistir la conducta en la introducción o liberación de fauna no autóctona que efectivamente perjudique el equilibrio biológico. Surge el problema en la prueba, debido a que, como advierte la doctrina, no siempre este perjuicio se producirá a corto plazo. A su vez al ser de una fórmula tan genérica que no cuantifica el importe del perjuicio, impedirá en la mayoría de los casos la intervención penal.⁴⁹

En opinión de HAVA GARCÍA, una lectura literal de este precepto llevaría a estimar este delito como de lesión, lo que conlleva su inaplicabilidad práctica, debido a que para lesionar a la diversidad biológica se tendría que acabar por completo con la especie, configurándose por tanto como un delito de peligro abstracto para la biodiversidad, solo se exigiría que el comportamiento típico sea idóneo para reducir el nivel de diversidad de especies de una zona. Continúa dicha autora afirmando que, el significado de equilibrio biológico alude a las circunstancias y condiciones objetivas en que se encuentra cada comunidad biótica en concreto, para evitar, la total impunidad del

⁴⁸Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op.Cit. Pág.2193 y ss; en este sentido también FARALDO CABANA, P., «Capítulo 44: Flora y fauna (arts. 333, 334, 336, 337, 339 y 631)», en ÁLVAREZ GARCÍA, F.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; VV.AA. “Comentarios a la Reforma Penal de 2010”. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág.401.

⁴⁹ Vid. SERRANO GÓMEZ, A./SERRANO MAILLO, A., Derecho Penal PE, 16.ª edición. Dykinson, Madrid, 2011. Pág.664.; MUÑOZ CONDE, F.; LÓPEZ PEREGRÍN, C.; GARCÍA ÁLVAREZ, P., Manual de Derecho Penal Medioambiental, Op. Cit., pág. 311; SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op.Cit. Pág.2193 y ss; SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit.Pág. 62.

comportamiento y la contradicción de entender “que se ha pretendido castigar más gravemente la probabilidad de lesión del bien jurídico que la lesión efectiva”.⁵⁰

El resultado típico de la conducta recogida en el artículo 333 del CP, permitiría en teoría, en opinión de GARCÍA ÁLVAREZ y LÓPEZ PEREGRÍN, diferenciar la introducción de especies alóctonas como conducta constitutiva de delito, de la reconducible a infracción administrativa del apartado f) del artículo 76 de la Ley 42/2007, que castiga la introducción, sin autorización administrativa, de especies alóctonas incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras.⁵¹

En este sentido la Fiscalía General del Estado, señalo que el desequilibrio biológico “consistiría en el acto de la reproducción por parte de esos ejemplares alóctonos liberados. No bastaría por tanto para la consumación del tipo la mera suelta de ejemplares como situación de riesgo abstracto, pues el tipo parece constituido como de resultado. La prueba de tal resultado concretado en la reproducción de los ejemplares liberados es ciertamente muy difícil, en definitiva había que acreditar no solo que se ha producido la liberación de ejemplares, que esos ejemplares pertenecen a especies no autóctonas sino que se han reproducido en el medio natural”.⁵²

Las conductas del artículo 333 del CP son dolosas, no está prevista la imprudencia, debido a que ésta no está recogida en el Ley. Por lo que es necesario que se demuestre que el sujeto activo conoce que la especie que está liberando o introduciendo no es autóctona y que a su vez, está infringiendo las disposiciones administrativas de carácter general y con ello perjudica el equilibrio biológico. La doctrina excluye el dolo directo de primer grado, pero no descarta que la conducta pueda realizarse con dolo eventual, como es el caso de liberar animales alóctonos para eliminar una especie autóctona que produce daño en los cultivos. Si bien es cierto que lo

⁵⁰ Vid. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op.Cit. Pág. 320 y 323; mantienen también esta posición QUERALT JIMÉNEZ, L.J. “Derecho penal español. Parte especial. Delitos contra los intereses individuales y colectivos”. Edit. Bosch, Barcelona, 1996. Pág.734; CASQUERO RUBIAS, A. “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Edit. Cuadernos de la Guardia Civil 15, 1996. Pág.253.

⁵¹ Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág. 15.

⁵² Vid. Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1996, pág.395.

más frecuente es que la conducta, de acuerdo con SANTA CECILIA GARCÍA, se puede dar a título de imprudencia, lo que la convertiría en atípica de acuerdo con las reglas que para el error de tipo establece el artículo 14 en relación con el 12 del Código Penal, lo que lleva a pensar en la escasa utilidad de este precepto.⁵³

4.1.6. Tentativa

La conducta típica al ser un delito de resultado, cabe admitir tanto la comisión por omisión, como la tentativa.⁵⁴

4.1.7. Tipo subjetivo

El precepto no hace distinciones en relación a las especies amenazadas o comunes, de acuerdo con HAVA GARCÍA solo basta con el sujeto sea consciente de que la introducción o liberación puede causar un perjuicio al equilibrio biológico en la zona donde se produzca la acción típica y que a su vez dicha conducta comporte un riesgo para la biodiversidad.⁵⁵

ORTEGA MARTÍN afirma que “al quedar fuera del dolo del agente el conocimiento y voluntad de que la introducción o liberación vaya a perjudicar realmente el equilibrio ecológico, la forma más común de culpabilidad será el dolo directo y meramente genérico”, aunque también quepa el dolo eventual.⁵⁶

4.1.8. Antijuricidad

⁵³ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op.Cit. Pág.2193 y ss.

⁵⁴ Vid. MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C. “Lección XXXIII”, en MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.; VIVES ANTÓN, T.S.; ORTS BERENGUER, E. “Derecho Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág. 760; MARTÍN LORENZO, M.^a, “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. Memento Experto. VV.AA., Op. cit., pág. 417

⁵⁵ Vid. E. HAVA GARCÍA “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág. 320

⁵⁶ Vid. ORTEGA MARTÍN, E. “Los delitos contra la flora y la fauna”. En AAVV “Derecho penal administrativo (ordenación del territorio patrimonio histórico y medio ambiente)”. Edit. Comares. Granada. 1997. Pág.478.

Se entiende que cualquier introducción o liberación de especies alóctonas, provocará una alteración negativa del equilibrio biológico en la zona de introducción o liberación, suponiendo así un riesgo para la diversidad biológica existente, por lo que no se exigirá posteriores comprobaciones para estimar el delito cometido, por lo que la mera producción del resultado naturalístico implica la creación del riesgo.

4.1.9. Concurso de normas

Cuando la acción típica consista en la introducción o liberación de especies que afecten a las especies protegidas, se producirá un concurso aparente con el artículo 334.1 del CP, debido a que dicha acción puede incluirse dentro de la conducta típica de actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración así como la destrucción o alteración grave de su hábitat, que recoge dicho artículo, estaríamos en presencia de un concurso aparente de leyes (art. 8), resolviéndose el conflicto conforme al criterio de alternatividad. Si la introducción o liberación de especies afectan a las especies en peligro de extinción, se aplicara el apartado segundo del artículo 334 del CP, por lo que se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años, en su mitad superior.

Si la conducta se produce en un espacio natural protegido, se sancionara de acuerdo a lo establecido por el artículo 330 del CP, si se produce algún daño que afecte a la calificación de tal espacio como protegido, cuando no afecte la conducta a dicha calificación se sancionara por el ex artículo 338 del CP, con la pena superior en grado a la prevista en el artículo 333 del CP.⁵⁷

Sera posible un concurso medial con el artículo 2.1.f) de la Ley de caza de 1970 cuando se lleve a cabo importaciones de especímenes incluidos en el CITES, para posteriormente liberarlo o introducirlo en una zona determinada con el perjuicio que se produciría en el equilibrio biológico de dicha zona. Se aplicaría por tanto el artículo 77.1 del CP, debido a que la importación del espécimen CITES es medio necesario para realizar la conducta, recogida en el artículo 333 del CP, de introducción o liberación, a

⁵⁷ Vid. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág.324y 325.

su vez el desvalor o peligro para la diversidad de especies existentes en el mundo que se produce con el primer delito, no se ha tenido en cuenta en el segundo delito, que pone en riesgo a la diversidad biológica de la zona en concreto.⁵⁸

De la misma forma, la importación o exportación, comercio, tenencia o circulación de especie de flora o fauna silvestre de forma ilegal puede constituir un delito recogido en artículo 2.2.b) de la Ley de Contrabando de 12 de diciembre de 1995.⁵⁹

4.2. Maltrato de animales domésticos. (Art.337 del CP)

Aparece un reconocimiento generalizado recogido tanto en los instrumentos internacionales como en el ordenamiento jurídico español, que consideran a los animales valiosos para las personas y que van más allá de su mera utilización económica. Por lo que el legislador ha decidido protegerlos frente a ciertos comportamientos, los cuales pueden provocar al animal un sufrimiento innecesario e injustificado.⁶⁰

La reforma realizada por la LO 5/2010, de 22 de junio del Código Penal refuerza la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas. Como novedad importante, además de las correspondientes penas de prisión o multa en función de la gravedad, se prevé la posibilidad de imponer

⁵⁸ Vid. MUÑOZ CONE, F. y GARCÍA ARÁN, M. “Derecho penal. Parte general”. Op. Cit. Pág.482 y 483.

⁵⁹ Vid. Art.2.2.b Ley de Contrabando de 12 de diciembre de 1995: “Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.”; SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Op.Cit. Pág.2193 y ss.

⁶⁰ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 125

las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.⁶¹

Artículo 337: “1. *Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a*

- a) un animal doméstico o amansado,*
- b) un animal de los que habitualmente están domesticados,*
- c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o*
- d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.*

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.*
- b) Hubiera mediado ensañamiento.*
- c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.*
- d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.*

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de

⁶¹ Vid. Preámbulo de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.”

Se configura este precepto como una ley penal en blanco, por la que se debe dar contenido al concepto de animales domésticos acudiendo a las normas administrativas, fundamentalmente las autonómicas, se emplea por tanto la técnica de la accesoriedad administrativa conceptual, con la dificultad de que no existe un único concepto normativo aplicable a todo el territorio.⁶²

HAVA GARCÍA, niega que en dicho precepto se haya empleado la técnica de la ley penal en blanco, al menos en su modalidad de accesoriedad conceptual, en cuya opinión sería más adecuado acudir a la definición dada por la RAE a animal doméstico: *“El que pertenece a especies acostumbradas secularmente a la convivencia con el hombre y no es susceptible de apropiación.”* y amansado *“El que, mediante el esfuerzo del hombre, ha cambiado su condición salvaje, y si la recobra puede ser objeto de apropiación.”*⁶³

4.2.1. Bien jurídico protegido

Los sentimientos e inquietudes humanas, como afirma HAVA GARCÍA, han provocado el reconocimiento expreso de cierto estatus jurídico o esfera de protección a los animales, estatus al que hace referencia las normas sobre la materia con la expresión

⁶² Cfr. MARQUÉS I BANQUÉ, M. “Comentario al artículo 337” en QUINTERO OLIVARES, G. (dir) y MORALES PRATS, F. (coord.) “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005. Pág. 1267; en este sentido la Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales define en su art.3. a): *“Animal doméstico: el que pertenece a especies que habitualmente se crían, se reproducen y conviven con personas y que no pertenecen a la fauna salvaje. Tienen también esta consideración los animales que se crían para la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano, los animales de carga y los que trabajan en la agricultura.”*; art.1 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía.: *“La presente Ley tiene por objeto la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de los animales de compañía, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de esta Ley se consideran animales de compañía todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia. A los efectos de esta Ley se consideran animales de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.”*

⁶³ Cfr. Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales” .Op. Cit. Pág.130 y 131.

bienestar animal, dado que son instrumentos humanos los que declaran la necesidad de evitar que los animales sufran injustificada e innecesariamente. Tales sentimientos e inquietudes finalmente se plasman en la tutela penal, por lo que el bien jurídico protegido en este tipo penal, es el propio animal, pero más concretamente su bienestar.⁶⁴

Se valora a los animales como bienes jurídicos dignos de protección frente a agresiones graves, bastando con hacer sufrir al animal y no la compasión de sufrimiento que pueda sentir cualquier persona, para incluirse dichas conductas en los tipos penales.

4.2.2. Sujetos de la actuación

El sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, considerándose un delito común, no se exige ninguna cualidad especial en el sujeto. Será indiferente que el sujeto activo de la conducta típica sea o no propietario o poseedor quien realice la conducta típica de maltrato del animal.⁶⁵ Según afirman GARCÍA ÁLVAREZ y LÓPEZ PEREGRÍN, esta cuestión si tendrá relevancia a la hora de determinar si, además de por este delito, el autor habrá de responder de un delito o falta de daños al patrimonio ajeno.⁶⁶

La titularidad del bien jurídico protegido, tanto en el artículo 337 en relación al maltrato animal así como la conducta recogida en el artículo 337 bis, que hace referencia al abandono, pertenece a la sociedad que la convierte en sujeto pasivo del delito.⁶⁷

4.2.3. Objeto material

Ya que el animal es considerado un ser vivo capaz de sentir y de sufrir.⁶⁸ El objeto material del delito es cualquier animal, doméstico o amansado, de los que

⁶⁴ Cfr. Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.123 y 124.

⁶⁵ Vid. SAP de Cáceres de 27 de octubre de 2000

⁶⁶ Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág. 41 y 42.

⁶⁷ Cfr. Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.125

habitualmente están domesticados, o que temporal o permanentemente vive bajo control humano, así como cualquier animal que no viva en estado salvaje.⁶⁹

El precepto recoge a estos animales como objeto material debido a varios motivos, en opinión de HAVA GARCÍA, es posible que se entienda que poseen una mayor capacidad de sufrimiento por su trato cercano con seres humanos, experimentan cierto grado de civilización. A su vez aportan unas utilidades o ventajas al ser humano que va mas allá del aprovechamiento económico que aportan las especies silvestres; asimismo, la realización de determinadas actividades que se consideran lícitas respecto de estos últimos podría considerarse maltrato, entrando la tutela penal en contradicción administrativa especialmente con la Ley de caza que autoriza esta actividad.⁷⁰

4.2.4. Conducta típica

De la redacción dada por la nueva reforma del Código Penal de 2015, a este precepto se interpretan dos conductas, por un lado el maltrato injustificado generador de lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal doméstico y por otro, la explotación sexual que será castigada al margen de que con ella se produzca sufrimiento al animal.

En opinión de CUERDA ARNAU, de la interpretación del precepto se deduce que el núcleo de la infracción es el maltrato injustificado. Se entiende por tanto que es un daño innecesario que carece de una finalidad legítima. La condición de buen o maltrato, depende de las necesidades de quien lo recibe. Del concepto del maltrato animal resulta una interpretación extensiva, contraria al principio de intervención mínima, sin perjuicio de que puedan motivar la intervención administrativa o en su caso, cuando exista una conducta constante sobre un mismo animal sí podría dar paso a la sanción penal.⁷¹

⁶⁸ Vid. MUÑOZ LORENTE, J. “La protección penal de los animales domésticos frente al maltrato”. Edit. La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, 42 (2007). Pág. 11.

⁶⁹ Vid. SAP de Cáceres de 27 de octubre de 2000

⁷⁰ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.126 y 127

⁷¹ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015. Pág. 1076 y 1077.

Como afirma HAVA GARCÍA, “el injusto del comportamiento no se identifica con la infracción de deberes bioéticos por parte del autor, ni con la lesión de los sentimientos humanos que sirvieron para fomentar su tipificación, sino que se materializará precisamente, en el sufrimiento ocasionado al animal de forma injustificada e innecesaria”.⁷²

Quedan al margen de la conducta típica los casos que son considerados maltrato, pero para las cuales existe una autorización, como sería el caso de la experimentación animal o los casos de legítima defensa.⁷³

Existen dos supuestos:

1º. Maltrato injustificado que causen lesiones que menoscaben gravemente su salud:

Este supuesto se caracteriza por su indeterminación, se circunscribe la tipicidad en los casos que se produzcan lesiones que sin ser excesivamente graves, siendo estas recogidas en el subtipo del apartado segundo, letra c, se requiera de la inmediata asistencia o la intervención veterinaria que evite que se produzcan lesiones más graves o incluso la muerte. Cuando se produzcan lesiones de menor entidad, se reconducirá a lo recogido en el tipo atenuado del apartado 4º del artículo 337 o, al artículo 337 bis que recoge el abandono.⁷⁴

La acción o conducta recogida en este supuesto será punible tanto si se realiza en público como en privado, de igual forma, se incluye dentro de la conducta típica la actitud omisiva u activa, cuando se produzca la muerte de un animal por inanición, estando atados o encerrados, será constitutivo de delito, considerándose en la anterior redacción del Código Penal como falta, aplicándose el subtipo agravado del apartado 3º

⁷² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág.132 y ss

⁷³ Vid. SAP de Madrid 417/2007 de 16 de julio.

⁷⁴ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATAILLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág. 1077 y 1078.

del artículo 337. Se incluirá también dentro de este supuesto a quien incite a los animales a que se lesionen entre ellos o incluso a que se maten.⁷⁵

2º. Explotación sexual:

La novedad que incluye el artículo 337 del CP es la explotación sexual de los animales (zoofilia). La enmienda nº 361 del Grupo Parlamentario Mixto, sobre este punto, fue tomada en cuenta y añadida en el propio apartado primero del referido precepto, junto a la conducta de maltrato injustificado del animal.⁷⁶ Por otra parte, la enmienda nº 61 del Grupo Mixto en el Senado, valora positivamente que se haya añadido una referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave y muy extendida en España, a su vez entiende que este artículo y que tal concepto debe ser completado por el de “uso” sexual para evitar una interpretación restringida del tipo penal.

⁷⁵ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L.; MATA LIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág. 1077 y 1078.

⁷⁶ Vid. Enmienda nº361 del Grupo Parlamentario Mixto: “*Es necesario tipificar desde el punto de vista penal la agresión sexual a los animales. Dicha actividad tiene suficiente entidad para justificar su inclusión expresa en las acciones delictivas, ya que es una práctica mucho más extendida de lo que se piensa, tal y como demuestran los últimos casos recientes divulgados en prensa sobre abusos y agresiones sexuales muy graves a animales. Actualmente, la zoofilia o el abuso sexual a animales en el Estado Español se encuentran en un vacío legal que permite la realización de todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad. Así, únicamente puede condenarse por maltrato animal si como resultado de la acción sexual se produjeren lesiones o la muerte del animal y no por la agresión sexual en sí misma considerada.; Recientemente, los países vecinos de la Unión Europea han incluido la zoofilia en el Código Penal, así como las reformas de los Códigos Penales para incluir el delito de maltrato a los animales de los Estados de Yucatán (mayo de 2013) y Distrito Federal en México (enero de 2013). Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigará con multa o cárcel cualquier acto sexual con un animal (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con animales» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohíbe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal lo prohíbe; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N° 2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3 a del Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales.»*

Según afirma MANZANARES SAMANIEGO, este supuesto no parece responder al principio de intervención mínima del Derecho penal, la “tipificación de la explotación sexual del animal como manifestación o consecuencia de un maltrato injusto estaría muy lejos de una enmienda cuyas citas de Derecho comparado, se centran en un acto zoofílico sexual, que tendría relevancia propia al margen de dicho maltrato”. Los actos sexuales están condicionados por un maltrato injusto y además deben incluirse en una explotación, lo que hace que esta parte del artículo sea confusa.⁷⁷

De acuerdo con CUERDA ARNAU, “se estima que el maltrato es presupuesto de todas las conductas, solo se consideran típicos los casos de zoofilia que pudieran ser calificados previamente como un maltrato, es decir, que supusieran un sufrimiento para el animal sometido a dichas prácticas”. Continúa la autora, afirmando que sobre el carácter público o privado de esta conducta típica, se plantea la duda del término explotación, dando paso a interpretaciones que entienden que se sancionan las prácticas que son objeto de explotación comercial, caso de grabaciones y en espectáculos y no las prácticas privadas, no siendo esta interpretación obligada, debido a que el término explotación sirve para referirse también al propio provecho.⁷⁸

En relación con los anteriores supuestos de conducta, el precepto del 337.1 del CP establece una pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. El apartado segundo del mismo precepto incluye un tipo agravado cuando: se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal; hubiera mediado ensañamiento; se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; por último cuando los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Por lo que las penas previstas en el apartado primero del precepto se impondrán en su mitad superior, siempre que concurren las exigencias del tipo básico.

⁷⁷ MANZANARES SAMANIEGO, J.L. “La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo”. Edit. La Ley, Madrid, 2015. Pág.287.

⁷⁸ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L.; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág.1078.

El apartado tercero de este precepto penal, establece que, si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Se entenderá que la muerte del animal es el resultado del maltrato ejercido al mismo. Como afirma CUERDA ARNAU, para este tipo cualificado, no será necesario “exigir que la muerte del animal le cause a éste un sufrimiento manifiestamente innecesario, ni tampoco que sea la consecuencia de la extremada brutalidad de la acción”. Basta con que sea el resultado de un maltrato injustificado. Es necesario acreditar el nexo causal entre la conducta, es decir, el maltrato al animal y el resultado de muerte del mismo.⁷⁹

El cuarto apartado del artículo 337 del CP, de carácter residual, establece que quienes maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. El juez, también podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Este apartado recoge la falta del antiguo artículo 632.2 del CP, que ha quedado derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

4.2.5. Delito de resultado

El delito recogido por el artículo 337 del CP, se configura como un delito de resultado material, la propia muerte o lesión grave del animal, siendo por tanto indiferente la actividad que se lleve a cabo, siempre que maltrate injustificadamente o se someta a explotación sexual, y que derivadas de dichas conductas se produzcan los resultados recogidos por el tipo.

De acuerdo con la SAP de Cádiz de 11 de junio de 2003, el buen trato es aquél que respeta la vida e integridad física del animal, y por derivación el maltrato cuando ponga en peligro la vida del animal o produzca detrimento de su integridad física.

⁷⁹ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L.; MATAILLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág.1081; SAP de Madrid 53/2010, de 17 de febrero.

4.2.6. Tipo subjetivo

Existe dolo desde el momento que el propio sujeto de la acción típica es consciente de que está sometiendo al animal con su conducta a un trato injustificado e innecesario que le produce un sufrimiento.⁸⁰

Se descarta la posibilidad de que se produzca error de prohibición, en los que por ejemplo el propio dueño del animal crea su título de propiedad sobre el mismo le permite maltratar al animal.

4.2.7. Antijuricidad

Quedan fuera del ámbito de protección de dicho precepto los comportamientos que se incluirían dentro del tipo penal, como es el maltrato injustificado, pero que por las normas administrativas quedan permitidos, es el caso de la experimentación científica. El propio contenido del injusto viene constituido por la lesión al bienestar animal, que se causa al producirle un sufrimiento injustificado. Será necesario constatar el nexo causal entre la conducta típica y la producción del resultado material prevista en el tipo, esto es lesiones o la propia muerte del animal, siendo necesario a su vez para que tenga relevancia penal que se demuestre que el resultado se produjo causando sufrimientos innecesarios.⁸¹

4.2.8. Concurso de normas

En relación con el bien jurídico protegido por el artículo 337 del CP, puede darse un concurso ideal con el delito de daños, siempre y cuando el sujeto activo de la conducta no sea el propietario del animal. Autores como FARALDO, opinan que el concurso de normas se resolverá por el principio de alternatividad. Cuando el maltrato

⁸⁰ Cfr. SAP de Madrid 287/2004 de 19 de abril: Considera la acción como un delito de daños debido a que *“su finalidad desde darle muerte para que no le moleste, no quiere causarle un sufrimiento sino eliminar un problema para él”*. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATAILLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op.Cit.. Pág. 1082.

⁸¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.136 y 137.

se produzca a varios animales, de acuerdo con CUERDA ARNAU, será posible la solución del concurso real que ofrece FARALDO.⁸²

4.3. Abandono de animales domésticos. (Art.337.bis del CP)

La nueva reforma del Código Penal no aprecia razones suficientes para justificar el mantenimiento de las faltas previstas en el artículo 630 y el apartado 1 del artículo 631, pudiendo acudir a la sanción administrativa, o a otros delitos si finalmente se causan daños. En cambio, mantiene como infracción penal el abandono de animales domésticos que castiga el apartado 2 del artículo 631, que pasa a constituir un tipo atenuado del maltrato de animales del artículo 337 bis del Código Penal.⁸³ Queda con la siguiente redacción:

Artículo 337 bis: *“El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.”*

4.3.1. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido por el artículo 337 bis, es al igual que en el propio artículo 337 del CP, el bienestar del animal, en este caso el doméstico o amansado, los que habitualmente están domesticados, o que temporal o permanentemente vive bajo control humano, así como el de cualquier animal que no viva en estado salvaje.⁸⁴

4.3.2. Sujetos de la actuación

⁸² CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATALLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág.1082; FARALDO CABANA, P. “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial”. Op. Cit. Pág.83 y ss.

⁸³ Vid. Preámbulo de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

⁸⁴ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.140

El Código penal no exige para castigar la acción del artículo 337 bis que el animal abandonado sea propiedad del sujeto activo de la conducta, bastando, por tanto, para poder ser considerado autor de la falta, con ser poseedor del animal abandonado. La adquisición de la posesión del animal constituye al poseedor en garante de la vida y de la integridad del animal poseído, de suerte que si después de poseído el animal se abandona, en condiciones en las que peligre su vida o su integridad, se incurre en la infracción de dicho precepto.⁸⁵

4.3.3. Objeto material

El objeto material aquí, a diferencia del delito recogido en el artículo 337, puede ser cualquier animal, doméstico o amansado, de los que habitualmente están domesticados, o que temporal o permanentemente vive bajo control humano, así como cualquier animal que no viva en estado salvaje.

4.3.4. Conducta típica

Consiste en el abandono de los animales anteriormente mencionados en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad. De acuerdo con la RAE, se entiende por abandono “desamparar a alguien o algo” esto es “dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o necesita”. El abandono se puede producir tanto porque se deje al animal o porque se le coloque en situación de desamparo, tanto por la acción directa de expulsarle como por la omisiva de no acogerle cuando se sabe dónde se encuentra, bastando con que la conducta cause desamparo del animal en este caso; puesto que la obligación moral y legal de todo propietario de un animal es cuidar del mismo, y darle la asistencia precisa para permitir su vida e integridad. Este tipo penal exige por tanto la concurrencia de dos elementos, por una parte el abandono y por otro la puesta en peligro de su vida o integridad por las conducciones del abandono.⁸⁶

⁸⁵ Vid Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete, sentencia núm. 235/2007 de 3 mayo

⁸⁶ Vid AP Segovia (Sección 1ª), sentencia núm. 23/2007 de 5 marzo, añade dicha sentencia que: “*Por otra parte y en cuanto a su definición jurídica, si bien en el ámbito de faltas y dada su reciente tipificación no se encuentra una definición jurisprudencial, sí existen y existían en Códigos anteriores figuras típicas de abandono, como era el abandono de familia o de menores. Salvando las diferencias entre personas y animales, ya contempladas en su distinta gravedad y penalidad, la acción de abandonar sería la misma. Y en cuanto al abandono de menores la doctrina ha sido reiterada en considerar que la conducta típica «consiste en la realización de una conducta, activa u omisiva, provocadora de una situación de desamparo para el menor por el incumplimiento de los deberes de protección establecidos*

Sera constitutiva de delito la conducta típica, cuando se dé un riesgo para la vida o integridad del animal, sin que se determine cuál es el grado de afectación. Por ello en opinión de CUERDA ARNAU, parece más justificado reservar el delito para los casos en que el abandono representa un riesgo grave para la salud o integridad del animal afectado, aunque finalmente no se produzcan, ya que se está ante un tipo de simple actividad. Pudiendo ser la conducta tanto activa o por omisión de los deberes de cuidado del animal.⁸⁷

La conducta recogida en el artículo 337 bis del CP será castigada con una pena de multa de uno a seis meses, asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

4.3.5. Delito de mera actividad y de peligro abstracto

De acuerdo con las modalidades de la acción, este delito es de la de mera actividad, y de peligro abstracto, para cuya consumación no se requiere que el animal abandonado fallezca, o quede afectada su integridad, sino que basta con que el mismo se abandone en condiciones que pueda peligrar su vida o su integridad.⁸⁸

Según la relación con el bien jurídico y la proximidad de la amenaza, la conducta recogida en el artículo 337 bis, se configura como un delito de peligro abstracto para el bien jurídico protegido, que se realiza mediante el abandono de los animales recogidos en artículo 337, en condiciones en que pueda peligrar su vida o su

en la normativa aplicable» (STS 4 de octubre de 2001 [RJ 2001, 8527]). Y esta misma resolución describe también el concepto de desamparo, como concepto normativo del tipo penal, considerando que se refiere a los supuestos en que el niño quede privado de la necesaria asistencia moral o material que incida en su supervivencia o desarrollo”.

⁸⁷ Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág. 1083.

⁸⁸ Vid Sentencia del Juzgado de Instrucción n° 2 de Albacete, sentencia núm. 235/2007 de 3 mayo (Fundamento de Derecho segundo)

integridad. No basta con el simple abandono si por las circunstancias de lugar o modo puede descartarse la creación de dicho riesgo o peligro.⁸⁹

4.3.6. Tipo subjetivo

La conducta recogida en este precepto es dolosa, desde el momento que la situación en la que se abandona al animal reviste una idoneidad para poner en peligro su vida o integridad. El desconocimiento o error de tipo, determinará la atipicidad de las mismas, al no estar prevista la imprudencia.⁹⁰

4.3.7. Antijuricidad

La exigencia de peligro abstracto o hipotético permitirá delimitar este delito respecto de las conductas previstas como infracción administrativa.⁹¹

4.3.8. Concurso de normas

Las conductas omisivas de este delito permiten aplicar el delito de maltrato de animales recogido en el artículo 337.3 del CP, debido a que el riesgo se concreta en lesiones o muerte tras un continuado sufrimiento del animal, que a su vez también podría considerarse maltrato, aplicándose por tanto el artículo 337 del CP.⁹²

2.4. Delito de contrabando de fauna silvestre.

⁸⁹ Cfr. GARCÍA ALBERO, R. “Faltas contra los intereses generales”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir) y MORALES PRATS, F. (coord.) “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”.Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005. Pág.2216

⁹⁰ Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág. 50

⁹¹ En este sentido la Ley la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el Cuidado de los Animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio: art. 14.1.j: considera infracción muy grave “*la liberación incontrolada y voluntaria de animales de una explotación*”; art. 14.3.c: *infracción leve “el abandonar a un animal, con el resultado de la ausencia de control sobre el mismo o su efectiva posesión”*; el art.38.1.b) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía, que considera infracción muy grave el abandono de animales.

⁹² Cfr. CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág. 1083

El tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, viene recogido en el artículo 2.2 b) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando:

2. *“Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: ...

*Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.”*⁹³

Este artículo fue redactado por el apartado dos del artículo primero de la L.O. 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. Recoge de forma expresa la protección frente al comercio ilegal o la protección del medio ambiente. Actualiza la cuantificación que delimita los actos ilícitos penales y administrativos en materia CITES.⁹⁴

Este artículo se configura como una norma penal en blanco, el Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, junto al Convenio de Washington, integran el tipo y determinan los requisitos que se deben cumplir en la realización de operaciones comerciales de una manera lícita.⁹⁵

⁹³ Contenido de los Apéndices del Convenio de Washington (CITES) y Anexos del Reglamento (CE) nº 338/97: APÉNDICE I ó ANEXO A: Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Están sujetas a una reglamentación particularmente estricta; APÉNDICE II ó ANEXO B: Incluye aquellas especies que, si bien no están necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo a menos que el comercio de las mismas esté sujeto a una reglamentación estricta. Incluye igualmente otras especies no afectadas por el comercio pero que deben estar sometidas a un control eficaz; APÉNDICE III ó ANEXO C: Incluye aquellas especies que cualquiera de los Estados Partes del Convenio o Estados miembros de la Unión Europea, manifiesten que se hallan sometidas a reglamentación dentro de sus respectivas jurisdicciones; ANEXO D del Reglamento (CE) nº 338/97: Incluye aquellas especies no incluidas en el Apéndice III del Convenio y en los Anexos A y C de dicho Reglamento, con respecto a las cuales el volumen de importaciones comunitarias justifique una vigilancia o un Estado Parte o Estado miembro presente una reserva; Los Apéndices del CITES se modifican habitualmente de acuerdo a los niveles de protección de las especies que contienen, siendo necesario su consulta en la página web oficial www.cites.es.

⁹⁴ <www.cites.es/es-es/legislacion/paginas/legislaciones-sancionadora.aspx>

En relación a la tipificación de las infracciones administrativas, señala el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de represión del contrabando, que, *“Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 150.000 o 50.000 euros, respectivamente, o a 15.000 euros si se trata de labores de tabaco, y no concurran las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de dicho artículo”*.

Por tanto cometerán delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros. Así como quien, en ejecución de un plan preconcebido realizare una pluralidad de acciones u omisiones en las cuales el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance el límite cuantitativo de 50.000 euros, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dicho importe.

De los delitos de contrabando conoce la jurisdicción ordinaria, no existiendo en la actualidad jurisdicción especializada.

El artículo 11.2 de dicha Ley clasifica a las infracciones administrativas de contrabando en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías en el ámbito CITES.⁹⁶

⁹⁵ Requisitos recogidos en los Art.3 y siguientes del CITES y art.4 y siguientes del Reglamento (CE) nº 338/1997; Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 55; MATA LIN, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013. Pág. 44 y 45.

⁹⁶ Dispone el Artículo 11.2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando: *“Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes: Leves: inferior a 37.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, inferior a 1.000 euros. Graves: desde 37.500 euros a 112.500 euros; si se trata de labores de tabaco, desde 1.000 euros a 7.200 euros o, si se trata de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, desde 1.000 euros a 12.000 euros. Muy graves: superior a 112.500 euros; si se trata de labores de tabaco, superior a 7.200 euros o, si se trata de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, superior a 12.000 euros”*; Artículo 12: *“Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionados con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación: a) Leves: el 100 y el 150 %, ambos*

La actuación de los Servicios de Vigilancia Aduanera de la Agencia tributaria, consiste en requerir a los importadores o exportadores la presentación de los correspondientes permisos, notificaciones o certificados que acompañen a los especímenes desde el lugar de procedencia y los expedidos por la Secretaría General de Comercio Exterior justificativos de su importación, exportación, reexportación o introducción.⁹⁷ Compete igualmente a las Aduanas, instruir y resolver los expedientes

incluidos. b) Graves: el 150 y el 250 %. c) Muy graves: el 250 y el 350 %, ambos incluidos. El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 500 euros. 2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo: a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías. Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación: 1.º) Leves: el 200 y el 225 %, ambos incluidos. 2.º) Graves: el 225 y el 275 %. 3.º) Muy graves: el 275 y el 350 %, ambos incluidos. El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 1.000 euros. b) Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo. Para cada clase de infracción el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente: 1.º) Leves: cuatro días y tres meses. 2.º) Graves: tres meses y un día, y nueve meses. 3.º) Muy graves: nueve meses y un día, y doce meses”; Artículo 12 bis: “Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios: a) La reiteración. Se apreciará reiteración cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por cualquier infracción administrativa de contrabando en resolución administrativa firme o condenado por delito de contrabando por sentencia judicial firme, en ambos casos, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción. b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones. c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. Se considerarán principalmente medios fraudulentos a estos efectos los siguientes: 1.º La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad. 2.º El empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados. 3.º La utilización de medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando. 4.º La declaración incorrecta de la clasificación arancelaria o, en el caso de operaciones de importación, de cualquier elemento determinante de la deuda aduanera en la declaración en aduanas que eluda el control informático de la misma. d) La comisión de la infracción por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión de la infracción. e) La utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación de formalidades y procedimientos de despacho aduanero. f) La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando. 2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio establecido en la letra f) del apartado anterior operará como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción, aplicable cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa, otro material o de productos y tecnologías de doble uso a los que se refiere el capítulo II de la Ley 53/2007; ni se trate de productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ni de agentes o toxinas biológicos o de sustancias químicas tóxicas; ni de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español; ni de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento Comunitario correspondiente; ni de labores de tabaco o de mercancías sujetas a medidas de política comercial. 3. Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación”.

⁹⁷ Aduanas españolas habilitadas para el despacho de especímenes CITES: Alicante (Aeropuerto, Marítima y Terrestre); Barcelona (Aeropuerto, Marítima y Terrestre); Bilbao (Aeropuerto y Marítima); Madrid (Aeropuerto y Terrestre); Gran Canaria (Aeropuerto y Marítima); Palma de Mallorca (Aeropuerto y Marítima); Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto y Marítima); Sevilla (Aeropuerto, Marítima y Terrestre)

por infracción administrativa de contrabando conforme a la Normativa Sancionadora indicada anteriormente, cuando se realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de la fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio CITES y en el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.⁹⁸

2.2.1. Bien jurídico protegido.

En este delito el bien jurídico protegido puede considerarse dual, debido a que la tipificación de la acción típica no solo busca proteger el interés económico, derivado de los aranceles o tributos, sino que de forma inmediata el bien jurídico protegido es la biodiversidad de la fauna que se pone en peligro cuando se realiza la acción típica, es decir, “operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia y circulación” de alguna especie recogida en el Convenio de Washington o en el Reglamento CE 338/1997 del Consejo.⁹⁹

Otra parte de la doctrina entiende que en la figura del contrabando se identifican distintos bienes jurídicos, asociados a un interés Estatal, basado en el Erario/Hacienda Pública en sentido amplio.¹⁰⁰

2.2.2. Sujetos de la acción.

Valencia (Aeropuerto, Marítima y Terrestre); Málaga (Aeropuerto, Marítima y Terrestre); Algeciras (Marítima y Terrestre); La Coruña (Aeropuerto, Marítima y Terrestre); El Ferrol (Aeropuerto); Santiago de Compostela (Aeropuerto).

⁹⁸ <http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Convenio_Internacional_de_especies_amenazadas_de_fauna_y_flora_silvestres/Convenio_Internacional_de_especies_amenazadas_de_fauna_y_flora_silvestres.shtml>

⁹⁹ De ésta opinión es MALLIN, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Op. Cit. Pag.31.

¹⁰⁰ Vid. MUÑOZ MERINO. A. “El delito de contrabando”. Edit. Aranzadi, Madrid, 1992. Pag.123; BAJO FERNANDEZ, M. “Importación o exportación de géneros de ilícito comercio”, en COBO DEL ROSAL, M. “Delitos e infracciones de Contrabando, Comentarios a la Legislación Penal”. Edit. Edersa, 1984, Tomo III; AGULLÓ AGÜERO, A. “Ne bis in idem, contrabando y tráfico de drogas”, en BOIX REIG; RODRIGUEZ MARÍN (coord.); VIVES ANTÓN “Problemática Jurídica y Psicosocial de las drogas (Estudio psicosocial de la ciudad de Alicante)” Valencia, 1987, pag.54 y ss; AGULLÓ AGÜERO, A. “La responsabilidad civil derivada del delito”. En delitos e infracciones de Contrabando, Comentarios a la legislación penal, dirigido por Cobo del Rosal Edit. Edersa, 1984, Tomo III, pag.393.

Será sujeto activo del delito cualquier persona que realice la acción del tipo, por tanto se desprende de la propia redacción del artículo que es un tipo común.

2.2.3. Objeto material.

En este delito de contrabando en la modalidad de fauna y flora silvestre, se aprecia de acuerdo con MATALLÍN EVANGELIO, “el interés recaudatorio y de control del Estado como objeto de tutela en todos los supuestos típicos, pues la conducta se articula sobre el incumplimiento de los requisitos legales asociados al comercio o tenencia de su objeto, algunos de carácter recaudatorio y otros vinculados a finalidades de control”. Añade esta autora que, además también está presente como objeto de tutela el interés medioambiental, debido a que tanto en los Apéndices del CITES como en los anexos del Reglamento 338/1997 se refiere a especies necesarias para el mantenimiento del equilibrio de los sistemas naturales, sobre los que se produce algún peligro por su comercio o explotación sin control.¹⁰¹

2.2.4. Conducta típica.

De acuerdo con el artículo 2.2 b) de la L.O de represión de contrabando, la conducta típica consistirá en realizar operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna silvestre así como sus partes y productos, siempre y cuando no se cumplan los requisitos legalmente establecidos y dichas especies estén incluidas tanto en el CITES como en el Reglamento (CE) n° 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996.¹⁰²

¹⁰¹ Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Ob. Cit. Pág. 29 y 30.

¹⁰² Recoge el Artículo 1.6 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando: “Importación: la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas”; Artículo 1.8: “Exportación: la salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero. Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso”.

La conducta recogida sanciona no solo la entrada o salida ilegal del territorio, también sanciona las operaciones de comercio, ya sean a nivel internacional a través de la importación o exportación con ánimo de lucro, como a nivel nacional. Asimismo este precepto recoge la tenencia como conducta típica que consiste en poseerlos cuando haya indicios de que han sido introducidos ilegalmente.¹⁰³ En relación a la circulación de especímenes de fauna, sus partes o productos recogidas, en el CITES, se entiende como el movimiento de los géneros, lo que incluiría las operaciones no mercantiles que impliquen donación, entrega, mediación o cualquier otro tipo de actuación que suponga un cambio de lugar o de titularidad de los especímenes, siempre que tales actividades se realicen con infracción de la normativa que la regula.¹⁰⁴

Como afirma HAVA GARCÍA, se cometerá dicho delito cuando sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos y conociendo su origen ilícito, se introdujera o tuviera en su poder especímenes, partes o productos de una especie CITES; se trataría por tanto “de romper la cadena de este comercio ilegal incidiendo sobre todos sus eslabones (vendedor, intermediarios, poseedor final)”.¹⁰⁵

Se produce otra modalidad delictiva, con independencia del valor de los especímenes cuando la conducta típica es realizada a través de una organización. Se incluye también la figura del delito continuado de contrabando de flora y fauna.¹⁰⁶

El artículo 3.1 de la L.O. de represión del contrabando, establece penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos para el sujeto activo que cometiera el delito de contrabando. Dicha pena se impondrá en su mitad superior cuando el objeto material fuese el previsto en el artículo 2.2 d) de la referida ley. De igual forma se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito fuese cometido por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse

¹⁰³ Cfr. MUÑOZ MERINO, A. “El delito de contrabando”. Op. Cit. Pág. 288.

¹⁰⁴ Cfr. HIGUERA GIMERÁ, J.F. “El tráfico ilegal de especies protegidas de fauna silvestre”. Cuadernos de Política Criminal, 53, 1994, págs., 541 y 542.

¹⁰⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España”. Op. Cit. Pág. 357

¹⁰⁶ Cfr. MATA LLÍN, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Op. Cit. Pág. 17 y 18.

una facilidad especial para la comisión del mismo. En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los bienes, géneros o mercancías que hayan sido instrumento de dicho delito, también se procederá al comiso de las ganancias obtenidas por el tráfico ilegal de los especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos.¹⁰⁷

2.2.5. Delito de mera actividad.

En relación con la conducta típica relativa a la importación y exportación ilegal, la doctrina del Tribunal Supremo establece, que “es necesario que los objetos correspondientes hayan pasado ya el control aduanero y el sujeto del hecho haya tenido una cierta capacidad de disposición de tales objetos dentro ya del territorio español así delimitado”, esta línea doctrinal continúa indicando que son “posibles las formas imperfectas de ejecución cuando se han iniciado las actividades inmediatamente

¹⁰⁷ Dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando: “Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos: a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito. b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos. c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando. d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito. 2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito. 3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe. 4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. 5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. 6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo”.

dirigidas al paso de la frontera en la forma expuesta y, sin embargo, no se ha producido la introducción en el territorio español”.¹⁰⁸

2.2.6. Tentativa.

En relación a la acción típica recogida en dicho precepto en relación a la tenencia y circulación de los especímenes partes o productos recogidos en el Convenio CITES, como señala HAVA GARCÍA, constituyen delitos de mera actividad, “dado que la redacción típica no exige la producción de ningún resultado material físico-temporalmente separable de la acción, por lo que en estos supuestos no podrá apreciarse la comisión en grado de tentativa”. Continúa dicha autora afirmando que es posible en relación con el comercio, que en un plano teórico esta conducta delictiva pueda cometerse en grado de tentativa, “aunque la mayoría de estos supuestos se castigarían en realidad como delitos consumados, al estar también tipificadas la tenencia y la circulación; no obstante quizá puedan entenderse como casos de ejecución imperfecta los tratos previos a la venta, cuando el vendedor aún no está en posesión del ejemplar objeto de transacción”.¹⁰⁹

2.2.7. Tipo subjetivo.

En los tipos delictivos recogidos en el artículo 2.2 b) de la L.O. de represión del contrabando, se da la existencia de dolo directo, debido a que quien trafique con estos especímenes, sus partes o productos, de una forma habitual, es consciente de su ilegalidad y de su perjuicio a la fauna silvestre. A su vez, podrá existir dolo eventual dependiendo de las circunstancias que rodeen al hecho, por lo que se deberá probar el conocimiento por parte del sujeto activo de que dicha especie está incluida en el Convenio CITES. Esta prueba del conocimiento por parte del sujeto activo, en la práctica es de escasa aplicabilidad, como apuntan GARCÍA ÁLVAREZ Y LÓPEZ PEREGRÍN, ello se debe en gran parte a que, por regla general, la mayoría de los ciudadanos desconoce si una especie está o no amenazada, ya que en los catálogos de especies amenazadas, que en ningún caso están pensados para servir de complemento al

¹⁰⁸ Vid. STS de 27 de febrero de 2006; así como en los Acuerdos en plenos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1996 y 9 de abril de 1997;

¹⁰⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 60 y 61.

Código penal, lo que suele aparecer es, únicamente, el nombre científico de la especie en cuestión.¹¹⁰ Al no estar prevista su comisión por imprudencia en atención al principio de legalidad, el error de tipo, aunque sea vencible, determinará la atipicidad de la conducta.¹¹¹

2.2.8. Antijuricidad.

Este artículo de la Ley Orgánica de represión del contrabando, busca acabar con el tráfico ilegal de especies recogidas en el CITES y que se encuentran gravemente amenazadas, dando así una protección a la biodiversidad a nivel global, por considerar como delito dichas conductas ilegales, otorgando unas penas superiores a las recogidas en el artículo 334 del Código Penal, que solo busca proteger la biodiversidad autóctona. De esta forma, la tutela penal de la biodiversidad autóctona se ve reforzada por la Ley Orgánica de represión del contrabando debido a que las especies autóctonas amenazadas están recogidas en los apéndices del CITES.¹¹²

2.2.9. Concurso.

La conducta típica recogida por el artículo 2.2 b) de la L.O. de represión del contrabando, relativa al tráfico ilegal plantea el problema de su relación concursal con el delito previsto en el artículo 334 del CP, resolviéndose dicho conflicto como un concurso de leyes, debido a que ambos protegen a la fauna silvestre del tráfico ilegal. Por tanto, si la conducta fuera subsumible tanto en el art. 334 CP como en el art. 2º.2 de la Ley de Contrabando, según MUÑOZ CONDE, habrían de resolverse acudiendo al concurso de leyes, se aplicará el precepto que en el caso concreto resulte más grave, de

¹¹⁰ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”.Op. Cit. Pág. 11:12.

¹¹¹ Vid. Art.14.1 del Código penal: “*El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.*” En relación con el art.12 del Código Penal: “*Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.*”

¹¹² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.56 y 57

acuerdo con el artículo 8.4 del CP, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.¹¹³

Otra opinión doctrinal propone que el concurso de leyes que se produce entre estos dos preceptos se resuelva con arreglo al criterio de especialidad, de esta opinión es SÁNCHEZ GASCÓN y BAUCCELLS LLADÓS. Por su parte, CARDONA TORRES, entiende que debería aplicarse el artículo 2.2.b) de la Ley de Contrabando tanto por especialidad como por gravedad. Otra línea doctrinal apunta que la existencia de un concurso de leyes, no aclaran el criterio a aplicar para resolverlo, es la línea seguida por HAVA GARCÍA.¹¹⁴

3. DELITOS PROPIAMENTE CINEGÉTICOS

Se derogan los preceptos penales sustantivos del Título VIII de la Ley de Caza de 1970, por la disposición derogatoria única.1.e) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que establece que los delitos y faltas previstos en esta Ley, no contenidos en el Código, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves.¹¹⁵

Los delitos tipificados en los artículos 334 y 335 en materia de caza y relativos a especies protegidas del Código Penal, han sido modificados por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código, a

¹¹³ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”.Op. Cit. Pág.11-12; MUÑOZ CONDE, “Derecho penal, Parte especial”, Op. Cit. Pág.555.

¹¹⁴ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág. 48 y 49; BAUCCELLS LLADÓS, Título XVI, Capítulo IV, De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, en CÓRDOBA RODA, J.; GARCÍA ARÁN, M. (Dir.), “Comentarios al Código penal. Parte especial”, Tomo I. Edit. Marcial Pons, Barcelona, 2004. Pág. 1439; CARDONA TORRES, J. “Derecho penal. Parte especial”. Adaptado a la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio. Edit. Bosch, Barcelona, 2010. Pág.400; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 62

¹¹⁵ Vid. integrado por un único artículo, el 41, que disponía que “*El incumplimiento de las prescripciones de esta Ley podrá ser constitutivo de delito, falta o infracción administrativa cuando así estuviere calificado en la misma*”. Su Capítulo Primero contenía los delitos (Art. 42) y las faltas de caza (Art. 43), estableciendo la aplicación supletoria del Código Penal común (Art. 44), y residenciando la competencia para su enjuiciamiento en los órganos jurisdiccionales de carácter penal (Art. 45).

excepción del art.336 que continua con su redacción anterior. Son tipos penales en blanco que deben integrarse con la respectiva normativa administrativa, para poder ser aplicados se exige la concurrencia de un plus de gravedad en atención al bien jurídico protegido, frente al que supone la mera infracción administrativa.

A su vez, son tipos penales dolosos, no se contempla la comisión por imprudencia, para que la caza de especies protegidas constituya delito y no infracción administrativa, se deberá atender al bien jurídico protegido y al dolo del autor.¹¹⁶

3.1. Caza, adquisición, posesión, destrucción o tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. (Art.334 del CP)

El artículo 334 ha sido modificado y se le ha dado una nueva redacción, por el número ciento setenta y nueve del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, quedando de la siguiente manera:

"1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

- a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;*
- b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,*
- c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.*

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

¹¹⁶ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C. MANZANA LAGUARDA, R. "Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza". Op. Cit. Pág.63 y ss.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.”

Cumpliendo de esta manera el compromiso de transposición de la Directiva 2008/99/CEE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, que recoge en su artículo 3 f) que, los Estados miembros se asegurarán de que la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie, sea constitutiva de delito, cuando sea ilícita y se cometa dolosamente o, al menos, por imprudencia grave.

3.1.1. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido por el artículo 334 del CP, es la biodiversidad de la fauna, la cual se pone en peligro cuando se realiza una conducta que comprometa la perpetuación de alguna especie.¹¹⁷

3.1.2 Sujetos de la actuación

La acción de cazar, poseer o destruir, al poder ser realizada por cualquier persona, hace que el delito pueda ser cometido por cualquiera, por tanto, se está ante un tipo común, por lo que, el sujeto activo del delito será todo aquel que realice la acción del tipo.¹¹⁸

¹¹⁷ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, M; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C; BENITEZ ORTÚZAR, I. F; GÓMEZ TOMILLO, M; JAVATO MARTÍN, AM; MUÑOZ LORENTE, J; OLMEDO CARDENETE, M; FERNÁNDEZ, I; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I y SUAREZ LÓPEZ, J. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Edit. CESEJ. Madrid. 2006. Pag.353.

¹¹⁸ Cfr. VAZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Edit. Andavira, Madrid, 2014, pág.202.

3.1.3. Objeto material

Con la nueva redacción del artículo 334 del CP, será cualquier ejemplar de especie protegida de fauna silvestre o sus partes o derivados de las mismas. Sustituyéndose así la anterior redacción que hacía referencia a especies amenazadas.

De igual manera, en relación con las especies protegidas de fauna, con la nueva modificación se sustituye la expresión de “sus restos” por la expresión, “sus partes o derivados de los mismos”. Evitando así, los problemas derivados de la tipicidad en algunos supuestos donde la consideración de restos de especies no resultaba precisa.¹¹⁹

Esta nueva terminología adoptada por el artículo 334 del CP, cumple con la transposición y la redacción recogida en la Directiva 2008/99/CEE en su artículo 3 f) y g). A su vez, se crea una concordancia con la terminología utilizada en el artículo 332 del CP también modificado.¹²⁰

3.1.4. Conducta típica

El artículo 334 CP recoge cuatro supuestos relativos a la caza:

1º. Cazar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de fauna silvestre:

Cumpliendo con la Directiva 2008/99, con la nueva reforma del Código Penal, se tipifican nuevas modalidades de conducta, como son, la adquisición, posesión y

¹¹⁹ Cfr. MATALLÍN EVANGELIO, A. “Protección penal de la biodiversidad (art.332,334 y335 CP)” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L; MATALLÍN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015. Pág. 1064.

¹²⁰ Vid. art.3.f) de la Directiva 2008/99/CEE: “*la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie*”; art.3.g) de la de la Directiva 2008/99/CEE: “*el comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres o de partes o derivados de los mismos, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie*”. Art.332.1 del Código Penal: “*El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años*”.

destrucción de especies de fauna protegida. Esta tipificación se aplicará en los supuestos más graves, ya que por la situación de peligro o extinción en la que se encuentran las especies protegidas, los ataques a las mismas producen un gran daño en la biodiversidad. MATA LLIN EVANGELIO, sostiene que esta modificación del artículo 334 del Código Penal, debería haberse aprovechado para concretar la tipicidad, añadiendo como garantía de ofensividad la exigencia de un resultado de perjuicio biológico.¹²¹

Se recoge como conducta típica, la acción de cazar, definida por el artículo 2 de la Ley de caza estatal, como la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero. Quedan a su vez dentro de la conducta, además de la acción cazar, todas aquellas acciones que impliquen adquirir, poseer y destruir especies protegidas de fauna silvestre. Quedan fuera todas aquellas acciones que no estén dirigidas directamente a la captura de animales. No será necesario capturar al animal, simplemente bastará con perseguirlo y acosarlo con la intención de atraparlo.¹²²

A su vez, la acción de cazar no conlleva necesariamente la muerte directa del animal, ya que también se entiende que un animal es cazado cuando se le ha herido tras el acecho o se ha cobrado con vida.¹²³

2ª. Traficar con ellas, sus partes o derivados de las mismas:

La anterior redacción del artículo 334 del código penal recogía la terminología “comercio” y “tráfico” de las especies amenazadas y sus restos, considerada por la

¹²¹ Cfr. MATA LLIN EVANGELIO, A. “Protección penal de la biodiversidad (art.332,334 y335 CP)” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Op. Cit. Pág.1064.

¹²² Defienden esta teoría, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. “Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia”. Tomo II. Edit. Trivium. Madrid. 1997. Pág. 3289.

¹²³ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pag.354.

doctrina mayoritaria como innecesaria y redundante, concluyendo que ambos términos son sinónimos y que quedarían cubiertas ambas conductas con el término “tráfico”.¹²⁴

Es por ello, que con la nueva redacción del artículo 334 del CP, queda eliminado el término “comercio” quedando únicamente como conducta de este segundo supuesto “traficar”. Se elimina así, la redundancia apuntada por la doctrina en relación a la terminología anterior.

Al sancionar también el tráfico de dichas especies, de sus partes o derivados, de acuerdo con SÁNCHEZ GASCÓN, se impide que las especies protegidas extraídas de su medio natural puedan mantenerse fuera de él, cubriendo así todo el camino que va desde la captura, hasta su destino final.¹²⁵

De esta conducta se deduce, en opinión de HAVA GARCÍA, que los intercambios realizados sin contraprestación directa o indirecta valuable en términos económicos, como son las donaciones o los regalos, no podrían ser subsumidos en el concepto de tráfico.¹²⁶

Dentro de esta conducta, el tipo no exige el ánimo de lucro, por lo que este artículo no pretende sancionar el enriquecimiento ilícito, sino, proteger a las especies protegidas.¹²⁷

¹²⁴ Esta opinión es defendida por, SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág. 93; COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.356; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit.Pág.34; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. “Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia”. Op.Cit. Pág. 3286.

¹²⁵ Opinión del autor a la anterior redacción del artículo 334 del Código Penal. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág. 93.

¹²⁶ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, Pág.35

¹²⁷ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág. 93; COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.356.

La jurisprudencia indicó que el artículo 334 del CP, sancionaba el tráfico de restos de animales, incluyendo el supuesto que se probase que dicho animal había muerto por causas naturales.¹²⁸

3ª. Impedir o dificultar la reproducción o migración de especies protegidas

El artículo 334 del CP recoge términos que pueden generar dudas en relación a lo penalmente relevante, para evitarlo, según HAVA GARCÍA debe imponerse una interpretación, que de acuerdo con el principio de lesividad, “limite el ámbito típico a las conductas que resulten idóneas para afectar al bien jurídico”.¹²⁹

Los posibles actos que pueden impedir o dificultar la reproducción, son variados. Estos actos ilícitos se encuentran prohibidos y recogidos, tanto en la legislación administrativa estatal, en la Ley 42/2007, así como en las respectivas legislaciones autonómicas.¹³⁰

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, afirma que, en atención al principio de insignificancia deben excluir de la tipicidad todas las conductas que no tengan capacidad suficiente para no comprometer seriamente la biodiversidad. A su vez, equiparar como conductas típicas las expresiones “dificultar” e “impedir”, afecta al principio de proporcionalidad, ya que son acciones con distinta gravedad.¹³¹

En opinión de SÁNCHEZ GASCÓN, este delito podría considerarse “de temporada” ya que solo puede cometerse en las épocas de reproducción o migración, importancia en la imputación de la comisión de un delito en fecha en la que no corresponde la reproducción o la migración de ciertas especies.¹³²

¹²⁸ Vid. SAP de Toledo de 10 de febrero de 1999.

¹²⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.34

¹³⁰ Vid.art.76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹³¹ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pag.355 y 356.

4ª. Destrucción o alteración grave de su hábitat.

Esta conducta se incluye con la nueva redacción del artículo 334 del CP, estableciendo que se impondrá la misma pena que en los supuestos anteriores. Con esta modificación queda dentro de la conducta, no solo cazar, adquirir, poseer, destruir y traficar con especies protegidas de fauna silvestre o con sus partes o derivados de las mismas, sino que también quedan incluidas todas aquellas acciones que puedan ocasionar lesiones a los hábitats.

Se define hábitats naturales, como las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales; a su vez se define hábitat de una especie, como el medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico. Por lo que el hábitat permite la existencia y subsistencia de las especies de fauna.¹³³

El artículo 332 del CP relativo a la flora protegida, antes de su modificación, ya contenía dicha conducta tipificada y en concordancia con el mismo, la modificación del artículo 334 del CP, recoge esta conducta.

En esta conducta es difícil determinar el grado de alteración sufrido, por lo que la gravedad ha de relacionarse directamente con el perjuicio que se produce en las especies de fauna protegidas.¹³⁴

3.1.5. Delito de resultado

El daño causado a un ejemplar de una especie amenazada, convierte a la mayoría de las conductas típicas recogidas en este artículo en delitos de resultado material, pero

¹³² Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág. 96.

¹³³ Vid. art.1.b) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art.3.21 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹³⁴ Opinión vertida en relación al art.332 del CP. en. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op.Cit. Pág. 38.

no en tipos de lesión, debido a que es prácticamente imposible que la destrucción de un animal provoque por sí sola una reducción de la diversidad biológica. Cuando se constata la producción del resultado material que exige el tipo, se comprobará si el comportamiento puso en peligro la biodiversidad para que exista el injusto penal.¹³⁵

A su vez, en relación con la conducta típica que consiste en el tráfico de las partes o derivados de las especies cinegéticas, se estaría ante un delito de peligro abstracto, ya que la puesta en peligro de la biodiversidad es más lejana.¹³⁶

3.1.6. Tentativa

Por tratarse de un delito de resultado, resulta posible la comisión del delito recogido en el artículo 334 del CP en grado de tentativa. Así la caza, adquisición, posesión para el tráfico, podrá constituir una tentativa del delito, salvo que afecte a alguna de las especies recogidas en el Convenio CITES, siendo castigado como delito consumado de acuerdo con la Ley de Contrabando. La Jurisprudencia así lo recoge en la STS de 29 de noviembre de 2001.¹³⁷

En relación al error inverso,¹³⁸ la existencia del mismo impide la consumación del delito así como el castigo de la tentativa, siempre y cuando el sujeto no comenzara a realizar el tipo, debido a la falta de objeto material, y a su vez, no se viera afectado el bien jurídico protegido por el comportamiento del sujeto.¹³⁹

¹³⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág.36; En este sentido también; BAUCCELLS LLADÓS, J. “Comentarios a los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Op.Cit. Pag.1452 1453.

¹³⁶ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pag.362

¹³⁷ Así la sentencia dispone que *“la posesión descrita en el “factum” es indudable que forma ya parte de la acción típica y conlleva por sí sola una puesta en peligro del bien jurídico protegido...Cabría objetar que la presente posesión constituye por sí sola una infracción administrativa. Sin embargo, con independencia del principio general de punición de la tentativa, lo cierto es que la conducta del acusado en relación con la protección de la especie acreedora de dicha conminación penal, no sólo por ajustarse al tipo, sino igualmente por la intensidad del ataque al bien jurídico protegido habida cuenta las circunstancias señaladas anteriormente”*

¹³⁸ En este sentido, cuando se produce un déficit en el tipo objetivo hay un error inverso. No se da el tipo completo pero el sujeto piensa que sí.

3.1.7. Tipo subjetivo

Será posible la comisión del delito recogido en el artículo 334 del CP, en cualquiera de los grados de dolo, ya sea directo, indirecto o eventual, este último se deducirá en algunos supuestos de las circunstancias que rodean al hecho.¹⁴⁰

En relación con el error, en aquellas CCAA en las que se exija la superación de un examen para la obtención de la licencia de caza, puede verse reducido dicho error frente a la circunstancia de amenaza, esto es así cuando el examen exija especiales conocimientos sobre las especies protegidas. A su vez, puede quedar excluida la concurrencia de error y ser un indicador de dolo, en el caso de que el ejercicio de una profesión esté relacionado directamente con las especies protegidas.¹⁴¹

A su vez, en el caso en el que se conozcan las especies protegidas, el sujeto puede obrar con error de tipo, si al disparar confundió un animal con otro de una especie protegida.¹⁴²

3.1.8. Antijuricidad¹⁴³

Los artículos 54 y 62 de la Ley 42/2007, recogen las conductas incluidas en el artículo 334 del CP, por lo que dichos comportamientos serán constitutivos de delito o infracción administrativa. A su vez se deberá tener en cuenta el procedimiento sancionador establecido por cada CA.

¹³⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág. 42

¹⁴⁰ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 18 de enero de 2006 “*es suficiente con la existencia de dolo eventual cuando la conducta del sujeto no busca directamente dicho perjuicio, pero lo asume como consecuencia necesaria de su actuar...*”

¹⁴¹ Vid. STS de 29 de noviembre de 2001. Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág. 41.

¹⁴² Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.362

¹⁴³ “Expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico”. Vid. MUÑOZ CONDE, F. “Manual de derecho penal medioambiental”. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013. Pág. 157.

La antijuricidad formal expresa la relación de contradicción de un hecho con lo recogido en el Derecho penal, en cambio la antijuricidad material expresa la afectación de un peligro o lesión al bien jurídico protegido (biodiversidad).

Para determinar el ámbito de aplicación del tipo penal y diferenciarlo del ámbito administrativo, se deberá atender tanto al bien jurídico protegido como al dolo del autor. Buscando la vigencia del principio de intervención mínima, será necesario que tras constatar la infracción de una norma administrativa de complemento, antijuricidad formal, de acuerdo con HAVA GARCÍA, “el juez realice una posterior valoración a fin de dilucidar si la conducta concreta enjuiciada afectó de manera relevante al mantenimiento de la diversidad biológica, antijuricidad material”.¹⁴⁴

Se deberá constatar la producción del resultado material exigido en el tipo y posteriormente se deberá comprobar si el comportamiento puso en peligro la diversidad biológica para afirmar la posible existencia del injusto penal. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1999, de manera tacita, apuntaba al principio de lesividad como criterio válido para diferenciar el ilícito penal de la infracción administrativa, descartando la aplicación del artículo 334 del CP.

3.1.9. Concurso de normas

Las conductas tipificadas en el artículo 334 del CP podrán entrar en concurso aparente de normas con el artículo 335.1 del mismo cuerpo legal, al tratarse de las mismas especies, resolviéndose a favor del primero en virtud del principio de especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 8.1 del CP.¹⁴⁵

A su vez el artículo 334 puede entrar en concurso medial con el artículo 336 del CP, cuando se empleen venenos, explosivos u otros medios masivos no selectivos, para

¹⁴⁴ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág.36 y37.

¹⁴⁵ Vid. art.8.1 del CP: “*Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas: 1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumadas en aquél. 4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor*”.

capturar especies protegidas, aplicándose en estos casos las reglas establecidas en el artículo 77 del CP, redactado por el número treinta y seis del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, castigándose dicho comportamiento con la infracción más grave en su mitad superior.¹⁴⁶

De acuerdo con el artículo 8.4 del CP, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, por tanto, de acuerdo con el artículo 330 del CP, cuando la caza se realice en un espacio protegido y se dañen gravemente alguno de los elementos que sirvan para calificarlo, se aplicara el tipo contenido en este artículo, en cambio si dichos daños no son de una entidad tan alta, se aplicara lo previsto en el artículo 334 del CP, sumándole la agravante recogida en el 338 del CP, por lo que se le impondrá la pena superior prevista en grado.¹⁴⁷

La conducta recogida en el artículo 334 del CP relativa a impedir o dificultar la reproducción o migración de especies protegidas, entrara en concurso ideal con el artículo 325.1 del CP, con la nueva redacción dada a este artículo, se añade un segundo punto que establece que si las conductas recogidas en el indicado artículo 325.1, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.¹⁴⁸ A su vez esta conducta entrara en concurso aparente con el artículo 330

¹⁴⁶ Vid. Art.77 del CP: “1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. 2. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior”.

¹⁴⁷ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág. 43; Véase en este sentido la Sentencia de Audiencia Provincial de Cáceres de 10 de enero de 2001.

¹⁴⁸ Vid. art.325.1 del CP: “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el

del CP, aplicándose el tipo contenido en este último artículo. En cambio si dichos daños no son de una entidad tan alta, se aplicara lo previsto en el art.334, sumándole la agravante recogida en el 338 del CP.

3.2. Caza ilegal (Art. 335 del CP)

La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modifica los apartados 2 y 3 del artículo 335, las figuras agravadas del apartado 4, no se modifican, solo se incluye de forma implícita las actividades de marisqueo. Queda redactado el artículo 335 de la siguiente forma:

“1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.

2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los

subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”.

derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años.

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente”.

Se retrasa su reforma hasta la enmienda nº 1031 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se justifica tal reforma “*por la necesidad de hacer frente al furtivismo cuando se realicen actividades de extracción de especies marisqueras o pesqueras que puedan poner en riesgo su biodiversidad haciendo estas conductas equivalentes a la caza y la pesca*”. Se introduce por tanto nuevas modalidades de conducta como es el furtivismo en la pesca y en actividades de marisqueo ¹⁴⁹

Furtivismo, —conducta consistente en cazar o pescar en propiedad ajena sin la debida autorización—, que ya había sido introducido para la caza por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con la reforma del artículo 335, incluyéndolo en su apartado segundo y añadiendo en su apartado tercero, la agravación por daño grave al patrimonio cinegético. Esta reforma se justifica en la “*lesión de los derechos económicos de quien se dedica a explotar los recursos cinegéticos. La decisión de incluir su tipificación obedece a la evidencia de que se produce una lesión injusta de los derechos económicos de otro, con lo cual la conducta del furtivo tiene suficiente desvalor como para merecer un reproche sancionador*”. ¹⁵⁰

Proporcionado así este artículo una tutela específica a otras especies de fauna que no estén incluidas dentro de las especies protegidas, cuya caza está expresamente castigado por el artículo 334 del CP. Al igual que este último artículo, el artículo 335 del CP se configura como una norma penal en blanco, concretando el contenido de la prohibición penal a través del reenvío a la norma administrativa. ¹⁵¹

¹⁴⁹ Vid. MANZANARES SAMANIEGO, “La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo”. Op. Cit. Pág. 283

¹⁵⁰ Vid. BOCG, Congreso de Diputados, de 23 de junio de 2003, Serie A, núm.145-9, p.103.

En opinión de MORILLAS CUEVAS, este precepto es una “simple infracción administrativa elevada a la categoría de delito en la que el ámbito de la prohibición penal se determina por completo sobre la base de la normativa administrativa estatal y autonómica sobre la materia”.¹⁵²

3.2.1. Bien jurídico protegido

De nuevo, como ocurre en el artículo 334 del CP, el bien jurídico protegido es la biodiversidad. Busca regular la caza para evitar que determinadas especies se vean sobreexplotadas, aunque no exista un riesgo de extinción.

De acuerdo con ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, este delito atenta contra el principio de intervención mínima, debido a que la realización de la conducta recogida en este artículo, es decir la caza prohibida, no supone que se esté ante un supuesto de explotación que comprometa la biodiversidad. Bastando la tutela dada por la norma administrativa sancionadora, quedando en el ámbito del Derecho Penal aquellos casos especialmente graves.¹⁵³

3.2.2. Sujetos de la actuación

La acción de cazar puede ser realizada por cualquier persona, por tanto se está ante un tipo común, ya que cualquiera puede realizar la acción del tipo recogido en este artículo. El párrafo cuarto del artículo 335 del CP, prevé un agravante específico, cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas.

Como sujeto activo cabe también incluir al propio titular del terreno o del aprovechamiento cinegético. La jurisprudencia ha ampliado la consideración de sujetos

¹⁵¹ Vid. MORILLAS CUEVAS, L.; DEL ROSAL BLASCO, B.; GONZÁLEZ RUS, J.J.; PERIS RIERA, J.; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS J.E.; OLMEDO CARDENETE, M.; I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR. “Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial”. Edit. Dykinson, Madrid, 2011. Pág.769.

¹⁵² Vid. MORILLAS CUEVAS, L.; DEL ROSAL BLASCO, B.; GONZÁLEZ RUS, J.J.; PERIS RIERA, J.; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS J.E.; OLMEDO CARDENETE, M.; I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR. “Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.771.

¹⁵³ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.370 y 371.

activos del tipo recogido en el artículo referenciado, incluyéndose a los que coloquen, recojan, acompañen o manden colocar trampas para dar caza, así como a los que contribuyan al desarrollo de la acción típica.¹⁵⁴

3.2.3. Objeto material

La actual reforma del Código Penal de 2015, no modifica la fórmula utilizada para delimitar el objeto material del delito dada por la anterior redacción del artículo 335, el cual, establece que el objeto del delito, serán las “especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza...”. Por lo que este artículo, debe ponerse en relación con el artículo 334, cuyo objeto material son las especies protegidas. A su vez, debe ponerse también en relación con el la Ley 42/2007, ya que es la norma principal llamada a integrar el contenido del Capítulo IV del Título XVI del Código Penal.

De la lectura literal del artículo 335.1 del CP, se deduce que constituye objeto material del delito las especies cinegéticas, debido a que dichas especies disponen de normativa propia sobre su caza que limitan dicha actividad, que establecen vedas, cupos o restricciones en época de cría, incluyendo también las especies declaradas formalmente cinegéticas por las CCAA, cuando se realice la conducta sin respetar las prohibiciones establecidas por las normas de caza, independientemente de que el sujeto activo posea o no la correspondiente licencia de caza.¹⁵⁵ A su vez, la Ley 42/2007, en su artículo 54, establece unas prohibiciones genéricas respecto de las especies recogidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a nivel estatal o autonómico. De acuerdo con este contexto, podrán conformar también objeto material del delito del artículo 335.1, los animales incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, debido a que también poseen normas específicas

¹⁵⁴ Vid. SAP Teruel, de 23 de diciembre de 1999; SAP Jaén, de 20 de diciembre de 2005; SAP Murcia, de 17 de julio de 1998; STS de 11 de mayo de 1993; STS de 7 de noviembre 1997; STS de 26 de abril de 1997; STS de 14 de febrero de 1998; STS de 26 de febrero de 2000 y STS de 1 de febrero de 1999. Cfr. VAZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Op. Cit. Pág. 205 y 205.

¹⁵⁵ Vid. STS de 23 de febrero de 2006 “*no se sanciona en realidad la falta de autorización administrativa, sino una conducta atentatoria al medio ambiente al producir efectos negativos sobre determinadas especies de flora y fauna respecto de las cuales no esté prevista la posibilidad de realizar tal conducta mediante la oportuna autorización administrativa*”.

sobre su caza donde se prohíbe dicha actividad, siempre que no se den las excepciones recogidas en el artículo 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Vid. Art. 54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad “1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas: a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo. c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, subespecies o poblaciones. 2. Las Comunidades autónomas establecerán un sistema de control de capturas o muertes accidentales y, a partir de la información recogida en el mismo, adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones negativas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, y se minimicen en el futuro.” Art.58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas. c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines. d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea. e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación. f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.2. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las circunstancias contempladas en el apartado e), la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios para garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que el nivel máximo nacional de capturas, para cada especie, se ajusta al concepto de «pequeñas cantidades». Igualmente, se establecerán los cupos máximos de captura que podrán concederse para cada especie, así como los sistemas de control del cumplimiento de dichas medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el período autorizado para efectuar la captura, retención o explotación prudente, sin perjuicio de los controles adicionales que deben también establecerse una vez transcurrido dicho período. 3. La autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores deberá ser pública, motivada y especificar:a) El objetivo y la justificación de la acción.b) Las especies a que se refiera.c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como las razones y el personal cualificado para su empleo.d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y lugar y si procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos científicos utilizados.e) Las medidas de control que se aplicarán.4. Cuando el ejercicio de una actividad de servicios requiera la obtención de alguna de las autorizaciones a las que se refiere este artículo, en el procedimiento de otorgamiento se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la autoridad competente conforme a los instrumentos de protección de las especies,b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medioambiente.La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior titular ni para personas vinculadas a él.5. Las Comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo previsto en este artículo, a efectos de su posterior notificación a la Comisión Europea y a los Organismos internacionales pertinentes, señalando, en cada caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de los mismos.”

En opinión de HAVA GARCÍA, solo reciben la tutela penal ex artículo 335.1 CP, las especies designadas como cinegéticas por las CCAA, dejando al margen de dicha protección a aquellas otras especies que por sus características no han sido declaradas objeto de caza, ni pueden ser clasificadas como amenazadas, aunque hayan sido incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Acaba indicando dicha autora, que en definitiva, esta interpretación “obligaría a mantener que la tutela de la diversidad biológica habría desaparecido del contenido del artículo 335 del CP, para dar paso a la exclusiva protección del patrimonio cinegético”.¹⁵⁷

De la misma forma, las especies que no son declaradas como cinegéticas o incluidas en inventarios que dotan de protección adicional, como son las recogidas en el artículo 52.3 de la Ley 42/ 2007, las especies autóctonas silvestres, para las cuales dicho artículo recoge ciertas prohibiciones. De acuerdo con el artículo 335. 1 del CP habrá que acudir a las normas específicas que las regulan para comprobar si en ella se recoge alguna excepción a las prohibiciones establecida en el artículo 52.3 de la Ley 42/2007.

¹⁵⁸ Cuando se recojan dichas excepciones, la conducta se considerará como atípica.

De acuerdo con BAUCCELLS LLADÓS, este precepto no exige que la caza afecte a un número relevante de animales, pero tal requisito sería imprescindible en base al principio de intervención mínima.¹⁵⁹

3.2.4. Conducta típica

¹⁵⁷ Vid. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.83.

¹⁵⁸ Vid. Art. 53.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad “*Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior. Para los animales no comprendidos en alguna de las categorías definidas en los artículos 53 y 55, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura, pesca continental y pesca marítima.*”

¹⁵⁹ Vid. BAUCCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.1450.

El artículo 335.1 del CP, recoge como conducta típica, al igual que el artículo 334 del CP, la acción de cazar, definida por la Ley de caza estatal, como la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero.¹⁶⁰

La acción de cazar no conlleva necesariamente la muerte directa del animal, ya que también se entiende que un animal es cazado cuando se le ha herido, se ha cobrado con vida o tras el acecho con la muerte del mismo¹⁶¹.

En relación a los métodos utilizados para llevar a cabo la conducta delictiva, será indiferente que se utilicen métodos específicos o no de caza, sin perjuicio de que dichos métodos sean no selectivos o destructivos, en cuyo caso se aplicara el artículo 336 en lugar del artículo 335.1 del CP. A su vez, la tipicidad del comportamiento no se verá afectada cuando la captura de dichos animales se realice por motivos deportivos, comerciales, lúdicos o incluso científicos, siempre y cuando no se cuente con la correspondiente autorización administrativa que permita dicha conducta.¹⁶²

Será sancionable penalmente, por consiguiente, la caza de especies animales cuya caza esté expresamente prohibida por la legislación estatal o autonómica. La actual reforma del artículo 335 del CP, no modifica esta conducta recogida en el apartado primero, pero tendrá validez la jurisprudencia emanada en aplicación de redacciones anteriores del tipo, según la cual no constituye delito cazar o pescar especies autorizadas en lugares, momentos, cantidad o modos no permitidos, lo que será objeto de sanción administrativa pero no se entenderá incluida en el tipo penal, de acuerdo con el artículo 4.1 del CP, según el cual “Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”.¹⁶³

¹⁶⁰ Vid. art. 2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

¹⁶¹ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pag.354.

¹⁶² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.87

¹⁶³ Vid. STS de 23 de febrero de 2006, STS 8 de febrero de 2000 y STS 22 de octubre de 2002.

La conducta aquí recogida será castigada con multa de 8 a 12 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de 2 a 5 años, siendo ésta más alta que la inhabilitación prevista en el artículo 334 para la caza de especies protegidas

Los números 2, 3 y 4 del artículo 335 del CP, contienen tres subtipos agravados según se realice la conducta en terrenos ajenos sometidos a régimen cinegético especial; se produzca grave daño al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial; o si las conductas tipificadas se realizan en grupos de tres o más personas o se utilizan artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. Los subtipos contemplados en los números 2 y 3 incrementan las penas del tipo básico en función de la repercusión medioambiental que la actividad provoca; a su vez, el subtipo del número 4 incrementa la pena en función de la comisión en grupo de tres o más personas o por la utilización de medios o artes prohibidas legalmente.¹⁶⁴

El artículo 335.2 del CP, establece como conducta típica la acción de cazar especies distintas de las recogidas en el artículo 334, (especies protegidas), en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial, sin contar con el permiso de su titular. Se configura como un delito de carácter “personalista” y patrimonial y ajeno a la tutela del medio ambiente y del bien jurídico biodiversidad, ya que depende la existencia del tipo de injusto, de la propia ausencia del correspondiente permiso del titular del terreno. Por tanto, el titular del terreno no podrá ser sujeto activo del delito recogido en este párrafo.¹⁶⁵

En opinión de VERCHER NOGUERA, este delito viene determinado por la titularidad, y por “la relación de propiedad sobre el coto y la especie que se halla en el mismo, y no el atentado contra la especie en sí; la cual, en consecuencia, pasa a ser un elemento meramente accidental o secundario”.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Vid. JIMÉNEZ BALLESTER, F. “Encuentro de magistrados y fiscales del foro medioambiental”. Granada, 23 y 24 de Abril 2009. Pág.26 y 27

¹⁶⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, págs. 93 y 94.

¹⁶⁶ Cfr. VERCHER NOGUERA, A. “La reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en la materia penal ambiental o la exigencia de un reajuste inevitable”. Op. Cit. Pág.10.

Se impondrá multa de 4 a 8 meses, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de 1 a 3 años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 del art.335 del CP.

El artículo 335.3 del CP, establece un tipo cualificado por el resultado, derivado de los graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial, que a su vez, depende del apartado 2 del artículo 335. Su concurrencia se valorará conforme a criterios económicos, atendiendo al número y valor de las piezas cobradas.¹⁶⁷

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, entiende que este párrafo tiene como bien jurídico protegido la riqueza cinegética de un terreno, estando por tanto ante un delito contra la fauna. A su vez, dicho autor opina que a diferencia de lo que ocurre en el párrafo segundo el propietario de un terreno privado sometido a régimen cinegético especial puede responder por este delito, cuando realice la conducta recogida en el párrafo primero del artículo 335 del CP, provocando con su conducta un grave daño al patrimonio cinegético de los alrededores. Otros autores mantienen la posición de que el titular del terreno no podrá ser sujeto activo del delito recogido en este párrafo, es el caso de BAUCCELLS LLADÓS.¹⁶⁸

La conducta recogida en este párrafo, será castigada con penas de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar por tiempo de 2 a 5 años, siendo de nuevo ésta más alta que la inhabilitación prevista en el artículo 334 para la caza de especies protegidas.

¹⁶⁷ Cfr. BAUCCELLS LLADÓS, J. “Comentarios a los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Op.Cit. Pág.1461.

¹⁶⁸ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.376; BAUCCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.1461

El artículo 335.4 del CP, impone la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.

HAVA GARCÍA, opina que esta agravación es comprensible atendiendo a las necesidades de protección de los diferentes objetos tutelados, siempre que se entienda que el empleo de dichas artes o medios conlleve una mayor lesividad potencial. El ámbito de aplicación de este agravante se enfrenta con la delimitación del ámbito de aplicación del tipo básico contenido en el artículo 336.1 del CP, aplicándose la alternatividad recogida en el artículo 8.4 del CP, el cual establece que, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, para solucionar dicha delimitación.¹⁶⁹

De acuerdo con ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, el ámbito de aplicación de este agravante será muy restringido y dependiente de la voluntad de la Administración de la CCAA encargada de regular los medios de caza.¹⁷⁰

En relación al agravante de la actuación en grupo de tres o más personas, en opinión de HAVA GARCÍA, “no llega a entenderse como puede afectar a la biodiversidad o al patrimonio cinegético la mera actuación conjunta de un número superior a dos personas, si dicha actuación no se concreta en ningún acto especialmente lesivo para tales bienes jurídicos”. Por tanto este agravante adquiere relevancia en relación a los derechos de los titulares de terrenos sometidos a régimen cinegético especial.¹⁷¹

Cuando se den los agravantes señalados, se impondrá la pena en su mitad superior.

¹⁶⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.97.

¹⁷⁰ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pag.378

¹⁷¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.97.

3.2.5. Delito de resultado

La Jurisprudencia en su mayoría, considera al delito recogido por el artículo 335 del CP, como delito de resultado ya que se exige para su consumación la efectiva muerte o captura del animal, a su vez, se admiten formas imperfectas de ejecución.¹⁷²

De acuerdo con TERRADILLOS BASOCO, se entiende de la redacción del propio artículo, que se configura como un delito de resultado naturalístico, pero de peligro abstracto. A su vez, en opinión de HAVA GARCÍA, para que se constituya la tipicidad del comportamiento enjuiciado, será necesario, “además de que la captura de animales se realice con infracción de las disposiciones administrativas que en ese caso sirvan de complemento, que dicho comportamiento haya creado un riesgo para el bien jurídico biodiversidad o, lo que es lo mismo, que se constate, objetivamente y *ex ante*, su idoneidad lesiva”.¹⁷³

REQUEJO CONDE, opina que para evitar que la conducta se convierta en un delito de desobediencia se debe exigir un daño a una especie en concreto y cuya eliminación comporte un peligro medioambiental.¹⁷⁴

En opinión de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, estamos ante un delito casi de peligro remoto, debido a que la biodiversidad de la fauna difícilmente puede comprometerse

¹⁷² Cfr. SAP de Madrid de 6 de octubre de 2003; SAP de Granada de 23 de enero de 1999; SAP de Asturias de 15 de septiembre de 2010; SAP de Baleares de 3 de mayo de 2002; SAP de Baleares de 30 de junio de 2003; SAP de Castellón de 25 de julio de 2011; SAP de Murcia de 11 de noviembre de 2007; SAP de Murcia de 29 de junio de 2012; SAP de Tarragona de 2 de noviembre de 2009; SAP de Tarragona de 21 de enero de 2010; SAP de Tarragona de 11 de octubre de 2012; SAP de Zaragoza de 25 de enero de 2012.

¹⁷³ Vid. TERRADILLOS BASOCO, J.M. “Protección penal del medio ambiente en el nuevo Código Penal Español. Luces y sombras”. Edit. Estudios Penales y Criminológicos, XIX 1996, pág. 324; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit, pág.88; acogen esta interpretación también: PRATS CANUT, J.M. y MARQUÈS I BANQUÉ, M. “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.), “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005. Pág. 1260; BAUCCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág. 1454

¹⁷⁴ Vid. REQUEJO CONDE.C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág. 121.

mediante conductas distintas de las descritas en el artículo 334 del CP, realizando por tanto el artículo 335 un adelantamiento de la barrera punitiva.¹⁷⁵

Otros autores como VÁZQUEZ CAÑIZARES, entienden que la caza furtiva, conducta recogida por el artículo 335 del CP, es un delito de mera actividad y peligro abstracto, casi remoto, donde su contenido material se agota en la realización de la conducta de cazar, sin exigir la producción de un resultado, por lo que la mera acción constituye el desvalor que consume el delito, “exigiéndose ejercitar efectivamente la acción de cazar, buscar o perseguir animales para apresarlos o matarlos, no siendo necesaria la captura física de un animal”.¹⁷⁶

3.2.6. Tipo subjetivo

De acuerdo con la configuración del tipo, en opinión de HAVA GARCÍA, el autor de la conducta delictiva podrá actuar con dolo eventual¹⁷⁷ respecto de la situación de riesgo creada para el bien jurídico protegido, aunque el autor conozca la prohibición de la caza sobre determinadas especies.¹⁷⁸

En opinión de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, este delito se considera de comisión dolosa, pero debido a la diversa normativa administrativa a la que se remite el artículo 335 del CP, serán frecuentes los supuestos de error de tipo, teniendo en cuenta que las normas varían de una comunidad a otra y de un año a otro.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.373

¹⁷⁶ Vid. VÁZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Op. Cit. Pág. 258.

¹⁷⁷ En este sentido, SAP de Madrid, de 11 de abril de 2002, “*el dolo eventual se configura cuando el autor a sabiendas de que es probable que a través de su acción se produzca un resultado que no es necesariamente el querido por él, o no deseado de una manera directa, acepta lo que pueda suceder*”.

¹⁷⁸ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.90.

¹⁷⁹ Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Comentarios al Código penal. Segunda época-Artículo 335”. En COBO DEL ROSAL, VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Op. Cit. Pág.373. En este sentido, la SAP de Sevilla de 31 de enero de 2000; la SAP de Soria de 30 de marzo de 1998 y la SAP de Soria de 8 de enero de 1998.

La jurisprudencia establece que debe concurrir en el elemento subjetivo la intencionalidad de cazar, no basta con matar animales en un contexto diferente a la caza pero exige que haya intención por parte del sujeto activo de destruir la fauna existente. Al ser un delito de comisión dolosa se excluye la comisión imprudente en la caza furtiva que sería impune por imperativo del artículo 12 del CP.¹⁸⁰

En el delito recogido por el artículo 335 del CP, el dolo será directo, pudiéndose admitir la concurrencia de dolo eventual cuando el autor dude sobre un elemento esencial de la infracción penal, sabiendo que es probable que se produzca un resultado que no es querido directamente pero se asume el riesgo y se acepta la consecuencia.¹⁸¹

Para argumentar la peligrosidad del comportamiento se exige que esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza, por lo que se exige que el autor conozca las normas específicas en la materia, que sin respetarlas actúe siendo consciente de que con su acción pone en peligro la biodiversidad.¹⁸²

El error en el delito de caza furtiva excepcionalmente se suele admitir, únicamente cuando se acredite un peligro efectivo para el bien jurídico. Para que sea considerado error invencible habrá de considerarse las condiciones de cultura de infractor y la posibilidad de que se le ofreciera instrucción, asesoramiento o medios que le permitieran conocer la transcendencia jurídica de su actuación, debiendo ser este hecho probado por el autor.¹⁸³

¹⁸⁰ SAP de Asturias de 15 de septiembre de 2010; SAP de Barcelona de 15 de diciembre de 2011; SAP de Ciudad Real de 3 de julio de 2006; SAP de Córdoba de 9 de diciembre de 2008; SAP de Murcia de 11 de octubre de 2007; SAP de Sevilla de 10 de febrero de 2004; SAP de Murcia de 11 de noviembre de 2007; SAP de Barcelona 4 de marzo de 2002; SAP de Las Palmas de 27 de febrero de 2006; artículo 12 del CP:

¹⁸¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág. 90; SAP de Asturias de 7 de julio de 1998; SAP de Madrid de 11 de febrero de 2002; SAP de La Rioja de 21 de noviembre de 1997; SAP de Sevilla de 8 de octubre de 1998 y SAP de Barcelona de 5 de mayo de 2009.

¹⁸² Vid. BAUCCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.1457.

¹⁸³ Vid. SAP de Albacete de 13 de marzo de 1998; SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2000; STS de 29 de febrero de 1998; STS de 13 de junio de 1990; STS de 20 de enero de 1992; STS de 9 de marzo de 1993; STS de 1 de marzo de 1985 y STS de 23 de septiembre de 1993.

No se admite error de prohibición del artículo 14.3 del CP, debido a que no basta con alegar ignorancia de que la conducta es delictiva o está prohibida cuando se es consciente del mal proceder, debido a que es obligación de todo aquel que tenga interés por la práctica de la caza conocer al menos las prohibiciones existentes. Puede ser admitido el error de prohibición cuando el sujeto conoce que el hecho está prohibido pero erróneamente cree que se justifica por concurrir estado de necesidad.¹⁸⁴

3.2.7. Antijuricidad

La referencia a las normas sobre caza que hace el artículo 335.1 del CP, engloba todas aquellas que prohíban la caza de una determinada especie en determinadas condiciones de tiempo, lugar y modo. Se debe identificar las disposiciones administrativas que complementan a dicho artículo, determinando así la tipicidad de la conducta, para poder así diferenciar los ilícitos penales de las infracciones administrativas, determinando también si la conducta es materialmente antijurídica y por ello sancionable penalmente.

En relación con la idoneidad lesiva del comportamiento, en opinión de HAVA GARCÍA, dependerá del número de ejemplares capturados en relación con las particulares circunstancias de tiempo y lugar en que se realizó la conducta, con independencia de la inobservancia de otros requisitos meramente formales.¹⁸⁵

3.2.8. Tentativa¹⁸⁶

Al considerarse la conducta recogida por el artículo 335.1 del CP como un delito de resultado material o naturalístico que se consuma con la captura efectiva de animales tanto vivos como muertos, hace que el llevar a cabo la actividad cinegética sin obtener o producir un resultado material, no sea suficiente para determinar la transcendencia penal

¹⁸⁴ Vid. BAUCCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.1458; SAP de Almería de 19 de mayo de 1998; SAP de Sevilla de 8 de octubre de 1998 y SAP de Cáceres de 2 de junio del 2000.

¹⁸⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág. 87 y ss.

¹⁸⁶ Artículo 16 del CP: “*Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor*”.

del comportamiento, por lo que la doctrina mayoritaria entiende que la tentativa no es posible, por lo que no serían punibles los actos anteriores a la captura o las cacerías interrumpidas.¹⁸⁷

De acuerdo con HAVA GARCÍA, el “castigo de la tentativa supondría un adelantamiento de las barreras de punición inadmisibles, en la medida en que implicaría castigar un comportamiento que ni siquiera hubiera significado la creación de un peligro abstracto para el bien jurídico”.

La jurisprudencia mayoritaria, al entender que se trata de delitos de resultado que exige la consumación del delito, esto es, la captura o muerte del animal, admite formas imperfectas de ejecución, aplicándose dependiendo de los casos la tentativa.¹⁸⁸

La tentativa inacabada, no se aprecia aunque ciertos autores si la admitan;¹⁸⁹ debido a que desde el momento en que se buscan o atraen las piezas de caza, ya se estaría ante un delito consumado, por lo que la liberación a posteriori de las mismas, no impide la consumación de dicho delito.¹⁹⁰

Por último, la tentativa inidónea y el delito imposible no se producen en este delito, ya que no puede cazarse sino se posee en el momento de realizar el delito los instrumentos adecuados o no existe animal alguno en el lugar donde se pretende cazar.¹⁹¹

3.2.9. Concurso de normas

¹⁸⁷ Vid. BAUCELLS LLADÓS, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. En CÓRDOBA RODA, J; GARCÍA ARÁN, M. “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”. Op. Cit. Pág.1454.

¹⁸⁸ Vid. SAP de Madrid, de 6 de octubre de 2003; SAP de Granda de 23 de enero de 1999.

¹⁸⁹ Cfr. MESTRE DELGADO, E. “Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. En LAMARCA PEREZ, C. “Derecho Penal. Parte Especial”. Edit. Colex. Madrid. 2004. Pág. 444.

¹⁹⁰ Vid. SAP de Sevilla de 8 de octubre de 1999; SAP de Badajoz de 13 de abril de 2009; SAP de Madrid de 11 de abril de 2002.

¹⁹¹ Vid. VAZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Op. Cit. Pág. 296 y 297.

Debido al carácter “residual” del artículo 335.1 del CP, en relación con otros tipos penales aplicables a la fauna, se aplicarán estos cuando concurren los requisitos especiales establecidos en ellos, como es el caso del artículo 334 del CP en relación a las especies protegidas y al artículo 336 del CP, del referido cuerpo legal, en relación a los métodos utilizados para cazar. Cuando la caza se lleve a cabo en el interior de un espacio natural protegido, en concreto, cuando se trate de especies clasificadas “en régimen de protección especial” de acuerdo con el artículo 330 del CP, y se dañen gravemente alguno de los elementos que sirvan para calificarlo, se aplicara el tipo contenido en este artículo, en cambio si dichos daños no son de una entidad tan alta, se aplicara lo previsto en el artículo 335.1 del CP, sumándole la agravante recogida en el 338 del CP, por lo que se le impondrá la pena superior prevista en grado.¹⁹²

3.3. Caza con medios no selectivos. (Art.336 del CP)

El Artículo 336 no ha sido modificado por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que su redacción sigue siendo la siguiente:

“El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.”

Los artículos 42 y 43 de la Ley 1/1970 de Caza, actualmente derogados, ya castigaban como delito o falta ciertas conductas, como eran el empleo de cebos envenenados, o el uso de explosivos con fines cinegéticos.

3.3.1. Bien jurídico protegido

¹⁹² Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op.Cit, pág.92y 93.

Al igual que en los artículos anteriores del CP, el bien jurídico protegido del artículo 336, es la biodiversidad. SERRANO TÁRRAGA afirma que “los elementos de la flora y la fauna no se protegen en sí mismos, sino como parte del medio ambiente y en la medida que el ataque a estos elementos, y a su hábitat pueden alterar y perjudicar al medio ambiente”.¹⁹³

El posible daño a la biodiversidad que se recoge en este artículo, deriva de los métodos utilizados para la caza que pueden producir un riesgo para dicho bien jurídico protegido. En este sentido MUÑOZ CONDE, opina que “el desvalor de la conducta reside aquí no en la especie cazada, sino en el daño que se puede provocar a la biodiversidad por los medios empleados en la caza”. La conducta deberá ocasionar un mínimo de peligrosidad para el equilibrio biológico para poder ser típica.¹⁹⁴

3.3.2. Sujetos de la actuación

Este delito al ser considerado como común, puede ser cometido, por cualquier persona que emplee de forma efectiva veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna. Incluyéndose en este punto al propio titular del coto.

3.3.3. Objeto material

Serán objeto material del delito recogido en el artículo 336 del CP, las especies tanto protegidas recogidas en el art.334 del CP en todas sus categorías, las que no están recogidas en dicho artículo y tampoco son objeto de caza, así como las especies que son objeto de caza (art.335 del CP), debido a que el tipo únicamente exige que los medios empleados para cazar posean eficacia destructiva para la fauna.¹⁹⁵

¹⁹³ Cfr. SERRANO TÁRRAGA, M. D; SERRANO MAÍLLO, A; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. “Tutela penal ambiental”. Op. Cit. Pág. 195.

¹⁹⁴ Cfr. MUÑOZ CONDE, F. “Manual de derecho penal medio ambiental”.Op. Cit. Pág. 331 y 332.

¹⁹⁵ En este sentido MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, C. “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial”. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2005. Pág. 842; HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 98; SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág.173.

3.3.4. Conducta típica y métodos utilizados.

La conducta consiste en emplear sin estar legalmente autorizado, para la caza, veneno, explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna. A efectos de integrar el artículo 336 del CP, habrá de tenerse en cuenta tanto la Ley 42/2007, cuyo artículo 62.3 a) recoge, la prohibición de la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos no selectivos para la captura o muerte de animales, y su artículo 58.1 que recoge las excepciones a dichas prohibiciones previa autorización administrativa de la CA, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones.¹⁹⁶; Así como, las correspondientes legislaciones autonómicas en materia cinegética que determinan cuales son los métodos de caza prohibidos.

Al considerarse a La Ley 42/2007 normativa de carácter básico, las CCAA no podrán otorgar autorizaciones administrativas contrarias a lo previsto en dichos artículos, aunque de acuerdo con HAVA GARCÍA, serán los respectivos órganos administrativos de cada CCAA los competentes para otorgar dichas autorizaciones y establecer los requisitos para otorgarlas.¹⁹⁷

Se impondrá una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por tiempo de

¹⁹⁶ Vid. Art. 62.3 a) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. *“Con carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales: a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie...”*; art.58.1. *“Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas. c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines. d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea. e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación.”f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.*

¹⁹⁷ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 101.

uno a tres años. En relación con la conducta recogida en el segundo inciso del art.336 del CP se agravará la pena, imponiéndose en su mitad superior.

- Métodos utilizados

De acuerdo con HAVA GARCÍA, “la utilización de la técnica de remisión para determinar qué concretos medios o procedimientos de captura de animales no pueden utilizarse legalmente podría provocar la impunidad de ciertos comportamientos, en los que el sujeto emplee para la caza ciertos “métodos” de similar, cuando no mayor, eficacia destructiva para la fauna, si se entendiera que todo lo no expresamente prohibido está permitido en este ámbito”.¹⁹⁸

Otros autores entienden que la referencia dada por el artículo 336 del CP, en relación a los instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna constituye una fórmula descriptiva y no normativa. Fórmula abierta que incluye aquellos métodos que no se califican como venenos o medios explosivos y que poseen una nocividad para la fauna y que para poder ser utilizados se requerirá una autorización previa para excluirlo del tipo.¹⁹⁹

REQUEJO CONDE, entiende que “no cabe extrapolar el concepto de medio masivo y no selectivo del ámbito administrativo, al no tratarse de una norma penal en blanco sino de una cuestión interpretativa de una clausula extensiva que precisaría la búsqueda de estrictas razones de analogía en los mismos términos de eficacia destructiva para la fauna”. El veneno y los explosivos, se caracterizan por su lesividad, por su carácter no selectivo e indiscriminado, así como, por su irreversibilidad.²⁰⁰

¹⁹⁸ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág.99 y 100.

¹⁹⁹ Cfr. ORTEGA MARTÍN, E. “Los delitos contra la flora y la fauna”. En AAVV “Derecho penal administrativo (ordenación del territorio patrimonio histórico y medio ambiente)”. Edit. Comares. Granada. 1997. Pág. 573; En este sentido SAP de Tarragona de 22 de febrero de 2000, “*si algo caracteriza al uso de veneno para la caza es la imposibilidad de discriminar la especie del animal que se ve finalmente afectado por el mismo, extremo que es plenamente compartido por el uso del lazo ya que, en tal trampa, puede caer cualquier animal de un tamaño similar o menor...convirtiéndose así el lazo en un instrumento de eficacia destructiva indiscriminada de la fauna*”.

²⁰⁰ Cfr. REQUEJO CONDE, C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág.134.

Se entiende por veneno, de acuerdo con la SAP de Tarragona de 9 de enero de 2008 “*sustancia que incorporada a un ser vivo en pequeñas cantidades, es capaz de producir graves alteraciones funcionales, e incluso la muerte*”. Debe de tratarse de productos químicos, que se emplee en cantidades que sean efectivas y que se utilicen con la intención de cazar. Cuando se emplee con la finalidad de proteger la agricultura o a las personas contra plagas no se incluirá dentro del tipo penal.²⁰¹

En el caso del uso de explosivos para cazar, éste es capaz de dar muerte a las especies, así como, de destruir todo lo que se encuentre en su radio de acción, de forma irreversible.²⁰²

En relación a los medios de “*similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna*”, la SAP de Tarragona núm. 362/2012, de 19 de julio, indica que “*no todo empleo de medios prohibidos por la norma administrativa queda sometido a sanción penal*”. A su vez, la SAP de Badajoz núm. 105/1998, de 16 de noviembre establece que “*esta labor de interpretación del Texto Legal, que implica un «numerus apertus», ha de efectuarse con criterios restrictivos, pero no debe olvidarse en ningún momento que nos encontramos en el ámbito del derecho penal, en el que priman determinados principios que impiden una interpretación contra el reo de las normas jurídicas*”.²⁰³

3.3.5. Delito de mera actividad y de peligro abstracto

El delito recogido en el artículo 336 del CP es de mera actividad y de peligro abstracto, siendo necesario que se realice por parte del sujeto la conducta recogida en dicho artículo. A su vez no se exige la producción de daño para que se considere consumado el delito. SÁNCHEZ GASCÓN, considera que la acción se limita al empleo de los métodos recogido por el precepto y por tanto basta con que se usen o utilicen, sin

²⁰¹ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. pág. 173

²⁰² Cfr. REQUEJO CONDE, C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Op. Cit. Pág. 134.

²⁰³ En relación con los medios de similar eficacia se pueden incluir: lazo o liga (SAP de Jaén de 19 de octubre de 1998, SAP de Tarragona de 22 de febrero de 2000, SAP de Castellón núm.202/2011, de 6 de mayo); las redes (SAP de Albacete de 31 de diciembre de 2002, SAP de Badajoz de 19 de octubre de 1998, SAP de Cáceres de 26 de mayo de 1998);

necesidad de obtener un resultado dando muerte o capturando cualquier especie de fauna.²⁰⁴

En relación con la conducta recogida en el segundo inciso del referido artículo, cuando “*el daño causado fuera de notoria importancia*” se sancionará dicha conducta como un delito consumado, convirtiendo la mera actividad en resultado.²⁰⁵

Para valorar el elemento típico de este segundo inciso, se atenderá a criterios cuantitativos (número elevado de animales afectados por el método utilizado) y cualitativos (la situación de amenaza provocada a la especie).²⁰⁶

De acuerdo con SÁNCHEZ GASCÓN, la muerte de alguna especie por el uso de veneno solo tendrá relevancia a efectos de reparación del daño causado o, en caso de considerar el daño de notoria importancia, a fin de aplicar el tipo agravado, que comporta la aplicación de la pena en su mitad superior.²⁰⁷

3.3.6. Tentativa

La conducta tipificada en el artículo 336 del CP, no cabe penalizarla en grado de tentativa, ya que se configura como un delito de mera actividad y de peligro abstracto. Autores como HAVA GARCÍA y BAUCCELLS I LLADÓS, consideran que no serán punibles los actos preparatorios, como es la preparación de los explosivos o cebos envenenados, para que se pueda imputar al sujeto la responsabilidad criminal derivada de este delito. A su vez, SÁNCHEZ GASCÓN, entiende que difícilmente cabe la tentativa en este delito, ya que “los actos que objetivamente deberían producir el resultado” consisten en la conducta que sanciona el artículo 336 del CP.²⁰⁸

²⁰⁴ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág.172.

²⁰⁵ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 103

²⁰⁶ Cfr. PRATS CANUT, J.M. y MARQUÈS I BANQUÉ, M. “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.), “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. Op. Cit. Pág.1263.

²⁰⁷ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Caza y veneno”. Edit. Exlibris, Madrid, 2010. Pág.20 y ss.

²⁰⁸ Cfr. BAUCCELLS LLADÓS, J. “Comentarios a los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Op.Cit. Pag.1462 y 1463; HAVA GARCÍA,

ORTEGA MARTÍN y MARTINEZ BUJAN-PÉREZ, mantiene una opinión en contra, este último entiende que “la conducta a emplear describe un resultado material, que admite las más variadas modalidades específicas de acción”, siendo posible la tentativa en este delito.²⁰⁹

3.3.7. Tipo subjetivo

En relación con el dolo, ya sea directo, indirecto o eventual para la situación de riesgo creada, en el caso del primer inciso del artículo 336 del CP, se deberá comprobar la eficacia destructiva del método de caza que se haya empleado, debiendo el sujeto activo ser consciente de la capacidad destructiva de dicho método y la posibilidad elevada de que se produzca el daño, siendo difícil distinguir entre dolo eventual y la imprudencia consciente.

En opinión de SÁNCHEZ GASCÓN, se descarta la imprudencia, el dolo directo o eventual para la sumisión del delito. Sin embargo la comisión por imprudencia será frecuente al utilizarse productos químicos en la agricultura o la ganadería en dosis o productos inadecuados.²¹⁰

3.3.8. Antijuricidad

Se deberá determinar la idoneidad lesiva del empleo sin autorización de métodos prohibidos cuando no se haya producido un daño material. De acuerdo con HAVA GARCÍA, “si se constata objetivamente y *ex ante* la carencia de esa idoneidad la conducta solo debería ser sancionada, en su caso, como infracción administrativa. En cambio, cuando la acción haya provocado un resultado naturalístico será preciso

E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 103; SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág.172.

²⁰⁹ Vid. MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, C. “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial”. Op. Cit. Pág. 842; ORTEGA MARTÍN, E. “Los delitos contra la flora y la fauna”. En AAVV “Derecho penal administrativo (ordenación del territorio patrimonio histórico y medio ambiente)”. Op. Cit. Pág. 564.

²¹⁰ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Op. Cit. Pág.173

además, para aplicar el tipo agravado, que el daño causado sea de notoria importancia”.²¹¹

3.3.9. Concurso de normas

Cuando se capturen especies protegidas utilizando los medios recogidos en el artículo 336 del CP, resultará de aplicación el segundo inciso del referido artículo, por lo que se impondrá una pena de prisión de un año y dos meses a dos años, no siendo posible imponer pena de multa. Cuando se dé una concurrencia de conductas típicas recogidas en el artículo 336 del mencionado cuerpo legal y en los preceptos anteriores, se aplicará el concurso aparente de delitos.

4. DISPOSICIONES COMUNES

El CP establece una serie de disposiciones comunes aplicables a los delitos recogidos en el Título XVI y relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente:

4.1. Agravante por espacio natural protegido. (artículo 338 del CP)

Artículo 338: *“Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.”*

Recoge un agravante aplicable para el caso de que la conducta típica sea constitutiva de los delitos previstos en el Título XVI y vistos anteriormente, que afecte a un espacio natural protegido, debiendo acudir por tanto a la normativa administrativa para completar el tipo.²¹²

²¹¹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “La tutela penal de los animales”. Op. Cit. Pág. 102 y 103.

²¹² En este caso se remite a la Ley 42/2007, de 13 diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde en su art.27 se define lo que son espacios naturales protegidos: *“1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,*

No está prevista la imprudencia, debido a que ésta no está recogida en el Ley. Por lo que es necesario que se demuestre que el sujeto activo conoce el carácter de espacio natural protegido del lugar, aunque ese conocimiento se de de forma eventual. Si se diera un error de tipo, es decir que no conociera ese carácter, no podrá ser tenida en consideración la cualificación.²¹³

Las conductas tipificadas en el artículo 338 del CP podrán entrar en concurso de normas con el artículo 330 del CP,²¹⁴ al tratarse de espacios naturales protegidos, este último artículo establece que ha de dañarse gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificar ese espacio como protegido, en opinión de GARCÍA ÁLVAREZ y LÓPEZ PEREGRÍN “el concepto de “afectar” a espacio natural protegido es más amplio e incluye necesariamente el de “dañar el elemento que haya dado lugar a su calificación como protegido”, habrá que entender que castigar por el delito del artículo 330 y apreciar además la cualificación del artículo 338 no sería posible en ningún caso porque daría lugar al principio de *ne bis in idem*”. Resolviéndose dicho concurso de normas en virtud del principio de alternatividad, aplicando la pena mayor: bien por el delito contra la flora o la fauna cometido cualificado por el artículo 338 del CP; o bien por el delito contra la flora o la fauna cometido en concurso de delitos con el de daño a elemento de espacio natural protegido del artículo 330 del CP.²¹⁵

4.2. Restauración del equilibrio biológico perturbado (artículo 339 del CP)

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente marinos.”. A su vez el art.29 hace una clasificación de los mismos: “En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes categorías: a) Parques. b) Reservas Naturales. c) Áreas Marinas Protegidas. d) Monumentos Naturales. e) Paisajes Protegidos.”

²¹³ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.53.

²¹⁴ Vid. Art.330 del CP: “*Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.*”

²¹⁵ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.53.

La LO 5/2010, de 22 de junio, modifico este precepto, pasando de quedar en manos de los jueces o tribunales la posibilidad de ordenar la adopción, a cargo del autor, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio biológico, a convertirse en una obligación ordenada por los jueces y asumida por el autor.

El artículo 339 dispone lo siguiente: *“Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.”*

Como afirman GARCÍA ÁLVAREZ y LÓPEZ PEREGRÍN, no se califica como una sanción, ya que no está prevista en el catálogo de penas, sino que es una institución encaminada a la reparación, en la línea del principio, de Derecho penal medioambiental, de “quien contamina, paga”.²¹⁶ La doctrina ha cuestionado la naturaleza de lo previsto en este precepto, si se está ante una medida cautelar, o ante una previsión de responsabilidad civil.²¹⁷

En relación con la primera parte del artículo 339 del CP, se recoge la adopción de medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que serán a “cargo” del autor del hecho, es decir, sufragarlas, no tendrá que llevar a cabo la actuación reparadora por sí mismo.²¹⁸

²¹⁶ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.54; en este sentido también, MUÑOZ LORENTE, J; BAUCCELLS LLADÓS, J; FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 327, 328, 329 y 339)”, en ÁLVAREZ GARCÍA/ GONZÁLEZ CUSSAC (Dir.), “Comentarios a la Reforma penal de 2010”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. Pág.797; POZUELO PÉREZ, “La reparación del daño al medio ambiente”. Edit. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 191, 2002, pág. 133-166

²¹⁷ En este sentido, MARQUÉS I BANQUÉ, entiende que hay que considerarla como una “forma específica de reparación civil en el ámbito ambiental” MARQUÉS I BANQUÉ, M. “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (art. 337) y Disposiciones comunes (arts. 338 a 340)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), “Comentarios al Código penal español, Tomo II (Artículos 234 a DF 7º)”, 6ª ed. Op. Cit. Pág.788-796 y 796-800; en contra, SILVA SÁNCHEZ, J.M. ; MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente”. Edit. Atelier, Barcelona, 2012, pág.261.

²¹⁸ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.55.

La segunda parte del precepto incorpora la adopción de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados. Se persigue con ello la protección de los bienes jurídicos tutelados en el Título XVI del CP.²¹⁹

4.3. Reparación voluntaria del daño (artículo 340 del CP)

Artículo 340: *“Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.”*

Este precepto se refiere a la reparación del daño consecuencia inmediata de la actividad realizada por el autor contra el medio ambiente y la biodiversidad. La realización por parte del sujeto activo de los actos a favor de la restauración deben ser suficientes para aplicar el tipo privilegiado, aunque no consiga la restauración, bastara con que haya hecho todo lo que está al alcance de sus posibilidades. En los supuestos en los que la reparación del daño no haya sido sustancial, pero al menos se hayan disminuido los efectos, siempre podrá apreciarse la atenuante genérica.²²⁰

Prevé la atenuante cualificada o privilegiada de reparación voluntaria del daño, que rebajara la pena impuesta al culpable por los delitos vistos anteriormente y recogidos en el Título XVI, en grado. Frente a la atenuante genérica del artículo 21.5^a del CP, existiendo por tanto un concurso de normas, resolviéndose por el principio de especialidad, determinándose la aplicación preferente del artículo 340.

La STS 1183/2003, de 23 de septiembre, en su fundamento jurídico 3º, indica que el artículo 340 del Código Penal, “al atenuar la responsabilidad criminal de los autores de delitos contra el medio ambiente, no establece barreras temporales, en función del desarrollo del proceso, sino que, de manera prácticamente ilimitada, permite

²¹⁹ Estas medidas parece que serán sobre todo las orientadas a la prohibición de actividades, imposición de condiciones o realización de actividades correctoras; SILVA SÁNCHEZ, J.M.; MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente”. Op. Cit. Pág.263.

²²⁰ Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.57; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y fauna y animales domésticos, y Disposiciones comunes”, en CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (Dir.), LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (Coord.), “Comentarios al Código penal”, Tomo IV, 4ª ed.Edit. Bosch, Barcelona, 2007, pág.2587

establecer la pena en el grado inferior, a expensas de la reparación voluntaria del daño causado. La norma genérica contempla, de manera más completa, todas las posibilidades de reparación de la víctima, sin tener en cuenta otros factores que lo de la mera temporalidad en la conducta de resarcimiento activo.” Continúa la sentencia indicando que se está ante un falso y aparente concurso de normas ya que los supuestos contemplados son diferentes. En todo caso la norma medioambiental es específica por lo que debe primar su aplicación sobre la genérica. Señala a su vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2º del Código Penal, no existe obstáculo alguno para que la atenuante específica pueda ser considerada como muy cualificada, lo que permite asimismo la rebaja en dos grados, ya que el precepto no distingue entre atenuantes genéricas y específicas.²²¹

En opinión de GARCÍA ÁLVAREZ y LÓPEZ PEREGRÍN, con el artículo 340 lo que hace el legislador es “introducir una atenuante específica que contribuya a facilitar en la práctica el principio “el que contamina, paga” y en tanto en cuanto la idea predominante debe ser intentar restablecer el equilibrio ecológico perturbado, el momento en que se produzca esta reparación es, a diferencia de lo que ocurre con la atenuante genérica, irrelevante.”²²²

5. CONSECUENCIAS ACCESORIAS

El Código Penal junto a la pena y las medidas de seguridad, prevé unas consecuencias jurídicas denominadas “consecuencias accesorias”, que presuponen la comisión de un delito y se imponen por los Jueces y Tribunales de lo criminal. Como afirma GARCÍA-PABLOS la imposición de las mismas no es preceptiva, sino, por lo general, potestativa.²²³

²²¹ Vid. Artículo 66.1.2ª del CP “*cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes*”.

²²² Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.57.

²²³ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Op. Cit. Pág. 67 y 68

El Código Penal recoge en su artículo 127, como consecuencia accesoria del delito, el comiso, se trata de privar al delincuente de los instrumentos, efectos y ganancias derivadas del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.²²⁴

El comiso no se prevé como amenaza dirigida a disuadir de la comisión del delito ni como castigo merecido por este delito. Aunque no tenga naturaleza de pena rige respecto al mismo las exigencias derivadas del principio de legalidad y del acusatorio, requiere una interpretación restrictiva, debe constar la oportuna vinculación causal entre efecto o instrumento del comiso y el comportamiento delictivo y la concreta idoneidad de aquellos para la ejecución del delito. A su vez, de acuerdo con el artículo 128 del citado cuerpo legal, es necesaria la proporción entre el valor de los efectos e instrumentos y la naturaleza o gravedad del delito.²²⁵

La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modifica el artículo 127, para adaptar la figura del comiso al contenido de la Directiva 2014/42/EU, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. La regulación del decomiso introduce importantes modificaciones que tienen como objeto aportar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos.²²⁶

²²⁴ Dispone el art.127 de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: “1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. 2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.”

²²⁵ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Op. Cit.Pág. 68 y ss.

²²⁶ Vid. Preámbulo de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Las novedades introducidas hacen referencia, a tres cuestiones: el decomiso sin sentencia; el decomiso ampliado; y el decomiso de bienes de terceros, para los que se incorporan mejoras técnicas orientadas a incrementar la eficacia y seguridad jurídica en su aplicación.²²⁷

²²⁷ Vid. Art.127 ter: “1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos: a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos, b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido. 2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.”; Art.127 bis: “1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito: a) Delitos de trata de seres humanos. b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264. d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia. e) Delitos relativos a las insolvencias punibles. f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial. g) Delitos de corrupción en los negocios. h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. i) Delitos de blanqueo de capitales. j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313. l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373. n) Delitos de falsificación de moneda. o) Delitos de cohecho. p) Delitos de malversación. q) Delitos de terrorismo. r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios: 1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada. 2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes. 3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida. 3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior. 4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento. 5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada. Art.127 quarter: “1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos: a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito. b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso. 2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.”

Inicialmente el decomiso del producto del delito ha estado ligado a la existencia de una condena penal previa por el delito cometido. Con este punto de partida, se afirmaba que un decomiso sin condena era necesariamente contrario al derecho, autorizaba el decomiso de efectos procedentes de un delito que no había sido probado y por el que no se había impuesto ninguna condena, dicha situación vulneraba la presunción de inocencia. Sin embargo, tal interpretación viene determinada por un análisis del decomiso unido a su regulación tradicional.²²⁸ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que el decomiso sin condena no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la imposición de una sanción ajustada a la culpabilidad por el hecho, sino que “es más comparable a la restitución del enriquecimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal” pues “dado que el decomiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la comisión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción”.²²⁹

Con la finalidad de incrementar la eficacia de la nueva regulación, se recoge la posibilidad de que el juez o tribunal pueda, mediante la estimación y valoración de la actividad desarrollada, determine una cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de bienes, en los supuestos en los que el decomiso de los bienes o efectos procedentes del delito no resulta posible en todo o en parte.²³⁰

6. ANTECEDENTES PENALES

Cuando existen antecedentes penales derivados de una sentencia firme por un delito en materia cinegética, se podrá inhabilitar al cazador para el ejercicio de la actividad cinegética por un tiempo determinado, además cabe la posible retirada de la

²²⁸ Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: de comiso (arts.127 a 127 octies)” en GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATAILLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015. Pág.399 y ss.

²²⁹ Vid. Decisión 696/2005del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (Dassa Foundation vs. Liechtenstein).

²³⁰ Cuando no sea posible localizarlos, se encuentran fuera del alcance de los tribunales, hayan sido destruidos, se haya disminuido su valor con relación al que tenían cuando fueron incorporados al patrimonio del sujeto, o por cualquier otra circunstancia. Asimismo, para mejorar la gestión de los activos intervenidos, se revisará la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se crea una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar, del modo económicamente más eficaz, la conservación, realización o utilización de los bienes intervenidos.

licencia de armas en determinados supuestos, como así lo recoge el CP. En este sentido, para la concesión de la licencia de armas, el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29 de enero), requiere una serie de documentos, entre ellos el certificado de antecedentes penales, que será determinante para que se conceda o revoque la misma.

En los casos en que existen antecedentes, ya sean penales o policiales,²³¹ en virtud de lo dispuesto en los artículos 84 y 112 de la LRJPAC, se le concede al solicitante trámite de audiencia, para que formule, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estime oportunas sobre dichos antecedentes de conducta, ya que podrían determinar una propuesta de resolución denegatoria de la licencia solicitada, por parte de la Autoridad Competente.²³²

La resolución, dictada por la Autoridad competente, tendrá en cuenta los antecedentes penales cancelados o no, la conducta y la dedicación real al ejercicio de la caza; concediendo o denegando la licencia, o en su caso revocando la licencia en vigor. Dicha resolución suele fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente, en lo dispuesto en los artículos 98.1 y 97.1 y 2 del Reglamento de Armas, en relación con el artículo 29.1.b) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Se valorará si los antecedentes podrían

²³¹ Vid. Antecedentes policiales desfavorables: derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han llevado, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.

²³² Dispone el art.84 de la LRJPAC “1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5. 2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”; y el art.112 de la LRJPAC “1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada”.

considerarse determinantes de una conducta peligrosa, pudiendo la posesión y uso de armas representar un riesgo propio o ajeno.²³³ En este sentido, el TC avala que la buena conducta del solicitante de la licencia de armas sea tomada en cuenta por parte de la Administración, a fin de proteger el interés público.²³⁴

Para el caso de cazadores furtivos, el incumplimiento de dichas condiciones da lugar en ocasiones a la denegación de la licencia de armas y la posible revocación de las mismas cuyos titulares incurrir en conductas constitutivas de delito.²³⁵ Podrá ser

²³³ Dispone el art.97.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas: “La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, acompañada de la siguiente documentación: a) Certificado de antecedentes penales en vigor; b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado; c) Informe de las aptitudes psicofísicas. Cuando se trate de la obtención de licencias sucesivas, el solicitante que sea titular de armas correspondientes a la licencia que se solicita habrá de presentar, con la solicitud de nueva concesión, el arma o armas documentadas, personalmente o por medio de tercero autorizado por escrito y que cuente con licencia correspondiente al arma o armas de que se trate, a efectos de revista”. Art.97.2: “Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación aportada. Cuando se solicite la concesión de las licencias D para armas de la categoría 2.ª, 2 y de las licencias E para armas de la categoría 3.ª, 2, dicha información se referirá también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes correspondientes, que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de las correspondientes licencias de caza y tarjetas federativas en vigor”; art.98.1: “En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno”; artículo 29.1.b) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “El Gobierno regulará las medidas de control necesarias sobre las materias relacionadas en el artículo anterior: b) Estableciendo la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición tendrá carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las cuales la concesión de las licencias, permisos o autorizaciones se limitará a supuestos de estricta necesidad. Para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones se tendrán en cuenta la conducta y antecedentes del interesado. En todo caso, el solicitante prestará su consentimiento expreso a favor del órgano de la Administración General del Estado que tramita su solicitud para que se recaben sus antecedentes penales”.

²³⁴ Vid. STC 114/1987, de 6 de julio de 1987, fundamento jurídico 4º.

²³⁵ En este sentido existe jurisprudencia que afirma que cuando se hayan cancelado los antecedentes penales no cabe denegación del otorgamiento de la licencia de armas por parte de la Administración, así la STS de 8 de julio de 1988, sala 3ª, fundamento de derecho 1º, “por la manifiesta inexistencia de datos objetivos que la justifiquen...destacar como el margen de discrecionalidad reconocido a la Administración en el otorgamiento de las licencias que consideramos no es absoluta, al encontrarse indisolublemente conectado con las “circunstancias de cada caso” y exigirse por ello la adecuada fundamentación de los hechos determinantes de la denegación.” ; STS de 30 de enero de 1984; STS de 3 de mayo de 1991; por el contrario otras sentencias afirman que cabe la denegación de la licencia de armas aún estando cancelados los antecedentes penales, así la STS 8206/2000, fundamento de derecho 5º “Por el contrario, cuando esta Sala se ha enfrentado a la existencia de condenas por hechos susceptibles de ser valorados por la Administración como demostrativos de la falta de aptitud para el uso de armas clasificadas como de 4ª categoría en el Reglamento vigente cuando se formuló la solicitud que se enjuicia -en el contexto del ejercicio de la facultad de valorar la conducta y antecedentes del interesado que la

denegada la licencia de armas de caza a la persona que posea antecedentes penales de este tipo, incluso derivadas de las infracciones administrativas de la Ley de Caza correspondiente, debido a que éstas pueden dar lugar a inhabilitación para obtener licencia de caza, licencia que el Reglamento de armas exige para la obtención de la licencia de armas.²³⁶

De acuerdo con el artículo 136 del CP, los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

- a) Seis meses para las penas leves.
- b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
- c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
- d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
- e) Diez años para las penas graves.²³⁷

Los plazos se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En

normativa reconoce a aquélla, calificado reiteradamente por la jurisprudencia de discrecional-, ha considerado que la simple cancelación de los antecedentes no es suficiente para demostrar dicha aptitud, pues, como dice la sentencia de 16 de enero de 1996 (recurso 11309/1991), la «formal extinción de las penas impuestas y de sus efectos (artículo 118 del Código Penal) no determina, sin más, como también admite la sentencia apelada, la automática concesión u otorgamiento de la Licencia de armas solicitada, de tal manera que aun extinguida la responsabilidad penal no cabe desconocer que para llegar a un juicio razonable y favorable sobre la conducta del solicitante se requería, para contrarrestar el negativo que surge de dicho historial delictivo, aun cancelado, que al menos se hubiera acreditado una conducta intachable, no circunscrita solamente en el aspecto jurídico-penal, dato éste que no se desprende de las actuaciones»; en este mismo sentido la STS, Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de diciembre de 2012 (nº de recurso 2963/2012).

²³⁶ Cfr. PALACIOS BLANCO, J. “Cuestiones sobre denegación y revocación de licencias de armas de caza. Jurisprudencia aplicable”. Artículo publicado en Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, Nº 17, de 1 septiembre de 2003

²³⁷ Artículo 136 redactado por el número setenta y cinco del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.²³⁸

Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Español de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.²³⁹

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CANCELACIÓN.

El artículo 95 del CP establece que se aplicarán las medidas de seguridad por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, siempre que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito o que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Cuando la pena impuesta por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador solo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 96.3.²⁴⁰

²³⁸ Así lo dispone el Art.136.2 del CP; a su vez el apartado 3º del artículo 136 establece que: *“Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia”*.

²³⁹ Vid. Art.136.5 del Código Penal.

²⁴⁰ Dispone el art.96.3 del Código Penal: *“Son medidas no privativas de libertad: 1. ª) La inhabilitación profesional; 2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España; 3.ª) La libertad vigilada; 4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado; 5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.”*

En relación a las medidas de seguridad no privativas de libertad, recogidas en el artículo 96.3 del CP, se puede imponer al cazador:

- La inhabilitación profesional.²⁴¹
- La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

A su vez el artículo 334, 335 y 336 del CP, establecen como medida de seguridad, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar.

Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas por una sentencia firme serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, solo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley.²⁴²

Permite la Ley y la Jurisprudencia, en el procedimiento administrativo correspondiente, que el órgano competente para resolverlo, pueda adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales o cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, o para evitar conductas peligrosas o violentas, si existen elementos de juicio suficiente para ello, siempre y cuando no se causen perjuicios de difícil o imposible reparación al interesado o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Debiendo ponderarse los intereses en conflicto, valorando siempre conductas concretas y personalísimas.²⁴³

8. IMPRUDENCIA POR EL USO DE ARMAS DE CAZA

Junto a estas figuras del apartado anterior, hay que referirse igualmente a los delitos y faltas imprudentes cometidos mediante el uso indebido de las armas en el ejercicio de la caza, tanto con referencia a la producción de daños materiales en el patrimonio, como de daños personales que afectan a la vida e integridad física de las

²⁴¹ Esta medida la prevé el art.333, 337, 337 bis, art.334 y art.336

²⁴² Vid. Art.137 del Código Penal.

²⁴³ Cfr. PALACIOS BLANCO, J. “Cuestiones sobre denegación y revocación de licencias de armas de caza. Jurisprudencia aplicable”. Op. Cit.

personas.²⁴⁴

La caza no solo puede lesionar el medio ambiente, también puede producir daños personales al ser una actividad de riesgo que se realiza de forma colectiva. Durante su ejercicio por descuido, fallo del arma, falta de experiencia en el uso de armas o falta de atención se puede producir un resultado lesivo, imputable a su autor como delito imprudente.²⁴⁵

Se debe hacer una breve aproximación al dolo. Según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la acción típica representándose la posibilidad de la producción del resultado. Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Si además, resulta acreditada la intención de conseguir el resultado, nos encontraremos ante la modalidad dolosa intencional en la que el autor persigue el resultado previsto en el tipo, en los delitos de resultado.²⁴⁶

Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico. En el conocimiento

²⁴⁴ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F.: “Delito de daños: evolución y dogmática (art. 263 Código penal)”. Edit. Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Madrid 2003. Pág. 328 y ss.

²⁴⁵ Cfr. CUENA BOY, A “Infracciones penales”, en GARCÍA ROMERO, C., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.P y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.I. “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2002, pág. 233.

²⁴⁶ Vid. STS de 28 de junio de 2013, fundamento de derecho Primero 2.

del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho resultado. Se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca.²⁴⁷

Desde un punto de vista técnico y jurisprudencial se ha considerado en numerosas ocasiones el influjo que, en el curso causal de las imprudencias y en la graduación de las mismas, puede tener la llamada culpa de la víctima. La concurrencia de esta última circunstancia, puede llegar a exonerar de responsabilidad al autor del hecho culposo, cuando la naturaleza de la misma sea de tal entidad que minimice la causalidad de la conducta desencadenante del resultado. En otros casos, puede hacer descender la culpa del agente, hasta derivarla hacia una falta de imprudencia leve.²⁴⁸

El delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.²⁴⁹

²⁴⁷ Vid. STS de 28 de junio de 2013, fundamento de derecho Primero 2.

²⁴⁸ Vid. STS de 30 de junio de 2000, fundamento jurídico quinto.

²⁴⁹ Cfr. STS. de 30/Junio/2000 (EDJ 2000/21768), afirma que “*Dicha acción se realiza con omisión del deber de cuidado, exigible a toda persona que maneja un arma de fuego, en las condiciones en que se encontraba el agente, que no eran otras que en una cacería en la que participaban otros varios compañeros de batida. La previsibilidad y probabilidad de que otras personas pudieran encontrarse en la línea de fuego, sólo podía ser despejada si el acusado hubiera dispuesto de plena visibilidad de todo lo que tenía a su frente. Al disparar hacia un lugar, en el que una maleza formada por hierba de mediana altura se interponía en la trayectoria de la bala, podía darse la circunstancia de que alguna persona estuviese oculta entre la vegetación, como sucedió en el presente caso*”; Con relación a las clases de culpa, la AP Burgos, en Sentencia núm. 214/2004, de 3/Diciembre (2004/262565), reiterando la doctrina contenida en sus anteriores pronunciamientos de 6/Marzo (EDJ 2002/17637) y 2/Septiembre/2002 (EDJ

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal.²⁵⁰

Ha de ponderarse que la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido o generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado.²⁵¹

De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o

2002/50601); téngase en cuenta el caso de la SAP Burgos, núm. 214/2004, de 3/Diciembre (EDJ 2004/262565).

²⁵⁰ Vid. STS de 27 de octubre de 2009.

²⁵¹ Vid. STS de 28 de junio de 2009, fundamento de derecho Primero 3

cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración.²⁵²

El Código Penal exige imprudencia grave en los supuestos previstos de punición sin dolo, en este sentido los artículos 142 y 152 de referido cuerpo legal, castigan el homicidio y las lesiones ocasionadas por imprudencia grave incriminando el supuesto de que se haya cometido el homicidio, utilizando armas de fuego.²⁵³

9. ESTADO DE NECESIDAD.

La antijuricidad de la conducta quedará excluida por las causas de justificación, por lo que el hecho aunque se incluya dentro de la conducta típica pasa a no ser ilícito.²⁵⁴

El artículo 20.5 del CP, recoge como causa de justificación el estado de necesidad, éste se aprecia cuando el sujeto en compelido a cometer un delito para evitar un mal mayor. Se produce un conflicto entre bienes jurídicos. El Código Penal exige que para evitar un mal propio o ajeno se lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurren tres requisitos; el primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; el segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, y por último, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen que para la apreciación del estado de necesidad, debe darse un peligro para el bien jurídico propio o ajeno que sea grave y que no pueda ser evitado por otras vías.

²⁵² Vid. SSTs de 27 de octubre de 2009 y de 26 de diciembre de 2011.

²⁵³ Cfr. CUENA BOY, A “Infracciones penales”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit, pág. 233 y 234.

²⁵⁴ Cfr. MUÑOZ CONDE, F. “Manual de derecho penal medioambiental”. Op. Cit. Pág. 157.

No obstante, la exención de la responsabilidad criminal en el estado de necesidad no excluye la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del CP.²⁵⁵

10. PROBLEMÁTICA DEL ERROR

Conforme a las reglas de accesoriedad de derecho o a las de acto, exigen de una forma indirecta comprobar la ausencia de una autorización administrativa lícita concedida al sujeto activo para poder realizar la acción del tipo. El derecho penal solo intervendrá cuando se incumpla lo establecido en el ámbito del derecho administrativo en relación al desarrollo de actividad.²⁵⁶

La autorización exigida para realizar la conducta pertenece a la tipicidad y su concurrencia permite excluirla.²⁵⁷ Cuando el tipo penal contenga una “prohibición represiva” que penalice determinados comportamientos lesivos o peligrosos para el bien jurídico, la autorización para realizar dicha conducta sirve como causa de justificación, por lo que representa una “dispensa normatizada” que permite excluir la antijuricidad del comportamiento típico.²⁵⁸

²⁵⁵ Dispone el art.118 del CP: “1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes: 1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos. 2.ª Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.º 3.ª En el caso del número 5º serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio. Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales. 4.ª En el caso del número 6.º, responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho. 2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.”

²⁵⁶ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág. 282.

²⁵⁷ Cfr. TIEDEMANN, K y KINDHÄUSER, U. “Umweltstrafrecht-Bewährung oder Reform?”. Edit. NStZ8. Pág. 342.

En opinión de HAVA GARCÍA, “la legislación administrativa establece los límites de la protección del bien jurídico con anterioridad a la norma penal y a la propia autorización”. Por lo que quien actúa de acuerdo con lo establecido en la autorización contando con los requisitos formales y materiales exigidos legalmente, no realiza un comportamiento penalmente típico pero sí jurídico. Será típico pero no antijurídico el comportamiento que se adecúe materialmente a los supuestos de hecho excepcionales previstos en las normas administrativas, aunque el sujeto no cuente para su realización con los requisitos formales.²⁵⁹

Constituirán elementos del tipo de carácter esencial tanto la contravención a la legislación protectora de complemento, como la falta de autorización administrativa para la propia realización del comportamiento. Ambos elementos deben ser cubiertos por el dolo del sujeto activo, el error ha de tratarse conforme a las reglas previstas en el artículo 14.1 del CP. Como señala MUÑOZ CONDE, cuando la creencia de estar actuando lícitamente recaiga en la concurrencia de una causa de justificación prevista en el artículo 20 del CP, existirá error de prohibición, cuando éste sea vencible, se le impondrá al sujeto activo la pena inferior en grado.²⁶⁰

Cuando el sujeto crea que actúa de forma legal, pero se produzca una ausencia de autorización lícita por parte de la administración o, ésta se halle viciada en relación con los delitos anteriores, habrá error de tipo, así como, cuando el sujeto interprete el contenido de la autorización de forma errónea (error vencible).²⁶¹

²⁵⁸ Cfr. BRAUER, J. “Die strafrechtliche Behandlung genehmigungsfähigen, aber nicht genehmigten Verhaltens”. Edit. Duncker & Humblot, Berlin. 1988. Pág. 48 y ss.

²⁵⁹ Cfr. HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág. 282.

²⁶⁰ Cfr. MUÑOZ CONDE, F. “Bases para una teoría del error orientada a las consecuencias”. Edit. La Ley. Madrid. 1991. Pág. 1043.

²⁶¹ Cfr. DE LA MATA BARRANCO, N. J., “Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita”. Edit. Cedecs. Barcelona. 1996. Pág. 131 y 132; HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Op. Cit. Pág. 284.

El desconocimiento (error de tipo) de cualquiera de estos extremos determinará la atipicidad de la conducta, aunque se tratara de error vencible, al no estar prevista la tipicidad de la modalidad imprudente.²⁶²

En opinión de CEREZO MIR, el error sobre la antijuricidad de la conducta, o error de prohibición, no afecta al dolo, por lo que el error de prohibición puede plantearse tanto en los delitos dolosos como en los culposos. En el error de prohibición vencible no queda excluida la responsabilidad dolosa, podrá dar lugar únicamente a una atenuación de la pena del delito doloso. El error invencible excluye la culpabilidad y la pena.²⁶³

11. PROBLEMÁTICA SANCIONADORA DE LOS ILICITOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS. PRINCIPIO NE BIS IN IDEM

Cabe destacar la conexión funcional entre el derecho penal y el derecho administrativo. El Código Penal se nutre de definiciones y figuras delictivas de conceptos fijados por el derecho administrativo, bien asumiendo la significación que tales conceptos tienen en su ordenamiento de origen o las redefine, según las necesidades particulares. La distinción entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, tanto en su vertiente teórica como práctica, ha suscitado una gran polémica doctrinal.

Señala GARCÍA-PABLOS, “desde un punto de vista estrictamente formal, la diferencia entre uno y otro injusto puede trazarse con nitidez, atendiendo a sus respectivos presupuestos, a la naturaleza de las normas legales que los define y castiga, a la de la sanción que en cada caso se impone, al órgano competente, al procedimiento legalmente previsto para acordar las mismas y a su forma de cumplimiento y ejecución”.²⁶⁴

²⁶² Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. Op. Cit. Pág.12

²⁶³ Cfr. CEREZO MIR, J. “la regulación del error de prohibición en el código penal español y su trascendencia en los delitos monetarios”. Edit. ADPCP, Tomo XXXVIII, Fascículo II, 1985, pág.279 y ss.

²⁶⁴ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Op. Cit. Pág. 30

El ilícito penal se sanciona con penas o medidas de seguridad, que pueden llevar aparejadas penas privativas de libertad, a diferencia del ilícito administrativo, que como se ha indicado anteriormente conlleva sanciones administrativas, nunca privativas de libertad, que impone la propia administración en el ejercicio de la potestad sancionadora que le es propia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el procedimiento a seguir para comprobar la comisión de un ilícito penal. En lo referente al ilícito administrativo, es el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el que regula el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración.

El *ne bis in idem* o prohibición de que un hecho pueda sancionarse dos o más veces, es un principio general del derecho sancionador, o un criterio concursal básico que veda la pluralidad de sanciones a una idéntica infracción, cuando se dé identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Este principio, no se consagra explícitamente en la Constitución, pero se entiende implícito en los principios de legalidad y tipicidad plasmados en el artículo 25 de la Constitución, a raíz de la Sentencia del TC 2/1981 de 30 de enero.²⁶⁵

Este principio tiene una aplicación particular en las relaciones recíprocas entre la propia sanción penal y la administrativa. A su vez, pueden concurrir con las sanciones civiles entre otras, que pueden tener fines y funciones distintas de la penal. Se dará una confrontación entre la sanción penal y la sanción administrativa por un mismo hecho cuando cumplan funciones semejantes, provocando una duplicidad de sanciones. Cuestión ésta que concurre en los casos previstos por las diferentes normas de caza de las diversas autonomías y los contemplados al respecto por el Código Penal.

De acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole, si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Según GARCÍA-PABLOS, “la circunstancia de que la más ágil potestad sancionatoria de la administración se haya anticipado al *ius puniendi* del orden jurisdiccional penal no impide a este último actuar con plena autonomía en cumplimiento de las atribuciones irrenunciables que la ley le

²⁶⁵ Cfr. COBO DEL ROSAL, M; VIVES ANTÓN, T. “Derecho Penal, Parte General”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 1999. Pág. 83.

asigna”. La sanción administrativa previa que se imponga al caso concreto, no puede limitar el eventual castigo de hechos indiciariamente delictivos. La sanción administrativa no evita la posible sanción penal.²⁶⁶

El Capítulo I del Título VIII de la Ley 1/1970, de 4 de abril, estatal de caza, en sus artículos 42 y 43, recoge y define las infracciones que son constitutivas de delito y faltas.²⁶⁷ El artículo 42 en el apartado 1 h) establece que serán castigados, como reos de

²⁶⁶ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Op. Cit. Pág. 45 y 46

²⁶⁷ Vid. art.42: Delitos de caza “Uno. Serán castigados, como reos de delito, con la pena de arresto mayor o multa de cinco mil a cincuenta mil pesetas y, además, a la privación de la licencia de caza o de la facultad de obtenerla por un plazo de dos a cinco años: a) Los que, sin la debida autorización, emplearen cebos envenenados. b) Los que colocaren, suprimieran o alteraren los carteles o señales indicadores de la condición cinegética de un terreno para inducir a error sobre ella. c) Los que cazaren de noche, con armas de fuego o accionadas por gas o aire comprimido, auxiliándose con los focos de un vehículo o motor o con cualquier otro dispositivo que emita luz artificial. d) Los que hicieren uso indebido de armas rayadas en las zonas de seguridad. e) Los que, sin el debido permiso, entraren en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, portando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. f) Los que, sin el debido permiso, cazaren en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, cuando el valor cinegético de lo cazado exceda de dos mil quinientas pesetas. g) Los que cazaren teniendo retirada la licencia de caza o estuvieren privados de obtenerla por sentencia judicial o por resolución administrativa firmes. h) El que cometa alguna de las infracciones comprendidas en el artículo siguiente, habiendo sido ejecutoriamente condenado con anterioridad dos veces por delitos o tres veces por faltas de las previstas en la presente Ley. Dos. En el supuesto del apartado c) del número uno del presente artículo, los Tribunales podrán, además, acordar la privación del permiso de conducir vehículos a motor por tiempo de dos meses a tres años a los culpables. Tres. Los delitos cometidos por personas que por su cargo o función estén obligados a hacer cumplir a los demás los preceptos que regulan el ejercicio de la caza, se sancionarán, en todos los casos, aplicando la máxima pena de la escala correspondiente al delito cometido”. Art.43: Faltas de caza: “Uno. Tendrán consideración de faltas de caza y serán sancionadas con la pena de arresto menor o multa de doscientos cincuenta a cinco mil pesetas, la realización de alguno de los siguientes hechos: a) Cazar desde aeronave, automóvil o cualquier otro medio de locomoción, cuyo uso para esta finalidad no esté autorizado expresamente en el Reglamento, o transportar en ellos armas desenfundadas y listas para su uso, aún cuando no estuvieren cargadas. En los terrenos sometidos a reglamentación cinegética especial, mientras se estén celebrando en ellos ojeos o monterías, esta prohibición se concretará al hecho de cazar desde los vehículos o al de transportar en ellos armas cargadas. b) Cazar, sin el debido permiso, en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, cuando el valor cinegético de lo cazado no exceda de dos mil quinientas pesetas. c) Cazar cuando la lluvia, nieve, niebla, falta de luz u otras causas similares reduzcan la visibilidad de forma tal que pueda producirse peligro para las personas o para sus bienes. d) Cazar en las proximidades de lugares concurridos o donde se estén celebrando actos públicos. e) Cazar con armas que disparen en ráfagas o provistas de silenciador. f) Utilizar explosivos con fines de caza, cuando formen parte de municiones o artificios no autorizados. g) Cazar en línea de retanca utilizando arma larga rayada. h) Hacer uso indebido de escopetas de caza en las zonas de seguridad o en sus proximidades. i) Cazar con municiones no autorizadas. j) Comerciar con especies protegidas o con piezas de caza cuya edad o sexo, en el caso de que sean notorios, no concuerden con los legalmente permitidos, o sin cumplir los requisitos reglamentarios. k) Abrir portillos en cercas o vallados o construir artificios, trampas, barreras o cualquier otro dispositivo que sirva o pueda servir para beneficiarse de la caza ajena. l) Destruir o dañar las instalaciones destinadas a la protección o fomento de la caza, así como los signos y letreros que señalicen el régimen cinegético de los terrenos, cuando estos últimos hechos no se llevaran a cabo con el propósito de inducir a error sobre la condición o calificación cinegética de tales terrenos. Dos. La reincidencia en falta de caza llevará consigo la privación de la licencia o de la facultad de obtenerla por tiempo de uno a dos años”.

delito el que cometa alguna de las infracciones comprendidas en el artículo 43, habiendo sido ejecutoriamente condenado con anterioridad dos veces por delitos o tres veces por faltas de las previstas en la Ley de caza, por lo que a la hora de determinar una conducta como delito no tiene en cuenta la propia acción u omisión del infractor, solo se remite a la eventualidad de la previa actuación castigada por la Administración.²⁶⁸

En relación con el principio *ne bis in idem*, esta Ley no establece de una forma expresa el contenido de dicho principio, aunque su artículo 46, en relación con las infracciones administrativas, recoge que “*constituirá infracción administrativa de caza toda acción u omisión voluntaria que vulnere las prescripciones de esta Ley o del Reglamento que se dicte para su aplicación y no estén comprendidas en los artículos 42 y 43 de la misma*”, por lo que de este artículo se deduce que no se produciría un *bis in idem* ya que rige el principio de subsidiariedad expresa. De acuerdo con MATA DE FRANCISCO, aunque de la lectura del artículo 46, no se recoge el principio *ne bis in idem*, por el que no se puede imponer coetáneamente sanciones penales y administrativas por un mismo hecho, la Ley de caza estatal refuerza el principio de seguridad jurídica.²⁶⁹

Por lo tanto no cabe la doble sanción por unos mismos hechos siempre que exista identidad entre sujeto, hecho y fundamento.

²⁶⁸ Se debe tener en cuenta que se derogan los preceptos penales sustantivos de la Ley de caza estatal por la disposición derogatoria única.1.e) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que establece que los delitos y faltas previstos en dicha Ley, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, sancionándose con multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de caza, o de la facultad de obtenerla, por un plazo de dos a cinco años

²⁶⁹ Cfr. MATA DE FRANCISCO, J. “Ne bis in idem y seguridad jurídica”. Tesis doctoral dirigida por DR. D.SANTA CECILIA GARCÍA, F. , Madrid, 2009. Pág. 100.

IV. MARCO CIVIL

SUMARIO 1. REGÍMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; 1.1. Cazador; 1.1.1. Obligación de indemnizar; 1.1.2. Seguro obligatorio de responsabilidad civil; 1.2. Titular del aprovechamiento cinegético; 1.2.1. Terrenos de aprovechamiento cinegético especial; 1.2.2. Otros terrenos cinegéticos especiales; 1.2.3. Terrenos de aprovechamiento cinegético común; 1.3. Responsabilidad civil de la Administración en materia cinegética; 1.3.1. Titularidad del aprovechamiento cinegético; 1.3.2. Responsabilidad cinegética residual; 1.3.3. Daños causados por especies no cinegéticas protegidas; 1.4. Titular del derecho; 1.4.1. Prevención del daño; 1.4.2. Prueba y valoración del daño; 1.5. Colisión de piezas de caza con vehículos; 1.6. Responsabilidad civil *ex delicto*.

1. REGÍMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad civil extracontractual, se contempla por el Código Civil, dentro del Capítulo II del Título XVI del Libro IV, donde se regulan las obligaciones nacidas de culpa o negligencia, así el artículo 1902 del CC recoge una responsabilidad genérica, donde quien causare un daño a otro mediando acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia estará obligado a reparar el daño causado.²⁷⁰ En relación a esto, el Tribunal Constitucional invierte la carga de la prueba, donde el perjudicado no debe probar la culpabilidad del agente, sino que es suficiente con acreditar la acción u omisión, el daño y la relación de causalidad entre ellos, por lo que recae en el causante del daño la carga de probar que obró sin culpa o negligencia.²⁷¹ Un obrar lícito puede dar lugar a responsabilidad civil, al no ir acompañado de la debida diligencia, por lo que

²⁷⁰ Dispone el art.1902 del Código Civil que: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

²⁷¹ Vid. STS de 31 de mayo y STS de 1 de julio de 1995 (RJ 1995/4106 y 1995/5423).

el Tribunal Supremo entiende que se debe exigir una diligencia adecuada para eximirse de la responsabilidad.²⁷²

En opinión de O'CALLAGHAN, la obligación de reparar, no es un tipo de responsabilidad extracontractual, “se trata, pues, de obligación (de reparar o indemnizar el daño) que nace del acto ilícito (que ha causado el daño). No es correcta la expresión de “obligación nacida de culpa extracontractual”, debido a que la obligación no nace de culpa, sino de un hecho ilícito que ha producido el daño, tanto más cuanto se va a una responsabilidad sin culpa, existiendo casos que explícitamente contempla la ley como responsabilidad objetiva”.²⁷³

La doctrina y la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 1902 del Código Civil, señalan como requisitos de la responsabilidad extracontractual los siguientes: acción u omisión culposa; resultado dañoso y relación de causa a efecto entre ambos. Respecto del primero de los requisitos, se exige que se realice un acto u omisión que sea ilícita o antijurídica y que la acción u omisión sea culpable. En relación al segundo requisito, el resultado dañoso, es el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento sufre una persona, el daño debe ser cierto y existente, se excluyen por tanto los puramente hipotéticos o eventuales. El principal problema que se plantea, es si son indemnizables los daños materiales y los morales; actualmente la doctrina y la jurisprudencia se inclinan a favor de la reparación tanto de los daños morales como de los materiales. El último requisito de responsabilidad, exige una relación de causalidad entre la acción u omisión del agente y el daño producido. En los casos en que la relación causal entre el acto u omisión del agente interfiere una acción u omisión culposa de la propia víctima, se produce una concurrencia de culpas en la producción del resultado dañoso, por lo que existirá una compensación de responsabilidades o de consecuencias reparadoras.²⁷⁴

²⁷² Vid. STS de 26 de mayo de 1976, STS de 15 de julio de 1993, STS de 27 de septiembre de 1993 y STS de 29 de octubre de 1993.

²⁷³ Vid. O' CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Los presupuestos de la obligación nacida de acto ilícito: La objetivación de la llamada responsabilidad extracontractual”. Edit. Anuario de Derecho Civil, 1986-1987, nº1. Pág.2; O' CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Compendio de Derecho Civil. Tomo II, Derecho de Obligaciones”. Edit. Díjusa, Madrid, 2009. Pag.697.

²⁷⁴ Cfr. Obligaciones nacidas de culpa o negligencia. Su concepto y fundamento. Elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual. El daño moral. Responsabilidad por hechos ajenos y por daños causado por los animales y por las cosas inanimadas. La responsabilidad objetiva en la moderna

En base al artículo 1103 del Código Civil, faculta a los Tribunales para moderar la responsabilidad procedente de la culpa, así cuando se produce una concurrencia de culpas entre el causante del daño y el perjudicado, no exime al primero de la obligación de indemnizar el daño producido, sino que se establecerá una moderación en la responsabilidad del primero reduciendo la proporción de la indemnización, repartiendo así el daño con el perjudicado.²⁷⁵

Ha de tenerse en cuenta la teoría del riesgo defendida por la doctrina, así DÍEZ-PICAZO, apunta que estableciendo que toda actividad que crea para los demás un riesgo especial, hace al autor de tal actividad responsable del daño que dentro de este marco de riesgo se pueda causar, sin que haya que buscar si ha existido culpa por su parte.²⁷⁶ Por último el legislador ha introducido la responsabilidad objetiva en algunos segmentos de la actividad humana, en los que se produce un riesgo inherente a la misma, es el caso de la LC de 1970.²⁷⁷

Siempre que el daño esté conectado causalmente con la conducta realizada y sea antijurídico y cierta, nace a cargo del responsable la obligación de reparar el daño o perjuicio causado. Así se desprende de los artículos 1101 del CC (para la responsabilidad contractual); 1902 del CC (para la responsabilidad extracontractual) y 109 CP (para la responsabilidad *ex delicta*). Esta reparación del daño puede efectuarse de forma específica, también llamada reparación in natura o en especie, que consiste en restablecer la situación que existía con anterioridad a la producción del daño, reparando o enmendando la cosa dañada o, si ello no es posible, sustituyéndola por otra igual a la destruida. Por otra parte, la responsabilidad civil puede ser subjetiva y objetiva, la primera, deriva de la culpa en que haya incurrido el autor del daño, lo que supone que para exigir la reparación habrá de probarse efectivamente la existencia de aquella. En lo referente a la responsabilidad objetiva, esta deriva de la obligación de resarcimiento de

legislación. Tema 84. En TEMARIO DE DERECHO CIVIL JUDICATURA, “Obligaciones y Contratos” (Volumen II), Edit. Carperi, Madrid, 2007, pág.3 y ss.

²⁷⁵ Vid. STS de 17 de mayo de 1994 (RJ 1994/3588).

²⁷⁶ Cfr. DÍEZ-PICAZO, L. “Derecho de daños”. Edit. Civitas. Madrid. 1999, pág.108.

²⁷⁷ Vid. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I. “La responsabilidad civil en materia de caza”, en GARCÍA ROMERO, C.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.P. y CUENA BOY, A “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2002, pág.239 y ss.

la relación causal entre la conducta, activa o pasiva del autor y el resultado dañoso producido con independencia de que haya existido culpa o negligencia por parte de aquel.²⁷⁸

La prescripción de la acción para solicitar el resarcimiento del daño causado, derivado de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del CC, prescribe de acuerdo con el artículo 1968 del CC, por el transcurso de un año desde que la víctima conoce la existencia del daño y está en condiciones de ejercitar la acción.²⁷⁹

La responsabilidad civil relativa a la caza se incluye dentro de la responsabilidad civil extracontractual, por el hecho de que la misma se da fuera de toda relación jurídica o vínculo contractual preexistente entre los sujetos, estableciéndose la obligación de reparar el daño causado bien sea por hechos propios o ajenos, cometidos por personas de las que se debe responder o bien, causada por animales. A este respecto debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 1911 del CC, por lo que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

El régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de la actividad cinegética se contempla en la LC de 1970 y en su reglamento de desarrollo, al respecto, como se ha visto anteriormente, en virtud de la distribución competencial recogida en la CE en su artículo 148.1º.1, se establece que serán las CCAA quienes podrán asumir competencias en materia de caza y por tanto sobre el régimen de responsabilidad civil. Por lo que dicha responsabilidad prevista en la legislación estatal de caza se aplicara de forma supletoria y con una supletoriedad de segundo grado se aplicara la normativa establecida en el Código Civil en materia cinegética.²⁸⁰

La responsabilidad civil derivada del ejercicio de caza, prevista en las legislaciones autonómicas, prevén una distinción entre la responsabilidad del cazador y la del titular del aprovechamiento cinegético. Cuando se haga referencia a la

²⁷⁸ Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, J. “Derecho civil español común y foral”. Tomo 4, Edit. Reus, Madrid, 1992, pág.920 y 998; ALBALADEJO, M. “Derecho Civil, (Derecho de obligaciones)”. Tomo II, Vol. Segundo, 9a ed. Edit. Bosch, Barcelona, 2011.

²⁷⁹ Vid. STS de 14 de octubre de 1991 (RJ 1991/6919).

²⁸⁰ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch 2007. Pág.91.

responsabilidad del cazador, ésta será una responsabilidad civil sujeta al derecho privado; si por el contrario, se hace referencia a la responsabilidad del titular, teniendo en cuenta que puede ser tanto persona física como jurídica, la visión desde la que se debe afrontar las reclamaciones indemnizatorias, sería la jurídico privada si se dedujese demanda civil exclusivamente contra el titular del aprovechamiento, y administrativa, si se enfoca desde un punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial de la Administración), en cuyo caso, solo podrá prosperar la reclamación si se acredita el nexo causal entre el funcionamiento, normal o anormal, y el daño producido.²⁸¹

Como anteriormente se ha indicado, la responsabilidad civil en materia de caza, distingue entre el cazador y la del titular del aprovechamiento cinegético:

1.1. Cazador

1.1.1. Obligación de indemnizar.

Dentro de la normativa estatal, la Ley de caza en su artículo 33.5 establece que, todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o fuerza mayor, a su vez el reglamento de caza estatal en su artículo 35.6 a), especifica que no se considerarán como casos de fuerza mayor los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o de las municiones. La obligación indemnizatoria la recogen las diversas leyes autonómicas de caza.²⁸²

²⁸¹ Vid. Artículo 2.e) Ley 29/98, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio y 9.4º Ley Orgánica del Poder Judicial

²⁸² Vid. Art.53.2 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco; art. 83.2 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia ; art.54.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.64.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.18.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.62.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana; art.63.7 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia; art.68.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón ; art.32.4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias; art.6.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.69 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.50.5 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.17.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y el art.24.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

En relación con la culpa o negligencia del perjudicado, recogida como excepción a la obligación indemnizatoria del cazador en el artículo 33.5 de la Ley de caza estatal. De acuerdo con RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, es la víctima quien con su negligente obrar anula toda imputación del daño al cazador, siempre que absorba íntegramente toda la culpa.²⁸³ Asimismo, CUEVILLAS MATOZZI, indica que para calificar un hecho dañoso como debido únicamente a la negligencia del perjudicado, el cuidado del cazador deberá ser acorde a las circunstancias, siendo la acción del perjudicado imprevisible en el sentido de que la conducta de la víctima haya sido insospechada y repentina para el agente.²⁸⁴

Cuando el hecho fuera debido a fuerza mayor ajena al propio ejercicio de la caza, se rompe la relación de causalidad entre la acción de cazar y el daño, por lo que el cazador no responderá por ello. La doctrina define el caso fortuito y la fuerza mayor como el evento imprevisible (caso fortuito) o que, pudiendo ser previsto, es inevitable e insuperable (fuerza mayor). La prueba de la imprevisibilidad o de la inevitabilidad del evento dañoso corresponde al causante del daño, el cual quedará exonerado de responsabilidad si prueba la concurrencia de algunos de tales elementos en la producción del daño. La concurrencia del caso fortuito o de la fuerza mayor debe valorarse subjetivamente pero no en relación con las circunstancias del sujeto productor del daño, sino en relación con la conducta y las circunstancias de un buen padre de familia. Así también lo recoge el TS, en su sentencia del 31 de marzo de 1995.²⁸⁵

La doctrina en relación a lo establecido en el Reglamento estatal de caza sobre la no consideración como fuerza mayor de los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos, establece que la fuerza mayor es un acontecimiento externo al círculo de actuación del agente, que reúne las notas de imprevisibilidad o inevitabilidad,

²⁸³ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I. "La responsabilidad civil en materia de caza" en AAVV. "Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza". Op. Cit. Pág.265.

²⁸⁴ Cfr. CUEVILLAS MATOZZI, I. "La relación de causalidad en la órbita del derecho de daños". Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. Pág.169.

²⁸⁵ Vid. STS 31 de marzo de 1995 "*Es esencial a la situación de caso fortuito la existencia de un evento imprevisible dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen en el caso de que se trata, o inevitable de una posibilidad de orden práctico, en manera alguna puede apreciarse cuando el resultado dañoso producido emana de un comportamiento culposo por no empleo de la precisa diligencia*"

por lo que el cazador no puede alegar rotura o fallo de escopeta para eximirse de la responsabilidad.²⁸⁶

Esta responsabilidad civil del cazador, viene configurada por la legislación de caza como una responsabilidad objetiva derivada del propio hecho de cazar.²⁸⁷

En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida.²⁸⁸ A estos efectos, se considerarán únicamente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la misma en la ocasión y lugar en que el daño se haya producido y que se hubiesen utilizado armas de la clase que originó el daño.²⁸⁹ A su vez, serán subsidiariamente responsables el titular del coto de caza u organizador de la partida de caza. De igual forma, lo recogen las leyes autonómicas de caza y la propia jurisprudencia.²⁹⁰

Asimismo, responderá el cazador de los daños ocasionados durante la actividad cinegética desarrollada por el menor que esté a su cargo, se justifica por la transgresión del deber de vigilancia que a los padres o tutores les incumbe sobre sus hijos o tutelados, con presunción de culpa en quien la ostenta, sin que se exonere de

²⁸⁶ Cfr. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. “Sistema del Derecho civil: vol. II (tomo 2): contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual”. Edit. Tecnos, Madrid, 1989. Pág. 605; en este sentido, O’CALLAGHAN entiende que el caso fortuito o la fuerza mayor son consideradas como “causas externas que rompen el nexo causal entre la acción u omisión y el daño producido”; vid. O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Los presupuestos de la obligación nacida de acto ilícito: La objetivación de la llamada responsabilidad extracontractual”. Edit. Anuario de Derecho Civil, 1986-1987, nº1. Pág.15 y 16.

²⁸⁷ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I.”La responsabilidad civil en materia de caza”, en AAVV.” Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.264.

²⁸⁸ Dispone el art. 35.6 b) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 “*En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza. A estos efectos, se considerarán únicamente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la misma en la ocasión y lugar en que el daño haya sido producido y que hubieren utilizado armas de la clase que originó el daño*”.

²⁸⁹ Vid. Art.31.12 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza: “*queda prohibido que los ojeadores, batidores, secretarios o podenqueros cacen con cualquier clase de armas*”.

²⁹⁰ Vid. Art.34.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía; art.68.1 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.50.2 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art 24.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; SAP de Girona 377/2001 de 19 de octubre.

responsabilidad por el hecho de no hallarse presente el padre o tutor cuando se cometa el hecho ilícito.²⁹¹

En los supuestos de caza o captura ilegal de especies cinegéticas, deberá indemnizar el causante del daño al titular del acotado por el importe del valor cinegético de mercado de las piezas cazadas. Dicho importe se determinará técnicamente en cada caso atendiendo a los baremos de valoración establecidos por la Administración. Cuando la infracción fuera cometida en otra clase de terreno se indemnizará a la administración o a quien resulte perjudicado.²⁹²

La Ley de caza estatal en su artículo 52, así como las CCAA en sus respectivas legislaciones de caza recogen la responsabilidad civil del cazador, imponiendo la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros cuando se practique la caza con armas o artes que puedan producir daños a las personas o bienes. Las CCAA que no recogen este hecho, se regirán por lo establecido en el artículo 1902 del CC.²⁹³

1.1.2. Seguro obligatorio de responsabilidad civil

Tanto las legislaciones autonómicas en materia de caza como la legislación estatal, establecen la obligación de suscribir por el cazador un contrato de responsabilidad civil cuando se cace con armas, que cubra la obligación de indemnizar los posibles daños a las personas o a los bienes.²⁹⁴

²⁹¹ Vid. SAP de Madrid 1072/2004 de 24 de noviembre; STS de 7 de enero de 1992 y STS de 22 de septiembre de 1992.

²⁹² Vid. Art.62.2 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

²⁹³ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C., MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit Pág. 91.

²⁹⁴ Vid. Art.52 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza; art.6.2.c) de la Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, de 17 de diciembre; art.53.1.d) de la Ley 8/ 2003 de protección de la flora y fauna silvestres de Andalucía, de 28 de octubre y art.42.1.c) y 48 del Decreto andaluz 230/2001; art.16.1.b) de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha; art.68.2 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón; art.69.1.b) de la Ley 7/2003 de Murcia de caza y pesca fluvial, de 12 de noviembre; art.58.1.c) de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.28.1.b) y 33 de la Ley 7/1998 de caza de Canarias, de 6 de julio; art.49.1.d) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura; art.14.1.f) de la Ley 4/1996 de caza de Castilla-León, de 12 de julio; art.32.b) de la Ley 2/1989 de caza de Asturias, de 6 de junio; art.6.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra; art.28.1.f) y art.51 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial; art.

La indemnización de los daños corporales ocasionados a las personas por la acción de cazar viene determinada en el Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria.²⁹⁵

El Seguro de responsabilidad civil del cazador, de suscripción obligatoria, constituye una especialidad del seguro de responsabilidad civil que tiene por objeto la cobertura, dentro de los límites fijados en el Reglamento, de aquella en la que pueda incurrir el cazador con armas con ocasión de la acción de cazar. Todo cazador con armas deberá, durante la acción de cazar, estar asegurado por un contrato de Seguro de responsabilidad civil. No se podrá obtener la licencia de caza sin haber acreditado la previa celebración de este contrato de seguro ni practicar el ejercicio de la misma sin la existencia y plenitud de efectos del mismo.²⁹⁶ Por contra, sí se practicase el ejercicio de la caza sin el correspondiente seguro, la licencia de caza carecerá de validez y se entenderá nula de pleno derecho.²⁹⁷

El seguro tiene ámbito de cobertura en todo el territorio español, dentro de los límites cuantitativos fijados en el Reglamento, límites que las partes podrán superar voluntariamente e incluso incluir en la misma póliza otras coberturas. El referido seguro cubrirá tanto los daños corporales causados a las personas con ocasión de la acción de cazar por un disparo involuntario del arma, como los daños causados a las personas en tiempo de descanso dentro de los límites del terreno de caza, en tanto se esté practicando el ejercicio de la misma. Excluido del ámbito de la cobertura quedarían los supuestos en que el cazador no esté obligado a indemnizar porque el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. No se considerarán

15.1.f) y 44 de la Ley 9/1998 de caza de la Rioja, de 2 de julio; art.27.1.e) y 64.2 de la Ley de 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.5.3.c) de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

²⁹⁵ Vid. Art.3 del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero: “*El seguro de suscripción obligatoria cubre la indemnización de los daños corporales ocasionados a las personas por la acción de cazar hasta el límite máximo de quince millones de pesetas por víctima*”.

²⁹⁶ Vid. Art.1 del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador.

²⁹⁷ Vid. Art.36.5 b) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

casos de fuerza mayor los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o de las municiones.²⁹⁸

El Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador establece, en su artículo 5, que el período de duración del contrato será de un año, prorrogable conforme al artículo 22 de la Ley de Contrato de seguro²⁹⁹. Como excepción, podrá pactarse un plazo de duración inferior al año cuando se corresponda con el de las licencias de caza temporales expedidas por las CCAA.

El artículo 8 del citado Reglamento, establece el derecho de repetición que se le atribuye al asegurador, derivado de los supuestos de daño o perjuicio causado a un tercero debido a conducta dolosa del asegurado, como son los ocasionados por cazar sin haber obtenido la correspondiente licencia o careciendo ésta de validez; con armas prohibidas; en época de veda; bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes; por uso temerario de armas de caza en zonas de seguridad; así como en los casos que el causante del daño incurra en delito de omisión de socorro, sin perjuicio de cualesquiera otros en que pudiera concurrir dolo.

Este derecho de repetición tan amplio a favor de la aseguradora ha sido criticado por la doctrina, al incluirse supuestos en los que ha existido una acción culposa por parte del asegurado. SÁNCHEZ CALERO indica que en suma, no cumple el seguro obligatorio su propia finalidad en cuanto que no cubre al cazador de una manera eficaz del riesgo de que surja una deuda de resarcimiento a un tercero por daños personales que pueda causarle con motivo de la caza.³⁰⁰

A su vez el Reglamento recoge, que el Instituto Nacional de la Salud y las demás entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a reclamar de las

²⁹⁸ Vid. Art.2.2 y 2.3; art.3 y art.4 del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador.

²⁹⁹ Vid. Art.22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro: “La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso...”

³⁰⁰ Cfr. SÁNCHEZ CALERO, F. “El seguro obligatorio de caza”. En Revista Española de Seguros, Madrid, 1977. Pág.248.

entidades aseguradoras, el importe de la asistencia sanitaria y farmacéutica que hubieran prestado a los terceros perjudicados hasta el límite de la cobertura voluntaria del Seguro de responsabilidad civil del cazador causante del siniestro, caso de haberse suscrito un seguro voluntario. Si únicamente ha sido concertado el seguro obligatorio o en caso de inexistencia de seguro, el derecho de reclamación será ejercitable, según los casos, frente a la entidad aseguradora o al Consorcio de Compensación de Seguros y hasta el límite del aseguramiento obligatorio.³⁰¹

El cazador que tenga cubierta la responsabilidad civil obligatoria puede contratar opcionalmente un seguro de responsabilidad civil voluntario o suplementario, en ampliación de las coberturas del seguro obligatorio, cubriendo no solo daños personales, sino también materiales y perjuicios consecutivos directos causados involuntariamente a terceros durante el ejercicio de la caza. Solo se indemnizarán con cargo a la garantía del seguro voluntario los importes que excedan de los límites del seguro obligatorio del cazador o aquellos daños que no resulten amparados por las coberturas de éste. También pueden quedar garantizadas la constitución de fianzas judiciales y las costas judiciales, excepto sanciones y multas; la cantidad máxima exigible para el conjunto de daños corporales, materiales y costas judiciales en cada siniestro será la suma asegurada. La Responsabilidad Civil garantizada se extiende igualmente a la cobertura de la posesión o uso con fines lícitos y con el correspondiente permiso, de armas destinadas al ejercicio de la caza o del tiro deportivo; la propiedad de un máximo de dos perros de caza y la participación en competiciones autorizadas de tiro deportivo o en los entrenamientos de las mismas, en tanto éstas se realicen en el recinto adecuado.³⁰²

Las aseguradoras al contratar seguros de responsabilidad civil asumen, ante la víctima que no forman parte del contrato, la obligación de indemnizar todos los casos que surgen de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa, según establece STS de 17 de abril de 2015.³⁰³

³⁰¹ Vid. Disposición Adicional Única del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria.

³⁰² Vid. Art.4 del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero: “1. Las partes podrán acordar voluntariamente que la cobertura del seguro cubra la responsabilidad civil del cazador superando los límites para el seguro de suscripción obligatoria fijados en el presente Reglamento. 2. En la misma póliza se podrán incluir también otras coberturas de seguro.”

1.2. Titular del aprovechamiento cinegético

1.2.1. Terrenos de aprovechamiento cinegético especial (cotos de caza)

La LC de 1970 recoge, en su artículo 33.1, que los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados, subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos. Según ORTUÑO NAVALÓN y MANZANA LAGUARDA, dicha responsabilidad no puede imputarse al titular del aprovechamiento en su condición de propietario del animal causante del daño, ya que la pieza de caza se trata de “*res nullius*” y no de “*fructus fundi*”. Por su parte CUENCA ANAYA, considera que para averiguar el fundamento de dicha responsabilidad hay que partir de la disociación existente entre el derecho a cazar y el derecho sobre las piezas de caza, los propietarios que se reserven en exclusiva el derecho a cazar responderán de los perjuicios que resulten de esa reserva.³⁰⁴

La exacción de la responsabilidad por daños causados por piezas de caza se ajustará a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como la repetición de responsabilidades en los casos de solidaridad derivados de acotados constituidos por asociación.³⁰⁵ A este respecto, el artículo 1906 del CC, establece la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético sobre los daños causados por las especies cinegéticas en las fincas colindantes, siempre y cuando medie dolo, omisión o haya impedido por acción u omisión la multiplicación del mismo. En virtud de esta responsabilidad pondera también el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, de los perjuicios que éste cause aunque se le escape o extravíe.³⁰⁶ A su vez, en ambos

³⁰³ Vid STS, de la Sala 1ª, de 17 de abril de 2015: “*La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley (art.76 LCS) (EDL 1980/4219) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa...*”.

³⁰⁴ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.104; y CUENCA ANAYA, F. “La caza en las Comunidades Autónomas: derecho comparado”. Edit: Al-Andalus, Sevilla, 1998. Pág.64.

³⁰⁵ La responsabilidad por los daños causados en una finca cuando no se pueda precisar la procedencia de la pieza de caza que ha causado el daño, será solidaria la responsabilidad entre los titulares de los acotados colindantes y subsidiariamente los dueños de los terrenos. Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C., MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.104.

casos, por parte de la jurisprudencia se consagra una responsabilidad objetiva que solo cesará cuando el daño proceda de fuerza mayor o sea culpa de la víctima.³⁰⁷

Frente a lo establecido en el Código Civil que menciona la heredad de caza, la LC de 1970, se refiere a los terrenos de aprovechamiento cinegético especial “acotados”, por lo que los daños que procedan de la caza de estos acotados, se regulará por la ley estatal y por el contrario, los daños que procedan de terrenos de aprovechamiento cinegético común, se regirán por el Código Civil.³⁰⁸

Los derechos y obligaciones de aprovechamientos cinegéticos corresponderán al propietario o a los titulares de otros derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza, estos también serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos.³⁰⁹

No existe unanimidad en la posición que tiene la doctrina en relación al tipo de responsabilidad. Así, DÍEZ-PICAZO, indica que se trata de una responsabilidad por culpa, ya que impone al titular del aprovechamiento adoptar las medidas precisas para evitar la salida de la caza del espacio acotado o para mantener dentro del coto un número prudente de piezas.³¹⁰ Otros autores como SÁNCHEZ GASCÓN o LAGUNA DE PAZ, sostienen que frente al régimen previsto en el artículo 1906 del CC, la Ley de caza construye un específico régimen de responsabilidad de carácter objetivo.³¹¹

³⁰⁶ Dispone el art.1906 del Código Civil que: “*El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.*”; art. 1905 Código Civil “*El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido*”.

³⁰⁷ Vid. ORTUÑO NAVALÓN, C., MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 87 y 88.

³⁰⁸ Vid. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I.”La responsabilidad civil en materia de caza”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.247.

³⁰⁹ Vid. Art.6 y art.33.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

³¹⁰ Cfr. DÍEZ-PICAZO L. “Derecho de daños”. Op. Cit. Pág.138 y ss.

La legislación autonómica recoge la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético, pero no se menciona nada sobre la responsabilidad subsidiaria del propietario. De acuerdo con LAGUNA DE PAZ, aunque el propietario por sí mismo no explote cinegéticamente sus terrenos se beneficia de ello, justificando así su responsabilidad subsidiaria, ello sin perjuicio del derecho a repetir.³¹²

En los casos en los que el propietario del terreno arriende la explotación agrícola por un lado y por otro la caza, el titular del arrendamiento agrícola, salvo pacto en contrario, podrá reclamar los daños que la caza ocasione en su explotación primero al titular del aprovechamiento cinegético y subsidiariamente al propietario del terreno, como así lo recoge la STS de 30 de abril de 1991.

El perjudicado por el daño debe dirigir, en primer lugar, su acción contra los titulares del acotado como responsables directos, o bien, conjunta contra los titulares del acotado y contra los propietarios del terreno, ya que responderán subsidiariamente. De acuerdo con la SAP de Ciudad Real de 9 de abril de 1996, será necesaria la declaración de responsabilidad del obligado directo para hacer responder al obligado subsidiario, por lo que no cabe emprender acciones no conjuntas contra el propietario y el titular del acotado.³¹³

En opinión de RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, la responsabilidad objetiva que prevé el artículo 33 de la Ley de caza estatal, es independiente del tipo de aprovechamiento cinegético principal del coto, así lo establecen la SAP de Segovia de 13 de marzo de 1997 y la SAP de León de 13 de marzo de 1997. Esta última entiende que salvo prueba en contrario, cuantas piezas de caza existan en un acotado pertenecen al propietario o titular del mismo. Para que nazca la responsabilidad del artículo 33 de la Ley de caza, junto con la titularidad de la propiedad, es necesario que los animales que

³¹¹ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 159; SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de Caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988. Pág. 260.

³¹² Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.159.

³¹³ Vid. SAP de Ciudad Real de 9 de abril de 1996, “no se puede declarar la responsabilidad del propietario del terreno si no es con carácter subsidiario, y para ello se ha de declarar previamente el de los responsables principales que no se puede realizar al no haber sido llamados a este pleito”.

han causado el daño procedan del coto para que se produzca el nexo causal entre pieza de caza y el daño, así lo recoge la SAP de Valladolid de 15 de noviembre de 1994.

Establece el artículo 35. 1 b) del Reglamento estatal de caza, que en los casos en que no resulte posible precisar la procedencia de la caza respecto a uno determinado de los varios acotados que colinden con la finca, la responsabilidad por los daños originados en la misma por las piezas de caza será exigible solidariamente a todos los titulares de acotados que fueren colindantes y subsidiariamente a los dueños de los terrenos. Del mismo se deduce, que para aplicar la solidaridad será necesario que se aúnen concurrencia de distintas explotaciones de caza e imposibilidad de precisar la procedencia de los animales entre los diferentes acotados.³¹⁴

En relación con la caza procedente de estos terrenos cinegéticos especiales, vendrá a responder el Estado o la Administración a la que estuviera adscrito, siendo ésta una responsabilidad de carácter objetiva, como así lo señala la STSJ de La Rioja de 14 de mayo de 1996 (Sala de lo Contencioso-Administrativa).³¹⁵

Las CCAA recogen en sus legislaciones de caza el principio establecido por la Ley de caza estatal, donde los titulares de los aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños producidos por las especies cinegéticas que procedan de dichos aprovechamientos.³¹⁶ Esta responsabilidad cesa en los casos en que el daño se

³¹⁴ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I. "La responsabilidad civil en materia de caza", en AAVV "Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza". Op. Cit. Pág.251 y ss.

³¹⁵ Vid. STSJ de La Rioja de 14 de mayo de 1996: "...configurando la responsabilidad patrimonial de la Administración con un sistema de responsabilidad objetiva, independiente del dolo o culpa de las autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo. Es evidente que, una vez acreditado que los corzos que ocasionaron los daños en el viñedo del actor procedían de una reserva de la Comunidad Autónoma, surge conforme a lo dispuesto en los arts. 33 de la Ley de Caza y 10 del Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, la obligación de la Administración de indemnizar al actor los daños sufridos como consecuencia del normal funcionamiento del servicio público prestado por La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

³¹⁶ Vid. PAÍS VASCO: art.53.1 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza; Galicia: art.62.2 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; ANDALUCÍA: art.34.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres "Los titulares de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas, incluidas en el plan técnico y que procedan de los citados aprovechamientos. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos"; ASTURIAS: art.38.2 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza "En los terrenos que tengan un régimen cinegético especial y cuyo titular no sea el Principado de Asturias, la indemnización de los daños producidos por

deba a fuerza mayor, culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero ajeno al titular de la explotación. La referida responsabilidad será exigible por el procedimiento

las especies cinegéticas será responsabilidad del titular”; CANTABRIA: art.63.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria “Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de sus terrenos cinegéticos. Cuando procedan de terrenos no cinegéticos, y salvo lo señalado en el apartado siguiente, se estará a lo dispuesto en la legislación civil”; LA RIOJA: art.13.1.a) de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza “La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas en todo tipo de terrenos se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal, civil o administrativa, que resulte de aplicación. A estos efectos, se considerarán titulares de los derechos cinegéticos del terreno: a) En los terrenos cinegéticos, los titulares de los mismos conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título III de esta Ley”; MURCIA: art.84.6 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial “Los titulares de los cotos de caza o pesca fluvial serán responsables de las infracciones a la presente Ley cometidas en el interior de los mismos por sus vigilantes, guardas particulares o por cuantas personas estén bajo su dependencia o autorizados.”; VALENCIA: art.41.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza “Los titulares de los espacios cinegéticos serán los responsables de los daños que las piezas de caza ocasionen en los cultivos e inmuebles ajenos existentes en el espacio cinegético, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan técnico de ordenación cinegética.”; ARAGÓN: art.69.1 a) y b) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza, “a) En el caso de estar pactada la responsabilidad civil entre los propietarios o titulares de los terrenos o ganados afectados y los titulares de los derechos cinegéticos de las especies de caza que produzcan los daños, se estará a lo dispuesto en tales pactos, siempre que se ajusten al ordenamiento jurídico.b) A falta de pacto, la responsabilidad se atribuirá del siguiente modo:Si se trata de daños originados por especies de caza procedentes de terrenos cinegéticos, serán responsables los titulares de los derechos cinegéticos del terreno”; CANARIAS: art.32.1 y 2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza “Los daños producidos por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos sometidos a régimen cinegético especial, serán indemnizados por los titulares de aprovechamientos cinegéticos sobre dichos terrenos. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos. 2. Las entidades públicas o privadas responsables de la administración y gestión de un terreno cinegético especial, serán responsables de los daños producidos por la caza existente en los citados terrenos sometidos a su jurisdicción.”; NAVARRA: art.86.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca “El resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera se indemnizará por quienes resulten responsables conforme a la legislación civil, excepto los daños producidos por la fauna cinegética que habite en el interior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad, tales como autopistas, autovías u otras infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc., y que cuenten con zonas adyacentes valladas en toda su longitud, en los que se considerará responsable al propietario, titular o concesionario de las mismas.”; BALEARES: art.50.2 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial “Los titulares de aprovechamientos cinegéticos son responsables de los daños materiales generados a los cultivos y al arbolado por las piezas de caza dentro de sus terrenos y colindantes, siempre que los daños fueran evitables mediante la aplicación del correspondiente plan técnico de caza aprobado o autorizaciones de control de especies. Subsidiariamente, son responsables de éstos los propietarios de los terrenos, con la excepción de aquellos casos en los que la causa del daño es debida a un tercero, ajeno a los anteriores. En el caso de zonas de caza controlada, si la consejería competente en materia de caza ha cedido su aprovechamiento cinegético a una sociedad de cazadores, responderá ésta y, subsidiariamente, la consejería competente en materia de caza.”; CASTILLA Y LEÓN: art.12.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza “La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a sus propietarios.”; CASTILLA LA MANCHA: art.8.2.a) de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza “La responsabilidad será del titular del aprovechamiento del terreno cinegético del que procedan, salvo pacto en contrario entre este y el titular del terreno en los términos que establece el Código Civil.” art.8.2c) “La responsabilidad por los daños producidos por especies cinegéticas en los terrenos con prohibición o suspensión de la actividad cinegética, será de quien haya promovido su declaración, salvo en el caso de que la suspensión se imponga como sanción o sentencia judicial firme, en cuyo caso la responsabilidad recaerá sobre los declarados responsables.”

determinado en la legislación civil o administrativa dependiendo ésta de la naturaleza jurídica del titular del terreno al que se le exija la responsabilidad.³¹⁷

Como novedad, la legislación de caza del País Vasco establece la obligación de que el titular del aprovechamiento cinegético tenga un contrato de seguro de responsabilidad civil y un contrato de guardería cinegética, sin los cuales no podrá explotar el aprovechamiento; por lo que deberán estar visados previamente al comienzo de la explotación en la diputación foral correspondiente.³¹⁸

1.2.2. Otros terrenos cinegéticos especiales.

El artículo 33.3 de la LC de 1970 recoge que los daños producidos por la caza procedente de Refugios, Reservas o Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada, responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales. Así lo recogen también las legislaciones autonómicas de caza.³¹⁹

³¹⁷ Vid. Art. 33.1 y 33.5 de la Ley de caza de 4 de abril 1970.

³¹⁸ Vid. Art.22.6 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

³¹⁹ Vid. NAVARRA: art.86.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca “El resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera se indemnizará por quienes resulten responsables conforme a la legislación civil, excepto los daños producidos por la fauna cinegética que habite en el interior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad, tales como autopistas, autovías u otras infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc., y que cuenten con zonas adyacentes valladas en toda su longitud, en los que se considerará responsable al propietario, titular o concesionario de las mismas.”; CANTABRIA: art.68.2 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza “La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria responderá de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de Reservas Regionales de Caza, cotos Regionales de Caza, Refugios Regionales de Fauna Cinegética y de los Vedados de Caza que se correspondan con terrenos incluidos en los espacios naturales protegidos o en el ámbito de presencia de especies amenazadas, en donde sus instrumentos de ordenación o planificación prohíban expresamente la actividad cinegética.”; VALENCIA: art.41.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza “Los titulares de los espacios cinegéticos serán los responsables de los daños que las piezas de caza ocasionen en los cultivos e inmuebles ajenos existentes en el espacio cinegético, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan técnico de ordenación cinegética. A estos efectos tendrá la consideración de titular del aprovechamiento cinegético de las zonas de caza controlada la entidad que la gestione, sea la Conselleria competente en materia de caza, una entidad local, una sociedad de cazadores o el titular de un coto de caza”; art.41.5: “En los refugios de fauna la responsabilidad por los daños ocasionados en los cultivos e inmuebles ajenos por las piezas de caza existentes en ellos corresponderá a quienes lo gestionen.”; ASTURIAS: art.38. 1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza “Serán indemnizados por la Administración del Principado de Asturias, previa instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente producidos: c) Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de reservas regionales de caza, refugios de caza, reservas nacionales de caza, cotos nacionales de caza y cualquier otro terreno cuya administración y gestión corresponda al Principado de Asturias.”; CANARIAS: art.32.2 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza “Las entidades públicas o privadas responsables de la administración y gestión de un terreno cinegético especial, serán responsables de los

El Reglamento estatal de caza en su artículo 35.2 se remite a la Ley o Disposición especial que autorice su creación y en su defecto a la legislación civil ordinaria. Siendo la Administración responsable directa en la mayor parte de los casos.³²⁰

Las sociedades de cazadores responderán de los daños producidos por las piezas de caza existentes en los terrenos adscritos a régimen de caza controlada. En aquellos casos en que la producción agrícola forestal o ganadera de determinados predios se vea perjudicada por la caza, el Ministerio correspondiente, a instancia de parte, podrá

daños producidos por la caza existente en los citados terrenos sometidos a su jurisdicción.”; EXTREMADURA: art.68.2 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza “De los demás daños causados por estas especies la administración autonómica sólo y exclusivamente responderá cuando las especies causantes provengan de terrenos integrados en reservas de caza, en cotos regionales de caza, en refugios para la caza constituidos de oficio en terrenos de titularidad pública, o en zonas de caza limitada cuya gestión se haya reservado la Administración pública, siempre que en cualquiera de estos casos se trate de terrenos sin valla cinegética o no se hayan adoptado medidas para reducir el exceso de carga cinegética de los terrenos correspondientes.”; BALEARES: art.50.2 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial “..... En el caso de zonas de caza controlada, si la consejería competente en materia de caza ha cedido su aprovechamiento cinegético a una sociedad de cazadores, responderá ésta y, subsidiariamente, la consejería competente en materia de caza. 4. La administración responsable de los espacios naturales protegidos donde esté prohibida la caza y los titulares de la gestión de los refugios de fauna, responden de los daños materiales generados por las piezas de caza procedentes de estos terrenos sobre los bienes agrícolas y forestales.”; ARAGON: art.69.1 a) y b) de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza “La atribución de responsabilidad por daños producidos por especies cinegéticas a cultivos agrícolas, bienes forestales o ganadería dependerá de los siguientes criterios: a) En el caso de estar pactada la responsabilidad civil entre los propietarios o titulares de los terrenos o ganados afectados y los titulares de los derechos cinegéticos de las especies de caza que produzcan los daños, se estará a lo dispuesto en tales pactos, siempre que se ajusten al ordenamiento jurídico. b) A falta de pacto, la responsabilidad se atribuirá del siguiente modo: Si se trata de daños originados por especies de caza procedentes de terrenos no cinegéticos, serán responsables los titulares de los terrenos no cinegéticos. Si se trata de daños originados por especies de caza procedentes de vedados, será responsable la Administración que los haya declarado. En la valoración de la responsabilidad, habrá de tenerse en cuenta la posible existencia de circunstancias específicas, tales como la presencia de zonas de seguridad u otros impedimentos que dificulten la efectividad de las medidas de control.”; CASTILLA Y LEÓN: art.12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza “La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación.”; CASTILLA LA MANCHA art.8 b) Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza “La responsabilidad en Zonas de Seguridad cuando procedan de animales cinegéticos, será de la Entidad o Administración por cuya causa se establece la Zona de Seguridad, salvo acuerdo o pacto en contrario entre la Entidad o Administración y el titular del terreno o titular del aprovechamiento cinegético.”; RIOJA: art.13.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza “La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas en todo tipo de terrenos se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal, civil o administrativa, que resulte de aplicación. A estos efectos, se considerarán titulares de los derechos cinegéticos del terreno: a) En los terrenos cinegéticos, los titulares de los mismos conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título III de esta Ley. b) En los terrenos no cinegéticos, los propietarios en el caso de cercados, vedados voluntarios y zonas no cinegéticas voluntarias, y la Comunidad Autónoma de La Rioja en los vedados no voluntarios y en las zonas no cinegéticas. Se considerarán vedados voluntarios y zonas no cinegéticas voluntarias aquellos que ostenten esta condición por iniciativa o voluntad expresa de sus propietarios.”

³²⁰ Vid. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.160.

autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente dentro de éstas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus cultivos.³²¹

De nuevo, el País Vasco en su ley de caza establece que para los terrenos o zonas de caza controlada y en el caso de que no se gestione directamente por la diputación foral, el titular deberá contar con un contrato de seguro de responsabilidad civil y un contrato de guardería cinegética.³²²

1.2.3. Terrenos de aprovechamiento cinegético común

Denominados vulgarmente terrenos libres, donde cualquier cazador que tenga su Licencia de caza en vigor, puede practicar este deporte sin necesidad de ningún permiso, salvo las limitaciones que año tras año imponen las Órdenes de Veda. De acuerdo con el artículo 35.3 del Reglamento estatal de caza, los daños producidos por la caza procedente de estos terrenos, se regularan por lo dispuesto en el Código Civil. Por lo que los daños producidos quedan excluidos de la aplicación de la legislación de caza, quedando el régimen de responsabilidad regulado por el Código Civil, cuyo artículo 1906 del CC, establece que, el propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla. Aquí se plasma una responsabilidad civil extracontractual, basada en la culpa o negligencia regulada en el artículo 1902 del CC.³²³

En relación con la terminología de heredad de caza, SANTOS BRIZ indica que, este precepto resulta aplicable en aquellos casos en que la explotación principal de la finca no sea cinegética.³²⁴ Frente a esta línea mantenida por el Tribunal Supremo, LAGUNA DE PAZ, sostiene que resulta difícilmente admisible que el propietario de terrenos sometidos al régimen de aprovechamiento cinegético común, que ha

³²¹ Vid. Arts. 33.3 y 33.4 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

³²² Vid. Art.15.4 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo del País Vasco.

³²³ Vid. Art.1902 del Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

³²⁴ Cfr. SANTOS BRIZ, J. “Comentarios al art. 1906”, en ALBADALEJO, M. “Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, Tomo XXIV. Edit. Edersa, Madrid, 1984. Pág.610 y 611.

sacrificado su derecho a cazar en favor de la colectividad, sea titular de una heredad de caza de acuerdo con el artículo 1906 del CC, el mismo autor opina que, parece razonable que la responsabilidad del propietario surja en el caso de que éste haya dificultado la acción de los dueños de las fincas próximas o de la Administración, para impedir la multiplicación de las piezas de caza o la producción de daños. Por lo que la responsabilidad por los daños ocasionados por las piezas de caza debe recaer sobre quienes se beneficien de ella, siendo la colectividad la responsable de los daños ocasionados por la caza en los terrenos de aprovechamiento cinegético común.³²⁵

Referente a esta línea, SÁNCHEZ GASCÓN, sostiene que el Estado es quien debe responder de los daños causados por las especies procedentes de los terrenos libres, por tres razones: 1ª) el dueño aunque quiera, la Ley no le permite hacer lo necesario para evitar su multiplicación, al ser competencia de la Administración; 2ª) el ejercicio de la caza lo regula exclusivamente la Administración, por lo que el propietario no puede ni impedir ni permitir la persecución de las piezas de caza por los perjudicados y 3ª) no les está permitido a los perjudicados perseguir las piezas de caza para evitar los daños. Concluye este autor indicando que, al tratarse de terrenos libres el aprovechamiento de la caza es común y no exclusivamente del dueño del predio, siendo injusto que deba ser responsable de los daños causados.³²⁶

Las CCAA recogen en sus legislaciones de caza, esta responsabilidad de la Administración derivada de los daños ocasionados por las piezas de caza procedentes de terrenos de aprovechamiento cinegético común.³²⁷

³²⁵ Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Op. Cit. Pág.161 y ss.

³²⁶ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de Caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988. Pág.262 y 263.

³²⁷ Vid. GALICIA: art.62.3 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza “La consejería competente en materia de caza responderá por los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos sometidos a régimen común, tecores autonómicos de su administración, reservas de caza, refugios de fauna y cualquier otro terreno cuya administración y gestión corresponda a dicha consejería.”; VALENCIA: art.41.4 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza “Los daños causados por las piezas de caza en terrenos que tengan la consideración de zona común de caza serán asumidos por los propietarios de los mismos. Ello, con la excepción de enclavados agrícolas no integrados por el titular en el acotado, tras petición de inclusión por su propietario. En este caso la responsabilidad recaerá sobre el titular del coto de acuerdo con los apartados 1 y 3.”; ASTURIAS: art.38. 1 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza “Serán indemnizados por la Administración del Principado de Asturias, previa instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente producidos: a) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y de los cotos regionales de caza que no sean objeto de concesión.”; CANARIAS: art.32.3 de la Ley 7/1998, de 6

1.3. Responsabilidad civil de la Administración en materia cinegética

Derivado del ejercicio de las competencias propias de la Administración en materia cinegética pueden derivarse daños a terceros de los que debe responder. Esta responsabilidad de las Administraciones Públicas viene recogida en el artículo 106.2 CE, donde los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.³²⁸

Asimismo, esta responsabilidad patrimonial se regula en el Título X de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 139.2 establece que en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Según ORTUÑO NAVALÓN Y MANZANA LAGUARDA, se configura como una “responsabilidad de carácter objetivo, o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”.³²⁹

El Tribunal Supremo, considera como servicio público toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión, pasividad o inactividad con resultado lesivo. Derivando así la responsabilidad de la Administración por el daño causado al patrimonio de un particular, del que deberá resarcir siempre y cuando el particular no venga obligado a soportarlo por disposición

de julio, de Caza “Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen cinegético común, serán indemnizados de acuerdo con lo establecido en la legislación civil ordinaria.”; EXTREMADURA: art.68.2 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza “De los demás daños causados por estas especies la administración autonómica sólo y exclusivamente responderá cuando las especies causantes provengan... zonas de caza limitada cuya gestión se haya reservado la Administración pública, siempre que en cualquiera de estos casos se trate de terrenos sin valla cinegética o no se hayan adoptado medidas para reducir el exceso de carga cinegética de los terrenos correspondientes.”

³²⁸ Vid. Art. 106.2 CE: “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

³²⁹ Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C., MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág. 125.

legal o vínculo jurídico. La Administración deberá respetar el Principio de Total Indemnidad en el importe de la indemnización.³³⁰

El TS en diversas ocasiones ha concretado los requisitos necesarios para poder imputar a la Administración por la responsabilidad patrimonial proveniente de los daños causados a los administrados, estableciendo que será necesaria la realidad de un daño, evaluable e individualizable, y que el daño patrimonial, sea consecuencia de la actuación o actividad de la Administración en el desarrollo de sus funciones. Sobre el perjudicado recaerá la carga probatoria del daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la Administración. Este nexo causal no precisa ser directo, inmediato y exclusivo, puede mostrarse bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes. La responsabilidad de la Administración cesará cuando el daño se produzca por fuerza mayor, en cuyo caso la carga probatoria recaerá en la propia Administración, o culpa exclusiva de la víctima o terceros. Cuando el daño provenga por caso fortuito, responderá la Administración, ya que se trataría de un evento en relación con la organización en cuyo seno se produjo el daño. No se estima una solicitud de responsabilidad de la Administración por silencio positivo.³³¹

Al regular la Administración ciertos aspectos relevantes en la actividad cinegética, como es la determinación de las especies cinegéticas y los terrenos cinegéticos, provoca que deba asumir los daños producidos por la fauna silvestre no cinegética independientemente de su procedencia, así como los daños producidos por las especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos. En aquellos casos en que la producción agrícola, forestal o ganadera de determinados predios sea perjudicada por la caza, la Administración, a instancia de parte, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus

³³⁰ Vid. STS de 15 de junio de 2002; STS de 29 de junio de 2002; STS de 20 de diciembre de 2004; STS de 5 de junio de 1989 y STS de 22 de marzo de 1995; TSJ Castilla y León (sede Burgos), Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec.2ª, sentencia nº465/2005 de 26 de octubre.

³³¹ Vid. STS de 3 de julio de 2003; STS de 25 de enero de 2003; STS de 6 de abril de 2004; STS de 21 de julio de 2001; STS de 18 de julio de 2002; STS de 14 de octubre de 2004; STS de 30 de septiembre de 1995; STS de 6 de febrero de 1996; STS de 10 de octubre de 2003; STS de 3 de mayo de 2004; STS de 14 de octubre de 2004; STS de 8 de julio de 2004; STS de 23 de septiembre de 2004; STS de 28 de octubre de 2004; STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 2ª. Núm. 326/2005, de 4 de mayo.

cultivos. Asumirá también la responsabilidad residual cuando se produzca un daño y nadie responda del mismo³³²

1.3.1. Titularidad del aprovechamiento cinegético

La Administración será responsable de los daños que produzcan las piezas de caza procedentes del interior de los cotos o del terreno cinegético que sean gestionados por ella. Responderá, en principio en iguales términos en que lo haría un particular, no solo de los daños de carácter agrario tanto en los terrenos incluidos en el coto como en los ajenos, sino igualmente de todo daño en las personas o en el patrimonio.

La responsabilidad de la Administración opera tanto si los daños son causados por las especies de caza recogidas en los Planes de Ordenación Cinegética, como por las no incluidas en el mismo. En los supuestos en los que la responsabilidad provenga del primer supuesto, se aplicarán las previsiones de la legislación de caza, tanto estatal como autonómica. Por el contrario, en relación con las especies no incluidas, la responsabilidad deriva del deber de vigilancia y conservación de los bienes de dominio público o propiedad de la Administración.³³³

Las CCAA recogen que serán los titulares del aprovechamiento cinegético quienes controlen la presencia de fauna silvestre, tanto cinegética como no, en sus terrenos. Para ello deberán realizar Planes Cinegéticos y obtener autorizaciones por parte de la Administración, en caso de que no se dieran a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos cuando los mismos hubiesen justificado las razones y derivase un daño a terceros, se podría exigir responsabilidad a la Administración correspondiente.³³⁴

³³² Vid. Art.38.1.a) y b) de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias; art.62.3 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia; art.63.1 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria; art.33.4 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.

³³³ Vid. STSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. Núm. 291/2005 de 14 de junio.

³³⁴ Vid. TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. Núm. 39/2004 de 28 de enero; Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.129.

1.3.2. Responsabilidad cinegética residual

Responderá la Administración de los daños producidos por especies que proceden de zonas no cinegéticas, de terrenos de aprovechamiento cinegético común, de vedados no voluntarios, o de supuestos en los que no va a responder el titular del coto.³³⁵

Los animales que procedan de terrenos de aprovechamiento común pero que estén sometidos a régimen de caza controlada, el artículo 14.1 de la Ley de caza estatal, establece que, la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la riqueza cinegética, deberán adaptarse a los planes que con este objeto apruebe el órgano competente. Como se ha visto anteriormente, estos planes los elaboran las propias CCAA. La responsabilidad de la Administración en relación a los animales procedentes de terrenos sometidos a régimen cinegético especial distinto de los cotos privados o deportivos, no excluye la responsabilidad en terrenos cinegéticos comunes, derivado de la competencia que la Ley estatal de caza otorga en la gestión y administración de los mismos y en un título para ordenar y planificar el ejercicio de actividades relacionadas con la actividad cinegética y su correspondiente aprovechamiento, donde se incluye los daños producidos por especies cinegéticas.³³⁶

Esta responsabilidad de la propia Administración, no solo deriva de la titularidad del coto, sino también de la competencia en la regulación de la caza y control de su población. Se declarará responsable a la Administración, aunque se haya determinado la procedencia del animal y se haya acreditado que no sea de titularidad pública, ya que la Administración es la encargada de la regulación de una específica especie cinegética.³³⁷ A su vez, la intervención administrativa en estos terrenos deriva de la política de conservación del medio ambiente, por lo que los daños ocasionados no corresponde que los soporte el particular perjudicado. Las medidas adoptadas por la Administración para

³³⁵ Vid. Esta terminología ha sido utilizada en reiteradas sentencias: SAP de Soria de 24 de mayo de 1995, fundamento de derecho 3º; SAP de Soria de 20 de mayo de 1996, fundamento jurídico 3º.

³³⁶ Vid. STSJ de Extremadura, Sala 3ª, Secc. 1ª de 12 de septiembre de 2005.

³³⁷ Vid. SAP de Lugo de 5 de mayo de 1999, fundamento de derecho 2º, referente a un accidente de circulación por irrupción de jabalí procedente de coto privado de caza menor, a pesar de la titularidad privada del coto, se declara la responsabilidad de la Administración autonómica por ser la reguladora de la caza del jabalí.

la movilidad y control de la población de especies cinegéticas, puede conllevar riesgos y accidentes de circulación.³³⁸

La nueva ley de caza de Castilla la Mancha, recoge esta responsabilidad residual en su artículo 8.3, estableciendo que de los daños causados por las especies cinegéticas responderá la Administración si ésta hubiese denegado las solicitudes de autorizaciones excepcionales para control de poblaciones formuladas por el titular del aprovechamiento o los propietarios de los terrenos, o de quien ellos legalmente designen.³³⁹

1.3.3. Daños causados por especies no cinegéticas protegidas

Al ser una especie no cinegética la que causa el daño, no se puede considerar una responsabilidad relacionada con la caza, surge con ello la duda, de si existe un deber jurídico de soportar el daño por quien lo sufre, a su vez, éste se ve imposibilitado de actuar frente a la especie que ha causado el daño, ya que la Administración dota a dicha especie de un nivel especial de protección. La jurisprudencia da respuestas variadas a la responsabilidad de los daños causados por especies no cinegéticas, en unos casos entiende que deberá responder la Administración por las limitaciones establecidas en las normas de protección de los terrenos y de las especies, así como de los daños ocasionados por estas; en otros casos, se considera la no existencia de tal responsabilidad patrimonial administrativa, únicamente la Administración deberá establecer ayudas económicas compensatorias por los daños producidos.³⁴⁰

Existe una doble línea jurisprudencial en relación con los animales salvajes, ya sea especie protegida o no. La primera línea, entiende que la cualidad de protegidos no transforma a la Administración en asegurador universal de todo tipo de daños causados por animales salvajes, al tratarse de especies salvajes susceptibles de aprovechamiento cinegético con limitaciones, como ocurre con los lobos, y como se ha visto

³³⁸ Vid. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P. “Responsabilidad Patrimonial de la Administración en accidentes de tráfico por atropellos con especies cinegéticas”. En revista de responsabilidad civil y seguro. Pág.107.

³³⁹ Vid. Art.8.3 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

³⁴⁰ En este sentido la STS de 20 de diciembre de 2004; TSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 3ª, Sentencia Núm. 121/2001 de 9 de febrero; TSJ de Valencia en Sentencia del Pleno Sentencia núm. 2009/2006 de 6 de febrero; TSJ de La Rioja, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. 129/2003 de 24 de marzo.

anteriormente, la jurisprudencia otorga la responsabilidad por daños producidos por piezas de caza al titular del aprovechamiento cinegético y subsidiariamente al propietario del terreno del que proceda los animales, imputando esa responsabilidad a los propietarios privados del coto o a la Administración cuando sea titular de terrenos de aprovechamiento cinegético común o de reservas de caza, según la procedencia del animal. Considerando la caza esta línea jurisprudencial como *fructus fundi*, respondiendo la Administración únicamente cuando se evidencie que los daños se ocasionaron por piezas procedentes de terrenos de gestión pública.³⁴¹

La segunda línea jurisprudencial y de acuerdo con ORTUÑO NAVALÓN y MANZANA LAGUARDA, basan la responsabilidad de la Administración en que el ciudadano no tiene la obligación jurídica de soportar el daño, debido a que opera la *publicatio* sobre las especies protegidas, constituyendo así causa suficiente para que sea la propia Administración la que asuma el resarcimiento de los daños producidos por dichas especies.³⁴²

Asturias en el artículo 38.1b) de su Ley de caza, establece que serán indemnizados por la Administración, previa instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente producidos, los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles de aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia. Extremadura recoge esta responsabilidad en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.³⁴³

1.4. Titular del derecho

El titular del bien dañado, ya sea agrícola, forestal o ganadera, tiene derecho al resarcimiento de los daños derivados de las piezas de caza, independientemente de que sea colindante o no, basta con que los animales procedan de terrenos acotados, en el

³⁴¹ Vid. STJ de Galicia, núm. 130/2005, de 23 de febrero; TSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc 1ª, en Sentencia núm. 502/2004, de 16 de junio.

³⁴² Vid. STS de 21 de octubre de 2003; Cfr. ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Op. Cit. Pág.138 y ss.

³⁴³ Dispone el art.61 de la Ley 8/1998, de 26 de junio: “Indemnización de daños producidos por fauna silvestre “1. Previa instrucción del oportuno expediente, la Junta de Extremadura indemnizará los daños efectivamente causados a terceros o sus bienes por las especies incluidas en alguna de las categorías recogidas en los apartados a), b) y c) del artículo anterior.”

caso de terrenos libres se aplicará lo dispuesto en el Código Civil por remisión del artículo 35. 3 del Reglamento de caza.

Los propietarios u otros titulares de terrenos constituidos voluntariamente en cotos de caza serán responsables de los daños originados por la caza procedente del coto. Salvo pacto en contrario, los propietarios también responderán de los daños causados en los cultivos de sus fincas, cuando las tuvieren cedidas en arrendamiento y se hubieren reservado el derecho de acotarlas.³⁴⁴

De acuerdo con SÁNCHEZ GASCÓN, dependiendo de los términos en que se haya redactado el pacto, puede ocurrir que el dueño de la tierra y titular del coto, no asuma en virtud de ese pacto la responsabilidad objetiva de los daños fijados por el artículo 33.1 de la Ley de caza, pero responderá por culpa o negligencia si no ha hecho lo necesario para impedir la multiplicación o impide al agricultor que en la medida de lo posible evite el daño, según lo establecido en el artículo 1906 del CC.³⁴⁵

El titular del derecho solicitará el resarcimiento a la Administración, de los daños que las piezas de caza causen siempre que procedan de terrenos gestionados por ella misma, como son, cotos, reservas de caza, parques nacionales y refugios entre otros. La Administración responderá tanto de los daños que se ocasionen dentro de los terrenos como fuera de ellos, sean o no colindantes.³⁴⁶

1.4.1. Prevención del daño

El sujeto que sufra daños en sus bienes o propiedades (agrícola, forestal o ganadera), previa solicitud a la Administración competente, puede obtener una autorización para que, en los límites de su terreno tome medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus cultivos.³⁴⁷

³⁴⁴ Vid. Art. 35.1 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970

³⁴⁵ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN. A. “El Derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.266.

³⁴⁶ Vid. Art.33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza y art.35 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo.

³⁴⁷ Vid. Art.35.5 a) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970: “*En aquellos casos en que la producción agrícola,*

El reglamento de caza establece en su artículo 35.5 b) y c), el procedimiento para solicitar la referida autorización, se iniciará en todo caso, a instancia de parte:

- El solicitante deberá acreditar documentalmente la titularidad que le corresponda en orden a la producción agrícola, forestal o ganadera protegibles de que se trate;
- Deberá justificar también los perjuicios efectivos que por la caza se le ocasionen y la evaluación que tengan, a su juicio, los mismos, acompañando un informe pericial, en su caso.
- En la solicitud se concretarán las clases y tipo de medidas que el peticionario considere más adecuadas para conseguir la protección que pretende y el cese de los perjuicios que venga experimentando.

La solicitud y documentación justificativa serán presentadas ante la Delegación Provincial de Agricultura correspondiente. Dicha Delegación dará vista del expediente a los interesados y a los titulares, en su caso, de los aprovechamientos de caza de los que supuestamente procedan los perjuicios denunciados, a fin de que unos y otros formulen las alegaciones y aporten las pruebas e informes que estimen convenientes. Para todo ello se estará a los trámites y plazos que la Ley de Procedimiento Administrativo establece. El expediente vendrá resuelto por la Administración competente, contra cuya resolución cabe interponer los recursos administrativos correspondientes.

Cuando las medidas de protección se refieran al empleo o utilización de medios que puedan afectar a la salud pública o ser nocivos o peligrosos para las personas, la Administración competente fijará, en su caso, las medidas y precauciones que deban ser adoptadas para su utilización.³⁴⁸

Ni la ley ni el reglamento mencionan a lo largo de su articulado el tipo de medidas que pueden adoptarse para evitar o suprimir el daño, se limitan a señalar que estas medidas deberán ser de carácter cinegético y extraordinario.³⁴⁹

forestal o ganadera de determinados predios sea perjudicada por la caza, el Servicio, previa instrucción del oportuno expediente, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente dentro de éstas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético, para proteger sus cultivos”.

³⁴⁸ Vid. Art.35.5.d) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

El artículo 25.5, del Reglamento estatal de caza, establece que, cuando en una comarca exista determinada especie en abundancia tal que resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudiciales para la agricultura, la ganadería, los montes o la caza, la Administración, por sí o a petición de parte, y previas las consultas y comprobaciones que estime oportunas, podrá declarar dicha comarca de emergencia cinegética temporal, y determinará las épocas y medidas conducentes a eliminar el riesgo y reducir el número de estos animales.

Cuando la caza existente en terrenos cercados no acogidos a otro régimen cinegético especial origine daños en los cultivos del interior del cerramiento o en los de las fincas colindantes, la Administración, bien de oficio o a petición de parte interesada, podrán incoar expediente encaminado a la adopción de medidas para reducir o eliminar las especies cinegéticas causantes del daño. En este expediente, serán oídos los propietarios de los terrenos cercados y los de los colindantes.³⁵⁰

1.4.2. Prueba y valoración del daño

Rige el principio compensatorio, donde únicamente se indemnizarán los daños efectivamente producidos, para ello se deberá probar la existencia real del daño, posteriormente se llevará a cabo su cuantificación. El resultado de las operaciones y la determinación del nexo causal, da lugar a la obligación de indemnizar por el daño causado por la caza procedente de un terreno determinado.³⁵¹

Las pruebas que suelen utilizar por parte del perjudicado para acreditar el daño, son, periciales o testificales. Esto se deduce del artículo 35.1 c) del Reglamento de caza, el cual indica que, *“a efectos de precisar tanto la procedencia de las piezas de caza que originen daños como los que resulten efectivamente causados y la estimación cuantitativa que hayan de tener, los dueños de las fincas afectadas podrán solicitar que se realice una información sobre todos aquellos extremos, dirigiéndose para ello a los*

³⁴⁹ Cfr. SÁNCHEZ GASCÓN. A. “El Derecho de caza en España”. Op. Cit. Pág.264.

³⁵⁰ Vid. Art.21.7 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

³⁵¹ Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.I.”La responsabilidad civil en materia de caza”, en AAVV “Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Op. Cit. Pág.262.

*Servicios Provinciales de Caza, los que ordenarán que dicha información se practique por personal competente, siendo a cargo de los peticionarios los gastos que se originen con tal motivo. Sobre la base del resultado obtenido con la mencionada información previa, los interesados podrán reclamar de los responsables las indemnizaciones a que puedan tener derecho y, en todo caso, acudir a la vía judicial de no obtener satisfacción en sus pretensiones”.*³⁵²

1.5. Colisión de piezas de caza con vehículos

El aumento de las medidas de conservación de las especies cinegéticas con fines de explotación comercial ha provocado el aumento del número de individuos, asimismo, el despoblamiento del medio rural en zonas de especial interés cinegético ha provocado un cierto descuido de las referidas zonas. Por ello ha sido necesario establecer un régimen de responsabilidad adecuado a la realidad y las circunstancias de la caza, buscando proteger también los derechos e intereses de los conductores.³⁵³

Se ha producido un cambio en la regulación que ha pasado del régimen de responsabilidad objetiva del propietario de los terrenos establecido en el artículo 1905 del CC, pasando a una responsabilidad subjetiva que exige la ausencia de diligencia por parte de aquéllos o del titular del aprovechamiento cinegético. La jurisprudencia mantiene la inversión de carga de la prueba de la diligencia. Sobre esta responsabilidad, hay que tener en cuenta, en el caso de los accidentes de tráfico, la intervención de otros sujetos, como es el conductor del vehículo o el titular de la vía de circulación, cuya actividad puede determinar su posible responsabilidad o la de terceros. La normativa referente a la responsabilidad deriva de los accidentes de tráfico donde se colisiona con una pieza de caza, ha sufrido un cambio drástico respecto a la responsabilidad de los conductores, incremento el nivel de responsabilidad de los mismos, en detrimento de la propia de los propietarios o titulares de los aprovechamientos cinegéticos. Esta

³⁵² En este sentido la SAP de Cuenca de 29 de noviembre de 1986. En relación con la prueba pericial “nunca constituirá una especie de título ejecutivo con carácter vinculante para los Tribunales, sino que es una base para poder reclamar de los responsables las indemnizaciones a las que puedan tener derecho los perjudicados”.

³⁵³ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Edit. La Ley, Madrid, 2015. Pág.2185.

responsabilidad, se regulaba aplicando tanto la legislación estatal, artículo 33 de la Ley de Caza, como de las CCAA.³⁵⁴

En relación con la responsabilidad por los daños causados, el legislador intento que el resarcimiento del daño no constituyera una penalización excesiva a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos. Este detrimento de la responsabilidad respecto del sector cinegético, se ha producido por la demanda del mismo, pasando de una situación en la que no se contemplaba la responsabilidad de un tercero ajeno a la actividad cinegética, a otra situación en la que se ha incrementado la responsabilidad de los conductores. La manifestación de este cambio de responsabilidad, se encuentra en la reforma normativa vial de 2001, en la que se incluyó la responsabilidad del conductor deriva del incumplimiento por parte del mismo de las normas de tráfico.

La Ley 17/2005 de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incorporó al Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la Disposición 9ª, actualmente modificada, establecía que en los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas, el responsable era el conductor del vehículo, siempre y cuando se derivase del incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales, eran exigibles a los titulares del aprovechamiento o propietarios del terreno, cuando el accidente derivase directamente de la acción de cazar o de la propia falta de diligencia en la conservación del terreno. Pudiendo ser responsable el titular de la vía pública, por el estado de conservación de la misma y por la señalización. De acuerdo con SOLAZ SOLAZ, se deroga el régimen jurídico anterior, que imponía una responsabilidad de

³⁵⁴ Vid. Art.33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza: Uno. “*Los titulares de aprovechamientos cinegéticos definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos.* Dos. *La exacción de estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como la repetición de responsabilidad en los casos de solidaridad derivados de acotados constituidos por asociación.* Tres. *De los daños producidos por la caza procedente de Refugios, Reservas Nacionales y Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales.* Cuatro. *En aquellos casos en que la producción agrícola forestal o ganadera de determinados predios sea perjudicial por la caza, el Ministerio de Agricultura, a instancia de parte, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente dentro de éstas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus cultivos...*”.

carácter objetiva y que venía constituido por la Ley de caza de 1970 y su Reglamento, se aplicaba en todas las CCAA que no tuvieran legislación específica de caza.³⁵⁵

La Disposición Adicional 9ª que incorporó la Ley 17/2005 de 19 de julio, sirvió de base para la modulación de la responsabilidad objetiva a una subjetiva. En ella se deducen dos elementos que posibilitan la imputación, por una parte, que el accidente y el daño sean consecuencia directa de la acción de cazar o que se deba a una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.³⁵⁶

Con la nueva modificación recogida en la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se sustituye lo establecido por la Ley 17/2005, quedando redactada la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 339/1990 del siguiente modo: *«En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irruman en aquéllas. No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de*

³⁵⁵ Cfr. SOLAZ SOLAZ, E. “Responsabilidad en los accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas”. El Derecho Editores, Revista de Jurisprudencia. Núm.3, abril de 2006.

³⁵⁶ Vid. Modificación Veinte de la Ley 17/2005 de 19 de julio. Se incorpora una disposición adicional novena con la siguiente redacción: *“Disposición adicional novena Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas: En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”*

*animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.»*³⁵⁷

Los jueces y tribunales a la hora de acreditar la infracción del conductor encontraban grandes dificultades, por lo que se imputaba la responsabilidad a los propietarios del aprovechamiento o a los titulares del terreno, en muy pocas ocasiones se apreciaba la concurrencia de culpas. Para valorar la responsabilidad del conductor, la jurisprudencia valoraba en los casos de ausencia de infracción, el grado de diligencia en la conducción caso por caso. Aplicando así, la teoría de la responsabilidad subjetiva, para compensar la dificultad de acreditar la infracción del conductor, es por ello, que la reforma de 2014, elimina la necesidad de que el conductor incurra en infracción de tráfico para poder imputarle dicha responsabilidad, disminuyendo las exigencias de responsabilidad a los propietarios y titulares, ya no se les exige una conducta negligente para ser responsables.³⁵⁸

Esta última reforma, considera a las piezas de caza que invaden la calzada como *res nullius*, por lo que desde el momento que las piezas salen del terreno de aprovechamiento cinegético, conlleva la imposibilidad de controlarlas y por ello la posibilidad de exigir responsabilidades a los titulares.³⁵⁹

En relación con la diligencia que se exige al propietario del terreno o al titular del aprovechamiento, la jurisprudencia y doctrina se han cuestionado la misma y en que acciones debe traducirse. Destacaba como medida para evitar los accidentes de tráfico con piezas de caza el cerramiento del terreno, medida que planteaba problemas de orden económico y que afectaba a la conservación de la fauna, debido a que el cerramiento incrementa la endogamia, limita el movimiento y la alimentación. Como se recoge en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su

³⁵⁷ Vid. Modificación treinta de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

³⁵⁸ Vid. En este sentido Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, Sección 1ª, de 24 de marzo de 2015.

³⁵⁹ Vid. MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A. “Estudio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 9 de septiembre de 2014”. Edit. Revista Wolters Kluwer. Práctica de Derecho de Daños, núm.122, Sección informe de jurisprudencia, Primer trimestre de 2015, págs.1-10.

artículo 62.3 f), se exige la necesidad de una autorización administrativa para llevar a cabo el cerramiento del terreno, sin que por parte de la misma se dé una imposición a dicho cerramiento.³⁶⁰

En el caso de Castilla León, la Ley 19/2010 de 22 de diciembre añadió un párrafo tercero al art.12 de la Ley de Caza de Castilla y León, por el cual el titular cinegético o arrendatario en su caso, cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste a lo establecido en éste.³⁶¹

La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 9 septiembre 2014, Rec. 1955/2012, fija, como doctrina casacional, que la diligencia en la conservación del terreno acotado, establecida en la disposición adicional 9ª de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, debe ser la propia del aprovechamiento cinegético solicitado, debiendo existir conexión entre la presencia del animal y el aprovechamiento.³⁶²

En relación con los atropellos de piezas de caza que se produzcan en las autopistas, se aplicará la regulación recogida en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y en los

³⁶⁰ Vid. Art. 62.3 f) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: *“Con carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales: f) Los cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autorización administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la totalidad de su perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Las Administraciones públicas competes establecerán la superficie mínima que deben tener las unidades de gestión para permitir la instalación de estos cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna silvestre no cinegética y evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comunidades autónomas podrán excluir esta obligación por causas de sanidad animal”.*

³⁶¹ Vid. Disposición final octava de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León: *“Se entiende, a los efectos de esta ley, que el titular cinegético o arrendatario en su caso, cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste a lo establecido en éste. Reglamentariamente podrán establecerse otros requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas cinegéticas.”*

³⁶² Vid. STS, Sala 1ª, de 9 septiembre 2014, Rec. 1955/2012: *“...por ello, aún constando que el gamo procedía del coto del demandado, no existe conexión alguna entre el animal y el aprovechamiento cinegético autorizado, máxime cuando consta que los gamos accedían al terreno del demandado desde un coto de caza mayor colindante, del que se evadían saltando las vallas existentes”.*

Reglamentos que regulan la explotación de las autopistas, que establecen que la responsabilidad recae sobre el concesionario de dicha explotación.³⁶³

Las CCAA en sus respectivas legislaciones de caza, recogen que la responsabilidad en los accidentes de tráfico ocasionados por irrupción de especies cinegéticas en las vías de circulación, quedará regulada conforme a lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.³⁶⁴

Navarra en su Ley de Caza, recoge en el artículo 86 los daños causados por la fauna cinegética, estableciendo que el Departamento competente en materia de caza, en el caso de accidente motivado por atropello de especies cinegéticas, tramitará el correspondiente expediente administrativo para determinar las posibles responsabilidades que podrán recaer en el conductor del vehículo accidentado, cuando no hubiera adoptado las precauciones necesarias para evitar el atropello o se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación; en el titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, del terreno acotado, solo en los casos en los que el accidente sea consecuencia de la negligencia en la gestión del terreno acotado o de la acción de cazar; en la Administración competente en materia de caza, en los supuestos en que el accidente sea consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético; en el titular de la explotación de la vía pública en que se produzca el accidente, siempre y cuando esté motivado por la falta de conservación en relación con las medidas de protección frente a invasión de la vía por animales, cuyo mantenimiento sea responsabilidad del titular de la explotación de la vía, o por ausencia de señalización adecuada de paso de fauna cinegética. A su vez incorpora dentro de su normativa, que para el caso de daños en accidentes de carretera causados por especies cinegéticas, se regulará una ayuda para apoyar económicamente el establecimiento de un mecanismo

³⁶³ Vid. STS Sala 1ª, de 19 de diciembre de 1995: “Los Tribunales vienen estableciendo la responsabilidad de las empresas que en régimen de concesión gestionan las autopistas, por el riesgo de la explotación o por omisión del deber de vigilancia que alcanza a las zonas que están fuera de la autopista, pero próximas a ellas, en las llamadas autopistas con peaje abierto, que es aquel en el que la autopista en régimen de peaje es la continuación, término o situada en un punto medio de autovías de titularidad pública no explotadas por el concesionario”

³⁶⁴ Vid. Art.53.3 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del PAIS VASCO; art.62.1 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de GALICIA; art.63.5 de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de CANTABRIA; art.13.1 de la Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja; art.68.1 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la COMUNIDAD VALENCIANA; art.68.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de EXTREMADURA; art.12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CASTILLA Y LEÓN; art.8.1 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CASTILLA-LA MANCHA.

asegurador, que cubra la eventual responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de Navarra.

1.6. Responsabilidad civil *ex delicto*

Responsabilidad especial que obliga al autor de la conducta delictiva a indemnizar a las víctimas del delito de los daños y perjuicios producidos como consecuencia del mismo. Se trata de una responsabilidad civil *ex dammo*, derivada del daño, más que emanada del delito, que por razones prácticas justifica una regulación *ad hoc* en sede penal.³⁶⁵

La obligación nacida del acto ilícito es de carácter civil, el artículo 1092 del Código Civil sustrae la responsabilidad penal al Código Civil y la remite al Código Penal. En opinión de O'CALLAGHAN, “la diferencia de normativa no tiene sentido, hay una sola clase de obligación nacida de acto ilícito, sea o no delictual”.³⁶⁶

Las disposiciones comunes recogidas en el artículo 339 y 340 del CP, aplicables a los delitos recogidos en el Título XVI y relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, prevén la responsabilidad civil, aplicable junto a la pena que correspondiera, en este sentido el artículo.339 establece que los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados. Del mismo modo el artículo 340 del CP, prevé que si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en dicho Título procede voluntariamente a reparar el daño causado, se le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.

Cuando se lleve a cabo la conducta delictiva de cazar especies prohibidas, esta acción típica dará lugar a una responsabilidad civil *ex delicto*, que corresponderá al

³⁶⁵ Cfr. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “La responsabilidad civil *ex delicto* en el Proyecto de Código Penal de 1992”, en “Política Criminal y Reforma Penal”. Homenaje a la memoria del Prof. D. Juan del Rosal. Edit. EDERSA, Madrid, 1993, pág.1017.

³⁶⁶ Cfr. O' CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Compendio de Derecho Civil. Tomo II, Derecho de Obligaciones”. Op. Cit. Págs.698 y 699.

valor de las especies cuya caza sea constitutiva de infracción penal, no extendiéndose al de otras especies cuya caza únicamente constituye infracción administrativa. Para las especies cazables se hará efectiva a favor del titular público o privado del terreno sometido a régimen cinegético especial donde se ha llevado a cabo la caza del animal. Cuando la caza se haya realizado sobre especies no cazables se efectuara a favor del organismo autonómico competente en medio ambiente. Serán las CCAA las que establezcan el valor de las especies tanto cazables como no, publica periódicamente las tablas y baremos de valoración de piezas de caza.³⁶⁷

El titular del terreno o del aprovechamiento cinegético, podrá ser responsable civil subsidiario, conforme a las reglas generales recogidas en el artículo 120.3º y 4º del CP.³⁶⁸ A su vez, la jurisprudencia fija la responsabilidad civil *ex delicto* a favor de dichos titulares como perjudicados, ya sea una persona física o jurídica, tanto pública como privada, se tendrán en cuenta todos los daños, gastos y el valor de la pieza conforme a los baremos fijados por especie y comarca a fecha de la sentencia, también se podrá tener en cuenta el valor del trofeo en subasta.³⁶⁹ La indemnización comprenderá a su vez todos los daños materiales y morales, incluido el daño emergente y el *lucrum cessans*.³⁷⁰

³⁶⁷ Vid. SAP Tarragona de 30 de julio de 2001; SAP Madrid de 15 de febrero de 2003; SAP Córdoba de 9 de diciembre de 2008.

³⁶⁸ Dispone el art.120 del CP: “*Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios..* En este sentido la SAP Murcia, de 17 de julio de 1998.

³⁶⁹ Vid. SAP Madrid, de 15 de febrero de 2003; SAP Badajoz, de 5 de noviembre de 2012; SAP Burgos, de 13 de octubre de 2006; SAP La Rioja, de 21 de noviembre de 1997; SAP Tarragona, de 15 de julio de 2008; SAP Álava, de 15 de febrero de 2005; SAP Ávila, de 13 de enero de 2010.

³⁷⁰ Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Delito de daños: evolución y dogmatica (art.263 Código Penal). Edit. Op.Cit. 53 y ss; SANTA CECILIA GARCÍA, F. “Medio ambiente y reparación del daño”, en “Textos jurídicos y contextos sociales en F.A. Hayek”. Edit. Dykinson, Madrid, 2011, pág.359.

CONCLUSIONES

PRIMERA: la Caza es un elemento común en la evolución histórica de todas las sociedades humanas. La mejor forma de conocer el surgir de la caza a través de los siglos, consiste en hacer un paralelismo con los tipos de caza que se han observado a lo largo de la historia entre los pueblos o tribus de cualquier continente, cuyo estilo de vida, utensilios y armas de caza han permanecido, llegando incluso hasta la actualidad. Cada animal por su propia naturaleza, impone su gama particular de formas de caza. La actividad cinegética como actividad deportiva surge poco después de la caída del imperio romano, dejando de tener un fin utilitarista. Con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la caza pasa a ser una actividad de ocio o deporte destinada a las clases altas. En España con el aumento de la población en las ciudades se produjo una deforestación, afectando a varias especies cinegéticas. Asimismo se produjo un aumento del uso de las armas de fuego en el siglo XVI, por lo que Carlos I a través de la pragmática de 1527 y Felipe II con la Ley de 1611, intentaron reducir el uso de las mismas para evitar el retroceso cinegético, surgen así las primeras normas que buscan proteger el patrimonio cinegético. En el siglo XIX la regulación cinegética aportaba poca protección al patrimonio cinegético, solo prohibía ciertas técnicas y eran cazables muchas de las especies de aves y mamíferos en toda la Península Ibérica. Con el surgimiento de la conciencia medioambiental esta situación cambia, se comienza a regular todos los aspectos de esta actividad, como los territorios cinegéticos, los animales cazables, las modalidades y temporadas de caza, buscando proteger a todos los componentes de la diversidad biológica. A su vez, como así lo recogen las legislaciones autonómicas, la caza como actividad de supervivencia o abastecimiento, pasa a ser una actividad de ocio y deporte, pasando posteriormente a intentar ser parte de la política conservacionista que busca el compromiso por parte de todos los sujetos que intervienen en esta actividad para su adecuada gestión, protección y mejora, garantizando así que el aprovechamiento cinegético no afecte a la conservación de las especies.

SEGUNDA: con las mejoras en las armas de retrocarga (escopeta y rifle) y de la munición; con la legislación específica de caza que establece las vedas; con los órganos de representación de los cazadores, como las Federaciones de caza; con las licencias de

caza, permisos y la determinación de las especies de caza; todo ello hace que se consolide la caza como una actividad que se engloba en varios ámbitos de la sociedad, como es el deportivo, el social y sobre todo el económico, surge a su vez la oposición de varios sectores de la sociedad. La evolución de las modalidades de caza, el listado de especies cazables, junto con la amplia normativa aprobada para su control, en ocasiones excesiva y contradictoria; la progresiva recuperación de la caza menor y la expansión de la caza mayor, hace que se busque la adecuada gestión y el aprovechamiento responsable.

TERCERA: la actividad cinegética está constituida por tres vertientes; la primera de ellas, la ambiental, ya que sus efectos se proyectan sobre los recursos naturales; una segunda vertiente económica y una última social, cuyos fines van desde la propia conservación del medio natural y de las especies protegidas, al desarrollo rural; esto es debido a que la actividad cinegética genera empleo ayudando así al desarrollo de ciertas zonas. La caza es una actividad conflictiva con grandes posturas enfrentadas desde un punto de vista social, político y legislativo. En el Derecho cinegético la protección de la fauna silvestre debe primar sobre los intereses de los cazadores y de los propietarios de los cotos, por lo que la práctica cinegética solo es posible en tanto sea compatible con el fomento y la conservación de las especies. Como tantas veces ha sido proclamado no es posible proteger las especies sin proteger el medio en el que viven, este principio debe ser respetado por las autoridades públicas a la hora de llevar a cabo sus actuaciones. Los hechos delictivos relativos a la protección de la biodiversidad no pueden parar en las leyes de caza cuyas normas son insuficientes, parte importante de los perjuicios que padecen las especies y sus hábitats no tienen su origen en los cazadores sino en otras actividades: industriales, de construcción, malas prácticas agrícolas o forestales, vertidos e incluso en actividades de ocio y tiempo libre, por lo que es necesario aplicar una política integral de la protección de la fauna silvestre.

CUARTA: algunos autores entienden que las piezas de caza corresponden al propietario, configurándose estas como *fructus fundi*, siempre y cuando la caza se produzca en terrenos acotados o cercados, también añaden razones económicas para considerar las piezas de caza como *fructus fundi*, debido a que se deduce que la caza se cría con la inversión que hace el propietario. Debe diferenciarse el derecho a cazar y el derecho de aprovechamiento cinegético, que permite la práctica de la misma pero no

conlleve la titularidad de los animales que se encuentran en el terreno sobre el que se tiene derecho a cazar, siendo a nuestro juicio la naturaleza jurídica de las piezas de caza *res nullius*, como así se deduce de la regulación del comiso de las piezas de caza ilícitamente obtenidas, cuando establece que estas no serán entregadas al titular del terreno, se entregará a un centro benéfico o, en su defecto, al Ayuntamiento o Entidad local que corresponda. Con idéntico fin, cuando se trate de especies de caza mayor con trofeo, se separará éste del cuerpo de la res y se pondrá a disposición del instructor. A su vez, de acuerdo con el artículo 42.e) de la Ley de Caza, los que, sin el debido permiso, entraren en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, portando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente, serán castigados como reo de delitos de caza, pero no serán castigados por un delito o falta de robo o hurto, deduciéndose con ello, que las piezas de caza son *res nullius*. Asimismo, otro ejemplo es la nueva reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que considera a las piezas de caza que invaden la calzada como *res nullius*, no respondiendo así el seguro de responsabilidad civil del dueño del acotado.

QUINTA: el régimen jurídico de la caza, se ha basado en la confrontación de dos principios, el de libertad y el de propiedad, dichos principios se han visto superados en la actualidad por el principio de protección de la fauna silvestre. Esta evolución de principios se debe a la acuciante necesidad de adecuación de la actividad cinegética al desarrollo sostenible y a la conservación de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad. Ya la Ley de caza de 1970, en su preámbulo, reconocía la necesidad de revisar nuestra legislación cinegética acorde con los tiempos actuales, con el fin de garantizar la protección de la riqueza cinegética nacional. A nuestro juicio, sería necesaria esa revisión que la propia ley promulga, actualizando así esta ley preconstitucional y su reglamento de desarrollo.

SEXTA: la actividad cinegética se encuentra altamente regulada pero de una forma confusa y contradictoria, por lo que a nuestro juicio es necesario y fundamental asegurar unas normas mínimas y homogéneas para la actividad cinegética en todo el territorio, optando por una política integral de protección de la fauna silvestre. Una vez analizados los puntos más importantes relacionados con la actividad cinegética, las conclusiones a las que se llegan son varias, así en primer lugar hay que hacer referencia a la complejidad de su marco normativo, basado primordialmente en la regulación

procedente de las Comunidades Autónomas, a su vez hay que tener en cuenta las normas emanadas a nivel europeo, así como la normativa estatal incluida en la Ley de caza, siendo esta legislación básica allí donde no se ha producido legislación autonómica y de aplicación supletoria en los restantes territorios, produciéndose en muchas ocasiones un solapamiento que provoca gran dificultad a la hora de determinar la norma que prevalece y que será de aplicación.

SÉPTIMA: se produce una gran problemática debido a la dispersión y fragmentación normativa en relación a la caza, así como a la diversa regulación del régimen de infracciones y la calificación de las sanciones derivadas de la caza, ya que cada Comunidad Autónoma la regula con arreglo a sus propios criterios, sin llegar a darse unos criterios o principios unificados, provocando una descoordinación entre ellas, salvo en algunos aspectos puntuales que afectan a territorios limítrofes. Este segundo punto conlleva a su vez un tercer problema para la actividad cinegética, como es la dispersión jurisdiccional, debido a que la interpretación y las decisiones judiciales dadas, varían en función de la calificación de las infracciones administrativas por cada CCAA y provoca a su vez, una imposibilidad de unificación de criterios. Como se ha apuntado con motivo de las responsabilidades producidas por la caza y a su vez debido a la fragmentación normativa en relación al régimen de infracciones y sanciones, se producen grandes diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas. Necesitándose por tanto un régimen de infracciones y sanciones unificado, que debe responder a unos principios y criterios comunes y coordinados en todo el territorio estatal, asegurando así un modelo coherente del régimen cinegético tanto para las especies cinegéticas, las no cinegéticas, sus hábitats. Facilitando así que los cazadores tengan una normativa de fácil cumplimiento y no una multitud de legislaciones aplicables a la materia que provocan confusiones, ya puede darse el caso irónico que en unos pocos metros sea aplicable una norma u otra. Asimismo se produce otra problemática en torno a la terminología utilizada en las legislaciones de caza autonómicas que crea una gran confusión e inseguridad jurídica al cazador, siendo necesaria la unificación terminológica por parte de las CCAA.

OCTAVA: el Derecho administrativo es clave para la protección de la biodiversidad y la regulación de los recursos naturales, a través de sus instrumentos jurídicos se orienta regula y limita la actividad cinegética. Cuando estos instrumentos fallan, es cuando

entra en juego la responsabilidad por daños, considerándose una protección subsidiaria, con el objetivo de reforzar la protección ambiental. En virtud del principio de intervención mínima y teniendo presente su poder coercitivo como norma protectora disuasoria, debe considerarse también al Derecho penal como instrumento de tutela ambiental.

NOVENA: en virtud de una demanda social, es necesaria una mayor comunicación entre las Federaciones de Caza y las Administraciones en lo relativo a la fijación de las vedas, así como en la propia redacción de las leyes, en las que en este ámbito se requiere un conocimiento propio del campo, práctico y cercano en el ejercicio de la caza, se solicita la colaboración para la divulgación de la ley por parte de las Autoridades en lo referente a los aspectos ligados al ejercicio de la actividad cinegética.

DÉCIMA: la actividad cinegética debe desarrollarse de una manera racional y ordenada, en virtud del principio de conservación y aprovechamiento racional de las especies cinegéticas, contribuyendo de esta forma a la protección de la biodiversidad. Se deberá desarrollar esta actividad en armonía con la gestión, protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de los recursos cinegéticos. En este sentido el cazador como gran conocedor del medio natural, se constituye como un elemento significativo en la correcta gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, contribuyendo con ello a la conservación, protección y fomento del patrimonio cinegético.

DECIMOPRIMERA: se presenta esta actividad como un aprovechamiento agrario que constituye una fuente de rentas para los propietarios rurales que hay que potenciar, asegurando el carácter sostenible del mismo. Con el comercio y explotación industrial de las piezas de caza, a través de granjas cinegéticas o cotos industriales, como parte importante en el desarrollo de la actividad y fuente de creación de empleo rural, se disminuiría el éxodo de los habitantes en dichas zonas por escasez de oportunidades laborales, buscando siempre el desarrollo sostenible de la actividad cinegética.

DECIMOSEGUNDA: la mayoría de la doctrina considera que la licencia de caza es una autorización administrativa que permite el ejercicio de la caza a quien la solicite y reúna las condiciones exigidas por la normativa, esta exigencia de cumplimiento

normativo, pone de manifiesto el carácter reglado de la licencia. Se debe establecer una licencia de armas única así como un examen del cazador unificado para obtenerla en todas las CCAA y así evitar que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada CA en donde deseen realizar esta actividad. A la vez esto redundará en una mayor eficacia y eficiencia administrativa. Esto será posible a través del desarrollo y ampliación del gran avance legislativo aportado por la Resolución de 10 de julio de 2014, por la que se ordena la publicación del «Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial». Actualmente no es posible la emisión de dicha licencia, por lo que se deberá realizar por parte de las administraciones autonómicas las gestiones necesarias para poder llevar a cabo este protocolo. Con la existencia del Registro Español de Infractores de Caza y Pesca, incluido por la reforma de la Ley de Montes de 2015 se facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre las CCAA.

DECIMOTERCERA: de acuerdo con parte de la doctrina, es necesario establecer una edad mínima para cazar idéntica en todo el territorio, en base a que el establecimiento del requisito de la edad por parte de cada CCAA, no encuentra título legitimador en la competencia exclusiva en materia de caza atribuida por la CE, sino que se trata de una cuestión vinculada a la capacidad de las personas, de competencia estatal y que requiere uniformidad. Estableciéndose por tanto como criterio general en todo el territorio nacional los dieciocho años para cazar con armas de fuego, evitándose así los problemas derivados de la inimputabilidad de los menores de edad en materia cinegética.

DECIMOCUARTA: el certificado de antecedentes penales es uno de los documentos que se requiere para la obtención de la licencia de armas. Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizan un informe sobre la conducta y antecedentes del interesado. A nuestra consideración, respecto a la valoración de la peligrosidad por parte de la Administración, ésta ha de ser específica sin que quepa la posibilidad de que la resolución se ampare en una percepción abstracta de buena conducta, siendo imprescindible que los hechos y circunstancias que se toman en consideración tengan un alto grado de relevancia en relación con la peligrosidad que pueda suponer la

titularidad de la licencia de armas para la seguridad pública. A su vez, en nuestra opinión debería establecerse la posibilidad de la denegación de la licencia de caza de forma permanente derivada de la reincidencia en infracciones muy graves o delitos penales relativos a la protección de la fauna, con el fin de acabar con el furtivismo y proteger a la fauna silvestre.

DECIMOQUINTA: en nuestro juicio se debería regular la duración de los arrendamientos del aprovechamiento de los cotos de caza de una forma uniforme en todas las CCAA, basándonos en la legislación de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Castilla La Mancha, se debe establecer que el contrato de arrendamiento no será superior o inferior al tiempo de vigencia del plan técnico de caza establecido para un terreno cinegético, que suele ser de 5 años, buscando así un equilibrio entre la sostenibilidad de las especies y la racional gestión de los aprovechamientos. A su vez, esta posición encuentra argumentos en la Doctrina Constitucional, que entiende que al disponerse un período mínimo de duración de dichos contratos, lo que se pretende es dotarlos de cierta estabilidad temporal con la finalidad de impedir que el cambio continuado de titulares o la variación en el destino o aprovechamiento de tales terrenos, perjudique a la fauna silvestre existente en los mismos, dificultando así la actividad de conservación, ordenación y planificación de ese recurso natural.

DECIMOSEXTA: se debe exigir una actitud de compromiso y fomento para la protección de la fauna y la mejora del hábitat cinegético de los cotos de caza por parte de todos los sujetos intervinientes en la actividad cinegética, como son los cazadores, titulares de terrenos cinegéticos y la Administración Pública. Las actuaciones de fomento tienen como objetivo común la mejora de la caza, de la fauna cinegética y de su hábitat (madrigueras artificiales, zonas de aclimatación, piezas de sal, el mimo en los cultivos que sirven de alimento a las especies que allí residen, plantación de cultivos especiales, tratamientos fitosanitarios de baja toxicidad para la fauna silvestre, pesticidas de baja toxicidad, el establecimiento de mecanismos ahuyentadores de caza en maquinaria agrícola). Entre estas actuaciones destacan, la obligación de los titulares cinegéticos de incrementar las inversiones para la mejora de los cotos y de la fauna existente en ellos. Asimismo las CCAA, deberán mejorar las ayudas públicas en favor del fomento y del hábitat cinegético, destinadas a la ejecución de actuaciones en el

medio natural que vengan recogidas en el plan cinegético, o la creación de bebederos, comederos, refugios o plantaciones arbustivas.

DECIMOCTAVA: los Planes Técnicos de Caza son un requisito imprescindible para el ejercicio de la caza en los terrenos cinegéticos y su correcta aplicación es garantía de conservación. Es un instrumento de gestión de los terrenos cinegéticos que garantizan el aprovechamiento sostenible de las especies que se consideran cazables, compatibilizándolo con la conservación de los ecosistemas y de todas las demás especies silvestres. La redacción del Plan Técnico de caza tiene que ser realizada por un técnico competente, ya que se necesitan conocimientos técnicos y científicos, así como una amplia formación en materia de gestión, en nuestra opinión el facultativo encargado de realizar y suscribir el Plan deberían ser los ingenieros de montes y los ingenieros forestales, debido a que tienen una visión global del entorno natural derivada de su formación, donde adquieren conocimientos en la gestión, ordenación del territorio y en materia cinegética, en todo caso deberá estar visado por el colegio profesional correspondiente. De esta manera se dotaría de mayor nivel técnico a la planificación cinegética. Ésta se debe complementar con la gestión para garantizar el adecuado uso sostenible de un recurso, a su vez debe lograr que la caza sea una herramienta básica en la conservación de la biodiversidad. A su vez es necesaria una correcta planificación por parte de la Administración pública a través de los Planes de Ordenación Cinegética y con una correcta supervisión de la gestión privada, por lo que es necesario que se refuerce el seguimiento de los instrumentos de planificación cinegética.

DECIMONOVENA: la presión social para la persecución de los delitos contra el medio ambiente obliga a las administraciones autonómicas a dotarse de servicios de vigilancia medioambiental, estos servicios los prestan los guardas forestales. Esta figura se encuentra con el problema del exceso de territorio por guarda que debe atender, dedicando a su vez la mayoría de sus esfuerzos y medios dotacionales a la vigilancia y gestión de los espacios naturales protegidos, siendo inviable simultanear el trabajo en el territorio asignado con la vigilancia de los parques naturales, reservas, monumentos, etc. Por lo que a nuestro juicio se debería destinar una dotación de equipo humano específica de guardas forestales a cada figura de espacio natural protegido. A su vez, una segunda dotación de equipo humano se debe destinar a la gestión y vigilancia del resto de terrenos, ya sean públicos y privados, buscando en estos últimos la

colaboración con la guardería privada. Punto importante en la vigilancia de los guardas forestales es aplicar una correcta ratio de ha/agente que haga posible cumplir el fin conservacionista para el que fueron declarados. En el País Vasco, las instituciones forales determinarán el número máximo de hectáreas por cada guarda, que podrá variar entre 20.000 hectáreas y 30.000 en función de las características del terreno, lo que hace imposible llevar a cabo esa función de gestión y vigilancia, repercutiendo negativamente en la calidad, efectividad y rentabilidad del trabajo realizado y, en definitiva, en el servicio público prestado.

VIGÉSIMA: se debe a través de las subvenciones o programas de ayuda, intensificar la vigilancia de los terrenos cinegéticos y no cinegéticos a través de la figura del guarda de caza, ya que en muchas CCAA se impone como obligación esta figura pero sin contar con el coste económico que supone al titular del terreno. Es importante desarrollar esta figura para evitar el aumento del furtivismo, que ha pasado de cazar ilegalmente por la necesidad de obtener alimento a cazar en busca de trofeos de caza mayor por su alto precio, sin importarle el daño producido a la riqueza cinegética.

VIGESIMOPRIMERA: la correcta señalización de los terrenos cinegéticos es inherente a una adecuada gestión, además de una obligación establecida por la legislación vigente en materia de caza, siendo el titular cinegético del terreno el que tendrá la obligación de proceder a la señalización y al mantenimiento de éstas. La finalidad de las señales cinegéticas es dar a conocer materialmente la especial condición cinegética de un terreno, informando al cazador de su característica especial que impide la caza sino se han cumplido una serie de requisitos determinados. Por ello resultan de obligada colocación por los titulares o responsables del terreno. La Administración velará por la correcta señalización de todos los terrenos de gestión privada, así como de los suyos propios.

VIGESIMOSEGUNDA: como medida para hacer frente al fomento, planificación, vigilancia, señalización a las que debe hacer frente el propietario de terreno cinegético, al cual muchas de las veces no le aporta ningún beneficio. Se debe destinar una línea de subvenciones por parte de la Administración pública para ayudar a dichos titulares a cumplir con sus obligaciones, a su vez debería destinarse el pago de la matricula del coto o cualquier otra medida fiscal relacionada con el aprovechamiento cinegético, así

como el producto de las sanciones económicas por la comisión de infracciones de caza debe ayudar al cumplimiento de dichas obligaciones y a la reparación de los daños causados al medio ambiente, del mismo modo lo que se recauda del pago de la tasa para obtener la licencia de caza se debe dedicar a la gestión y la conservación de la caza, como así se aplica en otros países, como es el caso de EEUU.

VIGESIMOTERCERA: se debe fomentar la agrupación de cotos de caza debido a que la gestión cinegética unitaria o coordinada de grandes superficies obtiene mejores resultados, ya que muchas de las especies cinegéticas y sus predadores son escasamente territoriales o tienen áreas vitales de considerable magnitud. De poco o nada sirve, por ejemplo, realizar un control de predadores en un pequeño acotado, si los cotos colindantes no controlan en absoluto las poblaciones. Se deberá proporcionar por parte de la administración el correspondiente asesoramiento técnico y jurídico para la agrupación de cotos.

VIGESIMOCUARTA: en la actualidad una gran parte de la actividad cinegética está enfocada a la industria turística y el negocio cinegético, primando muchas veces el número de capturas, produciéndose una proliferación de cotos en los que se produce suelta de animales obtenidos en granjas sin pasar por los controles existentes, con el peligro de enfermedades que esto provoca. Es necesario un control riguroso respecto a las granjas que pudieran existir sin la debida autorización de las administraciones competentes y a su vez, se debe controlar por parte de la administración la pureza genética de las granjas cinegéticas regionales. Junto a este control es necesario reforzar los controles de las repoblaciones y sueltas autorizadas.

VIGESIMOQUINTA: con la creciente concienciación de la protección y bienestar de los animales domésticos se debe buscar por parte de las CCAA un equilibrio legislativo en esta materia que busque dar soluciones al abandono y posterior asilvestramiento de estos animales, basadas en la protección de los mismos. A tales efectos, se consideran animales domésticos asilvestrados los animales de compañía y los de renta, que pierdan la condición de domésticos, formando parte del medio natural, viviendo libre del dominio del hombre llegando a ser independientes de los cuidados humanos y que produzcan daños en el ecosistema que habitan. En nuestra opinión se debe seguir la postura de ciertas CCAA, como Castilla León, Murcia o Andalucía que no consideran

piezas de caza a los animales domésticos asilvestrados. No obstante, como incorporan dichas CCAA, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, o de daños, o de equilibrio ecológico, previa autorización concedida por la Consejería competente especificando, en su caso, los procedimientos y medios de caza a utilizar que habrán de ser selectivos y no actuar en perjuicio de otras especies o de sus hábitats. Así la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de las competencias de los Ayuntamientos en el control de animales domésticos abandonados o sin dueño, la Consellería competente en materia de caza podrá autorizar a los titulares de los espacios cinegéticos el control por medio de captura en vivo, con métodos selectivos que no provoquen daño, de aquellos animales domésticos asilvestrados que puedan causar daños o constituirse en un peligro para las personas, los bienes o las especies silvestres, poniéndose a disposición de la administración competente. Estas mismas autorizaciones podrán contemplar su control mediante abatimiento por arma de fuego cuando su captura en vivo no permita dar en tiempo y forma una solución satisfactoria en relación a los peligros potenciales que generan los animales asilvestrados, bien por la dificultad de su captura en vivo, bien por el elevado número de ejemplares existentes. Por parte de las Administraciones se debería establecer campañas de control mediante trampeos selectivos y protocolos de captura, utilizados ya para paliar el problema de las especies exóticas invasoras.

VIGESIMOSEXTA: cuidar, atender y respetar a los perros de caza debe ser una obligación y un deber para los gestores cinegéticos, rehaleros, galgueros y cazadores particulares. No puede considerarse buen cazador a quien no respete las órdenes de veda, ni a quien no cuide y respete a sus perros de caza. En este sentido coincidiendo con el cierre del periodo hábil de caza se multiplica el abandono y muerte de perros utilizados para tal finalidad, por no reunir, para el dueño, las condiciones necesarias para la caza. Deben ser los propios cazadores quienes pongan en conocimiento de las autoridades públicas los posibles maltratos. En las cacerías se debe velar en todo momento por la salud y bienestar de los animales auxiliares (perros de caza, aves de cetrería o hurones).

VIGESIMOSEPTIMA: en relación con el daño causado por las especies no cinegéticas, no se puede considerar una responsabilidad relacionada con la caza, surge con ello la duda, de si existe un deber jurídico de soportar el daño por quien lo sufre, a su vez, éste se ve imposibilitado de actuar frente a la especie que ha causado el daño, ya

que la Administración dota a dicha especie de un nivel especial de protección. La jurisprudencia da respuestas variadas a la responsabilidad de los daños causados por especies no cinegéticas, en unos casos, entiende que deberá responder la Administración por las limitaciones establecidas en las normas de protección de los terrenos y de las especies; en otros casos, se considera la no existencia de tal responsabilidad patrimonial administrativa, únicamente la Administración deberá establecer ayudas económicas compensatorias por los daños producidos. A nuestro juicio debería seguirse la línea jurisprudencial y doctrinal, basada en la responsabilidad de la Administración y en la no obligación jurídica del ciudadano de soportar el daño, debido a que opera la *publicatio* sobre las especies protegidas, constituyendo causa suficiente para que sea la propia Administración la que debe asumir el resarcimiento de los daños producidos por las especies no cinegéticas. Asimismo es necesario un seguimiento de daños producidos por las especies tanto cinegéticas como no cinegéticas, así como un análisis de las causas que los originan para lograr su minimización y mejorar la eficacia de los seguros.

VIGESIMOCTAVA: por otro lado, el excesivo control de algunas especies depredadoras que, aunque una parte de su cadena trófica sean las especies cinegéticas, también ejercen un control de especies que por su proliferación a falta de dicho control se convierten en auténticas plagas, produciendo graves problemas al hábitat y a los agricultores. Por lo que se debería situar a tales bienes jurídicos en el lugar jerárquico que les corresponde y desarrollar una adecuada protección y correcta regulación de forma planificada y controlada de las especies depredadoras, evitando así el poner en peligro a ciertas especies y sus hábitats.

VIGESIMONOVENA: la nueva modificación del artículo 337 del CP en su primer apartado, incorpora como delito el sometimiento a explotación sexual (zoofilia o actos de bestialidad) de los animales domésticos, domesticados, que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje, creando cierta confusión a la hora de la interpretación como en la posible aplicación de la pena, no define el carácter público o privado de la conducta típica. Por lo que en nuestra opinión debería cambiarse la terminología de explotación por la de uso sexual en cualquier ámbito independientemente de que sea privado o público, evitando con ello una interpretación restringida del tipo penal.

TRIGÉSIMA: a nuestro juicio el bien jurídico protegido por el delito de contrabando recogido en el artículo 2.2.b) de la LO de represión de contrabando, es dual debido a que la tipificación busca proteger el interés económico, derivado de los aranceles o tributos y busca a su vez proteger la biodiversidad de la fauna que se pone en peligro cuando se realiza la acción típica, es decir, “operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia y circulación” de alguna especie recogida en el Convenio de Washington o en el Reglamento CE 338/1997 del Consejo. En relación a la problemática concursal con el delito previsto en el artículo 334 del CP, debido a que ambos protegen a la fauna silvestre del tráfico ilegal, se deberá resolver dicho conflicto por el principio de especialidad, aplicándose por tanto el artículo 2.2.b) de la Ley de represión de contrabando.

TRIGESIMOPRIMERA: se debe potenciar un Sistema de Gestión de Calidad Cinegética, a través del certificado de calidad, implantado por Andalucía, que servirá para gestionar todos los elementos que interaccionan con la gestión cinegética compatibilizando el rendimiento económico con la conservación del medio natural donde se realiza. Es un modo de mejorar la gestión de las especies de caza como recursos renovables y compatibles con la conservación de los hábitats. Este certificado seguirá la línea de los Sistemas de Gestión altamente implantados en nuestra sociedad, como son los sistemas de calidad y medio ambiente (ISO 9.001-ISO 14.001). Se deberán buscar como base del Sistema, Indicadores de Gestión de la Calidad Cinegética aplicables a cotos. El objetivo de este Sistema de Calidad cinegética es llevar a cabo una mejora continua de la gestión e ir alcanzando las metas fijadas.

TRIGESIMOSEGUNDA: se debe optar por una adecuada formación y educación ambiental de los cazadores para la promoción de la caza sostenible, como así se realiza en otros países como por ejemplo Canadá. Se deberá por parte de las Administraciones autonómicas implementar líneas de ayuda para que se puedan ejecutar actividades tales como cursos, charlas, publicaciones o seminarios, que ya se están aplicando en otros sectores, como son los agricultores y ganaderos, así se obtendría un mejor conocimiento y formación de los propios cazadores así como una correcta aplicación de las técnicas de gestión más apropiadas por parte los agentes implicados en la actividad cinegética, como son los titulares de los terrenos cinegéticos. En esta línea de formación y educación ambiental, habría de incluirse de forma obligatoria a los infractores

administrativos en materia cinegética con el fin de proveerles de una mejorada conciencia medioambiental. Se deben llevar a cabo actividades divulgación y conocimiento de la caza en la sociedad, que se llevaran a cabo a través de las asociaciones de caza o a través de la propios organismos públicos implicados en la caza, mediante actividades, divulgación y participación, que permitan que la sociedad conozca y obtenga una nueva visión de esta actividad.

TRIGESIMOTERCERA: en los últimos diez años el número de licencias expedidas por cada una de las CCAA ha sufrido un gran descenso, esto es debido a la falta de relevo generacional. Los jóvenes tienen una gran concienciación social y medio ambiental que les genera cierta animadversión hacia la caza, esto unido al abandono de las zonas rurales hace que el futuro de la actividad cinegética se enfoque a la caza intensiva (la ejercida sobre piezas de caza procedentes de explotaciones industriales) y al turismo cinegético. A su vez dicho despoblamiento del medio rural en zonas de especial interés cinegético ha provocado un cierto descuido de las referidas zonas y por consiguiente un incremento de colisiones de piezas de caza con vehículos a motor, con el consiguiente riesgo para la vida y la integridad de los conductores.

VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA Y POLÍTICO CRIMINAL

Históricamente los delitos relacionados con la caza aparecen con la figura fundamental del denominado “furtivo”. El origen de la figura del furtivo viene dada por la necesidad de obtener alimento para su sustentación, mediante la utilización de métodos simples y rudimentarios capturando así las presas dentro de las posesiones de los grandes propietarios. La imposición de las penas se realizaba de forma arbitraria y normalmente se ejecutaba por el propio “señor” de las tierras donde el furtivo actuaba. En muchas ocasiones ante la imposibilidad de controlar a determinados furtivos, éstos eran contratados como guardas de las tierras, pasando de “delincuentes” a tener un puesto con autoridad.

Con el paso del tiempo y la mejora del nivel de vida la figura del “furtivo” ha ido evolucionando en cuanto a la psicología y los medios para realizar las capturas, convirtiéndose en individuos que se podrían encuadrar dentro de los trastornos en el control de los impulsos, pues manifiestan una dificultad para resistir el impulso de cazar, una motivación o tentación a llevar a cabo dichos actos perjudiciales para con terceros o para el propio sujeto, y en general experimentan una sensación de tensión o activación interior antes de realizar la conducta experimentando placer, gratificación o liberación en el momento de llevarla a cabo, con o sin posterior sentimiento de culpa, arrepentimiento o autorreproche.¹

Es frecuente que los furtivos actuales no muestren el mismo disfrute realizando las actividades cinegéticas de forma legal que ejerciendo el furtivismo. Por otro lado una derivación actual de esta figura, aunque no siempre derive de un furtivo que se pudiera llamar clásico, es el que se podría llamar “económico”, que busca un beneficio con la venta de las capturas, bien muertas o vivas.

¹ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Criminología una introducción a sus fundamentos teóricos” edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2005, Pág. 377

Con la concienciación medioambiental y la preservación de la biodiversidad surge la figura delictiva reflejada en el artículo 336 del Código Penal.² Anteriormente se utilizaban dichos medios como control de predadores dentro de los cotos de caza (polémica que surgió y vio la luz con el uso de la estricnina) que mostró los graves daños y terribles sufrimientos de los animales envenenados y que no se limitaba a la especie a controlar, sino que abarcaba a toda la cadena alimenticia, desde predadores a necrófagos. En vista de los daños ocasionados, las autoridades controlaron el uso de medios no selectivos, penalizando severamente dicha conducta, pues los daños producidos en los ecosistemas son considerados muy graves.

Como se ha visto la evolución de la criminología de los delitos de caza ha pasado de un castigo arbitrario de una actuación cometida por un estado de necesidad, al castigo más grave, en la medida que dichos actos iban enfocados mas a una ventaja económica o de graves daños ecológicos, dejando de lado para las sanciones administrativas al que podría denominarse furtivo clásico, así como, el endurecimiento de las penas, dado la mejora de los medios que utilizan con la correspondiente desventaja de las especies cinegéticas.

En un principio los delitos en relación con la actividad cinegética se orientaban al furtivismo como defensa de los grandes propietarios de fincas, con lo que en el ámbito social la figura del furtivo era un personaje novelesco, que no tenía la debida reprobación social de otros delitos y que era condenado por las influencias de los grandes terratenientes poseedores de las grandes fincas de caza. Con la llegada de la socialización de las actividades cinegéticas la figura del furtivo paso a ser reprobada administrativamente más que penalmente, exceptuando los casos más graves. En la actualidad, la reprobación social se dirige más al objeto que a las actuaciones que violan los diferentes ordenamientos cinegéticos, debido a que estos van orientados a la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, con lo que la figura criminológica ha

² Dispone el artículo 336 del Código Penal “*El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.*”

pasado de ser una figura circunscrita al ambiente cinegético a tener una reprobación social general que busca la protección de la biodiversidad.³

En relación a la víctima del furtivismo se produce una evolución, en el Siglo XIX se regulaba la caza furtiva como delito patrimonial, siendo la víctima el propietario del coto.⁴ En la actualidad el propio Código Penal regula la caza furtiva como un delito medioambiental, donde la víctima ya no es el propio propietario del coto, sino la fauna, ello motivado por el aumento de la concienciación medioambiental, ampliándose así el hecho criminológico, ya que no se abarca como víctima al propietario del coto, relegando a éste a una figura secundaria.⁵

³ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Criminología una introducción a sus fundamentos teóricos”. Op. Cit. Pág. 98

⁴ Vid. Real Decreto 3 de mayo de 1834, de Ley de Caza y Pesca de España.

⁵ Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Criminología una introducción a sus fundamentos teóricos”. Op. Cit. Pág.104.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLA POBLET, M. “Manual del Derecho de Caza”. Edit. Abella, Madrid 1973.

ACALE SÁNCHEZ, M, “El tipo injusto en los delitos de mera actividad” Edit. Comares, Granada, 2000.

- “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en “Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal”, Tomo IV. Edit. Iustel, Madrid, 2012.

AGULLÓ AGÜERO, A. “La responsabilidad civil derivada del delito”, en COBO DEL ROSAL, M. “Delitos e infracciones de Contrabando, Comentarios a la legislación penal”, Tomo III. Edit. Edersa, Madrid, 1984.

- “Ne bis in idem, contrabando y tráfico de drogas”, en BOIX REIG, T.S; RODRIGUEZ MARÍN, J.; VIVES ANTÓN, J. “Problemática Jurídica y Psicosocial de las drogas” (Estudio psicosocial de la ciudad de Alicante). Valencia, 1987.

ALARCÓN SOTOMAYOR, L. “La garantía non bis in idem y el procedimiento administrativo sancionador”. Edit. Iustel, Madrid, 2008.

ALBADALEJO, M. “Derecho civil. I. Introducción y parte general”. Edit. Bosch, Barcelona, 2002

- “Derecho Civil. II. Derecho de obligaciones”. Vol. Segundo, 9ª ed., Edit. Bosch, Barcelona, 2011.

ALONSO GARCÍA, E. “El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea,” 2 vols., Cuadernos de Estudios Europeos. Edit. Civitas, Madrid, 1993.

- “Concepto de medio ambiente como el objeto del Derecho: el ámbito del Derecho ambiental”, en “Diccionario de Derecho ambiental”. Edit. Iustel, Madrid, 2006.

ÁLVAREZ HALCÓN, RAMÓN M., “La protección jurídica de los organismos silvestres en España” Revista Ibón nº 10. Edit. Agencia Medio Ambiental Ibón, verano de 2000

ANTÓN BARBERÁ, A.; SOLER TORMO, J. I., “Policía y Medio Ambiente”. Edit. Comares, Granada, 1996.

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340)”. Tomo X. “Vol. II. Libro II. En COBO DEL ROSAL, M. VVAA. “Comentarios al Código Penal. Segunda época”. Edit. CESEJ, Madrid, 2006.

ARMENDÁRIZ LEÓN, Carmen, “Alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad”, en MOLINA BLÁZQUEZ, M.C (coord.) “La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito”. Edit. Bosch, Barcelona, 2005.

ASENJO GONZALEZ, M. “La villa de Aguilafuente: vida social y actividades económicas a través de las ordenanzas 1481-1527”. Edit. Estudios Segovianos, 1951, Segovia.

- “Espacio y sociedad en la Soria Medieval”. Edit. Instituto de Estudios Sorianos, Soria 1999.

BAJO FERNANDEZ, M. “Importación o exportación de géneros de ilícito comercio”, en COBO DEL ROSAL “Delitos e infracciones de Contrabando, Comentarios a la Legislación Penal”, Tomo III. Edit. Edersa, Madrid, 1984.

- “La unidad del Derecho sancionador”, en “Estudios jurídicos en Homenaje al Prof. Luis Díez-Picazo”, Tomo IV. Edit. Cívitas, Madrid, 2002.

BALLESTEROS, M.J. “Usar y conservar. La estrategia para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica nace con un amplio consenso sociopolítico”. Edit. Revista MOPTMA, núm. 472, febrero 1999.

BAUCCELLS I LLADÓS, J. “Comentarios a los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”, en CÓRDOBA RODA, J.

y GARCÍA ARÁN, M. (dirs.), “Comentarios al Código Penal. Parte Especial”, Tomo I, Edit. Marcial Pons, Madrid 2004.

BAUTISTA PAREJO, C. “Aspectos biológicos y zoológicos de los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”. Edit. Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, T. VIII,

BERNARD DANZBERGER, J.; TRUEBA, P. “Examen de armas. Conocimiento y manejo”. Edit. Fedenca, Madrid, 2000.

BLANCO LOZANO, C. “Acerca de algunas cuestiones básicas del Derecho penal ambiental en el nuevo Código Penal de 1995”, Edit. Cuadernos de Política Criminal, 60 (1996).

- “La protección del medio ambiente en el Derecho penal español y comparado”. Edit. Comares, Granada, 1997.

BOIX REIG, J. “La jurisprudencia constitucional sobre el principio non bis in idem”, en “Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo”. Edit. Thomson- Cívitas, Navarra, 2005.

BOIX REIG, J.; JAREÑO LEAL, A. “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”, en VIVES ANTÓN, T. (coord.), “Comentarios al Código Penal de 1995”, vol. II, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 1996.

BOQUERA OLIVER, J.M. “Aspectos administrativos de la Ley de Caza”. Edit. Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 177, año 1973.

BRANDARIZ GARCÍA, J.A. “La problemática de las normas penales en blanco”, en FARALDO CABANA, P. (dir.) “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

BUSTOS RAMÍREZ, J. “Manual de Derecho penal. Parte especial”, 2ª ed. Edit. Ariel, Barcelona, 1991.

- “Manual de Derecho penal. Parte general” 4ª ed. Edit. PPU, Barcelona, 1994.

CABALLERO KLINK, J. “Delitos relativos a la protección de la fauna y la flora”. Edit. Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, T.VIII, 1998, Boletín núm.1866.

CABALLERO LOZANO, J.M. “Aspectos civiles de la caza desde la perspectiva de la Ley de Castilla y León”. Edit. Reus S.A. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Núm. 3 año 2001.

CALVO CHARRO, M. “Sanciones medioambientales”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1999

- “Escritos de Derecho Ambiental. Epígrafe 21. Introducción. Régimen jurídico de la fauna silvestre en libertad”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2004.

CAMPOS PALACÍN, P. “Ciencia y Política cinegética en los Parques Nacionales”. Edit. Revista Foresta, 2013 nº 61.

CAMPOS, P; MESA, B.; ÁLVAREZ, A.; HERRUZO, A.C.; MARTÍNEZ-JAÚREGUI, M.; CARRANZA, J.; OVANDO, P; OVIEDO, J.L. “*Revising linked hunting and private amenity incomes: Application to Mediterranean woodlands farms in Andalusia, Spain*”. En XIV WORLD FORESTRY CONGRESS, Durban, South Africa, 7-11 September 2015.

CAMPWELL, R “La caza en todos los países a través de los siglos”. Edit. Criel, 1995.

CANALS AMETLLER, D. “La polémica jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de espacios naturales protegidos: competencias estatales versus competencias autonómicas”. Edit. Revista de Administración Pública, 142, 1997.

CANOSA USERA, R. “Constitución y medio ambiente”. Edit. Dykinson, Madrid, 2000

CARBONELL MATEU, J.C; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. “Derecho Penal. Parte Especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2004.

CARDONA TORRES, J. “Derecho penal. Parte especial. Adaptado a la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio”. Edit. Bosch, Barcelona, 2010.

CARMONA RUIZ, M.A. “Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV”. Edit. Ministerio de Agricultura, Madrid 1995.

CASADO ALONSO, H. “Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos en la Baja Edad Media”. Edit. Junta de Castilla y León, Valladolid 1987.

CASQUERO RUBIAS, A. “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Edit. Cuadernos de la Guardia Civil 15, 1996.

CASTÁN TOBEÑAS, J. “Derecho civil español común y foral, Tomo 4”. Edit. Reus, Madrid, 1992.

CEREZO MIR, J. “Curso de Derecho penal español. Parte general. Introducción”, 6ª ed. Edit. Tecnos, Madrid, 2004.

- “Derecho penal. Parte general-lecciones” 2ª ed. Edit. UNED, Madrid, 2000.
- “La regulación del error de prohibición en el código penal español y su trascendencia en los delitos monetarios”. Edit. ADPCP, Tomo XXXVIII, Fascículo II, 1985.
- “Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo”. Edit. Revista de Derecho penal y criminología, Nº 10, 2002.

CLIMENT DURAN, C. “Los delitos de Caza como manifestación de la delincuencia ecológica”. Edit. Revista general del Derecho nº540, 1989.

COBO DEL ROSAL, M.; BOIX REIG, J. “Garantías constitucionales del Derecho sancionador. Artículo 25”, en “Comentarios a la legislación penal”, Tomo I. Edit. EDERSA, Madrid, 1982.

COBO DEL ROSAL, M.; QUINTANAR DÍEZ, M. “Artículo 25 Garantía penal”, en “Comentarios a la Constitución española de 1978”, Tomo III. Edit. Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996.

- “Falta contra el medio ambiente y falta del maltrato de animales”, en M. COBO DEL ROSAL (coord.), “Derecho Penal español. Parte especial”, 2ª ed. Edit. Dykinson, Madrid 2005.

COBO DEL ROSAL, M.; VIVES ANTÓN, T. S. “Derecho penal. Parte general” 5ª ed. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

COBO DEL ROSAL, M; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C; BENITEZ ORTÚZAR, I. F; GÓMEZ TOMILLO, M; JAVATO MARTÍN, AM; MUÑOZ LORENTE, J; OLMEDO CARDENETE, M; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, I; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I y SUAREZ LÓPEZ, J. “Comentarios al Código Penal. Segunda época” Tomo X. “Vol. II. Libro II. “Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos 319 a 340). Edit. CESEJ. Madrid. 2006

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. “Código penal comentado”, Tomo II. Edit. Bosch, Barcelona, 2004.

- “Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia”. Tomo II. Edit. Trivium. Madrid. 1997.

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. “De los delitos relativos a la protección de la flora y fauna y animales domésticos, y Disposiciones comunes”, en CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (Dir.), LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (Coord.), “Comentarios al Código penal”, Tomo IV, 4ª ed. Edit. Bosch, Barcelona, 2007.

CÓRDOBA QUINTANA, P. “La Guardia Civil, defensa de la ley y servicio a España”. Tesis inédita, dirigida por SANTA CECILIA GARCÍA, F. Madrid, 2014.

- CUENCA ANAYA, F. “La caza en las Comunidades Autónomas: derecho comparado”. Edit.: Al-Andalus, Sevilla 1998.
- CUERDA ARNAU, M.L. “Maltrato y abandono de animales, art. 337 y 337 bis CP”, en; GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015.
- CUEVILLAS MATOZZI, I. “La relación de causalidad en la órbita del derecho de daños”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2000.
- CHIMNEY, J.; DUCAHRTRE, P.L.; EDMOND-BLANC, F.; LUART, L.; SARREAUT, O. “Historia mundial de la caza”. Edit. Blume, Barcelona 1971.
- DE AQUINO, T. “Suma contra los gentiles”. Trad. C.I. GÓNZALEZ, México, Porrúa, 2ªed., 1985, lib.III cap.112, nº.13.
- DE LA CUESTA AGUADO, P.M. “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999,
- DE LA MATA BARRANCO, N. J., “Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita”. Edit. Cedecs. Barcelona. 1996.
- DE LEÓN VILLALBA, F. J. “Acumulación de sanciones penales y administrativas. Sentido y alcance del principio “ne bis in idem”, Edit. Bosch, Barcelona, 1998.
- DE LOS MOZOS, J.L. “Precedentes históricos y aspectos civiles del Derecho de caza”. Edit. RDpriv., num.4, 1972
- DE MARTINO, V. “Commentario al codice civile, libro III (Della proprietà)”. Edit. Pem, 1970, Italia.

DE MIGUEL PERALES, C. “Derecho español del medio ambiente”. Edit. Cívitas, Madrid, 2000.

DE VICENTE MARTÍNEZ, R. “Derecho penal del medio ambiente”, en “Tratado de Derecho ambiental”, Dirs. Ortega Álvarez, L.; Alonso García, C. Edit. Tirant lo blanch, Valencia, 2013.

DEL MORAL GARCÍA, A. “Aspectos problemáticos en los delitos contra el medio ambiente”, en “Problemas derivados de la delincuencia medioambiental”. Edit. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.

DELIBES, M. “La caza en España”. Edit. Alianza, Madrid 1972

DÍAZ PITA, M. M. “El dolo eventual”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.

DÍAZ ROLDÁN J.L. “La responsabilidad civil derivada de los daños causados por los animales de caza”. Edit. Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ, Madrid, 1993

DÍEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A. “Sistema del Derecho civil: vol. II (tomo 2): contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual”. Edit. Tecnos. Madrid. 1989.

- “Sistema de Derecho Civil vol. II (Tomo 1): El contrato en general. La relación obligatoria” (10ª ed.). Edit. Tecnos, Madrid, 2012.

DÍEZ-PICAZO L. “Derecho de daños”. Edit. Civitas. Madrid. 1999.

DOMÉNECH PASCUAL, G., “La posibilidad de limitar los derechos fundamentales en aras del bienestar animal”. Edit. Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, 74 (2005).

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P. “Responsabilidad Patrimonial de la Administración en accidentes de tráfico por atropellos con especies cinegéticas”. Edit. Revista de responsabilidad civil y seguro.

DURANTEL PASCAL “Nuevo manual de la caza”. Edit. Planeta, Barcelona, 1997.

EBLÉ, J. “La caza en Europa”. Edit. Hispano Europea, 1956.

EMBID IRUJO, A. “Comentarios jurisprudencia en materia de Medio ambiente”. Edit. Revista Actualidad Jurídica nº 27, 2005.

ESTEVE PARDO, J, “La protección de la fauna: el caso de los llamados animales dañinos”, en “Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí”. Edit. Civitas, Madrid, 1989.

- “Protección penal y accesoriedad administrativa en la nueva regulación para la protección del medio ambiente”, en “Incidencia medioambiental y Derecho sancionador”. Edit. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.

ESTÉVEZ ESTÉVEZ, R.; LEÓN LACAL, A. “Introducción a la legislación medioambiental”. Edit. Mandala, Madrid, 2003.

FARALDO CABANA, P. “Flora y fauna (arts. 333, 334, 336, 337, 339 y 631)”, en “Comentarios a la Reforma Penal de 2010”, ÁLVAREZ GARCÍA, F.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; VV.AA. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

- “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011,

FERNÁNDEZ BARREIRO, A y PARICIO, J. “Fundamentos de Derecho Privado Romano” Edit. Paideia, Madrid 2002.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. “La directiva 79/ 409/CEE sobre aves silvestres y su aplicación en España: nuevas consecuencias restrictivas, esta vez en el ámbito de la caza”. Edit. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2005.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA SANZ, F.; MONTOYA OLIVER, J.M. “Criterios y directrices de ordenación silvopastoral en diferentes escenarios forestales de Castilla y León.

Dehesas, pastos y ganado y matas leñosas”. Edit. Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente 2007.

FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ D. “El séptimo programa ambiental de la Unión Europea”. Edit. Revista Aragonesa de Administración Pública ISSN 1133-4797, núm. 41-42, Zaragoza, 2013

FERNÁNDEZ FARRERES, G. “Animales de cazar” en el libro Los animales y el Derecho, dirigido por MUÑOZ MACHADO. Edit. Civitas, Madrid, 1999.

FRADEJAS RUEDA, J.M. “La caza en la Edad Media”. Edit. Instituto de Estudios Iberoamérica y Portugal, Seminario de Filosofía Medieval, Tordesillas, Universidad de Valladolid 2002.

GALLARDO CASTILLO, M. j. “Los principios de la potestad sancionadora. Teoría y práctica”. Edit. Iustel, Madrid, 2008.

GÁLVEZ CANO, M.R. “El derecho de caza en España”. Edit. Comares, Granada, 2006.

GARBERÍ LLOBREGAT, J.; BUITRÓN RAMÍREZ, G. “El procedimiento administrativo sancionador”, Vol. I, 4ª ed. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

GARCÍA ALBERO, R. “Non bis in idem. Material y concurso de Leyes penales”. Edit. Cedecs, Barcelona, 1995.

- “Faltas contra los intereses generales”, en “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”, QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.). Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005.
- “La relación entre ilícito penal e ilícito administrativo: texto y contexto de las teorías sobre la distinción de los ilícitos”, en “El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz”. Edit. Aranzadi, Navarra, 2001.

GARCÍA ÁLVAREZ, P; LÓPEZ PEREGRÍN, C. “Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio”. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Núm. 15-11 (2013).

GARCÍA CORTAZAR, J.A. “La sociedad rural en la España Medieval” Edit. Siglo XXI, Madrid, 1988.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “El problema jurídico de las sanciones administrativas”. Edit. Revista española de Derecho administrativo, Nº 10, 1976.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.- “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II, 7ª. Edit. Civitas, Madrid 2000.

- “Curso de derecho administrativo”, Vol. I. Edit. Thomson-Reuters, 15ª ed., Pamplona, 2011.

GARCÍA GARRIDO, M.J. “Derecho a la caza y ius prohibendi en Roma”. Edit. Instituto Nacional de estudios jurídicos, Madrid 1956,

GARCÍA ROMERO, C., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.P, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.I. y CUENA BOY, A.” Manual del cazador. Cazar para conservar. Régimen jurídico y especies cinegéticas adaptado a las leyes autonómicas de caza”. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2002.

GARCÍA SOLÉ, M. “El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su protección”. Edit. Revista de Bioética y Derecho, número 18 de enero 2010.

GARCÍA URETA A. “Protección de hábitats y de especies de flora y fauna en el Derecho Comunitario Europeo. Directivas 79/409 y 2/43”. Edit. Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbao, 1997.

GARCÍA URETA, A.; LASAGABASTER, I.; ESTEVE PARDO, J; JORDANO FRAGA, J.; LAZCANO BROTONS, I; KRÄMER, L; DE SADELEER, N. “Estudios de Derecho Ambiental europeo”. Edit. LETE argitaletxea, Navarra 2005.

GARCÍA VALDEAVELLANO, L. “Curso de Historia de las Instituciones españolas”. Edit. Alianza Editorial, Madrid 1982.

GARCÍA-GALLO, A. “El origen y la evolución del derecho, manual de historia del Derecho español I”. Edit. Artes Gráficas y Ediciones, Madrid 1973.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Derecho Penal. Introducción”. Edit. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid 2000.

- “Criminología una introducción a sus fundamentos teóricos”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2005.

GIMBERNAT ORDEIG, E. “Estudios de Derecho penal”. Edit. Tecnos, 3ª ed., Madrid, 1990.

GOLDSCHMIDT, J. “Derecho, Derecho penal y proceso”. Vol. I. “Problemas fundamentales del Derecho”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 2010.

GÓMEZ PAVÓN, P. “Cuestiones actuales del Derecho penal económico: El principio de legalidad y las remisiones normativas”. Edit. Revista de Derecho penal y criminología, 2ª Época, Nº extraordinario 1º, 2000.

GÓMEZ RIVERO, M.C. “La inducción a cometer el delito”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.

GÓMEZ TOMILLO, M.; SANZ RUBIALES, I. “Derecho administrativo sancionador. Parte general. Teoría general y práctica del Derecho penal administrativo”, 2ª ed. Edit. Aranzadi, Navarra, 2010.

GÓMEZ-FERRER MORANT, R. El silencio administrativo desde la perspectiva constitucional”. Edit. Documentación administrativa, Nº 208, 1986.

- “Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas”. Edit. Civitas, Madrid, 1996.
- “Título IV. Procedimiento Contencioso-Administrativo. Capítulo IV. Ejecución de Sentencias”. Edit. Revista española de derecho administrativo, Nº 100, 1998.

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L; MATA LIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E.
 “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch.
 Valencia, 2015.

GRAU FERNANDEZ, S. “El actual Derecho de Caza en España”. Conferencia pronunciada el
 día 10 de mayo de 1973, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

GUILBAUD, J. “La chasse et le droit”. Edit. Litec (preparada por François Colas-Belcour)
 Paris, 1994.

GUILLÉN PÉREZ, M. E. “El silencio Administrativo. El control judicial de la inactividad
 administrativa”. Edit. Colex, Madrid, 1997.

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, M. “La responsabilidad penal del coautor”. Edit. Tirant lo
 Blanch, Valencia, 2001.

GUTIÉRREZ ROMERO, F. M. “Delitos relativos a la protección de la flora y fauna en el
 nuevo Código Penal: análisis de los nuevos tipos delictivos”, Edit. La Ley, 2 (2005).

GUZMÁN DALBORA, J. L. “El delito de maltrato de animales”, en AA. VV., La Ciencia del
 Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Prof. Dr. D. José Cerezo Mir,
 Edit. Tecnos, Madrid 2002.

HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y la flora en España” Edit. Trotta Madrid
 2000.

- “La imprudencia inconsciente”, Edit. Comares, Granada 2002.

- “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en AA. VV., “Comentarios al Código Penal”. Edit. Iustel, Madrid 2007.
- “Delitos relativos a la caza y pesca”, en J. BOIX REIG (dir.) y LLORIA, P. GARCÍA (coord.), “Diccionario de Derecho penal económico”. Edit. Iustel, Madrid 2008.
- “La tutela penal de los animales”. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2009.
- “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en “Derecho penal español. Parte especial”, T. II, Dir. Álvarez García, J. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos” en “Derecho penal español, Parte especial” (II), ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), MANJÓN-CABEZA ALMEDA; VENTURA PÜSCHEL (Coord.). Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- .” La protección del bienestar animal a través del derecho penal”. Edit. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI, 2011. ISSN 1137-7550: 259-304.

HAVA GARCÍA, E.; MARQUÈS I BANQUÉ, M., “El delito de caza del artículo 335 del Código Penal. Interpretación y aplicación a propósito de un caso real: el caso ceutrí”, Edit. Revista de Derecho y Proceso Penal, 2 ,1999,, págs. 65-90.

HIGUERA GUIMERÁ, J. F., “El tráfico ilegal de especies protegidas de fauna silvestre”, Edit. Cuadernos de Política Criminal, 53 (1994).

- “La protección penal de los animales en España”. Edit. Secretaria General Técnica, Madrid, 1994.
- “Los malos tratos crueles a los animales en el Código Penal de 1995”. Edit. Actualidad Penal, 17 (1998).

HUERGO LORA, A. “Las sanciones administrativas”. Edit. Iustel, Madrid, 2007.

IGLESIAS, J. “Derecho Romano” Edit. Ariel, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1958

IGLESIAS SKULJ, A. “La protección del medio ambiente en la Unión Europea”, en FARALDO CABANA, P. (dir.) “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

JIMÉNEZ BALLESTER, F. “Encuentro de magistrados y fiscales del foro medioambiental”. Granada, 23 y 24 Abril 2009.

JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, P., “El principio de prevención en el derecho internacional del medio ambiente”. Edit. ECOIURIS, Madrid, 2001.

JORGE BARREIRO, A. “El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995”, en “Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español”. Edit. Comares, Granada, 2005.

JUSTE RUIZ, J. “Derecho internacional del medio ambiente”. Edit. Mc Graw Hill, Madrid, 1999.

KANT, I. “La Metafísica de las costumbres”. Edit. Tecnos, Madrid, 2005.

KRÄMER, L. “Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea”. Edit. Marcial Pons, Madrid 1999.

LACHAUT, J. “*La guerre des ACCA*”. Edit. *Revue de droit rural*, núm. 219, 1994.

LACRUZ LÓPEZ, J.M. “Comportamiento omisivo y Derecho penal”. Edit. Dykinson, Madrid, 2004.

LADERO QUESADA, M.A. “La caza en la legislación municipal castellana, Siglos XIII-XVIII”. Edit. Estudios dedicados al profesor D. Julio González González.

LAFUENTE BENACHES, M. “El ejercicio legal de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2007.

LAGUNA DE PAZ, J.C. “Libertad y propiedad en el Derecho de Caza”. Edit. Marcial Pons, Madrid, 1997.

- “Protección de la fauna silvestre: régimen jurídico de la caza y pesca en Castilla y León”. En QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.), CASARES MARCOS, A. (coord.) “Derecho ambiental en Castilla y León”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2009.

LAPUENTE BENAVENTE, P.A. “La caza en España”. Edit. Publicaciones Españolas, 1956.

LÁZARO CALVO, T, “Derecho internacional del medio ambiente”. Edit. Atelier, Barcelona, 2005.

LESMES SERRANO, C. “Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en Derecho penal administrativo (ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente)”. Edit. Comares, Granada, 1997.

LOPERENA ROTA, D.”El derecho al medio ambiente adecuado”. Edit. Civitas, Madrid 1998.

LÓPEZ BUSTOS, F.L. “Actividades cinegéticas: aspectos legales” en obra colectiva “Actividades cinegéticas. Conservación del hábitat e influencia en la actividad físico-deportiva”. Edit. Grupo editorial universitario 2001.

LÓPEZ ONTIVEROS, I y CASTAÑEDA, J.M. “Algunos aspectos de la evolución de la caza en España”. Edit. Agricultura y Sociedad, núm.58, enero-marzo, 1991.

LÓPEZ RAMÓN, F. La protección de la fauna en el Derecho español”. Edit. Instituto García Oviedo, 1980. Sevilla.

- “Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos.”. Edit. Kronos, Sevilla 1995.

- LORZ, A. “Bundesjagdgesetz (mit Landesrecht, Verordnung über die Jagdzeiten und Bundeswildschutzverordnung, Fischereischeinrecht, Seefischereirecht)”, 2. Auflage, C. H. Beck, 1991.
- LOZANO CUTANDA, B. “Planificación como técnica de protección ambiental”, en “Diccionario de Derecho de ambiental”. Edit. Iustel, Madrid, 2006.
- “Derecho Ambiental Administrativo”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009.
- LOZANO CUTANDA, B.; ALLI TURRILLAS, J. “Administración y legislación ambiental”, 6ª ed. Edit. Dykinson, Madrid, 2011.
- LÜBBE, A.” Hat der Tierschutz Verfassungsrang?”. Edit. Natur und Recht, 16, 1994. Pág.471 y 472.
- LUCIO CALERO, A.J. y M. SÁENZ DE BURUAGA, M.- “Los planes de caza. Guía básica para la elaboración de los planes de ordenación cinegética”. Edit. Colección de divulgación cinegética, núm. 1, Federación Española de Caza, 1989.
- LUCIO CALERO, A.J.”Planes técnicos de caza” en “Curso de Gestión y Ordenación cinegética”. Edit. Colegio oficial de Biólogos, Granada, 1996.
- LUIS LÓPEZ, C. “Ordenanzas de la villa de Piedrahita”. Edit. Diputación Provincial de Ávila, Ávila 1988
- MAFFEI, M.C. Artículo “Evolving Trends in the International Protection os species” German Yearbook of Internacional Law. Edit. Duncker & Humblot, Berlin, Germany ,1993.
- MANTECA VALDELANDE, V. “Regulación de los delitos de caza en el Código Penal.” Edit. La Ley Actualidad Penal núm. 1, año 2003.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L. “Los delitos contra el medio ambiente en el Código penal español”. Edit. Actualidad penal, 1994-1

- “La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo”. Edit. La Ley, Madrid, 2015.

MARÍN CASTÁN, F. “Caza, pesca y delito ecológico”. Edit. Cuadernos de Derecho Judicial XXV, LANUEVA DELINCUENCIA II.

MARQUÉS I BANQUÉ, M. “Comentario al artículo 337”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 5ª. Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona 2005.

- “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (art. 337) y Disposiciones comunes (arts. 338 a 340)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), “Comentarios al Código penal español, Tomo II (Artículos 234 a DF 7ª)”, 6ª ed. Edit. Aranzadi, Navarra, 2011,

MARTÍN APARICIO, M.A. “Cercados llamados cinegéticos: ¿Una laguna o un lapsus jurídico en la política y gestión ambiental sobre recursos y espacios naturales?”, Edit. Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Valencia, Cima Medio Ambiente, 1996.

MARTÍN LORENZO, M. “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en Coordinador ORTIZ DE URBINA JIMENO, I; VVAA. Memento Experto. Francis Lefebvre. Reforma Penal Ley Orgánica 5/2010. Actualizado a julio de 2010. Edit. Francis Lefebvre. 2010.

MARTÍN MATEO, R. “Tratado de Derecho Ambiental”, vol. III (Recursos naturales). Edit. Trivium, Madrid, 1997.

- “Manual de Derecho ambiental”, 3ª ed. Edit. Thomson- Aranzadi, Navarra, 2003.

MARTÍN, C. “Licencias de Caza en España. Demasiadas y distintas”. Edit. Revista Trofeo, septiembre, 1998.

MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C. “Lección XXXIII”, en MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.; VIVES ANTÓN, T.S.; ORTS BERENGUER, E. “Derecho Penal. Parte Especial. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2004.

- . “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial”. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2005.
- “Protección penal del medio ambiente y personas jurídicas”, en “Estudios de Derecho ambiental. Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
- “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en T. S. VIVES ANTÓN, E. ORTS BERENGUER, J.C.

MARTÍNEZ PEREDA, J.M. “Sanciones y responsabilidades en materia de caza”. Edit. Tecnos, Madrid, 1972.

MARTOS NUÑEZ J.A. “Protección penal y tutela jurisdiccional de la salud pública y del medio ambiente”. Edit. Universidad de Sevilla, 1997, Sevilla.

MATA DE FRANCISCO, J. “Ne bis in idem y seguridad jurídica”. Tesis doctoral inédita dirigida por DR. D. SANTA CECILIA GARCÍA, F., Madrid, 2009,

MATALLÍN EVANGELIO, A. “Delitos relativos a la protección de la biodiversidad”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

- “Protección penal de la biodiversidad (art.332,334 y335 CP)”en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L; MATALLÍN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015

MATELLANES RODRÍGUEZ, N. “Derecho penal del medio ambiente”. Edit. Iustel, Madrid, 2008.

MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A. “Observaciones críticas a la configuración de los delitos contra el medio ambiente en el Proyecto de Código Penal de 1992”. Edit. Jueces para la Democracia, 16-17, 1992.

- “Los delitos relativos a la protección del medio ambiente”. Edit. Colex, Madrid, 1998.

MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A. “Estudio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 9 de septiembre de 2014”. Edit. Revista Wolters Kluwer. Práctica de Derecho de Daños, núm.122, Sección informe de jurisprudencia, Primer trimestre de 2015

MESTRE DELGADO, E. “Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. En LAMARCA PEREZ, C. “Derecho Penal. Parte Especial”. Edit. Colex. Madrid. 2004. Pág. 444.

MIR PUIG, S. “El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho”. Edit. Ariel, Barcelona, 1994.

- . “Derecho Penal Parte General”. Edit. Reppertor. Barcelona. 2002.
- “Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en “Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
- “Bases constitucionales del Derecho penal”. Edit. Iustel, Madrid, 2011.

MITZSCHEKE, SCHÄFER. “Kommentar zum Bundesjagdgesetz, 4.Auflage, Hamburgo-Berlín, Paul Parey, 1982.

MOLINA BLÁZQUEZ, C. “Las medidas de seguridad”, en La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito”, Coord. Molina Blázquez, Mª Concepción. Edit. Bosch, Barcelona, 2005.

MONSALVO ANTÓN, J.M. “Ordenanzas de Ávila”. Edit. Diputación Provincial de Ávila 1991.

MONTOYA, M.I. “La caza en el Medievo peninsular”. Edit. Revista electrónica de estudios filológicos, núm.6 diciembre 2003.

MONTOYA, J.M. “Ordenación de recursos naturales renovables: La ordenación cinegética en el contexto general de ordenación de los montes”. Edit. Cuadernos de la SECF nº1, Pontevedra octubre 1995.

MORILLAS CUEVAS, L; DEL ROSAL BLASCO, B; GONZÁLEZ RUS, J.J; PERIS RIERA, J.; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS J.E.; OLMEDO CARDENETE, M.; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. “Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial”. Edit. Dykinson, Madrid, 2011

MUÑOZ CONDE, F. “Bases para una teoría del error orientada a las consecuencias”. Edit. La Ley. Madrid. 1991.

- .”Derecho penal. Parte especial”, 18ª ed. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

MUÑOZ CONDE, F., GARCÍA ARÁN, M. “Derecho penal. Parte general Derecho penal. Parte general”. Edit. Tirant lo Blanch, 8ª ed., Valencia, 2010.

MUÑOZ CONDE, F.; LÓPEZ PEREGRÍN, C.; GARCÍA ÁLVAREZ, P. “Manual de Derecho penal medioambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

MUÑOZ LORENTE, J. “La protección penal de los animales domésticos frente al maltrato”. Edit. La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, 42, 2007.

MUÑOZ LORENTE, J; BAUCCELLS LLADÓS, J; FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 327, 328, 329 y 339)”, en ÁLVAREZ GARCÍA F.J; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dir.), “Comentarios a la Reforma penal de 2010”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010

MUÑOZ MACHADO, S. “La distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en materia de medio ambiente,” DA, núm. 190, 1981.

- “Los animales y el Derecho”. Edit. Civitas, Madrid, 1999

MUÑOZ MERINO. A. “El delito de contrabando”. Edit. Aranzadi, Madrid, 1992.

NAVARRO CARDOSO, F.”Infracción administrativa y delito: Límites a la intervención del Derecho penal”. Edit. Colex, Madrid, 2001.

NIETO GARCÍA, A. “Derecho administrativo sancionador”. Edit. Tecnos, 4ª ed., Madrid, 2005.

NIETO GARRIDO, E. “La protección de la fauna salvaje en el ordenamiento jurídico español”. Edit. Lex Nova, Valladolid, 2001.

O’CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Los presupuestos de la obligación nacida de acto ilícito: La objetivación de la llamada responsabilidad extracontractual”. Edit. Anuario de Derecho Civil, 1986-1987, nº1.

- Compendio de Derecho Civil. Tomo II, Derecho de Obligaciones”. Edit. Dijusa, Madrid, 2009.

OCHOA FIGUEROA, A. “La tutela del agua mediante el Derecho Penal y el Derecho Administrativo”. Edit. Universidad Complutense Facultad de Derecho, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2015.

OLMOS HERGUEDAS, E. “La comunidad de villa y tierra de Cuéllar a partir de la Ordenanzas de 1546. Apuntes para la historia local de Lastras de Cuéllar”. Edit. Diputación Provincial de Segovia, Valladolid 1994.

- ORTEGA MARTÍN, E. “Los delitos contra la flora y la fauna”. En AAVV “Derecho penal administrativo (ordenación del territorio patrimonio histórico y medio ambiente)”. Edit. Comares. Granada. 1997.
- ORTUÑO NAVALÓN, C.; MANZANA LAGUARDA, R. “Régimen de responsabilidades dimanantes de la caza”. Edit. Tirant lo Blanch 2007
- PALACIOS BLANCO, J. “Cuestiones sobre denegación y revocación de licencias de armas de caza. Jurisprudencia aplicable”. Edit. Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, N° 17, de 1 septiembre de 2003
- PANTALEÓN PRIETO, A.F. “Comentario al art. 611, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albadalejo”. Edit. Edersa, 1987, Madrid.
- PAREDES CASTAÑÓN, J. M. “La accesoriedad administrativa de la tipicidad penal como técnica legislativa: efectos políticos y materiales”, en “Estudios de Derecho ambiental. Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
- PARICIO, J. y FERNANDEZ BARREIRO, A. “Historia del Derecho Romano y su recepción europea”. Edit. El Faro, Madrid 2002.
- PARRA LUCÁN, M.A. “La responsabilidad por daños producidos por animales de caza.” Edit. Institución «Fernando el Católico». Revista de Derecho Civil Aragonés, numero 2155, año 1999, n° V.
- PHILLIP, S.; DANDY, N.; GILL, R.; MACMILLAN, D .C. “*Is legislation a barrier to the sustainable management of game species? A case study of wild deer in Britain*”. Edit. *Journal of Environmental Planning and Management*. Vol.52, N°8, December 2009.
- PÉREZ DE GREGORIO, J.J., “El tráfico de especies animales protegidas y su persecución penal en España”. Edit. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, N° 4, 1992.

PÉREZ DEL VALLE, C. “La imprudencia en el Derecho penal. El tipo subjetivo del delito imprudente”. Edit. Atelier, Barcelona, 2012.

PÉREZ HENARES A. “Por la caza y la conservación”. Edit. Fundación FIDA, 2006.

PÉREZ VICENTE, I. “Legislación cinegética en España: Evolución y actualidad”. En Agricultura y Sociedad nº58 (enero-marzo 1991). En http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays%2Fa058_06.pdf.

PLAZA MARTÍN, C. “Derecho ambiental de la Unión Europea”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

POZUELO PÉREZ, “La reparación del daño al medio ambiente”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 191, 2002, también publicado en BARREIRO, J. (Dir.), “Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el Ordenamiento jurídico español”. Edit. Comares, Granada, 2005.

PRATS CANUT, J. M.; MARQUÈS I BANQUÉ, M., “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en G. QUINTERO OLIVARES (Dir.) y F. MORALES PRATS (coord.), “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”, 5ª. Edit. Thomson-Aranzadi, Pamplona 2005.

PUENTE ABA, L.M. “Art. 325”, en “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente” en FARALDO CABANA, P. (Dir.). “Código penal y la legislación especial”, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

QUERALT JIMÉNEZ, L.J. “Derecho penal español. Parte especial. Delitos contra los intereses individuales y colectivos”. Edit. Bosch, Barcelona, 1996

QUINTERO OLIVARES, G., y MORALES PRATS, F. “Parte General del Derecho Penal”. Edit. Aranzadi, Pamplona, 2010.

QUINTERO OLIVARES, G.”Derecho penal ambiental”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

RAMOS VÁZQUEZ, J.A. “Compatibilidad de la sanción penal con la sanción administrativa”, en FARALDO CABANA, P. (Dir.) “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en Código penal y la legislación especial”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

REQUEJO CONDE, C. “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de animales”. Edit. Comares, Sevilla, 2010.

ROCA FERNÁNDEZ-CASTANY, M. L., “Los animales domésticos y el Derecho: en particular, el régimen jurídico de los animales de compañía”, en AA. VV., “Panorama jurídico de las Administraciones públicas en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca”. Edit. BOE-INAP, Madrid, 2002.

RODRÍGUEZ RAMOS, L. “El medio ambiente en la Constitución española. Su conservación como principio político rector y como competencia de las comunidades autónomas”, en “Derecho y medio ambiente”. Edit. CEOTMA, Madrid, 1981.

- “Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Cap. Delitos contra el medio ambiente (evolución y futuro)”. Edit. Universidad de Salamanca, 2007.

ROYO VILLANOVA, A. “Principios de Derecho Administrativo, tomo II”. Edit. Imprenta Castellana, Valladolid 1901

RUIZ RODRÍGUEZ, L. “Posición y tratamiento de los animales en el sistema penal”, en AA.VV “Los animales como agentes y víctimas de daños. Especial referencia a los animales que se encuentran bajo el dominio del hombre”. Edit. Bosch, Barcelona, 2008.

RUIZ-RICO RUIZ, G. “Las competencias de las comunidades autónomas en materia de medio ambiente y la jurisprudencia constitucional”, en AA.VV., “La protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español”. Edit. Universidad de Jaén, 1995.

RUIZ-RICO RUIZ, J.M.; RUIZ-RICO RUIZ, G.; PÉREZ SOLA, N. “Derecho Ambiental, análisis jurídico y económico de la normativa medioambiental de la Unión Europea y española: estado actual y perspectiva de futuro.” Edit. Tirant lo Blanch Valencia 2007.

SAN MARTÍN PAYO, J. “Ordenanzas de la villa de Pedraza de Campos” Edit. Publicaciones de la institución Tello de Meneses 1958.

SÁNCHEZ CALERO F. “El seguro de caza obligatorio”. Edit. Revista española de seguros, Madrid 1997.

SÁNCHEZ GASCÓN, A. “El Derecho de caza en España”. Edit. Tecnos, Madrid, 1988.

- “El cazador furtivo. Una aproximación legal”. Edit., International Marketing Approach, Madrid, 1990
- “Régimen legal de los planes de ordenación cinegética” en “Manual de ordenación y gestión cinegética”. Edit. IFEB, 1991.
- .”El delito de caza con luz artificial”. Edit. Tecnos, Madrid, 1991.
- “Jurisprudencia en materia de caza”. Edit. Aranzadi, Pamplona. 1992.
- “Delitos contra la flora y la fauna. Especies amenazadas, caza y pesca”. Edit. Exlibris, Madrid, 1998.
- “Duplicidad de sanciones. “non bis in idem”, Ed. Exlibris, Madrid, 2004.
- “Guía práctica para guardas de caza”. Edit. Exlibris, Madrid, 2004.
- “Leyes históricas de caza. Tratado del Derecho de Caza en las Comunidades Autónomas (recopilación)”. Edit. Exlibris, Madrid, 2007
- “Caza y veneno”. Edit. Exlibris, Madrid, 2010.

SÁNCHEZ GASCÓN, A.; BALLESTEROS RODRÍGUEZ, S. “Delitos de caza, cuáles son y cómo se castigan”. Edit. Biblioteca española de caza, Madrid, 2009.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. “La responsabilidad civil por los daños causados por la piezas de caza” en GONZÁLEZ PORRAS, J.M. y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F.P. “Libro

homenaje al profesor Manuel Albadalejo García, Volumen 1”. Edit. Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Murcia, 2004.

SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J., “Cuestiones jurídicas básicas: El Ordenamiento jurídico y el Derecho administrativo. La administración, su actividad y su relación con los ciudadanos”, en TORRES LÓPEZ, M.A. (Dir.); ARANA GARCÍA, E “Derecho ambiental (adaptado al EEES)”, Edit. Tecnos, Madrid, 2012.

SANTA CECILIA GARCÍA, F. “La responsabilidad civil ex delito en el Proyecto de Código Penal de 1992”, en “Política Criminal y Reforma Penal”. Homenaje a la memoria del Prof. D. Juan del Rosal. Edit. EDERSA, Madrid, 1993

- “Delito de daños: evolución y dogmática (art. 263 Código penal)”. Edit. Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Madrid 2003.
- “Medio ambiente y reparación del daño”, en “Textos jurídicos y contextos sociales en F.A. Hayek”. Edit. Dykinson, Madrid, 2011.
- “Accesoriedad y bien jurídico en delitos medioambientales: una constante paradoja”, en “Religión, matrimonio y Derecho ante el Siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls”, Vol. II. Edit. Iustel, Madrid, 2013.
- “Crisis del Principio de Legalidad”. En fundamentos de conocimiento jurídico. Edit. Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2013.
- “Delitos contra los recursos naturales y medioambiente”, en “Libro homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Tutela penal de la flora y fauna no autóctona (arts. 332 y 333 cp)” en “Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo”. AAVV. Edit. La Ley, Madrid, 2015.

SANTAMARÍA PASTOR, J.A. “Principios de derecho administrativo general”. Edit. Iustel, 2015.

SANTOS BRIZ, J. “Comentarios al art. 1906”, en ALBADALEJO, M. “Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, Tomo XXIV. Edit. Edersa. Madrid. 1984.

SERRANO GÓMEZ, A.; SERRANO MAILLO, A., “Derecho Penal. Parte Especial”, 16.ª Edición. Edit. Dykinson, Madrid, 2011.

SERRANO TÁRRAGA, M. D., “El maltrato de animales”, Edit. Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. Extraordinario 2, 2004.

- “El maltrato de animales en el Código penal”. Edit. La Ley, 2005.

SERRANO TÁRRAGA, M.D.; SERRANO MAÍLLO, A.; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.” Tutela penal ambiental”. Edit. Dykinson, Madrid, 2009.

SILVA SÁNCHEZ, J.M.; MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente”. Edit. Atelier, Barcelona, 2012

SOLAZ SOLAZ, E. “Responsabilidad en los accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas”. El Derecho Editores, Revista de Jurisprudencia. Núm. 3, abril 2006.

SORIANO GARCÍA, J.E.; BRUFAO CURIEL, P. “Claves de Derecho Ambiental”. Tomo I. Edit. Iustel, Madrid, 2011.

SOTELO NAVALPOTRO, J.A. (1999): “Los Sistemas de Gestión Medioambiental: una aportación a la Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente”. Edit. Academia de las Ciencias, Homenaje a don Ángel Ramos, 1999.

- “Medio Ambiente y Desarrollo en España, en los prolegómenos del siglo XXI: las políticas medioambientales de la U.E.”. Edit. Observatorio Medioambiental, nº 3, 2000.

- “Problemas ecológicos de la conservación del Patrimonio y del Medio Ambiente”. Edit. Anales de Geografía de la UCM, 2000..
- “Desarrollo y Medio Ambiente en España”. Edit. INFODAL, Madrid, , 2000
- “Instrumentos para el estudio del medio ambiente: métodos para la valoración del coste ambiental”. Edit. Estudios Geográficos, Vol. 67, N° 260,2006.

SUAY RINCÓN, J. “Sanciones administrativas”. Edit. Real colegio de España, Bolonia, 1989.

- “La Ley 4/1999 de procedimiento administrativo. Reforma de la Ley 30/1992”. Edit. Colex, Madrid, 2000.

TELLERÍA JORGE, J.L. “Manual para el censo de los vertebrados”. Edit. Raíces, Madrid, 1986.

TEMARIO DE DERECHO CIVIL JUDICATURA, “Obligaciones y Contratos” (Volumen II), Edit. Carperi, Madrid, 2007.

TERRADILLOS BASOCO, J.M. “El ilícito ecológico. Sanción penal-sanción administrativa”, en TERRADILLOS BASOCO, J (Dir.) “El delito ecológico”. Edit. Trotta, Madrid, 1992.

- “Protección penal del medio ambiente en el nuevo Código Penal Español. Luces y sombras”. Edit. Estudios Penales y Criminológicos, XIX 1996
- “Protección penal del medio ambiente. Jurisprudencia e intuición”, en “Estudios de Derecho ambiental. Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

TORRES FERNÁNDEZ: “Distribución de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Edit. Actualidad Administrativa nº 13, 1994.

TORRES LÓPEZ, M.A. “El Derecho sancionador: ámbito penal y ámbito administrativo”, en TORRES LÓPEZ, M.A. (Dir.); ARANA GARCÍA. “Derecho ambiental (adaptado al EEES)”, E. Edit. Tecnos, Madrid, 2012.

TORRES LÓPEZ, M.A. “Derecho ambiental: (adaptado al EEES)”. Edit. Tecnos, Madrid, 2015.

Universidad Complutense de Madrid Cursos de Verano. “La caza en el desarrollo rural: una alternativa agraria compatible con la conservación”. 1996 Purchena, Almería

VARGAS PINTO, T. “Delitos de peligro abstracto y resultado. Determinación de la incertidumbre penalmente relevante”. Edit. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007.

VARGAS YAÑEZ, J.M. “Manual del cazador en Andalucía”. Edit. Egmasa. 1997. Málaga.

- “Alerta cinegética. Reflexiones sobre el futuro de la caza en España”. Edit. Otero. 2002. Madrid.

VÁZQUEZ CAÑIZARES, J.C. “La caza furtiva como delito patrimonial autónomo. Análisis del artículo 335 del Código Penal y normativas aplicables al mismo”. Edit. Andavira, Madrid, 2014.

- “Evolución histórico-legislativa de la caza furtiva”. Edit. Crealite, Madrid, 2014

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: de comiso (arts.127 a 127 octies)” en GONZALEZ CUSSAC, J.L; MATA LLIN EVANGELIO, A; GÓRRIZ ROLLO, E. “Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia.

VERCHER NOGUERA, A. “La evolución del delito contra el medio ambiente a través de la jurisprudencia”. Edit. Derecho y medio ambiente, vol.II núm.8/2001.

- “La reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en la materia penal ambiental o la exigencia de un reajuste inevitable”. Edit. Actualidad Jurídica Aranzadi, 665, 2005, (consultado en Aranzadi on line: Westlaw.es.

VON IHERING, R. “El fin en el Derecho”. Edit. Comares, Granada, 2000.

PÁGINAS WEB UTILIZADAS

<<http://www.fedecaza.com/esp/canalcaza/generalidades/historiacaza/> >

< http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=095_Codigo_de_Caza&modo=1>

<<http://ciervos.idoneos.com/353864/>>

<<http://www.unioviedo.es/bos/Asignaturas/Zoologia/Origen%20de%20la%20caza,%20pesca...pdf>>

<http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977594836/_/_/_>

<http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/legislacion/rd_plan_estrategico_patrimonio_natural_biodiversidad.aspx>

<<http://www.club-caza.com/articulos/205tabernero.asp>>

<<http://www.grefa.org/esta-en-tu-mano/normativa-ambiental>>

<http://www.natura2000.tk/legislacion_ccaa.htm>

<http://www.conservacionvegetal.org/legislacion.php?id_categoria=8>

<http://agricultura.gencat.cat/es/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/dar_normativa_classificacio_legal/dar_normativa_basica_proteccio>

<http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28062_es.htm>

<http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_animal.htm>

<https://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/tramitesarmasexplo/cesion_temporal/index.html>

<<http://www.todomonteria.com/MenuSeccion.aspx?idCont=123>>

<<http://www.agentesforestales.org/publicaciones/72-agentes-forestales/informacion-al-ciudadano/278-la-senalizacion-de-los-cotos-de-caza.html>>

<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000584127&d ateTexte=&categorieLien=id>>

<<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1834/076/A00353-00354.pdf>>

< <http://www.istas.ccoo.es/descargas/forestales%20fsap.pdf>>

<<http://www.interior.gob.es/documents/642012/1569807/52727.pdf/259a2cb8-3593-432f-a29a-8487ef019aa1>>

<<http://www.libertaddigital.com/opinion/miguel-del-pino/estan-bien-cuidados-los-perros-de-caza-73294/>>

< <http://www.ardeola.org/files/608.pdf>>

<<http://berlin.angloinfo.com/information/lifestyle/sports-and-leisure/hunting/>>

< <http://huntingact.org/?q=node/3>>

< <http://canada.angloinfo.com/lifestyle/sports-and-leisure/hunting/>>

< <http://www.dpi.nsw.gov.au/hunting/regulations>>

< <http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml>>

<https://www.google.es/search?q=gestion+cinegetica+castilla+y+leon&oq=gestion+cinegetica&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.7824j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8>

< <https://www.jccm.es/tramitesygestiones/licencia-de-caza-y-pesca>>

<<http://www.trofeocaza.com/noticia/2399/reportajes/la-caza-en-estados-unidos.html>>

<http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/formacion/PPT_TOM%C3%81S_MONTALVO-COTORRA_ARGENTINA_tcm7-311119.pdf>

<<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=83b9f9cd6168b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD>>

ANEXO I

LEGISLACIÓN UTILIZADA

1. LEGISLACIÓN ESTATAL.

1. General

- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2. Caza

- la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
- Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.
- Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, de regulación de las Reservas Nacionales de Caza.
- El Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se determinan los listados de las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección.
- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre. Se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables, en desarrollo de lo establecido en el art. 34 c) de la Ley 4/1989 de 27 mar., con el fin de garantizar la conservación de las especies autóctonas y la preservación de la diversidad genética.

- Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador.
- Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo.

3. Fauna silvestre

- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Real Decreto 1739/1997 de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
- Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

4. Armas y cuerpos de seguridad

- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

- Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
- Real Decreto 2283/1985 de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas.
- Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Orden de Ministerio de Presidencia PRE/422/2013, de 15 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil.
- Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
- Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se determinan las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y armarios o armeros para guardar las armas en domicilios particulares.
- Orden de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas para prestar servicios de seguridad privada.

5. Circulación vehículos a Motor

- Ley 8/1972, de 10 de mayo, y en los Reglamentos que regulan la explotación de las autopistas.
- Ley 17/2005 de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
- Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

6. Otras

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
- Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.
- Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
- Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

1. Caza

• Andalucía.

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.
- Decreto 182/2005, de 26 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
- Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se modifica el Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, de 26 de julio.
- Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de calidad cinegética de Andalucía.
- Decreto 13/2008, de 22 de enero, por el que se aprueba la organización y régimen de funcionamiento del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.
- Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y la expedición de las licencias.

- Orden de 26 de marzo de 1999, por la que se desarrolla el Registro Andaluz de Caza y Pesca y se implanta la Tarjeta de Identificación del Cazador Pescador.
- Orden de 4 de junio de 2008, por la que se modifica la de 21 de junio de 2006, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Aragón**
- Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza en Aragón.
- **Canarias.**
- Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.
- Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.
- Orden de 14 de septiembre de 1988, por la que se actualizan los valores de las especies cinegéticas y protegidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- **Asturias**
- Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza de Asturias.
- Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
- **Cantabria.**
- Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.
- Orden 9/2003, de 4 de Febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria.
- **Castilla la Mancha**
- Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.
- Orden de 6 de julio de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establece la figura de Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla-La Mancha, y se regulan sus funciones.
- Orden de 7 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se determinan las características que debe cumplir la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial, refugios de pesca y cursos de agua en régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

- Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha.
- **Castilla y León.**
 - Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
 - Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
 - Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza.
 - Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
 - Decreto 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León.
 - Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León, para la temporada 2014/15.
 - Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
 - Decreto 65/2006, de 14 de septiembre, por el que se actualiza la cuantía de las sanciones a imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
 - Decreto 82/2005, de 3 de noviembre, por el que se regula la caza intensiva, la expedición y suelta de piezas de caza vivas y las zonas de entrenamiento de perros y aves de presa en Castilla y León.
 - Decreto 129/2003, de 6 de noviembre, por el que se establecen normas sobre la financiación de actividades a realizar en las Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas Regionales de Caza y de los Espacios Naturales Protegidos.
 - Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves de presa en Castilla y León.
 - Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Caza de Castilla y León.

- Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
- Modificada por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. Título IV. Servicios medioambientales.
- Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León en su Disposición final Octava se modifica el art. 12 de la Ley de Caza.
- Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se fijan los días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueban las convocatorias para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León para el año 2015.
- Esta reglamentación viene fijada por El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

- **Cataluña**

- Resolución AAM/1287/2015, de 26 de mayo por la que se establece el número máximo de aves fringílicas, segregadas por especie y sexo, que podrán ser capturadas en Cataluña durante el año 2015, y se abre el plazo para la presentación de solicitudes de autorizaciones excepcionales de captura de aves fringílicas.
- Resolución AAM/605/2015, de 27 de marzo, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2015 hasta 2016 en todo el territorio de Cataluña.

- **Comunidad Valenciana.**

- Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.
- Orden 18/2015, de 19 de junio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la temporada 2015-2016, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana.

- Decreto 188/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula la figura de guarda jurado de caza en la Comunitat Valenciana y la habilitación para el control de predadores.
- Decreto 202/1988, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen normas para la regulación de la cetrería en la Comunidad Valenciana.
- Decreto 50/1994, de 7 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los planes de aprovechamiento cinegético en terrenos de régimen cinegético especial dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana.
- Decreto 152/1990, de 17 de septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el régimen de expedición y validez de las licencias de caza y pesca continental en la Comunidad Valenciana.

- **Extremadura**

- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
- Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza.
- Decreto 93/2014, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto 114/2013, de 2 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora de los recursos cinegéticos y por el que se realiza la convocatoria para la anualidad 2013.
- Orden de 29 de mayo de 2013 por la que se aprueban los modelos oficiales de planes técnicos de caza.

- **Galicia**

- Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.
- Decreto 284/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de caza de Galicia.
- Orden de 23 de julio de 2002 por la que se regula la señalización en los terrenos cinegéticos.

- **Baleares**

- Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.
- Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en las Illes Balears.
- Decreto 72/2004, de 16 de julio, por el cual se regulan los planos técnicos de caza y los refugios de caza en las Illes Balears.

- **La Rioja**

- Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.
- Decreto 17/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza de La Rioja.
- Resolución 604/2015, de 13 de mayo, de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se procede a la convocatoria de pruebas selectivas para la obtención de licencias de caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Orden 9/2006, de 10 de julio, de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la contratación del servicio de vigilancia obligatorio de los cotos de caza de La Rioja.
- Orden 30/2015, de 24 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2015-2016.

- **Comunidad de Madrid**

- Orden 862/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que, en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, se regula el curso de cazador.
- Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid.
- Orden 591/2015, de 23 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2015-2016.

- **Murcia.**

- Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

- Orden de 9 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2014/2015 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- **Navarra**

- Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.
- Decreto foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de navarra.

- **País Vasco.**

- Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco.

2. Fauna silvestre

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía.
- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats de Andalucía.
- Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales de Cantabria.
- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha.
- Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
- Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña.
- Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres de la Comunidad Valenciana.
- Ley 8/1998 de 26 de junio de Conservación del Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura.
- Ley 9/2001 de 21 de agosto de Conservación de la Naturaleza de Galicia.

- Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales, modificada por la Ley 2/2000, 31 mayo, de La Rioja.
- La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de Madrid.
- Ley 7/1995, de 21 de abril, de normas reguladoras de la Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial de Murcia.
- Ley 2/1993 de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre; modificada por la Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de Navarra.
- Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

ANEXO II

JURISPRUDENCIA EN MATERIA CINEGÉTICA

- **Jurisprudencia del Tribunal Supremo**

- STS de 26 de mayo de 1976
- STS de 22 de junio de 1983
- STS de 30 de enero de 1984
- STS de 1 de marzo de 1985
- STS de 1 de abril de 1985
- STS de 21 de junio de 1985
- STS de 26 de febrero de 1988
- STS de 8 de julio de 1988
- STS de 9 de junio de 1988.
- STS de 5 de junio de 1989
- STS de 13 de junio de 1990
- STS de 30 de septiembre de 1990
- STS de 30 de abril de 1991
- STS de 3 de mayo de 1991
- STS de 14 de octubre de 1991
- STS de 7 de enero de 1992
- STS de 20 de enero de 1992
- STS de 22 de septiembre de 1992.
- STS de 26 de septiembre de 1992
- STS de 9 de marzo de 1993
- STS de 11 de mayo de 1993
- STS de 15 de julio de 1993
- STS de 23 de septiembre de 1993
- STS de 27 de septiembre de 1993
- STS de 29 de octubre de 1993
- STS de 17 de mayo de 1994
- STS de 22 de marzo de 1995
- STS de 31 de marzo de 1995

- STS de 3 de abril de 1995
- STS de 31 de mayo de 1995
- STS de 1 de julio de 1995
- STS de 30 de septiembre de 1995
- STS de 19 de diciembre de 1995
- STS de 20 de enero de 1996,
- STS de 27 de enero de 1996,
- STS de 6 de febrero de 1996
- STS del 20 de enero de 1997
- STS de 1 de febrero de 1997
- STS de 26 de abril de 1997
- STS del 22 de septiembre de 1997.
- STS de 7 de noviembre 1997
- STS de 14 de febrero de 1998
- STS de 29 de febrero de 1998
- STS de 1 de febrero de 1999
- STS de 19 de mayo de 1999
- STS de 8 de febrero de 2000
- STS de 14 febrero de 2000
- STS de 26 de febrero de 2000
- STS de 13 de marzo de 2000
- STS de 30 de junio de 2000
- STS de 21 de julio de 2001
- STS de 29 de noviembre de 2001
- STS de 15 de junio de 2002
- STS de 18 de julio de 2002
- STS de 29 de junio de 2002
- STS de 22 de octubre de 2002.
- STS de 25 de enero de 2003
- STS de 12 de junio de 2003
- STS de 3 de julio de 2003
- STS de 10 de octubre de 2003
- STS de 21 de octubre de 2003.
- STS de 24 noviembre de 2003

- STS de 6 de abril de 2004
- STS de 3 de mayo de 2004
- STS de 8 de julio de 2004
- STS de 14 de octubre de 2004
- STS de 9 septiembre 2014
- STS de 23 de septiembre de 2004
- STS de 28 de octubre de 2004
- STS de 20 de diciembre de 2004
- STS de 20 de diciembre de 2004
- STS de 25 de mayo de 2000
- STS de 23 de febrero de 2006
- STS de 28 de marzo de 2006
- STS de 28 de junio de 2009
- STS de 27 de octubre de 2009
- STS de 26 de diciembre de 2011
- STS de 20 de diciembre de 2012
- STS de 28 de junio de 2013
- STS de 9 de septiembre de 2014
- STS de 17 de abril de 2015

• **Doctrina Constitucional**

- STC 2/1981 de 30 de enero
- STC 32/1983, de 28 de abril,
- STC 114/1987, de 6 de julio
- STC 122/1987 de 14 de julio
- STC 127/1990 de 5 de julio
- STC 141/1991, de 4.de julio,
- STC 149/1991 de 4 de julio
- STC 147/1991, de 4 de julio
- STC 329/1993, de 12 de noviembre
- STC 62/1994 de 2 de febrero
- STC 102/1994 de 11 de abril
- STC 102/1995 de 26 de junio

- STC 14/1998 de 22 de enero
- STC 120/1998 de 15 de junio
- STC 34/2005 de 17 de febrero
- STC 283/2006 de 9 de octubre
- STC Pleno, de 26 de junio de 1995
- STC Pleno, 146/2013, de 11 de julio de 2013
- ATC 338/2008, de 27 de octubre.

- **Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia**

- STSJ 120/2003, de 14 de abril, de Castilla La Mancha.
- STSJ de Albacete, nº 2, sentencia núm. 235/2007 de 3 mayo
- STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 2ª. Núm. 326/2005, de 4 de mayo
- STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 3ª, Sentencia Núm. 121/2001 de 9 de febrero
- STSJ de Cantabria de 5 de enero de 2015
- STSJ de Cantabria de 8 de abril de 2013
- STSJ de Castilla la Mancha de 14 de noviembre de 2003.
- STSJ de Castilla la Mancha, Sala Contencioso Administrativo, secc.2ª, sentencia 239/2005 de 5 de septiembre
- STSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. Núm. 291/2005 de 14 de junio.
- STSJ de Castilla y León (sede Burgos), Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec.2ª, sentencia nº465/2005 de 26 de octubre.
- STSJ de Castilla y León 20/2011, de 11 de enero
- STSJ de Castilla y León de Valladolid, de 28 febrero de 2012
- STSJ de Castilla-La Mancha de 24 de enero de 2011
- STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de octubre de 2014
- STSJ de Extremadura de 26 de septiembre de 2005
- STSJ de Extremadura, Sala 3ª, Secc. 1ª de 12 de septiembre de 2005
- STSJ de Galicia, núm. 130/2005, de 23 de febrero
- STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. Núm. 39/2004 de 28 de enero

- STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc 1ª, en Sentencia núm. 502/2004, de 16 de junio
- STSJ de la Comunidad Valenciana de 12 de junio de 2013
- STSJ de la Comunidad Valenciana de 17 de septiembre de 2010
- STSJ de La Rioja de 14 de mayo de 1996
- STSJ de La Rioja, Sala de lo Contencioso Administrativo, núm. 129/2003 de 24 de marzo.
- STSJ de Soria, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 24 de marzo de 2015
- STSJ de Valencia núm. 2009/2006 de 6 de febrero.
- STSJ del País Vasco de 28 de septiembre de 2007

- **Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales**

- SAP de Álava , de 15 de febrero de 2005
- SAP de Albacete de 13 de marzo de 1998
- SAP de Alicante de 18 de enero de 2006
- SAP de Almería de 19 de mayo de 1998
- SAP de Asturias de 7 de julio de 1998
- SAP de Asturias de 15 de septiembre de 2010.
- SAP de Asturias de 15 de septiembre de 2010.
- SAP de Ávila, de 13 d enero de 2010
- SAP de Badajoz de 13 de abril de 2009.
- SAP de Badajoz de 16 de noviembre de 1998
- SAP de Badajoz, de 5 de noviembre de 2012
- SAP de Baleares de 3 de mayo de 2002.
- SAP de Baleares de 30 de junio de 2003
- SAP de Barcelona 4 de marzo de 2002
- SAP de Barcelona de 5 de mayo de 2009
- SAP de Barcelona de 15 de diciembre de 2011
- SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2000
- SAP de Burgos de 16 de octubre de 2013
- SAP de Burgos de 20 de noviembre de 2009
- SAP de Burgos de 23 de noviembre de 2009

- SAP de Burgos, de 13 de octubre de 2006
- SAP de Burgos, de 3 de diciembre, 214/2004
- SAP de Cáceres de 10 de enero de 2001
- SAP de Cáceres de 2 de junio del 2000
- SAP de Cáceres de 27 de octubre de 2000
- SAP de Cáceres de 10 mayo de 2004
- SAP de Cádiz de 11 de junio de 2003
- SAP de Castellón de 25 de julio de 2011
- SAP de Ciudad Real de 3 de julio de 2006
- SAP de Ciudad Real de 9 de abril de 1996
- SAP de Córdoba de 9 de diciembre de 2008
- SAP de Córdoba de 9 de diciembre de 2008
- SAP de Granada de 23 de enero de 1999.
- SAP de Granda de 23 de enero de 1999
- SAP de Jaén, de 20 de diciembre de 2005.
- SAP de La Rioja de 28 de mayo de 2010
- SAP de La Rioja de 5 de junio de 2007
- SAP de La Rioja, de 21 de noviembre de 1997
- SAP de Las Palmas de 27 de febrero de 2006
- SAP de León de 13 de marzo de 1997
- SAP de León de 2 julio de 1997
- SAP de Lugo de 5 de mayo de 1999.
- SAP de Madrid 1072/2004 de 24 de noviembre.
- SAP de Madrid 287/2004 de 19 de abril
- SAP de Madrid 53/2010, de 17 de febrero
- SAP de Madrid de 11 de febrero de 2002
- SAP de Madrid de 11 de abril de 2002.
- SAP de Madrid de 14 de junio de 2010
- SAP de Madrid de 15 de febrero de 2003
- SAP de Madrid de 19 de abril de 2004
- SAP de Madrid, de 6 de octubre de 2003
- SAP de Murcia de 11 de noviembre de 2007
- SAP de Murcia de 11 de octubre de 2007
- SAP de Murcia de 29 de junio de 2012

- SAP de Murcia, de 17 de julio de 1998
- SAP de Segovia 23/2007 de 5 marzo
- SAP de Segovia de 13 de marzo de 1997
- SAP de Segovia de 21 de abril de 2010
- SAP de Sevilla de 8 de octubre de 1998
- SAP de Sevilla de 31 de enero de 2000
- SAP de Sevilla de 10 de febrero de 2004
- SAP de Sevilla de 8 de octubre de 1999
- SAP de Soria de 20 de mayo de 1996.
- SAP de Soria de 24 de mayo de 1995
- SAP de Soria de 8 de enero de 1998
- SAP de Soria de 30 de marzo de 1998
- SAP de Tarragona de 11 de octubre de 2012
- SAP de Tarragona de 16 de noviembre de 2012
- SAP de Tarragona de 2 de noviembre de 2009
- SAP de Tarragona de 21 de enero de 2010
- SAP de Tarragona de 30 de julio de 2001
- SAP de Tarragona de 15 de julio de 2008
- SAP de Tarragona de 9 de enero de 2008
- SAP de Teruel, de 23 de diciembre de 1999
- SAP de Valencia de 7 junio de 2012
- SAP de Valladolid de 15 de noviembre de 1994
- SAP de Zaragoza de 25 de enero de 2012.

- **Tribunal de Justicia de la Unión Europea,**

- STSJ de la Unión Europea, Sala Segunda, Sentencia de 9 Jun. 2005, rec. C-135/2004: Autorización de la práctica de la caza a contrapasa de la paloma torcaz en la provincia de Guipúzcoa. Incumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. Prohibición de que las palomas torcaces sean cazadas durante su trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación.

ANEXO III

BUENAS PRÁCTICAS Y ÉTICA DEL CAZADOR

- 1. PRINCIPIOS**
- 2. OBLIGACIONES DEL CAZADOR**
- 3. DEBERES GENERALES DEL CAZADOR**
- 4. NORMAS DE CAZA**
- 5. SEGURIDAD EN LA CAZA**
- 6. RECOMENDACIONES**

1. PRINCIPIOS.

- Adaptarse y cumplir siempre la normativa legal existente en cuanto a qué, cuándo, cómo, cuánto y dónde se debe cazar.
- Siempre bajo el control de una planificación técnica que asegure el mantenimiento sostenido de especies y ecosistemas.
- Realizarse bajo un espíritu deportivo donde prime la calidad y dificultad del lance, sobre la cantidad de la percha.
- Practicarse con solidaridad, educación y respeto hacia el medio, las especies que lo habitan, y con el resto de usuarios del territorio, sean cazadores o no.¹

2. OBLIGACIONES DEL CAZADOR.

1ª Contar con la documentación preceptiva que habilite para el ejercicio de la caza:

- Identificación personal, DNI o pasaporte.
- Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud, para el caso de haber solicitado por primera vez de la licencia de caza.
- Licencia de caza.
- Licencia de armas (en caso de armas de fuego).
- Guía de pertenencia del arma que se utiliza.

¹Vid.< www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...; manual teórico examen del cazador 2015.>

- Seguro obligatorio de responsabilidad civil.
- Permiso por escrito del titular cinegético de poder practicar la caza en sus terrenos, cuando sea necesario permiso especial expedido por el órgano competente en materia de caza
- Documentación acreditativa de los perros (si los hubiese).

2ª Cumplir las normas de seguridad en las cacerías.

3ª Observar las limitaciones del régimen cinegético del terreno.

4ª Observar las medidas de protección, conservación y aprovechamiento de la caza

5ª Cumplimiento de la normativa sobre la tenencia y uso de armas de fuego.

6ª Cumplimiento de la normativa en materia de animales auxiliares de caza

7ª Responder de los daños y perjuicios que cause su actividad.

3. DEBERES GENERALES DEL CAZADOR.

- Los animales objeto de caza serán abatidos o capturados en las condiciones menos crueles y dolorosas posibles. Los cazadores tienen la obligación de tomar las medidas oportunas para garantizar el adecuado trato del animal, antes, durante e incluso tras su muerte o captura.
- Conocer las peculiaridades del arma y de la munición empleada en cuanto a sus prestaciones y alcance y abstenerse de disparar cuando la trayectoria efectiva de impacto de la munición empleada pudiera poner en peligro a las personas, animales o bienes. Asimismo, tiene la obligación de descargar el arma ante la presencia próxima de personas ajenas a la caza, así como en los momentos de descanso o reunión entre los cazadores.
- Emplear munición y armas apropiadas para procurar una muerte rápida y con el menor sufrimiento posible.
- Disparar solo cuando sea reconocida la especie. La obligación de reconocimiento de la pieza se extiende al sexo o la edad cuando la autorización de caza refiriese algo en relación con estos extremos.
- Procurar el cobro de las piezas muertas o heridas y abstenerse de disparar ante situaciones de imposible cobro.
- Proporcionar una muerte rápida y apropiada a los ejemplares abatidos y/o heridos.
- Dar un trato adecuado a los animales que participen en la cacería.

- El cazador, tanto en los espacios cinegéticos como en los trayectos de ida y vuelta de los mismos, tiene la obligación de facilitar la acción de los agentes de la autoridad encargados de inspeccionar la actividad cinegética.
- Todos los animales de caza mayor que sean abatidos habrán de ser identificados con los precintos correspondientes.²

4. NORMAS DE CAZA

A. Buenas prácticas cinegéticas en solitario

- Con las especies cinegéticas es necesario aplicar el principio de precaución que recomienda no cazar más que las necesarias para hacer posible el lance, ni tampoco, por encima de las que se vayan a consumir o utilizar.
- No se debe disparar sobre conejos o liebres que estén parados, excepto si la caza es por daños.
- Solamente se disparará a aves en vuelo, excepto para abatir a una especie previamente herida o si la caza es por daños.
- El tiro se realizará dentro de la distancia ideal establecida para cada tipo de proyectil y especie.
- Se utilizará el arma y proyectil apropiado para cada modalidad y especie.
- Se suspenderá la cacería cuando las condiciones existentes varíen y favorezcan excesivamente la captura, como, por ejemplo, en la caza de la perdiz los días de calor excesivo.
- El perro debe estar suficientemente adiestrado para que habitualmente no moleste o capture especies diferentes a las que sean objeto de caza, no persiga indiscriminadamente a las especies que salten, ni estropee las piezas cobradas.
- El cazador permitirá concretar y finalizar el trabajo del perro.
- No se debe cazar con excesivo número de perros.
- Se atenderá debidamente al perro, en cuanto a agua, retirarle ante el excesivo cansancio y no dejarle nunca en el coche o habitáculos que estén, o puedan estar, expuestos al sol.
- En cetrería se utilizará la rapaz apropiada para las especies a cazar.
- El lance se culminará únicamente sobre especies identificadas.

² Vid. art.61. de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.

- Siempre se dejará cumplir a la especie antes de disparar y rematar el lance.
- No se dejará ninguna pieza abatida en el campo. Se buscará con ahínco hasta conseguir su cobro.
- Se manejará con respeto la pieza abatida y con la cautela y tratamiento necesario para que no se estropee y para que, siempre, pueda utilizarse en su última función culinaria.
- En todos los casos se aprovechará la caza para consumo o para venta. En ningún caso se dejará abandonada en el campo una pieza ya cobrada.

B. Buenas prácticas cinegéticas en cuadrilla.

- Observar todas las normas y recomendaciones para la caza en solitario.
- Se respetarán las instrucciones de caza acordadas, las que indique el jefe de cuadrilla, responsable de la cacería, representante de la organización o capitán de montería.
- Durante el ejercicio de la caza se mantendrán las formas de mesura y cortesía recomendables hacia todos los componentes de la cacería.
- Se colaborará con interés en el buen fin de la cacería, especialmente en lo que se refiere al cobro de las especies heridas o abatidas por otro compañero, para cuya consecución no se dudará en interrumpir la acción de cazar, salvo en el caso de las monterías y ganchos por motivos de seguridad.
- No se disparará a una especie que se encuentre en el área de tiro de otro cazador.
- Para evitar disparos simultáneos, se acordará con la cuadrilla la estrategia para disparar individualmente hacia las piezas que puedan saltar entre unos y otros cazadores.
- Ningún cazador se adjudicará para sí capturas de las que no esté totalmente seguro de ser quien las ha abatido.
- Se aportará lo cazado para el reparto equitativo y a sorteo, salvo acuerdo, entre toda la cuadrilla.
- Se evitará el vocerío en el campo para controlar al perro.
- No se cazará con perras en celo, en avanzado estado de gestación, sucios y sin desparasitar, o con cachorros.
- No se participará en cacerías de grupo con un perro que sea agresivo.

- En la caza con galgo se atenderá a lo que determinen las asociaciones deportivas galgueras, y como norma general, cada cazador utilizará solamente una collera con dos perros adultos como máximo.

C. Normas de comportamiento y compromiso

1. Mantenerse atento y vigilante.
2. Dejar de cazar cuando el cazador se encuentre con fatiga,
3. Considerar a sus animales auxiliares (perros, aves de cetrería, etc.) como amigos y aliados, no como servidores, y velar en todo momento por su salud y bienestar.
4. Obedecer todo reglamento sobre la cacería, a comportarse éticamente como buen deportista, y a exigir que sus compañeros cazadores hagan igual.
5. Respetar las actividades y opiniones de otros cazadores y de los no cazadores.
6. Poner en conocimiento de las autoridades correspondientes las infracciones y actos de vandalismo que presencie.
7. Cazar bajo las reglas de la “caza ética” y a no aprovecharme injustamente de la fauna.
8. Mejorar sus habilidades de cacería y puntería, y procurar disparar solo si se tiene la certeza de cobrar una presa, intentando evitar dejarla herida y causándoles el menor sufrimiento posible.
9. Apoyar a los programas de conservación de la fauna silvestre, y a ayudar a restaurar el hábitat.
10. Enseñar a los demás las habilidades, técnicas, reglas y la ética del cazador.
11. Antes del disparo, hay que identificar perfectamente al animal y estar completamente seguro de que se trata de una especie cinegética. Si cabe una mínima duda, hay que abstenerse de realizarlo. Debe de primar siempre el principio de prudencia, precaución y respeto por la conservación.³

5. SEGURIDAD EN LA CAZA

A. Normas de seguridad en las cacerías

- Se colocarán los puestos de forma que queden siempre protegidos de los disparos de los demás cazadores. Cuando varios puestos queden a la vista, deberán permanecer

³ Vid. <www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?..>; manual teórico examen del cazador 2015.>

siempre alineados, pegados al monte y guardando la distancia mínima, quedando obligado, en todo caso, cada cazador a establecer acuerdo visual y verbal con los más próximos para señalar su posición.

- Se prohíbe el cambio o abandono de los puestos por los cazadores y sus auxiliares durante la cacería, haciéndolo solamente con autorización del organizador de la misma o de sus representantes debidamente autorizados.
- En los ojeos de caza menor y en las tiradas de aves autorizadas, los puestos deberán quedar a la vista unos de otros, siempre que se encuentren al alcance de los disparos. Si la distancia de separación es inferior a 50 metros, será obligatoria la colocación de pantallas a ambos lados de cada puesto, a la altura conveniente para que queden a cubierto los puestos inmediatos.
- El organizador de la cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad indicadas y cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive de la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en conocimiento de todos los participantes.
- Cada cazador será responsable de los daños que, por incumplimiento de las medidas precautorias, imprudencia o accidentes imputables a él, ocasione a los participantes en la cacería.
- Queda prohibido cazar cuando las condiciones meteorológicas o cualquiera otra causa reduzcan la visibilidad de forma tal que pueda producirse peligro para las personas o animales.
- Los batidores, conductores de rehala y monteros deberán llevar puesta exteriormente una prenda de vestir tipo chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativo y reflectante, o cualquier otro dispositivo que facilite su visibilidad. Asimismo, los cazadores que ocupen un puesto deberán llevar alguna prenda (gorra, cinta, brazalete, chaleco, etc.), de colores y características similares que en el caso anterior, de tal forma que cualquier cazador de los puestos contiguos identifique claramente su posición.
- Las vías de acceso a la mancha a batir deberán señalizarse adecuadamente, indicando que se está realizando una cacería colectiva.
- El cazador deberá portar las armas de fuego descargadas y enfundadas en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.

- Se prohíbe la caza bajo la influencia de estupefacientes, alcohol, sustancias psicotrópicas o cualquier otra droga que pueda alterar o altere sensiblemente las facultades normales del cazador o su capacidad de reacción.
- Cuando los cazadores se encuentren a menos de 50 metros de personas ajenas a la cacería, han de descargar sus armas.⁴

B. Normas custodia de armas

- No dejar nunca en casa las armas y municiones donde puedan cogerlas los niños.
- Recuerde que es obligatorio tener las armas rayadas (rifles) en un armero homologado.
- Tenga las armas desmontadas, guardadas y engrasadas dentro de su funda o estuche, siempre sin cargar y en lugar seco y seguro.
- Dedique unos minutos a la limpieza del arma después de cada jornada
- Compruebe que las piezas del arma no tienen juego ni desajustes peligrosos.
- Antes de salir de caza, comprobar que el arma no tiene los cañones obstruidos, los cartuchos son los adecuados y que no tienen defectos.
- Extreme el cuidado en utilizar cartuchos y balas del calibre adecuado y no introduzca nunca munición en la recámara de un arma de otro calibre
- No dejar nunca las armas en el interior de vehículos no controlados y tampoco visibles desde el exterior
- Las armas en el coche deben ir siempre enfundadas y descargadas, la munición siempre protegida y en algún contenedor.
- No se debe permanecer en lugares públicos con armas desenfundadas y montadas, aunque estén descargadas.
- Evite dejar la munición dentro de un coche que quede al sol, ya que una elevación de la presión puede ser muy peligrosa.
- Revisa el arma para constatar que se encuentra en perfectas condiciones.⁵

⁴ Vid. Art.39 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; art.12 Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre; art.64 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

⁵Vid. www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?..; manual teórico examen del cazador 2015.; <http://www.gobiernodecanarias.org/openscmsweb/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Caza/Manual-Buenas-Practicas-Caza-Canaria_web_02.pdf>: “El comportamiento y la Ética del cazador”>

C. Normas del manejo de armas

- En la caza con armas se respetarán las normas de seguridad recomendadas para con las personas, los animales y las cosas
- Mantener siempre el arma abierta y descargada hasta que comience la cacería
- Lleva el arma con el seguro puesto hasta el momento del disparo y no lleve el dedo nunca pegado al gatillo.
- Utiliza las armas y munición adecuadas.
- Asegúrate que los cañones del arma no están obstruidos.
- No cierres el arma más que con los cañones dirigidos al suelo.
- No lleves jamás el arma en horizontal, lleva durante la caza siempre el arma dirigida hacia el suelo o hacia el cielo, nunca en dirección a compañeros o perros.
- En los desplazamientos abre y descarga el arma antes de pasar un obstáculo
- Observa la situación de tus acompañantes y de los paseantes.
- Procura que ellos conozcan la tuya.
- En los puestos no apuntar a nadie con el arma ni utilizar, jamás, la mira telescópica para ver a personas distantes, aunque el arma esté descargada.
- No tires jamás sobre un matorral ni en dirección a una persona,
- Ten cuidado con los posibles rebotes de los proyectiles.
- No apoye nunca la boca del cañón del arma en el suelo ni utilice el arma para mover matas.
- Se debe descargar el arma una vez finalizada o interrumpida la cacería, además ante la presencia o proximidad de agentes de la ley u otras personas que se acerquen a establecer contacto, así como al llegar a zonas de seguridad, durante el cobro, y en otros momentos de presumible peligrosidad.

D. Normas en el momento del disparo

- Solamente se disparará cuando se tengan controlados a los componentes de la cuadrilla y a sus perros.
- Cuando disparemos sobre una pieza siempre deberemos verla con la suficiente visibilidad para que los proyectiles no encuentren en el trayecto a personas, animales u obstáculos en los que puedan impactar.
- No disparar nunca sobre una pieza perseguida muy de cerca por el perro
- No disparar nunca sobre especies que no estén bien identificadas

- Nunca dispare sobre matorrales por el simple hecho de que se muevan ni mucho menos al ruido. No olvide que detrás de la mata puede estar una persona.
- No disparar nunca en dirección a otros cazadores.⁶

6. RECOMENDACIONES

A. Para el ejercicio de la caza.

- Hidratarse, beber agua o líquidos sin contenido alcohólico.
- Parar de vez en cuando y tomar algún alimento para evitar la fatiga
- Utilizar cremas protectoras contra la radiación solar.
- Evitar las horas de calor o frío intenso, así como protegernos de las condiciones meteorológicas adversas.
- Ropa y calzado adecuado para la modalidad que practiquemos.
- Utiliza gorra, cinta, brazalete, chaleco de alta visibilidad y reflectante, o cualquier otro dispositivo que identifique fácilmente tu posición.
- Lleva teléfono móvil. Antes de salir, si vamos solos, indicar nuestro destino a algún amigo o familiar.
- No arrojes ningún tipo de basura en el monte, especialmente si se trata de fósforos, colillas o cristales
- Mantén limpios y desparasitados a los animales auxiliares tanto a ellos como a las instalaciones en los que los cuidamos.
- Evitar dejarlos en los coches o remolques cerrados y al sol en las horas centrales del día si hace calor.
- Durante la jornada de caza evitar su agotamiento. Darles de beber, parar a descansar en la sombra en verano. Ante cualquier sospecha o comportamiento anormal acudir al veterinario.
- Trata adecuadamente a tus perros y hurones. Jamás los abandones
- El cazador es responsable de los mismos, y por tanto debe de extremar los cuidados en su educación, adiestramiento y control.
- Respeta la señalización de Espacios Naturales Protegidos, cinegética y de cualquier otro tipo. No dispires hacia ellas y en general no las deteriores, son información necesaria y a veces importante para la seguridad de las personas y su patrimonio.

⁶ Vid. [www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...;](http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...) manual teórico examen del cazador 2015

- Recoge los cartuchos que han sido disparados y llévatelos contigo. Su presencia afecta y empobrece nuestros senderos y paisajes.
- Trata con respeto a las personas con las que compartes el campo, (a quienes en muchos casos la actividad cinegética no les gusta e incluso temen), agricultores, ganaderos, senderistas, paseantes en general, etc., no olvides bajo ningún concepto que vas armado.⁷

B. Recomendaciones para la caza de algunas especies.

• Codorniz:

- Con carácter general no se debe disparar sobre una codorniz a menos de 20 metros.
- No se disparará a codornices jóvenes, que se identifican por un vuelo más irregular.
- La cuadrilla debe acordar la estrategia de disparo para no disparar simultáneamente por más de un cazador a la misma codorniz.
- No se permitirá que el perro estropee la codorniz durante el cobro.
- Se portarán las codornices colgadas de la percha para que se aireen.
- Se interrumpirá la caza durante las horas de calor excesivo.

• Perdiz

- Nunca se cazará sobre un bando de menos de seis perdices.
- Se procurará no disparar a las primeras perdices del bando, por ser monitoras del grupo.
- Los días de excesivo calor se reducirá la jornada de caza.
- No se disparará a ninguna perdiz que esté fuera de la distancia de posible abatimiento.
- En ojeo no se disparará a las perdices que entran hacia otro puesto.
- Durante el cobro del ojeo se recogerán como propias únicamente las perdices abatidas desde el puesto. Y nos ofreceremos a colaborar a cobrar las de los compañeros.

⁷ Vid. [www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...;](http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...) manual teórico examen del cazador 2015.; <http://www.gobiernodecanarias.org/obccmsweb/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Caza/Manual-Buenas-Practicas-Caza-Canaria_web_02.pdf>: “El comportamiento y la Ética del cazador”>

- Liebre

- No se disparará nunca a una liebre parada o en la cama.
- Tampoco se hará sobre la liebre que venga huyendo de los galgos.
- Se suspenderá la caza de liebres si empiezan a aparecer algunas preñadas.
- En la caza con galgo se dará ventaja a la liebre en el arranque, no soltando la collera hasta que la liebre haya corriendo un espacio adecuado.
- No se intentará sacar a una liebre corrida que se ha refugiado en majanos o tuberías

- Tórtola

- Establecer si es necesario en el coto un cupo menor del legal establecido por cazador y jornada, atendiendo a las características de la temporada y al número de cazadores que seamos.
- Respeta las zonas de dormida y las horas de sesteo.
- Disparar siempre a tórtolas en vuelo.
- No caces más tórtolas de las que vayas a comer o requiera el lance y siempre dentro del cupo establecido.
- No aceptes las cacerías donde sospeches que se caza sin control o aprovechándose de concentraciones de la especie.

- Becada

- Solamente se debe disparar cuando se haya identificado a la becada. Tirar “al ruido”, sin ver a la especie, puede inducir a un error irreparable.
- Para disfrutar del lance completo es recomendable disparar solamente sobre becasas levantadas por nuestro perro, no sobre becasas que nos pasen por encima revoladas de otro cazador o nos salten al paso.
- La caza de la becada en mano debe tener el menor número posible de componentes.
- Se evitará la caza de la becada en días de fortuna o de temporal cuando se concentran en zonas fáciles de abatir y con sus defensas mermadas.
- Es imprescindible respetar el cupo máximo por cazador y día impuesto en la comunidad.
- La caza de la becada es una modalidad que no admite deportivamente ningún método que no contemple la caza a rabo, con perro de muestra, o en algunas circunstancias con perros levantadores.

- Corzo

- No dispares sobre corzos jóvenes que no tengan cuerna completa porque disponen de un futuro esperanzador en su desarrollo.
- No se deben cazar hembras en épocas de gestación avanzada y partos.
- Si encuentras un corcino en el campo déjalo en ese lugar porque está controlado por la madre.
- No te obsesiones con el trofeo, valora siempre el lance.

- Venado

- No se cazarán machos con menos de seis puntas, a no ser en casos de caza selectiva o control de población.
- Es necesario dedicar jornadas específicas para abatir ejemplares con defectos o taras, para evitar que pueda transmitirlos a su descendencia. No debemos dedicarnos a cazar exclusivamente buenos trofeos.
- No dispares nunca a un venado al que no hayas podido valorar su cuerna.

- Jabalí

- En aguardos nocturnos se intentará identificar instantáneamente, con luz artificial (donde se permita), al jabalí antes del disparo y se hará preferiblemente sobre machos.
- En monterías de jabalí, excepto por necesidades de descaste o avistamiento de machos con buen trofeo, se disparará preferentemente sobre jabalíes jóvenes.
- En esperas por daños produce el mismo efecto disuasorio abatir un jabalí joven que hacerlo sobre la hembra que custodia y defiende a la manada.⁸

⁸ Vid.< www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/.../Temario.pdf?...; manual teórico examen del cazador 2015>

ANEXO IV

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES

1. CAZABLES

A. Caza menor

- Aves

1. *Familia anatidae.*

Es un grupo de aves especializadas en la vida acuática. Su característico pico aplanado se utiliza para diversos tipos de alimentación, unas pocas se alimentan por filtración, algunas especies son fundamentalmente vegetarianas, otras se alimentan principalmente de animales y la mayoría son omnívoras. Construyen el nido en el suelo, las puestas son numerosas y de huevos generalmente blancos o de colores claros.

- Ánsar común (*Anser anser*).
- Ánade friso (*Anas strepera*),
- Ánade real (*Anas platyrhynchos*),
- Ánade silbón (*Anas penelope*).
- Cerceta común (*Anas crecca*).
- Pato cuchara (*Anas clypeata*)
- Pato colorado (*Netta Rufina*)
- Porrón común (*Aythya ferina*).
- Porrón moñudo (*Aythya fuligula*).

2. *Familia phasianidae.*

Se trata, principalmente, de aves terrestres y granívoras de distribución prácticamente cosmopolita, capaces únicamente de vuelos cortos y rápidos. Algunos de sus rasgos son primitivos, su paladar difiere del de la mayoría de las aves, lo que indica una diferenciación precoz. Ocupan una amplia variedad de hábitats, son gregarias,

especialmente fuera de la época de cría. Sitúan sus nidos en el suelo, las puestas suelen ser numerosas y de huevos enteramente blancos o manchados. Los pollos se desarrollan con rapidez.

- Codorniz (*Coturnix coturnix*).
- Faisán (*Phasianus colchicus*).
- Perdiz roja (*Alectoris rufa*).

3. *Familia rallidae.*

Son aves terrestres que por lo común viven en zonas pantanosas o húmedas con elevada cobertura herbácea, de distribución cosmopolita. Corren, nadan y se zambullen con facilidad, pero vuelan con cierta torpeza. Construyen nidos relativamente sencillos y ponen numerosos huevos manchados de oscuro.

- Focha común (*Fulica atra*)

4. *Familia charadriidae.*

Constituyen el segundo grupo más nutrido de limícolas de pequeño a mediano tamaño. Muchos de sus integrantes son migrantes de larga distancia y llevan a cabo algunos de los más prodigiosos viajes de entre todas las aves. Son aves terrestres típicas de hábitats despejados, generalmente ligadas a zonas húmedas. Crían y se alimentan en el suelo y son gregarias gran parte del año.

- Avefría (*Vanellus vanellus*).

5. *Familia scolopacidae.*

La mayoría son migrantes. Durante el periodo reproductor se distribuyen preferentemente por el hemisferio norte y muchas de sus especies, en esta época, están ligadas a las zonas árticas y subárticas. Es una familia tremendamente heterogénea en cuanto a tamaños, formas y hábitos.

- Agachadiza chica (*Lymnocryptes mínimus*),
- Agachadiza común (*Gallinago gallinago*),
- Chocha perdiz o becada (*Scolopax rusticola*).

6. *Familia columbidae.*

Es un grupo muy homogéneo de aves fundamentalmente arborícolas, granívoras o frugívoras, de tamaño pequeño a grande. Son características comunes a todas las especies: sus buenas capacidades de vuelo, el escaso dimorfismo sexual, las puestas de uno o dos huevos completamente blancos y la capacidad de secretar "leche" en el buche para alimentar a los pollos.

- Paloma bravía (*Columba livia*).
- Paloma torcaz (*Columba palumbus*).
- Paloma zurita (*Columba oenas*).
- Tórtola común (*Streptopelia turtur*).

7. *Familia sturnidae*

Familia genéticamente muy próxima a los Turdidae y a los Muscicapidae. Pájaros de tamaño medio, rechonchas, de patas y cola cortas, y pico largo pero robusto. Sexos similares. Gárrulas y muy activas, omnívoros y gregarios, especialmente fuera del período reproductor. Anidan sobre tazas desaliñadas en agujeros. Los huevos son muy brillantes y de color azul claro. En la península Ibérica encontramos dos especies (estornino negro y estornino pinto).

- Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*).

8. *Familia turdidae:*

Paseriformes de pequeño a mediano tamaño y a menudo de vivos colores, patas relativamente largas, pico puntiagudo y alargado, ojos más bien grandes, y cola generalmente cuadrada. Jóvenes en su mayoría moteados. Canto fuerte emitido desde una alta atalaya. Se alimentan comúnmente en el suelo de gusanos, moluscos, otros invertebrados y frutos. Nidifican en árboles y en arbustos, el nido es una taza sólida donde a menudo realizan varias puestas de huevos azules marcados en pardo rojizo o en negro.

- Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*).
- Zorzal charlo (*Turdus viscivorus*).

- Zorzal común (*Turdus philomelos*).
- Zorzal real (*Turdus pilaris*).

9. *familia corvidae*

Son los passeriformes de mayor tamaño y los más evolucionados e inteligentes, de picos fuertes y largos, al igual que las patas. Plumaje negro o con diseño muy marcado. Sexos semejantes. Anidan en árboles, acantilados y agujeros. El nido lo construyen con ramas y barro y en él depositan huevos azules o verdes con marcas negruzcas o verde oliva.¹

- Corneja (*Corvus corone*).
- Grajilla (*Corvus monedula*).
- Urraca (*Pica pica*).

- **Mamíferos**

1. *familia leporidae*.

- Conejo (*Oryctolagus cuniculus*).
- Liebre de piornal (*Lepus castroviejo*).
- Liebre europea (*Lepus europaeus*).
- Liebre ibérica (*Lepus granatensis*).

2. *familia canidae*

- Zorro (*Vulpes vulpes*).

B. Caza mayor

1. *Familia canidae*.

- Lobo (*Canis lupus*) únicamente las poblaciones del norte del Duero.

2. *Familia bovidae*.

- Cabra montés (*Capra pyrenaica*).
- Muflón (*Ovis montanus*)
- Rebeco (*Rupicapra rupicapra*).

¹<http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1184662907044/1/_/_>

3. *Familia cervidae.*

- Ciervo (*Cervus elaphus*).
- Corzo (*Capreolus capreolus*).
- Gamo (Dama dama), Jabalí (*Sus scrofa*).

4. *Familia suidae.*

- Jabalí (*Sus scrofa*).

2. ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

- Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*)
- Urogallo (*Tetrao urogallus*)
- Milano real (*Milvus milvus*)
- Lince ibérico (*Lynx pardina*)
- Oso pardo cantábrico (*Ursus arctos*)

3. ESPECIES VULNERABLES

- Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)
- Águila-azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)
- Buitre negro (*Aegypius monachus*)
- Avutarda (*Otis tarda*)
- Sisón (*Tetrax tetrax*)
- Ganga común (*Pterocles alchata*) y Ortega (*Pterocles orientalis*).

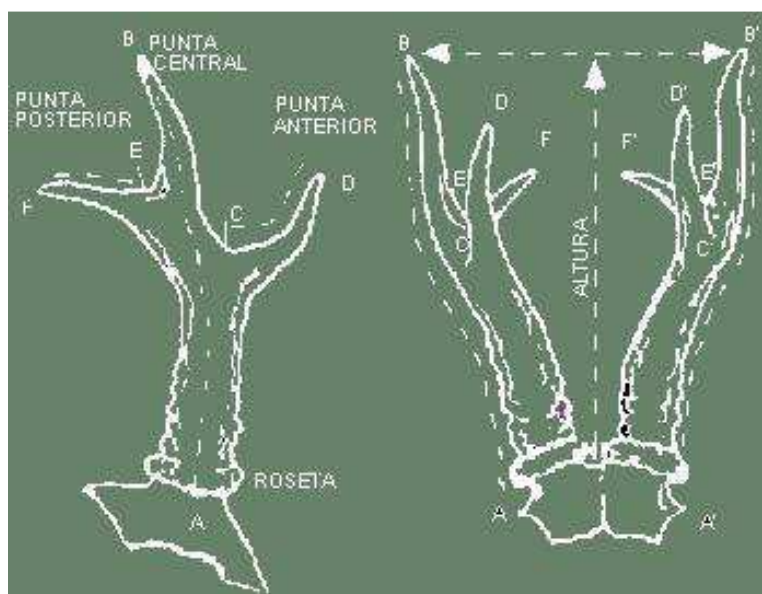
ANEXO V

TROFEOS DE CAZA MAYOR

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO

Una vez abatida la pieza de caza, se procede a efectuar la medición del trofeo (cuerno, cuerna, colmillo o cráneo) en campo. Esta medición, es una medición fiscal, es decir, encaminada a determinar la cuota complementaria que debe pagar el cazador, y que no hay que confundir con la medición que pueda efectuarse por parte de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza, quien realiza la medición según las normas establecidas por la Comisión Internacional de Homologación. Son pues, mediciones diferentes, según criterios diferentes.²

- Corzo



Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Las longitudes de las cuernas se miden desde el borde inferior de la roseta hasta la punta más alta siguiendo sus curvaturas exteriores.

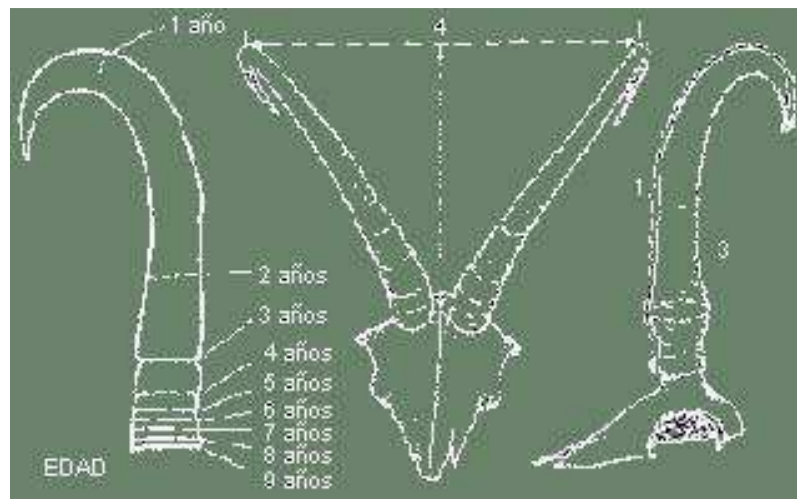
² <http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1184663108219/_/_/_>

Las longitudes de las puntas anteriores y posteriores se miden por sus caras superiores, desde la bisectriz que divide el ángulo formado por estas puntas con la vara hasta sus extremos más altos.

Los perímetros de las rosetas deben medirse en sus secciones más gruesas, salvando con la cinta métrica las rugosidades.

La altura se mide desde la cabeza, entre los dos pivotes, hasta lo más alto de las puntas más altas de la cuerna.³

- Rebeco



Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Las longitudes de los cuernos se miden desde el borde inferior del estuche hasta la punta del gancho siguiendo el borde exterior.

La altura se mide desde la cabeza hasta el punto más alto de las curvaturas de los ganchos.

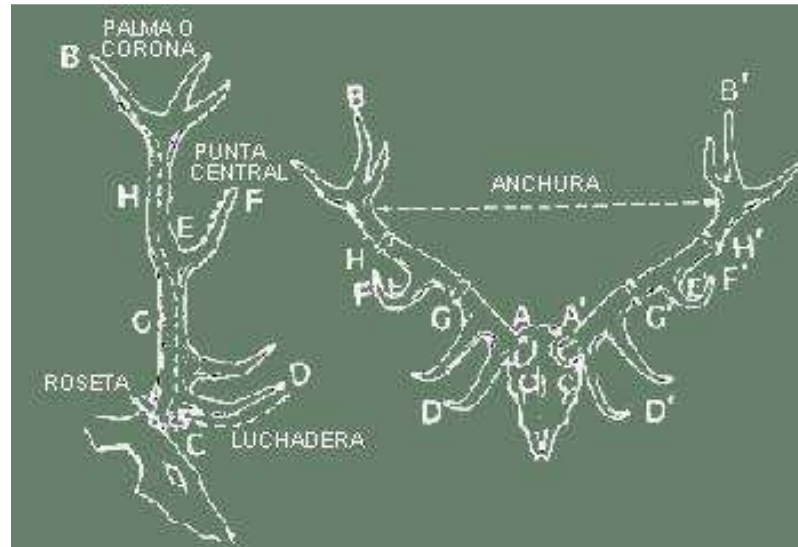
El perímetro máximo se mide en el lugar más grueso del cuerno más grueso.

La separación entre los cuernos es la distancia máxima entre éstos en el punto más alto de las curvaturas de los ganchos.

³ <http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977494034/_/_/_>

Si el animal cuando fue abatido tenía una edad de 6 a 10 años cumplidos se le asigna un punto, dos si tenía de 11 a 12 años cumplidos y tres si tenía cumplidos los trece años o más.⁴

- Ciervo



Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Las longitudes de las cuernas se miden desde el borde inferior de la roseta hasta la punta más alta siguiendo sus curvaturas exteriores.

Las longitudes de las luchaderas se miden por la cara inferior desde el borde superior de la roseta hasta la punta de los candiles.

Las longitudes de las puntas centrales se miden por la cara superior, desde la bisectriz que divide el ángulo formado por este candil con la vara hasta el extremo de su punta. En el caso en el que la punta central se horquille, se mide hasta el extremo de la punta más larga.

Los perímetros de las rosetas deben medirse en sus secciones más gruesas, salvando con la cinta métrica las rugosidades.

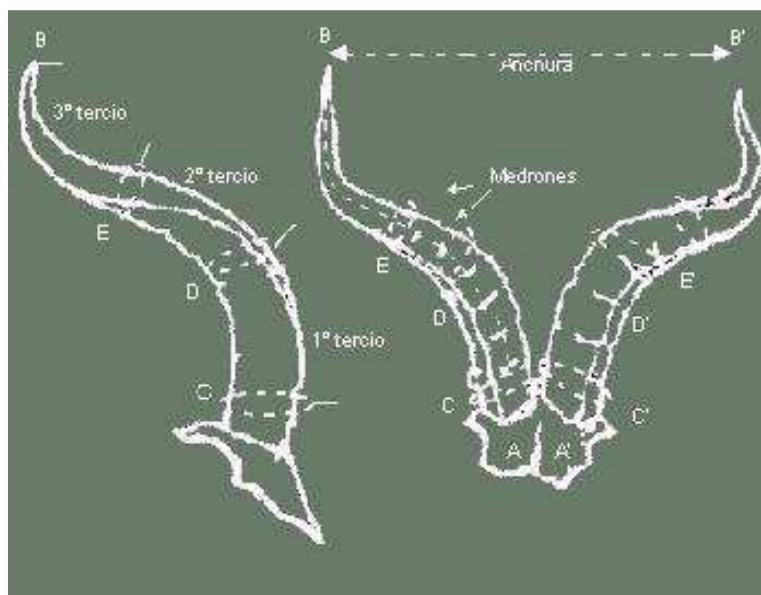
Los perímetros inferiores de las cuernas se toman en el lugar más delgado de la vara entre la luchadera y la punta central.

⁴< http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977782742/_/_/_>

Los perímetros superiores de las cuernas se toman en el lugar más delgado de la vara entre la punta central y la palma o corona.

Se consideran puntas cuando superan los dos centímetros de longitud en su parte más corta y se asigna un punto por cada una.⁵

- Cabra montés.



Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Las longitudes de los cuernos se miden desde el borde inferior hasta la punta siguiendo la quilla exterior y sin adaptar la cinta métrica a las rugosidades.

Los perímetros de las bases se miden en el lugar más grueso del primer tercio de la cuerna, normalmente en el primer medrón. En este caso la cinta métrica sí debe adaptarse a las rugosidades.

Los perímetros mayores del segundo y tercer tercio se miden en el lugar más grueso de los tramos indicados.

La edad se puntúa con un punto por año desde el décimo inclusive.⁶

⁵ <http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977493505/_/_/_>

⁶ <http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977493151/_/_/_>

ANEXO VI

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS PRECINTOS PARA CAZA MAYOR

ORDEN MAM/829/2011, de 13 de junio, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y León.¹

ANEXO I

1) De conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se establece la obligatoriedad del uso de precintos numerados para su colocación sobre las siguientes piezas de caza mayor: ciervo, gamo, corzo, cabra montés, rebeco, muflón y lobo.

2) Los precintos serán expedidos anualmente por el Servicio Territorial con competencias en materia de caza a solicitud del titular del aprovechamiento del acotado, previo abono, en su caso, de la tasa correspondiente.

3) Cada titular del aprovechamiento del acotado tendrá derecho al mismo número de precintos que el cupo de piezas a abatir aprobado en su correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. En el caso del lobo quedará supeditado a la autorización expresa del Servicio Territorial según la planificación comarcal y el sistema de control de precintos adoptado por éste.

4) Los precintos tienen el diseño que se muestra a continuación, consignando los mismos datos tanto en la matriz como en el precinto y con la siguiente información en cada una de sus caras:

Anverso (con la inscripción enter en el orificio, Fig.1):– Matrícula del coto, especie (especie y sexo).

¹ Vid. BOCYL Nª125, miércoles 29 de junio de 2011, pág. 51088-51092

Reverso (Fig. 2): – Unidades y decenas que formarán el día de caza, así como los meses de cada año de la temporada en curso. Ambas cifras definen la fecha de captura del trofeo.

– Número de precinto.



Figura 1: ANVERSO (ENTER)

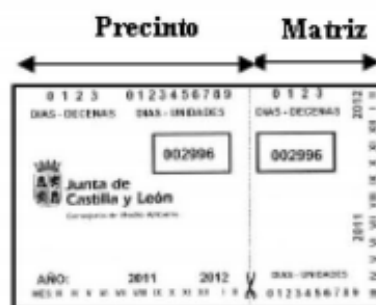


Figura 2: REVERSO

5) Los precintos son de materia plástica y constan de dos partes: el precinto propiamente dicho y la matriz, y se encuentran separados por una línea de puntos por donde deberá recortarse una vez utilizado. La brida consta de una parte dentada que sirve para ayudar a tirar de la misma y una parte lisa que será la que sirva para inmovilizar el precinto. Para su utilización la brida deberá ser insertada en la dirección de anverso (enter) a reverso, tirando de ésta por la parte dentada hasta abrazar firmemente el punto de colocación de forma que no exista holgura. Todo precinto cerrado se considerará utilizado y no podrá reutilizarse.

6) Los precintos, que llevarán un número identificativo y el año o temporada de caza correspondiente, se entregarán al titular del coto con la información sobre la especie a cazar, el sexo de la misma y el número de matrícula del coto. En caso de que dicha información no se muestre implícitamente, ésta será reflejada mecánicamente mediante troquelado de estas características antes de su entrega al titular (ver figura 3).

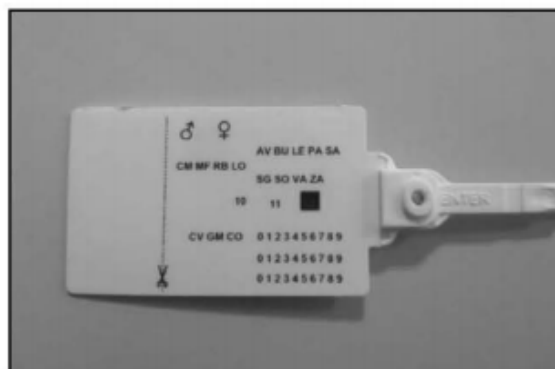


Figura 3. Ejemplo de precinto a troquelar

7) En la modalidad de rececho podrán cazar simultáneamente un número de cazadores igual al número de precintos pendientes de utilizar en el acotado, salvo disposición en contrario aprobada en el Plan Cinegético. Cada cazador deberá llevar, al menos, un precinto sin usar cada vez que salga de caza. Estos precintos deben ser mostrados a los agentes de la autoridad que así lo requieran.

8) Una vez abatida la pieza, el cazador no podrá desplazarla a otro lugar hasta no haber colocado el precinto correctamente cumplimentado sobre ella y haber procedido a cortar la matriz respecto del precinto propiamente dicho. Previamente a la colocación del precinto se recortará con una navaja o tijera la fecha de la captura (día y mes) tanto en el precinto propiamente dicho como en la matriz. Para ello se recortará el número correspondiente al día de las decenas, al día de las unidades y al mes. En total tienen que retirarse por ablación tres cifras en el precinto y otras tres en la matriz. Por ejemplo, para una pieza cobrada el 25 de septiembre de 2011, se recortará el número 2 de días-decenas, el 5 de días-unidades y el IX de mes (ver figura 4).



Figura 4

9) Una vez cumplimentado el precinto del modo indicado en el apartado anterior, éste deberá colocarse en el animal abatido atendiendo estrictamente a las siguientes indicaciones:

9.1. Para los machos de las tres especies de cérvidos (ciervo, gamo y corzo) se colocará en la base de la cuerna, entre la roseta y la primera punta, ajustando su cierre todo lo posible deslizando la brida sobre la superficie lisa de la misma para evitar enganches durante el traslado (ver figura 5).

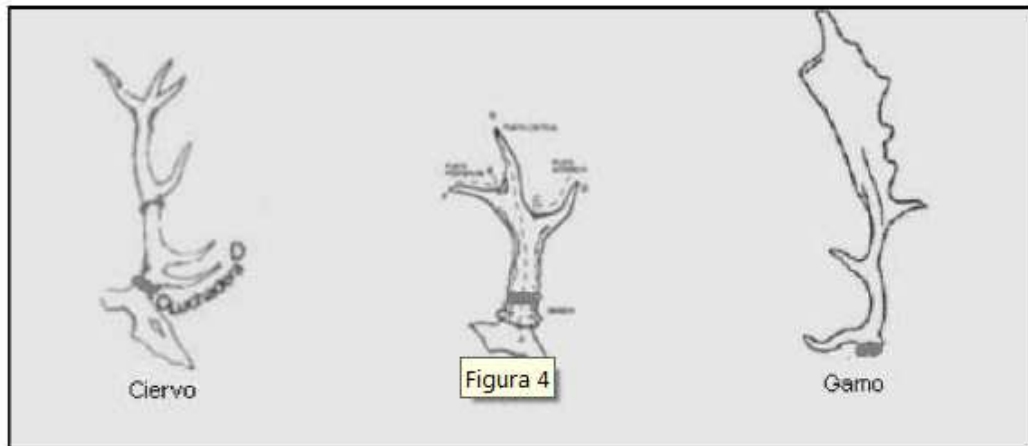


Figura. 5 Precintado en la base de la cuerna, entre la roseta y la primera punta.

A continuación se muestran algunos ejemplos de precintado sobre corzo (ver figura 6) y ciervo (ver figura 7):



Figura 6



Figura 7

9.2. Para las tres especies de bóvidos (rebeco, cabra montés y muflón) así como para el lobo y las hembras de las tres especies de cérvidos (ciervo, gamo y corzo), el precinto se colocará realizando una incisión en la parte central de la oreja, introduciendo por ella el extremo de la brida del precinto y ajustando su cierre todo lo posible, deslizando la brida sobre la superficie lisa de la misma para evitar enganches durante el traslado (ver figura 8).

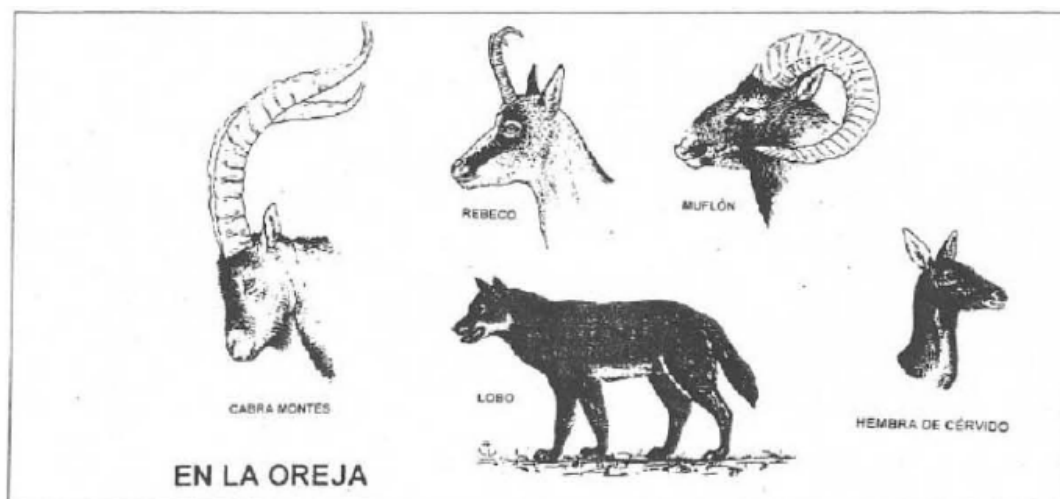


Figura 8. Precintado en la Oreja.

10) Antes de movilizar el animal, la matriz se recortará por la línea de puntos preparada para ello, separándose del precinto propiamente dicho. La matriz deberá ser remitida al Servicio Territorial con competencias en materia de caza correspondiente en el plazo máximo de quince días naturales, cumplimentando los datos recogidos en el Anexo III (ver figura 9).

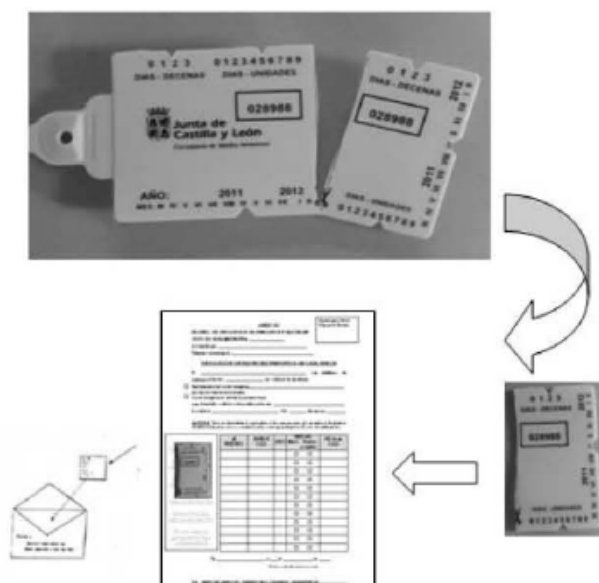


Figura 9

11) Finalizado el período hábil de cada especie, los precintos no utilizados deberán ser remitidos al Servicio Territorial con competencias en materia de caza en un plazo máximo de quince días naturales, cumplimentando los datos recogidos en el Anexo III. El incumplimiento por parte del titular cinegético será considerado infracción administrativa, siendo de aplicación el artículo 76.6 de la Ley 4/1996 -«Incumplir

cualquier otro precepto o limitación establecido en esta Ley y normas que la desarrollan».

12) El precinto deberá permanecer correctamente insertado en la dirección de anverso (enter) a reverso, colocado sobre la pieza sin sufrir deterioros durante todo el traslado hasta el lugar definitivo de aprovechamiento o preparación del trofeo (ver figura 10).

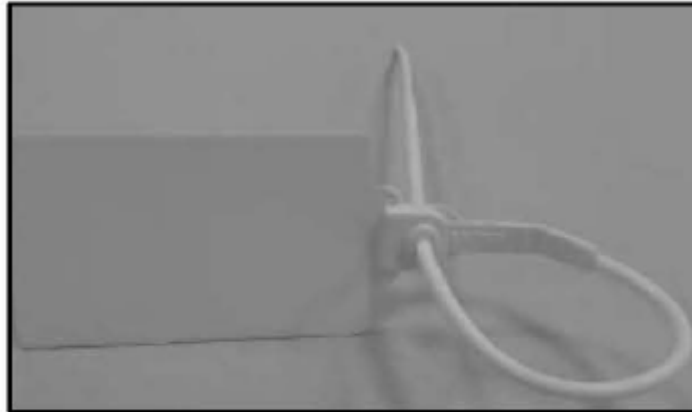


Figura. 10. Precinto correcto, ajustado a la base de la cuerna.

13) No deberán mostrarse evidencias físicas de manipulación del precinto que denoten la utilización del mismo en más de una vez, tales como marcas circundantes sobre la brida del precinto como resultado de estrangulamientos anteriores, particiones, ni incisiones en la brida. Esta reutilización del precinto así como su falsificación, será considerada infracción administrativa de acuerdo con el artículo 75.26 de la Ley 4/1996 de caza.

14) Si una vez precintado el trofeo se observara por parte de los agentes o autoridades competentes, que la brida retrocede sobre su punto de anclaje, será de aplicación el artículo 75.26 de la Ley 4/1996 al tratarse de un supuesto de reutilización del precinto.

15) La brida sobrante no deberá ser cortada total o parcialmente, permaneciendo intacta como signo de inviolabilidad del precinto (ver figura 11).

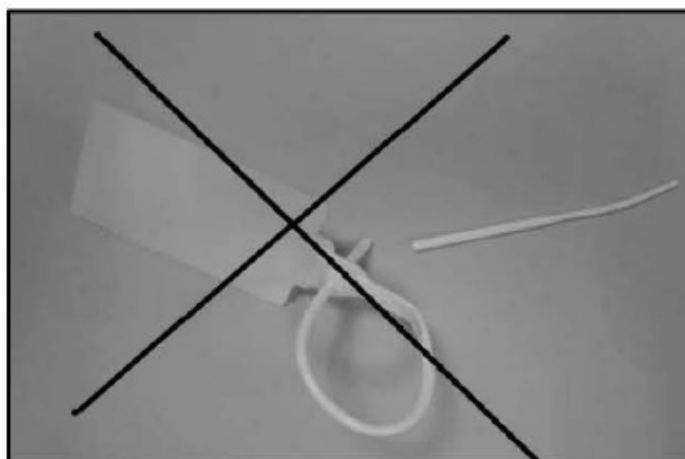


Figura. 11.-Precintado incorrecto

ANEXO VII

ARMAS

1. CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS

1ª categoría

Armas de fuego cortas, comprende las pistolas y revólveres.

2ª categoría

- **2ª.1:** Armas de fuego largas para vigilancia y guardería: armas largas que reglamentariamente se determinen por Orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.
- **2ª. 2:** Armas de fuego largas rayadas: son las armas utilizadas para la caza mayor. También comprende los cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, en ambos supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra.

3ª categoría

- **3ª.1:** Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (22 americano), de percusión anular, de un disparo, de repetición o semiautomáticas.
- **3ª.2:** Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra.
- **3ª.3:** Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios.

4ª categoría

- **4ª.1:** Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
- **4ª. 2:** Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

5ª categoría

- **5ª.1:** Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.
- **5ª.2:** Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.

6ª categoría

- **6ª.1:** Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, conservadas en museos autorizados por el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por el Ministerio del Interior, en los restantes casos.
- **6ª.2:** Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1890, y las reproducciones o réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de guerra o a armas prohibidas. La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los prototipos o copias de los originales, comunicándolo a la Dirección General de la Guardia Civil.
- **6ª.3:** Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico.
- **6ª.4:** En general, las armas de avancarga (la pólvora y el proyectil son introducidos por la boca del cañón y el sistema de ignición puede ser una capsula fulminante, pólvora más fina y un pedernal, o un sofisticado sistema de rueda)

7ª categoría

- 7ª.1: Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo.
- 7ª.2: Las ballestas.
- 7ª.3: Las armas para lanzar cabos.
- 7ª.4: Las armas de sistema Flobert (utilizan como propelente del proyectil solo la carga de fulminante de un pistón y por ello con menor potencia que otros tipos de armas de fuego).
- 7ª.5: Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.
- 7ª.6: Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas.¹

2. Tabla A.2.1. Cuadro resumen de la clasificación de armas de caza

ARMAS DE CAZA	CATEGORÍAS		LICENCIA
Rifles de caza mayor	2ª	2	Tipo D
Escopetas para caza mayor o menor	3ª	2	Tipo E
Ballestas.	7ª	2	Tipo E
Arcos	7ª	5	Solo requiere acreditación ante el establecimiento vendedor y su consignación en los libros correspondientes de las respectivas tarjetas deportivas en vigor

¹ Vid.< http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/>

ANEXO VIII

SEÑALIZACIÓN DE LOS TERRENOS

1. SEÑALES DE PRIMER ORDEN

Se colocarán en todas las vías de acceso que penetren en el territorio en cuestión, así como en todos los puntos intermedios que sean necesarios para que la distancia entre dos carteles no exceda de 600 m. La señalización del coto debe hacerse en todo el perímetro exterior de terreno y, en el caso de la existencia de enclavados, también debe quedar claramente señalizados el mismo por el perímetro interior del coto. La colocación se hará de tal forma que su leyenda o distintivo sea visible desde el exterior del terreno señalizado. Tanto las señales de primer orden como los distintivos normalizados de segundo orden, deben estar situados a una altura entre 1,5 y 2,50 metros desde el suelo.¹

- Material: Cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez.
- Dimensiones: 33 centímetros por 50 de ancho.
- Colores: Letras negras sobre fondo blanco.
- Dimensiones de las letras: Altura, 8 centímetros; ancho, 1 centímetro.
- Leyenda: La que corresponda a su régimen cinegético (por ejemplo coto privado de caza).



Fuente Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid

¹<<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1311049635049&ssbinary=true>>

2. SEÑALES DE SEGUNDO ORDEN

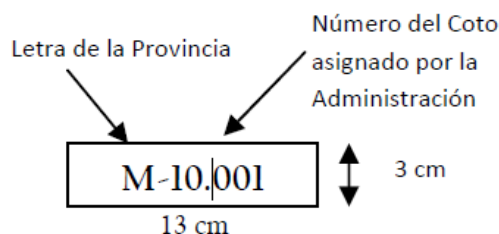
Son complementarias a las de primer orden y consisten en rótulos que suelen ir pintados en rocas, muros, etc. o bien en distintivos normalizados. Estas señales de segundo orden se situarán entre las señales de primer orden, con distancias máximas de una a otra de 100 m.

Por circunstancias topográficas u orográficas especiales, la Administración, a petición del interesado, puede autorizar la colocación de carteles cuya separación entre si no se ajuste a las distancias citadas, siempre y cuándo tal alteración no sea contraria a la correcta señalización del terreno y la distancia entre carteles contiguos no exceda de 200 metros. En todo caso, se colocarán de forma que un observador situado ante uno de los carteles o señales tenga al alcance de su vista a los dos más inmediatos.²

1. Chapa de matrícula:

En los carteles de primer orden relativos a “cotos privados de caza” y “cotos locales de caza”, se colocará una chapa matrícula que estará realizada en metal con unas dimensiones de 3 por 13 cm, del mismo color que el propio metal del que está compuesto, en ella se grabarán o moldearán ciertas letras y números de 1,5 cm, que corresponden a la provincia donde se halle el terreno y el número será el que facilite la Administración.

- Material: Chapa metálica.
- Color: el propio del metal.
- Letras y números: Grabados y moldeados en la misma chapa de color negro
- Altura de las letras y números: mínimo 1,5 centímetros

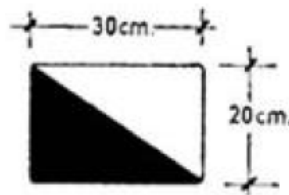


Fuente Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid

²<<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1311049635049&ssbinary=true>>

2. Distintivos normalizados

- Material: que garantice su adecuada conservación y rigidez.
- Dimensiones: 20 centímetros de alto por 30 de ancho.
- Colores: en diagonal, parte superior derecha en blanco y parte inferior izquierda en negro
- No se rotula ninguna leyenda.



Fuente Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid

3. Rótulos

Pueden ir pintados en rocas, paredes, muros, etc., con letras mayúsculas y en un color que contraste con el fondo. Las dimensiones mínimas serán de 15 cm de altura y 3 cm de grueso. Para los cotos privados, locales o sociales, la leyenda del rótulo será “coto de caza”, para los demás casos figurará idéntica leyenda que en los carteles de primer orden.³



Fuente Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA)

³<http://www.agentesforestales.org/aeafma/72-agentes-forestales/informacion-al-ciudadano/278-la-senalizacion-de-los-cotos-de-caza.html#1>